

**CUADERNOS
DEL INSTITUTO
ANTONIO DE NEBRIJA**

**CUADERNOS
DEL INSTITUTO
ANTONIO DE NEBRIJA**

**DE ESTUDIOS SOBRE
LA UNIVERSIDAD**

9

2006

**UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
EDITORIAL DYKINSON**

Directora:

Adela Mora Cañada (Univ. Carlos III)

Redacción:

Carolina Rodríguez López (Univ. Carlos III) y Manuel Martínez Neira (Univ. Carlos III)

Consejo Asesor:

P. Alonso Romero (Univ. de Salamanca), A. Álvarez de Morales (Univ. Autónoma de Madrid), M. Á. Bermejo Castrillo (Univ. Carlos III), G. P. Brizzi (Univ. Bolonia), J. Correa Ballester (Univ. de Valencia), J. R. Cruz Mundet (Univ. Carlos III), E. Fernández García (Univ. Carlos III), E. González González (Univ. Nacional Autónoma de México), P. Grossi (Univ. di Firenze. Italia), E. Hernández Sandoica (Univ. Complutense), R. L. Kagan (John Hopkins University), D. de Lario (Ministerio de Asuntos Exteriores), E. López-Aranguren Quiñones (Univ. Carlos III), M. Lucena (Univ. de Alcalá de Henares), M. F. Mancebo Alonso (Univ. de Valencia), E. Martínez Ruiz (Univ. Complutense), A. Mazzacane (UNISTORIA. Italia), G. Peces-Barba Martínez (Univ. Carlos III), J. L. Peset Reig (CSIC), M. Peset Reig (Univ. de València), A. Rodríguez de las Heras (Univ. Carlos III), M. Rodríguez Piñero (Univ. de Huelva), L. E. Rodríguez-San Pedro Bezares (Univ. de Salamanca), A. Romano (Univ. di Messina), M.^a J. San Segundo Gómez de Cadiñanos (Univ. Carlos III), J. M. Scholz (Max-Planck-Institut), D. Soto Arango (Univ. de Tunja), J. Urrutia Elejalde (Fundación Urrutia Elejalde) y E. Villalba Pérez (Univ. Carlos III).

Esta edición se realiza gracias al patrocinio del Banco Santander Central Hispano

Publicación incluida en el catálogo Latindex

© Edita: Instituto Antonio de Nebrija de estudios sobre la universidad
Universidad Carlos III de Madrid
C/ Madrid, 126 - 28903 Getafe (Madrid) España
Tel: 916 249 797 - Fax: 916 249 517
e-mail: anebrija@der-pu.uc3m.es
Internet: www.uc3m.es/uc3m/inst/AN/anebrija.html

Suscripciones y venta: Editorial Dykinson, S.L.
Meléndez Valdés, 61 - 28015 Madrid
Tels. (+34) 915 44 28 46 / (+34) 915 44 28 69
e-mail: info@dykinson.es
<http://www.dykinson.es>
<http://www.dykinson.com>
Diseño de cubierta: Emilio Torné.

Depósito legal: M. 46.047-1998
ISSN:1139-6628

ÍNDICE

Págs.

ESTUDIOS

El incidente Carande: otro suceso universitario en 1956. <i>César Hornero Méndez</i>	11
El doctorado y la génesis del derecho del trabajo en la Universidad española. <i>María José María e Izquierdo</i>	57
«Las vías de lo legítimo»: derecho natural y estado católico en la obra de Clemente de Jesús Munguía. <i>Pablo Mijangos y González</i>	151

DOSSIER

El papel de la historia en la formación del jurista europeo. Seminario internacional.....	225
Presentación. <i>Manuel Abellán Velasco</i>	231
¿Realidad o ficción? El proceso de convergencia de las enseñanzas jurídicas dentro del marco del proyecto de creación de un espacio europeo de educación superior. <i>Manuel Ángel Bermejo Castrillo</i>	237
Una «historia» para después del código. <i>Pio Caroni</i>	297
Derecho romano y dogmática. <i>Francisco Cuena</i>	319
El papel de las disciplinas histórico-jurídicas en la formación del jurista europeo. <i>Maurizio Fioravanti</i>	343
El Derecho romano después de Europa. La historia jurídica para la formación del jurista y ciudadano europeo. <i>Dario Mantovani</i>	353
Presente y futuro del derecho romano. <i>Javier Paricio</i>	387
Diario de una redactora del Libro Blanco de Derecho. (Una aproximación a la historia reciente de los estudios jurídicos en España). <i>Carmen Velasco</i>	403

BIBLIOGRAFÍA

<i>Annali di Storia delle università italiane</i> (Carolina Rodríguez López)	423
Elena Brambilla, <i>Genealogie del sapere. Università, professioni giuridiche e nobiltà togata in Italia (XIII-XVII secolo)</i> (Manuel Martínez Neira)	424

	<u>Págs.</u>
Pablo Buchbinder, <i>Historia de las universidades argentinas</i> (Carolina Rodríguez López).	425
Franco Cipriani, <i>Scritti in onore dei patres</i> (Manuel Martínez Neira)	429
Antonio Fernández Luzón, <i>La Universidad de Barcelona en el siglo XVI</i> (Enrique Villalba Pérez).....	430
Antonio Merchán, <i>Documentos históricos de la Universidad de Sevilla (II). Los estatutos de autonomía del siglo XX</i> (Manuel Martínez Neira).....	433
Stefano Merlini (ed.), <i>Piero Calamandrei rettore dell'Università di Firenze. La democrazia, la cultura, il diritto</i> (Manuel Martínez Neira).....	434
<i>Permanencia y cambio. Universidades hispánicas 1551-2001. VIII Congreso Internacional de Historia de las Universidades (México 2001)</i> (María José María e Izquierdo)	434
Mariano Peset, <i>Las viejas facultades de leyes y cánones del Estudio general de València</i> (Manuel Martínez Neira).....	448
<i>La universidad en el cambio de siglo</i> (Manuel Martínez Neira).	449
 VARIA	
Actividad del Instituto.....	453
Noticias.....	455
Resúmenes.....	457
Publicaciones recibidas	463
Presentación de originales.....	465

ESTUDIOS

EL INCIDENTE CARANDE: OTRO SUCESO UNIVERSITARIO EN 1956*

Sumario: 1. Planteamiento: jaraneros y alborotadores en la Universidad de Sevilla en 1956.—2. La anécdota: el incidente.—3. Los personajes.—4. La tentación del pasado imposible (o de los supuestos episodios de resistencia silenciosa).

1. *Planteamiento: Jaraneros y alborotadores en la Universidad de Sevilla en 1956*

Los primeros días de febrero de 1956 son sobradamente conocidos en la historia de la universidad española y en la historia del franquismo. Fueron los días en que unos estudiantes, *jaraneros* y *alborotadores*, con las armas del entusiasmo y cierta inocencia, pusieron en jaque a un régimen entonces sólidamente instalado. Los casi cincuenta años transcurridos confirman que los graves incidentes sucedidos en esas jornadas en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid supusieron, como señaló años después Roberto Mesa Garrido, el nacimiento del movimiento estudiantil contra el franquismo y que la universidad, siempre sospechosa para el sistema, se convirtiese definitivamente en «un mecanismo de reproducción de opositores al régimen»¹. El relato de aquellos hechos es

* La realización de este trabajo ha sido posible gracias al Grupo de Investigación SEJ-302 «Del Derecho común europeo al Derecho civil» (financiado por la Junta de Andalucía). Igualmente, quiero agradecer la oportunidad que me ofrecieron los amigos del Instituto Antonio de Nebrija de Estudios sobre la Universidad, de la Universidad Carlos III de Madrid, de discutir una versión del mismo, en una sesión de su Seminario permanente, celebrada el 28 de marzo de 2006. Las sugerencias y aportaciones que se realizaron en el curso de dicha sesión han sido tenidas en cuenta en la redacción final del texto. Por último, quiero rendir tributo agradecido a la memoria de Bernardo Víctor Carande de la Torre (1932-2005).

¹ R. Mesa Garrido (ed.), *Jaraneros y alborotadores. Documentos sobre los sucesos estudiantiles de febrero de 1956 en la Universidad Complutense de*

bastante conocido². Sintéticamente, aquellos días fueron la desembocadura de una serie de iniciativas auspiciadas por estudiantes universitarios (y algunas otras personas), de diversa procedencia, pero todos comprometidos en la lucha antifranquista. En 1955, con el apoyo del Rector Laín Entralgo, desde unos aparentemente inocen-

Madrid, Editorial de la Universidad Complutense, Madrid, 1982. Este libro, como deja claro Mesa Garrido en el prólogo (pp. 23-24), tuvo por afán conjurar el olvido de unos hechos que supusieron el punto de arranque definitivo de uno de los movimientos de oposición al franquismo. Cuando hoy tanto se habla (y con razón) de que la transición se basó, entre otros pactos, en uno de silencio y olvido sobre las consecuencias de la Guerra Civil en perdedores y sobre lo sucedido durante el régimen franquista, libros como éste pueden sorprender, publicado en enero de 1982 por una de las principales universidades de nuestro país. Más allá de explicaciones inmediatas —Roberto Mesa Garrido era Vicerrector de la Universidad Complutense entonces—, creemos que un trabajo como éste puede servir de modelo a mucho de lo que hoy se hace. Sin renunciar a *hacer justicia*, el aporte documental es exhaustivo y nos ofrece una acabada visión de cómo fueron las cosas, un modo de proceder que, insistimos, no es incompatible con una visión *justiciera* de la Historia (propósito no ocultado en ningún momento por el autor). El libro, agotada su edición hace tiempo, acaba de ser reeditado por la Universidad Complutense en el marco de una moderada (y medida) conmemoración de los sucesos de 1956, realizada en la propia universidad por medio de unas jornadas («50 aniversario de los movimientos estudiantiles de febrero de 1956», del 22 al 24 de febrero en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, organizadas por el Departamento de Ciencia Política y de la Administración III). En estas tomaron parte bastantes de los protagonistas de los sucesos de 1956, afortunadamente vivos y más que razonablemente activos en muchos casos.

² Además del de Mesa Garrido, los relatos de los sucesos de febrero de 1956 son numerosos (las alusiones más o menos puntuales son incalculables, constituyendo una de esas referencias cronológicas a la que es tan aficionada cierta historiografía, con un indisimulado afán por simplificar las cosas —tal vez excesivamente—). Entre otros, véanse X. Tusell, *La oposición democrática al franquismo 1939-1962*, Editorial Planeta, Barcelona, 1977, pp. 282-297; V. Fernández Vargas, *La resistencia interior en la España de Franco*, Ediciones Istmo, Madrid, 1981, pp. 185-191; P. Lizcano, *La Generación de 1956. La Universidad contra Franco*, Ediciones Grijalbo, Barcelona 1981, pp. 123-153 (quizá el relato más completo, recientemente reeditado en Leer con motivo del cincuenta aniversario y con prólogo ahora de E. Múgica); R. Montoro Romero, *La universidad en la España de Franco (1939-1970) (Un análisis sociológico)*, CIS, Madrid, 1981, pp. 47-48;

tes «Encuentros de la Poesía con la Universidad» se pasó al propósito de organizar un malogrado «Congreso Universitario de Escritores Jóvenes», que sin llegar a celebrarse sirvió de aglutinante, entre otros, a Enrique Múgica, Julián Marcos, Jesús López Pacheco, José Luis Abellán o Julio Diamante. El antecedente inmediato de lo que sucedería en febrero hay que localizarlo el 24 de enero de 1956, cuando Múgica, Javier Pradera y Ramón Tamames maduran la idea de realizar un «Congreso Nacional de Estudiantes». En torno a esta decisión se suceden en los días siguientes las reuniones preparatorias y los encuentros. Fruto de todo ello es el «Manifiesto a los universitarios madrileños» que redacta Miguel Sánchez-Mazas y que es distribuido en la Universidad el 1 de febrero³. La suerte está echada

M. A. Ruiz Carnicer, *El Sindicato Español Universitario (SEU), 1939-1945. La socialización política de la juventud universitaria en el franquismo*, Siglo XXI de España Editores, Madrid, 1996, pp. 300-305; J. L. Abellán, *Ortega y Gasset y los orígenes de la transición democrática*, Espasa Calpe, 3ª edición, Madrid, 2005, pp. 244-265 (con el valor añadido de tratarse del relato un protagonista directo de los hechos); J. Álvarez Cobelas, *Envenenados de cuerpo y alma. La oposición universitaria al franquismo en Madrid (1939-1970)*, Siglo XXI de España Editores, Madrid, 2004, pp. 67-79; M. A. Sotés Elizalde, *Universidad franquista: debate sobre la libertad de enseñanza (1939-1962)*, Eunsá, Pamplona, 2004, pp. 351-364.

³ El manifiesto, leído hoy, puede resultar hasta sorprendente. Que nadie piense que en él se pide directamente la dimisión del gobierno o la instauración de la democracia en España. Es mucho más modesto —visto desde la actualidad—, lo cual demuestra porqué poco —aparentemente desde hoy— se jugaban algunos el cuello entonces. El tono utilizado es duro y con un punto dramático a la hora de describir la situación de los universitarios españoles: «En la conciencia de la inmensa mayoría de los estudiantes españoles está la imposibilidad de mantener por más tiempo la actual situación de humillante inercia en la cual, al no darse solución adecuada a ninguno de los esenciales problemas profesionales, económicos, religiosos, culturales, deportivos, de comunicación, convivencia y representación, se vienen malogrando fatalmente, año tras año, las mejores posibilidades de la juventud dificultándose su inserción eficaz y armónica en la sociedad y comunicándose, por un progresivo contagio, el radical malestar universitario a toda la vida nacional que arrastra agravándolos todos los problemas antes silenciados». En el manifiesto no se renuncia a algún fogonazo social —«Cuando las Residencias de Estudiantes y Colegios Mayores son escasos y caros, y muchos nos vemos reducidos a pensiones de precio creciente donde la vida de estudio y convivencia universi-

y los acontecimientos —propriadamente los sucesos de 1956— van a desarrollarse de forma vertiginosa desde el 7 al 9 de febrero. Como demuestra documentalmente Mesa Garrido⁴, la policía, que está nerviosa y sobre aviso, extrae inmediatamente sus propias conclusiones sobre lo que no puede ver más que como un movimiento peligroso y subversivo. Para el SEU es un auténtico desafío, ya que de ningún modo pueden permitir que se evidencie la más leve duda sobre la hegemonía y el control que ejerce en la Universidad. Después de que, la que luego resultará una de las víctimas políticas (y personales) de los acontecimientos, el Catedrático de Historia del Derecho Manuel Torres López⁵ convoque el día 6 de febrero como Decano de la Facultad de Derecho la Cámara Sindical de ésta —ante la amenaza de la realización de elecciones de representantes en las Facultades del Distrito universitario⁶—, el día siguiente, el 7, es el de las primeras acciones violentas: la Centuria 20 de la Falange, con una curiosa adscripción a la Guardia de Franco, asalta la Facultad produciéndose una auténtica batalla campal en la que una de las *víctimas* será el escudo falangista, el yugo y las flechas, que preside el

taria es casi imposible, cuando los libros de texto son deficientes y costosos, cuando los precios de matrículas y seguros suben continuamente, el estudiante se ve falto de medios suficientes de asistencia universitaria y todas las cargas recaen sobre los agobiados presupuestos de las familias, que no ven compensación a tales sacrificios. Así España, para su mal, permanece en vivo contraste clasista —en éste como en tantos otros aspectos con la realidad universitaria europea, donde el Estado asume buena parte de tales cargas facilitando el acceso de todas las clases sociales a los Estudios Superiores—, ni a alguna referencia a lo que la Guerra Civil y la posguerra supusieron para la universidad —«La situación material y vocacional del universitario español es de indigencia, su perspectiva intelectual es mediocre —¡cuántos catedráticos y maestros eminentes apartados por motivos ideológicos y personalistas!»— (se reproduce el texto del manifiesto en R. Mesa Garrido, *Jaraneros*, cit., pp. 64-67).

⁴ R. Mesa Garrido, *Jaraneros*, cit., pp. 67-78.

⁵ Sobre Manuel Torres López (1900-1987), véase J. de Azcárraga: *Don Manuel Torres López (1900-1987)*, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, 73, 1988, pp. 665-667, y J. M. Pérez-Prendes, *Manuel Torres López (1900-1987)*, AHDE, 57, 1987, pp. 1112-1127. Antes, con su prosa barroca, véase J. M. Cuenca Toribio, *Semblanzas andaluzas (Galería de retratos)*, Espasa Calpe, Madrid, 1984, pp. 84-86.

⁶ R. Mesa Garrido, *Jaraneros*, cit., p. 17.

recinto. Todo un símbolo y un preludio. En las dos jornadas posteriores se repiten los incidentes violentos, los cuales llegan a extremos insospechados el 9 de febrero. Ese día, en la calle Alberto Aguilera, estudiantes que protestan por los incidentes de las jornadas anteriores y los falangistas que celebran el «Día del Estudiante Caído» —la conmemoración de la muerte en el Madrid republicano del militante falangista Matías Montero—. El resultado es trágico, ya que resulta gravemente herido de bala un joven de diecinueve años, perteneciente a la Centuria Sotomayor del Frente de Juventudes, Miguel Álvarez, sin que jamás se lograra establecer quién fue el responsable del disparo⁷.

Lo que siguió es previsible, al menos en algunos extremos. El mismo día 9 tuvieron lugar las primeras detenciones, las cuales continuaron el día 11. Antes, el 10, fue decretado el cierre de la Universidad Central. El Consejo de Ministros suspendió, en una decisión sin precedentes y por primera vez desde que fue promulgado, la aplicación de los artículos 14 y 18 del Fuero de los Españoles, los relativos al derecho a fijar libremente la residencia dentro del territorio nacional y a la detención por un plazo máximo de setenta y dos horas como garantía de los detenidos.

En cuanto a las consecuencias político-personales, los incidentes supondrán el cese del Decano de la Facultad de Derecho, la dimisión de Laín como Rector y nada menos que una crisis ministerial. Franco cesará a dos ministros: el Secretario General del Movimiento, Raimundo Fernández-Cuesta y el Ministro de Educación Nacional, Joaquín Ruiz-Giménez. La salida del gobierno de éste tiene otras connotaciones harto conocidas, dado lo que supuso, en cuanto al aperturismo, su paso por el Ministerio. Más querido que logrado, Ruiz-Giménez y sus colaboradores, entre ellos Laín Entralgo, intentaron, tal vez inocentemente, desde el interior del propio sistema, una transformación de la universidad. Todo quedó en un intento y lo que es peor en justificación de ciertos retrocesos que con relación a esta política se produjeron inmediatamente.

A pesar de todo, nada volvería a ser lo mismo a partir de 1956 en la universidad española. El hecho de que durante varios días se sucediesen una serie de incidentes, de muy difícil ocultación, ya que

⁷ Para R. Mesa Garrido, *Jaraneros*, cit., p. 18, no hay duda de que el disparo, como todos los que se produjeron en el incidente, provino de los camaradas del propio herido.

se producían nada más y nada menos que en la Universidad y en las calles de Madrid, fue una llamada de atención, para unos y para otros, en el sentido de tomarse en serio aquello que desde el movimiento estudiantil podía venir como oposición al régimen. La universidad, siempre sospechosa, se convertiría, desde entonces con mayor razón, no sólo en un lugar a controlar y vigilar sino también en un lugar donde reprimir.

Pero en 1956 hubo otros jaraneros y alborotadores. En junio, tuvieron lugar en otra universidad española, en la Universidad de Sevilla, otros incidentes que por coincidencia también sucedieron en la Facultad de Derecho, y que son precisamente los que vamos a presentar en este trabajo. Como se descubrirá rápidamente en el relato que seguirá, estos incidentes son muy distintos. Utilizando un eufemismo consistirían en el *desencuentro* entre un profesor y sus estudiantes o, más bien, en la culminación violenta de una serie de desencuentros o de unas relaciones profesor-alumnos poco afortunadas. No obstante, la personalidad del protagonista principal, el Profesor Ramón Carande Thovar (1887-1986), la intervención de representantes del sindicato universitario SEU y de algún actor secundario, como el Profesor Francisco de Elías de Tejada y Spínola (1917-1978), podrían haber dado pie a la calificación, por parte de algunos, de este episodio como *otros incidentes de 1956*, en línea de continuidad con la acaecido en Madrid unos cuantos meses antes. No obstante, como se verá de inmediato, casi la única continuidad es el fondo —la universidad franquista— y el año en que suceden ambos incidentes. Podrían buscarse otras coincidencias secundarias como la adscripción de algunos protagonistas a los bandos enfrentados en febrero de 1956 o la presencia del SEU, pero esto no son más que elementos que figuran en el guión de estos hechos de forma necesaria, de oficio, dada la época en que éstos suceden.

A pesar de la reducción de estos acontecimientos a sus exactas coordenadas, a una dimensión que muchos podrán ver como menor, despreciarlos como meramente anecdóticos no sería adecuado. Entre otras cosas, equivaldría a no otorgarles la condición de hechos con los que conformar nuestro pasado inmediato, y no sólo por supuesto el de nuestra universidad. Cuando se trata de reconstruir el pasado casi *todo vale*, siempre y cuando le demos su exacta dimensión. En este sentido, este incidente nos muestra cómo transcurrían cotidianamente las cosas en la Facultad de Derecho y en la

Universidad de Sevilla en 1956. Pueden, de forma concreta, servir para verificar en qué medida la política universitaria patrocinada por el Ministerio de Ruiz-Giménez había alcanzado a las universidades periféricas o era algo concentrado en el entorno madrileño. Y pueden ilustrarnos sabrosamente sobre cómo eran las relaciones entre el Catedrático, gran señor feudal, y una parte de sus siervos, la más endeble, los alumnos⁸.

⁸ En este punto, nos gustaría acometer una pequeña desviación historiográfica y una somera explicación sobre las fuentes utilizadas. En cuanto a lo primero, a las connotaciones y registros historiográficos de este trabajo, con toda su modestia, creemos que en él se ensayan o utilizan algunas de las fórmulas historiográficas actuales (al menos, sobre las que se reflexiona). Esta licencia nos la tomamos como defensores de una historiografía *consciente*, lo que implica, entre otras cosas, una percepción hacia ésta *kavafiana*, si se nos permite la expresión, en la que nos parece tan importante el camino como la meta, y en la que nos parecen tan importantes las preguntas y cómo las resolvemos que las respuestas a éstas. En definitiva, una idea de historiografía, del arte de hacer la historia, como algo que enriquece en sí mismo y que no queda circunscrita a la obtención de unos resultados. En este sentido, conviene o nos permitimos hacer algunas calificaciones. Este pequeño trabajo sobre unos incidentes acaecidos en una universidad española en 1956, pensamos que engrosaría la llamada *Historia cultural*, en su versión universitaria (todo un subgénero de ésta o ya incluso para algunos un género con autonomía propia). Por otra parte, también habría que incluir este trabajo en la llamada *Historia del presente*, una especie de Historia contemporánea inmediata, y que, por muchas connotaciones, tiene interés pero básicamente por hacer realidad esa función tradicional de la Historia de servir entre otras cosas para explicar el presente. Finalmente, para concluir con las calificaciones, este trabajo podría incluirse también en la llamada *microhistoria*.

Esta última calificación se detecta con facilidad en algunas de las fuentes que sostienen este trabajo. Y con ello pasamos al segundo capítulo de esta desviación: una somera enumeración y descripción de éstas. En primer lugar —y es un tipo de fuente tradicional—, nuestro trabajo está basado en un documento «Expediente sobre los hechos denunciados por el Catedrático de esta Facultad Dr. Carande Thovar», depositado en el Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla como Legajo n.º 3687-06. El expediente está recogido en una carpeta gris, abierta, bastante deteriorada sobre la que aparece, debajo del título mecanografiado en letras mayúsculas y subrayado con línea doble, el número 1956, en lápiz. El número del legajo aparece en la esquina superior derecha junto con un «(72 h)» (que

2. *La anécdota: el incidente*

Para el relato de los hechos que nos ocupan disponemos de diversos testimonios. Existe incluso hasta una versión digamos popular, presente en la memoria de muchos individuos de aquella época y de las inmediatamente posteriores, que han ido añadiendo a los hechos algunas puntadas, casi inevitables en el relato de autoría popular. Al

son las hojas que componen el legajo). Del mismo título hay que deducir que el expediente se recopila en la Facultad de Derecho y se envía al Archivo. La recopilación, además de estar bastante ordenada, es detallada. En la Hoja 5 del legajo, por oficio núm. 378, de fecha 6 de junio de 1956, el Decano de la Facultad de Derecho remite al Excmo. y Mgfc. Sr. Rector los documentos de que los que consta la «Información sobre los incidentes provocados por los alumnos de 2.º curso de esta Facultad» y que consisten, como se enumera, en: 1.º — Denuncia de los hechos por el Dr. Carande. 2.º — Comunicación del Excmo. Sr. Rector ordenando información sumaria de los hechos. 3.º — Certificación del acuerdo de Junta de Facultad del día 4 de los corrientes. 4.º — Escrito formulado por el Subdelegado del S.E.U. 5.º — Escrito informando de los hechos el Sr. Ruiz del Portal. 6.º — Acta de comparecencia del Profesor Adjunto Sr. Romero Muñoz. 7.º — Ratificación de las manifestaciones del Sr. Romero Muñoz por el Sr. Ruiz del Portal. 8.º — Informe y propuesta de sanción que formula el Ilmo. Sr. Decano de esta Facultad de Derecho. 9.º — Certificación del acuerdo de la Junta de Facultad aprobando el anterior informe y propuesta. 10.º — Certificación de los alumnos matriculados en la asignatura de Economía Política. 11.º — Certificación de los alumnos aprobados en la asignatura de Economía Política. 12.º — Certificación de los alumnos que figuran en el acta de examen de la cirada asignatura en los exámenes de Milicia Universitaria» (de dichos documentos hay otra copia en el legajo, en las hojas 22-36). De lo detallado del legajo da fe el que se incluya en éste, por ejemplo, los anuncios publicados en el tablón de anuncios con relación a las consecuencias del incidente. Puede resultar excesivamente detallado, pero lo es para suerte del curioso y ahora de quienes lo leemos casi cincuenta años después. Hay aspectos humanos que podrían haber sido soslayados, pero que aparecen en el expediente, como son las notas que envían, ya veremos en qué contexto, diversos catedráticos sumándose a la resolución solidaria con D. Ramón de la Junta de Facultad, o la vicisitud personal de algunos de los alumnos sancionados.

En segundo lugar, nos hemos valido de una fuente que pensamos está directamente vinculada a la Historia del presente como es el testimonio personal directo, obtenido de personas vivas que protagonizaron o estu-

incidente lo hemos calificado de anécdota conscientemente, ya que, como hemos dicho, no se trataría más que del desencuentro o falta de coincidencia entre un profesor y unos alumnos, aunque, como hemos insistido también, no puede perderse de vista en qué momento se producen estos hechos y quiénes son los protagonistas. El incidente puede contemplarse *a priori* como la manifestación de un ambiente inmediato y más amplio: el propio del año 1956. Y también, por supuesto, reflejaría el ambiente existente —un poco de microhistoria— en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla en aquellos momentos, especialmente entre los catedráticos. Luego volveremos sobre ello, pero en el desarrollo de los hechos tiene mucho que ver quienes son sus protagonistas principales por la parte de los catedráticos: Ramón Carande y Francisco Elías de Tejada⁹.

vieron en las cercanías de los hechos objeto de atención. En concreto, el procedimiento utilizado ha sido la entrevista personal y la realización de un cuestionario. Los entrevistados han sido tres: primero, Manuel F. Clavero Arévalo, Catedrático de Derecho administrativo entonces y Secretario de la Facultad, encargado de realizar el expediente que sigue a estos sucesos; segundo, Pedro Ruiz-Berdejo Gutiérrez, abogado sevillano y en aquel momento Delegado del S.E.U. del Distrito Universitario (cargo que desempeñó entre octubre de 1955 y octubre de 1957); y tercero, Bernardo Víctor Carande de la Torre, escritor e hijo de D. Ramón y, sin duda, el mejor conocedor de la biografía de su padre.

Finalmente, nos hemos valido, como no podía ser de otro modo, de las fuentes bibliográficas. Éstas son prácticamente inexistentes, en un sentido directo, sobre los hechos relatados (recientemente hace referencia a estos incidentes J. L. Rubio Mayoral, *Disciplina y rebeldía. Los estudiantes en la Universidad de Sevilla [1939-1970]*, Universidad de Sevilla, 2006, p. 103 y notas 39 y 41), pero sí son muy abundantes, cada vez más, sobre el contexto en que los mismos se producen. Para la comprensión y la exacta ubicación de estos hechos tenemos la fortuna de contar con los numerosos trabajos, que bien en una perspectiva general o en alguna más concreta o monográfica —algunas veces insospechada *a priori*— bordan el periodo franquista.

⁹ Un poco de todo esto hay en el relato de los hechos —inexacto en algunos extremos— que nos ofrece el hijo de Ramón Carande, con su peculiar estilo literario, en B. V. Carande, *Ramón Carande. Biografía ilustrada*, Fundación El Monte, Sevilla, 2003, pp. 116-117, que no duda en atribuir el origen del incidente a la mano tenebrosa de algún colega —a quien por supuesto no nombra—: «Se avecina su jubilación, su «jubilosa jubilación» que llamará pues ella le dejará más tiempo para su trabajo, su vida, aun-

Pero reconstruyamos los hechos. Para ello, nada mejor que quienes los protagonizan para relatarlos —aunque el hecho de ser protagonistas no garantiza la objetividad y veracidad del relato; más bien la condición humana va por otro lado—. En primer lugar, leamos la denuncia que Ramón Carande Thovar, de inmediato el lunes 4 de junio —los incidentes acaecen el viernes 1 y el sábado 2, sobre todo este segundo día—, eleva a conocimiento del decano:

Lamento tener que elevar a conocimiento de V.S.I. los hechos siguientes: Primero.— Al llegar al edificio de la Facultad el día dos de junio, a las cinco de la tarde, fui recibido por un grupo de alumnos, con silbidos. Durante la sesión de exámenes de aquella tarde, en los comienzos y al final, se hicieron ostensibles las protestas con gritos, cosa que se reanudó al terminar nuestras tareas.= Segundo.— Estas manifestaciones acrecentadas con insultos se reanuda-

que todavía la universidad en la patria aquella que habita, en aquella ciudad a veces no tan cálida como debiera, le depare un disgusto más. Hay colegas (algo hay que llamarlos) que no son partidarios (de él) e incitan a los alumnos siempre propicios (algunos) a la bulla. Algo tan sevillano. Se corrió la voz, movida convenientemente, contra el catedrático (él), que dispuso para remediar el abandono de las clases por parte del alumnado entre Semana Santa y Feria que no los aceptaría a examen final (y eso que luego los aceptó, aunque muchos no lo superaron), de que: 1.º Habiéndosele preguntado en clase, «Don Ramón ¿cómo encabezamos el escrito», contestó, «con su nombre y dos apellidos, la fecha, y si además le gusta puede usted poner José, Jesús y María». 2.º Se atreviese, el mismo día de la muerte del general Moscardó, a dedicarle un minuto de silencio, en clase, al mismo suceder de un antiguo catedrático de la universidad Sevilla, Blas Ramos Sobrino (al que no hacía mucho vimos en el exilio). 3.º Que también en clase dijera que lo más parecido que conocía al Boletín Oficial del estado era La Codorniz. [...] Pero claro, siempre hay algo más, también había, por parte de los promotores, lo de siempre, incompreensión, torpeza y envidia. Así que mi padre fue perseguido, abucheado y apedreado, desde la Universidad (ya en la Fábrica de Tabacos) hasta Álvarez Quintero. Eso sí, acompañado y protegido por sus ayudantes de clase Joaquín Ruiz del Portal, Enrique Otte y Vicente Romero» (E. Otte, alemán transplantado a Sevilla, alumno de D. Ramón en los años cuarenta y posteriormente profesor de Historia en Alemania no acompañaba, como veremos, ese día a D. Ramón; con él, no obstante, mantuvo una estrecha relación intelectual y amistosa de la que da cuenta el propio R. Carande, en *Galería de amigos*, Alianza Editorial, Madrid, 1989, pp. 163-167.

ron a nuestra salida, y ya en la calle de San Fernando, yendo acompañado de los dos miembros del Tribunal, el Profesor Adjunto de las asignaturas de mi grupo, Don Vicente Romero Muñoz, y el Profesor de Contabilidad, Ayudante de mis asignaturas, Don Joaquín Ruiz del Portal y Rosillo, nos siguieron a unos veinte metros de distancia, quince o veinte estudiantes del Curso Segundo al parecer, los mismos que iniciaron con algunos más, del mismo curso los silbidos e insultos.= Tercero.— Al llegar a mi domicilio, con nuestros compañeros, prosiguieron los insultos, llegando incluso a lanzarnos dos pedradas. Esto me movió a solicitar el auxilio de la Fuerza Pública, por teléfono, y tiempo después llegaron dos números de la Policía Armada, cuando ya los alumnos habían desaparecido.= Cuarto.— En la mañana de hoy, con ocasión de una salida que hice a Secretaría, desde el Aula, se reanudaron los insultos.= Pongo el caso en conocimiento de V. S. I. a los efectos oportunos.= Dios guarde su vida muchos años.= Sevilla 4 de junio de 1956¹⁰.

El relato de Carande permite hacerse con una idea bastante aproximada de cómo fueron los incidentes, al menos en su parte *física*. Un grupo de alumnos utiliza varias armas, que pueden caracterizarse bajo el común denominador de servir para el acoso: el silbido, el insulto y la pedrada —hasta dos contabiliza el denunciante—. Es fácil imaginarse al catedrático, ya anciano y a punto de la jubilación, escoltado por sus dos ayudantes y seguido por un grupo vociferante y tumultuoso, a pesar de que sólo son quince o veinte. La Universidad se ha trasladado recientemente de su ubicación en el centro de Sevilla a su actual sede central de la Fábrica de Tabacos, fuera estrictamente del casco histórico¹¹. El domicilio de Carande, en el número 37 de la calle Álvarez Quintero¹², en los alrededores de la

¹⁰ Este texto aparece en la hoja 7 del Legajo con el título «COPIA DE LA DENUNCIA DEL Dr. CARANDE Y THOVAR». Se trata, como se señala en el pie del documento por el Secretario de la Facultad, de una copia compulsada con el original.

¹¹ El 4 de abril de 1954, en un acto presidido por el Ministro de Educación Nacional y el Cardenal Pedro Segura, bajo el Rectorado de Carlos García Oviedo, tiene lugar la inauguración de la nueva sede de la Universidad, comenzando precisamente por la Facultad de Derecho.

¹² Hoy existe en dicha casa, situada en esa calle angosta y peatonal, cerrada al tráfico, una placa que recuerda la residencia en la misma del Prof. Carande, placa propia del periodo, la tardo transición, en la que

catedral de Sevilla, se encuentra prácticamente a la misma distancia de la anterior ubicación que de la nueva —lo único que hizo fue cambiar la dirección de su caminata diaria hasta la universidad—¹³. El itinerario seguido —no se especifica en estos relatos— no nos resulta conocido, pero es fácilmente imaginable y casi seguro que transcurre por algunas de las calles más conocidas y concurridas, entonces y ahora, de la ciudad. En definitiva, todo un escándalo¹⁴, que no debió de pasar inadvertido en la tranquila y provinciana

Carande se convirtió en una especie de icono liberal, muy útil incluso para algunos (para ser paseado y enseñado): «En esta casa vivió D. Ramón Carande — Maestro de historiadores Discípulo de la vida — Hombre esencial a quien nada fue ajeno. Palencia 1887-Almendral 1986 — La ciudad de Sevilla agradecida — 4 de mayo de 1987».

¹³ Precisamente a este paseo cotidiano hasta la vieja Universidad de la calle Laraña en Sevilla, como algo característico de D. Ramón se refiere R. Pérez Delgado, *Recordando a D. Ramón Carande*, Moneda y Crédito, n.º 170, 1986, p. 22: «No era difícil ver a don Ramón en las calles de Sevilla. Yo lo vi más de una vez muy de mañana marchar, sumamente ágil de movimientos por la calle Sierpes —estatura normal, capa española azul sobre los hombros, traje y sombrero oscuros, patillas, gafas de miope— y al llegar a la Campana girar, rápido, hacia la derecha, seguir por la calle Laraña y entrar en la Universidad a empezar su jornada laboral, que no terminaba hasta la hora de dormir».

¹⁴ A pesar de que el incidente no debió de pasar desapercibido en la ciudad, no aparece reseña alguna del mismo en la prensa de esos días. Visto con la perspectiva actual, un hecho de estas características, que ya hemos dicho que no pasa de ser un incidente entre profesor y alumnos, no aparece tampoco hoy normalmente en la prensa. Distinto hubiera sido seguramente si alguna de las piedras arrojadas hubiese dado en el blanco deseado. Entonces tal vez la noticia hubiera engrosado las páginas de sucesos. De todos modos, tampoco resulta descabellado pensar que la prensa local de la época, de por sí mojigata, se autocensurase y no incluyese una noticia en la que parecían implicados, de un lado, estudiantes y, de otro, sobre todo, un profesor tibio o sospechoso políticamente. Así, el diario *ABC* del domingo 3 de junio, en su sección de «Informaciones y noticias varias de Sevilla», en la p. 23, da cuenta de cosas como que «El gobernador civil clausuró en La Roda un cursillo, organizado por la Sección Femenina» y de diversos «Sucesos», como la «Detención de un carterista», la «Captura de una sirvienta ladrona» o el «Hurto de una bicicleta». Tampoco hay referencias al incidente en los otros periódicos locales de la época *El Correo de Andalucía* y el diario *Sevilla*.

Sevilla¹⁵. El relato de Carande es comedidamente —al menos así no los parece— dramático y resulta, sobre todo, preciso a la hora de establecer los hechos sucedidos. Ahora bien adolece de algo, ya que no informa de por qué esos alumnos de segundo curso deciden emprenderla con él y sus ayudantes. Evidentemente, a él esto no le corresponde y mucho menos cuando se tiene con seguridad la conciencia de que nada justifica una conducta de este tipo. Para conocer estos motivos deberemos acudir a otros relatos.

En este punto, y con esta necesidad de conocer los motivos, llegamos a una de las *perlas* del expediente. Es una pieza que muestra por sí sola muchas cosas y que puede ser objeto de diversos aprovechamientos. Se trata del escrito que presenta el Subdelegado del SEU (hoja 10, dos páginas) al Decano de la Facultad de Derecho, entonces Alfonso de Cossío y Corral, Catedrático de Derecho civil, el 5 de junio de 1956¹⁶. Por enjundioso y esclarecedor, hemos decidido reproducirlo en su totalidad. Merece la pena:

Los alumnos de segundo curso de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, con el debido respecto, informan a V.I. los siguientes hechos:= El día 1 de junio de 1956 el Dr. Carande y Thovar convocó a exámenes de Economía Política a aquellos alumnos que no le hubieran hecho el día 21 de mayo —once alumnos presentados— o no hubiesen sido previamente eliminados de examen.= La prueba constó de seis pruebas y duró de 8'30 a 11'30, tiempo insuficiente para su desarrollo.= El día dos del mismo mes el Sr. Auxiliar de Economía Política y profesor de Contabilidad. Sr. Ruiz del Portal, aplazó el examen convocado para las 9'30 a las cinco de la tarde de este mismo día.= A partir de las once horas del mismo día, salen las papeletas de Economía Política con fecha del día uno, en el cual se celebró el examen, siendo por completo arbitrarias las calificaciones que en ellas constaban.= Hacemos constar que el término medio de los ejercicios era de una extensión de catorce páginas tamaño folio por lo que nos parece moralmente imposible

¹⁵ Sobre la ciudad en aquella época hay innumerables testimonios personales e historiográficos. Entre ellos, véase N. Jesús Salas, *Sevilla en tiempos del Tamarguillo*, Tomo I, Editorial Castillejo, Sevilla, 1995, esp. pp. 161-190, dedicadas a 1956.

¹⁶ En el Legajo aparece en la hoja 10 (dos paginas) como «COPIA DEL ESCRITO PRESENTADO POR EL SUBDELEGADO DEL S.E.U», compulsada como «conforme» por el Secretario de la Facultad.

que el Dr. Carande haya leído en el breve espacio de unas horas 1.400 páginas; sin que dejemos de reconocer la gran capacidad intelectual del titular de esta Cátedra.= A la vista de tal injusticia y arbitrariedad, una representación del curso marcha a entrevistarse con el Jefe del S.E.U. Es de notar que el Dr. Carande tiene por costumbre no recibir representantes del curso votados legítimamente ante Srs. Catedráticos y reconocidos legalmente por nuestro Sindicato.= A las cinco de la tarde el curso esperaba en la Facultad para efectuar el examen de Contabilidad, pero el Sr. Ruiz del Portal aplazó dicho examen para el lunes día 4, y seguidamente entro a examen de Hacienda como auxiliar del Dr. Carande.= Ante esta nueva informalidad el curso marcha a hablar con el Sr. Rector de esta Universidad, el cual nos aconseja seguir la vía legal para la solución de estos contratiempos, para lo cual nos indica visitar al Sr. Decano de la Facultad de Derecho.= Una comisión nombrada por el curso, visita al Sr. Decano en su domicilio para pedirle una solución rápida a la situación tan injustamente provocada.= El Sr. Decano expuso a la Comisión, que «la responsabilidad de esta situación no es del Catedrático, sino del curso por su falta de disciplina durante el año».= La comisión le aseguró que ninguna falta de disciplina se ha cometido contra la Cátedra de Economía Política.= Dice seguidamente el Sr. Decano que «no podemos legalmente culpar de nada al Dr. Carande porque el catedrático tiene facultad ilimitada sobre los alumnos oficiales». «No resulta sospechoso que el Dr. Carande haya corregido más de cien ejercicios en pocas horas, porque D. Marcelino Menéndez y Pelayo leía dos páginas en de un solo golpe de vista».= «Es mas, sigue diciendo el Sr. Decano ni siquiera tiene obligación de leer los ejercicios porque sus derechos son ilimitados». Decimos que en este caso el estudiante universitario no tendría garantía legal alguna, y el señor Decano responde que de nada sirve la garantía puesto que «nadie garantiza al garantizador». Habla de que conoce sentencias de un juez de Primera Instancia mejor hechas que las del mismo Tribunal Supremo.= No comprendemos como pretende el Sr. Decano aplicar esta disgresión a nuestro caso concreto.= Por último, nos propone la solución legal: una instancia que el admitiría o no. En caso de que se resolviera a nuestro favor, se constituiría un tribunal de comparación presidido por él, como Decano, y en el que tomaría parte necesariamente el Dr. Carande.= Como amigo nos recomendó paciencia ya que en caso de constituirse dicho tribunal aun examinando con justicia, lo haría desde luego sin ninguna benevolencia, sino «a cara de perro». Su resultado no mejoraría la situación del curso sino que la empeoraría en el presente y para el futuro.= Todavía el Sr. Decano aclaró que él sin dejar de ser justo y examinando de acuerdo a un programa

podría suspender a todos los civilistas de España, y ellos le podrían suspender a él.= Los representantes del curso salen de casa del Sr. Decano y comunican al resto del curso el resultado de la entrevista. Se produce desesperación e indignación general.= De nuevo el curso vuelve al Sr. Rector a comunicarle el resultado.= De vuelta a la Facultad el curso se encuentra con que el Sr. Ruiz del Portal profesor de Contabilidad que anteriormente había aplazado hasta el lunes día 4, el examen de esta asignatura, ha celebrado ya el examen, dando al curso por no presentado.= Ante este nuevo alarde de injusticia agostados todos los recursos legales, el curso espera al Dr. Carande fuera del recinto universitario y junto con sus auxiliares le sigue por la calle con manifestaciones de desagrado por la actitud adoptada, tanto por el Dr. Carande como el Sr. Ruiz del Portal. Es de notar que al curso se unen elementos extraños a él, muchos de ellos antiguos alumnos del Dr. Carande.= Para mejor comprender la justificación de nuestra conducta, seguida por el curso, y a la que se unieron voluntariamente otros elementos, es preciso hacer constar: = La conducta del curso hacia el Dr. Carande ha sido intachable en todo momento, y en cambio la del profesor hacia su clase ha sido desconsiderada en las últimas fechas y en algunas anteriores.= El Dr. Carande se ha limitado a dictar traducciones directas de varios libros con frecuencia ininteligibles.= Ha hecho guardar a la clase minutos de silencio por personas como Don Blas Pérez Sobrino que, según el, era «un gran español al cual la fatalidad histórica arrojó lejos de nuestras fronteras». Omitiendo el recuerdo de personalidades tan destacadas como la del glorioso General Moscardó. Otro minuto de silencio nos hizo guardar por la muerte de Ortega.= El Dr. Carande ha herido nuestros sentimientos religiosos y de libertad obligándonos a comenzar un ejercicio parcial y escrito con las palabras de «Jesus, José y María». Dado el tono y las circunstancias creemos que se trataba de una irreverencia cuando menos.= Y para terminar hiere nuestros sentimientos patrióticos al decir que los únicos periódicos graciosos de España son La Codorniz y el Boletín Oficial del Estado.= Insignificancias si se quiere, pero insignificancias muy significativas.= Toda esta conducta culmina con la injusticia de los exámenes finales de los que previamente había eliminado a cuarenta alumnos.= Contando con estos antecedentes sepuede comprender la indignación del curso ante unas calificaciones otorgadas por un señor catedrático cuya conducta nos da la seguridad moral de no haber leído los ejercicios, lo que desde luego es una excepción a la justicia normal de nuestros catedráticos. En especial preciso es comprender la indignación de los Sres. alumnos becarios, al perder por tamaña injusticia la posibilidad de continuar sus estudios. Es de observar

que los tumultos sólo se produjeron *después* que el Sr. Decano nubló toda esperanza de resolver nuestra situación por medios legales.= Tan solo entonces la indignación afloró al exterior en forma natural y perfectamente comprensible.= En justicia y con todo respeto creemos que nuestros intereses han sido injustamente lesionados y este Curso espera sean atendidas las peticiones siguientes:= Primero Que no se nos imponga sanción colectiva alguna.= Segundo Que se forme un tribunal especial, en junio, de doctores de esta Facultad del cual no forme parte el Catedrático de la asignatura con objeto de que en primer lugar no pierdan los derechos de beca sus poseedores, y asimismo pueda ser reparada la injusticia con el examen de los restantes.= 3.º Que se abra una investigación sobre la conducta académica del Dr. Don Ramon Carande y Thovar.= 4.º Así mismo pedimos el cese total de sus funciones universitarias del Licenciado don Joaquín Ruiz del Portal, por considerarlo totalmente incompetente para desempeñar los cargos que ocupa.= 5.º Que haya un examen de Contabilidad, en junio, en las condiciones establecidas en la petición segunda.= Dios guarde a usted muchos años.= Quedamos en espera que con su acostumbrada justicia se solucione a los problemas que presentamos, así como las peticiones igualmente formuladas.= Sevilla 5 de junio de 1956.= firmado por el Segundo de Derecho.= presentado y firmado por el Delegado de este curso, según lo previsto en el Art. 21 del Estatuto del Estudiante aprobado por la Presidencia del Gobierno, según Decreto de 11 de agosto de 1953.= El Subdelegado.= Delegado en función firma ilegible, rubricado¹⁷.

¹⁷ La lectura de este largo texto, como decimos, merece la pena. Dos páginas bastan para devolvernos a la España y a la universidad española de hace cincuenta años. El texto nos permite establecer varias conclusiones. En primer lugar, el fondo del asunto permanece invariable: los incidentes no son más que la manifestación de las malas relaciones entre un profesor y su *curso*. El modo en que éste aparece referido, como curso, es decir, como una entidad, un cuerpo intermedio -hasta aparece firmado por el «Segundo de Derecho»—, es una de las curiosidades del texto: es como si el corporativismo hubiese calado hasta esos extremos. Segundo, en el texto se trasluce otro corporativismo, más previsible por otra parte: el de los profesores. Dicho corporativismo aparece especialmente en la impagable visita al Decano, D. Alfonso de Cossío y Corral; la manifestaciones de éste, reconocido liberal, no dejan precisamente en muy buen lugar a su liberalismo. Tercero, el desencuentro parece venir de lejos: además de su forma de desarrollar las clases —«el Dr. Carande se ha limitado a dictar traducciones directas de varios libros con frecuencia ininteligibles»,

Para concluir, dejemos que nos ofrezca su versión cercana a la del Profesor Carande pero más detallada uno de sus ayudantes, Joaquín Ruiz del Portal¹⁸:

Ilmo. Sr.: = Cumplimentando el requerimiento que me ha hecho para que le informe sobre los incidentes provocados por los alum-

ya veremos que la docencia no era precisamente la parte del oficio universitario con la que más disfrutaba, sobre todo entonces, en aquél periodo prejubilar—, aparece el relato de algunos hechos protagonizados por D. Ramón, irreverentes e incompatibles con los sentimientos patrióticos del «curso»: la equiparación de la Codorniz y el Boletín Oficial del Estado o el *ninguneo* de la muerte del héroe del Alcázar de Toledo —el General Moscardó fallece el 12 de abril de 1956— frente al recuerdo del fallecimiento en el exilio de su amigo Blas Ramos Sobrino, Catedrático de Filosofía del Derecho (citado en el texto como «Blas Pérez Sobrino»).

El recuerdo en clase de Blas Ramos Sobrino (1891-1955) se explica en el hecho de que se trata de un viejo amigo y colega de las aulas sevillanas, donde fue Catedrático de Filosofía del Derecho. Institucionista convencido y profeso —su tesis doctoral fue dirigida por el propio F. Giner de los Ríos— falleció en el exilio, en Auch (Francia), el 27 de noviembre de 1955. La figura de Ramos Sobrino fue modestamente recuperada en la década de los setenta, gracias fundamentalmente a la labor de un sobrino suyo (Luis González Ramos), que propició la edición de algunos de sus escritos: *El Derecho y el hombre actual. Primer volumen*, Madrid, 1969; *El Derecho y el hombre actual. Segundo volumen*, Madrid, 1976, y finalmente *Un maestro y diez lecciones de Filosofía del Derecho*, Madrid, 1979. En éste, la décima y última lección, redactada por su sobrino, da cuenta de su vida y obra (pp. 113-123).

¹⁸ Aparece en el Legajo en la hoja 11 como «COPIA DEL ESCRITO QUE FORMULA DON JOAQUIN RUIZ DEL PORTAL». Otro testimonio es el del otro ayudante de Carande, que también le acompaña ese día. En la hoja 12 del Legajo se recoge «COPIA DEL ACTA DE COMPARECENCIA DEL PROFESOR ADJUNTO DON VICENTE ROMERO MUÑOZ: «En la ciudad de Sevilla a cinco de Junio de mil novecientos cincuenta y seis ante el Ilmo. Sr. Decano de esta Facultad, Don Alfonso de Cossio y del Corral comparece Don Vicente Romero Muñoz, mayor de edad, casado, Profesor Adjunto de esta Universidad, que juramentado expone: Que en su calidad de Profesor Adjunto del grupo de asignaturas de don Ramon Carande, ha formado parte del Tribunal de exámenes de la actual convocatoria, presenciando cuantos hechos han sido denunciados por el expresado Sr. Catedrático, excepto el primero de ellos por haber tenido lugar minutos antes de su entrada en la Universidad el sábado día dos de los corrientes, si bien el

nos oficiales de 2.º curso, tengo el honor de manifestar lo siguiente: = Que el sábado día 2 de los corrientes a las 5 de la tarde cuando llegaba a la portada exterior de la Facultad, observó que Don Ramón Carande, que ya entraba en el edificio, era recibido con fuertes silbidos por un grupo de alumnos, silbidos que se oían con gran intensidad desde el arrecife de entrada por donde marchaba el que suscribe. Momentos después llegó el otro miembro del Tribunal Don Vicente Romero Muñoz y constituido aquel para proceder a los exámenes de Hacienda Pública (Derecho Fiscal) y Contabilidad, continuaron los silbidos en las galerías, entrando el aula a

propio Dr. Carande se lamentó de la desagradable acogida que había tenido por parte de los alumnos, y el Sr. Ruiz del Portal, le informó detalladamente de los hechos.= Que todos los demás extremos que aparecen en el oficio del Dr. Carande, han sido desgraciadamente presenciados y vividos por el compareciente, que responde de su veracidad y autenticidad, caso necesario. Y como quiera que el bedel Sr. Moreno indicó al al que comparece la actitud levantisca de los alumnos y que estaba abierta la puerta de la calle San Fernando, pareció bien a todos salir por la puerta indicada, afin de evitar el incidente que estos preparaban, pero esto no obstante cuando, cuando marchaban por dicha calle San Fernando, Don Ramón Carande, Don Joaquín Ruiz del Portal y el compareciente, fueron seguidos por unos quince o veinte alumnos que a agrandes voces dirigían insultos contra don Ramon percibiendo reiteradas veces los gritos de «Carande, cabron» y «Carande, hijo de puta».= Que al caer una piedra sobre ellos a la llegada al domicilio del Dr. Carande hubo de dar aviso a la fuerza publica, si bien comparecio la pareja de la Policia Armada se habían marchado los alumnos.= Que en la mañana de ayer, con ocasión de que el Sr. Carande atravesaba la galería de la facultad desde el aula dos a la Secretaria, volvimos a oír el Sr. Ruiz del Portal y el compareciente, desde el aula los silbidos y voces de los alumnos, diciéndonos a su regreso el Sr. Carande que le habían vuelto a insultar como el sabado anterior.= Y no tenido mas que exponer, firma su comparecencia conmigo el Secretario. Doy fe. Firmado, Vicente Romero, rubricado. Dr. Manuel F. Clavero, firmado y rubricado.» = [...] RATIFICACIÓN.— En Sevilla a cinco de junio de mil novecientos cincuenta y seis ante el Ilmo. Sr. Decano de esta Facultad, asistido de mi el Secretario, comparece Don Joaquín Ruiz del Portal y Rosillo y previa lectura del informe que antecede, manifiesta que se afirma y ratifica en todos y cada uno de los extremos que se contienen en dicho informe. Y firma con el Ilmo. Sr. Decano, de lo que doy fe. firmado Joaquín R. Del Portal, rubricado.= Dr. Manuel F. Clavero, rubricado. Dr. A. Cossio, rubricado.» = = = [...] ES COPIA, que compulsada con el original, es conforme, [...] El Secretario de la Facultad».

examinarse los alumnos de enseñanza no oficial, pues los oficiales que se encontraban también allí y cuyas papeletas habían sido ya recogidas, se negaron a entrar en el aula, acentuando con esa ostensible negativa su actitud levantista y rebelde demostrada anteriormente con los silbidos al Presidente del Tribunal Sr. Carande. Poco después cesó el tumulto, porque marcharon los alborotadores a la calle, según me informé con posterioridad, a visitar al Magfco. Y Excmo. Sr. Rector. Pero poco antes de terminarse los exámenes de Hacienda Publica y de Contabilidad, volvimos a oír el escándalo en las galerías y, una vez terminados dichos exámenes, a eso de las ocho de la tarde, llegó al aula Don Francisco Sanabria Escudero quien me avisó de que a él habían llegado noticias del propósito de los alumnos de molestar a la salida a don Ramón Carande, el bedel Sr. Moreno, quien le dijo que había abierto la puerta de la calle de San Fernando para que saliésemos por ella. Así lo hicimos el Sr. Carande, el Sr. Romero y el que firma, pero apenas habíamos traspuerto la verja, oímos de nuevo los silbidos y vimos unos quince o veinte estudiantes aproximadamente que nos seguían a unos treinta metros y que ya no se limitaban a silbar, sino que ante el asombro de los transeúntes dirigían los más soeces insultos al Sr. Carande y, aunque lamente el repetirlos aquí, es preciso que quede constancia de ellos para un perfecto conocimiento de los hechos. Los dichos insultos pronunciados a gritos eran los de «Carande, cabron» y «Carande, hijo de puta».= Al llegar al domicilio del Sr. Carande en la calle Álvarez Quintero, arreciaron los insultos y de las palabras pasaron a los hechos, pues primero arrojaron una piedra que cayó a la puerta de la casa del Sr. Carande y cuando avanzábamos hacia la calle de Hernando Colón, los grupos que nos habían seguido huyeron hacia la calle Cobo Noval y parapetados en el desnivel del piso de la calle que allí existe, arreciaron en los insultos y arrojaron otra piedra que dio en el escaparate de la librería de la Vda. de Carlos García. Entre tanto el Sr. Romero había telefonado a la Jefatura Superior de Policía, de donde enviaron al domicilio del Sr. Carande una pareja de la Policía Armada, para protegerle, pero ya, a eso de las nueve y media, habían desaparecido los grupos de estudiantes.= En la mañana de ayer, con ocasión en que el Sr. Carande atravesaba la galería de la Facultad, desde el aula número dos a la Secretaría, volvimos a oír el Sr. Romero y yo, que en aquella nos quedamos, los silbidos y voces de los alumnos, diciéndonos a su regreso el Sr. Carande, que le habían vuelto a insultar como el sábado anterior.= Es cuanto puedo y debo informar a V. I.= Dios guarde a V.I. muchos años.= Sevilla, 5 d ejunio de 1956.= Joaquín Ruiz del Portal, rubricado.= Ilmo. Sr. Don Alfonso de Cossio y Corral, Decano de la Facultad de Drecho.= Ciudad

Todos estos testimonios nos hacen adquirir una noticia acabada de los acontecimientos. Estos por supuesto no finalizan aquí. Darán lugar a un expediente informativo, para el cual se designa como instructor al Decano de la Facultad de Filosofía y Letras asistido como secretario por el Prof. Clavero Arévalo, Catedrático de Derecho administrativo de la propia Facultad de Derecho (y a quien corresponderá sin duda el peso de las actuaciones)¹⁹. Antes en la propia Facultad se adoptan algunas medidas: primero, el Decano de la Facultad de Derecho decide la suspensión de los exámenes pendientes de realización en la presente convocatoria²⁰; segundo, la Junta de Facultad se reúne de inmediato el día 4 de junio y autoriza al Decano a realizar cuantas diligencias estime procedentes²¹. Ese

¹⁹ Hoja 3 del Legajo: «ANUNCIO. [...] Para general conocimiento se hace saber que, ordenada por la Superioridad información sobre los sucesos acaecidos en la Facultad de Derecho de esta Universidad, con motivo de los últimos exámenes de la asignatura «Economía Política», este Rectorado ha tenido a bien delegar en el Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Filosofía y letras las oportunas funciones de informador, quien será asistido por el Catedrático de la Facultad de Derecho Dr. D. Manuel Clavero Arévalo en concepto de Secretario. [...] En Sevilla 12 de junio de 1956. [...] EL RECTOR. [...] José Hernández Díaz (rubrica)».

²⁰ Hoja 57 del Legajo; se trata de medio folio rasgado en el que puede leerse: «ALUMNOS OFICIALES DE SEGUNDO CURSO. SE SUSPENDEN HASTA NUEVA ORDEN LOS EXÁMENES PENDIENTES DE REALIZACIÓN EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. [...] Sevilla a 4 de junio de 1956. [...] EL DECANO. [...] Alfonso de Cossío (rúbrica)».

²¹ Hoja 9 del legajo: «DON MANUEL FRANCISCO CLAVERO AREVAL, CATEDRATICO NUMERARIO Y SECRETARIO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. CERTIFICO: Que en el Libro de Actas de la Junta de Facultad y en el acta de la sesión celebrada el día cuatro de los corrientes, consta el siguiente acuerdo con referencia a los incidentes provocados por los alumnos oficiales de segundo curso de esta Facultad: ————— «La Junta de Facultad por unanimidad acuerda autorizar al Sr. Decano para que realice cuantas diligencias sean precedentes para que a la vista de ellas y con toda justicia se sancione a los autores de los hechos determinados por el Dr. Carande si a ello hubiere lugar. Los señores Elías de Tejada y Ruiz Berdejo manifiestan se haga constar en acta su parecer de que sean tenidos en cuenta los motivos psicológicos que hayan podido motivar o dar lugar a los hechos denunciados». ————— Y para que conste expido la presente que es copia textual del acuerdo que figura en acta, en Sevilla a cinco de junio de mil novecientos cincuenta y seis.»

mismo día el Decano recibe, mediante oficio del Rectorado, encargo de llevar a cabo una información sumaria, tal y como previene el art. 14 del Reglamento de disciplina escolar de 8 de septiembre de 1954²². El Decano hace sus deberes y no sólo redacta el informe, que determina oficialmente los hechos, sino que propone la sanción que a imponer²³:

Excmo. Y Magfco. Sr.:

Tengo el honor de comunicarle, que en cumplimiento de la Orden recibida de su Superioridad de fecha 4 de los corrientes, he procedido a llevar a cabo la información que acerca de los sucesos producidos por alumnos oficiales matriculados en la asignatura de Economía Política de esta Facultad, en la tarde del sábado día 2, y contra la persona del titular de aquella, Excmo. Sr. Don Ramón Carande y Thovar, se me pedía.

El mismo día 4 y previa una comprobación personal acerca del contenido y alcance de los referidos sucesos, y a la vista de una denuncia ante mi autoridad formulada y suscrita por el Catedrático Sr. Carande, de cuya existencia V.M.E. tuvo conocimiento en el momento oportuno, procedí a citar Junta de Facultad, a fin de recaer de la misma oportuno asesoramiento. Dicha Junta tuvo lugar a las 6 de la tarde del referido día 4 y en la misma se adoptó el acuerdo que consta en la certificación que se acompaña a este informe.

Seguidamente procedí a citar a los alumnos a quienes dicha denuncia se contraía y de las personas que acompañaban a don Ramón Carande durante la comisión de los hechos objeto de esta información. Sus declaraciones constan unidas a este informe así como un escrito firmado por el Sr. Subdelegado del Sindicato Espa-

²² Hoja 8 del Legajo, copia del oficio del Rectorado: «Ilmo. Sr. Informado este Rectorado de los incidentes promovidos por los alumnos del 2.º curso de la Facultad de Derecho, el sábado día dos del corriente mes, ruego a V.I. que con la posible urgencia lleve a cabo la información sumaria que prescribe el art. 14, Capítulo único del Título II, del Reglamento de disciplina escolar de 8 de septiembre de 1954, para proceder en justicia.= Lo que comunico a V. I. a los efectos oportunos.= Dios guarde a V.I. muchos años.= Sevilla, 4 de junio de 1956.= EL RECTOR, José Hernández Díaz, rubricado.= Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Derecho».

²³ En la Hoja 5 del Legajo se recoge el oficio (núm. 378) de 6 de junio de 1956 por el que el Decano de la Facultad de Derecho remite al Rector la información incoada (se recoge en la nota 8) y en las hojas 13, 14, 15 y 16 se recoge propiamente su informe.

ñol Universitario del curso 2.º de Derecho, de que dicha asignatura forma parte, en representación de todos los alumnos interesados, ninguno de los cuales, a pesar de haber sido invitados a ello, ha querido evacuar dicho trámite directa y personalmente.

De la lectura de las referidas declaraciones, resulta reconocida expresamente la realidad de los insultos y violencias de que por dichos alumnos se hizo objeto a su Maestro, resultando además de las declaraciones de don Vicente Romero Muñoz y de don Joaquín Ruiz del Portal, testigos presenciales, que dichos insultos se iniciaron a las cinco de la tarde del día 2, continuando luego al terminar los exámenes de Hacienda Pública de alumnos libres, diciéndose entre otros improprios las palabras «Carande cabron» y «Carande hijo de puta», dentro del recinto universitario y en el edificio de la Facultad de Derecho, siguiéndole después los alumnos del curso a lo largo de la calle de San Fernando, con iguales manifestaciones, y reproduciendo las mismas ante el domicilio del Sr. Carande, contra el que arrojaron dos piedras, obligando a requerir a la Fuerza Pública.

En la mañana del día 4 sobre las diez, al pasar del Aula a la Secretaría el Sr. Carande, se reprodujeron los mismos groseros insultos por los alumnos de referencia, como consta en las declaraciones de los expresados señores, y de las del que suscribe este informe que pudo oírlas cuando descendía del segundo piso a la planta baja del edificio.

Según resulta del escrito presentado por el Sr. Subdelegado del S.E.U., tales actos no parecen imputados a ningún alumno en concreto, ni a pesar de las gestiones por mi personalmente realizadas, he podido concretar responsabilidades personales. Como por otra parte, en el escrito de referencia continuamente se atribuyen tales hechos genéricamente al «curso», parece indudable que nos hallamos ante una falta colectiva, según se desprende de los términos expresos del Art. 9.º del Reglamento de Disciplina escolar de 8 de septiembre de 1954.

Ante la trascendencia de los hechos probados, y en orden a la calificación jurídica de los mismos, teniendo en cuenta el carácter colectivo de la falta, estimo que la misma puede reputarse comprendida en el número 1.º del apartado b) del Art. 5.º, del citado Reglamento, y en sus consecuencia propongo como sanción, de acuerdo con lo establecido en el n.º 1 del apartado b) del Art. 6.º, de la aludida disposición legal, se imponga a los responsables la prohibición de examinarse en todas las convocatorias del presente año académico, con la consiguiente pérdida de los derechos de matrícula, de las asignaturas de Derecho Penal, que estaba pendiente de examen, en el momento de producirse los sucesos, así como de la de Economía Política.

Tales sanciones, a mi juicio, deberán recaer sobre la totalidad de los alumnos suspensos o no presentados a la convocatoria del día primero de junio en la asignatura Economía Política, que son nominalmente los que a continuación se expresan: (111 alumnos y 6 del plan de 1943).

En cuanto a las alegaciones y pedimentos contenidos en el escrito aportado por el Sr. Subdelegado del S.E.U., estimo que en nada modifican unos hechos que afectan a la disciplina y decoro de la vida universitaria. No puedo por otra resolver acerca de las peticiones formuladas por dicha representación, ya que, aparte de afectarme personalmente algunas de ellas, exceden de los límites del encargo que me fue conferido y son de competencia exclusiva de V.M.E., según se desprende con toda claridad de los términos del Artº 26 del Reglamento de Disciplina escolar.

Ello no obstante, el superior criterio de V.M.E resolverá lo que estime más justo.

El informe y la correspondiente propuesta de sanción son aprobados por la Junta de Facultad mediante acuerdo de 6 de junio. En ésta aparece oficialmente, además de la oposición previsible del Jefe del Distrito Universitario del SEU, la del Catedrático de Derecho Natural y Filosofía del Derecho, Francisco Elías de Tejada. Como veremos, posteriormente no será ésta la única forma en que expresará su *opinión* sobre la cuestión²⁴.

²⁴ El acuerdo de la Junta de Facultad de 6 de junio que se certifica es el siguiente (hoja 17 del Legajo): «La Junta acuerda aprobar y hacer suyo en todas sus partes el informe que el Ilmo. Sr. Decano eleva al Magfco. Sr. Rector de esta Universidad, proponiendo asimismo dicha autoridad se imponga a la totalidad de los alumnos oficiales suspensos o no presentados a la convocatoria del día primero de junio en la asignatura de Economía Política la prohibición de examinarse en todas las convocatorias del presente año académico con la consiguiente pérdida de los derechos de matrícula de las asignaturas de Derecho penal, que estaba pendiente de examen, en el momento de producirse los sucesos, así como de la de economía política.= Votaron en contra de este acuerdo el Catedrático de Derecho Natural y Filosofía del Derecho Don Francisco Elías de Tejada y Spínola y el Sr. Ruiz Berdejo, Jefe del Distrito universitario del S.E.U. Emitieron sus votos a favor los Sres Catedráticos Dr. Gutiérrez-Alviz, Dr. Pelsmaeker, Dr. Manzano Manzano, Dr. Lojendi Irure, Dr. Serrano Rodríguez, Dr. Royo Martínez, Dr. Aguilar Navarro y Dr. Clavero Arévalo; el Dr. Giménez Fernández por carta se adhiere a la sanción que acordarse la Junta de Facultad».

Finalmente, el Rectorado remitirá, por medio de oficio fechado el 7 de junio de 1956 —desde luego toda una muestra de rapidez y una prueba palpable de que se quería dar una solución ejemplarizante—, la resolución del expediente²⁵:

La carta manuscrita —sin muchos acentos (!)— de Manuel Giménez Fernández, Catedrático de Derecho canónico y ex ministro de agricultura en el gobierno de Gil-Robles durante la República, se conserva en el expediente (hoja 45). Se trata de una holandesa con membrete de la Facultad de Derecho y fecha de 6-VI-1956, dirigida al Decano Ilmo. Sr. Dn. Alfonso de Cossio: «Mi querido amigo y Decano: Por tener hoy mismo a las 11 la reconstitución ante el Juzgado de Carmona del hecho delictivo de que fue víctima nuestro compañero José Antonio Calderón no puedo, sintiéndolo mucho, asistir a la Junta de Facultad convocada para hoy. Pero no quiero dejar de hacer constar mi más enérgica protesta contra los actos realizados contra nuestro querido compañero Dn Ramón Carande y mi mas estrecha solidaridad con éste. [...] Y como creo que la actitud de la Facultad dee ser proporcionada a la ofensa, pido se me tenga por votante de la máxima sanción que se proponga contra los autores de aquella tanto materiales como solidarizados con estos, publicándola acto seguido: y además abrir expediente para aclarar los hechos y las posibles concomitancias con ellos de personas u organismos que hayan alentado y aplaudido tales actos. [...] Rogandote encarecidamente des cuenta de esta a la Junta y (ilegible) en acta en la forma reglamentaria, y con mi afectuoso saludo a los compañeros, quedo como siempre a tus ordenes tuyo buen amigo y compañero q.e.tem. (Firma de Manuel Giménez Fernández)».

Es el momento de las adhesiones (de otras da cuenta B.V. Carande, *Ramón Carande*, cit., pp. 117-118). Francisco Candil Calvo (1887-1959), Catedrático de Derecho mercantil y Rector de la Universidad de Sevilla entre 1934 y 1936, que no asiste regularmente a la Junta de Facultad también escribe al Decano: «Sr. D. Alfonso de Cossío Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad. [...] Querido D. Alfonso: Acabo de enterarme de los lamentables hechos acaecidos en nuestra Facultad de Derecho, en que de manera inusitada ha sido puesta de relieve la desconsideración a un compañero que merecía por su edad, historia y prestigio el respeto de todos.[...] También conozco (y le felicito) la defensa que ha hecho de la postura de la mayoría de los compañeros ante el gamberrismo universitario, incompatible con el derecho que corresponde a toda misión docente. Haga V de esta carta, el uso que crea conveniente pero que conste mi adhesión a su actitud con todos los (ilegible) que puedan derivarse (¿) para mi, sean de la clase que sean. Le abraza su viejo amigo. F. Candil (firma). 6 junio 1956». El Prof. Candil Calvo es un viejo amigo de Carande, desde que coincidieran como estudiantes en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid.

²⁵ La resolución está contenida en las hojas 37, 38 y 39 del Legajo.

Este Rectorado, previa información practicada en la forma exigida por la Ley, con motivo de los incidentes producidos en la Facultad de Derecho por los alumnos Oficiales matriculados en la asignatura de Economía Política, oída la Junta de Profesores de la citada Facultad y la Junta de Gobierno Universitaria, ha acordado con fecha de hoy y dado el carácter colectivo de la falta lo siguiente:

Imponer la sanción de la prohibición de examinarse en todas las convocatorias del presente año académico con la pérdida de los derechos de matrícula de las asignaturas de Derecho Penal y de Economía Política, a los alumnos suspensos o no presentados a la Convocatoria de primero de Junio de mil novecientos cincuenta y seis, en la asignatura de Economía Política, que son los que nominalmente y a continuación se expresan:

[Aparecen los nombres de 99 alumnos; 6 del plan de 1943]

Los alumnos citados podrán solicitar en la forma reglamentaria de este Rectorado copia literal de la resolución.

Sevilla, 7 de junio de 1956

EL RECTOR

(Rúbrica José Hernández Díaz)

Con esta sanción colectiva, aplicada a todos los estudiantes del curso, finaliza el asunto, con independencia de que se recurra la decisión²⁶,

²⁶ En las hojas 40 y 41 del Legajo se alude a dichos recursos, sostenidos ante el Ministerio de Ecuación Nacional. Se trata de la comunicación del Rector al Decano de la Facultad de Derecho dando traslado del escrito recibido del Ministerio:

«Ilmo. Sr.

El Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Universitaria, en escrito de fecha 26 de julio ppdo, recibido el 12 de agosto, comunica a este rectorado lo que sigue:

«Con esta fecha el Excmo. Sr. Ministro de este Departamento me dice lo que sigue:.=» Ilmo. Sr.: Vistos los recursos que formulan los alumnos del segundo curso de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla con ocasión de los incidentes acaecidos en los exámenes de la asignatura de Economía Política Sres. (Lista de todos ellos).= Teniendo en cuenta que todos ellos recurrieron anteriormente representados por el Delegado del S.E.U. en el 2.º curso de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, D. Federico Romero Hernández por lo que los actuales escritos constituyen una reproducción innecesaria del acto impugnatorio verificado anteriormente mediante representación sin que las alegaciones aducidas ahora en nombre propio por cada uno de los interesados varían sustancialmente lo que su

de que surjan algunas disidencias en el curso²⁷ y de las rebajas de la sanción de las que se benefician algunos de los sancionados²⁸. Es una solución académica para un problema de esas características, resuelto en el ámbito universitario, sin mayor trascendencia exter-

representante expuso.= ESTE MINISTERIO ha resuelto que los interesados se atengan a la resolución desestimatoria acordada en 16 de junio.=»

Lo que traslado a V.I. para su conocimiento, el de los interesados y demás efectos.

Dios guarde a V.I. muchos años.

Sevilla 3 de agosto de 1956

EL RECTOR

José Hernández Díaz (rúbrica)

Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de DERECHO».

²⁷ En este sentido, la vicisitud más genuina es la del alumno Trinidad Navarro Rodríguez. Su escrito (en el papel timbrado del Estado usado entonces, con las correspondientes pólizas de 1.50 ptas y con dos sellos de entrada en el Ministerio de Educación de 20 de julio de 1956 y uno de la Sección de Universidades de ese Ministerio al día siguiente), fechado en su localidad natal Ayamonte (Huelva), nos refleja perfectamente la época: «EXCELENTÍSIMO SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN NACIONAL.— [...] Excmo. Sr.: [...] Trinidad Navarro Rodríguez, de 20 años de edad, soltero y vecino de Ayamonte (Huelva) con domicilio en la calle General Mola n.º 8, a V. E. respetuosamente tiene el honor de exponer: [...] Que como estudiante de segundo curso de Derecho en la Facultad de Sevilla, le ha sido comunicada la sanción colectiva que le ha sido impuesta a dicho curso, por los tumultos producidos el pasado día 2 d junio, relacionados con los Catedráticos D. Ramón Carande Tovar y Auxiliar D. Joaquín Ruiz del Portal. [...] Haciendo uso del derecho que le concede el Reglamento, entabla ante V.E. el oportuno recurso, toda vez que el exponente no ha tomado parte en dichos disturbios, pues ni siquiera asistió dicho día al citado centro docente. En la mañana de dicho día 2 de junio pasado, el que suplica estuvo en el despacho del Abogado, Don Bernardo José Botello Gómez, en la calle Marqués de Paradas, 28 de Sevilla con el que tiene relaciones de paisanaje, y amistad con el Profesor señor Ruiz del Portal, para tratar precisamente de los exámenes de de Contabilidad con dicho Profesor, enterándose después de dichos hechos en el Colegio Mayor Hernando Colón, donde está internado. No se escapa al recurrente lo difícil y lo sutil que le resulta la prueba de los hechos negativos, pero tanto el personal dependiente del Señor Botello Gómez, como este mismo señor, pueden aseverar su manifestaciones. [...] En meritos de ello, [...] SUPLICA A V.E. Que teniendo por presentada la presente solicitud y por formulado el recurso correspondiente, lo admita y luego de darle la oportuna tramitación, acuerde dejar sin efecto la san-

na. La diferencia con los sucesos madrileños de febrero de 1956 es absoluta. Las posibles lecturas políticas que pudieran hacerse de estos hechos, por parte de los que luego llamaremos cultivadores del *pasado imposible*, no son más que las propiciadas por el fondo sobre el que estos transcurren, necesariamente politizado, y por la dimensión pública de su personaje principal, Ramón Carande, y de uno de los secundarios que intervienen dándole a éste la réplica, Francisco Elías de Tejada.

3. *Los personajes*

3.1. El protagonista: Carande (el superviviente)

El protagonista principal de este drama es Ramón Carande, además el Ramón Carande de 1956. Se trata de un Carande en retirada

ción que le ha sido impuesta, por las razones que se dicen en el cuerpo de este escrito. [...] Es gracia que no duda alcanzar del recto proceder de V.E., cuya vida guarde Dios muchos años. [...] Ayamonte, para Madrid, a 11 de julio de 1956». El escrito tiene una nota del Ministerio de Ecuación Nacional Sección de Universidades en la que se especifica «Pase la presente instancia al Rectorado de la Universidad de Sevilla, para que se comunique al interesado que deberá atenerse a lo dispuesto en la orden de 26 de julio último. [...] Madrid, 6 de agosto de 1956 [...] EL DIRECTOR GENERAL» Hay un sello de salida de dicha sección el 8 de agosto y otro de entrada en la Universidad de Sevilla, de la Secretaría General, el 10 de agosto de 1956. Finalmente, hay otro sello del Rectorado al Decano de la Facultad de Derecho el 11 de agosto para que se lo comunique al interesado. La hoja 70 contiene un oficio el 4 de septiembre de 1956 al Sr. Alcalde de Ayamonte para que se entregue un oficio a don Trinidad Navarro Rodríguez. Dicho oficio (hoja 71) —redactado con gran dejadez y confusión— dice lo siguiente: «El Mgfco. Y Excmo. Sr. Rector de sta Universidad remite a este Decanto instancia suscrita por V. y dirigida al Ecmo. Sr. Ministro de Ecuación Nacional con el siguiente Decreto: «Ministeriod e Educaión Nacional= Sección de Universidades= Pase la presente instancia al Rectorado de la Universidad de Sevilla, para que se comunique al interesado que deberá atenerse a lo dispuesto en la Orden de 26 de julio último».

²⁸ La sanción impuesta irá rebajándose, primero de forma individualizada, es decir, para algunos alumnos que logran demostrar que aun formando parte del curso no se encontraban ese día en la Facultad, y luego

y no nos referimos sólo al hecho de que en 1957, un año después, vaya tener lugar su jubilación como Catedrático de la Universidad de Sevilla. En ese momento, lleva retirándose de algunas cosas hace tiempo e incluso puede decirse que la realidad, sus propias cir-

de forma colectiva, es decir, para la totalidad de los sancionados. La moderación de la sanción de forma individualizada es la que conocen algunos alumnos a los que se les permite concurrir a la convocatoria de septiembre (véase, en este sentido, la hoja 59 del Legajo, un escrito del Rector al Decano de la Facultad de Derecho donde le da cuenta de la decisión adoptada sobre este particular en la Junta de Gobierno de la Universidad, una Junta a la que asiste el Director General de Enseñanza Universitaria: «Dada cuenta en Junta de Gobierno celebrada bajo la Presidencia del Ilmo. Sr. Director Gral. De Enseñanza Universitaria, el día 10 de los corrientes, de las instancias presentadas por los alumnos sancionados de la Facultad de Derecho D. José Manuel Derqui Copete y D. Manuel de Jesús Mallofret Lancha, solicitando se les levanten la sanción, por no haber intervenido en los sucesos como justifican documentalmente, y que han sido favorablemente informadas por el Sr. Decano de la Facultad se acordó proponer a la Superioridad el levantamiento de sus sanciones lo que procede en evitación de perjuicios a los interesados, sean examinados en la presente convocatoria de septiembre por tener conocimiento este Rectorado de haber sido aprobada por la Superioridad la citada propuesta. [...] Lo que participo a V.I. para su conocimiento y efectos consiguientes. [...] Dios guarde a V.I. muchos años. [...] Sevilla 27 de septiembre de 1956 [...] EL RECTOR [...] José Hernández Díaz (rúbrica)». Por lo que se refiere a la rebaja colectiva, esta se encuentra en un escrito (hoja 61 del Legajo) de octubre del Rector comunicándole al Decano lo acordado por el Director General de Enseñanza Universitaria: «Con esta fecha el Excmo. Sr. Ministro de este Departamento me dice lo siguiente: — Ilmo. Sr.: — Vista la comunicación del Rectorado de la Universidad de Sevilla en la que se traslada el acuerdo de la Junta de Gobierno de aquella Universidad en relación con lo interesado por la Jefatura Nacional del S.E.U. acerca de las sanciones que por motivo de falta colectiva cometida se impusieron a los alumnos del 2.º curso de la Facultad de Derecho con ocasión de los incidentes acaecidos en los exámenes de las asignaturas de Economía Política y Derecho penal de la convocatoria de junio último; ESTE MINISTERIO de conformidad con las propuestas elevadas ha resuelto: —PRIMERO.—Levantar las sanciones impuestas a los alumnos de esta Facultad de Derecho Dn. José Manuel Derqui Copete y Dn. Manuel de Jesús Mallofret Lancha.— SEGUNDO.— Que las dos asignaturas de Economía Política y Derecho Penal, que han quedado pendientes a los alumnos sancionados, no les sean computadas a efecto de impedir que se matriculen como estudiantes oficiales en el curso

cunstancias (y algunos individuos), lo han retirado igualmente de otras. A pesar de todo, es difícil, a poco que se conozca la biografía del personaje imaginárselo derrotado o decaído. También en junio de 1956 hay que pensarlo deseoso de iniciar su habitual veraneo en Capela, la finca familiar en Badajoz, en Extremadura, donde precisamente en 1986, el 1 de septiembre, moriría a los noventa y nueve años de edad.

Ramón Carande Thovar, que ha pasado a la posteridad (de la historiografía sobre todo) como el autor de *Carlos V y sus banqueros* y

siguiente, durante el próximo año acadñemico 1956-1957 de suerte que a pesar de tenerlas pendientes nos e cuenten dentro de las dos que impiden matricularse como alumno oficial.— TERCERO.— Autorizar al Rectorado de la Universidad de Sevilla para que dentro de la primera decena de noviembre, pueda disponer una convocatoria extraordinaria de examen para los alumnos a que se refiere el apartado anterior; que estuvieron matriculados oficiales en el presente curso 1955-1956 en aquellas dos asignaturas que quedaron pendientes de examen en e mismo como resultado de la sanción lo que traslado a V.I. para su conocimiento, el de los interesados y demás efectos, quedando autorizado ese Decanato, para que dentro de la primera decena de noviembre pueda disponer la convocatoria extraordinaria de exámenes a que hace referencia el número 3.º de la expresada Orden Ministerial. [...] Dios guarde a V.I. muchos años. [...] Sevilla 19 de octubre de 1956 [...] EL RECTOR [...] José Hernández Díaz.».

La consecuencia de lo anterior es el escrito, en la hoja 63 del Legajo, del Rector al Decano: «Ilmo. Sr. [...] Para el debido cumplimiento de la O.M. de 9 de los corrientes, este Rectorado oída la Junta de Gobierno ha tenido a bien disponer, que los alumnos a que hace referencia la misma, que el presente curso académico deseen continuar sus estudios por enseñanza libre, podrán matricularse como tales, en las asignaturas de Economía Política y Derecho penal en el plazo que ese Decanato señale, al objeto de sufrir examen de estas asignaturas en la convocatoria extraordinaria de Noviembre próximo, en llamamiento único y sin que esta convocatoria les prive de nueva matrícula para las de junio y septiembre próximo. [...] Dios Guarde a V.I. muchos años. [...] Sevilla 22 de octubre de 1956 [...] EL RECTOR [...] José Hernández Díaz [...] Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Derecho.— [...]». Para la realización de estos exámenes extraordinarios se designa en la Facultad un tribunal a principios de noviembre, designación en la que aparece de nuevo el corporativismo (hojas 64, 65 y 66 del Legajo), ya que forman parte del mismo Francisco de Pelsmaecker e Iváñez (Catedrático de Derecho romano), Manuel Serrano Rodríguez (Catedrático de Derecho penal) y el propio Ramón Carande Thovar (!).

que gozó en algunos momentos de su vida de una gran notoriedad en los ambientes intelectuales (y hasta de popularidad en Sevilla, la ciudad en la que vivió más largamente), tuvo una extensa vida en todos los sentidos, en años y en experiencias. Sobre ello, sobre su vida escribió bastante, directa e indirectamente, es decir, sobre sí mismo y especialmente sobre sí mismo y sus relaciones con los demás. Sin llegar a tomar forma de memorias o de autobiografía Carande ha dejado tras de sí muchas páginas que constituirían una curiosa —en todos los sentidos— obra memorialista. Una obra dispersa y, por tanto, poco cómoda para el acceso, pero preñada de episodios, anécdotas y percepciones que nos descubren con facilidad la dimensión del personaje. A ello debe unirse, como perfecto complemento de esta obra memorialista propia, que muchos dirán involuntaria, los trabajos biográficos que le dedicó, estos sí muy voluntarios, su hijo Bernardo Víctor Carande de la Torre, fiel guardador de su memoria en el sentido más literal del término²⁹. Entre nuestro protagonista y su hijo pueden situarse perfectamente las cosas sobre lo que a la vida del primero se refiere³⁰.

²⁹ El propio Carande en un librito recopilatorio, donde se adivina la mano de su hijo *Personas, libros y lugares*, Ámbito ediciones, Valladolid, 1982, lo reconoce casi en la portada de este «Este libro no se hubiera publicado —a mi edad— si Bernardo Víctor no guardara, bien ordenados, los papeles de su padre y todo lo que pasa por sus manos». Reconocido escritor el mismo, con importante obra propia, hizo de la conservación del legado de su padre un auténtico propósito de vida, antes y después de la muerte de éste.

³⁰ Sin unidad, como decimos, la obra memorialista de Carande es amplia. Una característica importante, como se ha apuntado, es que una buena parte de ella está dedicada a quienes conoció y trató. Por medio de estos es posible conocer mejor al personaje. Formarían parte de este sector de su obra —dejando fuera sus numerosos textos menores, dispersos, aunque muchos de ellos objeto de recopilaciones posteriores—: *Una escolaridad con vacaciones y cuatro maestros*, Maribel Artes Gráficas, Madrid, 1977; *Personas, libros y lugares*, Ámbito ediciones, Valladolid, 1982; *Galería de raros atribuidos a Regino Escaro del Nogal*, Alianza, Madrid, 1982; y los póstumos *Recuerdos de mi infancia*, Espasa Calpe, Madrid, 1987; *Galería de amigos*, Alianza, Madrid, 1989, y *Libro de viajes*, Diputación Provincial de Badajoz, Badajoz, 1993. En cuanto a las aportaciones de su hijo Bernardo Víctor, además de algunos textos menores —y de su ingente labor de recopilador—, debe considerarse fundamental el ya citado *Ramón*

Nacido en 1887, en Palencia —una ejercida condición de castellano le acompañará siempre— y pronto huérfano de madre, tendrá una educación en la etapa del bachillerato buscadamente no religiosa en España y religiosa en un internado de París, Sainte Marie, estudio en el extranjero que resulta excepcional para la época (la familia de Carande aunque acomodada no pertenecía a la aristocracia). Esta pronta salida al extranjero de Carande será la inauguración en su vida de un gusto por el viaje que nunca abandonará³¹. Se licencia en Derecho en la Universidad Central en 1908 y obtiene el grado de Doctor, en Derecho igualmente, en 1910 (su tesis: *Notas para un estudio sobre la naturaleza económica del Trabajo*). Pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios —el tributo a lo que representó ésta para la España intelectual y reformista y su agradecimiento a la misma, especialmente en la persona de José Castillejo, serán constantemente reiterados por parte de Carande³²—, tiene lugar su primera estancia en Alemania entre 1911 y 1914. Este periodo, en las Universidades de Munich y Berlín, será decisivo en su evolución intelectual. La influencia que en su formación y en su

Carande. Biografía ilustrada, Fundación El Monte, Sevilla, 2003 (en el que se nota su acceso al archivo personal de su padre, de cuya formación y conservación fue principal artífice), así como *Memorias, 1932-2002*, Los libros del oeste, Badajoz, 2005.

³¹ De esta afición viajera de Carande, por motivos profesionales y por gusto personal, hay numerosas referencias y constancias. Entre las más curiosas está B. V. Carande, *La libreta negra de retorno a Europa (Economía y viajes en la vida de Ramón Carande)*, Hacienda Pública Española, n.º 108/109, 1987, pp. 7-13. El «Índice de lugares» que recoge también su hijo en *Ramón Carande*, cit., pp. 339-348, nos da buena cuenta de dichos viajes.

³² Así, por ejemplo, su discurso en la recepción del Doctorado Honoris Causa de la Universidad Complutense, recogido en *Una escolaridad*, cit., 1977, p. 25, lo concluye con una referencia agradecida a Castillejo: «Voy a terminar (puesto que el año de la fecha en que estoy hablando me lo sugiere), con la mención del nombre de José Castillejo Duarte, catedrático en Sevilla, Valladolid y Madrid, sucesivamente. Castillejo, en la secretaría general de la junta de ampliación de estudios, dedicó su vida a la ecuación nacional, desde 1907 a 1936, con sorprendente inspiración envidiable destreza e incansable perseverancia. Había nacido en 1877 y, en este año hubiera sido su centenario. Murió en Londres, el 30 de mayo de 1945». Más adelante se ocupa extensamente de Castillejo en el mismo texto: *Una escolaridad*, cit., pp. 68-90, y en *Galería de raros*, cit., pp. 71-97.

orientación recibirá de Brentano, Schmoller, Sombart o von Bellow será muy determinante, con independencia —esta es una palabra muy importante en Carande— de que a lo largo de su vida no los siga metodológicamente (alguno pensará que Carande tuvo tiempo de cambiar). Aconsejado por aquel a quien considerará siempre su maestro, el hacendista Flores de Lemus, oposita y obtiene en 1916 la Cátedra de Economía Política y Hacienda Pública de la Universidad de Murcia. En 1918 se traslada a Sevilla para ocupar la misma Cátedra. Allí permanecerá hasta su jubilación (1957), si bien durante un periodo largo (1932-1945), se encontrará excedente (algo voluntario: será Consejero de Estado y luego, una vez dimitido, Consejero del Banco Urquijo), más tarde depurado (por poco tiempo y evidentemente contra su voluntad) y luego extrañamente rehabilitado pero sin tomar posesión de nuevo de su cátedra (por voluntad directa del Ministro de Educación Nacional)³³. El primer tomo de la obra de su vida *Carlos V y sus banqueros* aparece justamente en este periodo, en 1943, y anuncia ya a un Carande, trabajador infatigable e independiente de la disciplina universitaria (al tiempo que confirma su deriva desde la Economía hacia el cultivo propiamente de la Historia). Ello explica que su fecundidad vaya más allá de su jubilación y que la publicación de ésta y otras obras prosiguiese en sus muchos años de vida tras ésta³⁴. En su peripecia universitaria sevi-

³³ El mejor resumen de estos años, de este largo periodo, puede verse en R. Carande Thovar, *Una escolaridad*, cit., p. 15. Un punto de ironía se descubre en su relato de la resolución de su reingreso a la cátedra, paralizada arbitrariamente por el Ministro de Educación Nacional, Ibáñez Martín; un episodio propio de un modo de proceder muy español —la del conocimiento personal o recomendación— que todavía permanece, desgraciadamente (deben ser cosas de la moral privada): «A partir de esta fecha [una vez publicado el primer tomo de *Carlos V y sus banqueros*] se me hacían interminables las vacaciones y la espera. Realicé gestiones, baldías, para volver a la cátedra hasta que, asistiéndome de nuevo la fortuna, un amigo mío, médico de cabecera de otro ministro de educación nacional, me presentó a su cliente, que consiguió (nunca supe con qué genero de argumentos), en junio de 1945, dejar resuelto el concurso anunciado en octubre de 1939, es decir, casi seis años después».

³⁴ Se trata sin duda de la gran obra de Carande, a la que debe en gran medida su prestigio. *Carlos V y sus banqueros* comprenderá tres tomos, publicados respectivamente en 1943, 1949 y 1968 (este último cuando había cumplido los ochenta y un años). Sobre la trascendencia historio-

llana, entre marzo de 1930 y marzo de 1931 será Rector de la Universidad de Sevilla, el último de Monarquía inmediatamente anterior a la proclamación de la II República³⁵.

Este último dato es de interés para el Carande que buscamos, el de 1956. No se trata por tanto ni en Sevilla ni en su Universidad de un desconocido u oscuro profesor³⁶. Es desde alguien sospechoso.

gráfica de este trabajo, de forma rápida y resumida puede verse la laudatio del Prof. Fernández Álvarez en *Doctorado Honoris Causa del Excmo. Sr. D. Ramón Carande y Thovar*, Ediciones Universidad de Salamanca, 1984, pp. 19-27, y R. Yñiguez Ovando, *Ramón Carande: un siglo de vida*, Fundación Universitaria Española, Madrid, 2002, pp. 103-115. Para una completa bibliografía de Carande, véase R. Yñiguez Ovando, *Ramón Carande*, cit., pp. 165-172.

³⁵ Para ilustrar su paso por el Rectorado sevillano, véase R Carande, *Personas*, cit., pp. 27-45, dedicadas a «Mis relaciones con don Elías Tormo», político maurista y ministro de educación en el Gobierno Berenguer directamente responsable de su nombramiento como Rector. También se extiende sobre ese periodo en *Una escolaridad*, cit., pp. 21-23. Sobre su desempeño como Rector de la monarquía en la Universidad de Sevilla, véase Yñiguez Ovando, *Ramón Carande*, cit., pp. 69-72.

³⁶ De su larga estancia en Sevilla y en concreto en su Universidad (1918-1957), véase su intervención, bastante sentimental, en *Homenaje en la Universidad de Sevilla al Prof. Don Ramón Carande con intervención del Ministro de Hacienda Prof. Dr. Jaime García Añoveros*, Sevilla-Madrid, 1979, pp. 15-24. Muy interesantes, para entender la etapa en la que suceden los hechos aquí relatados, es la impresión, los sentimientos que la ciudad le genera tras su reincorporación a la Universidad en 1948: véase *Discurso leído en la Solemne Apertura del curso de 1948 a 1949 por el Excmo. Sr. Dr. D. Ramón Carande Thovar, Catedrático de la Facultad de Derecho, Académico electo de la Real Academia de la Historia*, Sevilla, 1948, p. V: «Me corresponde en la solemne fiesta de hoy el honor de dirigiros la palabra, a los treinta años justos de mi ingreso en esta Universidad el día de San Miguel de 1918, a medio camino, casi exacto, de mi edad actual. Ausencias justificadas y peripecias fortuitas han retrasado mi comparecencia y al subir —ya experimentado— a este púlpito, en este templo, me asaltan sentimientos contradictorios. No los reseñaré, mas en ningún caso debo omitir la declaración de mi reconocimiento a la Universidad donde he aprendido más que enseñado, y a Sevilla que a distancia corta, en superficie llana y en su ambiente fino de sabiduría honda me ha ofrecido siempre para trabajar a gusto la libertad que depara el desdén de los indiferentes, el halago que brota de la estimación de los afines, la crítica ejercida por el gracejo de muchos, y el sosiego que alienta la cortesía de todos».

Depurado tras la Guerra Civil —durante la cual permanece en Madrid³⁷—, esta condición lo sitúa automáticamente en dicha categoría sospechosa, por mucho que sea paradójicamente designado Consejero Nacional de FET y de las JONS-El escrito del subdelegado del S.E.U., con sus apreciaciones sobre determinadas actitudes y comportamientos de Carande, y la actuación que tendrá en el episodio de Elías de Tejada, corroboran esta impresión. Todo ello conformaría una imagen de Carande que lo aproxima al prototipo de intelectual *superviviente*, que enfrenta diariamente una realidad que no le gusta. El profesor de 1956 es, por otra parte, alguien desilusionado y desengañado de la enseñanza universitaria y de lo que ésta representa (no por supuesto del otro trabajo intelectual del profesor universitario: la investigación, a la que se dedicará con ahínco). Es el mismo Carande el que años después, en 1977, con motivo de la concesión del Doctorado Honoris Causa en la Universidad Complutense, describe con sinceridad y crudeza su desánimo universitario en aquellos momentos, especialmente con relación a los alumnos: «El número de alumnos fue creciendo cada año, a partir de 1950, de tal manera que resultaba imposible diferenciar la capacidad y la preparación de cada uno, y ajustar la enseñanza a su medida. Me costaba esfuerzos, inválidos, acomodarme al nuevo estado de cosas. Concurrían circunstancias que malograban mis intentos. Me asaltaban sensaciones de humillación y fracaso. Tengo que atribuir la mengua de mi rendimiento, en la cátedra, al ambiente que me rodeaba y, también, a que, durante el último periodo de mi profesorado, dedicaba menor tiempo a la preparación de las lecciones, cuando, simultáneamente avanzaba sin tropiezos la redacción de páginas de «Carlos V y sus banqueros». Era ésta, para mi, tarea predilecta; dependí exclusivamente de mis fuerzas, y no ocurría lo mismo con las obligaciones de la cátedra, que deseaba transferir a quien la asumiera con desembarazo, y con mayor vocación, y siendo así no engañé a nadie al declararme jubilado jubiloso, y con gozo conseguí, en los diez años inmediatos posteriores, terminar la obra, en 1957»³⁸. Toda una declaración, que nos indica por dónde

³⁷ Sobre este periodo, véase R. Yñiguez Ovando, *Ramón Carande*, cit., pp. 79-81.

³⁸ R. Carande, *Una escolaridad*, cit., p. 23. Hay que decir —y también en esto tenemos que fiarnos de Carande: si nos creemos una cosa también hay que creerse la otra— que nunca fue así su disposición hacia la enseñanza

va su disposición y su ánimo, algo que incidirá directamente sobre el que hemos denominado desencuentro de Carande con los alumnos. No resulta muy desventurado pensar que en 1956 los alumnos eran un auténtico *fastidio* para D. Ramón.

Seguramente, tampoco contribuye a mejorar su fama local el hecho de que su ubicación política resulte complicada. Desde este punto de vista, estamos claramente ante un superviviente. Carande, en efecto, sobrevive a la historia de España y no lo hace precisamente desde una cómoda segunda línea. Baste recordar, como se ha señalado, los puestos de relevancia política que ocupa en la Monarquía, la República e incluso en el régimen franquista. Serán breves compromisos políticos, posibles desde su independencia y que no hacen impertinente su inclusión en un liberalismo —entendido a la española—. Este Carande liberal y superviviente debía romper los esquemas (y algo más) de los más reaccionarios. Entre estos, sin duda, se encontraba —muy cómodo desde luego— un personaje secundario de estos hechos: el Catedrático de Derecho Natural y Filosofía del Derecho Francisco Elías de Tejada y Spínola.

3.2. Un secundario: Elías de Tejada (el reaccionario)

Transcurridos casi treinta años de su fallecimiento, existe la suficiente perspectiva para que el sólo nombre de Francisco Elías de

universitaria. En el mismo discurso (*Una escolaridad*, cit., pp. 16-17) reconoce en su periodo inicial en la Universidad algo muy distinto de lo que acabamos de leer: «Aún con mayor intensidad me atraía, desde lejos, la presencia diaria en las aulas, durante una hora, de tres, cuatro o cinco docenas de muchachos; nunca serían más, los matriculados entonces (1918-1931) cada año, en la facultad de derecho. Había disfrutado esta compañía continuamente, sin privarme de asistir ni un día a clase, porque en clase apreciaba el privilegio de nuestra profesión: vernos rodeados de quienes, mientras corren los años, conservan la misma edad, y a nosotros nos toca ser pilotos y testigos de sus afanes. Consciente de limitaciones propias y ajenas, creo haber puesto, con amor, cuanto pude para que, bien encaminados, realizáramos las averiguaciones propuestas, y las que su experiencia les despertara, con espíritu crítico, procurando librarles de la rutina» (también pp. 20-21). Sobre las enseñanzas impartidas en este periodo, las asignaturas Economía Política y Hacienda Pública del plan de estudios de la Licenciatura en Derecho, véase R. Yñiguez Ovando, *Ramón Carande*, cit., pp. 88-89.

Tejada y Spínola (1917-1978) sirva para explicar y caracterizar buena parte de la Filosofía del Derecho española durante el franquismo. Catedrático en Murcia (1941-1942), Salamanca (1942-1951), Sevilla (1951-1977) y Madrid (1977-1978), su hegemonía en esta área académica llegará a ser casi absoluta. Una obra y una personalidad un tanto alocadas no impidieron hacer de él el máximo mandarín de la disciplina³⁹. Evidentemente, varias son las razones que explicarían dicho dominio. Entre ellas, además obviamente de la perfecta y conveniente (en ambas direcciones) adecuación de Elías de Tejada y su tradicionalismo al régimen, se encontraría su fuerte personalidad. Elías fue lo que se dice todo un carácter. Su principal biógrafo Miguel Ayuso Torres, desde la admiración hagiográfica que le profesa, nos ofrece una letanía de características de su personalidad, sacada de varias evocaciones de su figura, extrayendo «la parte común que todas las semblanzas destacan». En con-

³⁹ Los testimonios sobre esta condición de Elías de Tejada son numerosos. Basten dos, muy cualificados, de quienes lo sufrieron en la propia carrera universitaria. E. Díaz, *Un itinerario intelectual. De filosofía jurídica y política*, Biblioteca Nueva, Madrid, 2003, pp. 34-35: «Tales oposiciones de una forma u otra siempre las acababa controlando, con las todopoderosas ayudas de arriba y la imprescindible colaboración en los tribunales de otros complacientes o concordantes colegas, el inquisidor católico tradicionalista y catedrático entonces de la Universidad de Sevilla, profesor Francisco Elías de Tejada y Spínola. Otros compañeros míos de entonces —compañeros míos de profesión y, aunque no sin diferencias internas, también de nefanda ideología— como Luis García San Miguel o Juan Ramón Capella, más realistas o experimentados, temporalmente se retiraron antes a sus cuarteles de invierno». Precisamente uno de estos últimos nos ofrece también su testimonio: véase éste en P. Barbadillo Griñán, *Entrevista con Luis García San Miguel*, en V. Zapatero (Ed.), *Horizonte de la Filosofía del Derecho. Homenaje a Luis García San Miguel*, Tomo 2, Servicio de publicaciones. Universidad de Alcalá de Henares, 2002, p. 784: «Claro la asignatura estaba controlada por los tradicionalistas y, si querías ser catedrático, tenías que andar con prudencia. Quien realmente controlaba la asignatura era Elías de Tejada, un hombre inteligente pero muy arbitrario, de clara orientación tradicionalista, muy reaccionario. Era muy influyente, tanto intelectual como académicamente, porque se las arreglaba para estar en casi todos los tribunales de la asignatura». Para explicar los antecedentes de esta situación, véase el magnífico trabajo de B. Rivaya, *Filosofía del Derecho y primer franquismo (1937-1945)*, CEPC, Madrid, 1998.

creto, Elías de Tejada era: «descuidado, bohemio, torrencial, extrovertido, abierto, vehemente, generoso, inexorable, radical, noble, agresivo, despreocupado, alegre, religioso, creyente, austero, enciclopédico, arriscado, cáustico, atrabiliario, original, fogoso, ingenuo, portentoso, viajero, polígloto, asombroso, inolvidable, narrador, magnánimo, dispuesto, apasionado, belicoso, acerado, tumultuoso, dionisiaco, cordial, vital, español, terco, infatigable, trabajador, intransigente, talentoso, bondadoso por encima de cóleras y de un cierto humor grueso, limpio de ánimo, estudioso, curioso, sensible, agudo, firme, indoblegable, patriota...»⁴⁰. Como decimos,

⁴⁰ M. Ayuso Torres, *La filosofía jurídica y política de Francisco Elías de Tejada*, Fundación Francisco Elías de Tejada y Erasmo Percopo, Madrid, 1994, p. 37. Esta retahíla se elabora a partir, como decimos, de evocaciones bastante favorables que sobre él realizan Fernández de la Mora, Cuenca Toribio, Dolç, Fernández-Escalante, Lorca Navarrete o Tierno Galván. Quizá la opinión de este último, por su condición de antagonista político, cobre algún valor (de objetividad): «Su incuestionable talento, capacidad de trabajo y una reserva de bondad que se sobreponían a sus cóleras y disgustos ocasionales. Eran aquellos, tiempos en que las personas se probaban y se podía saber quien de verdad respondía con generosidad y quien no. En los trances difíciles he podido ver a Elías de Tejada reaccionar con altura de miras y con limpieza de ánimo, aunque, repito, es cierto que, a veces, sus agresiones pueriles, que tenían más trascendencia de la que él calculaba, pecaban de impertinentes. Esto le ocasionó algún disgusto, a veces grave, pero le sirvió para corregirse, y en los últimos años, antes de su muerte, ocurrida no hace mucho, su actitud había cambiado (E. Tierno Galván, *Cabos sueltos*, Bruguera, Barcelona 1982, pp. 194-195, citado por M. Ayuso Torres, *La filosofía jurídica*, cit., pp. 34-35). Poco después, J. A. Sardina Páramo, *Mis recuerdos personales de Francisco Elías de Tejada Spínola*, en *Francisco Elías de Tejada y Spínola: figura y pensamiento*, Facultad de Derecho. Servicio de publicaciones, Madrid, 1995, p. 49, nos ofrece un retrato psico-físico muy similar: «Su personalidad era arrolladora, aunque suene a tópico. Era corpulento, sin que se pudiese llamar obeso, y tal corpulencia le hacía parecer menos alto de lo que realmente era. Sus ojos ordinariamente reflejaban una sombra de tristeza, en particular cuando no se le observaba. Su voz, de bajo profundo, carecía de cualquier tipo de imposición artificial (normalmente todos los que hemos dado clases la tenemos) por lo que era un vehículo tremendamente apto para transmitir sentimientos. Cuando se excitaba (y no hacía falta mucho para ello), subía su voz a la cavidad superior de la boca, donde se encontraba con su defecto físico, el labio superior partido por una pedrada en sus tiempos de juven-

todo un carácter. Precisamente como va a mostrarse, en toda su plenitud, en 1956 en el «incidente Carande».

El Elías de Tejada de 1956 es un Elías local, joven catedrático y en plena forma por lo que se refiere a su integrismo político-moral. Va a manifestarse en todo su esplendor en el «incidente Carande», tanto en la Junta de Facultad como, sobre todo, en las notas que dirige al Decano, notas que nos descubren al Elías de Tejada de esos días y de siempre.

Su *ataque*, un auténtico *bombardeo* de escritos, se inicia el 7 de junio. Recordemos que en la Junta de Facultad del día anterior no se ha integrado al lado de sus colegas catedráticos en la defensa incondicional de Carande. Este escrito⁴¹, con Registro n.º 465, de 8 de junio, es el primero, por tanto, de su travesía en el desierto, de su manifiesta disidencia respecto de sus compañeros. Es en principio, si no se sitúa en el contexto, de estos hechos, absolutamente inofensivo:

Ilmo. Sr.:

Tengo el honor de solicitar respetuosamente de V.I. se digne dar las ordenes oportunas para que por la Secretaria de esta Facultad, le sea expedida certificación oficial conteniendo el texto íntegro del acta de la sesión de Junta de Facultad, que bajo la ilustre presidencia de V.I. tuvo lugar el día 4 de los corrientes.

Dios guarde a V.I. muchos años.

Sevilla, 7 de junio de 1956

EL CATEDRÁTICO

Francisco Elías de Tejada (rúbrica)

Sin solución de continuidad, y teniendo claro el proceso que quiere iniciar y cual es su objetivo, ese mismo día dirige otro escrito⁴² —con Registro n.º 466, de 8 de junio— al Decano:

Ilmo. Sr.:

Tengo el honor de solicitar respetuosamente de V.I., Junta de Facultad para tratar los siguientes puntos:

tud, con lo que su voz tenía un extraño efecto, complementado con la increíble velocidad con la que entonces hablaba».

⁴¹ Hoja 46 del Legajo.

⁴² Hoja 47 del Legajo.

1.º Que el Catedrático que suscribe pueda comunicar oficialmente a la Junta de Facultad, que con fecha 6 de los corrientes, elevó escrito al Excmo. y Magfco. Sr. Rector de esta Universidad, solicitando que al Catedrático don Ramón Carande y Thovar, le sea aplicada la legislación vigente, ya aplicada con anterioridad al abajo firmante.

2.º puntualizar el mentís tajante dado por V.I. al calificar de «calumniosas» en la Junta del día 4, determinadas afirmaciones del Sr. jefe del S.E.U., afirmaciones tajantemente respaldadas por los alumnos del 2.º curso de esta Facultad en su relación de hechos del 5 de los corrientes.

Conociendo la caballerosa delicadeza de V.I., le suplico humildemente asimismo acceda a no presidir la Junta de Facultad mientras se debata el 2.º extremo dicho.

Dios guarde a V.I. muchos años.

Sevilla, 7 de junio de 1956

EL CATEDRÁTICO

Francisco Elías de Tejada Spínola (rúbrica)

El Decano contesta al día siguiente —Comunicación número 381⁴³—:

En relación con su oficio de fecha 7 de junio, por el que se interesaba la convocatoria de la Junta de Facultad, a fin de informar a la misma de denuncia por V.S. presentada contra la persona del Excmo. Sr. D. Ramón Carande y Thovar, Catedrático de esta Facultad ante el Excmo. Sr. Rector Magfco. De la Universidad de Sevilla, y debatir determinadas manifestaciones realizadas en la Junta de Facultad del día 4 de los corrientes, lamento tener que comunicarle que excede de la competencia de la Junta de Facultad y del Decanato, conocer en los referidos hechos, ya que una vez terminada la información ordenada por la Superioridad, unicamente al Excmo. Sr. Rector Magfco., deberá V.S., dirigirse con cuantas manifestaciones, aclaraciones y denuncias que le dicte su celo, por lo que no me es posible acceder a la referida solicitud.

En cuanto a la solicitud de una certificación oficial del contenido íntegro del acta de la Sesión de la Junta de Facultad del día 4 de los corrientes, formulada por V.S. en escrito de la misma

⁴³ Hoja 48 del Legajo.

fecha, do las ordenes oportunas a fin de que la misma sea expedida y entregada por el Sr. Secretario de esta Facultad.

Dios guarde a V.S. muchos años.

Sevilla, 9 de junio de 1956

EL DECANO,

Sr. Don Francisco Elías de Tejada y Spínola,
Catedrático de esta Facultad

La impaciente respuesta⁴⁴ de Elías de Tejada, el mismo día, encarna muchos de los adjetivos con los que, como hemos visto, se describe su personalidad. Léase y escójanse los que mejor cuadren:

Ilmo. Sr.,

Tengo el honor de acusar recibo de sus denegación de convocatoria de Junta de Facultad para discutir y exponer los hechos por mí reseñados en mi anterior oficio del 7 de los corrientes; rogándole me permita insistir en la súplica que me deniega en su escrito superior de fecha de hoy, toda vez que su reconocida delicadeza estimará la circunstancia de que se tocan actos y actitudes de V.I., independientes de los procedimientos en tramitación, aunque producidos con ocasión de aquellos.

Tengo igualmente el altísimo honor de recoger sus superiores alusiones a mi celo de catedrático y de español, enderezado a que la ley se aplique no solamente a los alumnos y a cooperar con las autoridades académicas en la medida de mis fuerzas para evitar que desde una cátedra de nuestra Facultad se realicen actos en los que se exalta a los enemigos de mi patria, Con veintitrés muertos asesinados por la horda roja, tres de ellos quemados vivos, y voluntario durante la Cruzada aun estando fuera de obligaciones militares, tengo por honor altísimo merecer las alusiones a mi celo por V.I., aludidas con su característica benevolencia. Interesándome hacer constar que mi petición para Junta de Facultad se ve acrecida por el anhelo de agradecer públicamente estas benévolas alusiones de V.I.

Dios guarde a V.I. muchos años.

Sevilla 9 de junio de 1956

Francisco Elías de Tejada Spínola (rúbrica)

Paralelamente, con cierta retranca, cursa otro escrito⁴⁵ —con Registro n.º 467 (8/6/56)— al Decano en el que le requiere para lle-

⁴⁴ Hoja 49 del Legajo.

⁴⁵ Hoja 50 del Legajo.

var a cabo una calificación *conjunta*, como la que le ha sido autorizada, aunque no lo diga, a Carande:

Ilmo. Sr.:

Tengo el honor de manifestar respetuosamente a V.I. que en el día de hoy quedó terminada la calificación de los alumnos de Derecho Natural, examinados en la presente convocatoria, con el ruego de que cuando a bien lo tenga, se digne comunicarme oficialmente la fecha y hora de la calificación conjunta.

Dios guarde a V.I. muchos años.

Sevilla, 8 de junio de 1956

EL CATEDRÁTICO

Francisco Elías de Tejada Spínola (rúbrica)

Otro escrito⁴⁶ —con Registro n.º 472—, siempre para el Decano, se reserva para la despedida y para su exabrupto final:

Ilmo. Sr.

Habiendo llegado en el día de hoy la fecha del comienzo oficial de las vacaciones veraniegas, sin que V.I. se haya dignado atender mis humildes súplicas constantes en anteriores escritos de los días 7 y 9 de los corrientes, pese a que en ellos se hacía constar referencia a hechos y actitudes personales de V.I., tengo el honor de elevarle mis más enérgicas, al par que respetuosas protestas, por sus contradictorias decisiones cuando en lugar de investigar los actos ajenos se trata de aclarar los propios. Suplicándole asimismo se digne aceptar los términos respetuosos para el Decanato de mi Facultad en los que me reservo hacerlo constar así públicamente en cuantas ocasiones me permita la ley.

Dios guarde a V.I. muchos años.

Sevilla 9 de junio de 1956

El catedrático

Francisco Elías de Tejada Spínola (rúbrica)

En definitiva, sin que su alianza con los estudiantes quede demostrada⁴⁷, Elías de Tejada, que con toda probabilidad tras el

⁴⁶ Hoja 51 del Legajo.

⁴⁷ Si embargo, esta implicación, ya vimos, que es lo que sostiene sin mencionarlo B.V. Carande, *Ramón Carande*, cit., p. 116. Es algo que nos ratifica posteriormente en la respuestas al cuestionario que se le presentó

verano pasaría a prestar atención a otras causas, ofrece al protagonista Carande una réplica que hoy puede calificarse hasta de divertida (por histriónica). No obstante, su presencia enfrentado a éste y al resto de sus colegas podría ser interpretada de otro modo, hasta el punto de convertir este incidente en algo que no sucedió, en un episodio de *pasado imposible*.

4. *La tentación del pasado imposible (o de los supuestos episodios de resistencia silenciosa)*

Y es que este incidente tiene todos los ingredientes para convertirse en un episodio de pasado imposible⁴⁸. La verdad es que frente a lo que suelen ser éstos lo tiene difícil ya que se trata de un episodio local, situado por tanto en eso que se llama la Historia local, con una característica, la de la cercanía, que dificulta que los hechos puedan ser relatados de forma absolutamente distinta a como sucedieron. En efecto, en los últimos tiempos estamos asistiendo a este tipo de interpretaciones que permitirían que un episodio de estas características pudiera ser presentado como una especie de versión sevillana de los episodios madrileños (y nacionales) ocurridos en la Universidad Central en febrero de 1956 —algo a todas luces excesivo—, o como una muestra de los sufrimientos vividos por el liberal Ramón Carande en los momentos más ominosos del franquismo, sufrimientos suministrados por la *caverna* sostenedora del Régimen,

sobre los incidentes, aludiendo a que su padre, sin perder su buen humor, «siempre lo explicó cual una maniobra, poco honrosa, de un provocador mal intencionado, manipulando a un grupo (limitado, repito) de alumnos, inconscientes» (sólo se referirá expresamente a Elías de Tejada para señalar que un año después su firma no se encuentra en la orla de homenaje que sus colegas le entregan con motivo de su jubilación). Sea como fuere, tanto el Prof. Clavero Arévalo como el Jefe del S.E.U. Ruiz-Berdejo niegan la implicación de Elías en el incidente. Este último respondió a la cuestión del siguiente modo: «En absoluto, el Profesor Elías de Tejada que era un hombre totalmente integrista se llevaba bastante mal con sus compañeros de claustro y aprovecho la oportunidad para hacerse notar cosa que nos sirvió para demostrar que se podían superar, los problemas que creaba la corporatividad».

⁴⁸ Tomamos la expresión prestada de Javier Cercas, en concreto de un artículo publicado en *El País* el 22 de abril de 2002 con este título.

encarnada en Elías de Tejada. Estas elaboraciones del pasado —siendo estrictos deberíamos decir reelaboraciones— son habituales actualmente, igual que habituales comienzan a ser —lo que ratifica esta habitualidad— el hecho de desmentirlas⁴⁹.

Son, como decimos, elaboraciones de un *pasado imposible*, que responden, en nuestra opinión, a una doble tipología. De un lado, estaría la reconstrucción personal, es decir, aquellos que recorren, presentan, su propia historia interior —la exterior no les pertenece completamente y puede ser recreada por otros— desde unas claves que ellos sólo conocen y manejan. En ese interior fueron siempre absolutamente opuestos al régimen; en ese interior abominaban del franquismo por mucho que las apariencias, el exterior de sus propias vidas, disimulase este sentimiento. Sí, porque son sentimentales y son, sobre todo, antipositivistas y metafísicos... de sí mismos. Esta última calificación quizá merezca una explicación: lo confían todo a lo que no se ve, rechazan lo externo y lo formal —lo que les delata—, lo que no casa con ese fondo que se aplican. Modelos de estos reelaboradores personales de su propio pasado hay varios. Nos podemos conformar con citar uno, bastante previsible por otra parte —entre otras cosas porque está presente en este trabajo por razones

⁴⁹ Algo de esto viene sucediendo con la II República y la Guerra Civil, en el punto de mira de los historiadores que se sitúan en uno y otro *bando* —palabra elegida con toda intención—. Habrá quien quiera ver en este debate historiográfico, intentando dignificarlo un tanto, una versión española del que en su momento mantuvieron en la Alemania de inicios de los ochenta Nolte, Habermas y compañía (el *Historikerstreit*; la bibliografía sobre este es abundante; últimamente, para una rápida aproximación, véase C. Lorenz, *Encrucijadas. Reflexiones acerca del papel de los historiadores alemanes en los debates públicos recientes sobre la historia nazi*, en M. Cruz — D. Brauer, *La comprensión del pasado. Escritos sobre filosofía de la historia*, Herder, Barcelona, 2005, pp. 335-381). Por ahora —y hay que temer que no es un problema de que transcurra el tiempo necesario para adquirir la suficiente distancia desapasionada—, el nuestro transcurre por senderos bastante cutres. Desmentir a personajes como Pío Moa —al que debemos resistirnos, con un mínimo de seriedad a otorgar el título de historiador— utilizando sus mismas armas, no es más que hacerle su propio juego, darle argumentos a él y sus secuaces con los que proseguir sus campañas. Lamentablemente es algo a lo que no han podido sustraerse historiadores de verdad a los que sólo habrá que justificar por el hecho de que la provocación ha sido grande (y la tentación editorial también).

de coincidencia histórica—, y precisamente porque se utiliza como ejemplo de esto que decimos⁵⁰. Se trata de Pedro Laín Entralgo, en concreto el Laín de *Descargo de conciencia*⁵¹. Al relato de esos treinta años de su vida sólo le falta el reconocimiento del error o de la equivocación (a no ser que el propio Laín confiase en que el lector diese por sentado que el error o la equivocación habían existido). Pero todos estos reconstructores morales de su propio pasado tienen el inconveniente vivo de quien no se limitó a contemporizar por escrito sobre su realidad sino que actuó directamente sobre ésta. Se trata de un modelo irreductible: Dionisio Ridruejo. «Historia de una integridad» es el título del texto con que Jordi Gracia abre los *Materiales para una biografía* de Dionisio Ridrue-

⁵⁰ En este sentido, véase Santos Julia, *Historias de las dos Españas*, Taurus, Madrid, 2004, pp. 349-353. Hacemos nuestro el claro planteamiento con el que enfrenta la cuestión: «La posibilidad de modificación de la memoria, o más exactamente, la posibilidad de que los acontecimientos del pasado puedan ser continuamente re-presentados, re-creados, re-interpretados, abre un amplio campo de voluntad individual y a la decisión política. El ejercicio de la memoria por parte de aquellos falangistas que soñaban con un régimen ocupado de arriba abajo por ellos no podía dejar de modificar, desde cada presente en que ese ejercicio se realiza, la percepción de lo que habían sido en el pasado. No se trata de calificar como impostura el contenido de ese recuerdo y adoptar ninguna airada ni sarcástica forma de denuncia. Estas actitudes, para el ejercicio de la comprensión histórica, no conducen a nada; sólo tal vez a la autosatisfacción de quien se cree más listo o más auténtico que aquellos a quienes estudia. Como tampoco conduce a nada la voluntad de ocultar lo que fueron tal como ha quedado registrado no en la memoria de los protagonistas, sino en las manifestaciones públicas de su pensamiento o de su acción, en sus intervenciones en los debates públicos y en las luchas políticas: saltar por encima de sus biografías, calificar lo que en su momento fue esencial para ellos como algo episódico y sin sustancia; peor aún, justificarlo con el argumento de la circunstancia histórica, es un fraude, por mucho que protesten sus autoproclamados discípulos. Se trata de aquí de otra cosa: de saber por qué habiendo actuado como fascistas, habiendo soñado con implantar un régimen totalitario y habiendo pugnado por que España ocupara un puesto de vanguardia junto a Alemania e Italia en la construcción del nuevo orden europeo, reinterpretaron aquel momento como un momento liberal y se tuvieron a sí mismos como liberales».

⁵¹ P. Laín Entralgo, *Descargo de conciencia (1930-1960)*, Barral Editores, Barcelona, 1976.

jo⁵², título que resume perfectamente, sin exageración, su trayectoria vital. Ridruejo es alguien que poco a poco va superando esas lecturas simplistas de su personalidad, inmediatas a su muerte y a la transición y va obteniendo la condición de personaje moralmente intachable, una especie de santo civil por el sólo hecho de haber estado a la altura de las circunstancias de su propia vida⁵³.

El otro tipo de reconstrucción de este pasado imposible es intelectual. Es la que realizan aquellos que observan este pasado y lo interpretan en una suerte de clave comprensiva, cuando no redentora. Si algo los caracteriza es una cierta dosis de imaginación propositiva y un indisimulado gusto por el detalle (su fuente principal de inspiración y justificación). De simples detalles, en forma de conferencia, texto perdido, intervención radiofónica o mero gesto, son capaces de deducir una actitud de vida entera. Este tipo es el que representaría actualmente, entre otros, Jordi Gracia, básicamente con su trabajo *La resistencia silenciosa*⁵⁴.

El encaje del episodio que hemos relatado en alguna de estas tipologías reconstructoras del pasado no nos parece posible. Su protagonista principal, Ramón Carande, que podría haberlo hecho no lo hizo. Hubiera sido extraño lo contrario, a poco que se conozca su trayectoria. Esto seguramente impida de manera definitiva que este episodio pueda ser reinventado por algún historiador (o más bien, cosa parecida) dotado de la suficiente desaprensión para dotarla de otra aureola, mucho más épica por supuesto, y distinta de la de un

⁵² D. Ridruejo, *Materiales para una biografía*, selección y prólogo de Jordi Gracia, Fundación Santander Central Hispano, 2005.

⁵³ La circunstancia de Dionisio Ridruejo resulta de sobra conocida. No se trató sólo de alguien que evolucionó interiormente sino que lo manifestó y acreditó externamente. Tomó partido. Su dimensión de personaje clave para entender (y justificar) nuestro pasado inmediato cobra realidad en la atención que está mereciendo últimamente. Prueba de ello es la publicación reciente de una nueva biografía: F. Morente, *Dionisio Ridruejo. Del fascismo al antifranquismo*, Editorial Síntesis, Madrid, 2006.

⁵⁴ J. Gracia, *La resistencia silenciosa. Fascismo y cultura en España*, Anagrama, Barcelona, 2004 (a este trabajo ya tuvimos ocasión de referirnos en *El Doctorado en Derecho privado en la Universidad de Sevilla (1955-1985). La lógica del presente sobre los hechos del pasado*, Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija de estudios sobre la Universidad, 7/2004, pp. 45-46, nota 10).

simple episodio entre un profesor y sus alumnos. Ingredientes tentadores en el episodio para ello no le faltan. Franquismo, Universidad, 1956, un personaje reaccionario como Elías de Tejada haciendo uso de su condición, el SEU y finalmente Carande. Creemos que este último no necesita este tipo de favores⁵⁵, pero mucho menos la verdad y la historia, que en el mejor de los mundos posibles deben coincidir a toda costa.

César Hornero Méndez
Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)

⁵⁵ La *explicación* de un sujeto como Carande está en una circunstancia de su propia vida, circunstancia que describe perfectamente su modo de situarse (enfrentarse) en el mundo: la independencia. Es el propio Carande, de forma inteligente y con perspectiva —una larga vida como la suya da para ello—, quien nos lo descubre. Así, En *Una escolaridad*, cit., p. 9, en el discurso pronunciado en el Acto de Investidura como Doctor Honoris Causa de la Universidad Complutense, señalará «Debo gracias a Dios, por tener 90 años, a la vista, salud, independencia y amor a la paz». Posteriormente en un acto similar, en su investidura como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Valladolid (véase *Actos de Investidura como Doctores «Honoris Causa» de los Excmo. Sres. D. Miguel Delibes Setién, D. Bartolomé Bennassar, D. Ramón Carande y Thovar*, Valladolid, 1983, p. 86): «He disfrutado del raro privilegio, inestimable: de la independencia y, con ella, gracias a Dios, he podido vivir con el ejercicio de mi vocación». Esta condición personal de Carande no es sólo autoapreciada sino detectada por quienes le conocieron bien. En este sentido, véase J. García Añoveros, *Homenaje en la Universidad de Sevilla al Prof. Don Ramón Carande con intervención del Ministro de Hacienda Prof. Dr. Jaime García Añoveros*, cit., pp. 28-29, después de recordar que Carande «no es un fanático de causa alguna aunque se haya batido a fondo por causas muy nobles» y que «no es tampoco un seguidor incondicional de nadie», concluye que «D. Ramón no es un rebelde, tampoco; como es comprensivo y gusta del matiz, no es un rebelde destructor; pero a algunos les ha podido dar esa sensación, a personas que tienen criterios políticos para juzgar del mundo y de sus gentes, lo que sucede es que es independiente; insobornablemente independiente; y, en cierto modo, esta es la forma más aguda de rebeldía».

EL DOCTORADO Y LA GÉNESIS DEL DERECHO DEL TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA

Sumario: 1. Introducción.—2. En torno a lo social: a) la cuestión social, b) la política social, c) el derecho social o las leyes sociales.—3. La creación y dotación de la cátedra.—4. El programa presentado por Olariaga.

1. *Introducción*

En un adelanto o una primera aproximación al tema de investigación en el que estoy inmersa que es la génesis del derecho del trabajo en la universidad española¹, dentro de esta línea, el trabajo que presento ahora vendría a significar la primera etapa de esa trayectoria que pretendo estudiar.

Como ya dije, el derecho del trabajo no materializó su autonomía docente hasta el año 1947, en el que se creó la primera cátedra de dicha disciplina en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas, de reciente creación en aquellos años ya que no llegaba ni a un lustro de vida². La inclusión del derecho del trabajo en dicha licenciatura se produjo unos meses después de su creación, como parte del plan de estudios de 1944 en el que también se preveía la enseñanza obligatoria de dicha disciplina en las facultades de derecho³. Pero ello no significa que hasta entonces el derecho del trabajo estuviera ausente en los estudios universitarios.

En efecto, el derecho laboral venía enseñándose desde hacía años no sólo en las escuelas de formación profesional, sino también en las facultades de derecho. La materia se impartía a través de cur-

¹ M. J. María e Izquierdo, «Contexto doctrinal de las primeras cátedras de Derecho del Trabajo en España», en *Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija*, 7 (2004), 91-115.

² Ley de 29 de julio de 1943, BOE de 31 de julio de 1943.

³ Decreto de 7 de julio de 1944 sobre la Ordenación de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas. BOE 4 de agosto de 1944. M. Martínez Neira, *El estudio del Derecho: libros de texto y planes de estudio en la universidad contemporánea*, Madrid, 2001, p. 306 ss.

sos de doctorado o como parte del programa de otras asignaturas y los enseñantes eran profesores de esas asignaturas: derecho mercantil, derecho administrativo⁴. Su inclusión definitiva en las licenciaturas universitarias, a mediados del siglo pasado, fue el resultado de una serie de intentos o propuestas⁵. Pero, como ya he dicho, no es entonces cuando inicia su andadura. En 1916 se crea en la facultad de derecho de la Universidad Central una cátedra de doctorado de «Política social y legislación comparada del trabajo»⁶. A las causas que motivaron la creación de dicha cátedra, al contexto doctrinal en el que nació⁷ y a la oposición que posibilitó su provisión está dedicado este trabajo.

2. *En torno a lo social*

La caída del Antiguo Régimen y el advenimiento del liberalismo alumbraron transformaciones profundas en la sociedad y en la economía. La tan defendida libertad individual, llevada a sus últimos extremos por los primeros liberales, y la tan proclamada igualdad ante la ley cambiaron una sociedad estamental discriminatoria por una sociedad de clases que, sin serlo legalmente, discriminaba también. En efecto, el tan esperado liberalismo económico dejó al más débil, esto es al «trabajador», en manos del capitalismo puro que

⁴ Este fenómeno no era sólo nacional, los estudios sociales, en su más amplio sentido, proliferaban en Europa dentro y fuera de las universidades. Vid. J. Canalejas, «La cuestión obrera», en *Revista General de Legislación y Jurisprudencia* (en adelante *RGLJ*), 103 (1903), 508-573.

⁵ Dice Rodríguez Piñero: «tras largos años de propuestas por parte de los científicos sociales españoles: ya en 1921 Jordana de Pozas defendía la inclusión en la enseñanza universitaria de los estudios de previsión social». Vid. M. C. Rodríguez-Piñero Royo, «La irrupción de nuevos sectores: el Derecho Laboral», en *La enseñanza del Derecho en el siglo XX, Homenaje a Mariano Peset*, Universidad Carlos III-Dykinson, Madrid, 2004, 443-515.

⁶ Real Orden 7 de marzo de 1916, *Gaceta de Madrid* de 20 de marzo de 1916.

⁷ En este sentido mis fuentes han sido fundamentalmente las opiniones que los autores españoles manifestaron desde la cátedra, el escaño o los tribunales y, excepcionalmente, alguna extranjera por el eco que tuvo entre aquellos. Al periodo que me estoy refiriendo oscila aproximadamente entre mediados del siglo XIX y las primeras décadas del XX (en concreto 1916).

descansaba sobre la ley del más fuerte, de la oferta y la demanda. Paralelamente, el positivismo jurídico materializado en los códigos liberales, que consagraba la propiedad como uno de los pilares fundamentales sobre los que se había construido el nuevo orden jurídico-social, abandonaba a los que no lo eran, que eran la mayoría, al ostracismo. Con la promulgación de los códigos liberales la igualdad ante la ley, la formal, estaba consumada, pero distaba mucho de alcanzarse la revolución económica, esto es la igualdad real⁸. Los empresarios contemporáneos de la primera mitad del siglo XIX desplegaron su «gigantesco poder organizador sin encontrar fronteras a su dominación, ni por parte de un Estado, que proclamaba su condición de instancia neutral, ni por parte de los trabajadores»⁹, débiles y desorganizados por aquella época. Las consecuencias de tan tremenda situación pronto se convirtieron en un generalizado malestar entre las clases menos favorecidas que, sin nada que perder, empezaron a protestar por su angustiosa supervivencia. Con este caldo de cultivo, la difusión y el triunfo de ideologías socialistas y sindicalistas fue *in crescendo* en la segunda mitad del siglo XIX. Para la clase pudiente —utilizando la terminología de la época— y para los gobernantes en seguida quedó patente que era necesario corregir los excesos del liberalismo.

Surge así en toda Europa y por ende en España lo que los coetáneos llamaron «cuestión social», «cuestión obrera», «problema social», «legislación social», «derecho social» y «política social», términos o vocablos que trataban de definir y encerrar una problemática tan compleja como la que significó ésta en aquella época. Comencemos por la cuestión social.

La cuestión social

Desde mediados del siglo XIX, pero muy especialmente durante las dos últimas décadas, la cuestión social produjo, de una forma progresiva, una variada, abundante y polémica bibliografía por parte de juristas, políticos, pensadores, sociólogos, economistas e intelectuales en general, no sólo en revistas científicas sino también

⁸ A. Montoya Melgar, *Ideología y lenguaje en las leyes laborales de España* (1873-1978), Madrid, 1992, p. 27.

⁹ A. Montoya Melgar, *Ideología y lenguaje...*, p. 108.

en periódicos, gacetas, discursos, etc. Basta consultar el índice de una publicación jurídica como puede ser la *Revista General de Legislación y Jurisprudencia* para darse cuenta del interés que suscitaba todo lo relacionado con este tema¹⁰.

Atendiendo al concepto total o genérico que dicho término encierra, la cuestión social sería, el conjunto de los problemas que se producen en la sociedad. Pero esta definición es muy amplia, tendría un carácter ahistórico puesto que podríamos aplicarla a cualquier época y a cualquier sociedad. Ciertamente, no es a lo que se referían estos pensadores cuando utilizaban el vocablo, sino al descontento, la desconfianza y la lucha entre la clase obrera y la clase capitalista. Tenemos por tanto los dos sujetos del conflicto: el obrero y el empresario. Atendiendo a ellos algunos autores de la época, Canalejas por ejemplo, consideraban que la cuestión social debía llamarse la cuestión obrera, ya que eran los obreros los protagonistas mayoritarios de la misma y puesto que sólo se refería los problemas existentes con esa clase social¹¹.

Parecida argumentación, aunque mucho más compleja y con resultados diferentes, realiza Azcárate al distinguir entre cuestión obrera y problema social. Según él, la cuestión obrera es sólo una parte —la económica y de los trabajadores— del problema social y éste a su vez es sólo una parte del problema *todo* de la vida. Comienza preguntándose por las causas que habrían originado ese problema social y las resume en una *crisis total* en la sociedad. Esa crisis tiene muchos aspectos: desde el punto de vista económico el de la miseria; bajo el científico el de la ignorancia; bajo el moral el del vicio y bajo el religioso el de la impiedad. Considera, sin embargo, que sólo un aspecto de cada materia es el que incide en el problema social y resolviendo éste no se resolverán todos los de cada una de

¹⁰ Según Tormo Camallonga, hasta 1923 no hay ningún apartado o capítulo que se denomine «Derecho social», cualquier artículo referente a la problemática social que el mundo laboral arrastraba se podía encontrar invariablemente en cualquiera de los otros capítulos de la revista: Derecho civil, Filosofía del derecho, etc. Se está refiriendo a los inicios del siglo XX, pero su observación se puede aplicar a décadas anteriores. C. Tormo Camallonga, «Sobre los inicios en la enseñanza del derecho del trabajo», en Adela Mora (ed.) *La enseñanza del Derecho en el siglo XX, Homenaje a Mariano Peset*, Universidad Carlos III-Dykinson, Madrid, 2004, 517-541.

¹¹ J. Canalejas, «La cuestión...», p. 509.

ellas. Por lo tanto, si el problema social es un problema sociológico, de la sociedad, y dentro de él está la cuestión obrera, la que afecta al obrero y a la economía, la que probablemente es más visible, manifiesta e interesante, pero sólo una parte. No es correcto por lo tanto hablar de problema social como equivalente de la cuestión obrera¹².

Otros autores de la época, al definir la cuestión social, lo hacen pensando en las causas que la ocasionaron o en los elementos que la integran. Así Posada comenta que para algunos la cuestión social es una cuestión de estómago, para otros de moral y para otros de método. Él adopta una postura ecléctica diciendo que hay en ella un poco de todo: «mucho que importa a la economía, mucho que toca a la moral, y algo quizá que corresponde a la lógica; pero como al fin y al cabo en el fondo de los grandes dolores humanos hay una cuestión de conducta, la cuestión social es además un problema de educación y un problema jurídico»¹³. De la misma opinión es Arenal: «si ha de comprender las partes esenciales del hombre y, por tanto, integrantes de la sociedad [la cuestión social] ha de ser: religiosa, moral, científica y económica. Estas cosas no son idénticas, pero tampoco independientes, ni menos hostiles, y de su movimiento armónico resulta la posible perfección, la felicidad»¹⁴.

Ahora bien, al margen de la discusión terminológica, lo cierto es que estos vocablos, cuestión social, cuestión obrera o problema social se utilizaban como sinónimos y su significado era la lucha existente entre el trabajo y el capital de mediados del XIX y principios del XX, conflicto que impregnaba la política, la economía y el derecho en busca de soluciones. Se propuso una diversidad de remedios, congruentes con otras tantas opciones ideológicas, que varia-

¹² G. de Azcárate, *Discurso sobre la cuestión social*, leído el 10 de noviembre de 1893 en el Ateneo Científico y Literario de Madrid. Lo cierto es que algunos laboristas actuales consideran que la cuestión obrera era «la cuestión social por antonomasia en la Edad Contemporánea en España y en los demás países de la Europa industrial; E. Borrajo Dacruz, *Introducción al Derecho del Trabajo*, Madrid, 2003, p. 105.

¹³ A. Posada, «Sobre el aspecto jurídico del aspecto social», *RGLJ*, 92 (1898), 70-87. Véase también J. González Llana, «La substantividad del derecho obrero», *RGLJ*, 126 (1915), 216-229; 127 (1915) 67-85.

¹⁴ C. Arenal, *Obras completas de D.^a Concepción Arenal; la cuestión social*, Bilbao, p. 26.

ron en el transcurrir de los años, algunas fueron tildadas de revolucionarias o radicales por atentar contra el orden establecido, otras, más moderadas, coincidían entre sí en algunos puntos y diferían en otros, también las había contradictorias en algunos aspectos. En suma, el abanico de propuestas era amplio, rico y polémico.

Al principio, las medidas que se imploraban por parte de la sociedad eran de carácter piadoso, filantrópico; hablaban de la clase obrera con innumerables adjetivos: «pobre», «menesterosa», «desvalida», «ignorante», «desheredada», la cual frente a la clase «pudiente» tenía el derecho de pedir a ésta que abriera su corazón y le auxiliara en su desgracia. La pudiente, por su parte, tenía la obligación cristiana de atenderla. Esto reforzaba la inmovilidad del orden social y la convicción del carácter natural de las desigualdades entre las clases, levantando fronteras rigurosas entre benefactores y socorridos¹⁵. Se pretendía corregir y mitigar los efectos que el nuevo orden socio-económico había implantado. Pero esta ideología humanitaria se fue sustituyendo por otra que reclamaba «justicia social»¹⁶, a la que había que llegar atendiendo a las causas del problema y las soluciones se empiezan a buscar en las leyes y en los cambios económicos, no sólo en el comportamiento ético.

Ciertamente, el individualismo radical defendido al principio fue matizándose con el tiempo, tanto la idea de confiar en que la libertad económica acabaría equilibrando la desigual realidad social como la de aceptarla como inevitable fue rechazándose casi por unanimidad. Por otra parte, esta opción resultaba sospechosamente contradictoria en boca de algunos conservadores que, si bien se mostraban extremadamente partidarios de la libertad en el aspecto económico del individuo, eran reacios a aceptarla en el político e incluso en el religioso, al tildar las asociaciones de trabajadores y la libertad de culto como causas de todos los males sociales del momento.

Paralelamente y desde el punto de vista económico, frente al *laissez faire, laissez passer* de las teorías individualistas, que confiaban a este principio el desarrollo y equilibrio económico de una sociedad, surgieron las escuelas socialistas, para las que el eje de la cuestión era el trabajo y reclamaban un férreo intervencionismo estatal en

¹⁵ A. Montoya Melgar, *Ideología y lenguaje...*, p. 35.

¹⁶ E. Dato, «Justicia social», *RGLJ*, 117 (1910), 119-186.

aras de la colectividad. Ahora bien, frente al dogma marxista de la lucha de clases y frente al lema anarquista de la expropiación revolucionaria de la burguesía, la gran mayoría de nuestros pensadores cerraron filas. Unos, refugiándose en argumentaciones arcaicas basadas en que las desigualdades sociales son consecuencia de desiguales inteligencias, capacidades, aptitudes e incluso de comportamientos morales, denunciaban lo pernicioso que social y económicamente era el colectivismo por anular el incentivo individual: «quitar al hombre el perfeccionamiento en sus industrias, el mejoramiento en sus labores, la inclinación natural a elevar más y más sus ideas, y vereis estacionarse a la humanidad... Dadle un sistema que estimule sus vicios, que le desarrolle la pereza y la malicia, y le vereis retroceder a su primitivo estado, corrompido...»¹⁷. Otros, más flexibles, proponían tímidas y conyunturales normas reformadoras que no alterasen el orden establecido y, muy especialmente, la propiedad privada.

Por otra parte, también el socialismo científico de Marx, Engels y Lassalle, que niega la propiedad privada en favor de la colectiva y considera que el problema radica en la distribución de la riqueza, fue corregido en seguida por el llamado *socialismo de cátedra* que, encabezado por profesores y políticos liberales alemanes representantes de la escuela ético-social, fundamentó teóricamente la idea de la integración pacífica del capitalismo en el socialismo, o por el *socialismo de estado* que tenía de colectivismo únicamente el beneficio social que pretendía, pero como una concesión a las masas y no como un derecho de éstas. Ambas posturas matizaban el radicalismo socialista: la primera, aplicando el historicismo a la economía-política, consideraba que ésta no era únicamente una cuestión de números o económica, sino también social, la segunda, previniendo un intervencionismo estatal que aplacara los ánimos revolucionarios, pero fortaleciendo la estructura estatal y manteniendo la propiedad privada de los medios de producción. De esta forma el Estado se convertía en una institución omnipresente.

En otras palabras, estas dos opciones que partían de una concepción economicista, una desde el individualismo y la otra desde el socialismo, significaron los dos extremos del gran abanico ideológico que se desarrolló en torno al problema y en el que no sólo el orden económico tenía cabida.

¹⁷ A. Aguilera y Vera, «Anticomunismo», *RGLJ*, 47 (1875), p. 148.

Por otra parte, los seguidores de la *doctrina social de la Iglesia* —que llegó a tener su máxima referencia en la *Rerum Novarum* de León XIII— consideraban que la caridad, la fraternidad universal, la solidaridad, el amor cristiano por parte del rico y la moralidad, el trabajo y la resignación por parte del pobre eran actitudes imprescindibles que la sociedad, desde el individualismo, debía adoptar para alcanzar la justicia social. Por su parte, el Estado debía actuar proporcionando instrucción al desamparado por un lado, e interviniendo con prudencia mediante la previsión y vigilancia del cumplimiento de las normas laborales, estableciendo el descanso dominical, reglamentando el trabajo en las fábricas de mujeres y niños y defendiendo la propiedad¹⁸. Medidas, todas ellas, que sólo la doctrina católica podía dirigir o coordinar. La Iglesia reivindicaba, en este sentido, un papel monopolizador.

Otros autores, entre los que se encontraban aquellos conservadores que censuraban los modernos Códigos civiles por haber aniquilado el derecho colectivo del Antiguo Régimen y los que aun reconociendo las ventajas de la revolución reclamaban la formación de núcleos que sirvieran de centros de reorganización y de intermedios entre el individuo y la sociedad, veían el problema desde la perspectiva sociológica. Habría que contabilizar aquí el *socialismo corporativo o guildista*, recién nacido por aquellos años en Inglaterra, que consideraba que los sindicatos transformados en guildas, debían ejercer el control de la industria y eliminar el sistema de salarios, asumiendo los obreros, junto con el Estado y los municipios en su caso, la administración de las explotaciones, sin que esto significara que fueran ellos los propietarios de éstas, que pertenecerían a la colectividad. En otras palabras, entre la visión individualista que busca la solución en el individuo y la socialista que la ve en la intervención estatal, surge una sociológica que la remite a la sociedad. Dentro de esta postura nos encontramos con muchas variantes: algunos defendían volver a los gremios «como asociaciones voluntarias, organizadas conforme a los principios de derecho moderno»¹⁹, otros fomentaban por diversas vías la

¹⁸ G. González Revilla, *La cuestión social y la fraternidad humana (Socialismo Cristiano)*, Bilbao, 1897; J. Maura, *La cuestión social*, Madrid, 1902; J. Biederlack, *La cuestión social*, Burgos, 1908.

¹⁹ I. Torres Muñoz, «Los gremios de menestrales de manos», *RGLJ*, 68 (1886), 309-328; E. Pérez Pujol, «La sociología y la fórmula del dere-

participación del obrero en los beneficios y alentaban la cooperación entre el empresario y el trabajador²⁰.

Por último, tenemos aquellos que contemplaban el problema desde el prisma jurídico, los que veían en las leyes la solución de la cuestión social. La propiedad y el capital era para ellos el centro de la vida jurídica, era el derecho, bien a través de leyes especiales, bien a través de reformas del Código civil, el que debía resolver la cuestión²¹. El filón de esta escuela o, digamos, de esta tendencia está en Italia. A este país corresponde esta dirección doctrinal que supo quedarse en un punto intermedio «no tan amplio como el sociológico de los publicistas, ni tan concreto como el de los economistas, sino en uno jurídico y técnico: el derecho es la norma, la condición de toda la vida individual y social y es imposible que ésta cambie y se transforme y aquel permanezca inmóvil y estacionado»²². En efecto, para algunos juristas era el «aspecto jurídico» el que interesaba, el que encerraba la esencia de dicha cuestión; títulos como «los nuevos horizontes del derecho civil», «el código civil y la cuestión social», «la misión social de la ciencia del Derecho», «nueva fase del derecho civil en sus relaciones económicas y sociales», son frecuentes en la producción científica. Incluso hay alguno que llega a afirmar rotundamente «que la cuestión social está casi entera en el Código civil». Eran conscientes de la desincronización que había entre el derecho privado y la realidad social, del estado obsoleto en que se encontraba aquél con respecto a ésta.

Para Fernández Villaverde esto ya lo presintió Rossi —jurista italiano— cincuenta años antes, a mediados del siglo anterior, en su crítica al Código Napoleón, cuando afirmaba: «El cuerpo social y la ley civil no parecen hechos la una para el otro, y nada anuncia que tal desacuerdo sea cosa accidental y pasajera». En otras palabras, la igualdad legal de derecho encubría una desigualdad de hecho y a la hora de pactar y cumplir lo pactado esa falsa libertad política se convertía, para el débil, en tiranía económica. Había que restablecer la

cho», *RGLJ*, 47 (1875), 369-392; «El concepto de la sociedad en sus relaciones con las diversas esferas del derecho», *RGLJ*, 66 (1885), 141-165.

²⁰ G. de Azcárate, *El problema social*, Madrid, 1881, p. 46 ss.

²¹ G. de Azcárate, *Discurso...*, p. 13.

²² G. De Azcárate, *Discurso...*, p. 14.

²³ P. Rossi, *Mélanges d'Économie, d'Histoire et de Philosophie*, Paris, 1857, tomo II, pp. 1-23. Cfr. R. Fernández Villaverde, «La cuestión social y

armonía entre el derecho privado y el estado económico para resolver la cuestión social²³.

Pero este crujido que percibieron los italianos entre la realidad social y el derecho, según González Rebollar, no alcanzó a oírlo la ciencia jurídica española, ésta no supo, como la italiana, renovarse para adaptarse a los nuevos cambios económicos y sociales. Dice este autor que esa necesidad de reforma, de armonizar el derecho con la sociedad, fue vista por políticos, pensadores, etc., pero no por los juristas que seguían anclados o aferrados a la rigidez de las leyes. Hay, a su juicio, un divorcio inexplicable entre la ciencia del derecho y la práctica jurídica, y es que «el monopolio de la técnica por los juristas ha petrificado —dice el autor— en las conciencias tales ideas, que cuando recientemente los economistas y los sociólogos trataron de arrojar en el surco la semilla de una completa renovación, pudieron observar la desesperante lentitud con que fructificaba y la tenaz resistencia que le oponen determinadas concepciones de un arraigo secular». Tras esta crítica, aconseja a la ciencia del derecho emprender una orientación ética y social para realizar la sincronización²⁴.

Crítica parecida es la del Menger en Austria: «cuando en 1888 se publicaba el primer proyecto de Código Civil para el Imperio alemán —dice el autor— encontró una acogida desfavorable. Las censuras capitales que contra el mismo se lanzaron, eran las de que no se revelaba en él carácter alguno social». Responsabiliza Menger de ello, en parte, a la ciencia del derecho: «ni aún la de las naciones más importantes no ha tomado en cuenta para nada las exigencias de la época, en el respecto de las necesidades sociales»²⁵. Consideraba que, con la introducción del sufragio universal, la enseñanza obligatoria en las escuelas y el servicio militar obligatorio, se habían producido cambios importantísimos en la vida política, y que la gran industria y la aglomeración de masas en las ciudades habían producido en la economía transformaciones o cambios radicales que

el Derecho civil», *RGLJ*, 97 (1900), 364-388; 98 (1901), 131-144 y 361-381; 99 (1901), 78-119.

²⁴ H. González Rebollar, «Nuevas orientaciones del Derecho; cuestiones y leyes sociales contemporáneas, con especial aplicación a España», *RGLJ*, 102 (1903), 117-128 y 336-360; 103 (1903) 101-115 y 325-366.

²⁵ A. Menger, «La misión social de la ciencia del Derecho», *RGLJ*, 94 (1899), 27-45.

el legislador no supo plasmar en la legislación dejando, en consecuencia, una laguna en la ciencia del derecho alemán y europeo.

Comentando la obra de este jurista austriaco dijo Posada: «Menger tiene el valor de situarse en una postura intermedia entre las corrientes socialistas, que ven el *quid* de la cuestión en la economía, y las afirmaciones categóricas de los privatistas, para recoger las reivindicaciones de los pobres y convertirlas en exigencias jurídicas»²⁶. En efecto, para Menger, las reformas debían llevarse a cabo desde el derecho privado, pero cambiando los intereses que éste protegía y extendiéndolos a las masas, invocando la potencialidad del proletariado reclamaba una protección legal para el interés supremo de la vida, del alimento, de la salud. Dicha teoría entraña —para Posada— «una transformación del criterio ético a que debe responder el derecho positivo»²⁷. Matizando las afirmaciones de Menger, se pregunta Posada por qué referirse sólo a las masas, por qué a una única clase social: ¿no es el interés ético, la atracción del bien, la obligación moral base en definitiva de toda relación jurídica? Es necesario provocar la conciencia ética de la sociedad; el autor no comparte la visión sociológica que ve en la lucha el germen de la vida social y menos del derecho; es trascendental para la regeneración social —comenta— orientar científicamente el derecho hacia la ética.

También los hay que opinan que son los políticos, los gobernantes, los responsables de esta situación y son ellos quienes deben resolverla a través de leyes intervencionistas correctoras. Tal es el caso de Pérez González que, partidario de un Estado únicamente corrector, critica las leyes de reformas sociales por considerarlas hipócritas y absurdas y coincide con Posada en que no se trata de crear un derecho de clase, aunque su visión, en lo demás, es distinta. Según Pérez González, es necesario culturizar al obrero, dotarle de medios adecuados para que se ilustre y adquiera los conocimientos suficientes para defenderse en la lucha por la vida y dejarle después para que obre en libertad: dónde, cómo y cuánto quiere trabajar²⁸. Hay que

²⁶ A. Posada, «Sobre el aspecto jurídico del aspecto social», *RGLJ*, 92 (1898), 70-87.

²⁷ A. Posada, «Sobre el...», p. 75.

²⁸ V. Pérez González, «Apuntes sobre la cuestión social», *RGLJ*, 100 (1902), 567-582; 101 (1902), 5-25. En este artículo, además de denunciar los fallos del Estado en cuanto a política social, defiende el autor su postura en dicha materia proponiendo una serie de medidas concretas.

señalar que la instrucción de las masas, en una sociedad en donde el analfabetismo era muy elevado, era defendida por casi todos los autores, aunque no como única medida. Se trataba de una medida social que tanto el Estado como la sociedad debían asumir y compartir: no se alcanzaría nada reformando sólo las leyes si al trabajador no se le educaba para ser realmente libre.

En definitiva, según la visión que se tuviera del problema y dependiendo de las causas consideradas, las soluciones variaban²⁹. Desde el punto de vista económico, el remedio residía en el individuo según las teorías liberales, o en el Estado según las socialistas. Frente a esta visión economicista, estaban la sociológica, para la que la solución dependía de la sociedad, y la privatista que la veía en el Derecho. A los radicalismos iniciales siguieron matizaciones y propuestas llamémoslas «conciliadoras» que trataban de armonizar diversas soluciones. Lo cierto es que, como ya se ha dicho, en España el discurso que más imperó fue el sociológico, el influjo de la escuela krausista se percibe en muchos de nuestros pensadores. Para ellos, el problema social era la consecuencia de la crisis total en la que estaba inmersa la sociedad decimonónica; solucionarla era una labor que debía acometer el individuo, la sociedad y el Estado conjuntamente, ninguno de ellos por separado lo conseguiría. La ética, la moral e incluso la religión debían marcar el comportamiento individual, tanto del trabajador como del empresario. En la sociedad debía llevarse a cabo una regeneración de valores y comportamientos auténticos y globales de cooperación, asociación, etc. El Estado, por su parte, a través de leyes intervencionistas no sólo de previsión, sino también de corrección y vigilancia debía de canalizar todos los esfuerzos. Atribuir el problema social a uno solo de los tres elementos era para muchos de nuestros autores un error de partida crucial y por tanto ineficaz³⁰.

Ahora bien, ¿cómo iban resolviendo los diferentes gobiernos la cuestión social a principios del siglo XX? Con leyes intervencionistas, lógicamente. El debate sobre quién tenía que resolver la cues-

²⁹ Algunos autores llegan a presentar verdaderos proyectos de reformas concretas que afectan al Estado y sus instituciones y a la sociedad y sus clases. Vid. J. Fornovi, *La cuestión social y las manifestaciones obreras*, Madrid, 1891.

³⁰ Azcárate, Arenal, Posada, Álvarez Buylla son algunos de los más representativos.

ción social, riquísimo intelectualmente, se iba desarrollando al compás de la promulgación de leyes sociales como parte de la «política social» que los diferentes gobiernos iban aplicando.

La política social

En efecto, las leyes laborales formaban parte de la política social que debía llevar a cabo el Estado para resolver ese problema social. Pero ¿qué significaba política social para estos pensadores?

González Llana consideraba que «la misión de la política social es organizar sobre nuevas bases la protección de los trabajadores, asumida en otros tiempos, bajo el régimen patriarcal por el señor o el patrono»³¹. Se trata, por tanto, de una función social del Estado, es decir, la fórmula de los fisiócratas *laisser faire, laisser passer* que limitaba al marco jurídico la función estatal, dictar las normas y hacer que se cumplieran no era suficiente. Recordemos, una vez más, que el individualismo radical había sido la causa de la aparición de las teorías intervencionistas, algunas también radicales, que atentaban violentamente contra el sistema capitalista. De modo que si el Estado no estaba dispuesto a asumir esa función social, estaba arriesgándose a sucumbir, era una cuestión de supervivencia del propio sistema capitalista, no se trataba sólo de justicia, caridad o buenas intenciones. No en vano Bismarck declaró en el *Reichstag* que aceptaba sin vacilar el principio socialista del derecho al trabajo, con lo que pretendía orientar la política en el sentido de la reformas sociales, que debían preservar a la clase proletaria de la influencia de la democracia socialista. La política social es «el dique que contiene los excesos del socialismo y pone freno a los egoísmos individualistas»³².

González Rebollar consideraba el calificativo de social, refiriéndose a la ley, como el más adecuado porque «alude directamente a todo el contenido de aquella peculiar función del mismo nombre que el Estado ha de realizar en el mundo moderno». Esta función social del estado era, en el fondo, aceptada unánimemente por nece-

³¹ J, González Llana, «El Estado providencia, ensayo de vulgarización sociológica», *RGLJ*, 143 (1923), 53-87 y 365-408.

³² J, González Llana, «El Estado...», p.370.

saría, aunque algunos la vieran con desconfianza: «la sociedad capitalista se halla, por lo menos, tan interesada como el proletariado en la existencia de una prudente y culta legislación social, que se encamine a la prolongación de la fuerza del trabajo en el obrero, porque esta fuerza, cuidadosamente cultivada, aumenta el poder productivo de la nación, acrecienta el consumo, evita la depauperación de la raza y la criminalidad; todo lo cual redundaría en aumento de riquezas, de capitales; y si bien es cierto que con ello resultan inmediatamente perjudicados muchos intereses parciales, también lo es que el estado, no ya por humanidad, sino por conveniencia de la clase capitalista, está interesado en que las fuerzas del trabajo sean abundantes, sanas e inteligentes, en que se acreciente el consumo como medio de lograr un aumento en la producción, y en que aun a costa de sacrificios parciales el capital consiga reunir los medios de desarrollo y explotación más convenientes»³³. También Azcárate es de la opinión de que hasta los más radicales revolucionarios aceptaban como un mal menor las tibias reformas sociales, no porque satisficieran sus aspiraciones, sino por razones pragmáticas ¿para qué reforzar al enemigo enfrentándose a él y retrasar con ello medidas posteriores más drásticas³⁴? En efecto, todos, incluidos conservadores, defendían la necesidad de llevar a cabo esa política social. Al entender de Dato, «loable es que la acción protectora acompañe al obrero en la penosa peregrinación a través de su vida activa cuando emplea y dedica sus energías a la producción de la riqueza; pero aún más digno de alabanza es prolongar aquella protección cuando las fuerzas le faltan, cuando entra cansado y abatido en este declinar de la vida que se llama vejez»³⁵. Con independencia de posturas más o menos encontradas, coincidían en que en política social el Estado cumplía una función no sólo jurídica.

En otras palabras, la política social de aquella época era la política del miedo; miedo a la revuelta, a la revolución, a la pérdida del orden establecido y de la propiedad. Ese temor, compartido por la mayoría de los partidos decimonónicos, era el impulsor más efecti-

³³ Dicha explicación nos la detalla González Rebollar refiriéndose a un ilustrado socialista, Juan José Morato. H. González Rebollar, «Nuevas orientaciones...», p. 360.

³⁴ G. de Azcárate, *Discurso sobre...* p.20.

³⁵ E. Dato. «Significado y representación de las leyes protectoras del trabajo», en *RGLJ*, 114, (1909), 5-28.

vo a la hora de emprender una reformista política social. Las leyes reformadoras, según los hombres del XIX, debían ser pausadas, prudentes, lentas, dirigidas, preparadas. De esta forma, el intervencionismo desempeñó una doble misión conservadora y de reforma³⁶. Hay que reconocer, no obstante, que el miedo de la clase política no sólo era frente al proletariado, también temía la reacción que un proteccionismo laboral avanzado podía despertar en las clases acomodadas o, más concretamente, en los patronos³⁷.

Por otra parte, había entre la intelectualidad de la época y se supone que entre la sociedad en general, un desencanto, escepticismo y hasta un desprecio hacia la clase política muy acentuado. El caciquismo, la corrupción, el fraude electoral, etc., eran denunciados con amargos términos como vicios generales o, como mínimo, habituales de los políticos de turno. Actitudes políticas difíciles de conciliar con una política social justa y coherente según Arenal³⁸. Este pesimismo frente a la clase política se extendía en Pérez González hasta el Estado, denunciaba la ley de redención en metálico del servicio militar que —según él— respetaba la vida del ciudadano rico y condenaba a muerte al pobre. Una ley que, además de reflejar la hipocresía estatal al enviar a la guerra únicamente a los desvalidos, desvirtuaba las estadísticas en las que se apoyaban los gobiernos para llevar a cabo las reformas sociales al incluir las muertes de guerra como muertes del proletariado³⁹. La tardía aparición de leyes laborales y por ende de la política social en España fue vista por los coetáneos como un signo de inferioridad de nuestro país con respecto al resto de Europa⁴⁰. Medidas aisladas para combatir las consecuencias del problema social, no el problema en sí mismo, son las emprendidas por los políticos españoles, porque «su falta de previsión y su olvido constante de la realidad dan lugar a que todas las cuestiones difíciles se agraven en nuestro país»⁴¹.

³⁶ A. Montoya Melgar, *Ideología y lenguaje...*, p. 57 ss.

³⁷ C. Arenal, *Obras completas...*, p. 7 ss.

³⁸ C. Arenal, *Obras completas...*, p. 211 ss; V. Pérez González, «Apuntes sobre...», p. 568 ss.

³⁹ V. Pérez González, «La cuestión social; señuelos y paliativos», 102 (1903), 533-543.

⁴⁰ C. Arenal, *Obras completas...*, p. 366 ss.

⁴¹ V. Pérez González, «Apuntes sobre...», p. 568 ss.

La legislación no fue, sin embargo, el único instrumento utilizado por el Estado para la realización de esa política social. El Instituto de Reformas Sociales, constituido como cuerpo consultivo y deliberante —agregado al Ministerio de Gobernación⁴²—, «encargado de preparar la legislación del trabajo en su más amplio sentido, cuidar de su ejecución, organizando para ello los necesarios servicios de inspección y estadística y favorecer la acción social y gubernativa en beneficio de las clases obreras»⁴³, fue otro de los medios. Lo cierto es que la creación de dicho instituto se venía ensayando fallidamente desde tiempo atrás. En 1855 Francisco Luxán (Ministro de Fomento) y Pascual Madoz (Presidente del Congreso) quisieron constituir, bajo la dirección de éste, una comisión encargada de «reconocer y apreciar en su justo valor las causas de las dificultades suscitadas entre los fabricantes y los trabajadores de nuestras provincias manufactureras, y proponer al Gobierno los medios más oportunos de terminarlo felizmente»⁴⁴, dicho proyecto no se llevó a cabo hasta que en 1883 Segismundo Moret (Ministro de Gobernación), creó una Comisión de Reformas Sociales que tuvo apenas veinte años de vida. Dicha comisión sería el precedente del Instituto de Reformas Sociales creado a iniciativa de José Canalejas (Ministro de Agricultura) en 1902. Compuesto por 34 vocales, 4 eran natos, 6 representaban a la patronal, 6 a los obreros y 18 eran elegidos por el gobierno. Azcárate, Maluquer, Santamaría de Paredes, Sánchez de Toca, Maura o Largo Caballero son algunos de sus componentes y en las secciones técnico-administrativas encontramos a Posada, Marv y lvarez Buylla. Dicho organismo se complementaba con el Instituto Nacional de Previsin que, como su nombre indica, se ocupaba de retiros, mutualidades, viudedades, seguros⁴⁵.

⁴² Todava no exista el Ministerio de Trabajo, prevista su creacin en 1914 fue aplazada a causa de la guerra mundial y llevada a cabo por el gobierno de Dato (Real Decreto de 9 de mayo de 1920; Gaceta 9 de mayo. El citado decreto adscriba al recin creado Ministerio del Trabajo el Instituto de Reformas Sociales, el Nacional de Previsin y diversos organismos y dependencias administrativas pertenecientes hasta entonces a otros departamentos.

⁴³ C. Bernaldo de Quirs, «El instituto de reformas sociales», *RGLJ*, 122 (1912), 209-216.

⁴⁴ C. Bernaldo de Quirs, «El instituto de...», p. 209.

⁴⁵ Ley de creacin de 27 de febrero de 1908.— Reglamento de entidades anlogas de 10 de diciembre de 1908.— Estatutos de 24 de diciembre de 1908.

Sin restar mérito al papel que representaron ambos organismos, hay que señalar que hubo entre los políticos conservadores, pero no entre las clases obreras, un afán de mostrar las reformas sociales como fruto de una política social consensuada entre empresarios y trabajadores: «en el Instituto de Reformas Sociales conviven y laboran, alimentados por idéntico ideal, patronos y obreros, y en él se discuten interesantes cuestiones sin acritud, con templanza, con benevolencia, al calor del deseo de aportar un beneficio, un alivio, una mejora a los que sufren y padecen»⁴⁶. La idea de armonía surgió como antídoto burgués contra la revolución⁴⁷. En otras palabras, frente al pesimismo e incluso fatalismo de muchos, mencionado una líneas más arriba, las fuentes nos hablan del optimismo e incluso chovinismo de otros que veían en la composición mixta, que albergaba a trabajadores y patronos, del Instituto de Reformas Sociales el ejemplo para Europa; optimistas desde luego si atendemos a que el porcentaje de participación de la clase obrera no llegaba ni al veinte por ciento⁴⁸.

El derecho social o las leyes sociales

La legislación social, como parte de esa política social de la que se acaba de hablar, le recordaba a Fernández Villaverde «por su forma administrativa y por su compleja estructura a las ordenanzas de los antiguos gremios, pero que en el fondo va reformando el derecho civil»⁴⁹. Para Azcárate «las leyes llamadas obreras o sociales son expresión de la aspiración, del deseo de resolver la antítesis existente entre el derecho privado y el público; de concertar las manifestaciones de estos dos elementos esenciales de nuestra naturaleza, el individual o autónomo, y el social o de subordinación; de restablecer la armonía entre el derecho sustantivo y las condiciones de la vida económica moderna; de emprender, en fin, el lento camino de las reformas para evitar el violento de las revoluciones»⁵⁰. Alentan-

⁴⁶ E. Dato. «Significado y representación...», p. 21.

⁴⁷ A. Montoya Melgar, *Ideología y lenguaje...*, p. 62ss.

⁴⁸ C. Bernaldo de Quirós, «El instituto de reformas...», p. 14 ss.

⁴⁹ R. Fernández Villaverde, Discurso leído en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación en la sesión inaugural del curso 1900-1901, p. 15.

⁵⁰ G. de Azcárate, *Discurso sobre...*, p. 31.

do a la sociedad a desarrollar ese espíritu social Canalejas, por su parte, decía que era de estricta justicia «admitir el factor social como elemento indispensable en la formación de las leyes»⁵¹.

Lo cierto es que en los ocho primeros años del siglo XX se promulgó en España un número considerable de leyes y reglamentos de legislación obrera⁵², en este sentido fueron muy dinámicos los tres años de gobierno de Maura (1907-1909). Hasta entonces, la legislación obrera, propiamente dicha, se reducía a dos leyes; una, reguladora del trabajo de mujeres y niños⁵³, y otra, prohibitiva de los trabajos peligrosos de los niños⁵⁴. Por otra parte, las primeras normas intervencionistas del Estado en materia laboral son normas de persuasión más que de coacción; en los primeros contratos de trabajo que se realizan en las obras públicas se recomienda a los alcaldes que den ejemplo al contratar: en las jornadas de ocho horas, en el descanso dominical, etc. Esta actitud del Estado frente a la intervención coactiva tenía su justificación en las denuncias y protestas de los empresarios que veían las medidas como violación de

⁵¹ E. Borrajo Dacruz, *Introducción...*, p. 114. El mismo Borrajo comenta que «la política social dio causa..., a la aparición de un derecho nuevo inspirado en la concepción social del mundo y de la vida».

⁵² Ejemplos de las más significativas: Sobre *Accidentes*: Ley de 30 de enero de 1900.— Reglamento general de 28 de julio de 1900.— Reglamento de incapacidades de 8 de julio de 1903. *Aprendizaje*: Proyecto de 1 de noviembre de 1906.— Proyecto de 29 de mayo de 1908. *Arbitraje y Conciliación*: Ley de 19 de mayo de 1908. *Contrato de trabajo*: Proyecto de 1 de noviembre de 1900.— Proyecto de 29 de mayo de 1908. *Descanso dominical*: Ley de 3 de marzo de 1904.— Reglamento de 19 de abril de 1905. *Enseñanza obrera*: Real decreto de 25 de mayo de 1900.— Reales órdenes de 22 de septiembre y 12 de octubre de 1903.— Real decreto de 4 de marzo de 1904.— Real decreto de 5 de mayo de 1905.— Reales decretos de 23 de septiembre y 4 de octubre de 1906.— Reglamento de 6 de agosto de 1907. *Habitaciones obreras*: Proyecto de ley de 3 de junio de 1908. *Huelgas*: Proyecto de ley de 12 de junio de 1908. *Inspección del trabajo*: Reglamento de 1 de marzo de 1908. *Salarios*: Ley de 12 de julio de 1906. *Trabajo de mujeres y niños*: Ley de 13 de marzo de 1900.— Reglamento de 13 de noviembre de 1900.— Ley de 8 de enero de 1907.— Real decreto de 25 de enero de 1908. *Tribunales industriales*: Ley de 19 de mayo de 1908.— Real decreto de 20 de octubre de 1908. Vid. E. Dato, «Significado y representación...», p. 27.

⁵³ Ley de 24 de julio de 1873.

⁵⁴ Ley de 26 de julio de 1878.

sus libertades. Esto y la falta de jurisdicción especial, provocó que las primeras leyes laborales no fueran cumplidas generalmente⁵⁵. Lo cierto es que durante las dos primeras décadas del siglo XX se pasa «de la etapa de policía obrera, a una etapa auténtica de legislación laboral, a la que todavía faltará el carácter sistemático, completo, propio de un ordenamiento específico decantado, pero que claramente son normas ya que atienden a una parcela autónoma como es la relativa a la cuestión social y que no cabe interpretar como una proyección de normas meramente gubernativas o de policía»⁵⁶.

Esta legislación obrera absorbía a su vez buena parte de la erudición científica e intelectual de la época. Comentarios a las leyes de accidentes, de salarios, del descanso dominical, de las habitaciones, etc., iban aumentando al compás de ese nuevo derecho que también crecía⁵⁷. En una palabra, el derecho social, nacido de la denominada cuestión social, aunque todavía joven y balbuciente, iba ganando cada día en substantividad y preparando el camino, por tanto, para alcanzar su autonomía jurídica.

3. *La creación y dotación de la cátedra*

En este contexto, en este periodo de iniciación o de cimentación del derecho del trabajo⁵⁸, es cuando aparece la primera cátedra de política social en España. En 1915 quedó vacante por jubilación una

⁵⁵ A. Montoya Melgar, *Ideología y lenguaje...*, p. 70 ss.

⁵⁶ C. Molero Manglano, «Un siglo de Derecho del Trabajo», *ICADE*, 46 (1999) 105-145.

⁵⁷ J. Maluquer y Salvador, «Accidentes de trabajo», *RGLJ*, 99 (1901), 201-206; J. Gascón y Marín, «La ley de coligaciones y huelgas», *RGLJ*, 103 (1903), 433-440; «La reglamentación del descanso dominical», *RGLJ*, 105 (1904), 289-301; «El artículo 4.º de la Ley de Accidentes de Trabajo», *RGLJ*, 114 (1909), 474-484; «Contribución al estudio de la definición legal del accidente del trabajo», *RGLJ*, 119 (1911), 57-66; V. Santamaría, *RGLJ*, «El descanso dominical», 103 (1903), 46-56; R. Fernández Villaverde, «las coligaciones industriales y las huelgas de obreros ante el Derecho», 100 (1902), 583-595; 101 (1902), 114-150 y 332-354; J. Ubeda y Corral, «Influencia del domingo en la frecuencia de los accidentes de trabajo», en *RGLJ*, 113 (1908), 409-414, este trabajo es estadístico; J. Santaló, «La acción patronal en el problema de los retiros obreros», *RGLJ*, 124 (1914), 90-118 y 274-304.

⁵⁸ C. Molero Manglano, «Un siglo...», p. 107.

cátedra del doctorado de la Facultad de Derecho en la Universidad Central de «Legislación comparada», ocupada hasta entonces por Azcárate. El veintidós de noviembre de ese mismo año, le propuso a la Junta de profesores de dicha facultad transformar la mencionada cátedra en otra de «Política social y legislación comparada del trabajo»⁵⁹.

La solicitud de Azcárate descansa fundamentalmente en dos motivos: primero en el creciente interés e importancia que va adquiriendo no sólo en España sino en toda Europa y América la ya mencionada cuestión social con su correspondiente legislación, y segundo, la falta de su estudio en la universidad española⁶⁰. Sus argumentaciones ante la Junta de profesores concuerdan con el contexto explicado anteriormente: «el estado de desamparo de los estudios sociales en las universidades y en las escuelas superiores, contrasta —dice Azcárate— con la importancia creciente de estas cuestiones y de las instituciones, incluso oficiales, a ellas concernientes, en la vida universal moderna». Esta situación de la que se lamenta Azcárate existe en España, pero no en el resto de Europa en donde «las universidades y las escuelas superiores y técnicas vienen dedicando a la legislación del trabajo, a la reforma social y a la pacificación de las luchas de clases de nuestros tiempos, estudios que tienen ya una sustantividad bien merecida en los organismos científicos oficiales, y hasta llegando en algunas a ser objeto de institutos especiales de preparación científica y práctica, bien para los investigadores de la realidad social y de las soluciones a sus complicados problemas, bien para los hombres de administración que han de ponerse al frente de los centros que todos los días organiza una eficiente burocracia del estado». Reforzando su argumentación, cita varios ejemplos europeos: «en Alemania hasta los dominios particulares de la política social, tales como la cooperación, el contrato del trabajo, el seguro en sus diversas modalidades, los accidentes de trabajo, el ahorro, la historia de los conflictos entre el capital y

⁵⁹ Archivo General de la Administración (AGA), Educación, (05) 019.001 32/07336.

⁶⁰ De la misma opinión era Palacios Morini: «lo que se estudia con verdadero ahínco en Francia, y ya en todas partes, es el «Derecho obrero», y comparando esta situación con la española, «mientras que en nuestras diez universidades no contamos una sola cátedra de «Legislación obrera». Véase L. Palacios Morini, *Las Universidades Populares*, Valencia, 1908.

el trabajo, las instituciones de mejor alimentación, las casas baratas, las relaciones internacionales del trabajo, tienen ya clases diferenciadas, cuando no seminarios especiales». Situación europea que contrasta con nuestro país en donde «no hay una sola cátedra de política social y de legislación del trabajo, apenas pueden rozarse sus asuntos someramente en otras enseñanzas».

Por otra parte —comenta Azcárate— «la cátedra de Legislación comparada cuyos principios y métodos ganan todos los días en importancia, la pierde como asignatura general unitaria por el carácter comparativo que van adquiriendo casi todas las asignaturas de derecho»⁶¹. Con ello quedaba justificada la solicitud de transformación de una cátedra en otra y no la de creación de una nueva.

La Facultad de derecho elevó al Ministerio la propuesta de Azcárate acompañada no sólo del aprobado unánime del claustro, sino también del juicio favorable que suponía la solicitud: «Oído el parecer de los demás catedráticos del claustro, por unanimidad se acordó aprobar la moción, y elevarla a VE a fin de que a su vez se sirva darle el debido curso. Con ello la Facultad no sólo cede a los argumentos incontrovertibles del Sr. Azcárate, sino que tributa a tan excelso maestro un merecido homenaje. Por sus trabajos en la Universidad, por los inestimables que realizó fuera de ella, en el Parlamento, en el Ateneo, en las Academias, en el Instituto de Reformas Sociales, en la vida de propaganda por la paz pública, inspirada en el mas riguroso y noble sentido legalista, D. Gumersindo de Azcárate representa en España eso: la política social, la legislación del Trabajo»⁶².

En el informe del Consejo de Instrucción Pública, asimismo favorable, se copiaron las razones que adujeron los profesores de la facultad para la transformación⁶³. En consecuencia y cumpliéndose todos los trámites pertinentes, pocos meses después se publicaba en la Gaceta de Madrid el tribunal examinador⁶⁴.

⁶¹ AGA, Educación, (05) 019.001 32/07336.

⁶² Junta de profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Central con fecha 22 de noviembre de 1915. AGA, Educación, (05) 019.001 32/07336.

⁶³ Real Orden 7 de marzo de 1916, *Gaceta de Madrid* de 20 de marzo de 1916.

⁶⁴ Real Orden de 13 de julio de 1916, *Gaceta de Madrid* de 14 de julio de 1916.

Dicha comisión quedaba encabezada por el propio Azcárate, entonces Consejero de Instrucción Pública, como lo exigía el Reglamento. Como vocales fueron elegidos Eduardo Sanz Escartín⁶⁵, José María de Olózaga, José Gascón y Marín⁶⁶ y Francisco Lastres⁶⁷. Veamos los suplentes: Adolfo González Posada⁶⁸, Francisco-Javier Jiménez y Pérez de Vargas, Antonio Royo Villanova⁶⁹ y José Maluquer⁷⁰. Lo cierto es que dicho tribunal no fructificó, por lo que fue necesario nombrar otro⁷¹. Esta nueva y definitiva comisión tenía a Azcárate como presidente, a José Gascón y Marín, como secretario y a Joaquín Sánchez de Toca⁷², Antonio Flores de Lemus⁷³ y Gabriel Maura⁷⁴, como vocales. Como suplentes fueron elegidos Adolfo Posada, José Maluquer, José María Olózaga y Eduardo Sanz Escartín⁷⁵.

La convocatoria tuvo una importante respuesta porque firmó la oposición un número elevado de aspirantes, veinticuatro⁷⁶.

⁶⁵ Académico (sin especificar).

⁶⁶ Ambos eran catedráticos (sin especificar).

⁶⁷ Era abogado, fue elegido como competente, pero renunció por motivos de salud.

⁶⁸ Académico (sin especificar).

⁶⁹ Catedráticos los dos (sin especificar).

⁷⁰ Competente (sin especificar).

⁷¹ Real Orden de 6 de septiembre de 1916, *Gaceta de Madrid* de 9 de septiembre de 1916.

⁷² Académico (sin especificar).

⁷³ Catedrático de Barcelona (sin especificar).

⁷⁴ Competente (sin especificar).

⁷⁵ Este último era académico y se disculpó diciendo que no podía aceptarlo «entre otras razones por la consideración que debo a la Real Academia de que soy secretario».

⁷⁶ Fernando de los Ríos Urruti; Jaime Algarra y Postius; Francisco Bernís Carrasco; Recaredo Fernández de Velasco Calvo; Francisco de Casso y Fernández; Juan Martín Mengod; Enrique Martí Jara; Juan de Hinojosa Ferrer; Plácido Álvarez-Buylla Lozano; Tomás Juan Elorrieta y Artaza; Pablo de Azcárate y Flores; José María Yanguas Messia; Armando Castroviejo Nabajas; Luis Olariaga y Pujana; Máximo Peña Mantecón; José Calvo Sotelo; Leopoldo Palacios Moroni; Domingo Villar Gragel; José Castillejo Duarte; Arturo Suarez Malfeito; Pedro Sargro y Ros de Olano; José López Soso; Rafael Díaz-Aguado y Salaberri; Hipólito González Rebollar. AGA, Educación, (05) 019.001 32/07336. La lista de los aspirantes admitidos y

La oposición se desarrolló en la facultad de derecho⁷⁷. En la primera reunión, a la que asistieron todos los miembros del tribunal, quedó constituido el tribunal y acordaron por unanimidad nombrar secretario a Gascón y Marín y a José Bugallo Sánchez⁷⁸. De la segunda reunión salió el cuestionario de temas que debían entregar a los opositores ocho días antes del primer ejercicio⁷⁹.

excluidos está publicada en la Gaceta de 9 de noviembre de 1916. Hipólito González Rebollar, notario, no fue admitida su solicitud por no justificar que reunía las condiciones que establecía el Reglamento.

⁷⁷ En dieciocho sesiones que supusieron veinticuatro reuniones, se realizaron en el salón de grados, en el decanato y en el museo laboratorio jurídico.

⁷⁸ Según el expediente como habilitado. También se les comunicó la renuncia de Sanz de Escarpín.

⁷⁹ Reglamento de 8-abril de 1910, de oposiciones a cátedras entonces vigente. Acompaño el cuestionario: 1.— Concepto de la política social. 2.— La política social como ciencia; límites de la objetividad de su conocimiento. 3.— Discusión acerca del «ideal» de la política social. 4.— Discusión acerca de la autonomía o de la heteronomía de la política social. 5.— Método de investigación procedente en la política social. 6.— Método procedente en la exposición y enseñanza de la política social. 7.— El denominado problema social ¿es un problema complejo o es esencialmente jurídico o económico o religioso o ético? 8.— Carácter general del denominado socialismo autoritario y conservador. 9.— Carácter general del socialismo católico. 10.— El llamado socialismo de cátedra; sus principales matices. 11.— Carácter general del socialismo radical y revolucionario. 12.— Marx. 13.— La doctrina sindicalista. 14.— El socialismo agrario. 15.— Concepto general del anarquismo como teoría social. 16.— El liberalismo y la reforma social. 17.— El solidarismo y la política social. 18.— Base de la distinción que procede hacer entre el individuo, la sociedad y el Estado en cuanto a la actuación que les corresponde en la política social. 19.— La acción positiva y la acción limitadora del Estado en sus funciones político-sociales. 20.— La política social en los municipios. 21.— La municipalización de los servicios públicos; su aspecto social. 22.— Los Institutos y oficinas del trabajo. 23.— Sucinta historia de la Asociación Internacional de los Trabajadores. 24.— La organización contemporánea de las clases trabajadoras; caracteres principales. 25.— La Asociación profesional obrera y la libertad de contratación del trabajo. 26.— Consideración especial de la personalidad de las asociaciones obreras. 27.— Historia de las *Trade Unions* en Inglaterra. Principales problemas del Tradeunionismo inglés contemporáneo. 28.— Historia de las *Gewerkschaften* alemanas. 29.— Historia de

los Syndicats ouvriers professionnels en Francia. 30.— Sociedades españolas de resistencia; su concepto; sus funciones sociales; tipos de organización. 31.— Las *Trade Unions* norteamericanas; su historia y características diferenciales. 32.— Organización política de los trabajadores en la Gran Bretaña. 33.— Organización política de los trabajadores en Francia. 34.— Organización política de los trabajadores en Alemania. 35.— La asociación patronal de resistencia, la asociación industrial y las corporaciones patronales. 36.— ¿Son compatibles los *Trust y Kartells* con el principio de libertad de contratación? 37.— Factores fundamentales de la formación histórica de las clases sociales. 38.— Concepción especial de las clases sociales. Indicación especial histórica respecto de los que fueron y de lo que hoy son. 39.— Influjo que en el actual modo de ser de la sociedad ha tenido el desarrollo de la asociación, del crédito y del seguro. 40.— Concepto de los *Trust y Kartells*; su significación desde el punto de vista social. 41.— Hasta qué punto cabe llevar a la esfera del *status* cosas que se habían dejado hasta hoy en la del contrato. 42.— Caracteres generales de las reformas procedentes en el derecho civil actual desde el punto de vista político-social. 43.— Géneros de propiedad que pueden tener las personas sociales necesarias. 44.— ¿Puede considerarse como ideal del derecho de propiedad el dominio individual, exclusivo y libre? 45.— Relación entre los propietarios de la tierra y los cultivadores. 46.— Funciones sociales de los fideicomisos; legislación comparada, la moderna tendencia reformadora en Prusia. 47.— Principales problemas de la denominada política social de las clases medias. 48.— La protección del empleado como una de las manifestaciones de la política social. 49.— La colonización interior como medio de modificar la constitución social. Examen de las principales colonizaciones desde este punto de vista. 50.— El patrimonio familiar; su protección legal. 51.— *Anerbenrecht*; su concepto; función social; legislación comparada. 52.— Exposición de las investigaciones modernas acerca de la proveniencia, selección, acomodamiento y destino de la población obrera de la grande industria. Valoración de los resultados. 53.— El contrato de trabajo; sus características; análisis del contenido del contrato de trabajo; formas fundamentales del contrato de trabajo; derecho público y derecho privado en la regulación de la relación de trabajo. 54.— El contrato de trabajo en la legislación española. 55.— Legislación comparada del contrato de trabajo. 56.— Jurisdicciones competentes para conocer de las incidencias de los contratos de trabajo. 57.— El contrato colectivo de trabajo; sus caracteres específicos. 58.— El contrato de trabajo en las legislaciones civiles. 59.— El contrato de aprendizaje como contrato de trabajo y como medio de formación profesional. 60.— Teoría del salario. 61.— Exposición crítica de las principales doctrinas acerca del salario. 62.— Sucinta historia del movimiento de los salarios. 63.— Formas del salario. 64.— Cuantía del salario.

¿Debe estar sometido a la ley de la concurrencia como una mercancía cualquiera? 65.— El salario en relación con la jornada legal. 66.— ¿Debe estar libre el salario de toda retención, confiscación, cesión y pignoración? 67.— Reglamentación positiva del pago de salarios. 68.— Remuneración del trabajo en forma de participación en los beneficios. 69.— Enumeración de las principales fuentes estadísticas de salarios. 70.— La lucha contra el paro forzoso; actuación política y actuación social en ella. 71.— La organización del mercado de trabajo; sus problemas principales; exposición de las constituciones propuestas para resolverlos. 72.— Legislación comparada de la organización de los mercados de trabajo. 73.— Las *Bousses deu Travail* en Francia como instrumento de resistencia y como instituciones protectoras del obrero. 74.— Exposición sistemática de las cuestiones fundamentales del seguro contra el paro forzoso. 75.— Examen crítico de las principales soluciones dadas al problema del seguro contra el paro forzoso. 76.— Enumeración de los órganos de la estadística del trabajo en los principales países; breve descripción de su funcionamiento. 77.— Consideración especial de la protección del obrero agrícola. 78.— El derecho a la huelga de los obreros y de los patronos al *Lockouts*. 79.— Reglamentación legal del derecho a la huelga. Principios generales. 80.— El arbitraje facultativo y la conciliación obligatoria, medios para solucionar los conflictos del trabajo. 81.— Restricciones del derecho a la huelga por razón de interés público. 82.— Exposición sistemática de los problemas fundamentales de la legislación protectora del trabajo en el régimen capitalista. 83.— Historia de la legislación protectora del trabajo en el Reino Unido. 84.— Reseña histórica de la legislación protectora del trabajo en Alemania. 85.— Exposición crítica del vigente derecho alemán protector de los menores trabajadores. 86.— Legislación comparada del derecho relativo al aprendizaje. 87.— Legislación comparada del trabajo en Francia. 88.— Legislación comparada del trabajo en Suiza. 89.— La jornada máxima en las legislaciones positivas. 90.— Principales problemas relativos al *Legal Wage*; legislación comparada; la experiencia del *Legal Wage*. 91.— El concepto legal del accidente de trabajo. 92.— El accidente del trabajo y la enfermedad profesional. Sus diferencias y consecuencias jurídicas del uno y de la otra. 93.— Teorías jurídicas relativas a la responsabilidad por accidentes del trabajo. 94.— Legislación española relativa en accidentes del trabajo. 95.— La reglamentación del trabajo a domicilio y la fijación de precios mínimos de éste. 96.— El descanso semanal de los trabajadores. Soluciones legales de dicho problema social. 97.— Aspecto político social de los seguros obreros. 98.— Los seguros para caso de invalidez y las pensiones a la vejez en Alemania. 99.— El seguro para caso de enfermedad en Alemania. 100.— El seguro para el caso de accidente del trabajo en Alemania. 101.— Seguro para el caso de accidente del trabajo en Francia. 102.— Pensiones de vejez

Los firmantes de la oposición quedaron reducidos a cuatro: Leopoldo Palacios Morini, Luis Olariaga Pujana, Francisco Bernis Carrasco y Recaredo Fernández de Velasco⁸⁰.

Dicho ejercicio consistía, según el reglamento, en la elaboración por escrito de dos temas del cuestionario extraídos al azar por uno de los concursantes. Fernández de Velasco, fue el elegido por sus contrincantes para extraer las bolas: «La asociación patronal de resistencia, la asociación industrial y las corporaciones patronales» y «El contrato de aprendizaje como contrato de trabajo y como medio de formación profesional», fueron los temas extraídos. Se les concedieron cuatro horas para que los desarrollaran en presencia del tribunal y por separado. Al día siguiente se procedió a la lectu-

en Francia. 103.— Seguro de accidentes del trabajo en el Reino Unido. 104.— *Old age* pensiones en el Reino Unido. 105.— Seguro para el caso de enfermedad en el Reino Unido. 106.— El Instituto Nacional de Previsión español. 107.— El servicio doméstico. Posibilidad de su regulación jurídica. 108.— Características de la dependencia mercantil desde el punto de vista de su protección legal. 109.— Concepto y significación general social de las sociedades cooperativas. 110.— Sociedades cooperativas de producción; condiciones peculiares de aplicación de esta forma de empresa; sus principales problemas de organización. 111.— Sociedades cooperativas de crédito; condiciones generales de existencia; campo de aplicación; tipos principales de organización. 112.— Sociedades cooperativas de consumo; su función general económica; sus principales funciones sociales; el problema de la concurrencia con el comerciante al por menor. Tipos principales de organización. 113.— De la asistencia pública; sus problemas fundamentales. 114.— La asistencia pública en el Reino Unido. 115.— La asistencia pública en Alemania. 116.— La instrucción y educación del obrero; su aspecto político social. 117. Las mutualidades escolares; su finalidad social. 118.— Las colonias de trabajadores; sus principales significaciones desde el punto de vista de la política social. 119.— La lucha contra el alcoholismo; actuación del Estado y de los Municipios; actuación social. 120.— El problema de la vivienda obrera. 121.— La iniciativa privada en relación con el problema de la casa barata. 122.— La actuación municipal en orden al problema de la casa barata. 123.— Influjo de los impuestos en la condición de la clase obrera. 124.— El derecho obrero internacional; su naturaleza y extensión. 125.— La asociación legal para la protección de los trabajadores. Examen de su actuación.

⁸⁰ Tomás Elorrieta y Artaza, compareció y fue admitido el día de la presentación, pero no se presentó al primer ejercicio.

ra de los trabajos, comenzando por Bernis. Le seguían Fernández de Velasco, Olariaga y Palacios, orden de intervención acordada en la reunión anterior por los propios opositores que se mantendría durante toda la oposición.

Durante los días primero y segundo de marzo se desarrolló el siguiente ejercicio. Cada candidato debía extraer de la urna cinco bolas de las ciento veinticinco que se correspondían con el citado cuestionario⁸¹. El tiempo que emplearon para desarrollarlo fue, como establecía el reglamento, de una hora, excepto Fernández de Velasco que invirtió veinte minutos menos que sus compañeros.

Para el tercer ejercicio, la comisión acordó elegir, entre varios temas propuestos, el de «Indicación de los principales problemas que a consecuencia del extraordinario empleo de mujeres en la producción industrial durante la guerra son de prever para la política social británica al concertarse la paz», concediendo a los opositores cuatro horas para su realización escrita. Al día siguiente fueron llamados los aspirantes por el orden ya establecido para dar lectura a

⁸¹ Por orden de intervención, estos fueron los temas extraídos. Bernis: «El llamado socialismo de cátedra, sus principales matices», «Sucinta historia del movimiento de los salarios», «Formas del salario», «Debe estar libre el salario de toda retención, cesión y pignoración» y «Teorías jurídicas relativas a la responsabilidad por accidentes del trabajo».

Fernández de Velasco: «Carácter general del denominado socialismo autoritario y conservador», «La municipalización de servicios públicos; su aspecto político-social», «El patrimonio familiar; su protección legal», «El contrato de trabajo; sus características; análisis del contenido del contrato de trabajo; formas fundamentales del contrato de trabajo; derecho público y derecho privado en la regulación de la relación de trabajo» y «Examen crítico de las principales soluciones dadas al problema del seguro contra el paro forzoso».

Olariaga: «Discusión acerca del ideal de la Política social», «Concepto general del anarquismo como teoría social», «El liberalismo y la reforma social», «Influjo que en el actual modo de ser de la sociedad ha tenido el desarrollo de la asociación, del crédito y del seguro» y «Géneros de propiedad que pueden tener las personas sociales necesarias».

Palacios: «Los seguros para caso de invalidez y las pensiones a la vejez en Alemania», «El seguro para caso de enfermedad en Alemania», «Seguro para caso de accidentes de trabajo en el Reino Unido», «Concepto y significación general social de las sociedades cooperativas» y «El derecho obrero internacional; su naturaleza y extensión».

sus trabajos y una vez finalizado el ejercicio el presidente les comunicó que se fijaría la lista de los opositores que el tribunal juzgara aptos para proseguir los ejercicios restantes y la convocatoria para la práctica del cuarto. Verificada la votación del tribunal al día siguiente en el decanato, no fue excluido ninguno.

Tal como establecía el reglamento, el cuarto ejercicio consistía en la explicación de una de las lecciones, de las tres extraídas a suerte ante el tribunal, del programa de la asignatura presentado por el propio opositor. Comenzó Bernis, como siempre, y de los tres temas insaculados eligió el relativo a la industria⁸². Se le facilitaron los libros que él mismo solicitó y entre los cuales había abundante bibliografía extranjera y quedó incomunicado durante ocho horas. Esa tarde volvió a reunirse el tribunal para la lectura o exposición de dicho candidato, que duró una hora aproximadamente. Hicieron objeciones Olariaga y Palacios invirtiendo cada uno veinte minutos y siendo contestados en quince por el actuante. Fernández de Velasco, que eligió el tema referente al sindicalismo⁸³, no recibió objeciones de ninguno de sus contrincantes. A Olariaga, que escogió el tema del proletariado⁸⁴, le ocurrió lo mismo que a Bernis, tuvo que

⁸² La industria. La propiedad privada de los medios materiales de la producción y la propiedad industrial. Los sistemas de explotación industrial. Las industrias. El fomento de la asociación industrial y las organizaciones representativas de la industria. Acción del Estado. Las subvenciones y los auxilios directos a la industria. Estudio de algunas disposiciones españolas. El R.D. de 31 de julio de 1915 sobre sindicatos industriales. La protección a la industria sedera, ley de 4 de marzo de 1915. La ley de protección a la industria nacional, 14 de febrero de 1907. Idem a la marina mercante, 14 de junio de 1909. Ley de ferrocarriles secundarios y estratégicos, 26 de marzo de 1908.

⁸³ El Sindicalismo; sus orígenes. Su tesis jurídica. Su concepción social. Sus premisas económicas; síntesis de sus fundamentos; técnica.

⁸⁴ Origen del proletariado (continuación). Peculiaridades históricas en el origen del proletariado de Inglaterra; carácter político de la causa que principalmente influyó en la formación de aquél proletariado. La peste negra en Inglaterra; sus efectos sobre la población, efectos indirectos sobre las rentas y salarios; consecuencias de la liberación de los villanos. Reacción legislativa, espíritu de la legislación social que sobrevino. Los estatutos de trabajadores de Eduardo III; disposiciones referentes a la huida de los siervos y el salario máximo; otras posteriores con igual orientación; ineficacia de estas medidas y razones.

defender su programa respondiendo a preguntas de sus oponentes. De los tres temas sacados a suerte por Palacios, dos de ellos fueron eliminados, al manifestar el resto de los concursantes que se hallaban en el caso previsto del artículo 28 del reglamento⁸⁵, volviéndose a sortear y una vez elegido el tema y elaborado por el opositor, recibió objeciones por parte de sus compañeros. Antes de levantarse la sesión, y previa la venia del presidente, el opositor Fernández de Velasco manifestó que él se retiraba de la oposición y por tanto no practicaría el quinto y último ejercicio en el que cada opositor debía defender su propio programa ante la comisión.

Una vez terminados los ejercicios, el tribunal procedió a la votación cuyo resultado fue el siguiente: Azcárate y Gascón y Marín votaron a Palacios, Sánchez de Toca y Maura a Olariaga y Flores de Lemus a Bernis. El presidente expuso que no habiendo llegado a obtener tres votos ninguno de los opositores, se iba a proceder a una nueva votación entre los dos que mayor número habían obtenido. El presidente y el secretario volvieron a votar a Palacios y los otros tres miembros de la comisión a Olariaga.

Ciertamente, por el expediente de oposición depositado en el AGA no se pueden conocer todos los elementos que suelen definir un concurso de este tipo; únicamente hay constancia del programa de Olariaga, no están reflejadas las objeciones que se hicieron unos a otros en el cuarto ejercicio, nada podemos saber de los ejercicios orales y las actas redactadas por Gascón y Marín son detalladas, aunque las descripciones son más de carácter burocrático que de valor científico. Pero, a pesar de ello, hay suficientes datos para pensar que fue una oposición bastante reñida, quizá por ello ha sido posteriormente tildada de brillante y ruidosa⁸⁶.

4. *El programa presentado por Olariaga.*

De lo primero que informa, o así puede parecerle *a priori* al jurista actual, el título de la cátedra que se está comentando es de su

⁸⁵ «Si alguna de dichas tres lecciones versara sobre materias antes tratadas por cualquiera de los opositores, se sustituirá por otra en la misma forma», art. 28 del Reglamento de 8 de abril de 1910 sobre oposiciones a cátedras.

⁸⁶ J. Velarde Fuertes, *Escritos de reforma, clásicos del pensamiento económico español, sobre Luis Olariaga Pujana*, Madrid, 1992.

carácter dual. «Política social y legislación comparada del trabajo», la unión de dos partes nítidamente señaladas y separadas que por su recíproca influencia se han juntado por motivos de práctica docente. En la actualidad, cada parte de esta asignatura de doctorado se corresponde con una rama científica distinta, interdependientes y mediatizadas la una por la otra, pero distintas. Posiblemente la certeza del rumbo doctrinal que ha seguido el derecho laboral desde sus inicios hasta hoy es lo que empuja a esta percepción. Se trata, sin embargo, de algo muy distinto. El título no puede ser más esclarecedor ya que indica a la perfección la concepción que había a principios del siglo pasado del derecho del trabajo. Las normas laborales, balbucientes y escasas todavía, eran parte de la política social, y de ahí el título. Obsérvese que no es «Política social y legislación comparada de derecho del trabajo», sino «del trabajo». No existe todavía un derecho del trabajo como tal, hasta ahora y desde un punto de vista jurídico el trabajo es objeto de legislación y de políticas sociales, pero nada más. La asignatura que se está alumbrando es de política social, no de derecho del trabajo. De hecho, esa dualidad virtual del inicio va desapareciendo según se va analizando el programa de la asignatura que el candidato ganador presentó en la oposición. Es cierto que la primera parte de dicho programa está dedicada a política social en sentido general y la segunda a lo que entenderíamos hoy en día como «derecho del trabajo», pero que entonces era política social especial. La relación entre ambas partes es inevitable, hay una interrelación constante porque conceptualmente van ligadas. Una vez aclarada la razón del título de la cátedra ocupémonos brevemente del contenido de la asignatura, de las lecciones que Olariaga iba a impartir a los alumnos según su programa.

Está compuesto de sesenta y una amplias lecciones. Leyendo sus epígrafes y subepígrafes es fácil hacerse una idea del contenido, son lecciones largas y detalladas. Creo interesante señalar, aunque sea brevemente, la sistemática del programa y se supone, por tanto, de su curso de doctorado.

Hay una primera parte introductoria —son las seis primeras lecciones— destinada al concepto, objeto y sujeto de la política social, a determinar su relación con las demás ciencias y analizar las distintas direcciones metodológicas imperantes.

A estos temas introductorios le sigue un grupo de veinte lecciones que podríamos denominar parte general y que, a su vez, se divide en tres bloques:

a) *Parte histórica*: se trata de una decena de lecciones referentes a las clases sociales y a las constituciones sociales a lo largo de la historia. En este sentido se remonta a Grecia, continúa con Roma, sigue con la edad media y termina con la moderna constitución social. Entre la edad media y la moderna dedica el autor cuatro temas al origen del proletariado. Son, como ya se ha dicho, los temas históricos en donde el eje principal es la propiedad de la tierra y el trabajo relacionado con ella. No se trata, obviamente, de un estudio sociológico o de unas lecciones de sociología sino de ésta relacionada con los dos factores de producción permanentes en la historia del mundo: la tierra y el trabajo del hombre y, por supuesto, de las políticas sociales llevadas a cabo por los gobernantes. Se trata de un recorrido detallado por las distintas civilizaciones en donde Olariaga menciona la legislación pareja a esas políticas o medidas sociales.

b) *Parte orgánica*: compuesta de cuatro lecciones —de la dieciocho a la veintiuna— está destinada a los órganos de la política social. Comienza con el Estado, distintas teorías sobre el mismo, los fines del Estado, su misión social, modos de intervenir y, dentro de dicha política del papel de los municipios, etc. Y en cada uno de estos subapartados cita Olariaga teorías y doctrinas de diversos autores. Continúa con el desarrollo histórico sindical de diversos países: Inglaterra, Alemania, Francia, Australia, Nueva Zelanda y España y termina con las cooperativas.

c) *Parte doctrinal política*: son seis lecciones —de la veintidós a la veintisiete— destinada a los partidos políticos y su política social. En la primera lección de dicho grupo comienza con el partido conservador inglés, sigue con Francia y la política de Napoleón III, Alemania y Bismarck, la postura protestante, la postura católica, etc., y continúa con los partidos liberales. A partir de la lección veintitrés y hasta la veintisiete se ocupa Olariaga de las doctrinas socialistas en todas sus versiones, pero antes de ello hace un estudio de la influencia del socialismo en general en varios países europeos: Inglaterra, Alemania, Francia, Italia y España. Después comienza el autor a definir y detallar las diversas doctrinas y a sus doctrinarios: el socialismo utópico, el socialismo científico, anarquismo, sindicalismo revolucionario, el comunismo, la escuela de reforma social, el liberalismo, el socialismo de cátedra, el solidarismo francés, el krausismo, el cristianismo social, etc.

Es a partir de aquí cuando comienzan las lecciones que hoy podríamos llamar de «derecho del trabajo», pero que, como ya se ha dicho, eran entendidas como la parte especial de la asignatura.

No obstante, las dos primeras lecciones de este nuevo grupo —veintiocho y veintinueve— sirven o son como una especie de nexo entre ambas partes del programa. En ellas habla de las clases que componen la sociedad contemporánea: comienza con la aristocracia, sigue con la clase media y termina con la proletaria. Recordemos que hay más temas de este tipo, pero son los históricos. Ahora es la sociedad del momento la que se está analizando y es aquí cuando se percibe con mayor nitidez el vínculo —del que se ha hablado— entre política social y derecho del trabajo porque estas dos lecciones no son únicamente de carácter sociológico, sino también económico-laboral. Especialmente ocurre esto en la lección referente a la clase proletaria, en donde el autor entra de lleno en extremos referentes al trabajo. En suma, el trabajo y por ende el derecho del trabajo es una materia eminentemente social.

En otras palabras con el proletariado empieza el bloque de lecciones laborales. Al principio aborda Olariaga todo lo relativo al trabajo en general: concepto, clases, condicionantes, etc. A partir de ahí es todo referente a la política obrera propiamente dicha: desocupación y colocación; el seguro contra el paro; la relación de trabajo y todo lo relativo a ella; política de salarios; los problemas de la legislación protectora del trabajo tanto de carácter general como referente a mujeres, niños, adultos, dependencia mercantil, trabajos agrícolas y domiciliarios e higiene y seguridad públicas, legislación de despido, conciliación, disolución del contrato, jurisdicción especial del trabajo; problemas del bienestar del obrero: seguros obreros de accidentes, enfermedad, maternidad, vejez, etc., subsidios, protección del ahorro, casas baratas, enseñanza técnica elemental y educación popular.

Insisto, el programa es amplísimo y el autor suele comenzar definiendo cada parte de la relación laboral a la que se está refiriendo, de las distintas concepciones teóricas, de los problemas que suscita, de las soluciones posibles con arreglo a esas teorías, de las instituciones, etc. Por último, y acorde con el título de la cátedra que se estaba creando, nos presenta de forma detallada la legislación comparada y las instituciones con las que cuenta una serie amplia de países no sólo europeos. En este sentido, se extien-

de mucho, porque el recorrido es prácticamente por toda Europa, América del norte, algún país de Sudamérica y Australia.

También se percibe al leer los múltiples epígrafes del programa, a pesar de la abundante legislación que cita, que las normas existentes y las instituciones al servicio de la política social no sólo eran escasas en todos los estados, sino también novedosas. Digo esto porque la legislación aparece como una sucesión de normas que se iban acumulando, pero sin formar parte de un todo, como si fueran leyes aisladas. Ese carácter novedoso o joven de la asignatura que está en proceso de creación queda patente también a lo largo del programa al comprobar que todo son intentos, proyectos, medidas preventivas, etc. Por otra parte, esa cantidad de soluciones y el carácter reciente de la legislación que cita nos informa de algo obvio, la conciencia generalizada del mundo occidental del peligro que entrañaba no dar respuesta al problema social. En este punto, el opositor resalta la importancia de la asociación de los distintos países de alcanzar una política conjunta internacional y de la dificultad que entraña⁸⁷. Puede ser que el tema dedicado a este último punto fuera incorporado después — una vez numeradas las lecciones— porque se trata de la lección cuarenta y ocho, pero al existir ya una lección con esa numeración el autor escribió el número de la misma a mano. Para terminar, Olariaga se ocupa en el último tema de las influencias sociales de la guerra europea.

Verdaderamente se trataba de un programa bastante ambicioso y difícil de cumplir durante un solo curso académico⁸⁸. Lo cierto es que el opositor estuvo impartiendo hasta que, debido a la reforma que supuso el Decreto de Ordenación Universitaria de 1944 en el que no se contemplaba esta cátedra de doctorado, Olariaga solicitó que se le nombrara catedrático de Hacienda Pública y Derecho Fiscal en la facultad de derecho por ser análogas y estar ésta vacante. Pero el Ministerio dedicó la dotación de la cátedra de doctorado a otra de Economía Política, nombrándole catedrático de la misma.

⁸⁷ Lección 48.

⁸⁸ Al parecer de Velarde, los cursos de Política Social que desarrollaba en el doctorado eran de una extraordinaria altura científica, atraían a multitud de oyentes y el cuadro de profesores ayudantes era muy importante. Vid J. Velarde Fuertes, *Escritos de reforma...*, p. xv.

Para terminar, hay que señalar que la memoria que presentó el candidato en la oposición fue sobre el problema agrario, pero de ello no voy a hablar aquí puesto que no es la figura del candidato, ni su formación académica lo que aquí se trata de exponer, sino de lo que supuso en la universidad española esta primera cátedra de «derecho laboral» o más propiamente de política social.

María José María e Izquierdo
Universidad Carlos III de Madrid

PROGRAMA PRESENTADO POR OLARIAGA EN LA OPOSICIÓN (22/01/1917)*

LECCIÓN 1

Concepto de la política social.— Vaguedad que domina en esta zona del conocimiento científico; falta de serias investigaciones sobre el concepto; necesidad de formarlo inductivamente. Concepto vulgar de lo social; la definición de Stammler; confusión a que conduce de la política social con la política colectiva. Posición de Stein en el problema; los dos elementos de la vida humana considerada como unidad; igualdad y desigualdad; comunidad y sociedad. Caracteres del movimiento social moderno. Puntos de vista que predominan en la consideración de la llamada política social; relación con el problema estrictamente obrero; relación con la actual organización económica; insuficiencia de los puntos de vista predominantes. Política social en un sentido amplio; ensayos sobre la base de esta tendencia. Política social en un sentido restringido; ensayos sobre la base de esta tendencia. Punto de conexión en la diversidad de conceptos. El problema de la posibilidad de una política social en todos los tiempos y con todas las organizaciones. Exigencias reales de toda política; modo de satisfacerlas.— Límites de la política social dentro de la actual organización social; determinación del concepto de la política social.— Clases de política social.— La política social de la clase aristocrática; de la clase media; de la clase proletaria.— Predominio actual de la política social de esta última clase; sus causas; consecuencias de la organización económica capitalista para el obrero.— La función del Estado en el problema.— Motivos de la política social: 1) éticos; 2) religiosos; 3) políticos; 4) económicos; 5) culturales; 6) sociales.— Métodos de la política social; límites de acción para toda política social actual; límites teóricos; límites prácticos; diversas direcciones en cuanto al método.

Relación entre la política social y la Legislación del Trabajo.— El Derecho social; transformaciones modernas del derecho privado; sentido de dicha transformación; paulatina adaptación del Derecho a las condiciones sociales.— Concepto y límites de la Legislación del Trabajo.— La Legislación comparada del Trabajo.

* Este programa ha sido copiado literalmente en la puntuación, subrayados, etc. Aquellas palabras, frases o correcciones hechas a bolígrafo por el autor, también se han mantenido y especificado en nota al pie. No obstante he de advertir que —por el motivo que fuera, quizá por falta de tiempo— el autor no siguió un criterio fijo en la puntuación, a veces utiliza «punto y coma» y en otras «dos puntos». Lo mismo ocurre con el «punto y seguido» y «punto y guión». Por otra parte, muchas veces no se lee bien la puntuación por defecto de la máquina de escribir que utilizó.

LECCIÓN 2

La política social como ciencia; Contenido del problema.— ¿Es posible un ideal objetivo?— Condiciones lógicas que debe satisfacer; el problema de la autonomía o heteronomía de la política social? ¿En qué sentido el ideal no puede alcanzarse?; doble concepción del ideal; el ideal como representación sensible y el ideal como criterio meramente forma; predominio actual de la primera representación.— El problema del ideal en el materialismo histórico y en el llamado socialismo científico.— Dirección radical y dirección evolucionista; la coexistencia en esta concepción de la necesidad en el desenvolvimiento histórico y de la posibilidad de una acción política.— Negación de la fatalidad del desenvolvimiento histórico.— Dirección radical; las utopías.— Direcciones reformistas; socialismo católico; significación fundamental de la revelación en la formación del ideal en el socialismo católico.— El socialismo cristiano protestante.— Dificultad de la creación de un ideal social de carácter religioso sin el supuesto de la revelación.— Examen de los distintos matices de la escuela socialista cristiana desde este punto de vista.— Criterio lógico racionalista con ideal sensible; influencia de la escuela clásica del Derecho natural.— El ideal como criterio meramente formal.— De la determinación de los fines concretos de la política social; el nacimiento del fin concreto como aspiración; la crítica del estado de cosas presente en cada caso; el «sentimiento» de las «imperfecciones» sociales.— Formación de estados generales de conciencia en este respecto.— Posibilidad de la determinación científica de la relación de dependencia entre las causas del malestar social y la organización social presente en cada caso o alguno de sus elementos.— Límites impuestos a la determinación de los fines concretos.— Dependencia de los fines concretos de las condiciones históricas.— ¿Es la previsión científica de los futuros en lo social?— Inseguridad de la determinación de los efectos de los medios de acción puestos en juego para realizar cada fin concreto.

LECCIÓN 3

El sujeto activo de la política social desde el punto de vista de la objetividad del conocimiento de esta última; el problema fundamental. ¿Cabe deducir de la naturaleza de cada sujeto de la política social los fines concretos cuya realización le compete? — Examen de las principales doctrinas reinantes en este respecto; la escuela clásica del derecho natural, el liberalismo, el historicismo, el neo-kantismo.— De los medios directos y de los indirectos.— Identidad fundamental entre ambas categorías.— Razón de su distinción.— Dependencia de ésta de la esfera de acción del sujeto respectivo.— Los efectos conexos.— Las limitaciones inherentes a la previsión del fin concreto los son también el conocimiento de los efectos conexos.— El positivismo.

Relación de la ciencia de la política social con las otras disciplinas científicas; posición de la política social en el sistema de la política; relaciones

con la ciencia del Derecho; consideración particular de la técnica legislativa en este respecto.— Relaciones con la Ética.— Con la Eugénica.— Con la Estadística.— Doble carácter de esta última relación.— Consideración particular de la estadística matemática; referencia a los principales ensayos modernos de aplicación de estadística matemática o la política social . Relaciones con la Historia.

Significación de la política social; de la significación para lo científico profesional; de la significación para el jurista; de la significación para el historiador; de la significación para el político; de la exigencia de la acción política; de la estimación de los imponderables y en especial de la estimación de las fuerzas sociales; de la apreciación e interpretación de las corrientes de opinión.— Determinación de la resultante.

LECCIÓN 4

Los métodos de la ciencia social.— Los fines de la investigación.— El método; su concepto.— Breves nociones lógicas sobre el concepto del método; sus clases.— De los métodos aplicados al estudio de la ciencia social.— Del método inductivo; su concepto.— La investigación social mediante el método inductivo; punto de partida de la misma; la observación.— Valor de la misma para el conocimiento de los fenómenos sociales.— La observación en las ciencias físicas; la experiencia.— De la hipótesis y su función en la investigación social.— El proceso y el término del método inductivo.— De la llamada inducción completa e incompleta.— De la causalidad; su concepto.— Necesaria comprobación de los resultados de la investigación realizada mediante hipótesis.— Los hechos como punto de partida y como término de la investigación social .— El método deductivo; su concepto; su procedimiento, sus formas.— De las premisas.— Limitación de la construcción deductiva.— Valor de la deducción en la investigación científica; su carácter particular de la deducción social en este respecto.— De las leyes sociales; concepto de la ley; distinción en las modalidades de la ley desde el punto de vista crítico del conocimiento.— Las leyes naturales; sus características; las regulaciones meramente empíricas y regularidades en función de causa.— Las llamadas leyes históricas.— Leyes de coexistencia y leyes de sucesión.— Composiciones particulares metodológicas.— El método estadístico; su concepto y características; su relación con el inductivo.— Procedimientos estadísticos; de las series.— De la aplicación del método estadístico a la ciencia social, función que desempeña en la investigación social.— Las informaciones y las monografías; su significado para la ciencia social; procedimiento metodológico propio de las mismas.— Del método histórico; su concepto; sus funciones.— Del documento, su carácter y significación.— La exigencia crítica; diversas operaciones de la crítica.— De la investigación.— De los hechos probables; concordancias entre observaciones independientes; agrupación de los hechos de la llamada construcción histórica en las ciencias sociales.— De las causas, de las condiciones en los hechos sociales y especialmente en los socia-

les.— El método matemático; sus modalidades fundamentales; El método matemático clásico.— El llamado método neo-matemático.

Plan ¿Es posible la formación *a priori* del plan de la política social? El plan determinado por el objeto. ¿Es posible la formación de un plan absolutamente objetivo? Elementos subjetivos en la determinación del plan; el valor del plan.

LECCIÓN 5

Las direcciones metodológicas de la ciencia social.— El estado de los estudios lógicos, el carácter de los problemas concretos que atraen preferentemente la atención de los investigadores de la ciencia social en cada época y el grado de desarrollo de las investigaciones como determinantes de la dirección metodológica predominante.— La influencia de la dirección deductiva de la escuela del derecho natural en la primera sistematización francesa de la Economía por los fisiócratas.— La metodología de los moralistas ingleses y A. Smith.— Predominio definitivo de la deducción en la economía clásica.— La reacción contra el predominio de la deducción; el realismo; influencia del método histórico en el renacimiento de la ciencia social; sus antecedentes filosóficos.— Lo abstracto y lo concreto.— El concepto de causa.— La observación.— Distinción entre ciencias naturales y ciencias históricas.— El historicismo en Alemania; la primera fase; dualismo filosófico de los historicistas antiguos.— Leyes de sucesión y coexistencia.— List, Schütz, Roscher, Knies, Hildebrand y Baumstark.— Lo ético en Hildebrand. = El positivismo francés; su relación con el desenvolvimiento de las ciencias experimentales.— La «filosofía positiva» de Augusto Comte.— Significado del concepto «positivo».— Precursores escoceses de Comte.— La unidad de la conciencia subjetiva en Comte.— Su «ley de los tres estados»; caracteres de cada uno de ellos.— Teoría de la relatividad del conocimiento científico.— Clasificación de las ciencias.— La sociología como ciencia.— Estadística y dinámica social (leyes de orden y leyes de progreso).— Los discípulos de Comte.— Repercusión del positivismo en Inglaterra; John Stuart Mill.— Su primera época; psicologismo abstracto.— Su segunda época; influencia de Comte; método experimental.— Los evolucionistas; Darwin y su teoría de la evolución de las especies; la «lucha por la existencia» y la «selección natural».— Herbert Spencer.— El concepto de causa y el de evolución.— La teoría de la evolución.— Influencia del medio ambiente.— La herencia.— Caracteres de la evolución; concentración; diferenciación y determinación.— Huxley.

LECCIÓN 6

*El historicismo moderno como dirección metodológica*¹; su principal diferencia con el antiguo; su negación de toda universalidad.— El concep-

¹ Escrito a mano «como dirección metodológica».

to histórico; su relatividad; el conocimiento histórico como conocimiento esencial.— Schmoller, Held, Cohn, Bücher y Hasbach.= Otras escuelas históricas; Loocke², Newmarch, Rogers y Ashley, en Inglaterra.— Depping, Bourquelet, Levasseur y Pigeonneau, en Francia.— Laveleye, en Bélgica.

El neo-kantismo; El racionalismo de Dietzel y Wargner.— Principios de la nueva escuela.— La causalidad como condición del conocimiento.— La ley como expresión de la unidad incondicionada del conocimiento.— Ley y regla.— Causa y finalidad.— La determinación física del materialismo y la política social.— El idealismo social.— El monismo social de Stammler; el derecho como forma y la economía como materia de la vida social; la unidad en la cooperación.— Alvert, Hesse, Biermann y Windelband.— Dirección rickertiana; la teoría de los valores de Rickert.— El valor ético y su significación con respecto a los demás valores.— Ciencias naturales y ciencias culturales.— El Idealtypus.— Rickert y Max Weber.

El subjetivismo abstracto.— La escuela psicologista austriaca; sus coincidencias con la escuela clásica inglesa; la polémica con los historicistas; su teoría pura de la estimación objetiva.— Carl Menger, Bohn von Bawerk, von Wieser, Sax, Zuckerkandl, Philippovich.— Marshall en Inglaterra.

El neo-positivismo; sus afirmaciones fundamentales; su influencia en los métodos de investigación de la ciencia social³; diferencia entre neo-positivismo y matemáticos.— Escuela inglesa; Edgeworth, Karl Pearson,— «The Grammar of Science» de Pearson; límites de la ciencia; la ciencia y el método; la ley científica; la probabilidad.— La revista «Biometrika».— Norteamericanos de la escuela inglesa; «Law Wages» de Moore.— Escuela italiana; Barone, Benini, Bresciani, Graziani.— Aplicación de los nuevos métodos a la teoría colectivista, por Barone.— Resistencia de los economistas a recibir los métodos del neopositivismo.— Excepción de Ahumpeter.

Las fuentes del conocimiento; clasificación. Breve referencia a las fuentes subjetivas del conocimiento. Las fuentes externas para el conocimiento de la Política social y de la legislación del trabajo; los fenómenos sociales; su ordenación, clasificación y relación en el material estadístico; las informaciones; los documentos; la legislación, museos nacionales; congresos obreros. Elaboración ulterior de estas fuentes. La producción científica, sus órganos principales; revistas, monografías, tratados. Los congresos científicos. Las investigaciones; sus órganos propios. La estadística, sus clases. La enseñanza de la política social y de la legislación comparada del Trabajo; sus funciones principales. Significación de la política social y de la legislación comparada del Trabajo; a) significación meramente cien-

² Escrito a mano.

³ A continuación de este; hay una frase escrita pero tachada a bolígrafo «su tendencia a convertir la ciencia social en una ciencia exacta».

tífica para el sociólogo; b) significación para el profesional de otras disciplinas; c) significación para la vida práctica; para el político; para el abogado; como conocimiento de cultura general.

LECCIÓN 7

Las clases sociales; = Procesos de diferenciación y de integración en la Sociedad; fuerzas que actúan en cada uno de ellos.— Conceptos de las clases sociales; dificultades para caracterizarlas objetivamente.— Teoría subjetiva.— Formación de las clases; causas principales; a) la raza; teorías que basan en la raza la constitución de las clases sociales; los tipos étnicos y la herencia; b) la división profesional; división del trabajo; punto de vista de Schmoller; influencia de la «división profesional y social del trabajo» en la constitución de las clases; fases de la división del trabajo que influyen; modalidades físicas e intelectuales que derivan de la naturaleza del trabajo; comunidad de intereses e ideales dentro de la profesión; transmisión de las habilidades profesionales, por herencia o tradición; importancia de la educación para contrarrestar esta tendencia; c) la distribución de la fortuna y de la renta; doctrina socialista; simplicidad de la misma.

Influencias jurídicas que modifican las clases sociales.— Diversidad de las clases; clases cerradas; carácter de las primeras clases sociales; «las castas»; los estados.— Clases abiertas.— Creciente complejidad de la constitución de las clases.— Clases funcionales y clases que han perdido su función; fundamentos para que conserven una valoración social estas últimas.— Coexistencia o superposición de las clases en la vida social; intereses comunes e intereses antagónicos; carácter de unos y de otros.— Clases dominantes y clases dominadas; origen de la dominación de clases; medios de dominación; dominación política; sus estadios; dominación económica.— Las luchas de clases como consecuencia de la dominación de clases; relación entre la importancia de los cuerpos sociales y el antagonismo de las clases.— Épocas de paz y épocas de luchas sociales.— Luchas por el Derecho público; luchas por el Derecho privado; luchas por la distribución de la renta.

LECCIÓN 8

Constitución social de Grecia.— La propiedad familiar de la tierra en los últimos primitivos de Grecia; sus efectos sociales.— Expansión colonial en busca de nuevas tierras.— Evolución de la propiedad hacia una parcelación paulatina de las tierras.— La propiedad agraria y los derechos políticos.— Las guerras civiles a causa de la propiedad.— La plebe y la tiranía.— Las confiscaciones de los tiranos y el nacimiento de una clase media de propietarios.— Relación entre la difusión de la propiedad y la democracia.— Las clases sociales en Grecia.— Los ciudadanos; La cuestión acerca de su participación en la producción de la riqueza.— Opiniones sobre el trabajo que predominaba entre las clases directoras de Grecia, especial-

mente Esparta.— Aristócratas, pequeños propietarios, arrendatarios y asalariados.— El problema de los asalariados. Los libertos; su incapacidad para poseer inmuebles.— Los extranjeros o metecos; su condición jurídica; sus ocupaciones principales.— Los esclavos; ¿existía la esclavitud en los tiempos homéricos?— Diferentes modos de perder la libertad en Grecia.— La esclavitud por guerra, piratería, compra o donación.— Los mercados de esclavos.— El alquiler del trabajo servil.— La esclavitud voluntaria como garantía de seguridad económica.— La esclavitud por deudas.— Medidas legislativas de Solon en Atenas para evitar ésta última clase de esclavitud.— Organización de la producción agrícola.— Consideración familiar del esclavo.— Cambio mutuo de trabajo a solicitud.— Los arrendatarios.— Condiciones onerosas de los arriendos.— La industria doméstica; predominio del trabajo servil en la misma; importantes funciones que en ellas desempeñan las mujeres.— El comercio y la industria; clase de personas que en ello se ocupaban.— Los extranjeros y el comercio exterior.— Los oficios; escasa diferenciación profesional en muchos de ellos.— Importancia del artífice en otros.— ¿Existieron en Grecia las corporaciones profesionales?— La libertad industrial.— El trabajo para una clientela.— Clases de salario.— El trabajo organizado en empresa.— Concurrencia del trabajo servil.— Monopolio del trabajo minero por los esclavos.— ¿Intervenía el Estado en la regulación de las condiciones de trabajo?— La política social en Grecia.— Los socorros en las ciudades.— Asistencia del Estado a los obreros enfermos o inválidos.— El problema histórico acerca de la obra comunista de Licurgo en Esparta.— Solon en Atenas; liberación de los esclavos por deudas y aseguramiento de la libertad individual.— Anulación de las hipotecas.— Su reducción de las deudas y alteración del valor de la moneda para evitar perturbaciones.— Institución del testamento como medio de contribuir a la parcelación de tierras.— Las ideas socialistas en la filosofía griega.— *La República* y *Las leyes* de Platón.— *La política* de Aristóteles.— La «Constitución de Atenas» del mismo.

LECCIÓN 9

Constitución social de Roma.— La economía de pastoreo de los primeros tiempos. Aparición de la propiedad privada.— El *ager publicus*.— Los esclavos en la agricultura y en los oficios.— Los clientes; su origen, derechos y carácter social.— Organización de la producción agrícola.— Nacimiento de la gran propiedad agraria.— Efectos de la usura en la concentración de la propiedad.— Preceptos contra la usura en la ley de las Doce tablas.— Ineficacia de los mismos.— Patricios y plebeyos.— Detentación del *ager publicus* por el patriciado.— Intento de Spurio Casio de repartir entre la plebe parte del *ager publicus*.— Leyes Licinia y Sextia.— Sus disposiciones contra la usura y su imposición de limitaciones a la posesión del *ager publicus*.— Ley Papiria humanizando los derechos del acreedor.— Las conquistas de Roma y sus efectos en la pauperización de la plebe.— El

reclutamiento de agricultores para la guerra y la importación de esclavos como causas determinantes de la destrucción de la pequeña propiedad.— La concurrencia de la gran explotación servida por los esclavos.— El trabajo de los esclavos invade la agricultura, la industria, las artes y el comercio.— *Los Collegium*; su carácter y sus clases.— Economía de la «Villa».— Esclavizamiento de los antiguos trabajadores libres.— Concentración de la riqueza.— La crisis social resultante; luchas entre patricios y plebeyos; agitación de los esclavos.— La reforma social; proyectos de las leyes agrarias de Licinio Craso y Cayo Lelio; los Gracos.— Tiberio Sempronio Graco; su ley agraria.— Disposiciones para recuperar el *ager publicus* detentado, limitar la extensión de las propiedades y distribuir en lotes de tierra recuperada.— Resistencia de los aristócratas a la reforma de Toberio Graco.— Persecución de Tiberio Graco.— Éxito de su ley en cuanto a la creación de pequeños propietarios.— Intervención de Escipión Emiliano en la lucha por la reforma social.— Las reformas de Cayo Graco; disminución del tiempo de servicio militar; reparto a bajo precio del grano del Estado entre los pobres de Roma; organización de la emigración de pobres a las colonias y distribución del territorio colonial entre los mismos.— Maniobras del Senado para quitar relieve a las reformas de Cayo Graco; Leyes Livias repartiendo gratis el grano del Estado, fundando colonias en Italia y distribuyendo lotes de tierra en propiedad absoluta transmisible y libre de impuestos.— Triunfo de la aristocracia y abandono de la reforma social.— Intentos posteriores de reanudar la política de los Gracos por parte de Publio Servilio y Catilina.— Intervención de Cicerón.— El triunfo del despotismo y la decadencia de Roma.

Caída del Imperio Romano; causas internas que determinaron su descomposición; la oligarquía militar; los latifundios.— Causas externas; el Cristianismo como elemento transformador de una organización despótica y decadente; su espíritu humanitario; la invasión de las razas del norte.

LECCIÓN 10

Constitución social de la Edad Media.— Antecedentes.— Nuevos elementos sociales.— Antecedentes de los pueblos del norte; sus sistemas de organización.— *Sistema celta*; el clan; tierra que ocupaba; propiedad en común y distribución en lotes para aprovechamiento privado.— *Sistema eslavo*; la familia; tierra que ocupaba; su economía comunista.— La Zadru-ga.— *Sistema germánico*; independencia económica del cabeza de familia y estabilidad de su propiedad.— La aldea germánica primitiva; su organización democrática.— Tierras de explotación particular y tierras de aprovechamiento comunal.— La capacidad productora en la familia como norma para la asignación de terreno; la Hufe.— La Gewann.— Distribución de la Hufe en la Gewann.— El Flurzwang.— Los aprovechamientos comunales.— *Los anglosajones*; «Village Communities» en Inglaterra; su organización comunista graduada con arreglo a proposición entre dere-

chos y deberes.— Regulaciones para cultivar en común la tierra así como para obtener en común los aprovechamientos.— *Los pueblos nómadas de Asia*; su estancamiento en Europa; su economía de pastoreo; la comunidad de la Marca; división de la tierra en Hufeuland y Almende.— Mezcla de los viejos y nuevos elementos de organización social; necesaria diferenciación de sus resultados en los distintos países.— La constitución social del campo en la Edad Media.— Influencia del derecho romano en la individualización de la propiedad inmueble.

LECCIÓN 11

Constitución social del campo en la Edad Media; Época feudal.— Regresión de la economía monetaria a la economía feudal; sus causas.— Periodos de la evolución feudal.— Primer periodo.— Las tierras domaniales en las Monarquías del comienzo de la Edad Media; asignación de las mismas a las instituciones eclesiásticas y a los nobles.— Inmunidades y beneficios.— Comienzos de concentración territorial.— Época carlovingia.— Disolución del Imperio de los francos; paso del poder político a los grandes propietarios los ejércitos de los nobles.— Respetos y exigencias del señor feudal con respecto a los bienes de los colonos.— Economía del castillo feudal; la granja señorial y la tierra del patrimonio; prestaciones reales y prestaciones personales de los colonos.— Trabajos domésticos del castillo; multiplicidad de los servicios interiores; consideración de los sirvientes.— Organización y dirección de los trabajos; las «Rectitudines» en el sistema manorial inglés.— Otras clases sociales en este sistema; cultivadores de la «Gafolland», «cttajers» y «geburs».— *Señorío personal.*— Necesidad en que se veía el campesino aislado de acogerse a algún poder que lo protegiera; clase y forma en que se establecían las relaciones entre protector y protegido.— Los «homines proprii et solidi» en Cataluña; la institución de «soke» en Inglaterra; la behetría española.

Segundo periodo de la evolución feudal; el señor extiende su poder a todos los bienes inmuebles y personas comprendidas dentro de su territorio; su plenitud de jurisdicción; deberes que impone a los siervos.— Prohibición a los siervos de abandonar el territorio señorial.— Interés económico del señor por fijar en la tierra al cultivador.— Los siervos de la gleba.— Los payeses de remansa en Cataluña.— *Efectos de las conquistas durante la época feudal.* = Invasión de los normandos en Inglaterra; su plan de reorganización feudal; sustitución de los antiguos «Manor» y subenfudación de los mismos.

Tercer periodo de la evolución social; disolución del feudalismo; renacimiento de la economía del dinero y conversión de la gran propiedad inmueble en simple instituto de renta.— Fenómenos económicos que determinaron esta transformación; crecimiento de la población; sus efectos; falta de estímulo de los siervos para cultivar las tierras.— Diversas teorías sobre el origen de la acumulación de capital en las ciudades; desenvolvimiento del comercio internacional.— Influencia de la ciudad en el campo;

necesidades económicas de los señores; ventajas económicas de liberar a los siervos y transformar en renta sus prestaciones; formación de los arriendos libres y de la pequeña propiedad; comienzo de la capitalización de la tierra por el dinero de la ciudad.

LECCIÓN 12

Constitución social de la ciudad en la Edad Media.— Orígenes de las ciudades; diversidad de los mismos; principales categorías históricas.— Burgos, ciudades eclesiásticas y ciudades comerciales.— Formación de mercados y nacimiento de la burguesía.— *Evolución social* de la ciudad medieval; primera fase; formación de los gremios.— Los gremios de comerciantes.— El comercio ambulante en los primeros siglos de la Edad Media.— Origen, organización y finalidad de los gremios de comerciantes; sus dos fases; transitorios y permanentes.— Los gremios de artesanos.— Origen de la clase cortesana; los trabajadores libres del castillo feudal; la industria ambulante.— El artesano libre; forma de su trabajo.— Los gremios de artesanos; discusión acerca de sus orígenes y de sus fines.— Organización comunista de la ciudad.— El Concejo.— Atracción de la población del campo a la ciudad; el Derecho de asilo.— Esfuerzos de los señores territoriales para evitar la huida de sus vasallos; la lucha entre ciudad y campo.

Segunda fase; florecimiento de los gremios; los gremios como organizaciones profesionales.— Omnipotencia del concejo en las ciudades; su regulación de los mercados y limitación del número de gremios.— Luchas entre los gremios y el concejo; esfuerzos de aquellos para apoderarse del gobierno de la ciudad.— *Tercera fase;* supremacía de los gremios; sus medidas aduaneras para conseguir el monopolio del mercado local, su regulación de la concurrencia, nivelación de los ingresos, limitación del número de oficiales y aprendices, fijación del salario así como de la jornada de trabajo, prohibición del trabajo nocturno, determinación del tiempo y condiciones del aprendizaje; regulación de la emigración de oficiales; vigilancia de la moralidad en la producción; policía y tribunales industriales; sus medidas de asistencia; consideración familiar de oficiales y aprendices, auxilios a los mismos en caso de enfermedad, hospitales gremiales y socorro a los asociados enfermos o necesitados. (toda la parte subrayada es un apartado copiado literalmente). *Hechos externos que más influyeron en la economía de las ciudades medievales.*— *Primer periodo;* florecimiento económico de las ciudades.— El comercio con Oriente.— Tráfico en el Mediterráneo; las repúblicas italianas.— Tráfico por el Rhin y el Danubio; las ciudades del centro de Europa.— El comercio del Báltico; formación de la liga hanseática; sus fines.— *Segundo periodo;* desplazamiento del comercio internacional; obstrucción de varias rutas asiáticas por las tribus del interior; conquista de Mesopotamia, Arabia y Egipto por Selim I y cierre de todos los caminos a la India; destrucción por los portugueses de la ruta marítima de la India y descubrimiento del Nuevo Mundo.— Ruina consi-

guiente del comercio de la Europa central con Oriente y decadencia de las ciudades italianas y alemanas.

LECCIÓN 13

Origen del proletariado.— El proletario; consideración del problema desde el punto de vista económico y jurídico; diferencia entre el proletario y el esclavo; diferencia entre el proletario y el siervo.— Formación de las primeras masas de proletarios; variedad de procesos que ha seguido dicha formación en los principales países de Europa; notas generales comunes a todas ellas; hechos importantes que influyeron en la proletarización:

A = En el campo; a) pauperización de los campesinos; crecimiento de la población en Europa en la segunda mitad de la Edad Media; parcelamiento progresivo de los arriendos y consiguiente empeoramiento de la situación económica del labriego.— Influencia de la ciudad en el campo; desarrollo del comercio de las ciudades y formación de capitales; estímulos que despertó en los señores territoriales la acumulación de riqueza en las ciudades; creación de nuevas aristocracias y carácter de las mismas; el capitalismo en el campo; disminución de los precios de los productos agrícolas; desarrollo de la industria doméstica y posterior decadencia en el período de la manufactura; paulatino aumento de las cargas impuestas a los labriegos y sus dificultades económicas; medidas políticas que contribuyeron a aumentar estas dificultades; los levantamientos de los campesinos; concomitancias con las guerras religiosas; persecuciones de vagabundos. b) Liberación de los siervos; aumento del dinero circulante a consecuencia del desenvolvimiento del comercio; ventajas económicas para los nobles de transformar en rentas o en dinero los servicios feudales; influencia de los reyes y de las ciudades en la liberación de los campesinos; el derecho de asilo en las ciudades; acontecimientos políticos más decisivos en la disolución de las obligaciones feudales.

B = En la ciudad; proletarización de los artesanos; nacimiento y desarrollo del espíritu capitalista; decadencia de los gremios; corrupción de su espíritu de solidaridad corporativa; ruptura del proceso tradicional mediante el cual pasaba el oficial a maestro; quebrantamiento paulatino de la relación familiar entre maestros y oficiales, y objetivación económica de la misma; formación de la clase de oficiales con interés peculiar y opuesto al de los maestros; las primeras asociaciones de oficiales; sus bases de mutualidad, sus socorros y su solidaridad para la defensa de su interés de clase.— Atracción ejercida por la ciudad sobre el campo; entrada de campesinos en las ciudades.— Transcendencia social de las transformaciones técnico-económicas producidas por la manufactura.

LECCIÓN 14

Origen del proletariado (continuación). = Peculiaridades históricas en el origen del proletariado en Inglaterra; carácter político de la causa que

principalmente influyó en la formación de aquel proletariado.— La peste negra en Inglaterra; sus efectos sobre la población; efectos indirectos sobre las rentas y salarios; consecuencias en la liberación de los villanos.— Reacción legislativa; espíritu de la legislación social que sobrevino; los estatutos de trabajadores de Eduardo III; disposiciones referentes a la huida de los siervos y el salario máximo; otros posteriores con igualdad orientación; ineficacia de estas medidas, y razones que explican esta ineficacia; influencia del Estatuto de 1389, de Ricardo II, en la liberación de los villanos.— El Socialismo Evangélico de Wiclif y el levantamiento de los campesinos; peticiones a la Corona.— Disolución de los Manors.— Expulsión de los campesinos de sus tierras; los acotamientos; sus clases; forma en que se realizaban; significación económica que tenían para los labriegos.— Los antiguos acotamientos parciales; limitaciones impuestas por los Estatutos de Merton y Westminster; ineficacia de dichas disposiciones.— Los deslindes de los siglos XV y XVI; su importancia y principales condados que fueron afectados; motivos económicos que impulsaron a los nobles a llevarlos a cabo; precaria situación de la nobleza en tiempo de Enrique VII y Enrique VIII y causas principales que la habían determinado; el precio de las lanas, a partir de la política arancelaria iniciada al triunfar las clases medias con Enrique VII; ventajas de convertir la tierra cultivada en tierra de pastos.— Entrada del capital holandés en Inglaterra; capitalización de la tierra; confiscaciones de las tierras monásticas y gremiales por Enrique VIII y Eduardo VI; destino que se dio a las mismas.— Efectos de los acotamientos sobre la población campesina; política de protección de colonos; éxodo del campo a la ciudad.— Leyes de persecución de vagabundos; Estatutos de Enrique VII, Enrique VIII, Eduardo VI, Isabel y Jacobo I; disposiciones respecto a los mendigos y a sus descendientes menores de edad; influencia de las confiscaciones de las tierras monásticas en los socorros de pobres; la ley de pobres de Isabel; su división de las personas necesitadas y sus disposiciones acerca de la administración de los socorros; legislación del mismo reinado sobre el contrato de trabajo, regulación de salarios, tiempo de aprendizaje, y disposiciones referentes a los artífices.

LECCIÓN 15

Origen del proletariado (continuación).— Peculiaridades históricas en el origen del proletariado de la Europa Central.— Temprana liberación de los siervos en Italia; factores económicos determinantes.— Influencia de los romanistas en Francia; intentos contra el feudalismo en tiempo de Luis VII; las villas libres de los dominios reales y arzobispales. Consecuencias del aumento de población en Alemania en la segunda mitad de la Edad Media; opresión de los campesinos; apoderamiento de las «marcas» y «almende» por los príncipes; aumento de las obligaciones feudales; resistencia de los aldeanos; la guerra de los campesinos; sus consecuencias sociales; empeoramiento de la situación del labriego después de la guerra

de los treinta años; huida de los campesinos a las ciudades.— Intento de Federico Guillermo I para aliviar la situación de los siervos del patrimonio real en la Prusia Oriental y la Pomerania; abolición de la servidumbre personal de dichos dominios y protección de los siervos de las tierras particulares, por Federico II.— Legislación agraria del siglo XVIII en los principales Estados alemanes del sur.— Legislación agraria en Austria-Hungría durante los reinados de María Teresa y José II.— La miseria en los campos de Francia en vísperas de la revolución; leyes de persecución de vagabundos de Luis XVI; edicto del mismo monarca sobre los derechos feudales; la obra de la revolución.— Repercusiones de la Revolución Francesa; desaparición del feudalismo en Prusia en tiempo de Federico Guillermo III; la reforma agraria de von Stein; sus efectos; perfeccionamiento por la reforma de von Hardenberg; su regulación del derecho de propiedad y abolición de todos los servicios y cargas feudales; consecuencias para la formación del proletariado.— Liberación de los siervos en los Estados alemanes más importantes del sur; en Baden; en Hessen; en Wurtemberg; en Baviera.— Liberación de los siervos en Austria-Hungría; la revolución de 1848; sus consecuencias en la abolición del derecho feudal.

LECCIÓN 16

Origen del proletariado (continuación).— Peculiaridades históricas del origen del proletariado en España; transformación de las obligaciones feudales a partir del siglo XIII; formas razones económicas determinantes; influencia de la fundación de villas libres en la emancipación de las clases rurales; contribución de los reyes a dicha emancipación; legislación de Alfonso X y Alfonso XI a favor de los vasallos.— Abolición de los «malos usos» en Cataluña; clases de exenciones; casos de exención individual y casos de colectiva; casos de exención por reconquista; de exención gratuita; de exención onerosa.— La protesta de los payeses; amenazas de emigración; gestiones reales cerca de los pontífices para redimir a los siervos eclesiásticos; disposiciones de Alfonso V de Aragón sobre la organización de los payeses y suspensión de los «malos usos»; proyecto de concordia en 1462 entre los payeses y los señores; ruptura del acto; insurrecciones; sentencia arbitral de Fernando el Católico; consecuencias de la misma para la libertad personal de los payeses.— Decadencia económica de España; despoblación; sus causas principales; el vagabundaje; legislación de Alfonso X, Pedro I y Juan I, y providencias de las Cortes de Castilla, Aragón, Cataluña y Valencia sobre la mendicidad; disposiciones de Carlos V y Felipe II.— Intentos de enajenación de las tierras de realengo y de las tierras baldías por los reyes y los concejos; oposición de las Cortes a la enajenación de baldíos, enajenaciones decretadas por Carlos II y por las Cortes de Cádiz de 1813; reacción en tiempo de Fernando VII; posterior confirmación en 1835 de la disposición de 1813; abolición de señoríos y mayorazgos; nuevas leyes; sus

resultados.— Permanencia de algunas instituciones agrarias.— Desaparición de los gremios; consulta del gobierno de 1779 a las «Sociedades económicas de Amigos del País»; hostilidad hacia los gremios por parte de Jovellanos, Campomanes y otros; influencia del liberalismo económico; defensa de Capmany; restricciones impuestas por Carlos IV a los gremios; supresión de éstos por las Cortes de 1813; confirmación de la supresión de 1835.

LECCIÓN 17

La moderna constitución social. = Bases jurídicas.— Bases morales.— Bases religiosas.— Bases psicológicas.— Bases técnicas.— Bases económicas.— La libre concurrencia; su concepto; su contenido.— Tendencia de la libre concurrencia; a) en la vida económica; b) en la vida moral.— Funciones; a) en el conjunto de la vida económico-social; b) en el de sus unidades.— La vida económico-social desde el punto de vista de la libre concurrencia; en qué coinciden y en qué son antagónicas las entidades concurrentes.— Consecuencias de la libre concurrencia; en la producción de riqueza; en la división del trabajo; en la distribución de la población; en la diferenciación de las clases sociales.— Los riesgos de la libre concurrencia debidos especialmente al carácter inorgánico propio de su forma de desenvolvimiento.— Función técnica del empresario.— Límites naturales, jurídicos y económicos impuestos a la libre concurrencia.— El monopolio; sus clases.— Las coligaciones de empresas concurrentes para el dominio del mercado.— El poder capitalista.— El sistema actual de la distribución de la riqueza.— Predominio de la valoración de lo económico en la actual organización social; el poder económico; el poder político; el poder económico como poder social.— Separación de clases originada por la libre concurrencia; dominación de la clases capitalista; lucha de clases.— División de las clases sociales desde el punto de vista económico según Marx; clases capitalistas y clases proletarias; simplicidad del punto de vista.— División profesional.— Organizaciones correspondientes a las distintas clases sociales.— La asociación como medio de defensa en la actual organización social.— Inadecuación entre las formas de organización técnicas y económicas y el derecho vigente actuales.— Rápida evolución hacia una organización jurídica más adecuada al actual espíritu de cooperación y solidaridad y a las actuales necesidades materiales culturales.

LECCIÓN 18

Órganos de la política social. = El Estado; su misión social. Estado y sociedad; gradual reparación de ambos conceptos en la ciencia política; principales interpretaciones.— Teorías del Estado; clasificación; A) Teorías que le asignan un predominante carácter objetivo; a) el Estado considerado como un hecho; K.S. Zachariae, Duguit, Schleiermacher, Geze; b)

el Estado como estado; los teóricos del derecho natural; Kant; c) el Estado identificado con uno de sus elementos; 1) con la población; consideración de las doctrinas de la soberanía nacional; 2) con los gobernantes; noción cristiana doctrina de Hobbes; teorías absolutistas; d) el Estado como organismo natural; Platón. B) Teorías que le asignan un predominante carácter subjetivo; a) el Estado como organismo intelectual y social; variantes de esta dirección; b) el Estado como unidad colectiva de asociación; Gierke, Bernatzik, Haenel. C) Teorías jurídicas del Estado; concepciones posibles desde el punto de vista jurídico; a) como objeto de derecho; b) como relación jurídica; c) como sujeto de derecho.

El fin del Estado; distintas posiciones del problema. Teorías; clasificación; A) Teorías de los fines absolutos; a) dirección utilitaria; doctrinas de la antigüedad sobre el Estado; doctrina clásica del Estado policía; Wolf, Justi, Bentham; variante del absolutismo democrático; los jacobinos. Babeuf; b) dirección moral; Platón, Aristóteles; variante teológica medieval; condensación de Stahl; la teoría de Hegel. B) Teoría de los fines relativos; sus formas; variantes de la teoría de la libertad; Spinoza, Locke, Kant, Fichte, Humboldt, Stuart Mill; evolución de la teoría; doctrinas que limitan con la ley el poder del Estado; Hobbes, Rousseau, doctrina alemana moderna del Estado jurídico; doctrinas que asignan al Estado un fin histórico. — Otras teorías del fin relativo.— Desenvolvimiento de la teoría de la finalidad relativa del Estado en Jellinek; límites psicológicos y físicos de la actividad del Estado; la expresión sistemática de la vida como uno de los caracteres del Estado; fines del Estado; a) actividades exclusivas; sus clases; b) actividades concurrentes; relaciones del Estado con los intereses particulares; tendencia a la organización progresiva, socialización, centralización y administración internacional; la evolución y el bien común.— El Estado ante el problema social; su acción ordenadora; su prestación de condiciones externas para la realización de los fines sociales. Modos de su intervención; armonización de intereses; tutela social; fomento de la previsión. El Estado patrono; su ejemplaridad. = Los Municipios; su misión social; importancia de la acción social comunal; problemas privativos del municipio en esta esfera de su actividad; la colocación y el seguro contra el paro; la higiene y la enseñanza; Sus medios para intervenir en la determinación de las condiciones de trabajo; las «cláusulas de salario». El municipio como patrono; su ejemplaridad. Creciente importancia de la acción social municipal.

LECCIÓN 19

Sindicatos.— Su concepto.— Tipos fundamentales de sindicatos.— Fines de los mismos.— El sindicato llamado constitucional.— Su organización.— Burocracia del sindicato.— El secretariado.— Centralización.— Descentralización.— Derechos y obligaciones de los socios.— Diversos beneficios otorgados por los sindicatos a los asociados.— Táctica política

ca.— Sus clases.— Distintos desenvolvimiento de la política de los sindicatos, factores principales; a) históricos; b) psicológicos naturales; c) culturales.

Las Trade-Unions en Inglaterra.— Su desarrollo histórico.— Primeras coligaciones del carácter accidental.— Tendencias favorables al espíritu corporativo.— Carácter y efectos de las primeras coligaciones.— El derecho de coligación de 1824.— Desarrollo de los sindicatos de 1825 a 1850; característica de los sindicatos en esta época.— Transformación de la táctica de las Trade-Unions; interés exclusivo por los problemas de clase y sus resultados para las clases trabajadoras.— Informe de la Sociedad para el Fomento de las ciencias sociales o de los sindicatos, su influencia.— Ley de 1869.— Trade-Unions Act de 1871.— Reconocimiento social de los sindicatos.— Depresión económica de 1873 a 1888.— Su influencia en los sindicatos.— Asociación local, nacional e internacional de los sindicatos.— Organización de los obreros no calificados.— Su influencia en los demás sindicatos.— Reacción.— El caso de Taff Vale Railway.— El juicio de Osborne.— La finalidad de los sindicatos industriales.— Medidas directas para regular las condiciones de trabajo.— Los sindicatos y la jornada de trabajo.— Trabajo extraordinario.— Pago del salario.— Truck-system y Cottagesystem.— Protección durante la jornada.— Regulación de la oferta y la demanda de trabajo.— Los sindicatos y las teorías Malthusianas, huelgas, lock-out.— Cámaras de trabajo.— Conclusiones sobre la política de los sindicatos ingleses.

LECCIÓN 20

Las organizaciones profesionales⁴, su concepto, evolución y tendencias.

Sindicatos Alemanes.— Tardía aparición de los mismos.— Sus causas.— Influencia de Max Hirsch y los discípulos de Lassalle en la organización de los sindicatos.— Sus luchas.— Los sindicatos de Hirsch-Dunker.— Su desarrollo y táctica.— La acción de la «Allgemeinen Deutschen Unterstutzungsverband».— Su disolución.— Sindicatos marxistas.— Desarrollo de los sindicatos desde 1890.— Primer congreso de sindicatos alemanes de 1890.— Congresos posteriores y su influencia en la vida de los sindicatos.— Sindicatos cristianos.— Gelben Gewerschfften.— Característica especial de los sindicatos alemanes.— Su táctica.— Conexión entre los sindicatos y los partidos políticos afines.— Los sindicatos en Norte América.— Carácter ético social de las primeras aspiraciones y tendencias socialistas.— Influencia de Robert Owen, Greeley, etc.— Primeras asociaciones.— Fundación de la «General Trade-Unions» en 1834.— Desarrollo de los sindicatos y política de clase de los mismos.— Los Kinghts of Labor.— El renaci-

⁴ Esta palabra está escrita a bolígrafo encima de una tachadura que dice «sindicales».

miento del socialismo en 1870.— Federación ob Labor en 1881.— Su tendencia, organización.— Los truts y los sindicatos.— Acción de los sindicatos en relación con la conciliación, arbitraje, salarios, emigración y demás problemas de clase.— Carácter político de la moderna «América Labor Union».— Actual característica de la política de los sindicatos.

Los sindicatos en Francia.— La ley de Chapelier de 14 de junio de 1791.— Tolerancia de las asociaciones de los patronos.— Enérgica prohibición de las asociaciones obreras.— Sociedades de socorros.— Movimiento cooperativista de 1848.— Ley de 25 de mayo de 1864.— Su influencia en los sindicatos.— Los sindicatos durante la tercera República.— Ley de 1884.— El partido obrero y los sindicatos.— Moderna influencia de las teorías sindicalistas en las asociaciones obreras.— Confederación general del trabajo.— Su tendencia moderna.— Historia de los últimos congresos de las asociaciones obreras.

El trade-unionismo eb Australia y Nueva Zelanda; importancia del tipo inglés; influencia del socialismo norteamericano y especialmente de Henry George.— Organización de las Trade-Unions en partido político; incremento de sus tendencia socialistas.— La lucha por la conciliación y el arbitraje obligatorios.— Los Wages Board.— Política agraria; las leyes agrarias, su contenido y finalidades.— Tendencia hacia la nacionalización de los servicios públicos.— Política reguladora y restrictiva de la inmigración.

Los sindicatos en España.— La asociación de los tejedores manuales por Munts; influencia de los comunistas y de los sucesos políticos de la revolución francesa de 1848.— Asociación de los obreros de la industria textil algodonera.— La confederación de 1854; huelga del año de 1855 y petición de derecho de asociación; creación de la federación de las tres clases de Cataluña.— La internacional; su influencia en España; prosélitos.— Fundación de sociedades de esta época.— La federación española de asociación internacional de los trabajadores.— Su disolución.— Congreso de Barcelona de 1883.— La unión general de trabajadores.— El escaso desarrollo de los sindicatos en España; sus causas.— Las asociaciones patronales; su importancia y organización en los diversos países⁵.

LECCIÓN 21

Las cooperativas. Su concepto.— Diferencia esencial entre las cooperativas y las sociedades mercantiles.— Fines de las cooperativas; a) económicos; b) sociales; c) educativos.— Las cooperativas y el socialismo.— Clases de cooperativas; industriales y agrícolas; de consumo y producción.— Las cooperativas y el comercio.— Las cooperativas en Inglaterra.— Influencia de Owen y los socialistas cristianos.— La cooperativa de consumo de Rochdale de 1844.— Rochdale system.— Característica del movimiento cooperativista en Inglaterra.— Francia.— Buchez, St. Simon, L.

⁵ La última frase está escrita a mano.

Blanc.— Cooperativas de producción.— Forma típica de la cooperación en Francia.— Moderno desenvolvimiento.— Las cooperativas en Alemania.— Schulze-Delitzsch.— Su abolengo liberal.— Su oposición al socialismo.— El carácter económico de las Cooperativas Schulze-Delitzsch.— La cuestión de las mismas.— Tendencias de desarrollo de las Cooperativas Schulze-Delitzsch.— Las cooperativas rurales.— Las Cajas Raiffeisen.— Su carácter, organización y finalidad.— Distinción entre las cooperativas del tipo Schulze-Delitzsch y las de Raiffeisen.— «Neuwider Zentral Darlehnskasse».— Asociación de las cooperativas rurales en el Imperio Alemán.— El movimiento de las cooperativas de construcción y consumo.— Desenvolvimiento de las cooperativas en España.— Los Sindicatos agrícolas.— Las cajas rurales.— Legislación.

Las Sociedades de Crédito.— Su objeto.— Su división.— Formas típicas.— Su difusión.— Volumen e importancia de sus operaciones.— La protección oficial.— Profusa legislación sobre las mismas.— Cooperativas para las compras de primeras materias y cooperativas de venta.— Sus relaciones y desarrollo simultáneo.— Organización de estas cooperativas.— Cooperativas de compra y venta; comerciales, industriales y agrícolas.— Cooperativas de consumo.— Su objeto.— La producción en las cooperativas de consumo.— Influencia del tipo inglés en esta clase de cooperativas.— Reglamentación jurídica de las cooperativas.— Distinta tendencia de la legislación.

LECCIÓN 22

Los partidos políticos y su política social.— Partidos conservadores.— En Inglaterra.— El movimiento ético conservador de Lord Ashley y Disraeli.— Sus campañas parlamentarias y su obra legislativa.— Intereses representados en el partido conservador inglés.— Las luchas de los intereses industriales.— Evolución del partido.— Infiltración en el mismo de elementos industriales y financieros.— Tardío renacimiento de sus tendencias sociales.— Sus proyectos de pensiones a la vejez.— En Francia.— La política social de Napoleón III.— Influencia de las doctrinas de Sismondi, fomento del bienestar obrero, legislación.— En Alemania.— La política social de Bismarck.— Reacción sobre el socialismo.— Organización del seguro obrero alemán.— Establecimiento del principio obligatorio.— La obra social protestante de Wuchernern y Huber.— Cooperación de Wagner y Meyer.— Congresos sociales protestantes.— Movimiento católico obrero.— Kettler.— El partido del centro.— Congresos obreros católicos.— Fines del actual partido conservador.— Política social conservadora en Austria y Suiza.— Consideración especial de la política social en España.

Los partidos liberales y su política social.— En Inglaterra.— Inquebrantable adhesión a los principios de la libertad económica; exclusión teórica de toda política social.— Intereses industriales representados en el partido.— Evolución doctrinal superior.— Tendencia de la reforma tributaria de Campbell-Banermann.— La reforma de Lloyd George; reformas tribu-

tarias y reformas sociales.— Admisión del intervencionismo del Estado.— Nuevos proyectos de reforma agraria.— Problemas que tienden a solucionar.— En Alemania.— El grupo social nacionalista de Federico Naumann.— Die Hilfe.— Influencia de Naumann en el liberalismo.— Política social de los partidos liberales en los distintos países.

LECCIÓN 23

Los partidos socialistas.— En Inglaterra.— El movimiento cartista; su tendencia principalmente política. Influencia de O'Connor y O'Brient. Su programa agrario. Fundación de Labour Party como expresión política de trade-unionismo. Sus tendencias y sus luchas. Excisión del trade-unionismo y creación del Independent Labour Party. Representación del ideal socialista. Cooperación de los partidos laboristas ingleses en la política social del nuevo liberalismo. La Social Democracy Federation como representación política del marxismo. Su escasa influencia en la política inglesa. La política de los socialistas intelectuales; la Fabian Society. Su táctica de infiltración doctrinal. Influencia de los Webb.

En Alemania.— Movimientos en 1848. Influencia de Marx y Engels.— Acción de Lassalle. El congreso de Leipzig. Fundación en 1863 de la asociación general de obreros alemanes. El nuevo partido obrero de progresistas. Relaciones de Bismark y Lasalle. Finalidad de Lassalle. Federación de sociedades obreras alemanas. Bebel y Liebknecht, su marxismo. El partido social demócrata. Fusión con los partidarios de Lassalle. Campaña electoral de 1879. Época de represión y las campañas del partido socialista.— El programa de Erfurt.— Tendencia de G. Wollmar, su influencia.— El revisionismo, su discusión en los congresos sociales.— Su influencia.— El partido social demócrata y los sindicatos.— *En Francia.* Los partidos radicales y el socialismo. Los partidos socialistas anteriores a 1848. Distintas tendencias de los partidos de «La Commune». Formación del partido socialista. Su excisión. Historia de los mismos en nuestro tiempo. Influencia de la confederación general del trabajo ⁶.

En Italia.— Los partidos socialistas. Los dos grupos principales, los integristas y los reformistas, Turati y Ferri.— Labriola y los revolucionarios.

En España.— El partido socialista. Su creación y sus directores. La unión general del trabajo y el partido socialista. Desenvolvimiento del partido y su acción.

LECCIÓN 24

Historia de las doctrinas sociales

El socialismo; sus orígenes filosóficos.— Antecedentes en la filosofía griega.— Las utopías; la utopía de Thomas Moro; el «Estado del Sol» de Campa-

⁶ Aquí hay un nombre escrito a bolígrafo que no se entiende bien.

nella.— Referencia a Rousseau, Mably y Babeuf.— Principales representantes del socialismo francés; Saint Simon; su doctrina; su escuela; principales discípulos; Bazard, Eufautin, Fourier; consideración especial de la obra de este último.— V. Consideraud; Pecquer; su significación.— L. Blanc.— El comunismo; Cabet.— El socialismo en Inglaterra; dirección ética o del derecho natural; su carácter agrario; Wallace, Spence, Hall.— Las doctrinas socialistas de R. Owen.— Thompson.— El cartismo; Cobbett, O'Connor y O'Brien.— El socialismo en Alemania; consideración especial de Fichte.— La reacción contra la economía inglesa en Rusia; Tschernichewsky.— Los humanistas y el comunismo agrario en España; Juan Luis Vives, el P. Mariana; influencia del comunismo de los Incas; Pedro de Valencia, Polo de Ondegardo.— Movimiento posterior agrario; doctrinas de Florez Estrada y de los reformistas agrarios de tiempo de Carlos II.— La reacción contra Smith en España; R de la Sagra. El socialismo agrario en los Estados Unidos; Henry George; sus doctrinas del impuesto único; influencia en varios países especialmente en Inglaterra y España. La liga española para el impuesto único⁷.

LECCIÓN 25

El socialismo científico.— El llamado socialismo científico.— Referencia de los precedentes doctrinales.— Sus principales representantes.— Consideración especial de Rodbertus; sus doctrinas.— Carlos Marx; posición que ocupa este autor en la historia del socialismo; su formación filosófica e histórica; su labor como economista; estudio de sus obras, principalmente de «*La crítica de la Economía Política y el Capital*».— Referencia a Engels.— Las doctrinas de F. Lassalle.— Schaeffle y su obra.— Marxistas actuales; Kantsky, Calwer, R. Luxembourg.— El revisionismo; Bernstein y David.— Posición especial de Oppenheimer.— Difusión del socialismo en otros países; principales direcciones del mismo.— Los fabianos ingleses.— La internacional.— El anarquismo.— Precedentes franceses.— Proudhon⁸; sus obras económicas.— Sistematización del anarquismo; Bakunin.— División de la internacional.— La federación jurasiana.— El anarquismo doctrinal moderno.— Tendencia histórica; Kropotkin.— Los racionalistas; Makay, M. Stirner.— Publicistas agitadores, F. Gave.— El sindicalismo revolucionario.— Sus precedentes, sus doctrinas; principales representantes; Peloutier, Sorel, Cornelisen.— La influencia del comunismo y del anarquismo en España.— Influencia de Fourier; Abreu, Garrido, Cala; de Proudhon; Pí Margall.— Rama española de la internacional; su participación en movimientos facciosos de los republicanos; Alcoy, Cartagena.— Principales representantes actuales de la democratización social española.— Anarquistas intelectuales.

⁷ A partir de Sagra, está escrito a mano.

⁸ Corregido a mano.

LECCIÓN 26

La escuela de la reforma social.— S. de Sismondi; «le Nouveaux principes d'Economie Politique» (1819); examen de sus doctrinas; la crítica del individualismo smithiano; sus ideas de solidaridad; su intervencionismo de Estado. Formación de las doctrinas de reforma social en Alemania; influencias extranjeras; evolución de la teoría de la reforma social; dos fases: 1) predominio de los filósofos del derecho; 2/ predominio de los economistas.— Primera fase; los filósofos del derecho; escuela de Krause; la doctrina de Ahrens; distinción entre Estado y Sociedad; el ideal de justicia distribution en Roeder.— Stein; sus doctrinas acerca de la ciencia de la sociedad y de la lucha de clases.— Mohl Riehl; sus teorías sobre la cuestión social y la intervención del Estado.— Segunda fase; predominio de los economistas; la escuela económica «ético histórica»; influencia de los filósofos del derecho; otras influencias.— Los primeros históricos; su concepción realista y ética de la economía; la idea de la unidad de la vida social; doctrinas de Roscher, Hildebrand, Schueze, Dietzel.— El llamado «socialismo de cátedra»; su posición intermedia entre el liberalismo y el socialismo; fundamentos de sus doctrinas sociales; Schmoller, Wagner, Schonberg, Conrad, Cohn, Scheel, Brentano.— Otros representantes de la misma dirección.— La asociación para el fomento de la política social; asambleas en Halle y Eisenach; creación de la «Verein für Sozialpolitik»; su origen; objeto y obra teórica; distintos matices dentro de la «Verein».— Economistas jóvenes de esta dirección.— El cooperatismo; Huber, Schulze-Delitsch = Las doctrinas de reforma social en Austria; Philippovich.— El solidarismo francés; Bourgeois, Gide.— En Bélgica; Molinari.— En Italia; Nitti, Luzatti; los neo-matemáticos y la investigación social; Barone, Bresciani.— La escuela de la reforma social en Inglaterra; dirección ético-reformista; lord Ashley, Carlyle, Ruskin.— Dirección engenista; Karl Pearson y F. Galton; sus doctrinas.— Dirección liberal intervencionista; Hobhouse; fundamentos teóricos de la reforma de Lloyd George.— La escuela de la reforma social en España; Concepción Arenal.— Influjo del krausismo; Giner de los Ríos, Azcárate, Alas, Piernas, Posada, el Marqués de la Merced.— Dirección historicista; Costa, Canovas⁹, Hinojosa.— Dirección político-social racionalista; Buylla, Canalejas, Maluquer.— La influencia de Flores de Lemus.

El cristianismo social; sus fundamentos; la doctrina de Santo Tomás¹⁰; distintas tendencias; oposición fundamental entre algunas escuelas; posición de León XIII; su influencia.— En Alemania; la obra de Ketteler; Schueren, Hitze, Pesch, Cathrein, Lehmkuhl, Hertling.— Dirección protestante; Wichern, Göbre.— En Austria; Mischler, Vogelsang, Schindler, Weiss.— Significación de la escuela de Vogelsang.— En Suiza; Eberle.— En Francia; el

⁹ Este autor está escrito y añadido a mano.

¹⁰ Escrito a mano «las doctrinas de Santo Tomás».

conde de Mun, Turmann, Lemire.— En Italia; Toniolo.— En Inglaterra; dirección ético-cristiana, Maurice, Kigsley. Otros representantes.— En España; Sanz Escartín, Sánchez de Toca, Gabriel Maura.— La obra de propaganda de los católicos españoles.

LECCIÓN 27

El Solidarismo. Fundamentos que le prestan las ciencias biológicas.— Su análisis de la vida social.— La sociedad como un organismo.— Concepto del organismo en la teoría del solidarismo.— El individuo y la sociedad.— Aspecto ético de la teoría.— La teoría moral como una consecuencia del conocimiento de las leyes de solidaridad.— Ley social y libertad individual.— Concepto del cuasi-contrato.— El deber social como una limitación de la libertad individual.— La libertad de contratación; su evolución.— Formas superiores de su desarrollo.— Contratos de previsión y garantía social.— El mutualismo.— Deuda social como fundamento de los política social en general.— El solidarismo y la higiene social.— La legislación del trabajo.— Su fundamento en esta teoría.— La educación.— Gide y la idea de solidaridad en las cooperativas.— La realización de la justicia en el cumplimiento de las leyes de solidaridad social.

LECCIÓN 28

La aristocracia como clase social.— Origen de la gran propiedad agraria en los diversos países.— Desenvolvimiento de la clase aristocrática agraria.— Su función social.— Países en que se conservan sus privilegios y países en que los han perdido.— Las aristocracias políticas.— La aristocracia del capital.

Medios de defensa de la clase aristocrática agraria para la conservación de su estado.— Los fidecomisos.— Su concepto.— Objeto.— Formas afines del fidecomiso.— Desarrollo histórico del fidecomiso.— Influencia de la legislación española en otros países.— La legislación moderna.— Su abolición en Francia, España.— Especial consideración de los fidecomisos en Alemania.— Su reglamentación jurídica.— Derechos y deberes del titular del fidecomiso.— La extinción del mismo.— Los vestigios del feudalismo en la propiedad inmueble inglesa.— Los grandes estados agrarios.— Su influencia en el programa de la agricultura y en el del desarrollo de las ciudades.— Los grandes latifundios; en Hungría, Italia, España.— El Junkerthum en Prusia.— Su función social.— La clase militar prusiana como casta.— Conservación de su espíritu.— Consideraciones sobre la aristocracia burocrática en Rusia.— La aristocracia capitalista.— Automática formación de privilegios por la actual organización económica.— Su política de clase.— Su influencia en la política económica de las naciones.

LECCIÓN 29

La clases media y su política social.— Diversas agrupaciones sociales comprendidas bajo esta denominación.— Determinación del concepto de

clase media; caracteres principales que es preciso considerar para precisar su concepto.— La clase media en su aspecto económico; su formación; su actuación en la moderna constitución social.— Conexiones con los partidos políticos.— La cuestión social de las clases medias.— Corporaciones gremiales, su organización.— Modernos intentos de organización social, organización profesional.— Alemania.— Movimiento corporativo en el siglo XIX.— Su finalidad.— «Gewerbe Ordnung» de 1869 y ley de 1897.— La «Innung» su carácter, Innungs verband.— El desarrollo en Alemania del sur.— Holanda.— Federación general holandesa de las clases medias.— Austria, Hungría, ley de 15 de marzo de 1883.— «Parti commercial et industriel de France».— Sus conquistas.

España.— Cámaras de Comercio e Industria.— Su nueva reorganización.— La federación gremial española.— Otros países.— Instrucción enseñanza técnica.— Aprendizaje.

Crédito popular y distintas formas.— Desarrollo en Alemania.— Bancos populares.— Cajas rurales.— Su poderoso desenvolvimiento.— «Centralgenossenschaft».— «Innung Banken».— «Handwerkersbank».— Desenvolvimiento similar en Austria.— Italia «Banco del lavoro e della cooperazione» de Luzzatti.

España.— Banco Gremial en Barcelona.— Cajas rurales.— Sindicatos agrícolas.— Pequeña propiedad.— Medidas protectoras.— «Homestead».— Colonización.— Su finalidad.— Orientación errónea de la legislación española respecto a este problema.— Organización nacional de las clases medias.— Idem internacional; la sección española.— Los impuestos sobre la tierra en diversos países¹¹.

LECCIÓN 30

La clase proletaria. = El trabajo; Concepto del trabajo económico; formas; trabajo de dirección y trabajo de realización; del llamado trabajo intelectual y trabajo manual.— Funciones del trabajo en la producción.— Principio fundamental de la aplicación del trabajo; principio económico y codeterminantes no económicos; de la productividad y de la bondad del trabajo.= Determinantes del trabajo de la unidad económico-social; a) magnitud de la población; b) división de la población; 1) según el sexo; condiciones relativas de entrambos sexos para el trabajo económico; 2) según la edad; c) aptitudes de la raza; d) educación en el trabajo; e) moralidad; f) estado sanitario; g) condición jurídica del trabajador; h) interés del trabajador en el trabajo; sus momentos determinantes; i) de la distribución de las fuerzas de trabajo en la producción.— De la división del trabajo económico; categorías de las profesiones económicas; su relatividad; trabajo simple y trabajo calificado; especialización del trabajo.— División del pro-

¹¹ Escrita a mano la última frase.

ceso de trabajo entre unidades sociales distintas.— División internacional del trabajo.— División industrial del trabajo (especialización de la industria).— División de un proceso de trabajo en sus diversas fases.— División del proceso del trabajo en el interior de la unidad económico-social; división manufacturera del trabajo.— De los llamados efectos de la división del trabajo; a) de la reunión del trabajo; concepto; categorías; función de la producción; b) trabajo aislado y trabajo en común; significación respectiva.— Clases de trabajo en común; a) comunidad simple; concepto y significación; b) cooperación; concepto; significación y clases; c) Cooperación simple; concepto; funciones; d) encadenamiento de trabajos; concepto; significación; clases.— Encadenamiento sucesivo.— Encadenamiento simultáneo; concepto; significación.— El trabajo económico y el ritmo.— Teoría de Carlos Bucher.— Cooperación compuesta; concepto; significación.— Medios técnicos de trabajo.— Modos de su influjo sobre la productividad y bondad del trabajo.— De la vida obrera; selección de profesión y destino profesional del trabajador; atracción de las industrias según; a) la edad; b) el alejamiento; c) la importancia de la localidad.— Relación entre la profesión de los ascendientes y los descendientes.— Cambios de profesión.— Vida familiar del trabajador; habitación; proporción de obreros casados; nacimientos; mortalidad infantil.— Observaciones estadísticas acerca de estos problemas.— Diversiones del trabajador.— Antiguas aficiones y fines actuales.

LECCIÓN 31

La desocupación.— Efectos de la emancipación política del trabajador para los casos de falta de ocupación; falta de responsabilidad, tanto en los patronos como en los poderes públicos; inseguridad en la procuración de empleos; misión de la política social en el problema.— Clases de desocupación; a) voluntaria; b) involuntaria; consideración especial de esta última; sus modalidades; c) desocupación por pérdida definitiva o temporal de la aptitud para el trabajo; desocupación por falta de colocación.— La falta de colocación involuntaria.— Crisis de falta de trabajo; sus clases; a) crisis generales de la producción o particulares de determinadas ramas de la misma; b) internacionales, nacionales o locales; c) periódicas o irregulares; d) agudas o pasajeras.— Causas principales de las crisis de falta de trabajo; A = Causas generales; a) las crisis generales económicas; el estudio de las crisis y el estudio de la coyuntura económica; diversidad de las crisis económicas.— Teoría de la falsa distribución de las fuerzas productivas.— Teorías del consumo restringido.— Teoría de la anárquica sobreproducción capitalista; revisión de la misma; soluciones eclécticas; análisis de la sobreproducción.— Las últimas investigaciones sobre las crisis económicas; la teoría de la generalidad de las crisis a la luz de la doctrina de la utilidad creciente.— Las crisis económicas como efecto de la supercapitalización permanente. b) la falta de coordinación entre la oferta y la demanda de trabajo. c)

la emigración de campesinos a la ciudad. d) la inmigración de obreros extranjeros. e) el empleo de mujeres y niños en las industrias. f) la concurrencia entre trabajadores. g) el trabajo intensivo y a piezas. h) la irregularidad de las obras públicas. B = Causas particulares de las crisis en determinadas ramas de la producción; a) el trabajo en las industrias de temporada. b) las influencias climatológicas. c) las transformaciones en ciertas ramas productivas; d) los cambios de moda; e) los desplazamientos industriales. f) la afluencia de obreros a una industria por prosperidad pasajera.— Otras causas menos importantes de las crisis de falta de trabajo.

Necesidad de la estadística para determinar la extensión, intensidad y causas de las crisis de falta de trabajo, así como el carácter que en cada localidad presentan.— Procedimientos estadísticos; a) métodos directos; informaciones de los sindicatos; censos profesionales; b) métodos indirectos; estadística anual del personal de los establecimientos industriales; oscilaciones de la venta de sellos de invalidez en Alemania; operaciones de las oficinas de colocación.— Insuficiencia de unos y otros métodos.— Comparación de los resultados estadísticos.— La proporción de los desocupados.— Estimación de la intensidad media del paro.— Riesgos de paro.— Duración media.— Influencia numérica de las diversas industrias.— Distribución de la población obrera según los riesgos de paro.— Influencia de las profesiones en la duración media del paro.— Distribución profesional de los desocupados según la edad y el sexo.— Resultados de las estadísticas; su porvenir.

LECCIÓN 32

La desocupación (continuación).— Soluciones al problema; solución individualista al problema de las crisis económicas¹². La teoría de Proudhon; solución socialista; dificultades prácticas para unificar la producción; solución de la reforma social; teorías de Sismondi, Marlo, Schaffle y Adolfo Wagner. Medios de combatir la falta de ocupaciones; sus clases; medios preventivos y curativos; medios directos e indirectos.— Medios indirectos; el Estado y su política de previsión de las crisis económicas; orientación social de dicha política en sus diversos aspectos.— La política de las asociaciones obreras.

Medios directos; A = Coordinación entre la demanda y la oferta de trabajo; a) Colocación gratuita; 1) Colocación directa; inconvenientes de este procedimiento; peligros de orden moral que para la mujer representa. 2) Colocación por mediación de instituciones benéficas; diversidad de carácter de estas instituciones; sus oficinas de colocación; organización, recursos y funcionamiento, personas que pueden utilizarlas; los albergues para obreros que viajan en busca de trabajo, en Alemania; forma del socorro;

¹² «Al problema de las crisis económicas», está escrito a mano.

organización de los albergues.— 3) Colocación por medio de asociaciones obreras, patronales o mixtas que atienden a este fin, la oficina de colocación de las sociedades de socorros mutuos y de los sindicatos; organización, recursos y funcionamiento; personas que pueden utilizarlas; albergues y socorros de viaje; deberes informativos de los miembros de los sindicatos.— Las bolsas de trabajo; sus clases; las bolsas de trabajo francesas; su estructura; multiplicidad de sus funciones; su funcionamiento como oficinas de colocación; personas que pueden utilizarlas; sus recursos; subvenciones que reciben de los municipios; viáticos y facilidades que dan a sus miembros cuando buscan empleo en diversas poblaciones; su organización federativa nacional.

Ventajas de las instituciones de colocación de carácter obrero; especialización profesional; garantías; posibilidad de unificar las informaciones de la red nacional de sindicatos o bolsas de trabajo; su utilidad en la formación de la estadística obrera.— Inconvenientes; limitada extensión de la organización sindical de la masa obrera; los servicios de colocación de las asociaciones obreras como arma sindical para la lucha de clases; conflictos que se derivan para la función social de la colocación.

Oficinas de colocación de las asociaciones patronales; organización; recursos y funcionamiento; personas a quienes sirven; papel que desempeñan en las luchas con obreros y sindicatos.— Oficinas de colocación de las organizaciones mixtas de obreros y patronos; condiciones de imparcialidad que reúnen.— Tendencia moderna hacia un completo sistema de oficinas de colocación públicas; funciones que en punto a colocación se reservan a las asociaciones profesionales.— 4) Colocación por mediación de oficinas públicas; personas que pueden utilizarlas; oficinas de colocación municipales; su formación esporádica y carácter local; su relación con las cámaras agrícolas en Alemania; evolución hacia federaciones regionales y nacionales; constitución de los directorios en las oficinas de colocación municipales; representación que se da en ellos a patronos y obreros; intervención en ocasiones, de los Tribunales industriales.

Oficinas de colocación del Estado; su creación con arreglo a un plan nacional; finalidad principal perseguida en Inglaterra con la red nacional de bolsas de trabajo; principio neutral que inspira la constitución de los comités consultivos y directorios para todas las instituciones de colocación públicas; dificultades que encuentran estas instituciones para conservar su neutralidad en los casos de conflictos sociales; distintos modos de solucionarlas; procedimiento que siguen generalmente; recelos que inspiran las oficinas de colocación públicas a las asociaciones obreras.

b) Colocación mediante pago; 1) Colocación por medio de anuncios en la prensa; extensión de esta costumbre en algunos países; su oneroso coste y sus inconvenientes.— 2) Las agencias de colocación privadas; importancia que en otro tiempo tuvieron; posterior degeneración a consecuencia de la concurrencia; explotación de los desocupados; protestas obre-

ras que acarrearón; disposiciones legislativas que regularon su establecimiento y limitaron sus tarifas; gradual sustitución de las agencias privadas por las oficinas de colocación públicas.

LECCIÓN 33

La desocupación (continuación).— La colocación en los principales países; características nacionales; instituciones y legislación:

En Alemania. = Predominio de las oficinas de colocación municipales; comienzo de su creación en 1894; forma de su nacimiento; influencia de los tribunales en su creación; Estados que primero las impusieron; disposiciones legislativas de 1894; motivos que las justificaron; oficinas subvencionadas por el Estado; rápido incremento que las oficinas municipales tomaron; modo de hacer las colocaciones; organización interlocal; evolución hacia la federación; formación de federaciones regionales; la Federación nacional constituida en 1898.— Colocación por las Sociedades obreras, patronales y mixtas; su importancia.— Los sindicatos obreros alemanes; consideración de su respectiva importancia en el problema; sus recursos; sus socorros de viaje; obstáculos opuestos por los patronos al desarrollo de sus oficinas de colocación.— Subvenciones de los municipios a los sindicatos mixtos.— Subvenciones de los comerciantes a las sociedades de socorros mutuos; personas a quienes buscan colocación estas sociedades.— Importancia de las oficinas de colocación mediante pago; regulación por la ley industrial del Imperio de 1883 y disposiciones de algunos Estados particulares; decadencia de estas oficinas; especialización de las mismas; clases de personas que principalmente se sirven de ellas.— Importancia de la colocación por las sociedades benéficas; la Liga Central de Oficinas de Colocación; procedencia de sus recursos; subvenciones municipales que recibe; clasificación de las personas que coloca; otras instituciones benéficas; las sociedades de enseñanza y colocación de sirvientas.— Organización de los albergues de viaje; clases de los mismos.

En Austria Hungría.— Importancia de la colocación directa; falta de centralización y defectuosa organización de las oficinas de colocación; predominio de las «Estaciones de Socorro de Especie» entre las instituciones de beneficencia.— Lenta difusión de las oficinas municipales; falta de conexión entre ellas.— Desarrollo de las oficinas de colocación de los sindicatos profesionales; obligaciones que sobre este punto impone a las corporaciones la Ley austríaca de 1883.— Restricciones que sobre las oficinas de pago imponen en Austria el Decreto de 1852 y la Ordenanza de 1863; y en Hungría la Ley industrial de 1884; proyectos de extensión y reorganización de las oficinas de colocación públicas.

En Bélgica.— Las bolsas de trabajo; bolsas oficiales, semioficiales, profesionales y políticas; sus diferentes recursos y organizaciones; necesidad de que prevalezca un tipo bien organizado.— La obra de las asociaciones benéficas en la colocación de sirvientas; falta de reglamentación para las

oficinas de colocación de pago; escasa utilización de las mismas; costumbre de la colocación directa en Bélgica.

En Francia.— Significación de las bolsas de trabajo; primeros proyectos para crearlas; la primera bolsa de trabajo francesa; forma de su creación; difusión de la institución por varias ciudades; reglamento de 1895; transformación de las federaciones locales de sindicatos en bolsas de trabajo; formación de los comités; recursos de las bolsas; sus funciones de colocación; la sala de contratación pública; las oficinas destinadas a los sindicatos; forma de la colocación; los viáticos para viajes como servicio separado; sus recursos especiales y modo de arbitrarlos; organización del control para la eficacia de estos socorros.— Carácter político que dan a las bolsas los sindicatos obreros; cierre de las mismas en 1893 y reapertura de 1896.— La Oficina Nacional Obrera de Estadística; su estadística semanal de los empleos vacantes.— La colocación por las Sociedades de Socorros Mutuos; facultades que les confiere la Ley de 1898; carácter de sus asociados.— Satisfactorio resultado de las oficinas de colocación municipales por razón de su carácter neutral; hostilidad de las bolsas de trabajo.— Asociaciones de beneficencia religiosas y laicas dedicadas a buscar colocación a los desocupados; su importancia y recursos.— Las oficinas de pago; su regulación restrictiva; Decreto de 1852 y Ordenanza de 1857; facultades de las autoridades municipales.

LECCIÓN 34

La desocupación (continuación).— La colocación en los principales países; características nacionales; instituciones y legislación; En la Gran Bretaña.— Predominio de la colocación corporativa o profesional; importancia que dan las «Trade Unions» al servicio de colocaciones; su organización profesional; comunicación de los sindicatos con sus filiales y con la federación central; sus recursos; socorros de viaje; relaciones de las «Trade Unions» con los patronos; proporción de los obreros que no pueden utilizar la mediación de las «Trade Unions».— La red de bolsas de trabajo del Estado creada para todo el Reino Unido por la Ley de 1909; necesidad que pretenden llenar dichas bolsas; su relación orgánica con el seguro nacional contra el paro forzoso; organización por distritos del servicio de las bolsas; la «Clearings House» central; constitución de los «Advisory Trade Committees»; fin propuesto al hacerlos neutrales; funcionamiento de las bolsas; sus socorros de viaje; modo de ser reembolsados; actitud de las bolsas en caso de huelga o «lock-out»; relación de las bolsas con las «Trade Unions»; regulación por las bolsas del mercados de trabajo de los niños; los «Juvenile Advisory Committees»; Inteligencia con las «Board Schools» a este respecto.— LA colocación por los «Distress Committees» creado por la «Unemployed Workmen Act» de 1905, y por las oficinas municipales; absorción del servicio de colocación de estas instituciones por las nuevas bolsas de trabajo.— Considerable importancia de la colocación por medio de anun-

cios en la prensa.— La obra de colocación de las sociedades benéficas; consideración especial de la «Salvation Army».— Agencia de colocación mediante pago; absoluta libertad de creación y funcionamiento; modo de funcionar y condiciones de pago; asociación de las agencias para fines de garantía.

En Suiza.— Creación del tipo de oficina de colocación costeada por el municipio y entregada a las asociaciones profesionales; su influencia especialmente en Alemania; las oficinas municipales de Berna y de Basilea; diferencias en la constitución de sus respectivos directorios; separación de los servicios de colocación de hombres y de mujeres; pequeños derechos que se abonan por el servicio.— Otras instituciones de colocación en Suiza.

En los Estados Unidos.— Las oficinas de colocación de los Estados particulares; uniformidad de la legislación en los diversos Estados; intervención de los comisarios de la estadística del trabajo en la creación de las oficinas; dirección de las mismas; atribuciones del gerente; relación entre comisarios y gerentes para la formación de las listas de vacantes; recursos de las oficinas; su actitud en los casos de conflicto entre patronos y obreros.— Severa regulación de las agencias de colocación mediante pago por los Estados particulares.— Importancia de la colocación por medio de anuncios en los periódicos.— Otras instituciones de colocación en los Estados Unidos.

B = Trabajos de auxilio; los trabajos de auxilio como medio de crear nuevas ocupaciones; su carácter de medida complementaria; influencia sobre este sistema de socorros, de la difusión de las oficinas de colocación así como del seguro; cuando son oportunos los trabajos de auxilio; su naturaleza pasajera; condiciones que han de llenar desde el punto de vista de no perjudicar la salud ni la aptitud profesional del trabajador desocupado; qué se entiende por trabajo adecuado en el caso de los obreros calificados.— El salario en los trabajos de auxilio; factores a considerar para determinarlo; límites del salario impuestos por la naturaleza de esta clase de trabajos.— Instituciones que proporcionan trabajos de auxilio.

a) El Estado, las Diputaciones y los Municipios; su deber social de emprender obras públicas de auxilio; criterio de ha de presidir tal clases de empresas; naturaleza de las obras públicas; su limitado empleo del trabajo calificado; otras clases de trabajos públicos extraordinarios.— Costumbre de aliviar con obras públicas las crisis de trabajo; disposiciones de Millerand en Francia, en 1900; la «Unemployed Workmen Act» inglesa de 1905; política que siguen los municipios alemanes de amoldar sus obras públicas ordinarias a las épocas de crisis periódicas; generalización de esta política.— Circunstancias que suelen tener en cuenta los municipios para dar ocupación a obreros; vecindad; informes sobre el motivo de la desocupación.— Suspensión que a veces imponen de los derechos electorales.

b) Instituciones subvencionadas por el Estado o los Municipios y administradas por Comités compuestos de particulares; las colonias de obreros en Holanda, Alemania; y Suiza; su historia; carácter de su misión;

personas que suelen emplear; ayuda financiera que reciben de los particulares en Suiza.— La Asistencia por el Trabajo en Francia. Resultado de estas instituciones.

c) Asociaciones benéficas privadas; la Salvation Army en Inglaterra y los Estados Unidos; carácter e importancia de su auxilio.

LECCIÓN 35

El seguro = Su concepto y análisis interno del mismo; el supuesto del plan; el carácter económico; la mutualidad; formas en que puede realizarse; proporcionalidad entre la prestación y la equivalencia en el seguro; accidentalidad de la necesidad; naturaleza de la misma; su estimación.— Fin del seguro; maneras de cubrirse la necesidad.— Sujetos del seguro; nacimiento del derecho del asegurado; carácter del mismo; modos de adquirirlo.— El objeto; distintas opiniones sobre el mismo; objeto material y objeto formal.— Límites del seguro; límites subjetivos; capacidad de pago; modos de efectuarlo.— Límites objetivos; estimación de la necesidad colectiva; frecuencia de la necesidad; su radio de acción; posibilidad de ser cubierta.— Diferencia esencial entre el seguro y la asistencia; diferencia esencial entre el seguro y el ahorro; formación histórica y evolución del seguro moderno.— División del seguro atendiendo al sujeto; división atendiendo al objeto; clases de seguro personal; clases de seguro real.

El seguro obrero. = Distinción entre seguro social y seguro obrero; seguro obrero en sentido amplio; seguro obrero en sentido restringido; importancia económica del seguro obrero; sus fines; a) social; b) políticos; c) culturales; sus distintas ramas.— Sistemas de seguro obrero; sistema privado; sistema público; sistema mixto; ejemplo de cada uno de ellos; lucha entre partidarios del sistema privado y partidarios del sistema público. Cuándo se halla indicada la implantación de cada uno de ambos sistemas.— La coacción en el seguro; su sentido social; seguro obrero voluntario y seguro obrero obligatorio; resultados prácticos del primero; ventajas sociales y administrativas del segundo; diversas clases de seguro obligatorio; seguro obrero mixto; ejemplos de cada uno de estos sistemas.— El problema de la responsabilidad subsidiaria.— Desarrollo moderno del seguro obrero en los principales países.

Problemas fundamentales en la organización del seguro obrero;

A. = Personas que entran en el seguro; principales limitaciones; a) condición social; b) profesión; c) edad; d) renta.— Limitaciones que corresponden a los distintos sistemas de seguros.

B. = Órganos del seguro; a) las compañías mercantiles de seguros; b) las cajas locales de socorros mutuos y sus federaciones; clases de unas y de otras y sus organizaciones administrativas; c) las cajas especiales de las corporaciones profesionales; sus clases y organizaciones administrativas; d) las instituciones especiales de los organismos públicos; sus clases y organizaciones administrativas.

C) = Beneficios del seguro; diversidad de los mismos según la rama correspondiente del seguro; sus formas; sus límites; condiciones para su disfrute; duración; intransmisibilidad; otras limitaciones contractuales; compatibilidad de los beneficios en el seguro obligatorio con toda clase de derechos políticos.— El problema de la culpa en el seguro con relación a la pérdida total o parcial de los beneficios; dificultades para establecer la culpa; faltas graves y faltas leves; solución que se ha dado al problema en las diversas legislaciones.

D) = Contribuciones al seguro; diversos sistemas de contribución.— Efectos de los retrasos en el pago; personas contribuyentes; a) en el seguro voluntario; concesiones y subvenciones en los organismos públicos; b) en el seguro obligatorio; justificación de la responsabilidad patronal exclusiva en el seguro de accidente; justificación de la contribución patronal en todos los seguros; contribuciones suplementarias de las corporaciones públicas; justificación de dichas contribuciones.

E) = Organización administrativa del seguro; a) en el seguro voluntario; b) en el seguro obligatorio; 1) por cajas privadas autónomas; 2) por instituciones públicas; organización por profesiones; ventajas e inconvenientes; organización por distritos; ventajas e inconvenientes; organización mixta.— Ejemplos de organización unitaria del seguro.

LECCIÓN 36

Seguro contra el paro forzoso.— Su concepto; función que desempeña dentro del sistema de medidas para aliviar los efectos de la desocupación; su importancia como defensa contra el envilecimiento del salario; causas de su lento desarrollo; a) dificultades para estimar el riesgo; b) dificultades para evitar la simulación.

Medidas que se adoptan en el seguro contra el paro a fin de limitar los abusos; a) respecto a las personas que entran en el seguro; b) respecto al comienzo; cuantía y duración del socorro; c) respecto a la comprobación de la desocupación forzosa y de la voluntad de colocarse por parte del asegurado; d) castigos en caso de abuso.— Técnicas de esta clase de seguro.

Sistemas de seguro contra el paro:

A = Seguro voluntario; obstáculos para su difusión; desigualdad del riesgo según las profesiones y localidades; relación inversa entre el riesgo y la capacidad contributiva de los asegurados; desventajas que supone para los obreros calificados organizarse con los no calificados; escasez de medios de estos últimos para costear el seguro; órganos del seguro voluntario contra el paro; clases del mismo; a) seguro público; b) seguro profesional subvencionado por el Estado; los municipios o por donaciones particulares; justificación de las subvenciones del Estado así como de las municipales; c) seguro profesional sin subvención.

B = Seguro obligatorio contra el paro; su sentido social; personas que contribuyen; justificación de la contribución de los patronos; clases de

seguro obligatorio; a) seguro nacional; órganos del mismo; b) seguro municipal; órganos del mismo.

El ahorro obligatorio; proyectos de sistemas de este carácter para evitar las dificultades del seguro contra el paro y sustituirlo; el ahorro voluntario subvencionado; su aplicación a la desocupación.

El seguro contra el paro en los principales países; características nacionales, instituciones y legislación.

En la Gran Bretaña. = El seguro nacional contra el paro; antecedentes; base para su implantación; difusión que había alcanzado el seguro contra el paro en las «Trade Unions»; diversidad de contribuciones y beneficios según las profesiones; modos de allegar los fondos; confusión del fondo destinado a huelgas con el destinado a desocupación; vigilancia para impedir los abusos de los asegurados; castigos.— El seguro contra el paro en las «Friendly Societies»; importancia y organización del mismo.— Actitud de los poderes públicos en Inglaterra con respecto a estas instituciones de seguro antes de la reforma social.

El seguro nacional contra el paro; ley de 16 de diciembre de 1911; carácter del seguro; personas que abarca; edad, profesiones.— Beneficios a los asegurados; su importe según la edad; cuando comienzan a percibirlos; tiempo máximo y tiempo mínimo de percepción; relación entre el número de cuotas satisfechas por el asegurado y el tiempo máximo de disfrute del beneficio; condiciones estatutarias para el disfrute; circunstancias que eximen de su cumplimiento; motivos de pérdida total o parcial del derecho al beneficio.— Contribuciones al seguro; quienes contribuyen y proporción en que contribuyen; responsabilidad patronal respecto a la contribución de los obreros.— Fondos del seguro; responsabilidad del Estado; anticipos del Tesoro público; medidas a adoptar en caso de insolvencia del fondo para pago de beneficios.— Restituciones a patronos; casos y condiciones.— Revisión periódica de las cuotas de contribución.— Árbitros, Tribunales arbitrales, funcionarios e inspectores del seguro; regulaciones; composición de los Tribunales arbitrales; facultades de los inspectores.— Las asociaciones obreras como órgano del seguro; sociedades que pueden entrar en la organización nacional; condiciones en que administran los beneficios del seguro de sus miembros.

LECCIÓN 37

El seguro contra el paro en los principales países; características nacionales; instituciones y legislación (continuación).

En Alemania; Estudios hechos para el establecimiento de un seguro imperial obligatorio contra el paro; dificultades que se han presentado; proyectos que se han discutido en los Estados particulares.— Sistemas de seguro obrero contra el paro implantados en Alemania;

a) sistema municipal; «Caja de seguro contra el paro, de Colonia, para obreros y empleados»; personas que entran en el seguro.— Beneficios a los

asegurados; condiciones que estos han de reunir; tiempo de vecindad; salario mínimo; cuándo comienza a percibirse el beneficio; duración clases de tarifas; cuotas de beneficios según cada tarifa; casos de pérdida o interrupción de los derechos del asegurado.— Contribuciones al seguro; sus clases según el riesgo; profesiones que a cada una de ellas corresponden; cuotas respectivas.— Donaciones particulares.— Órganos del seguro.— Conciertos con los sindicatos profesionales obreros que tienen seguro organizado, para el reaseguramiento de sus miembros; compensaciones que la Caja les reconoce; contribuciones que se fijan a los Sindicatos.

b) sistema de seguro profesional subvencionado por municipios; diferentes tipos; organizaciones de igual tipo pero sin ahorro subvencionado; 1) solamente para miembros de sindicato con seguro; 2) con protección además para obreros no asegurados.— Personas que son admitidas en las diversas organizaciones; formas de la subvención municipal; intervención de los municipios en la contabilidad de los Sindicatos.

c) sistemas de seguro profesional sin subvención; las cajas de seguro contra el paro en los diferentes grupos de sindicatos; diversidad de beneficios, de cuotas y de condiciones; acuerdos de los congresos celebrados por cada grupo, en lo referente al problema del seguro contra el paro.

En Bélgica. = Predominio del sistema de seguro profesional subvencionado; entidades que subvencionan; métodos de subvención; 1) método de Gante; 2) método de Lieja.— Distribución de la subvención del Estado; forma de las subvenciones provinciales; forma de las subvenciones municipales; importancia de estas últimas; intervención de los municipios en la organización del seguro y del ahorro para el seguro; los fondos municipales para el seguro; unificación intercomunal de los fondos; comités que los administran ; órganos; regulaciones acerca del comienzo, importe y duración de las primas de subvención; criterio que se sigue en Lieja respecto a los «lock-out»; conciertos para subvencionar el ahorro colectivo con los sindicatos que no tienen seguro organizado.

En Dinamarca. = La Ley de seguro voluntario de 1907 con subvención pública; naturaleza de las asociaciones que admite como órganos la ley; personas que en ellas pueden entrar; profesión; edad mínima y máxima; renta personal máxima.— Cuantía y forma de la subvención del Estado; cuantía y forma de la subvención que el Estado autoriza concedan los organismos públicos locales; regulaciones sobre los beneficios; formas en que pueden satisfacerse.— Autonomía de las asociaciones para el seguro.— Inspección y comité general; composición de éste.— Resultados prácticos de la ley; constitución de asociaciones para el seguro anejas a los sindicatos obreros.

En Francia. = Pequeño desarrollo del seguro contra el paro; sus causas; principio en que se basa el decreto de 1905 concediendo subvenciones públicas a las instituciones de seguro; clases de asociaciones que distingue; exigencia que establece respecto a las asociaciones locales; proporciones

que fija para las primas de subvención del Estado sobre los beneficios pagados; formación del comité para administrar la subvención; modificación de las primas de subvención en 1908; efectos de la legislación.— Importancia de las subvenciones de los departamentos y municipios; diversidad de la cuantía y de la forma de aplicación de las primas de subvención; evolución en este punto de algunos municipios; extensión de la subvención de la Rochelle al ahorro para el seguro; importancia en Roubaix de las subvenciones patronales; actitud de los sindicatos obreros frente a estas subvenciones.

En Noruega. = Ley de 1906 concediendo subvenciones del Estado a las asociaciones que tienen organizado el seguro contra el paro; sistema de dicha ley; peculiaridad de la misma en lo que respecta a los fines de las asociaciones que no sean los privativos del seguro; actitud de los sindicatos obreros a causa de tal disposición; aumento de las primas de subvención del Estado en 1908; resultado de esta reforma.

En Suiza. = Fracaso del seguro público obligatorio contra el paro en varios cantones y municipios; razones que lo explican; fracaso del seguro profesional obligatorio subvencionado y del seguro público voluntario en el Cantón de Basilea.— Sistemas hoy implantados; a) el seguro municipal en Berna; su organización y resultados; b) el seguro voluntario profesional subvencionado; organizaciones y resultados.

En Italia. = Proyecto de ley de fomento del seguro profesional; mediante subvención pública aprobado en la Cámara de Diputados de 1910; el seguro profesional subvencionado en Milán y otras poblaciones.

En los Estado Unidos. = Escaso desarrollo que ha tenido el seguro contra el paro; organizaciones profesionales del seguro en algunas «*Trade-Unions*».

LECCIÓN 38

La relación de trabajo.— Su problema; los dos factores esenciales. El salario; su importancia; el salario como coste y el salario como renta; diferencia entre el precio de una mercancía y el precio de la fuerza de trabajo.— Clases de salario. Factores que determinan la cuantía del salario; límites de su acción. La demanda de trabajo y el capital variable. Las alteraciones del consumo, del capital constante, del capital improductivo y de la rapidez en el giro del capital circulante como factores del salario.— La demanda de trabajo.— La oferta de trabajo. Su relación con los movimientos de la población y con la situación social de la clase trabajadora. El coste de producción del trabajo.— Teorías del salario; agrupación de las mismas según la crítica de los hechos del salario; bases éticas de las crítica.— El problema del salario en la economía individualista.— El derecho natural y la formación del salario en los fisiócratas; el derecho a la exigencia según Turgot; influencia del derecho natural en la concepción del «salario natural» de Adam Smith; el factor de la concurrencia; David Ricardo y

la teoría del «fondo de salarios»; negación de toda política de salarios; tendencia polémica de la teoría del fondo de salarios; tendencia subjetivista de Thornton; reforma de la teoría del fondo de salarios y de la posibilidad de una política de salarios. Escasa importancia de las demás teorías individualistas. Posición extrema de Juan Bautista Gay. Teoría moderna de Movre.

LECCIÓN 39

El problema del salario en los tratadistas católico-sociales.— Bases de las teorías católico-conservadoras del salario; el deber de conservar la vida según Santo Tomás; tendencia a limitar la libertad del contrato de trabajo; opiniones sobre este punto de Kettler, Volgensang, Eberle y Hitze; bases señaladas por este último para la protección de la integridad del trabajador; el *justum pretium* y su aplicación al problema del salario; las dos clases de justicias; la escuela francesa de la equidad en el reparto del producto; la escuela de justicia natural; el salario en relación con las necesidades; concepto amplio de las necesidades del trabajador según el P. Costa-Rosetti; punto de vista de León XIII en la encíclica *Rerum Novarum*; objeciones de la escuela francesa; punto de vista intermedio.— La intervención del Estado en el salario; divergencia de opiniones; los fines del Estado en la filosofía moral católica; teorías de Cathrein, Lehmkuhl, Hitze, Manning, Vogelsang y Eberle; intervención directa e intervención indirecta del estado; problemas de cada una de ellas según Eberle; tendencia intervencionista de la encíclica *Rerum Novarum*.— La caridad como fundamento en la mayor parte de las teorías católico-sociales; la nueva escuela germano-austríaca y su concepción del derecho del trabajador.

El problema del retribución del trabajo en el socialismo; direcciones principales; distinción entre la idea del derecho a la existencia y la idea del derecho al producto interno del trabajo; representantes de la primera tendencia; concepción comunista de Louis Blanc.— Tendencia del derecho al producto íntegro; teoría de Lassalle; la «ley de bronce» del salario; la «ley de bronce» en otros tratadistas anteriores a Lassalle y su relación con la «ley de población» de Malthus; el concepto de las necesidades según Lassalle falta de coherencia en las doctrinas de Lasalle acerca del salario. Engels; Marx.— Representación programática de derecho al producto íntegro; acuerdo del Congreso internacional de Bruselas de 1868...

Teorías ético-sociales acerca del salario; finalidad de su programa práctico.— El salario mínimo real en Engels.— Juicio de Marx acerca de la formación real del salario; indiferencia del marxismo hacia el problema de la distribución.— Representación programática del derecho al producto íntegro; acuerdo del Congreso Internacional de Bruselas de 1868; programa del partido socialista alemán aprobado en el Congreso de Eisenach; evolución en el programa de Gotha; causa de dicha evolución; el problema de la distribución en el nuevo socialismo; reaparición de la teoría del derecho

a la existencia; reflexiones de Kantsky sobre el problema; evolución oportunista del socialismo y favorable a una política de salarios.

Teorías ético-sociales acerca del salario; principio común a estas teorías.— Teorías absolutas del salario; posición de Thunen intermedia entre el individualismo clásico y el marxismo; su fórmula del salario natural.— Tendencia del proyecto de reforma del salario de Rodbertus; el salario como cuota del producto total; coincidencias y divergencias en las teorías de Thunen y Rodbertus.— Teorías político-sociales del salario; fines que para Sismondi debía llenar el salario; necesidad que veía de modificar las reclamaciones entre patronos y obreros; teoría de Mohl sobre el salario con participación; insistencia en el dogma de la oferta y la demanda; especialmente por parte de Hermann y Roscher; sistema de socorro de Rösler.— Progresos de la idea de una política positiva de salarios.— Consideraciones acerca de este punto.

LECCIÓN 40.

La relación de trabajo (continuación).— La Política de salarios: su concepto y sus diversos fines posibles según sea considerado el salario como coste o como renta; historia de la política de salarios: periodos en que puede dividirse.— La política de salarios hasta fines del siglo XVIII; rasgos esenciales de su desenvolvimiento; tasas de salarios impuestas sin la finalidad de una política de salarios: el edicto de Diocleciano; causas que motivaron dicho Edicto; regulaciones de salarios en la Edad Media y carácter de las mismas: sus fines; clase protegida en cada uno de los diversos periodos; el salario máximo; evolución en la política de salarios con la transformación del régimen económico.

La política de salarios en Alemania hasta finales del siglo XVIII: primeras regulaciones de salarios; órganos; clase social que protegían; instituciones; otras bases del contrato de trabajo; formas del salario; diversidad del desenvolvimiento en las distintas industrias; influjo de los movimientos de población desde el siglo XIV hasta el XVI; legislación imperial; la relación de trabajo en el siglo XVII; movimientos del salario; medidas de protección al trabajador; comienzo de la política del salario mínimo.

La política de salarios en Inglaterra hasta fines del siglo XVIII; primeras regulaciones autoritarias; sus fines; clase social protegida; órgano de dicha política; la peste negra y los estatutos de los trabajadores; los estatutos de Isabel; relativa ineficacia de la legislación isabelina; la primera ley de salario mínimo; otros proyectos de la Cámara de los Comunes; intensificación del individualismo económico; sus consecuencias; el «Allonwance-system»; efectos de la política de asistencia.

La política de salarios moderna: en la Gran Bretaña: política de salarios de las «Trade Unions»; su desenvolvimiento y transformaciones; abolición de las «Combination-Laws»; influjo de Owen; la lucha por el salario mínimo; influencia de la teoría clásica del salario en la política de las

«Trade Unions».— Fines de la política de salarios de las «Trade Unions»; el salario «standard»; «living wages»; el salario mínimo como fin unitario de todos los esfuerzos.— Medios que emplean las Trade Unions para su política de salarios.

Política de salarios de los organismo públicos en la Gran Bretaña; disposición de 1891 sobre «fair wages»; su esfera de acción; iniciativas y medidas de las autoridades locales; las «current wages»; ampliación de las cláusulas de salarios por las autoridades municipales; efectos de las regulaciones:

Política de salarios en Alemania; escasa aplicación de las cláusulas de salario mínimo.

Política de salarios en Bélgica; cláusulas establecidas por organismos provinciales y municipales; el problema de los «demi-ouvriers»; control; multas; establecimiento del salario mínimo para quienes trabajan por cuenta del Estado.

Política de salarios en Francia: regulaciones sobre salarios durante la revolución del siglo XVIII; el intento de los talleres nacionales; las listas de precios de la ciudad de París; lucha del municipio de París por su política de salarios; tendencia e importancia de los tres decretos de 1899; disposiciones especiales.

Política de salarios en Suiza: renacimiento de la legislación favorable a los trabajadores en Zurich; regulaciones del salario en otros municipios; regulaciones cantonales.

Política de salarios en Australia; iniciación de dicha política; limitaciones legales del salario en Nueva Zelanda; la legislación del salario en el Estado de Victoria y sus fundamentos; aplicación de dicha legislación.

LECCIÓN 41

La relación de trabajo (continuación).— Fundamentos de la política de salarios moderna: fin y esencia de la misma: intervención mediata e inmediata; resultados de la política de las «Trade Unions» inglesas; su influjo educador; aumento del salario nominal en Inglaterra; causas de los fracasos de la «Trade Unions». Satisfactoria influencia de la política de salarios; efectos posibles de una elevación de salarios; sobre los consumidores; sobre los patronos; sobre los precios; sobre la capacidad de concurrencia del trabajo nacional en el mercado mundial y el mercado interior; sobre la población; ventajas económicas de una disminución en el desnivel de las rentas; exigencia ética de la intervención en la formación del salario. Efectos de los salarios bajos; quebrantamiento moral de los ideales de justicia y libertad. La desigualdad material de las partes como obstáculo a la libertad de contrato; el problema de la intervención del Estado en este punto.— La imposición de límites como medio de la política de salarios moderna; métodos y alcance de la limitación; diversidad de métodos: según su fundamento jurídico; según su esfera de acción; según la clase de determina-

ción del salario.— Problemas de la política de salarios pública; especialmente en lo que se refiere al salario mínimo; tendencias naturales de la política obrera de salarios; la libertad de coligación como supuesto de dicha política; política pública de salarios activa; su alternativa: el contrato de trabajo; problemas especiales en la política de los organismos públicos en cuanto patronos; problema especial del Estado en lo referente a la regulación del contrato colectivo.— Supuestos peligros del salario mínimo; el salario mínimo como estímulo para nuevos aumentos del salario; la codicia del obrero; el salario mínimo como premio a la pereza; peligros para el «demi-ouvrier»; límites de la política de salarios.

El trabajo como contenido de la relación de trabajo; la libertad de trabajo; sus consecuencias para el trabajador; limitaciones a dicha libertad; la protección legal del trabajador; sus fundamentos económicos y éticos; su evolución; el sujeto de dicha protección; influencia de las condiciones de edad y sexo; los problemas:

a) Medidas de protección al trabajador respecto a la libertad de contratación; admisión, ordenanzas del trabajo; cartillas para jóvenes; disolución del contrato; plazo para la denuncia¹³, motivos que justifican la denuncia¹⁴ del contrato por parte del trabajador;

b) Medidas de conservación y desarrollo de la fuerza de trabajo: limitaciones de la jornada; pausas; limitaciones del trabajo nocturno; descanso en domingos y días festivos; prohibición de trabajo de los niños; prohibición del trabajo de las mujeres en ciertos casos; prohibición del trabajo de las parturientas; prohibición del trabajo nocturno de las mujeres y niños; medidas de salubridad y de seguridad en las industrias; prohibición de ciertas industrias;

c) Medidas de protección de la vida moral del trabajador: limitaciones de la jornada; limitaciones del trabajo extraordinario en días festivos; prohibición del trabajo de las mujeres y los niños en la producción de ciertos artículos; limitación del trabajo de los menores que están dentro de la edad escolar.

LECCIÓN 42

La relación de trabajo (continuación).— Forma de la relación de trabajo: el contrato de trabajo; su desenvolvimiento histórico: el contrato de trabajo en el derecho romano; el trabajo servil en Roma; el salario como precio de la esclavitud; el trabajo libre; el *locatio conductio operarum* y el *locatio conductio operis*; el salario como precio de alquiler; consideración deshonrosa del trabajo por cuenta ajena mediante retribución, en Roma; imposibilidad de contratar la *ars liberalis*; condiciones del contrato de tra-

¹³ Tachado «de despido», escrito a mano y encima «para la denuncia».

¹⁴ Tachado «ruptura», escrito a mano y encima «denuncia».

bajo de los niños; contrato de aprendizaje.— El contrato de trabajo en el derecho germano de la Edad Media; diferente consideración del trabajo que en Roma; relaciones morales de poder entre señor y siervo; falta de una forma general jurídica de la relación de trabajo; especial forma de compensación al siervo; otras relaciones de trabajo en la Edad Media: relación personal de servicios en los oficios; diferencia de esta relación con la del Derecho romano; forma de la retribución; contratos de aprendizaje; entrada del Derecho romano en Alemania; asimilación del mismo como derecho complementario.— La revolución francesa y el Código civil; influjo de las teorías del derecho natural, de los fisiócratas y de Adam Smith; el Estado garante de la libertad individual; abolición de los derechos de dependencia medioevales; el contrato de trabajo como contrato de alquiler («louage des domestiques et ouvriers»); libertad ilimitada de contratación; la ley como norma de unión de los contratantes; influencia en Europa del Derecho de la revolución; desaparición de las desigualdades jurídicas; la prohibición de las coligaciones como corolario del Derecho libre.— Transformaciones económicas; nacimiento de nuevas relaciones de dependencia.

Moderna concepción del contrato de trabajo; su problema; su esfera de aplicación; definición del contrato de trabajo; el contrato de trabajo considerado como contrato; su diferencia del mandato; el contrato de trabajo como contrato mutuo; su diferencia con la prestación de trabajo gratis contractual y con la prestación de trabajo retribuido no contractual; su diferencia con el contrato de sociedad, con el de compraventa, con el de alquiler o arrendamiento, y con el de cesión de uso. Terminología; su aplicación en la ciencia y en la legislación.— Contenido del contrato de trabajo; contenido esencial y contenido inesencial; los dos elementos del contenido esencial; la promesa de trabajo; la promesa expresa y tácita; el trabajo como objeto posible del contrato; consideración del aprendizaje; dirección del trabajo; ejecución del trabajo; recepción del trabajo; quienes pueden recibirlo; exigencias negativas del trabajo; trabajo ilegal, trabajo inmoral.— La retribución; diversas designaciones según sus clases; diferencia entre la retribución y la indemnización; su diferencia de reembolso; la retribución como reciprocidad de servicios; su diferencia de la renta vitalicia; de la compensación; clases de retribuciones.— Prestaciones reales conexas con el trabajo: absorción; acumulación y combinación; diversos casos.

Condiciones naturales y accidentales¹⁵ del contrato de trabajo; relación entre éstas y las condiciones esenciales; prescripciones ejecutivas; modificativas; suplementarias; formularios del contenido y sus clases; tasas legales; reglamentos del trabajo.— Celebración del contrato: solemnidades; forma escrituraria; requisitos en cuanto a la capacidad de los contrayen-

¹⁵ Escrito a mano sobre «Contenido inesencial del», que queda tachado.

tes.— Tipos legales de contratos de trabajo: su carácter; sus clases; tipos de contratos de trabajo en el Código de Comercio.— Formas fundamentales del contrato de trabajo; diferencia entre contrato a jornal y contrato a destajo como diferencia formal interna; combinaciones de ambas formas.

LECCIÓN 43

La relación de trabajo.— Su forma (continuación). = El tiempo de pago en el contrato de trabajo: su concepto; periodo de pago; periodo de liquidación; diferencias entre jornada de trabajo, duración del contrato y periodo de tiempo que sirve de medida al salario; importancia económica del tiempo de pago: regulación del tiempo del pago: el trabajo precede al pago; excepciones. El vencimiento y sus consecuencias; el abono en cuenta; sus peligros; derecho de retención del patrono; consecuencias; formas de la garantía que da el patrono a sus obreros; la liquidación o compensación de deudas y créditos; necesidad de su limitación; la retención; diferencia de las esferas de aplicación de la liquidación y de la retención; clases de retención; detención por deudas contraídas: casos en que se admite y casos en que se prohíbe; retención legal; su aplicación al seguro obrero; retención contractual; limitaciones de esta clase de retención; la incautación; la incautación como multa privada.

La jornada de trabajo: su concepto; su importancia económica y jurídica; regulación de la jornada; formas de la regulación; clases; periodos de la jornada; descansos; horas extraordinarias.

Duración del contrato de trabajo: su relación con la forma del contrato; comienzo del contrato; condición suspensiva; perfeccionamiento; determinación de la duración del contrato; sus clases.

Retribución natural; limitaciones legales; la prohibición del «truck-system»; distinción de las prestaciones naturales que posibilitan el trabajo; otras retribuciones naturales; retribución en ocasiones productivas; sus clases; relación de la retribución natural con las formas fundamentales del contrato de trabajo; condiciones de la retribución natural y garantía del patrono con respecto a los salarios adecuados; carácter patriarcal de la retribución natural; peligros para la libertad e independencia del trabajador; relación histórica entre la retribución natural y la retribución en dinero. Proyectos de ley sobre el contrato de trabajo en España ¹⁶.

El contrato colectivo de trabajo: sus esencia y su finalidad social; su importancia económica y jurídica; historia de su desenvolvimiento; factores económicos y jurídicos que lo han posibilitado; contenido del contrato colectivo de trabajo; limitaciones; forma del contrato; partes contratantes; del lado patronal; del lado obrero; diferencia entre el contrato

¹⁶ Esta última frase está escrita a mano.

colectivo y la ordenanza del trabajo; la coligación en el contrato colectivo.— Efectos jurídicos; limitaciones legales y de orden moral.— Su zona de vigencia.— Ejemplos de contratos colectivos de trabajo.

LECCIÓN 44

Protección legal del trabajo en Inglaterra.— Importancia de su legislación.— Motivos que la inspiraron.— Causas de su temprano desenvolvimiento. a) el progreso industrial; b) las consecuencias del liberalismo económico.— Reformadores.— Movimientos sociales.— Informaciones parlamentarias.— Informe de la comisión médica de 1796.— «The Moral and Health Act» de 1802.— Su contenido.— Robert Peel y la información parlamentaria de 1815.— Ley de 1819.— Leyes de 1820-1831.— Agitación social y proyectos de la limitación de la jornada de trabajo.— Información parlamentaria y comisión regia para el estudio de las relaciones del trabajo.— Resultado de la misma, ley de 2 de agosto de 1833 llamada Lord Althorps Act; su importancia; su contenido.— Ley de 6 de julio de 1844 para el trabajo en la industria textil, de los menores, adultos y mujeres.— Ley de 8 de junio de 1847 sobre la limitación de la jornada de trabajo, necesarias reformas de la misma.— Modificaciones en la ley de 30 de julio de 1874.

Trabajo en las minas.— Nueva campaña de Lord Ashley.— Children Employment Comisión: su informe.— Disposiciones del año 1842.— Leyes posteriores.— Legislación sobre las industrias libres.— Aplicación a varias industrias de la ley de fábrica.

Children Employment Comisión de 1861.— Sus resultados.— Codificación, mejora y ampliación de las leyes por la de 27 de mayo de 1878, «Factory and Workshop Act».— Otras disposiciones.— «Consolidation Act» de la «Factory and Workshop Act».— Importancia de la misma.

Medidas de salubridad y seguridad en el trabajo, Public Health Acts.— El trabajo industrial, de los menores.— Su reglamentación.— El trabajo de las mujeres, jornada máxima de descanso, prohibición del trabajo en determinadas industrias.— Trabajo de las parturientas.

Industrias peligrosas e insalubres.— Distintas disposiciones.— Carácter particular de las mismas.— Creación del «Superintending Inspector for dangerous trade».— Especiales preceptos de la «Factory and Workshop Act».— Aplicación de la citada ley a otras industrias.

Trabajo doméstico.— Legislación especial.— Especial protección de los niños.— Leyes escolares.— La prevención de «Cruelty to Children Act».— La «Employment of Children Acts» de 14 de agosto de 1903.

Sobre la forma de pago de salario.— Trucksystem.— Disposiciones de la Factory and Workshop Act.— Leyes especiales por la forma de trabajo.— El trabajo en las minas.— En establecimientos comerciales.— En la marina mercante.— En los transportes terrestres.

Inspección del trabajo.— Organización del mismo.— Cooperación de los médicos rurales.

LECCIÓN 45

Protección legal del trabajo en Alemania; Antecedentes.— Legislación en Prusia; historia de la legislación hasta la constitución del Imperio.— Leyes más importantes.— Codificación del siglo XVIII.— Ley de 7 de septiembre de 1811.— Decreto de 9 de marzo de 1839 sobre el trabajo de los niños y de los menores.— Reglamento industrial de 1845.— Decreto de 1849.— Ley de 18 de marzo de 1853, sobre el trabajo de menores y adultos y los inspectores de trabajo.— Reglamento industrial de la Confederación alemana del Norte, 21 de junio de 1869.— Legislación de Baviera, Sajonia, Wutemberg.

Renacimiento de la política obrera en Alemania; sus causas; influencia del socialismo.— Información sobre el trabajo en los años 1874-75.— Resultados de la misma.— Movimiento social a favor de las reformas obreras.— Novela de 1878.— Comunicaciones imperiales de 4 de febrero de 1890.— El discurso de la Corona del 6 de mayo.— Conferencia internacional sobre la protección del trabajo.— Ley industrial de 1 de junio de 1891.— Leyes especiales posteriores.

Limitación de la libertad de contratación para los trabajadores en general; para los oficiales, auxiliares y trabajadores de fábrica; para los empleados, contra maestros y técnicos industriales; para los dependientes de comercio; para los aprendices.— Limitación del trabajo en días festivos.— Excepciones.— Órganos administrativos que pueden otorgarlas.

Sobre el pago del salario y el «Trucksystem».— Certificados de aptitud.— Disposiciones sobre seguridad, higiene y moralidad en el trabajo.— Ordenanza del trabajo.— Junta de trabajo.

El trabajo de las mujeres; jornada máxima de trabajo, descanso y trabajo nocturno; excepciones trabajo de las parturientas; trabajos prohibidos a la mujer; penalidad.— Trabajo de jóvenes; limitación del trabajo de los mismos; condiciones de higiene y moralidad; educación técnica; cartilla de trabajo y certificado de aptitud; prohibición del trabajo en ciertas industrias; trabajo nocturno; jornada máxima y descanso.— Sobre la conducta del menor fuera del trabajo.— Aprendices: preceptos generales sobre la celebración del contrato; deberes recíprocos de maestro y aprendiz; disolución del mismo; disposiciones especiales sobre el aprendiz manual y el aprendiz comercial; penalidades.

Inspección del trabajo; creación de los Inspectores del trabajo; facultades y obligaciones de los mismos.— Tribunales especiales, industriales, mercantiles.— Disposiciones especiales por la forma y trabajo.— Resultado de la protección del trabajo.

LECCIÓN 46

Protección legal del trabajo en Francia.— Influencia de la revolución.— Desarrollo del capitalismo.— Desaparición de los oficios.— El derecho de coligación.— Influencia religiosa en el descanso de los días festivos, ley de 18 de septiembre de 1814.

Sismondi, Burckhardt e informe de Villermé.— Información de las Cámaras de Comercio e Industria.— Agitación social.— Intentos de reforma.— Ley de 22 de marzo de 1841.— Ley de 21 de febrero de 1848.— Su significación.— Disposición de la segunda República.— Decreto de 2 de marzo de 1848 sobre la limitación de la jornada de trabajo y decreto de 9 de septiembre de 1848 sobre el trabajo en las fábricas.— Ley de 22 de febrero de 1851 sobre los aprendices.

El segundo imperio.— Agitación de la «Société de protection des apprentis et des enfants des manufactures».— Decretos de 7 de diciembre de 1868 y 27 de marzo de 1869 sobre el servicio de inspección.— Proyecto del año 70.

La tercera República.— Informe parlamentario de Mr. Tallon en 1872.— Ley de 19 de mayo de 1874.— Ley de 16 de febrero de 1883 organizando la inspección.— Escasa importancia de las leyes de esta época.

Ley de 2 de noviembre de 1892 sobre el trabajo de los niños menores y mujeres.— Ley de 12 de junio de 1893 sobre las condiciones de higiene y seguridad del trabajo.— Ley de 30 de marzo de 1900 sobre el límite de la jornada de trabajo.— Leyes especiales sobre la protección del trabajo en determinadas industrias.

El trabajo de los niños.— Admisión al trabajo.— Duración de la jornada.— Descanso.— Trabajos nocturnos.— Días festivos.— Excepciones.— Trabajos de las mujeres.— Idem de los obreros.

Descanso semanal.— Condiciones de salud y seguridad.— Leyes especiales.— Razón de la forma de trabajo.

Inspección.— Reglamentación de la misma.— La inspección en las minas.— Castigos.— Disolución del contrato de trabajo.— Garantías para la percepción del salario.

Protección legal del trabajo en Bélgica.— Antecedentes históricos.— Legislación vigente.— Limitación del trabajo de los niños, mujeres y pariturientas.— El límite de la jornada del trabajo.— Condiciones de higiene y seguridad.— Ordenanzas del trabajo.— Pago del salario.— Inspección.— Consejos de la industria y del trabajo.

Protección del trabajo en Suiza.— Antecedentes.— Legislación cantonal.— Protección del trabajo a domicilio.— Legislación cantonal de 1848 a 1873.— Ley federal de fábrica de 23 de marzo de 1877.— Su contenido.— Leyes posteriores.— Novela de 1905 sobre el descanso.— Reglamentación del trabajo en las fábricas de cerillas.— Nueva legislación cantonal.— Revisión de la ley federal de 1877.

LECCIÓN 47

Protección legal del trabajo en España. Antecedentes.— Creación del Instituto de Reformas Sociales. Su organización, funcionamiento y trabajos del mismo. El trabajo de los niños.— La ley de 13 de marzo de 1900.— Reformas posteriores, su contenido.— Jornada máxima del tra-

bajo de los niños.— El contrato de aprendizaje, ley de 17 de julio de 1911.— Protección a la infancia, ley de 12 agosto de 1904.— Ley de 16 de julio de 1878 sobre los ejercicios peligrosos de los niños.— Reglamento de 12 de abril de 1910 sobre la puericultura.— El trabajo de la mujer, ley de 13 de marzo de 1900.— Prohibición del trabajo industrial nocturno de las mujeres, ley de 11 de julio de 1912.— Jornada máxima de trabajo de las mujeres.— La ley de silla de 27 de febrero de 1912.— El descanso dominical, ley 3 de marzo 1904, su reglamento.— Real decreto de 24 de enero de 1908.— Limitación de la jornada de trabajo en las minas, ley de 27 de diciembre de 1910.— Reglamento de policía minera.— Sobre el pago del salario.— Real decreto de 27 de julio de 1907.— Inspección del trabajo.— Real decreto de 1 de marzo de 1906.— Reales órdenes posteriores.— Circular de de 3 de marzo de 1916.— Organización de la inspección.— Juntas locales y provinciales.— Tribunales industriales.— Legislación.— Sobre los Consejos de conciliación y arbitraje industrial, ley de 19 de mayo de 1908. Ley de 27 de abril de 1909, sobre huelgas, coligaciones y paros.

El contrato de trabajo. Antecedentes de este problema. Proyectos de ley sobre el contrato de trabajo. Proyecto de ley pendiente de discusión en las Cortes. Proyecto sobre el trabajo en la industria textil, Real decreto de 24 de agosto de 1913. Proyecto sobre la jornada de la dependencia mercantil.

Protección legal del trabajo en Austria.— Historia legislativa.— Reglamento industrial de 1859.— Novelas de 1883 y 1885.— Su complemento. Ley de 5 de febrero de 1907.— Sobre el contrato de aprendizaje, ley de 23 de febrero de 1897.— Leyes especiales para los obreros de las minas.

Protección legal del trabajo en Bélgica.— Antecedentes históricos. Legislación vigente.— Limitación del trabajo de los niños, mujeres y pariturientas.— El límite de la jornada del trabajo. Condiciones de higiene y seguridad.— Ordenanzas del trabajo.— Pago del salario.— Inspección.— Consejos de la industria y del trabajo.

Protección legal del trabajo en Suiza.— Antecedentes.— Legislación cantonal.— Protección del trabajo a domicilio.— Legislación cantonal de 1848 a 1873.— Ley federal de fábrica de 23 de marzo de 1877.— Su contenido.— Leyes posteriores.— Novela de 1905 sobre el descanso.— Reglamentación del trabajo en las fábricas de cerillas.— Nueva legislación cantonal.— Revisión de la ley federal de 1877.

Protección legal del trabajo en Italia.— Historia legislativa.— El trabajo en las minas, ley de 7 de diciembre de 1843.— Información sobre el trabajo de los niños de 1877.— Ley de 1888 sobre el trabajo de los niños.— Leyes de 1902 y 1907 sobre la misma materia.— Descanso.— Ley de 6 de diciembre de 1907.— Otras disposiciones.

LECCIÓN 48

Protección legal del trabajo en Rusia.— Historia legislativa.— Disposición respecto a la trabajo obligatorio del siglo XVIII.— Leyes obreras en el

sentido moderno.— Ley del 2 de mayo de 1835 favoreciendo a los patronos.— Ley imperial de 1845.— Causas principales que influyen en la legislación fabril rusa.— Proyectos.— Movimientos políticos y leyes imperiales, de 1882 sobre el trabajo de los niños y de 1885 sobre el trabajo de las mujeres y de 1886 sobre la forma de los pagos del salario.— Ley del 2 de junio de 1882.— Su origen, elaboración y contenido.

Personas protegidas.— Jornada de trabajo.— Condición del contrato de trabajo.— Inspección.— Juntas industriales.— Amplitudes y facultades.— Especiales leyes en relación con la forma de trabajo.— Efectos de esta legislación.

Protección legal del trabajo en Australia y Nueva Zelanda.— Condiciones políticas, económicas y sociales.— Carácter especial de esta legislación.— Leyes especiales sobre Wages Boards.— Consideración especial sobre la legislación de Nueva Zelanda.— The Factories Acts de 1903.— Contenido.— Condiciones de higiene, seguridad, tiempo de trabajo, salario, descanso.— Inspección.— Amplias facultades de los Inspectores.— Leyes de conciliación y arbitraje.— El arbitraje obligatorio.— Organización del mismo.— Disposiciones sobre el salario.— Leyes especiales por razón de la forma de trabajo.

Protección legal del trabajo en los Estados Unidos.— Antecedentes sociales y económicos.— Esfuerzos por una legislación común a la confederación de todos los Estados de la América del Norte.— Escasos resultados.— Estado de la legislación social.— Legislación de los distintos Estados, Massachusettes, Nueva York, Pensylvania.— Escasa importancia de la legislación en los demás Estados.

LECCIÓN 48¹⁷

Intentos encaminados a conseguir el establecimiento de una legislación internacional de protección al trabajo: su doble motivación; el interés de los obreros.— Dificultades que se oponen: 1) políticas; 2) económicas; 3) culturales.— Posibilidad de establecer una legislación mínima; sus probables efectos.— Esfuerzos privados en pro de una legislación internacional; invitaciones a varios gobiernos para reunir un Congreso; creación de varias Ligas de carácter social y preparación de programas internacionales.— Conferencia internacional en Berlín en 1890; iniciativa para su celebración; Estados representados; discurso del Emperador.— Propositiones en lo referente a: a) trabajo en las minas; b) descanso dominical; c) trabajo de los niños; d) trabajo de los jóvenes; e) trabajo de las mujeres.— Importancia de

¹⁷ Escrito a maquina sólo viene la palabra lección, el número viene a mano y en lápiz y parece que le sigue una «i». No se sabe si está ampliando la lección 48, o está incorporando otra distinta con la misma numeración, en cuyo caso sería la 48bis.

la conferencia; efectos prácticos.— Nuevas conferencias; la Asociación internacional para la protección legal del trabajador; su finalidad y organización; preparación de la Conferencia de Berna de 1905: países representados en la Conferencia: acuerdos adoptados.

LECCIÓN 49

Disolución de la relación del trabajo.— Efectos jurídicos de la terminación del contrato de trabajo.— Necesidades de su reglamentación.— Disolución legal.— Despido inmediato.— Despido con plazo.— Motivo de inmediato despido y abandono del trabajo.— Disposiciones legislativas a este efecto en los principales países.— Certificados.

Violación del contrato.— Violación por parte del obrero.— Su transcendencia.— Consideración de la violación en la legislación; a) Periodo anterior al reconocimiento de derecho de coligación. B) Periodo posterior.— Sanciones de carácter penal.— Idem de carácter civil.— La responsabilidad en casos de violación colectiva.— Inducción a la violación.— La violación del contrato por los obreros agrarios.— Violación del contrato por parte del patrono.— Relaciones de la disolución del contrato por la política salarial.— Principales disposiciones sobre la violación del contrato.— España, ley de 22 de julio de 1912.— Conflictos jurídicos emanados de la relación del trabajo.— Naturaleza especial de los mismos.— Necesidad de tribunales especiales.— Significación de estos.— Desenvolvimiento de los «Conseil de prud'hommes». Influencia de esta legislación.— Desarrollo en Alemania.— Creación de los Tribunales industriales.— Carácter obligatorio o voluntario de los mismos.— Competencia.— Constitución de los mismos.— Procedimiento.— Sentencias y apelaciones.— facultades otorgadas a los mismos además de las funciones de justicia.— Legislación.— España, ley 22 de julio de 1912.— Su orientación.— Francia; ley de 27 de marzo de 1907.— Proyecto de Tribunales especiales.— Los trabajadores agrícolas.— Alemania.— Novela de 30 de junio de 1901.— Tribunales especiales.— Tribunales industriales para los mineros.— legislación en los demás países.— Importancia de esta legislación.

LECCIÓN 50

Coligaciones.— Concepto de la coligación.— El derecho de coligación como consecuencia de los efectos de la actual producción económica.— Su necesidad para las clases obreras.— Distintas formas de los abusos de este derecho.— Coligación obligatoria.— Id. en caso de huelga.— Coacciones e inducción a la huelga.— Coligación en determinadas formas de trabajo.— El derecho de coligación en su desarrollo histórico.— Legislación francesa.— Ley de 14 de junio de 1791.— Su carácter.— Leyes de 12 de abril de 1803 y 1910.— Carácter penal de las mismas.— Ley de 25 de mayo de 1864 y de 21 de marzo de 1884.— Inglaterra.— Reconocimiento del derecho limitado de coligación 1824.— Trade-Union Acts 1871.— Conspiracy Act

de 1875.— Reconocimiento del derecho de coligación en otros países. España, ley de 27 de abril de 1909.

Coligaciones temporales.— Huelgas.— Su concepto.— Especial consideración de las huelgas en los servicios públicos.— Fines de las huelgas.— La huelga general como arma política.— Efectos de las huelgas.— Bosquejo histórico de las huelgas en los principales países.

Medios preventivos contra las huelgas.— Tribunales de conciliación.— Su función.— Distinción entre los Tribunales industriales y los Tribunales de conciliación.— desarrollo de estos últimos en Inglaterra.— Kettle y Mundella.— Arbitration Act; 1872.— Ley de 6 de agosto de 1876.— Influencia de esta legislación.

Ley belga de 1877.— Su contenido.— Especial legislación alemana en esta cuestión.— Francia, ley de 27 de diciembre de 1892; los jueces de paz.— Legislación del estado de Massachussets y su influencia en América del norte.— Consideración especial de la legislación australiana.— Su desenvolvimiento.— ley de 1894 de Nueva Zelanda, leyes complementarias sobre conciliación y Curt of arbitratation.— El arbitraje forzoso.— España, ley de consejos de conciliación y arbitraje industrial de 1908.

Lock-out.— Su concepto.— Influencia del mismo en la legislación del contrato.— La cláusula del caso de huelga en los contratos.— Seguro contra las huelgas.

LECCIÓN 51

La enseñanza profesional = Su importancia para el desarrollo de la eficacia de la fuerza de trabajo; elevación intelectual del obrero; su trascendencia social.— Organización de la enseñanza profesional; sistemas; voluntario y obligatorio; privado y público; privado con subvención y privado sin subvención.— La enseñanza profesional en los principales países: en Alemania: disposiciones de la «Gewerbeordnung» de 1891 modificada en 1911, sobre asistencia de menores a las escuelas de perfeccionamiento; deberes de los patronos; facultades de los Municipios; la obligación de asistencia a las escuelas de perfeccionamiento; edad; tiempo de la obligación.— Las «Fortbildungsschulen»; su carácter y enseñanzas.— Preparación profesional en las escuelas generales prusianas.— En Suiza: la enseñanza profesional obligatoria en varios Cantones y Municipios; carácter de las escuelas de perfeccionamiento: sus enseñanzas.— Cursos para reclutas: su carácter.— En Inglaterra: voluntariedad de la enseñanza profesional; evolución en los últimos años hacia la implantación del sistema obligatorio; propagandas de Sadler y Lord Haldane; influencia de la guerra europea en este respecto.— Las «Continuation School» y los cursos de las escuelas técnicas: su carácter y enseñanzas; alumnos que asisten. Los «Juvenile Advisory Comités» de las bolsas del trabajo y su conexión con las «Borrad Scholls».— En Francia: falta de legislación sobre enseñanza técnica elemental; sentimiento de su necesidad; recientes iniciativas parlamenta-

rias.— Los cursos para adultos; clases de Cursos y carácter de cada uno de ellos; sus organizadores.— Dinamarca: las escuelas superiores populares; subvenciones del estado; división de la enseñanza en dichas escuelas.— En otros países, y principalmente en los Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda: organización y carácter de la enseñanza profesional.

LECCIÓN 52

El seguro de enfermedad.— Su fundamento social; los socorros de enfermedad como problema de la asistencia pública; tendencia a la desaparición de este sistema; antigüedad del seguro de enfermedad; el seguro de enfermedad en los gremios; desarrollo posterior sobre la base de la mutualidad; influencia de las organizaciones masónicas y de las organizaciones profesionales; amplitud de esta clase de seguro por razón de su carácter; el factor de la edad de los participantes; clases de socorros; los socorros a la maternidad; generalizada inclusión de los socorros de defunción.

Sistemas de seguros de enfermedad:

A = Seguro voluntario; seguro privado sin subvención; seguro privado subvencionado; formas de subvención; condiciones legislativas. Organización del seguro voluntario por: a) Sociedades mercantiles; b) Cajas de socorros de establecimientos industriales o comerciales; contribución de los patronos; casos de obligación a participar en las cajas; c) Sociedades de socorros mutuos; sus tipos: locales; federadas; inconvenientes financieros de las primeras; carácter general de los miembros de las sociedades de socorros mutuos; d) Cajas de socorros de los Sindicatos profesionales; socorros por las cajas locales; socorros por las Cajas de las Federaciones; e) Cajas de seguro público.

B = Seguro obligatorio: su fundamento social; sus ventajas; contribuyentes; sistemas; a) con órgano propio; sus clases: 1) del Estado; 2) comunal; razones para la creación de Cajas comunales obligatorias; 3) privado; b) sin órgano propio; organización profesional; organización por distritos.

La administración del seguro: sus diversas clases: comités; inspección.— La estadística del seguro de enfermedad; su contenido.

El seguro de maternidad.

El seguro de enfermedad en los principales países: características nacionales, instituciones, legislación: En la Gran Bretaña. = Evolución del seguro de enfermedad: carácter del mismo hasta la reforma social de Lloyd George; nueva tendencia que se marca en esta época.— El seguro voluntario anterior a la ley de 1911: sus instituciones: a) las «Friendly Societies»; importancia de dichas sociedades; su carácter; precedentes en la organización gremial medieval; reconocimiento legal por la ley de 1793; nuevas leyes de 1819 y 1829; comisiones parlamentarias de 1846 a 1855; creación de un registro central por la ley de 1846; la reforma de 1875; revisión por la ley de 1896; contenido de esta ley; forma de registro.— Tipos de «Friendly Societies»: 1) ordinarias; sus clases con arreglo a su organiza-

ción; 2) «Affiluerter Orders»; su origen masónico; su carácter actual; su división por Ordenes; 3) las Cajas de socorros de defunción.— Organización interna de los «Friendly Societies»; disposiciones legislativas sobre su dirección y su estado financiero; clases de socorros; forma de contribuir sus miembros; b) las Cajas de socorros de las Trade-Unions; consideración especial reconocida por la ley de 1871; apoyo financiero de los Sindicatos; c) el seguro del Estado por medio de las cajas postales; escasa importancia; d) Compañías mercantiles de seguros; su regulación.

La ley de seguro nacional obligatorio del Estado, de 1911 y su reforma de 1913; personas a las cuales obliga el seguro; edad; condición social; excepciones; participantes voluntarios: condiciones que han de llenar.— Beneficios a los asegurados: sus clases; beneficios adicionales; beneficios a los menores solteros; cuándo comienzan a percibirse los beneficios; cuándo comienzan a percibirse los socorros de maternidad; duración máxima del beneficio: a) por razón del tiempo percibido; b) por razón de las cuotas satisfechas.— Pérdida total del derecho al beneficio por razón de la edad; casos de pérdida temporal.— Facultad que se otorga a los órganos del seguro para modificar los beneficios adicionales.— Contribuciones al seguro: quiénes contribuyen y proporción en que contribuyen; responsabilidad patronal; contribución de los participantes voluntarios.— Órganos del seguro: condiciones que han de llenar las «Approved Societies»; administración de los beneficios por las mismas; regulaciones sobre contabilidad; disposiciones sobre traslados de sus miembros.— Los fondos del seguro.— Comisionados del seguro; comité consultivo; inspección; comités del seguro; comités médicos locales.— Conflictos.— Otras disposiciones importantes.

LECCIÓN 53

El seguro de enfermedad (continuación) = El Seguro de enfermedad en los principales países; características nacionales, instituciones, legislación. (continuación) =

En Alemania. carácter de la legislación imperial del seguro obrero; su finalidad; motivos políticos que la estimularon; ensayos del sistema voluntario; sus resultados; sistema obligatorio; alcance de la obligación; autonomía administrativa de los órganos del seguro.— Evolución del seguro: antecedentes; a) socorros a los sirvientes enfermos; ley prusiana de 1810; leyes posteriores de otros Estados particulares; b) socorros a los marineros enfermos; legislación prusiana; legislación imperial; disposiciones del Código de Comercio; c) socorros a los dependientes de comercio enfermos; disposiciones del Código de Comercio de 1861; d) el socorro de enfermedad en los oficios manuales e industrias; precedentes de la época gremial; las «Innungskrankenkassen» y las «Hilfskassen»; disposiciones de la legislación prusiana antigua, de la ley industrial imperial de 1869 y de las novelas de 1876 y 1881; importancia de la novela de 1876; e) socorros a los

mineros enfermos; las «Knappschaftskassen»; su carácter coactivo; obligación impuesta a los propietarios de minas; legislación prusiana; leyes de 1854 a 1865; f) Cajas comunales de socorros; facultades coactivas que recibieron por la ley de 1876.

Movimiento reformador a partir de 1880; información y plan para un sistema completo de seguros; legislación vigente sobre el seguro de enfermedad de los obreros industriales, agrícolas, forestales, de mar y personal de empresas comerciales; ley de 1883 reformada en 1892 y modificada o completada después con las novelas de 1900 y 1903; su contenido; carácter del seguro.— Personas obligadas a participar en el seguro: condiciones objetivas: a) obligación absoluta; b) obligación relativa.— Condiciones subjetivas: a) obligación absoluta; b) obligación relativa.— Personas exceptuadas.— Los participantes voluntarios; condiciones.— Beneficios a los asegurados; sus clases, cuantía, límites y condiciones.— Contribuciones al seguro; quiénes contribuyen y proporción en que contribuyen.— Órganos del seguro: a) las instituciones de seguro comunal; b) las Cajas locales; c) las Cajas industriales; sus clases; d) las Cajas libres; distinción entre registradas y no registradas.— Organización administrativa de las Cajas del seguro: asociación y federación de Cajas; efectos jurídicos.— Organización financiera de las Cajas del seguro.— Inspección de las Cajas por el Estado; diversidad de los órganos encargados de la inspección.— Conflictos.— Tribunales arbitrales.— Otras disposiciones importantes.— La Oficina Imperial del Seguro en Alemania; su composición y sus funciones.

En Austria = Carácter de la legislación de seguros; influencia de la legislación alemana; evolución histórica del seguro de enfermedad; ley de 1852 sobre las Sociedades de seguros; creación de las «Bruderladen» por la ley de 1854; carácter de esta clase de instituciones; creación de las cajas industriales por la ley de 1859; obligaciones impuestas a los patronos y corporaciones; otras leyes posteriores; insuficiencia de la legislación de carácter facultativo para las crecientes necesidades industriales; implantación del sistema obligatorio de seguro por la ley de 1888 modificada en 1889 y 1892: analogía entre dicha ley y su similar alemana; régimen especial para los empleados que ganan más de 1200 florines; órganos de la misma: a) Cajas de distrito; b) Cajas fabriles; c) Cajas de empresas de construcción; d) Cajas de corporación; e) «Bruderladen» para obreros mineros; f) «Vereinskrankenkassen».— Zona de actuación correspondiente a cada uno de dichos órganos.

En Hungría = Analogía con el seguro austriaco; creación del seguro nacional de enfermedad por la ley de 1891; diferencias entre el seguro húngaro y el austriaco en lo que respecta a las personas cuyo salario excede de 4 florines diarios; otras personas sometidas en el seguro húngaro e régimen especial.

En los Países Escandinavicos. = Evolución histórica; lucha entre los principios del seguro obligatorio y seguro voluntario; tendencia en Suecia

y Noruega hacia el primer sistema; tendencia opuesta en Dinamarca.— Suecia: ley de 1891 protegiendo con franquicias y subvenciones a las Cajas de socorros de enfermedad; requisitos para disfrutar de la protección.— Noruega: admisión del principio de la obligatoriedad en el seguro; proyectos diversos; contenido del proyecto 1908.— Finlandia: sistema voluntario de seguro pero con control y sin protección del Estado; decreto imperial de 1897.— Dinamarca: admisión del principio de la voluntariedad con control y protección del Estado; ley de 1892; libertad de organización a las Cajas de socorro reconocidas; federaciones de las mismas; la inspección del Estado.

En Suiza: especiales circunstancias para la implantación de un seguro unitario en Suiza por razón de sus condiciones geográficas, políticas industriales; dificultades para establecer seguros obligatorios e los diversos cantones; importante adición a la Constitución en 1890; proyecto de seguro obligatorio federal de 1899; amplitud del mismo; resultado del plebiscito sobre el mismo; nuevo proyecto federal de 1906; insistencia en el principio de la obligatoriedad; faculta que se otorga a los Cantones para imponerla; órganos del seguro en proyecto.— La obra actual de las Cajas de socorros mutuos.

En Holanda. = Admisión del principio de coacción para varios seguros pero no para el de enfermedad; diversas clases de Cajas de seguro de enfermedad; Cajas especiales de seguro de enterramiento.— Socorros municipales de enfermedad.

LECCIÓN 54

El seguro de enfermedad.— *El Seguro de enfermedad en los principales países; características nacionales, instituciones, legislación (continuación).* = *En Francia* = La obra de la revolución en lo que respecta a la asociación para el seguro; comienzo posterior de creación de Sociedades de socorros mutuos; recelo que al principio inspiraban; carácter voluntario de la legislación francesa; primeras regulaciones legislativas de 1834; las «Sociétés autorisées»; reforma legislativa de 1850; privilegios que otorgaba a las «Sociétés reconnues comme établissements d'utilité publique»; decreto de 1852 estableciendo las «Sociétés de secours mutuels approuvées»; derechos que concedía a estas Sociedades y a las reconocidas; subvenciones a las Sociedades aprobadas; efectos del decreto; reorganizaciones de las Sociedades de socorros por la ley de 1898; importantes disposiciones de dicha ley.— El seguro de enfermedad en los Sindicatos profesionales; carácter político de estas asociaciones; ley de 1884 aboliendo todas las disposiciones restrictivas sobre Sindicatos; beneficios otorgados por dicha ley a los Sindicatos en lo que al seguro se refiere.— La obra de las sociedades municipales de seguros; organización de dichas Sociedades; carácter de sus asegurados.— El seguro obligatorio para los mineros y marineros; distribución de las cargas; organización.— Las «Mutualidades Maternelles».

En Bélgica. = Desenvolvimiento del seguro con arreglo al patrón francés; repercusión en 1851 de la ley francesa sobre las Sociedades de socorros mutuos; disposición de 1861 estimulando con premios la competencia entre las Sociedades; creación de comités de fomento del seguro en 1887; reforma de la legislación sobre las Sociedades de socorros mutuos en 1894; condiciones que han de llenar las sociedades reconocidas y privilegios de que gozan; disposiciones de 1902 y 1903 autorizando su federación y estableciendo regulaciones financieras.— Instituciones oficiales para el socorro de enfermedad en ciertas industrias.— El seguro en los Sindicatos profesionales; ley de 1898.— El seguro privado.

En Italia.— Escaso desarrollo de las Sociedades de socorros mutuos hasta la ley de 1886; irregularidad hasta entonces en la cuantía y pago de los socorros; analogías entre la ley de 1886 y la ley francesa similar; ventajas de que disfrutaban las Sociedades registradas.— El seguro de maternidad; proyectos.

En España.— Las Sociedades de socorros mutuos; su importancia; su carácter profesional o local; falta de legislación especial sobre la materia.— El socorro municipal de enfermedad.

En los Estados Unidos.— Peculiares caracteres del movimiento obrero en los Estados Unidos y tendencias individualistas que reinan en la política; organización facultativa del seguro; sus principales órganos; a) instituciones de carácter obrero; b) instituciones de carácter patronal; c) instituciones de carácter mercantil; d) instituciones de carácter público.— Para el seguro de enfermedad; a) las Cajas de socorros de las «Trade-Unions»; importancia; organización; b) las Cajas de socorros de la «Fraternal Benedit Societies»; carácter religiosos de estas Sociedades; c) las Cajas locales de socorros; su carácter; d) las sociedades mercantiles de seguro de enfermedad; su importancia.— Extensión del socorro de defunción.

En Australia y Nueva Zelanda.— Diversos sistemas seguidos según la clase del seguro; el sistema voluntario en el seguro de enfermedad; influencia de la legislación inglesa; organización del seguro; a) por las «Friendly Societies»; patrón que ha servido para constituir dichas Sociedades; importancia de su organización del seguro; b) por las Cajas de socorros de las «Trade-Unions».

LECCIÓN 55

El seguro de accidentes del trabajo. = Su especial carácter.— Antigua consideración de los accidentes; punto de vista que se adoptaba para organizar el seguro; personas que lo costeaban.— Aparición del principio de la responsabilidad patronal en la legislación obrera; evolución del mismo; teoría de la negligencia patronal: sus supuestos fundamentales; teoría del «riesgo profesional»: su fundamento social; reconocimiento del principio en la legislación moderna; consideración de la culpa del obrero.— La

indemnización al obrero: sus formas; diversos medios de hacer valer su derecho en las distintas legislaciones.— El objeto del seguro de accidente.— Transferencia del riesgo por el patrono; su justificación; organización determinada por el carácter del riesgo en el seguro de accidente.— Mecanismo financiero del seguro; principios; modos de determinar la contribución patronal: a) sistema de reparto de las indemnizaciones anuales; b) sistema de reparos de los capitales; c) sistema de primas fijas.— El problema de la negligencia patronal.— Transferencia de la responsabilidad patronal al órgano del seguro; variedad de exigencias legales según los países.— Sistemas de seguros de accidentes: A = Sistema voluntario; órganos; sus clases: a) compañías mercantiles; b) Asociaciones mutuales patronales; c) Instituciones de seguro del Estado.— B = Sistema obligatorio; carácter de la obligación patronal; órganos; conexión con otras ramas del seguro; inspección de los órganos por el Estado; el problema de la responsabilidad financiera; conflictos.— Medidas relativas a la prevención de los accidentes.— Estadística.

El seguro de accidentes en los principales países; características nacionales; instituciones y legislación:

En Alemania. = Evolución: leyes prusianas antiguas sobre socorros a sirvientes y marineros en caso de accidente; reconocimiento del principio del «riesgo profesional» en la ley 1838; reducida zona de actuación de la ley; leyes posteriores facilitando el seguro de accidente a los obreros; ley imperial de 1871 ampliando la ley prusiana de 1838; proyecto de seguro obligatorio discutido en el «Reichstag» en 1881; admisión del principio coactivo y rehusamiento de la protección financiera; nuevo proyecto de 1882; ley de seguro de 1884; modificaciones hasta la revisión en 1900; ampliación en 1901; contenido de la legislación vigente; personas que entran en el seguro; agrupación por ocupaciones; seguro obligatorio; seguro facultativo; exclusiones y dispensas; objeto del seguro; indemnizaciones; sus formas; sistemas de primas y repartos; ayudas de otros fondos de seguros; órganos; sus clases; inspección del Estado; conflictos; tribunal arbitral.— Disposiciones especiales en el seguro de obreros agrícolas y forestales; en el de obreros del ramo de edificación; en el de gentes de mar.— La previsión de los accidentes.

En Austria.— Evolución; influencia en Alemania; principio mantenido en la legislación hasta la ley de 1869 sobre accidentes en los ferrocarriles; nuevo principio establecido por esta ley; organización del seguro privado para las demás industrias; la ley de seguro obligatorio de accidentes de 1887; revisión de 1894.— Analogía entre el seguro de accidentes austriaco y el alemán.— Diferencias principales en lo que se refiere a las ocupaciones incluidas, formas de agrupación, órganos, indemnizaciones y sistema financiero.— Importante peculiaridad de la ley austriaca en lo que respecta a contribuciones obreras al seguro de accidentes.— Clasificación de las industrias para el cálculo de las primas.

En Hungría.— Evolución; influencia austriaca; ley de 1874 sobre accidentes en las empresas ferroviarias; ley de seguro obligatorio de accidentes de 1907; comparación con la austriaca que sirvió de patrón.

En los países escandinavicos.— *En Noruega;* Evolución; la comisión regia de 1885; ley de seguro obligatorio de 1895 y reformas posteriores; influencia de las leyes similares alemana y austriaca; diferencias en la organización; institución de un órgano del Estado; contribución financiera del Estado; cargas que soportan los patronos.

En Suecia.— Luchas de principios en torno al seguro de accidentes proyectos de seguro obligatorio en 1888 y 1891; suerte que corrieron; la ley de accidentes de 1901; voluntariedad del seguro; ventajas de efectuarlo en la institución especial del Estado.

En Dinamarca.— Proyecto fracasado de seguro obligatorio; la ley de compensación por accidentes de 1898; el «Arbejder Forsikrings Raad»

En Holanda.— Proyectos rechazados de amplio seguro obligatorio; la ley de seguro obligatorio de 1901; su estrecho radio de acción; pago del coste; órganos; libertad del patrono para elegir su método de seguro; el «Rijksveszekeringsbank»; ventajas de esta institución.

En Italia.— La Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro » establecida en 1883; su función y organización; deficientes resultados; tardío reconocimiento en Italia del principio del «riesgo profesional», la ley de seguro obligatorio de accidentes de 1898; modificaciones posteriores; libertad de organización; ventajas de la Caja Nacional.

LECCIÓN 56

El seguro de accidentes; (contonucción): El seguro de accidentes en los principales países; características nacionales; instituciones y legislación:

En la Gran Bretaña: Evolución legislativa: «Fatal Accidents Act» de 1846; «Employers Liability Act» de 1880 extendiendo la responsabilidad patronal a los accidentes industriales; carácter de la responsabilidad; resistencia de la Cámara de los Lores a admitir el principio del riesgo profesional; posterior admisión en la ley de 1897; ampliación a nuevas ocupaciones por la ley de 1900 y la «Workmen Compensation Act» de 1906. Contenido de esta última ley; personas que tienen derecho a indemnización; condición social; renta máxima de los empleados; clases de indemnización: a) por pérdida total de la aptitud para el trabajo; b) por pérdida parcial; c) por fallecimiento; Casos de pérdida del derecho a la indemnización. conflictos. Seguro patronal voluntario; sus órganos; efectos de la aprobación por el «Registrar of Friendly Societies». Conflictos. Prevención de accidentes. Estadística. Resultados de la legislación.

En Francia.— Evolución: Precedentes en el Código Civil acerca de la responsabilidad patronal en caso de accidente; institución de la «Caisse Nationale d'Assurance en Cas d'Accidents» en 1868; su finalidad; princi-

pio de la ley de 1898; enmiendas; extensión del principio del riesgo profesional¹⁸ en 1906; lucha parlamentaria por extenderla a la agricultura; Seguro facultativo; órganos; regulación de los mismos por el Estado. El seguro obligatorio de accidentes de 1905 para las gentes de mar; personas que contribuyen.

En Bélgica.— Evolución; ley de seguro obligatorio para mineros, de 1868; alcance de la ley de accidentes de 1905, su amplitud; libertad de seguro; órganos; condiciones para la transferencia de la responsabilidad.

En Suiza.— Evolución; temprana admisión del principio del «riesgo profesional» en la legislación; gradual extensión por clases de ocupaciones; esfuerzos hechos desde 1885 por conseguir la implantación del seguro obligatorio de accidentes; el proyecto de 1899 y resultado del referéndum; tendencia centralizadora del proyecto.

En España.— La ley de accidentes del trabajo de 1900; antecedentes; amplitud de la ley; principio que la informa; distinción de las incapacidades; libertad de seguro; reglas para las Compañías aseguradoras; jurisdicción para los conflictos; resultados de la ley.

En los Estados Unidos. = Estado de retraso en que se halla con respecto a Europa la legislación sobre accidentes; evolución en algunos Estados; propaganda de Roosevelt en pro de una legislación moderna. Libertad de seguro; importancia del seguro por empresas mercantiles.

En Australia y Nueva Zelanda. = Influencia de la legislación inglesa sobre accidentes. La «Workmen Compensation for Accidents Act» de 1900 en Nueva Zelanda; análogas leyes en los Estados de Australia; departamento del Estado creado en Nueva Zelanda; en 1901; para el seguro de accidente.

LECCIÓN 57

El seguro de Invalidez y ancianidad.— Coincidencia interna en los problemas de la invalidez y ancianidad; de la pérdida perpetua de la aptitud para el trabajo; distinción de la pérdida por accidente; incapacidad total; incapacidad parcial; efectos de ambas en la vida del obrero. La política social ante el problema; sus medios; a) la asistencia; consideración de los «Old age pensions»; b) la previsión. Combinación de ambos medios. Previsión voluntaria; previsión obligatoria; ventajas de esta.— El seguro de invalidez y ancianidad como seguro de renta. Amplitud de esta rama del seguro.— Organización; sistemas; a) combinación con seguro de enfermedad; b) Cajas privadas de retiro; sus clases; c) fomento público de la previsión privada; instituciones especiales; d) seguro público autónomo. Métodos financieros principales; a) método de «reparto»; b) método de

¹⁸ Escrito a mano «principio del riesgo profesional» y tachado «la compensación».

«capitalización»; c) método de prima media; periodo de espera en este último.— Las bonificaciones de los organismos públicos.— Liquidación de las pensiones; liquidaciones anticipadas; reembolsos; beneficiarios de las pensiones de invalidez en caso de fallecimiento. Fondos destinados a sanatorios y viviendas en el seguro de invalidez y ancianidad.

El seguro de invalidez y ancianidad en los principales países; características nacionales; instituciones y legislación.

En Alemania. Evolución; la ley de seguro obligatorio de invalidez y ancianidad, de 1891; industrias para las cuales regía anteriormente la obligación del seguro; resistencia que halló la ley de 1891; sus resultados en la práctica; la reforma de 1899; amplitud del seguro alemán; personas no obligadas que pueden acogerse a los beneficios; exclusiones; clases de beneficios; cuándo empiezan a disfrutarse; edad para los de ancianidad; estimación de la invalidez; fondos destinados a sanatorios y viviendas; criterio para fijar los beneficios. Distribución de los cargos; quienes contribuyen; forma y proporción de las contribuciones; rescates. Órganos; a) públicos; b) privados. condiciones que estos han de llenar. Principio de organización. Independencia administrativa. Conflictos. Dirección del seguro. Resultados.

En Francia.— Evolución; la ley de «Retraites ouvrières» obligatorios de 1910. modificada en 1912; antecedentes; proyecto de Millerand de 1910; modificación en 1912; antecedentes; proyecto de Millerand de 1901; hostilidad hacia el proyecto; reacción posterior; consultas a las organizaciones interesadas. Carácter de la ley; extensión de su obligación; asegurados facultativos. Formación de las pensiones; desembolsos de obreros y patronos; de propietarios y arrendatarios; mejoras del Estado.— Tarifas para las pensiones; su cálculo y composición; Pensiones de invalidez; condiciones para disfrutarlas. Entregas en caso de fallecimiento. Reembolsos. Otras disposiciones.

En Bélgica.— Importancia de los esfuerzos del Estado en esta rama del seguro; creación de la «Caisse Generale d' Epargne et de Betraite» sus operaciones; establecimiento de la subvención firme del Estado por la ley de 1900 modificada posteriormente; importancia de las subvenciones públicas; como se forman. Cooperación entre algunas sociedades de socorros mutuos y la institución de seguro del Estado.— Presiones de patronos para la difusión de la previsión entre sus obreros.

En Italia.— Ley de seguro de invalidez y ancianidad de 1908; principio que la informa; el fondo nacionalidad de anualidades; su capital; organización y administración. Transferencia de fondos de las Sociedades mutuales. Las subvenciones del Estado. Reformas de la ley entre 1901 y 1906; su carácter.

En Suiza. = Falta de una legislación federal sobre la materia; instituciones públicas de seguro en varios cantones; subvenciones cantorales; sus diversas formas. Organización.

En Austria. = Seguro obligatorio de invalidez y ancianidad para mineros y empleados; organización de dicho seguro en las «Bruderla-

den»; reparación de fondos en cuantos a los otros seguros; la ley sobre «Privat Beamten», de 1906; organización de este seguro.

En España.— Ley de 27 de febrero de 1908 creando el Instituto Nacional de Previsión; sus operaciones; protección del Estado; organización de la previsión; sus resultados.

En los estados Unidos: Los «Relief Departments»; su organización del seguro de invalidez y ancianidad; protección de los patronos. El seguro privado.

LECCIÓN 58

El seguro de invalidez y ancianidad en los principales países; características nacionales, instituciones y legislación. (continuación)

En la Gran Bretaña. = Combinación del sistema del seguro para la invalidez y el sistema de asistencia para la ancianidad; el seguro de invalidez como una parte del seguro nacional de 1911; su organización con el seguro de enfermedad. Beneficios; beneficios adicionales. Fondos para sanatorios. La «Old Age Pensions Act» de 1908: principio en que se basa; distinción entre las pensiones y la asistencia de pobres.— Antecedentes; establecimiento en 1833 de un departamento público de previsión; el seguro de vida por las compañías de seguros y las sociedades de socorros mutuos; comisión parlamentaria de 1885; dificultades para el seguro obligatorio de ancianidad; nuevas combinaciones; campañas políticas para la creación de pensiones de ancianidad. La ley de 1908; a quienes beneficia; edad; condiciones; importe de las pensiones. Administración de la ley.

En Dinamarca. = El primer ensayo de pensiones de ancianidad; la ley de 1891; modificación; personas protegidas; resultados de la ley en la disminución del pauperismo.— Proyectos de seguros de invalidez.

En Australia y Nueva Zelanda.— La obra de Seddon en Nueva Zelanda; influencias inglesas y danesas; las leyes de «Old Age Pensions» de Nueva Zelanda, Nueva Gales del Sur y Victoria.— Protección a la previsión privada en varios Estados.

En otros países.— Proyectos de seguros de invalidez y ancianidad y de protección a la previsión.

El seguro de pensión a viudas y huérfanos de trabajadores: su problema; su misión social; insuficiencia de las indemnizaciones de la legislación sobre accidentes, de los socorros de defunción y de las reservas del seguro de invalidez.— Falta de organizaciones nacionales de esta clase de seguros; causa principal.— Organización voluntaria del seguro por las «Knappschaftskassen» de Alemania y las «Bruderladen» de Austria; importancia; pensiones que abonan: a) a viudas; causas de aminoración o supresión de la pensión; b) a huérfanos; terminación de la pensión.— Institución pública creada en Alemania en el seguro de invalidez de gente de mar.— Proyecto alemán de seguro obligatorio de pensión a viudas y huérfanos; contribuyentes al seguro; casos de pérdida del derecho a la pensión de

viudedad; coste excesivo del seguro.— Esfuerzos del Estado en los principales países con objeto de fomentar la previsión para estos casos; importancia de la «Statsanstalt for Liusforsikring» en Dinamarca.— Venta de anualidades por departamentos de previsión del Estado en Francia y Bélgica.— El «Instituto nacional de Previsión» en España.— Esfuerzos privados; operaciones de las sociedades de Socorros mutuos; los fondos de previsión de los Establecimientos industriales; las compañías de seguros.

El ahorro.— El ahorro como seguro «indiferenciado».— Su sustitución por otras formas de la previsión.— El ahorro como previsión supletoria.— Cajas de Ahorros; sus tipos: a) privadas; b) mutuales; c) patronales; d) del Estado.— Importancia de las Cajas de Ahorros y legislación en los diversos países.

LECCIÓN 59

El problema de la habitación del obrero.— Su desenvolvimiento.— Su estado actual.— Aspectos del problema: a) económico; b) moral; c) social; d) de higiene pública.— Relaciones entre el salario y la cuantía de los alquileres.— Densidad de la población en las ciudades y habitación obrera.— Incremento del valor de los solares.— Especulación.

Diversas orientaciones de la política social en este problema.— Ordenanzas de edificación y construcción.— Su importancia; posible desarrollo de las mismas, sus conveniencias.— Inspección de las viviendas obreras.— Información sobre los alquileres.

Construcción de casas.— Intervención del patrono a este respecto.— Fomento de la construcción por los municipios y el Estado.— Cooperativas de construcción.— Institutos de crédito de carácter oficial que intervienen en la construcción.— Garantía de intereses.— Préstamo.— Bancos de crédito para la edificación.— Intervención de los Municipios.— Utilización de sus propiedades para influir en el problema.

Los impuestos y el problema de la vivienda del obrero.— Especial consideración del impuesto sobre incremento del valor de los solares.

Profusa legislación sobre esta materia.— Housing og the working classes act de 1890, su tendencia dentro de la legislación.— Reformas posteriores.— Amplio carácter de la legislación holandesa.— Ley de 22 de junio de 1901.— Su contraste con la legislación francesa.— Alemania.— Ley prusiana.— El problema de vivienda del obrero en España.— Antecedentes de la cuestión.— La ley de casas baratas.

LECCIÓN 60

Política de asistencia.— Su objeto: carácter de la población entregada a la asistencia; formación de este estado social; principales causas: a) económicas; b) patológicas.— Especial economía que a esta masa de población sostiene; la economía caritativa; sus fundamentos; necesaria insuficiencia de su función; sus defectos.— El problema del pauperismo; pobres válidos e inválidos.

lidos; distinta consideración para los efectos de la asistencia.— Clases de asistencia.— Principales aspectos del problema de la asistencia de pobres: a) causas de la pobreza; b) procedencia de los medios de auxilio; c) órganos; d) sistemas de asistencia; consideración especial del sistema de El beferder; e) legislación sobre la materia.— Desarrollo histórico de la asistencia de pobres; a) en la antigüedad; b) en la Edad Media; c) en la Edad Moderna.— Moderna legislación de pobres en los principales países; sus tendencias.— Especial consideración de la legislación española.— Jardines obreros y otras instituciones de asistencia.— La protección a la infancia; enseñanza y alimentación; mendicidad; niños moralmente abandonados; correccionales; hospicios; orfelinatos; protección a los anormales; tuberculosos y degenerados.— Otras instituciones.

El problema del alcoholismo: su importancia; países en los cuales presenta mas graves caracteres: algunas de las causas.— Consecuencias: a) pérdida de la capacidad física del trabajo; b) degeneración intelectual; c) esterilidad; d) transmisión de la degeneración física o mental por herencia.— Significación social.— La obra de los eugenistas ingleses.— Investigaciones de Galton y Pearson; fundamentación científica; métodos; resultados de sus investigaciones.— La lucha contra el alcoholismo; medidas privadas; las ligas antialcohólicas; medidas públicas: la reglamentación del consumo en diversos países; el monopolio de la venta por el Estado; el encarecimiento por los impuestos especiales.

El problema de la prostitución: sus causas: a) económicas; b) psicológicas.— Consecuencias del orden ético, de higiene pública y de higiene social.— Prostitución secreta; prostitución legal.— Intervención del Estado.— La trata de blancas; su importancia; medidas prohibitivas en diversos países; medidas de reglamentación.— Ligas y congresos internacionales.

LECCIÓN 61

Influencias sociales de la guerra europea.— Importancia del estudio de este problema a pesar de su aparente transitoriedad.— Efectos de la guerra en las organizaciones obreras; ruptura de la conexión internacional.— Actitud del partido socialista alemán; auxilio financiero de los sindicatos al gobierno; paralización de la acción sindical; división del partido con respecto a la finalidad de la guerra.— Efectos en las organizaciones obreras de Francia; actitud del sindicalismo francés; atenuación del antimilitarismo.— Efectos en los de Inglaterra: luchas de las «Trade Unions» al comienzo de la guerra; resistencia a la suspensión de las regulaciones industriales; huelgas acerca del salario; medidas del gobierno.— ¿Ha fracasado el movimiento obrero internacional? — Caracteres de la conexión obrera internacional; a) económicos; b) éticos; c) políticos.— Caracteres del interés nacional obrero: a) psicológicos; b) políticos; c) económicos.— Posibles consecuencias para el porvenir de las organizaciones obreras.— Transfor-

maciones parciales de las organizaciones económicas: en Alemania; incautación de industrias y primeras materias por el Estado; sometimiento de los obreros al régimen militar; regulaciones sobre alimentación; instituciones del Estado para regir industrias; transportes y alimentación; organización; la movilización civil; creación de establecimientos para inválidos de la guerra.— En Inglaterra: incautación de transportes; militarización de los obreros de los puertos y de las industrias que producen elementos para la guerra; evolución del liberalismo inglés; instituciones para víctimas de la guerra. Proyecto de movilización civil.— En Francia; reorganización de industrias, transportes, primeras materias y de parte del consumo; instituciones benéficas.— Probable modificación de las relaciones entre patronos y obreros después de la guerra.— Influjo del actual incremento de la solidaridad.— Probable permanencia en algunas de las nuevas formas de organización económica.

«LAS VÍAS DE LO LEGÍTIMO»: DERECHO NATURAL Y ESTADO CATÓLICO EN LA OBRA DE CLEMENTE DE JESÚS MUNGUÍA*

Sumario: 1. El contexto original: las reformas a la enseñanza del derecho.—2. Del lenguaje a la civilización.—3. Legitimidad, constitución y derechos naturales.—4. La Iglesia, *societas perfectas supernaturalis*.—5. Y el verbo se hizo carne.—6. Conclusiones

Aislar de los hechos las doctrinas, es considerar a los pueblos en una profunda barbarie, es no contar para nada con la influencia de la razón pública o privada en las acciones diversas del individuo y de la sociedad.

Clemente Munguía

La mañana del 28 de abril de 1857, año de la Constitución liberal, salía a la luz en las calles de la Ciudad de México un impreso que, a pesar de su lenguaje moderado y erudito, estaba llamado a despertar un intenso debate en la prensa política y religiosa. Se trataba de unos *Apuntamientos sobre derecho público eclesiástico*, atribuidos a don Manuel Baranda. Este cuaderno buscaba contrarrestar el efecto que había tenido en la opinión pública la famosa alocución del Papa Pío IX contra las leyes Juárez y Lerdo, y en particular buscaba responder a diversas circulares y representaciones del Arzobispo de México y el obispo de Michoacán, quienes habían declarado ilícito el juramento de obediencia a la Constitución Federal, so pena de excomunión. La intención de Baranda era mostrar

* Este ensayo se basa en una investigación más amplia, realizada en el marco de mi tesis doctoral (en curso) «The Enlightened Origins of Catholic Reaction: An Intellectual Biography of Bishop Clemente de Jesús Munguía, 1810-1868». Agradezco a Benedetta Albani y a Javier Mijangos por su atenta lectura, y por la ayuda prestada para la elaboración de este trabajo. Doy gracias también a David Brading, Marta Eugenia García Ugarte, Alejandro Mayagotía, Erika Pani y Mauricio Tenorio, por su valiosa orientación y sugerencias.

que la nueva ley fundamental estaba lejos de ser una carta «impía» y atentatoria de «los derechos y libertades de la Iglesia», tal como sostenían los prelados. En un momento histórico en que la discusión política parecía estar adquiriendo tonos de verdadera disputa religiosa, Baranda hacía profesión de fe y apelaba al catolicismo como cimiento de las instituciones liberales y de la unidad nacional.

Contra lo que pudiera esperarse, los *Apuntamientos* no hacen una defensa liberal y filosófica de la legislación reformista. En sus setenta y seis páginas apenas se incluyen referencias a la igualdad ante la ley, al «progreso de los pueblos» o a las ventajas económicas de la desamortización. Su retórica es más bien conservadora y dieciochesca: el autor presenta a la autoridad civil como la principal protectora de la fe y de la Iglesia, y la mejor salvaguarda contra la impiedad racionalista y «los atrevidos progresos del protestantismo»¹. De un modo muy sutil, Baranda hace suyas las tesis del *Informe del Colegio de Abogados de Madrid*, de 1770, el cual proclamó como propia del derecho divino la limitación de la autoridad eclesiástica por la secular². Apoyándose asimismo en la autoridad del canonista español José de Covarrubias, autor de unas célebres *Máximas sobre recursos de fuerza y protección* (1785), el autor de los *Apuntamientos* afirma que la expedición de leyes y decretos «para la exacta observancia de los cánones» es una facultad inherente a la soberanía estatal, confirmada por «las tradiciones más respetables» y por la doctrina de los Santos Padres y los Soberanos Pontífices. Es por tal razón que el gobierno mexicano, al revocar los fueros eclesiásticos e imponer límites a la creciente riqueza de la Iglesia, no hacía otra cosa que ejercer sus derechos históricos y cumplir sus obligaciones en tan grave materia. Baranda condena así a los «despreciadores del poder civil», los (obispos) ultramontanos que, tomando las cuestiones eclesiásticas «muy especulativamente», han hecho demasiado «extensiva la autoridad pontificia sobre los gobiernos temporales, hasta tocar en el absurdo»³. El impreso termina

¹ *Apuntamientos sobre derecho público eclesiástico*, México, Imprenta de Ignacio Cumplido, 1857, p. 16. Encontré la fecha exacta de su publicación en Gerald L. McGowan, *Prensa y poder, 1854-1857*, México, El Colegio de México, 1978, pp. 229 y 344.

² Alberto de la Hera, *El regalismo borbónico en su proyección indiana*, Madrid, Ediciones Rialp, 1963, pp. 59-63.

³ *Apuntamientos sobre derecho...* p. 15.

advirtiendo al clero mexicano que no sucumba a los halagos de la reacción, la cual, siguiendo el ejemplo del mismísimo Satán, le ha ofrecido a la Iglesia la dominación sobre los reinos de este mundo. Sólo un *¡Vade retro!* contundente salvaría a México de la división religiosa y la guerra civil.

Los *Apuntamientos* de Baranda provocaron una furibunda —e igualmente erudita— respuesta de los redactores del periódico religioso *La Cruz*, seguida más tarde por dos opúsculos de Juan Rodríguez de San Miguel y Bernardo Couto⁴. Lejos de apaciguar los ánimos, estas disputas intelectuales sólo contribuyeron a exacerbar el ambiente de crispación y odio ideológico, que desembocaría pocos meses más tarde en la guerra de Reforma. No obstante, en lo que sí tuvieron éxito estas obras fue en consagrar una interpretación muy maniquea de los debates intelectuales y políticos del siglo XIX: aquélla que opone a un liberalismo regalista, hijo de la Ilustración española, una reacción ultramontana e intransigente; o dicho de otra manera, una versión más de la oposición irreductible entre modernidad y tradición, representados por el Estado liberal y la Iglesia Católica respectivamente. Aunque esta dicotomía no es del todo inútil, pues los mismos protagonistas de la época hacían uso de ella, su utilización como herramienta de análisis ha llevado a no pocas confusiones y errores historiográficos. Se ha querido ver en la oposición eclesiástica a la Reforma liberal, por ejemplo, una repetición más de la reacción católica a la Revolución francesa, sin importar la enorme diferencia que había entre la restauración del antiguo régimen —objetivo central de los reaccionarios franceses— y la instauración de un *nuevo orden* más ventajoso para la Iglesia, meta buscada por los prelados mexicanos⁵. O bien se ha trasplantado a

⁴ Nos referimos a unas *Ligeras reflexiones sobre un cuaderno anónimo intitulado: «Apuntamientos sobre derecho público eclesiástico»*, suplemento al número 3 de «La Cruz», Mayo 28 de 1857; Juan N. Rodríguez de San Miguel, *Varias observaciones contra un opúsculo titulado: Apuntamientos sobre derecho público eclesiástico*, México, Imprenta de J.M. Lara, 1º de junio de 1857; y José Bernardo Couto, *Discurso sobre la constitución de la Iglesia*, México, Imprenta de Andrade y Escalante, 1857.

⁵ El que ha desarrollado mejor esta interpretación es David Brading. Al respecto, véase su ensayo «Clemente de Jesús Munguía: Intransigencia ultramontana y la reforma mexicana», en Manuel Ramos (comp.), *Historia de la Iglesia en el siglo XIX*, México, Condumex, 1998, pp. 13-45.

nuestra historia la vieja división entre galicanos y ultramontanos, aún cuando el fortalecimiento del episcopado nacional —una de las pretensiones características de la escuela galicana— se logró en México a costa del Estado y con el apoyo irrestricto de Roma⁶.

Este ensayo busca reinterpretar la respuesta eclesiástica a la reforma liberal a partir de una nueva lectura de la obra del obispo de Michoacán, Clemente de Jesús Munguía (1810-1868), quien fuera uno de los más agudos y polémicos defensores de la Iglesia mexicana en este período, y uno de los principales destinatarios de los *Apuntamientos* arriba mencionados. Si bien no negamos la cercanía de Munguía al partido conservador y la marcada influencia que tuvo el pensamiento reaccionario francés en sus escritos, queremos subrayar que dichas cercanía e influencia no explican de modo suficiente la actuación política del prelado michoacano. Por el contrario, mostraremos que la obra de Munguía es fruto del esfuerzo más serio por modernizar intelectualmente a la Iglesia mexicana, y que en su celo por afirmar la independencia jurídica de la misma, no tuvo reparo en corregir a los escritores reaccionarios y en oponerse a la celebración de concordatos entre la Santa Sede y los gobiernos conservadores. Nuestro propósito no es hacer una apología del obispo de Michoacán, sino complicar un poco más el entendimiento que hasta muy recientemente se ha tenido del enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado. Queremos contribuir así a una corriente historiográfica que ha explorado la permeabilidad de los discursos clericales del siglo XIX «a las nuevas corrientes de ideas, valores y sensibilidades» de la época⁷, permeabilidad que a su vez hizo posible la existencia de «fisuras» en la apuesta eclesiástica por el conservadurismo y el uso estratégico de los principios liberales por parte de los obispos mexicanos⁸. Sólo analizando el discurso eclesiástico en toda

⁶ Véase la reciente tesis de Manuel Olimón Nolasco, *Clemente de Jesús Munguía y el incipiente liberalismo de Estado en México*, tesis para obtener el grado de doctor en historia, México, Universidad Iberoamericana, 2005.

⁷ Brian F. Connaughton, *Dimensiones de la identidad patriótica. Religión, política y regiones en México. Siglo XIX*, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2001, p. 22.

⁸ Laura O'Dogherty, «La Iglesia católica frente al liberalismo», en Erika Pani (coord.), *Conservadurismos y derechas en la Historia de México*, México, Fondo de Cultura Económica, en prensa; también de Erika Pani, «Si atiendo preferentemente al bien de mi alma...». El enfrentamiento Iglesia-Estado, 1855-1858», en *Signos Históricos*, I.2 (diciembre 1999), pp. 35-58;

su complejidad, sin caer en trampas retóricas, podrá entenderse la radical transformación que sufrió la Iglesia mexicana al triunfo del liberalismo.

1. *El contexto original: las reformas a la enseñanza del derecho*

No es posible comprender la obra de Munguía sin atender primero a la obsesión fundamental que le dio origen: antes que abogado o sacerdote, don Clemente fue un gran maestro, y su pasión por la enseñanza le acompañaría toda la vida. A los 25 años, siendo él aún estudiante, ya era catedrático de Lengua Castellana y Bella Literatura en el Seminario Tridentino de Morelia, y por ello no es de extrañar que sus primeras publicaciones hayan sido unos textos de introducción a la gramática, pensados para suplir la carencia de obras actualizadas y accesibles para los estudiantes⁹. Munguía ejerció la abogacía por algunos años, pero en 1841 decidió ordenarse sacerdote y reintegrarse a sus labores académicas en el Seminario, asignándosele esta vez la importantísima cátedra de Jurisprudencia, la única que había entonces en todo el estado de Michoacán.

Vale la pena detenernos a profundizar este último dato. A decir de Anne Staples, el Seminario de Morelia «fue la más progresista y activa institución de educación superior de la república durante las décadas de 1830 y 1840», muy por encima de la centenaria Universidad de México¹⁰. ¿A qué se debió tal lustre de una institución más bien provinciana? Sin duda alguna, el mérito corresponde a la enérgica labor de don Mariano Rivas, quien fuera rector del Seminario entre 1833 y 1843. Apoyado totalmente por el obispo Gómez Portugal, y sin tener que enfrentar a un claustro

y Austen Ivereigh, «Introduction», en A. Ivereigh (ed.), *The Politics of Religion in an Age of Revival*, London, Institute of Latin American Studies/University of London, 2000, pp. 1-21.

⁹ Para los datos biográficos de Munguía, véase José Bravo Ugarte, *Munguía. Obispo y Arzobispo de Michoacán (1810-1868). Su vida y su obra*, México, Editorial Jus, 1967; y Miguel Martínez, *Monseñor Munguía y sus escritos. Obra completa*, Morelia, Fímax Publicistas, 1991.

¹⁰ Anne Staples, *Recuento de una batalla inconclusa. La educación mexicana de Iturbide a Juárez*, México, El Colegio de México, 2005, p. 50.

universitario que pudiera frenar sus planes de reforma, el rector Mariano Rivas llevó a cabo una profunda renovación del sistema general de estudios en el Seminario, que abarcó la introducción de nuevas cátedras y la supresión de otras, el enriquecimiento de la biblioteca y la organización de un gabinete de ciencias experimentales¹¹. Muy lejos de ser un clérigo timorato o reaccionario, Rivas tenía en mente una educación integral que combinase «la práctica de la sana moral» con el robustecimiento del cuerpo y «la enseñanza de las ciencias», de modo tal que el Seminario pudiera «dar a la Iglesia ministros dignos, y al Estado ciudadanos virtuosos e ilustrados»¹². La reforma educativa era urgente porque el Seminario Tridentino seguía siendo entonces la principal casa de formación del clero de la diócesis de Michoacán, y también la única escuela profesional de Derecho en el estado¹³. Dos años después de la muerte de Rivas, su sucesor Munguía afirmaría con orgullo que

Con muy ligeras excepciones, todos los abogados y la mayor parte de los profesores de Medicina y Cirugía de Michoacán fueron sus alumnos. El Colegio Seminario ha dado magistrados a los primeros puestos: al Congreso general, a la Suprema Corte de Justicia, al Gobierno del Estado y su Secretaría, a las Honorables Legislaturas y Asambleas Departamentales, a las Prefecturas y Juzgados de Letras; y empleados a otros puestos de menos representación, y esto no sólo en Michoacán sino en Guanajuato y San Luis Potosí, Estados comprendidos en la Diócesis¹⁴.

¹¹ Sobre Mariano Rivas, véase el ensayo de Roberto Heredia, «Mariano Rivas (1797-1843). Una vida breve, una obra larga», en *Mariano Rivas, (1797-1843) Semblanza y Antología*, Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 1999.

¹² Mariano Rivas, «Alocución con que cerró el año escolar de 1834, en el Seminario Tridentino de Morelia, su rector el Lic. Mariano Rivas», recogida en Agustín García Alcaraz, *La cuna ideológica de la Independencia*, Morelia, Fímax Publicistas, 1971, p. 303.

¹³ Roberto Heredia, «Mariano Rivas (1797-1843...)», p. 26.

¹⁴ Clemente Munguía, «Memoria instructiva sobre el origen, progresos y estado actual de la enseñanza y educación secundaria en el Seminario Tridentino de Morelia, leída en la aula general del expresado colegio en la distribución de premios que se hizo el año de 1845», compilada en García Alcaraz, *La cuna ideológica...*, p. 477.

Se entiende así que el nombramiento de catedrático de Jurisprudencia en el Seminario no fuera poca cosa. Mas ¿cuál debía ser el enfoque que habría de adoptar la enseñanza del derecho, atendiendo a los impulsos renovadores del rector Rivas?

Para responder a esta pregunta debemos dar un segundo rodeo, metiéndonos esta vez a las aulas donde se formaban los abogados de aquel tiempo. Hasta bien entrado el siglo XVIII, el derecho que se enseñaba en las universidades españolas y americanas era el *ius commune*, formado por los llamados «derechos cultos», esto es, el romano y el canónico. El conocimiento de la legislación real y de las costumbres forenses se adquiría en sede diversa, las más de las veces trabajando de aprendiz en el estudio de algún letrado. Este panorama comenzó a cambiar con la Ilustración. En sintonía con las tendencias absolutistas del Estado borbónico, la Corona española —ya en tiempos de Carlos III— hizo diversos intentos por afirmar su propio derecho frente al *ius commune*, haciendo obligatorio el estudio del derecho creado por el rey y sus órganos delegados, e introduciendo la enseñanza de nuevas disciplinas, tales como la economía política y el derecho natural y de gentes, de marcado corte racionalista. Estas medidas se aplicaron muy tardíamente en la Nueva España, pero fueron retomadas con vigor al término de la Independencia. En 1823, por ejemplo, el Congreso general permitió a todos los colegios del país el establecimiento de cátedras de derecho natural y de gentes, bajo las reglas dadas al Seminario de la entonces Valladolid¹⁵. Tres años después se presentó ante el mismo Congreso un proyecto de plan general de instrucción pública, que incluía ya una cátedra de «principios de legislación universal» y otra de elementos de derecho patrio¹⁶. A este proyecto siguieron otros similares, hasta llegar al *Plan general de estudios de la república mexicana*, promulgado por el presidente Santa Anna el 18 de agosto

¹⁵ Al respecto, véase Jaime del Arenal, «Los estudios de derecho en el Seminario Tridentino de Morelia», en José Luis Soberanes (coord.), *Memoria del III Congreso de Historia del Derecho Mexicano*, México, UNAM, 1984, pp. 31-32.

¹⁶ Alejandro Mayagoitia, «Los abogados y el Estado mexicano: desde la Independencia hasta las grandes codificaciones», en *Historia de la Justicia en México, siglos XIX y XX*, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005, pp. 319-322.

de 1843, y que fue el más ambicioso de todos los intentados hasta la fecha¹⁷.

El *Plan general* de 1843 reviste una especial importancia, ya que buscó explícitamente romper con los métodos de enseñanza heredados del período colonial, y no sólo para el estudio de la jurisprudencia. Nuestro ya citado Manuel Baranda, quien fungía por aquel entonces como Ministro de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública, y que fue el autor principal del *Plan general*, consideraba que México estaba «muy atrás respecto de las demás naciones cultas», en gran medida porque la enseñanza carecía «de un sistema formal que diese un aprovechamiento ordenado a los estudios», y porque mucho de lo que se aprendía en otras naciones, aquí se descuidaba enteramente». La suya era una época de «adelantos», de «conocimientos positivos» y «verdadera ilustración», todo lo cual era visible en los progresos de las ciencias, cuyos principios, objetos, métodos y verdades habían dado «pasos agigantados»¹⁸. ¿Cómo podían remediarse, pues, las deficiencias del sistema educativo? En primer lugar, poniendo al día los estudios preparatorios. En las «ciencias especulativas», por ejemplo, debía hacerse «mención de la Ideología», sin cuyos principios mal podrían conocerse «la Lógica, la Metafísica, y la Filosofía del lenguaje». Y a ésta debían añadirse el aprendizaje de idiomas modernos, unas nociones de cosmografía y geografía, y un curso de economía política, cuyo conocimiento «es uno de los ejes de la prosperidad y engrandecimiento de las naciones»¹⁹. En segundo y más importante lugar, Baranda consideraba urgente dar unidad a la enseñanza de las ciencias, de modo «que se ligen para formar un todo, que se presten apoyo, y que las nociones de una cosa, concurren a perfeccionar el conocimiento de la otra»²⁰. A modo de ilustración, Baranda citaba las reformas a la enseñanza del derecho como el modelo que debía adoptarse en todas las demás carreras:

¹⁷ Anne Staples, *Recuento de una batalla inconclusa...*, pp. 90-93.

¹⁸ *Memoria del Secretario de Estado y del Despacho de Justicia e Instrucción Pública, leída a las cámaras del Congreso Nacional de la República Mexicana en enero de 1844*, México, impresa por Ignacio Cumplido, 1844, pp. 29 y 30.

¹⁹ *Memoria del Secretario de Estado...*, pp. 32 y 35.

²⁰ *Memoria del Secretario de Estado...*, p. 33.

Era conveniente que el plan se ordenase de manera que fuera un sistema completo, en que todo se encadenase y llevase el carácter de unión que es en realidad el constitutivo de cada ciencia. Así se notará que en los estudios de Jurisprudencia, por ejemplo, se comienza por el Derecho natural que es la fuente y regla de los demás: que se sigue el de gentes que no tiene otra regla que aquel: que después se aprenden los elementos de la organización de las sociedades, que descansan en las primitivas nociones de los derechos y deberes del hombre: que luego con esos precisos antecedentes se examina la Filosofía de la legislación: el Derecho romano, fruto de las mejores observaciones sobre la justicia natural, tiene en seguida su colocación adecuada, y así se hace demasiado fácil el estudio del Derecho patrio y canónico, llevándose juntos para aprovechar las relaciones mutuas de los dos, y reconocer sus puntos de contacto²¹.

Actualizar los contenidos y unificar sistemáticamente todos los conocimientos: he aquí la panacea educativa propuesta por el Ministerio de Instrucción Pública. Estos buenos deseos, sin embargo, se enfrentaban a un obstáculo mayúsculo, difícil de remediar en el corto plazo. Este obstáculo consistía en la ausencia de libros de texto actualizados y adaptados para un fin intelectual tan ambicioso, como lo era la unidad de todas las ciencias. Una hojeada a los manuales que se utilizaron en las cátedras de jurisprudencia del año 1843 podrá aclararnos mejor este punto:

CATEDRAS	LIBROS DE TEXTO	COLEGIOS
Derecho Civil	José María Álvarez, <i>Instituciones de derecho real de Castilla y de Indias</i>	Universidad Nacional y Literaria de Chiapas Instituto de Ciencias y Artes, Oaxaca Instituto Literario, Zacatecas Seminario Conciliar, Morelia

²¹ *Memoria del Secretario de Estado...*, p. 37.

CATEDRAS	LIBROS DE TEXTO	COLEGIOS
Derecho Civil	Juan Sala, <i>Ilustración del derecho real de España</i>	Colegio de la Purísima Concepción, Guanajuato Colegio de San Ildefonso, México Colegio de San Gregorio, México Colegio Guadalupano Josefino, San Luis Potosí Colegio del Espíritu Santo, Puebla Seminario Conciliar, Morelia
	Vinnio, anotado por Sala	Universidad de Guadalajara
	Johann Gottlieb Heinecke (Heineccius, Heinecio), <i>Recitaciones del derecho civil según el orden de la Instituta</i>	Seminario Conciliar, Morelia
Derecho Canónico	Giovanni Devoti, <i>Instituciones canónicas</i>	Universidad Nacional y Literaria de Chiapas Universidad de Guadalajara Colegio Guadalupano Josefino, San Luis Potosí
	Julio Lorenzo Selvaggio, <i>Instituciones canónicas para el uso del Seminario Napolitano</i>	Colegio de la Purísima Concepción, Guanajuato Instituto Literario, Zacatecas
	Pedro Murillo, <i>Cursus iuris canonici Hispani et Indici</i>	Universidad de Guadalajara
	Domingo Cavallario, <i>Instituciones de Derecho Canónico</i>	Colegio de San Juan de Letrán, México Colegio de San Ildefonso, México Colegio de San Gregorio, México Instituto de Ciencias y Artes, Oaxaca Colegio del Espíritu Santo, Puebla

CATEDRAS	LIBROS DE TEXTO	COLEGIOS
Derecho Canónico	Carlo Sebastiano Berardi, <i>Commentaria in jus ecclesiasticum universum</i>	Seminario Conciliar, Morelia
Derecho Natural	Jean Burlamaqui, <i>Elementos de Derecho Natural</i>	Colegio de la Purísima Concepción, Guanajuato Colegio de San Juan de Letrán, México
	Johann Gottlieb Heinecke (Heineccius, Heinecio), <i>Elementa iuris naturae et gentium</i>	Colegio de San Juan de Letrán, México Colegio de San Ildefonso, México Colegio de San Gregorio, México Colegio del Espíritu Santo, Puebla Instituto Literario, Zacatecas
Derecho de Gentes	Emer de Vattel, <i>El derecho de gentes, o, principios de ley natural aplicados a la conducta y a los negocios de las naciones y de los soberanos</i>	Colegio de la Purísima Concepción, Guanajuato Colegio de San Juan de Letrán, México Colegio de San Ildefonso, México Colegio de San Gregorio, México
Principios de Legislación	Cayetano Filangieri, <i>Ciencia de la legislación</i>	Colegio de San Gregorio, México
Práctica forense, Derecho patrio y principios de Legislación	Manuel de la Peña y Peña, <i>Lecciones de Práctica forense mejicana</i> Lucas Gómez y Negro, <i>Elementos de práctica forense</i>	Universidad de Guadalajara
Derecho Criminal	José Marcos Gutiérrez, <i>Práctica criminal de España</i>	Colegio de la Purísima Concepción, Guanajuato Colegio de San Gregorio, México
Derecho Público	Louis Macarel, <i>Curso completo de Derecho Público General</i>	Colegio de la Purísima Concepción, Guanajuato Colegio de San Gregorio, México

CATEDRAS	LIBROS DE TEXTO	COLEGIOS
(no aparece el nombre de la cátedra)	Montesquieu, <i>Del espíritu de las leyes</i>	Colegio de San Ildefonso, México
(no aparece el nombre de la cátedra)	Johann Gottlieb Heinecke (Heineccius, Heinecio), <i>Elementos de derecho romano</i>	Colegio de San Gregorio, México

Fuente: Apéndices a la *Memoria del Secretario de Estado y del Despacho de Justicia e Instrucción Pública, leída a las Cámaras del Congreso Nacional de la República Mexicana en enero de 1844*; y también *Memoria que del estado que guarda la educación literaria en el Colegio Seminario de esta Capital, presenta al público el C. Lic. Manuel Angel Vélez como Secretario del mismo Establecimiento*, en *La Voz de Michoacán*, Morelia, jueves 29 de febrero de 1844.

Como puede apreciarse en la tabla 1, la enseñanza del derecho civil se hacía a partir de *Instituciones* adaptadas a la legislación real española, a las que se agregaban «ciertas noticias sobre las leyes particulares del país»²². Sólo en Guadalajara, Morelia y el Colegio de San Gregorio seguían utilizándose textos de derecho romano, normalmente para completar las doctrinas expuestas en las obras de Sala y Álvarez. Con la notable excepción de las *Lecciones* de Manuel de la Peña y Peña, no había textos de autores mexicanos, y fueron libros jurídicos españoles los que se asignaron para las cátedras de práctica forense y derecho criminal, donde las había. El derecho público se enseñaba únicamente en tres colegios, nuevamente a partir de libros extranjeros, en este caso franceses. Se nota una diversidad mayor en los manuales de derecho canónico, pero a decir de Baranda, la elección de los autores estudiados no estaba en función de un sistema general, «sino de las ideas y opiniones de las personas influyentes en los respectivos establecimientos»²³. En el derecho natural y de gentes, por último, predominaban los tratadistas ilustrados del siglo XVIII, aún en boga. El aprovechamiento de esta última cátedra dependía en buena medida del talento del profesor, toda vez que la relación del derecho natural con el positivo, civil y canónico, sólo podía enseñarse a los cursantes «de viva voz», a falta de un texto actualizado que vinculase unas materias con otras.

²² *Memoria del Secretario de Estado...*, p. 28.

²³ *Memoria del Secretario de Estado...*, p. 28.

Este largo rodeo viene a cuento porque una de las primeras y principales preocupaciones del catedrático Munguía fue precisamente la de formar unas «instituciones adecuadas» para la cátedra de derecho civil. A su juicio, se conseguirían mayores adelantos en dicha materia si se relacionasen «íntimamente con los principios metafísicos, el derecho natural aplicado a todos los estados del hombre y de la sociedad, y con el derecho natural así desenvuelto, el derecho civil»²⁴. Munguía redactó al efecto el plan razonado de su *Curso de Jurisprudencia Universal* y solicitó su aprobación al rector Mariano Rivas. Este último lo aprobó en menos de dos días, y el 9 de enero de 1843 expuso ante el obispo Portugal los méritos de la empresa proyectada por el joven catedrático de jurisprudencia. Las anotaciones de Rivas confirman hasta qué punto el proyecto de Munguía coincide con el diagnóstico y los proyectos reformadores de Baranda, varios meses antes de que el *Plan* oficial se hiciera público. No tengo evidencia de que uno haya influido en el otro, pero sí me es posible sostener que la obra del presbítero Munguía se encontraba a la vanguardia de la ciencia jurídica de entonces, con todo y sus resabios de progresismo ilustrado²⁵.

Rivas comienza su informe al obispo Portugal con un diagnóstico que ya nos es conocido. La obra proyectada por Munguía era útil y necesaria porque en las escuelas de derecho faltaba «en lo absoluto una obra elemental de este género». Los textos que hasta el momento se habían utilizado para la cátedra de derecho civil eran «unas institutas que, siguiendo más o menos fielmente el plan del Emperador Justiniano, se resienten de todos los defectos de la ins-

²⁴ Archivo Histórico Casa de Morelos (en adelante AHCM), Caja 554, Fondo: Diocesano, Sección: Gobierno, Serie: Seminario, Subserie: Informes, 1843, exp. 16.

²⁵ No pretendo sostener tampoco que Munguía y Baranda fueran los únicos en proponer una reforma urgente a la enseñanza del derecho. Véase, por ejemplo, la polémica entre Juan N. Rodríguez de San Miguel y el claustro de juristas de la Nacional y Pontificia Universidad de México, en Fernando Marcín Balsa, «Transformación del derecho y universidad: apuntes a la polémica en torno al estudio y enseñanza del derecho romano en México a mediados del siglo XIX», en José Antonio Caballero y Oscar Cruz Barney (coords.), *Historia del derecho. Memoria del Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados*, México, UNAM, 2005, pp. 303-322.

tituta en el de los romanos, y de los otros que debían resultar por el hecho solo de acomodar a ella la exposición del derecho Español». La situación era similar respecto al derecho natural, ya que no se contaba con «unos elementos de derecho natural y de gentes, que enlazados con los principios de la metafísica, relacionados con los cánones y aplicado a los códigos que rigen entre nosotros, facilite un sistema completo en que se exponga toda la materia legal, se exponga con método y claridad, se siga el enlace natural de las ideas y se le dé por último al estudio de la jurisprudencia el carácter científico que debe tener»²⁶. La unidad sistemática del conocimiento jurídico, a tono con los avances de la época, era entonces el verdadero mérito de la obra proyectada por Munguía:

El autor se propone unir íntimamente el derecho natural con el positivo divino, y semejante innovación debe producir los mejores resultados, porque evita multitud de cuestiones inútiles y da mayor solidez a los fundamentos de la legislación. No me ocuparé de seguir paso a paso el designio del autor, porque está suficientemente y con toda claridad indicado en la tabla sinóptica. Sólo diré que he hallado comprendidas en ella todas las leyes que así en lo divino como en lo humano, arreglan la sociedad doméstica, la sociedad civil, la sociedad política y la sociedad religiosa; que el derecho humano está naturalmente referido al derecho divino, y que así en uno como en otro, se observa un método claro y natural, porque se perciben con entera distinción las líneas que separan uno de otro derecho, los caracteres que distinguen a cada sociedad, y el principio, objeto y fin de todas y cada una de las leyes que la arreglan; siendo muy de notarse que en la exposición de todas éstas, hay un progreso tan natural y una deducción tan exacta, que se sigue constantemente la generación de las ideas²⁷.

Resumido en un párrafo, éste es el ambicioso *Curso de Jurisprudencia Universal* ideado por el catedrático Munguía. A esta obra dedicaría sus mayores esfuerzos intelectuales durante los siguientes seis años, contando en todo momento con la aprobación y financiamiento del obispado de Michoacán. Munguía no pudo realizar completa-

²⁶ AHCM, Caja 554, Fondo: Diocesano, Sección: Gobierno, Serie: Seminario, Subserie: Informes, 1843, exp. 16.

²⁷ AHCM, Caja 554, Fondo: Diocesano, Sección: Gobierno, Serie: Seminario, Subserie: Informes, 1843, exp. 16.

mente su plan, pero sí llegó a publicar algunas de sus partes, concretamente las referidas a los principios de metafísica y al derecho natural. De esta última nos habremos de encargar más adelante.

Rivas falleció el 30 de mayo de 1843, y su discípulo Munguía fue nombrado para sucederlo en el rectorado del Seminario de Morelia. No hubo ruptura en las tendencias educativas del colegio, ya que Munguía asumió las reformas de su antecesor, continuó con el proceso innovador y lo llevó a su término²⁸. En los ocho años que permaneció al frente de la institución, Munguía escribió y publicó un buen número de textos sobre filosofía, educación, literatura, retórica, lógica y teología, además de sus obras jurídicas. No tenemos espacio para revisar con detalle un *corpus* tan vasto, pero antes de pasar a los temas propiamente jurídicos, y al espinoso asunto de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, nos conviene asomarnos primero a las premisas intelectuales de toda su obra, desarrolladas en sus escritos filosóficos y literarios.

2. *Del lenguaje a la civilización*

Una de las primeras reformas curriculares de Mariano Rivas fue la introducción de una cátedra de Lengua castellana, la cual fue colocada al inicio de toda la enseñanza media, «como base del estudio de las otras lenguas, de la filosofía, la retórica y las ciencias»²⁹. Ya hemos dicho que esta cátedra le fue asignada al joven profesor Clemente Munguía, quien para 1837 ya había publicado, a modo de texto introductorio para sus estudiantes, una breve *Gramática general*, basada fundamentalmente en los principios de «análisis de las lenguas» elaborados por el filósofo francés Étienne Bonnot de Condillac, reputado en el prólogo de la *Gramática* como el «más juicioso» de todos los metafísicos³⁰. La influencia de este sacerdote ilustrado, primo de D'Alembert y amigo de Diderot, fue determinante en la obra de Munguía. Veamos con cuidado de dónde parten y a dónde llegan los razonamientos filosóficos de nuestro profesor michoacano.

²⁸ Roberto Heredia, «Los clásicos y la educación del siglo XIX», en *La tradición clásica en México*, México, UNAM, 1991, p. 183.

²⁹ Roberto Heredia, «Mariano Rivas (1797-1843)...», p. 27.

³⁰ Clemente Munguía, *Gramática general o aplicación del análisis a las lenguas*, Morelia, impresa en la oficina del ciudadano Juan Evaristo de Oñate, 1837, p. III.

Fruto tardío de la Ilustración francesa, las teorías «sensualistas» de Condillac, y de sus discípulos Destutt de Tracy y Pierre Cabanis, tuvieron una difusión muy amplia en los países latinoamericanos durante la primera mitad del siglo XIX. A grandes rasgos, esta escuela sostenía que de los sentidos proceden «no sólo las percepciones, sino toda la actividad del alma, de la memoria, incluso la atención y la comparación y, por tanto, el juicio»³¹. Para Condillac las ideas no son innatas, sino el resultado de distintas operaciones del intelecto: a éste le corresponde procesar las sensaciones primarias del placer y el dolor, y al hacerlo se vale del lenguaje como su principal instrumento ordenador. El lenguaje es entonces independiente y anterior a las ideas; éstas se relacionan entre sí por virtud del lenguaje, y por tanto «son ellas las que dependen de él, y no a la inversa»³². Esta primacía del lenguaje tiene a su vez una importante consecuencia pedagógica. Todas las lenguas llevan implícitas un método lógico, una racionalidad que nos permite ordenar adecuadamente las sensaciones, que nos hace pensar y nos enseña a discurrir. La mejor forma de educar al pensamiento consiste, pues, en extraer del lenguaje su lógica fundamental, para así aprender a razonar³³. Es por esta razón que Condillac asigna una primacía a la enseñanza de la «gramática general», por ser ésta «la ciencia que encuentra los principios y las reglas de ese método analítico que es la lengua»³⁴.

No es difícil rastrear la influencia de Condillac en Munguía. En su *Disertación sobre el estudio de la lengua castellana*, publicada en 1845, Munguía afirma sin cortapisas que las lenguas «son en todo sentido un fiel e íntegro depósito de los conocimientos humanos», pues «corresponden con absoluta fidelidad al pensamiento, y éste a las tendencias más comunes del espíritu»³⁵. El propio idioma es el

³¹ Umberto Eco, *La búsqueda de la lengua perfecta*, Barcelona, Editorial Crítica, 1999, p. 98.

³² Mauricio Beuchot, *Historia de la filosofía del lenguaje*, México, Fondo de Cultura Económica, 2005, p. 132.

³³ Mauricio Beuchot, *Historia de la filosofía del lenguaje...*, p. 135.

³⁴ Mauricio Beuchot, *Historia de la filosofía del lenguaje...*, p. 137.

³⁵ Clemente Munguía, «Disertación sobre el estudio de la lengua castellana», en sus *Lecciones prácticas de idioma castellano, o colección de piezas en prosa y en verso, escogidas en las obras de los clásicos españoles y escritores mexicanos*, Morelia, Imprenta de Ignacio Arango, 1845, p. XIV.

«primer maestro de la razón», y las ciencias no son sino «lenguas bien formadas»³⁶. Siendo evidente que el «conocimiento perfecto» de las lenguas «arrastra necesariamente a la posesión de los tesoros científicos y literarios que en ellas están contenidos»³⁷, la educación debe partir en primerísimo lugar del estudio concienzudo del «idioma común». Sin éste, el educando caerá en «las tinieblas de la razón» y en «mil crasos errores en materia de principios»³⁸. Munguía va más lejos y afirma que la desigualdad entre los pueblos no viene de su antigüedad o sus recursos, sino fundamentalmente de la importancia que se da al idioma nacional «en el gran sistema de la educación pública». Es aquí donde nace su admiración por la cultura francesa:

El decidido y laborioso empeño de Francia en cultivar su idioma la proporcionó vulgarizar, por el conducto de obras originales y excelentes versiones, todos los conocimientos antiguos y modernos [...] ¿Qué ha resultado de aquí? Sin ser la más artista, ni la más profunda, ni la más consecuente, Francia puede sin duda reputarse como la más rica en posesiones intelectuales, la que se ha elevado a mayores grados en la escala de la civilización, y la más universal en conocimientos³⁹.

Ahora bien, aún siendo clara la influencia inicial de Condillac en la obra de Munguía, éste no tardó en desmarcarse explícitamente de las consecuencias filosóficas del sensualismo. Y no es para menos, pues a Condillac y a sus discípulos se les asociaba con el materialismo y la «filosofía atea» de la revolución francesa. En lo que hace al origen del lenguaje, por ejemplo, los sensualistas sostenían que éste se fue desarrollando de manera paulatina, en función de las necesidades y pasiones humanas, y condicionado por factores históricos y ambientales. En otras palabras, Dios no tenía nada que ver con el instrumento fundamental del pensamiento humano. Munguía

³⁶ Clemente Munguía, «Disertación sobre el estudio de la lengua castellana...», p. XVIII.

³⁷ Clemente Munguía, «Disertación sobre el estudio de la lengua castellana...», p. V.

³⁸ Clemente Munguía, «Disertación sobre el estudio de la lengua castellana...», p. XII.

³⁹ Clemente Munguía, «Disertación sobre el estudio de la lengua castellana...», p. XXXI.

niega esta hipótesis y afirma que las lenguas le fueron comunicadas al hombre desde el momento de su creación, «como un recurso indispensable para la perfección de su entendimiento»⁴⁰. Enfrentado al riesgo de proponer una filosofía del lenguaje demasiado abstracta —y en abierto conflicto con la verdad cristiana— Munguía acude a dos fuentes distintas para completar su teoría literaria. Por un lado, asume a la lengua española como el cimiento lingüístico de la nueva nación, y suscribe así la necesidad de conservar las reglas neoclásicas y académicas de la elocuencia, tal como estaban formuladas en el *Arte de hablar en prosa y en verso*, de don José Gómez Hermosilla. Por el otro, Munguía retoma los planteamientos filosóficos del tradicionalismo francés, en la versión de Chateaubriand, Bonald, Lamennais y Lamartine, con su lectura teológica de la historia y su énfasis en la superioridad estética y espiritual de la literatura sagrada⁴¹. Esta segunda vertiente es la que más nos interesa por el momento.

Ya vimos que Munguía suscribe la tesis del origen divino del lenguaje. Esta tesis, en la versión del vizconde Louis de Bonald, afirma que el Creador dio a los primeros padres un lenguaje primitivo que, transmitido de generación en generación, recoge las verdades y principios dados por Dios para todos los hombres⁴². ¿Cómo se explica entonces que la humanidad haya caído en la confusión lingüística y espiritual, en la ignorancia y los crímenes contra sí misma? La respuesta se encuentra, a decir de Munguía y de la teología de su época, en el pecado original. Esta profunda perturbación en la relación del

⁴⁰ Clemente Munguía, «Disertación sobre el estudio de la lengua castellana...», p. XIX.

⁴¹ Como afirma Pablo Mora, Munguía no fue el único escritor mexicano que buscó conciliar estas tendencias; antes bien, el eclecticismo, la religiosidad y la moderación fueron características de las letras mexicanas de la época. sus ensayos, «La crítica literaria en México: 1826-1860», en Belem Clark y Elisa Speckman (eds.), *La República de las Letras: asomos a la cultura escrita del México decimonónico*, vol. I, México, UNAM, 2005, pp. 355-376; y «Literatura y catolicismo: hacia una poética mexicana en la primera mitad del siglo XIX», en Florencio Sevilla y Carlos Alvar, eds., *Actas del XIII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas*, III, Madrid, Editorial Castalia, 2000, pp. 269-278.

⁴² Giovanni Reale, *Historia del pensamiento filosófico y científico*, III, Barcelona, Herder, 2001, p. 239. Bonald desarrolla esta tesis en su *Leyenda primitiva* (1802).

hombre con la Divinidad llevó al olvido progresivo de los rectos principios, e hizo del hombre un «esclavo del demonio», víctima de sí mismo por sus pasiones y sus vicios, e incapaz por lo mismo de ponerse al cubierto de los errores y de escapar a las «sombras de la muerte»⁴³. La única salida a tan inmensa desgracia sólo podía venir de un Dios misericordioso que decidió acercarse de nuevo al mundo, y es por ello que la Encarnación constituye para Munguía el hecho decisivo de la historia humana:

Jesucristo nace: disipa las tinieblas con su predicación; regenera la voluntad con su gracia; borra la culpa con su sacrificio; y este grande acontecimiento dibuja sobre el mundo moral el íris bello de la nueva alianza, cambia la condición del hombre y la suerte del género humano⁴⁴.

Lo interesante de la lectura histórica de Munguía es que la regeneración traída por el cristianismo se manifestó ante todo como una regeneración de la palabra. Y es que tras la encarnación de Cristo la elocuencia cambió de origen, rango y destinos. Comenzando con los discursos de «doce pobres pescadores», la palabra entró «en su robustez, en su edad madura, en su perfección definitiva, en su plenitud filosófica, social, histórica y religiosa al mismo tiempo»⁴⁵. En otras palabras, dice Munguía, con la nueva elocuencia sagrada se pudo consumir «la encarnación del Verbo divino en el verbo humano»⁴⁶. Se explica así que la elocuencia religiosa tenga una «noble y digna primacía entre todos los géneros de la literatu-

⁴³ Clemente Munguía, «Estudios fundamentales sobre el hombre, considerado bajo el triple aspecto de la religión, de la moral y de las leyes», en *Obras diversas del lic. Clemente de Jesús Munguía, Obispo de Michoacán. Segunda serie*, vol. I, México, Imprenta de la Voz de la Religión, 1852, p. 250.

⁴⁴ Clemente Munguía, «Estudios fundamentales sobre el hombre...», p. 251.

⁴⁵ Clemente Munguía, «Disertación sobre la elocuencia religiosa. Escrita para servir de introducción al curso teórico-práctico de oratoria sagrada», en sus *Pláticas doctrinales y sermones, precedidos de una disertación sobre la oratoria sagrada*, Morelia, Tipografía de Octaviano Ortiz, 1851, p. XIV

⁴⁶ Clemente Munguía, «Disertación sobre la elocuencia religiosa...», p. XV

ra», y que en ella se encuentren «los primeros elementos de la civilización moderna»⁴⁷.

Munguía sigue a partir de aquí a dos de los autores más leídos de su tiempo, François René de Chateaubriand y Jaime Balmes, de quienes toma la idea del poder civilizatorio de la fe⁴⁸. Munguía entiende a la civilización como la plenitud de la inteligencia y la moral, y afirma que ésta sólo puede lograrse «mediante la concordia de la razón y la fe, de la naturaleza y la gracia en la marcha del entendimiento y en el sistema de la conducta»⁴⁹. Esta concordia sólo ha sido lograda en los pueblos cristianos, y la verdad de esta afirmación se prueba por la historia: es un hecho irrefutable «que la civilización, las artes y las ciencias han seguido siempre las huellas del cristianismo, han vivido con él y han desaparecido igualmente de todas las naciones que le han abandonado»⁵⁰. ¿Cómo pudo el cristianismo revolucionar la filosofía, las costumbres, las artes y las instituciones sociales? Precisamente a través de la palabra regenerada por la fe. Sólo la elocuencia sagrada puede regir a las pasiones sin aliarse con ellas, y subyugar a los sentimientos «sin lisonjear las inclinaciones culpables»⁵¹. Munguía repite una y otra vez que «no hay poder tan vehemente como el de la elocuencia y, por tanto, no hay resorte más enérgico para la sociedad»⁵². Sin los atractivos de

⁴⁷ Clemente Munguía, «Disertación sobre la elocuencia religiosa...», p. IV

⁴⁸ De Chateaubriand, Munguía cita su obra clásica, *Le Génie du Christianisme* (1802) y de Balmes, *El protestantismo comparado con el catolicismo en sus relaciones con la civilización europea* (1842-44).

⁴⁹ Clemente Munguía, «Disertación sobre la elocuencia religiosa...», p. XXXIV.

⁵⁰ Clemente Munguía, «Examen filosófico sobre las relaciones del orden natural y el sobrenatural, ya entre sí, ya con la perfección intelectual, moral y social de la especie humana. Opúsculo escrito para servir de introducción a un curso general de religión, de moral y de derecho universal», en *Obras diversas*, vol I, p. 555.

⁵¹ Clemente Munguía, «Disertación sobre la elocuencia religiosa...», p. XVII.

⁵² Clemente Munguía, *Los principios de la Iglesia católica comparados con los de las escuelas racionalistas, en sus aplicaciones a la enseñanza y educación pública, y en sus relaciones con los progresos de las ciencias, de las letras y de las artes, la mejora de las costumbres y la perfección de la sociedad*, Morelia, Imprenta de I. Arango, 1849, p. 78.

la elocuencia, las doctrinas más verdaderas no pueden ejercer un influjo benéfico en el estado de los pueblos, y éstos quedan a merced del error y la anarquía.

La historia narrada por Munguía no tiene una desembocadura feliz. Nuestro sacerdote michoacano tiene una opinión muy sombría de su propio presente, derivada, ahora sí, de la reacción católica a la revolución francesa. La suya es una época de «horrores y desastres», provocados por un «fuego» que, partiendo de la Francia, ha conmovido todas las sociedades e «insurreccionado» a todos los pueblos, «hasta el extremo de llevar el puñal asesino al pecho de los Ministros, y de obligar al augusto Jefe de todo el rebaño católico a dejar sus Estados»⁵³. ¿Dónde está la raíz del desastre? Munguía, apoyado nuevamente en Bonald, ubica el origen del mal en el «libertinaje de la razón» y el «absolutismo del entendimiento», hijos de la filosofía del siglo XVIII y en último término de la Reforma protestante⁵⁴. El exceso de confianza en la razón individual ha llevado a la indiferencia religiosa, y ésta se ha extendido como un cáncer al mundo entero. Prueba de ello es la difusión extraordinaria de las falsas doctrinas, que se revisten bajo mil formas, «las más atractivas y a propósito para andar en todas las clases de la sociedad, desde la capital opulenta hasta la cabaña ignorada»⁵⁵.

La única institución capaz de salvar al mundo del caos, concluye tajantemente Munguía, es la Iglesia Católica. Ella ha sido la civilizadora de los pueblos, y es la auténtica depositaria de los principios infalibles y de las «llaves de la prosperidad pública»⁵⁶. Más aún: para que la Iglesia pueda ser *luz del mundo y sal de la tierra*, resulta indispensable que «la enseñanza pública y la educación secundaria

⁵³ Clemente Munguía, *Los principios de la Iglesia católica comparados...*, p. 6.

⁵⁴ Clemente Munguía, «Examen filosófico sobre las relaciones del orden natural y el sobrenatural...», pp. 591-595.

⁵⁵ Clemente Munguía, «Discurso sobre el establecimiento de la cátedra de bella literatura en el Seminario de Morelia», en sus *Estudios oratorios u observaciones críticas sobre algunos discursos de los oradores más clásicos, antiguos y modernos, precedidas de un discurso sobre la elocuencia y de algunas arengas sobre varios géneros de literatura*, Morelia, Imprenta de Ignacio Arango, 1841, p. XXVII.

⁵⁶ *Los principios de la Iglesia católica comparados con los de las escuelas racionalistas*, p. 101.

de la juventud» estén a cargo de los miembros del estado eclesiástico, los únicos que poseen en abundancia los talentos, el prestigio y el saber que distinguen a los verdaderos maestros⁵⁷. ¿Qué armas debe entonces empuñar la Iglesia contra los enemigos de la civilización cristiana? Ciertamente la enseñanza eclesiástica debe custodiar fielmente «todo lo que ha pasado por la prueba de los siglos»⁵⁸, pero al hacerlo no puede quedarse anclada en lenguajes y conocimientos ya caducos:

¿Marcharemos a la edad media para cubrirnos con la égida de las sùmulas? ¿Recontaremos las categorías? ¿Lanzaremos contra el enemigo el rayo del entimema, del silogismo y de todas las formas escolásticas? Nuestros libros por cierto no tendrían un solo instante de vida. Una exposición árida, una discusión pesada, un estilo rigurosamente didáctico, no son el contrapeso que debe oponerse a tan astutos adversarios. Es preciso combatirlos con sus propias armas⁵⁹.

¿Cuáles son estas armas? Ya hemos mencionado la primera: una elocuencia renovada, que eleve a los predicadores católicos a las alturas alcanzadas por Fénelon, Bourdaloue, Bossuet y Massillon, los grandes oradores del siglo de Luis XIV. Sólo el dominio de la propia lengua, repite Munguía, permite llevar a la razón y al sentimiento por los senderos adecuados. Y aún así, el siglo XIX requiere algo más que estilo y bellas palabras. Munguía concede a las ideas un influjo decisivo en los hechos sociales, y piensa que «la condición de cada pueblo se halla siempre en razón directa de las doctrinas» dominantes. Pensar lo contrario implicaría poco menos que «considerar a los pueblos [sumidos] en una profunda barbarie»⁶⁰. Pues bien, dado que los estragos de la revolución han sido fruto de doctrinas corrompidas, es precisamente por las doctrinas y los libros por donde la batalla debe comenzar. ¿Cómo hacerlo? Así como el

⁵⁷ *Los principios de la Iglesia católica comparados con los de las escuelas racionalistas*, p. 112.

⁵⁸ *Los principios de la Iglesia católica comparados con los de las escuelas racionalistas*, p. 115.

⁵⁹ Clemente Munguía, «Discurso sobre el establecimiento de la cátedra de bella literatura...», p. XXVII.

⁶⁰ Clemente Munguía, «Examen filosófico sobre las relaciones del orden natural y el sobrenatural...», pp. 601 y 602.

cristianismo había creado una civilización reconciliando la razón y la fe, encarnando al Verbo divino en el verbo humano, así también los principios católicos debían ser encarnados nuevamente en la exposición de las ciencias modernas, particularmente tratándose de aquellas que «se dirigen a rectificar la conducta del hombre y el gobierno de la sociedad». En otras palabras, era indispensable asociar «la revelación con las luces de la razón humana, el Derecho natural con el positivo divino»⁶¹.

Así, la Jurisprudencia universal a la que aspiraba Munguía no solamente debía dar unidad y sistema al conocimiento jurídico; también debía hacer posible la reconciliación de la fe y el derecho. El método auguraba buenos resultados: partiendo de verdades infalibles y respetando el «criterio imprescriptible» de la razón, el jurista podría aplicarse simplemente «a deducir consecuencias exactas de principios universalmente profesados»⁶². Munguía no habla jamás de rescatar un orden jurídico del pasado, casuístico y enraizado en la historia. Utiliza más bien un lenguaje racionalista que era patrimonio común de los juristas de la Ilustración, y ya de entrada critica en diversas ocasiones a una «escuela teológica» —abanderaada por Joseph de Maistre, Bonald y otros escritores de la Reacción francesa— que había sido incapaz de presentar un «sistema de unidad» y que buscaba sujetar a la razón «más allá de lo que exige un sano criterio»⁶³. Veamos, pues, cómo construye Munguía su Jurisprudencia universal y de qué modo concilia al cristianismo con el derecho natural, sin asumir en su totalidad los postulados del racionalismo o la reacción.

3. *Legitimidad, constitución y derechos naturales*

La doctrina del derecho natural es tan antigua como la filosofía, y en las Américas tiene una larga tradición que se remonta por lo

⁶¹ Clemente Munguía, «Examen filosófico sobre las relaciones del orden natural y el sobrenatural...», p. 609.

⁶² Clemente Munguía, «Examen filosófico sobre las relaciones del orden natural y el sobrenatural...», p. 605.

⁶³ Clemente Munguía, «Examen filosófico sobre las relaciones del orden natural y el sobrenatural...», pp. 597 y 603; véanse también *Los principios de la Iglesia católica...*, p. 31.

menos al siglo de la conquista. Si bien los temas y postulados del iusnaturalismo han mantenido cierta continuidad a lo largo de los siglos, el uso político y jurídico de dicha doctrina ha variado notablemente según las épocas y acontecimientos. En los siglos XVIII y XIX, por ejemplo, el derecho natural cumplía dos funciones distintas. Por un lado, como dictamen de la razón natural y modelo del Derecho por excelencia, universal y absolutamente válido, se trataba de una construcción doctrinal cuya meta última era poner fin a las arbitrariedades, lagunas y contradicciones del derecho común⁶⁴. Frente a un orden jurídico centenario, caracterizado por una diversidad amplísima de fuentes, el derecho natural aparecía como un «sistema de conclusiones lógicas, derivadas unas de otras, que de unos primeros principios y de unas definiciones se expanden hasta los más pequeños detalles de la vida social»⁶⁵. Al mismo tiempo, en un momento de profundas convulsiones políticas, el derecho natural proporcionaba las bases teóricas y jurídicas para fundar la legitimidad de los gobiernos. Como advierte José Carlos Chiaramonte, el iusnaturalismo era el verdadero fundamento de la ciencia política de entonces, su gran semillero de conceptos y argumentos⁶⁶.

La obra más importante de Munguía, *Del derecho natural en sus principios comunes y en sus diversas ramificaciones*, publicada en 1849, se enmarca claramente en esta «escuela moderna» del iusnaturalismo. Munguía condena el divorcio entre razón y fe, alejándose así de la premisa inicial de muchos tratadistas europeos, pero aspira, al igual que ellos, a construir un tratado elemental que contenga «los principios de una buena legislación y el fundamento de todas las leyes humanas»⁶⁷. La pretensión de esta «obrita» en cua-

⁶⁴ Guido Fassò, *Historia de la Filosofía del Derecho*, vol. III, Madrid, Ediciones Pirámide, 1996, pp. 15-18.

⁶⁵ Javier Hervada, *Historia de la ciencia del derecho natural*, Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1991, p. 259.

⁶⁶ José Carlos Chiaramonte, «Fundamentos iusnaturalistas de los movimientos de independencia», en Marta Terán y José Antonio Serrano (eds.), *Las guerras de independencia en la América española*, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2002, pp. 99-122.

⁶⁷ Clemente Munguía, *Del derecho natural en sus principios comunes y en sus diversas ramificaciones, o sea, curso elemental de derecho natural y de gentes, público, político, constitucional, y principios de legislación*, tomo I, México, Imprenta de la Voz de la Religión, 1849, p. XXIII.

tro tomos no es poca cosa. Partiendo de principios «incontestables» y aplicando un método rigurosamente deductivo, Munguía pretendía elaborar una doctrina revestida de autoridad científica y moral, que abarcara prácticamente todas las áreas del conocimiento jurídico, e indicase a los legisladores el camino a seguir y los límites que no pueden traspasar. La constitución vigente, lejos de ser la fuente última de validez de todo el orden jurídico, se encontraría sujeta de este modo a las directrices de un cuerpo teórico previamente establecido, una doctrina que, además de consagrar el número, significado y extensión de los derechos del hombre, marcaría la diferencia entre un mandato legítimo y otro «inconstitucional», e indicaría las formas de gobierno que corresponden mejor al orden natural. Veamos lo que dice Munguía respecto a todos estos temas, comenzando por la cuestión más explosiva y urgente del momento: aquella relativa al origen y legitimidad del jovencísimo Estado mexicano.

Mencionábamos en el apartado anterior que la obra literaria de Munguía retoma diversos planteamientos del tradicionalismo francés. Lo mismo sucede en sus escritos jurídicos. Al igual que Bonald y De Maistre, Munguía considera que la sociedad no nace de un acuerdo entre voluntades individuales: «la sociedad es un destino esencial del hombre», porque éste no puede existir por sí mismo, ni «eximirse de las relaciones esenciales, sustraerse a las leyes y vivir sin autoridad»⁶⁸. Ahora bien, este punto de partida tenía consecuencias ideológicas que Munguía no podía compartir. En efecto, la negación del contrato social tenía su correlato en un postulado básico del pensamiento de la Restauración: siendo una condición indispensable de la vida humana, la sociedad es previa al hombre y tiene su origen en Dios; y si la sociedad procede de Dios, de Él proceden también la soberanía del Estado y la legitimidad de quien lo representa. En este razonamiento, proclamado por el Congreso de Viena como la base del derecho público europeo, descansa el programa político de la reacción: sólo reestableciendo la monarquía dinástica, instaurada por Cristo, es posible restaurar el orden social y religioso que hizo añicos la revolución. Aplicar y defender tal doctrina en México, a menos de treinta años de la independencia, era políticamente suicida, pues implicaba nada menos que defender la restauración del orden colonial español. Munguía era consciente de la

⁶⁸ Clemente Munguía, *Derecho natural...*, tomo II, p. 236.

delicadeza y trascendencia de este problema, y buscó entonces la manera de conciliar el origen divino de la sociedad con una legitimidad republicana, correspondiente al estado político del país. Esto lo hace a partir de una interesante discusión con un publicista reaccionario de menor categoría, el abate Thorel, autor de un voluminoso tratado sobre *El origen de las sociedades*.

Jean Baptiste Thorel, cuyos datos biográficos se desconocen, perteneció sin duda al influyente grupo de los *émigrés*, los aristócratas y clérigos exiliados por la revolución francesa, en cuyos círculos se gestó el pensamiento contrarrevolucionario. Durante sus años de destierro compuso y publicó un buen número de libros, algunos de los cuales fueron reimpresos y traducidos en Madrid en 1813 y 1823. En México su obra completa fue publicada hasta el año 1846, por la tipografía de Rafael de Rafael y Vilá, un impresor catalán vinculado a la dirigencia del partido conservador⁶⁹. Con todo y su extensión, la obra de Thorel se reduce a una mera apología —nada original, por cierto— del derecho divino de los reyes. Dice nuestro autor que Dios estableció desde siempre dos especies de autoridades: una autoridad divina, confiada a los sacerdotes, y otra humana, conferida en su plenitud a los «padres soberanos» de cada pueblo. Todos los pueblos de la antigüedad llevaban el nombre de sus primeros padres, y sólo a estos se les dio el poder de transmitir la soberanía a sus sucesores, perpetuando así la autoridad política hasta el fin del mundo. La revolución destruyó este orden primigenio, colocando «a los hijos sobre los padres», «a los criados sobre los amos», y a la «criatura sobre el Creador»⁷⁰. Por lo mismo, era un deber imperioso luchar por el retorno de «nuestros padres soberanos», los únicos en quienes Dios había depositado su favor.

⁶⁹ Del abate Thorel, hemos tenido a la mano: *Del origen de las sociedades* (3 tomos), tercera edición, traducida al español por el mismo que tradujo y publicó en 1813 la segunda edición que dio a luz su respetable autor en 1809 con el título de *Voz de la Naturaleza sobre el origen de los gobiernos*, Madrid, Imprenta de D. Miguel de Burgos, 1823; y también las *Obras del abate Thorel, traducidas del francés por J.M.H. y S.*, México, Tipografía de R. Rafael, 1846. Sobre este tipógrafo, véase Javier Rodríguez Piña, «Rafael de Rafael y Vilá: impresor, empresario y político conservador», en Laura Beatriz Suárez de la Torre (coord.), *Empresa y Cultura en tinta y papel (1800-1860)*, México, Instituto Mora / UNAM, 2001, pp. 157-167.

⁷⁰ J. B. Thorel, *Del origen de las sociedades...s*, tomo segundo, p. 323.

A decir de Munguía, los principios desarrollados por Thorel y la «escuela teocrática» no lograban otra cosa que poner al gobierno a merced «de tradiciones interrumpidas» y de «conjeturas históricas». Las «vías de lo legítimo», por el contrario, debían ser «anchas, espaciales, libres y comunes, por la naturaleza misma y los destinos de la sociedad civil»⁷¹. El caso mexicano mostraba la necesidad de apelar a otros títulos para justificar la acción de los gobernantes:

Vaya un ejemplo: trátase de hallar el hilo de la legitimidad en alguna de las repúblicas que fueron tres siglos colonias españolas. Supuesta la conquista, ¿a quién y por quién fue trasladado el dominio de estas naciones? Supuesta la independencia, ¿a quién y por quién fue trasladado el derecho de gobernar? Supóngase que nosotros, dando por nulo todo lo presente, nos proponemos ilustrar todas las dificultades que podían presentarse, y reestablecer a toda costa, según los principios de Thorel, la legitimidad de nuestros gobiernos: ¿a dónde apelaremos? ¿Acaso a los antiguos pobladores de este país? Sus tradiciones de familia quedaron cortadas por la conquista, y confundidas por otra parte con la mezcla de razas. ¿A los españoles? Pero ni tienen con aquellos las conexiones del parentesco y la sangre, ni otra relación originaria que la de conquistadores, ni derechos algunos que reclamar o ceder, principalmente desde que reconocieron la independencia mexicana. ¿A los actuales habitantes de estas repúblicas? ¿A la raza indígena? ¿A las otras? [...] Concluyamos: la teoría de la paternidad es de los tiempos patriarcales; la sociedad civil pide otros principios⁷².

¿Cuáles son estos principios? En primer lugar, Munguía reconoce a la sociedad el poder «para designar sus gobiernos, determinar sus formas, y sistemar su acción en uso del poder que ha recibido del cielo»⁷³. Munguía justifica este principio siguiendo un razonamiento muy curioso. El orden doméstico, repite en numerosas ocasiones, es el modelo y «la basa» de la sociedad civil⁷⁴. ¿Qué lecciones se extraen de este modelo? Si observamos atentamente la constitución de la familia, notaremos que el hombre ejerce sobre su mujer una potestad que le viene directamente de Dios, pero no es

⁷¹ Clemente Munguía, *Derecho natural...*, tomo III, p. 103.

⁷² Clemente Munguía, *Derecho natural...*, tomo III, p. 106.

⁷³ Clemente Munguía, *Derecho natural...*, tomo III, p. 115.

⁷⁴ Clemente Munguía, *Derecho natural...*, tomo III, pp. 12-14.

Dios quien designa a los depositarios de este poder, sino los mismos consortes: ambos toman a su cargo «las consecuencias de un enlace indisoluble», «bajo la influencia de una plena libertad»⁷⁵. Pues bien, así como el consentimiento libre designa al esposo y padre, quien ejerce un poder que viene de Dios, así también la sociedad tiene el derecho de designar libremente a los depositarios del poder político. Negar a la sociedad este derecho implicaría que su condición es inferior a la del individuo, «lo cual es un absurdo en teoría», y «una inconsecuencia en la práctica»⁷⁶. Munguía considera que la discusión escolástica acerca del modo concreto en que Dios comunica su poder es hasta cierto punto bizantina. Lo importante no es tanto quién ejerce el poder, sino cómo lo hace. Ahí radica la verdadera legitimidad de los gobiernos:

No estamos, pues, en el caso de inquirir el modo particular con que Dios comunique al gobierno el poder civil, y a la sociedad sus facultades para elegir o designar el gobierno. Lo que importa saber es, que estas facultades no pueden ejercerse arbitrariamente, y por tanto, que están sujetas a la ley invariable de la naturaleza. Esta sujeción a la ley es la mejor garantía de la legitimidad y lo que basta para desenvolver los principios del Derecho público y constitucional relativamente al establecimiento, forma y acción de los gobiernos, sin necesidad de entrar en otra clase de cuestiones⁷⁷.

Sujeción del gobierno a la ley, controles normativos que impidan el ejercicio arbitrario del poder... lo que Munguía propone como principio de legitimidad no es otra cosa que el constitucionalismo, aunque en este caso la constitución no se identifica necesariamente con una norma positiva⁷⁸. Munguía maneja dos concepciones distintas de la constitución, a saber, un concepto sociológico, atento a las raíces históricas y sociales de la norma fundamental, y otro propiamente normativo, más relacionado con su dimensión política efectiva. Así, nuestro jurista michoacano define a la «constitución

⁷⁵ Clemente Munguía, *Derecho natural...*, tomo III, p. 115.

⁷⁶ Clemente Munguía, *Derecho natural...*, tomo III, p. 114.

⁷⁷ Clemente Munguía, *Derecho natural...*, tomo III, p. 127.

⁷⁸ Sobre el concepto de «constitucionalismo», véase Rolando Tamayo, *Introducción al estudio de la Constitución*, México, Fontamara, 1998, p. 89; y Charles Howard McIlwain, *Constitucionalismo antiguo y moderno*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991, p. 37.

social» como la «reunión actual de todos los atributos esenciales que entran en la noción de la sociedad». Esta «constitución social» se identifica con la sociedad misma, y es por tanto obra «de Dios, de la naturaleza y de los siglos»⁷⁹. Esta definición tiene sus antecedentes en la doctrina de una «Constitución histórica», desarrollada por Burke, Capmany y Jovellanos, pero ante todo recoge las críticas que hacía Joseph de Maistre a la «tiranía de lo escrito»⁸⁰. Este pensador saboyano sostenía que las raíces de las constituciones políticas existen antes de toda ley escrita; al ser una herencia de todos los siglos, el depósito de una acción de la Providencia, la constitución no puede ser creada *a priori*, y por lo mismo nadie puede arrogarse el derecho de abolirla. Las implicaciones prácticas de esta teoría son bastante obvias, y Munguía las aborda con detenimiento: el autor de una constitución escrita, el poder constituyente, no tiene una potestad ilimitada. Contra la constitución social no hay poder legítimo que valga, y por tanto «sus principios deben quedar siempre a salvo en todo sistema de legislación»⁸¹.

¿Qué pasa cuando no existe correspondencia entre la constitución social y la ley escrita? Munguía advierte que cuando ambas no marchan paralelas, «el desacuerdo es inevitable, la oposición es necesaria, y ni el gobierno puede apreciar el porvenir, ni el pueblo responder de su quietud y subordinación»⁸². Citando a Jaime Balmes y a Santo Tomás de Aquino, Munguía afirma que la resistencia civil frente a un gobierno «inconstitucional» es absolutamente legítima, mas indica que ésta debe hacerse de un modo paulatino, agotando primero todos los «recursos de la fuerza moral». Si las «exposiciones, representaciones, quejas y discursos» no disuaden al gobierno, entonces es posible apelar al mal extremo, la revolución armada. Y aún en este caso, es indispensable que no haya otro recurso disponible, que se utilice la fuerza física en el momento

⁷⁹ Clemente Munguía, *Derecho natural*, tomo III..., pp. 165 y 168.

⁸⁰ Al respecto, Francisco Tomás y Valiente, «Constitución», en Elías Díaz (ed.), *Filosofía política II. Teoría del Estado*, Madrid, Editorial Trotta, 1996, pp. 45-50; José María Portillo Valdés, «Constitución», en el *Diccionario político y social del siglo XIX español*, Madrid, Alianza Editorial, pp. 188-196; y Antonio Truyol y Serra, *Historia de la Filosofía del Derecho y del Estado*, tomo 3, Madrid, 2004, pp. 107-108.

⁸¹ Clemente Munguía, *Derecho natural...*, tomo III, p. 176.

⁸² Clemente Munguía, *Derecho natural...*, tomo III, p. 134.

oportuno, sin contribuir aún más a la desintegración del cuerpo social, y que la decisión sea fruto de un cálculo prudente, «que dé por resultado una diferencia de bien en favor de la revolución»⁸³. Munguía tendría oportunidad de poner en práctica estos principios unos años más tarde, pero en 1849 su preocupación radicaba más que nada en definir claramente los contenidos legítimos e indispensables de toda legislación positiva. Si bien Munguía comparte con De Maistre la teoría de una «constitución social», en ningún momento menosprecia la importancia de una constitución escrita, la propiamente normativa. Al contrario, para nuestro jurista michoacano el objeto del derecho constitucional no es otro que hacer efectivo el cumplimiento de los derechos naturales, los cuales «deben estar expresa o tácitamente reconocidos en la legislación fundamental o en las cartas constituyentes»⁸⁴. ¿Cuáles son estos derechos y cómo pueden ser protegidos? ¿Qué principios de la «constitución social» deben ser recogidos por la «constitución política»?

Dijimos antes que Munguía construye su tratado sobre los derechos naturales siguiendo un razonamiento estrictamente deductivo. A partir de tres hechos evidentes e incontestables, que son la inmortalidad del alma, la existencia de Dios, y la sociabilidad natural del hombre, Munguía infiere una serie de relaciones que finalmente se traducen en la existencia de tres tipos de deberes, con sus derechos correlativos⁸⁵. Siguiendo a Jean Domat, Munguía afirma que estas leyes naturales, inferidas por la razón, coinciden con las dos leyes supremas del cristianismo, el amor a Dios y el amor al prójimo. Así, este conjunto de «obligaciones para con Dios», «para con nosotros mismos» y «para con los demás hombres», constituye el marco fundamental de todos los derechos, e ilustra la conveniencia de unir al derecho natural con el derecho positivo divino. Munguía incluye en su análisis una diversidad enorme de materias, que van desde la separación de los cónyuges hasta las funciones de los ministros diplomáticos, pasando por el derecho administrativo, las reglas del duelo y la propiedad intelectual. La lista de autores citados a lo largo del libro es bastante copiosa, aunque prevalecen las referencias a los manuales de Burlamaqui, Vattel, Balmes, Heinrich Ahrens y Jakob Anton von Zallinger, a quienes más tarde nos referiremos. No pode-

⁸³ Clemente Munguía, *Derecho natural...*, tomo III, pp. 140-156.

⁸⁴ Clemente Munguía, *Derecho natural...*, tomo III, pp. 184-185.

⁸⁵ Clemente Munguía, *Derecho natural...*, tomo I, pp. XXX-LX.

mos abordar la obra jurídica de Munguía en su totalidad, pero antes de pasar al apartado del derecho eclesiástico, conviene repasar lo que nos dice don Clemente acerca de los derechos constitucionales más controvertidos: el derecho a la seguridad, la propiedad, la libertad en todas sus manifestaciones, la igualdad y los derechos políticos.

El tema de la *seguridad* ilustra una diferencia notable entre Munguía y el pensamiento reaccionario europeo. Este último, en sus distintas versiones, se caracterizaba por una profunda aversión a los llamados «derechos del hombre», y propugnaba más bien por una soberanía de carácter absoluto e infalible, que en Donoso Cortés llega a la defensa de la noble «dictadura del sable», frente a la impía dictadura de la revolución⁸⁶. Para Munguía, por el contrario, «el despotismo y la tiranía nunca serán un derecho»⁸⁷. El gobierno debe garantizar a cada miembro de la sociedad la «conservación ilesa de sus personas», y éstas no pueden ser afectadas en su vida o propiedades sino con arreglo a derecho y en los casos expresamente contemplados por la ley. Así, «el carácter retroactivo de las leyes, su aplicación arbitraria, y por consiguiente, la falta de formalidades establecidas» en el procedimiento, aparecen como acciones directamente opuestas al derecho natural⁸⁸. De igual manera —y Munguía afirma esto en una época en que la odiosa «leva» era una práctica común— el gobierno no puede reclutar soldados de manera arbitraria. Para no afectar los «derechos del ciudadano», debe haber por lo menos «un código penal, una organización de policía y un arreglo legislativo para la formación y disciplina de la fuerza militar»⁸⁹.

En su análisis del derecho de *propiedad*, Munguía sigue de cerca a Heinrich Ahrens, un publicista alemán cuya obra alcanzó un gran ascendiente entre los estudiosos del derecho público mexicano, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XIX. Ahrens fue discípulo directo del filósofo Karl Krause, y se dio a conocer en Francia y Bélgica por su labor de divulgación del krausismo. Inspirado en la doctrina de su maestro, Ahrens propuso una concepción «aso-

⁸⁶ Javier Fernández Sebastián, «Dictadura», en el *Diccionario político y social del siglo XIX español*, pp. 245-249.

⁸⁷ Clemente Munguía, *Derecho natural...*, tomo III, p. 34.

⁸⁸ Clemente Munguía, *Derecho natural...*, tomo III, pp. 46-48.

⁸⁹ Clemente Munguía, *Derecho natural...*, tomo III, p. 49.

ciacionista» del derecho natural, que asignaba al Estado la obligación de proporcionar a cada esfera de la sociedad civil las condiciones necesarias para su existencia y desarrollo, sin intervenir nunca en su organización interna⁹⁰. Uno de los principales medios para garantizar la autonomía de la sociedad civil, en la visión de Ahrens, es el respeto al derecho de propiedad. Mientras que muchos tratadistas franceses consideraban a la propiedad como un «mero hecho de convención social», Ahrens la veía como un derecho fundado en la naturaleza misma del hombre, que puede ser modificado en consonancia con las exigencias de la vida común, sin que por esto pueda ser suprimido o lastimado en su base⁹¹. Munguía retoma literalmente la definición de propiedad de Ahrens, una definición que habrá de repetir una y otra vez en el curso de su batalla jurídica contra las leyes de desamortización:

La propiedad es la realización del conjunto de medios y condiciones necesarias para el desenvolvimiento, ya físico, ya intelectual, de cada individuo, en la cantidad y cualidad que reclaman sus necesidades. [...] La propiedad tiene, pues, con el derecho, el mismo fundamento. Está basada sobre las necesidades del hombre, tales como resultan de los diferentes fines racionales a que tiende por su desenvolvimiento. Cada hombre, cualquiera que sea su vocación, o el fin a que aspira, bien sea religioso, científico, o industrial, &c., debe tener una propiedad proporcionada a sus necesidades, que resultan, por una parte, de su naturaleza humana en general, y por otra, de la vocación particular que ha abrazado⁹².

Munguía observa que esta definición de propiedad coincide con el deber primario de la propia conservación. Si Dios nos ha impuesto la obligación de conservarnos, tenemos un derecho natural a los medios para cumplir este importante deber⁹³. La ley civil puede reconocer y garantizar la propiedad, y aún circunscribirla dentro de

⁹⁰ Antolín C. Sánchez Cuervo, *Krausismo en México*, Morelia, UNAM / Red Utopía, 2003, pp. 53 y 54.

⁹¹ Heinrich Ahrens, *Curso de derecho natural o de filosofía del derecho, completado en las principales materias, con ojeadas históricas y políticas*, México, Librería de A. Bouret e hijo, 1876, p. XIX. La primera edición fue publicada en francés, en 1838.

⁹² Clemente Munguía, *Derecho natural...*, tomo II, pp. 132 y 133.

⁹³ Clemente Munguía, *Derecho natural...*, tomo II, p. 125.

sus justos límites, mas nunca concederla como una gracia del soberano⁹⁴. La expropiación, por lo tanto, sólo es legítima frente a una «utilidad grande y reconocida», declarada constitucionalmente, y «previa la completa y justa indemnización del dueño»⁹⁵. Ahora bien, ¿qué sucede cuando el patrimonio traspasa los términos de la propia necesidad? Munguía responde con un principio bastante vago, que abre las puertas a una concentración industrial de la riqueza: la propiedad tiene toda la extensión que corresponde a «las facultades productoras y su ejercicio, la producción en sus formas, el dominio en su acción»⁹⁶. En otras partes de la obra, sin embargo, Munguía se inclina por la imposición de límites a la acumulación de capital. En el tomo III afirma, por ejemplo, que «la industria debe desenvolverse sin aislar de su interés común el provecho de las masas, progresar sin oprimir». La riqueza excesiva convierte a la industria en un «poder opresor y corruptor al mismo tiempo», que enerva «con el lujo el vigor de las virtudes sociales», e inutiliza «a millares los brazos del menesteroso»⁹⁷. De igual manera, nadie puede pasar por alto los derechos que nacen de una necesidad extrema. Los ricos son «usufructuarios» y «administradores» de un patrimonio común, concedido por Dios a todos los hombres, y tienen frente al pobre, al abandonado, un riguroso deber de socorrerlo en sus necesidades más urgentes⁹⁸.

En lo que hace a los derechos de *libertad e igualdad*, Munguía adopta una posición francamente conservadora, si bien ésta coincide en gran medida con los planteamientos de un liberalismo moderado. En ambos casos, lo que realmente se buscaba no era consagrar el absolutismo, sino ahuyentar el temido fantasma de la democracia jacobina, mediante el establecimiento de una serie de limitaciones a la libertad y al ejercicio de los derechos políticos. Respecto a la primera, Munguía afirma que una libertad ilimitada y absoluta «sólo pertenece a Dios». El ser humano, por el contrario, debe someter su acción a los dictados de la religión y de la ley, pues de otro modo se encontraría expuesto a la depravación que nace de su propia naturaleza. Munguía no se opone al libre desarrollo de las

⁹⁴ Clemente Munguía, *Derecho natural...*, tomo II, pp. 136-137.

⁹⁵ Clemente Munguía, *Derecho natural...*, tomo III, pp. 53 y 54.

⁹⁶ Clemente Munguía, *Derecho natural...*, tomo II, p. 138.

⁹⁷ Clemente Munguía, *Derecho natural...*, tomo III, p. 71.

⁹⁸ Clemente Munguía, *Derecho natural...*, tomo II, pp. 210-212.

ciencias o a la libertad de prensa. Ambas constituyen un derecho natural, y de hecho son imprescindibles para la buena marcha de los negocios públicos, pero su ejercicio debe estar siempre restringido por los intereses superiores de la religión, la moral, la justicia, el orden y la paz⁹⁹. La igualdad absoluta es otro atributo que sólo puede predicarse de Dios. «En la región de los hechos», dice Munguía, «la desigualdad es histórica y tan antigua como el género humano»¹⁰⁰. Pretender que la ley civil repare estas «desigualdades naturales» es una idea verdaderamente «peregrina y ridícula»: una sociedad donde la esposa, el «gañán» o el «labrador» tuvieran los mismos derechos del padre, del médico o del jurisconsulto, «sería cosa de verse»¹⁰¹. A lo más que puede aspirarse, es a que la ley contemple la equidad, la justicia y la recta economía¹⁰².

Al hablar de la igualdad, Munguía hace una afirmación importante: «los derechos políticos siguen a la representación», y ésta «sigue a su basa», que es «la familia y la propiedad»¹⁰³. Munguía no es partidario de la monarquía o la democracia como formas de gobierno. A su juicio, es el *sistema representativo* «el que mejor comprende todas las formas políticas»: «es el resultado práctico y final de todas las edades precedentes y el principio de las instituciones futuras; va con el siglo, y tiene un porvenir»¹⁰⁴. El sistema representativo, a diferencia del democrático, conserva «la unidad, suficiencia y energía del poder ejecutivo», y es respetuoso de la propiedad, las inmunidades, y la «jerarquía de la industria, el comercio y las ciencias». Al mismo tiempo, este sistema permite a la sociedad entera ser partícipe en su propio gobierno, mediante «el ejercicio que ésta hace de su derecho de designar»¹⁰⁵. No estamos entonces frente a una apología reaccionaria de la monarquía absoluta. Munguía defiende la existencia de un gobierno republicano, un gobierno que carece de una «misión personal divinamente comunicada y legíti-

⁹⁹ Clemente Munguía, *Derecho natural...*, tomo II, pp. 45-46, 50-52; también el tomo III, pp. 66-69.

¹⁰⁰ Clemente Munguía, *Derecho natural...*, tomo III, p. 74.

¹⁰¹ Clemente Munguía, *Derecho natural...*, tomo III, pp. 74 y 75.

¹⁰² Clemente Munguía, *Derecho natural...*, tomo III, p. 77.

¹⁰³ Clemente Munguía, *Derecho natural...*, tomo III, p. 76.

¹⁰⁴ Clemente Munguía, *Derecho natural...*, tomo III, p. 183; también el tomo II, p. 297.

¹⁰⁵ Clemente Munguía, *Derecho natural...*, tomo III, pp. 182 y 183.

mamente transmitida, como sucede en la Iglesia»¹⁰⁶. Este sistema representativo es legítimo en tanto respete la constitución social, el principio religioso concretizado en los derechos naturales, y mientras los derechos políticos sean ejercidos por todas las clases de la sociedad, «en razón directa de los intereses que representa cada una en el gran cuerpo de la nación»¹⁰⁷.

Como bien señalan Antonio Annino y Raffaele Romanelli, lo característico de las ideas decimonónicas en materia de representación no radica en su obvia distancia frente al sufragio universal contemporáneo, sino en los esfuerzos que se hicieron para adaptar una sociedad que seguía siendo corporativa y jerárquica, a una serie de instituciones modernas —como la constitución y la legislación electoral— cuya racionalidad estaba organizada a partir del individuo aislado¹⁰⁸. Esto se hace patente en la obra de Munguía. En el *Derecho natural* se insiste que la familia, y no el individuo, es la célula básica del tejido social. «El hombre se radica en sociedad por la familia»; es ésta la que «reconcentra sus ideas, modera sus pasiones, fija sus afectos», y «determina su acción». Sin la familia no hay espíritu público, «intereses radicales», amor al territorio o benevolencia mutua¹⁰⁹. Es por ello que la ciudadanía, esto es, el carácter que distingue públicamente a un miembro de la sociedad civil, está reservada al representante natural de la sociedad doméstica, el jefe de la familia¹¹⁰. En materia política, dice Munguía, el padre y ciudadano es aquel que tiene el derecho pleno de fundar y regir una familia, el hombre «que se gobierna por sí y figura a su propio nombre en la sociedad»¹¹¹. En este sentido, un candidato idóneo se distingue no solamente por sus aptitudes y conocimientos, sino por su arraigo social, manifiesto en su carácter de cabeza de familia, propietario o profesionalista¹¹². Y si este arraigo social es la mejor garan-

¹⁰⁶ Clemente Munguía, *Derecho natural...*, tomo II, p. 250.

¹⁰⁷ Clemente Munguía, *Derecho natural...*, tomo III, p. 188.

¹⁰⁸ Antonio Annino y Raffaele Romanelli, «Premesa», en *Quaderni storici*, 69, a. XXIII, 1988, pp. 675-677; véase también, de Antonio Annino, su ensayo «El voto y el XIX desconocido», en *Istor*, n.º. 17, verano del 2004, pp. 43-59.

¹⁰⁹ Clemente Munguía, *Derecho natural...*, tomo III, pp. 12-13.

¹¹⁰ Clemente Munguía, *Derecho natural...*, tomo III, pp. 21 y 22.

¹¹¹ Clemente Munguía, *Derecho natural...*, tomo III, p. 22.

¹¹² Clemente Munguía, *Derecho natural...*, tomo III, p. 196-198.

tía del patriotismo, es natural que se excluya de los derechos políticos a quienes carecen de preparación, «moralidad» o patrimonio, y en general a todos aquellos miembros del cuerpo familiar cuyos intereses civiles están supeditados al padre o al marido. Munguía considera asimismo que a la hora de votar «los ciudadanos deben distribuirse en clases, y no aglomerarse para el ejercicio del más importante y vital de sus derechos». El voto corporativo en cuanto tal no es condenable: «el mal consistiría, no en que votaran las clases, sino en que este derecho fuese exclusivo sólo de algunas»¹¹³.

Este largo repaso que hemos dado al pensamiento constitucional de Munguía nos muestra que su doctrina y sus postulados —al menos en materia política— no coinciden totalmente con los de la reacción católica europea. Sus ideas acerca de la legitimidad política, la restricción del sufragio o los derechos del hombre, se acercan mucho más a las de otros publicistas mexicanos de su época, liberales y conservadores por igual¹¹⁴. El carácter verdaderamente polémico de toda su obra, y el que le consagró como paladín intelectual de la reacción, nace de su defensa de los derechos y libertades de la Iglesia. Lo curioso del caso es que el constitucionalismo mexicano no nació como un programa político secular, ajeno a la tradición católica mexicana. Todas las constituciones partían de una invocación a Dios y reafirmaban expresamente la identidad católica de la

¹¹³ Clemente Munguía, *Derecho natural...*, tomo III, pp. 200 y 201. Es probable que Munguía haya tomado esta idea de la escuela krausista, o bien pudo haber tenido en mente la Ley del 27 de enero de 1846, redactada por Lucas Alamán. De acuerdo con esta ley, el Congreso se constituiría por 160 diputados, representantes de la propiedad rústica y urbana, la minería, la industria manufacturera, las profesiones literarias, la magistratura, la administración pública, el clero y el ejército. Al respecto, véase Daniel Moreno, «Un Congreso extraordinario de tipo corporativo (1846)», en *Revista de la Facultad de Derecho*, núm. 114, septiembre-diciembre de 1979, pp. 981-1000.

¹¹⁴ En el mismo sentido, Beatriz Urías comenta que «los primeros liberales coincidieron con los conservadores en una serie de puntos fundamentales. Primero, el rechazo a la igualdad como principio de gobierno y de organización social, que en ambos se manifestó como una tendencia a la restricción del sufragio. Segundo, la idea de que la propiedad era la base para la participación en la vida pública». *Historia de una negación: la idea de igualdad en el pensamiento político mexicano del siglo XIX*, México, UNAM, 1996, p. 140.

nueva nación. Es posible afirmar incluso que estos fundamentos católicos de la cultura mexicana fueron los que permitieron «articular las estructuras mentales de la sociedad en torno al nuevo constitucionalismo»¹¹⁵. El mismo Munguía sostenía firmemente que la religión es «el único poder capaz de hacer entrar en su círculo inmenso» a «todos los elementos morales de un pueblo», y la Iglesia la única institución capaz de «imprimir un movimiento regular, progresivo y estable al espíritu nacional»¹¹⁶. Pocos liberales hubieran disentido de esta afirmación, y prueba de ello era su deseo de intervenir activamente en la marcha de los negocios eclesiásticos. ¿En dónde se encuentra, pues, el rasgo distintivo de la obra que estamos comentando?

4. *La Iglesia, societas perfectas supernaturalis*

México nació a la vida independiente como un estado soberano donde la religión católica, apostólica y romana sería la única, «sin tolerancia de otra alguna». Soberanía y catolicismo aparecían en el Plan de Iguala como dos ideales que podrían fácilmente coexistir, y en aquel entonces a nadie le parecía concebible un divorcio entre las potestades secular y religiosa, tal como de hecho sucedió a partir de la reforma liberal. Las dificultades, sin embargo, comenzaron a manifestarse ya en octubre de 1821, cuando a pregunta expresa de Iturbide, el arzobispo de México y su cabildo declararon que el patronato eclesial, concedido por la Santa Sede a los reyes de España, había cesado con la Independencia¹¹⁷. Este asunto del patronato

¹¹⁵ Antonio Annino, «El primer constitucionalismo mexicano, 1810-1830», en Marcello Carmagnani, Alicia Hernández y Ruggiero Romano (coords.), *Para una historia de América. III. Los nudos 2*, México, El Colegio de México / FCE, 1999, p. 188.

¹¹⁶ Clemente Munguía, *Derecho natural...*, tomo III, p. 210.

¹¹⁷ Marta Eugenia García Ugarte, «Tradición y modernidad (1810-1840)» en Renée de la Torre, Marta Eugenia García Ugarte y Juan Manuel Ramírez (comps.), *Los rostros del conservadurismo mexicano*, México, CIESAS, 2005, p. 50. El *derecho de patronato* es una vieja institución canónica. En su sentido original, este derecho de presentar ministros idóneos para la Iglesia se otorgaba a todo aquel que, a su costa, hubiera erigido y dotado iglesias en zonas ganadas para el cristianismo. Concedido a la Corona

generó innumerables discusiones y antagonismos, toda vez que los primeros gobiernos nacionales asumieron que el nuevo Estado había heredado este derecho de su antecesor, como una prerrogativa inherente a su soberanía. Frente a estas pretensiones encontradas, y a la espera de un nuevo acuerdo con la Santa Sede, la actitud que prevaleció fue la de buscar fórmulas prácticas de compromiso y cooperación, que permitiesen a la Iglesia convivir con el Estado, sin afectar sus respectivos derechos y ámbitos de competencia. La oposición abierta y frontal sólo llegó a darse en 1833, durante el primer experimento reformista de Valentín Gómez Farías, y el triste final de aquel gobierno —disuelto por el presidente Santa Anna, en respuesta al levantamiento general de 1834— hizo patente que ninguna solución radical o unilateral podría dar feliz término a la disputa.

Lo cierto es que al margen del debate ideológico, el nuevo Estado mexicano sí llegó a ejercer virtualmente el patronato, con la cooperación tácita de cabildos y autoridades eclesiásticas¹¹⁸. Los primeros obispos del México independiente fueron promovidos ante la Santa Sede por el gobierno nacional, y el Estado ejerció no pocas veces el pase sobre los breves, rescriptos y bulas pontificias. La Iglesia toleraba ésta y otras intervenciones en su vida interior, en parte porque no tenía otra alternativa, y en parte porque así quedaba garantizada la unidad católica de la nación y la preeminencia de los valores sociales cristianos. Por desgracia, este escenario de concor-

española en el siglo XVI, ésta fue «amplificándolo y extendiéndolo a competencias progresivamente mayores». A finales del siglo XVIII, el Real Patronato abarcaba una serie muy amplia de facultades «regias», tales como la selección de los candidatos al episcopado, la recaudación de los diezmos, la fijación de los límites de las diócesis, el *pase regio*, los «recursos de fuerza», etc. Alberto de la Hera, «El gobierno de la Iglesia indiana», en Ismael Sánchez Bella, Alberto de la Hera y Carlos Díaz Rementería, *Historia del derecho indiano*, Madrid, Editorial Mapfre, 1992, pp. 251-294.

¹¹⁸ Rosa María Martínez de Codes, «La contribución de las Iglesias locales a la rehabilitación financiera de México. Del compromiso al enfrentamiento, 1824-1854», en *La supervivencia del derecho español en Hispanoamérica durante la época independiente*, México, UNAM, 1998, p. 380; véase también Marta Eugenia García Ugarte, Marta Eugenia García Ugarte, «Tradición y modernidad...» y Brian Connaughton, «La Secretaría de Justicia y Negocios Eclesiásticos y la evolución de las sensibilidades nacionales: una óptica a partir de los papeles ministeriales, 1821-1854», en Manuel Ramos (comp.), *Historia de la Iglesia en el siglo XIX...*, 127-147.

dia y equilibrio no podía durar demasiado. La crítica situación económica del país hizo de la riqueza eclesiástica el medio preferido para solventar las necesidades inmediatas del erario público. El historiador Moisés Guzmán calcula que, tan sólo entre 1836 y 1841, la diócesis de Michoacán proporcionó al gobierno departamental una suma global de 64,155 pesos, equivalentes al cuarenta por ciento de los ingresos decimales para dicho período¹¹⁹. La constante sangría de recursos, obtenidos mediante préstamos, libranzas y contribuciones directas, fue llevando a una reducción drástica de los ingresos eclesiásticos, a la cual debe sumarse un creciente número de restricciones a la enajenación de bienes del clero, la cual no podía hacerse sin licencia expresa del supremo gobierno. Los prelados no opusieron resistencia a estas medidas, hasta que en 1847, en plena guerra con los Estados Unidos, un nuevo gobierno radical, al mando de Gómez Farías, resucitó el viejo proyecto de sanear la hacienda nacional mediante la desamortización de los bienes eclesiásticos¹²⁰. Este momento marcaría el fin del precario equilibrio alcanzado durante los años anteriores.

El 11 de enero de 1847 se publicó una ley que autorizaba al gobierno federal a procurarse hasta 15 millones de pesos «hipotecando o vendiendo en subasta pública bienes de manos muertas», a efecto de hacer posible la defensa del territorio mexicano. Aunque esta ley fue expedida en una situación de emergencia, el cabildo metropolitano y los obispos de Michoacán, Guadalajara y Puebla no tardaron en elevar sus airadas protestas al gobierno. Según el obispo michoacano, Juan Cayetano Gómez Portugal, lo que estas representaciones buscaban no era conservar intacta la riqueza de la Igle-

¹¹⁹ Moisés Guzmán Pérez, *Las relaciones clero-gobierno en Michoacán durante la administración episcopal de Juan Cayetano Gómez de Portugal, 1831-1850*, tesis para obtener el grado de maestro en Historia, México, UNAM, 1998, p. 139. Mi cálculo de los ingresos decimales entre 1836 y 1841 es aproximado. A principios de la década de los treinta, la diócesis percibía 130,000 pesos anuales por este concepto. En 1833, sin embargo, se suprimió la coacción civil para el pago de diezmos. Según Munguía, esta reforma provocó que la renta decimal disminuyera a una quinta parte de lo que antes producía (véase nota 171). Así, *caeteris paribus*, la diócesis debió haber percibido cerca de 156,000 pesos en el período apuntado.

¹²⁰ Faustino A. Aquino, «La postura oficial del clero mexicano ante el decreto de incautación de bienes eclesiásticos del 11 de enero de 1847», en *Historias*, 35, Octubre 1995-Marzo 1996, p. 106.

sia. Ésta ya había contribuido en numerosas ocasiones al sostenimiento del Estado y de todos los necesitados, y en esta ocasión no faltaría a sus deberes con la patria. Lo que estaba en juego con la ley del 11 de enero era algo distinto, una verdadera cuestión de principio: el respeto a la soberanía, libertades e independencia de la Iglesia. En efecto, lo que estaba haciendo el gobierno mediante la ley cuestionada no era únicamente allegarse una serie de recursos que le eran indispensables en ese momento. El verdadero problema era que, al ordenarse la intervención de los bienes eclesiásticos, se estaba asumiendo como legítimo un derecho que el Estado no podía tener jamás: el derecho a disponer libremente de los bienes de la Iglesia, sin la anuencia expresa de esta última. Por eso el de Gómez Farías era un decreto «inmoral» e «incendiario», que abría «un cisma en la sociedad» y hacía «estremecer a los propietarios»¹²¹. La ley no llegó a aplicarse, pues el imprescindible Santa Anna la derogó el 27 de marzo, pero los términos de la futura disputa entre la Iglesia y el Estado ya estaban anunciados. No es de sorprender, por tanto, que en julio de 1847 el mismísimo Pío IX dirigiese al obispo Gómez Portugal una efusiva carta de agradecimiento, en recompensa por su celo pastoral y por su sabia e intrépida defensa de «la causa de Dios y de la Iglesia»¹²².

Nuestro rector del seminario de Morelia, don Clemente de Jesús Munguía, fungía por aquellas fechas como canónigo, provisor y vicario general del obispado de Michoacán. En el ejercicio cotidiano de dichas funciones, y en su calidad de representante de la diócesis frente al gobierno federal (durante abril y mayo de 1847), Munguía pudo constatar de primera mano la progresiva disminución del patrimonio eclesiástico y la cada vez mayor voracidad del Estado mexicano. Es comprensible, entonces, que una de sus mayores preocupaciones intelectuales consistiera en dar un soporte teórico a la postura asumida por el obispo Gómez Portugal en su protesta contra la ley del 11 de enero. La tarea no era sencilla: había que sostener a cualquier costo la independencia jurídica de la Iglesia, sin lle-

¹²¹ Moisés Guzmán, *Las relaciones clero-gobierno en Michoacán...*, pp. 221-227.

¹²² Marta Eugenia García Ugarte, «Modelo de vida episcopal: Juan Cayetano Gómez de Portugal Solís. Obispo de Michoacán (1783-1850)», en Manuel Ramos (coord.), *Camino a la Santidad, siglos XVI-XX*, México, Con-dumex, 2003, pp. 391-392.

gar a proponer la separación absoluta del Estado. Y al hacerlo, tenía que superar costumbres y tradiciones que venían de tiempos coloniales, y que atribuían al Estado una incuestionable potestad para regular el funcionamiento administrativo y económico de la Iglesia, aún sin la aquiescencia de la Santa Sede. En otras palabras, se trataba de hallar nuevos fundamentos para una relación que venía de antaño; fundamentos que debían ser acordes al espíritu de los tiempos, salvaguardando los derechos legítimos de la Iglesia frente a la invocación de «conjeturas históricas» y «tradiciones interrumpidas». Munguía encuentra este asidero, nuevamente, en el paradigma ilustrado del derecho natural, aunque recurre también —contra toda coherencia doctrinaria— a la escuela histórica alemana y a los escritos de un gran pensador liberal mexicano, Juan Bautista Morales.

Apuntamos antes que Munguía cita en numerosas ocasiones a Jakob Anton von Zallinger, un jesuita alemán del siglo XVIII. Este dato nos ofrece una pista interesante. El padre Zallinger fue profesor de derecho canónico en la universidad de Augsburgo por casi treinta años, y también se desempeñó como consejero en asuntos germánicos del papa Pío VII¹²³. Su obra principal, *Institutionum juris naturalis et ecclesiastici publici*, publicada por vez primera en 1784 y reimpresa en Roma en 1832, se enmarca en una corriente canonística denominada *derecho público eclesiástico*. Esta corriente, de marcado carácter apologético, perseguía una fundamentación «neutra» del derecho canónico, precisamente a partir de categorías del derecho natural racionalista. Así, adoptando los principios de Grocio y Puffendorf, esta escuela afirmaba que «la Iglesia no era una sociedad en sentido impropio, invisible, ajurídica, imperfecta, sometida a la jurisdicción estatal; sino una sociedad perfecta, soberana en su orden, independiente y autónoma, capaz de dictar verdaderas normas jurídicas para la consecución de su fin social»¹²⁴. Siendo una sociedad jurídica perfecta —añaden los autores de esta escuela— la Iglesia es también una institución de origen divino, cuyas metas,

¹²³ Michael Ott, «Jacob Anton Zallinger zum Thurn», en <http://www.newadvent.org/cathen/15745d.htm>

¹²⁴ Javier Hervada y Pedro Lombardía, *El derecho del pueblo de Dios. Hacia un sistema de derecho canónico*, I, Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1970, p. 201. Véase también Carlos Salinas Aráneda, «Una aproximación al derecho canónico en perspectiva histórica», en *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos*, XVIII, 1996, pp. 329 y 330.

funcionamiento y características no están sujetas a la arbitrariedad propia de los pactos y leyes humanas. Las autoridades eclesiásticas, al igual que las estatales, ejercen su autoridad con una triple potestad, legislativa, judicial, y ejecutiva, pero al hacerlo se orientan exclusivamente por los fines y reglas dispuestos por su Divino Fundador¹²⁵.

La sección sexta de la tercera parte del *Derecho natural* de Munguía comienza asentando una serie de principios que coinciden puntualmente con los postulados por la escuela del derecho público eclesiástico. La Iglesia, dice Munguía, reúne los «cuatro atributos constitutivos» de una sociedad visible, esto es, un «conjunto de individuos, relaciones mutuas, leyes y gobierno». Estos elementos se manifiestan en una comunidad de fieles que profesan una misma fe y participan de los mismos sacramentos, ligados entre sí por «relaciones íntimas y esenciales», sujetos al Evangelio y al «gran cuerpo de las leyes canónicas unánimemente obedecidas en la Iglesia universal», y gobernados por una «jerarquía santa y gloriosa, que se nos muestra en el gran cuerpo del sacerdocio católico»¹²⁶. Al ser una verdadera sociedad, visible y perfecta, la Iglesia tiene un Derecho propio que no puede confundirse con aquél de la sociedad civil: los católicos «ven en la Iglesia una institución divina, en la cual permanecen bajo el doble influjo de la ley cristiana y de su libertad propia»; y por ello «ningún gobierno humano puede atentar contra la sociedad que ellos forman, y a [la] que espontánea y libremente permanecen sometidos»¹²⁷. En síntesis, la Iglesia es una sociedad independiente y soberana «por su misma constitución»; «tiene su derecho de dar leyes, ejecutarlas y aplicarlas», así como «su erario peculiar y el dominio pleno que corresponde a la propiedad», y conserva por derecho cuanto «puede ser visto como elemento necesario de régimen, conservación y perfección»¹²⁸. A estas conclusiones puede llegar cualquiera «que usa bien del criterio histórico y político», aún «prescindiendo de toda religión»¹²⁹.

¹²⁵ Alberto de la Hera y Charles Munier, «Le Droit public ecclésiastique à travers ses définitions», en *Revue du Droit Canonique*, tomo XIV, no. 1, marzo de 1964, pp. 48-50.

¹²⁶ Clemente Munguía, *Derecho natural...*, tomo IV, pp. 195-196.

¹²⁷ Clemente Munguía, *Derecho natural...*, pp. 198 y 201.

¹²⁸ Clemente Munguía, *Derecho natural...*, p. 204.

¹²⁹ Clemente Munguía, *Derecho natural...*, p. 201.

Una vez asentados estos principios, Munguía procede a describir la constitución y gobierno de la Iglesia, aunque a partir de aquí su fuente ya no es la escuela de Zallinger, sino el *Manual de Derecho eclesiástico de todas las confesiones cristianas*, de Ferdinand Walter. Este canonista alemán, laico, fue profesor de jurisprudencia en la Universidad de Bonn desde 1822 hasta 1875, labor a la que añadió una intensa actividad política¹³⁰. Como docente e intelectual, Walter se distinguió por sus críticas a la intervención estatal en la vida eclesiástica, y por su tenaz defensa del primado jurisdiccional y doctrinal del Papa. Ambas posiciones, para ir más allá de un argumento meramente político, debían hallar su anclaje en la ciencia del derecho canónico, entendiendo ésta como algo más que una serie de máximas abstractas, inferidas apriorísticamente por la razón. El método de Walter recoge en su lugar las preocupaciones de la «escuela histórica alemana», centrada en la búsqueda del «Derecho efectivamente vivido», el radicado en el *Volksgeist*, el «espíritu del pueblo»¹³¹. A esta escuela le preocupaba el Derecho en cuanto es contingente, mudable e histórico, mas no con la finalidad de consagrar prácticas del pasado, sino al contrario: el estudio histórico de las instituciones permitiría apreciar su origen y razón de ser, haciendo así posible la distinción entre el verdadero derecho, el basado en los principios fundamentales de la Iglesia, y aquéllas costumbres y máximas «que pertenecen a otro orden de cosas, y que hace tiempo se hallan abandonadas y en desuso»¹³². No es difícil imaginar cuáles son las prácticas que, a juicio de Walter y Munguía, se ubicaban en uno y otro campo.

A lo largo de varios capítulos, Munguía enumera una serie de facultades y derechos que emanan directamente de la constitución

¹³⁰ Michael Ott, «Ferdinand Walter», en <http://www.newadvent.org/cathen/15543b.htm>; Carlos Salinas Araneda, «Los textos utilizados en la enseñanza del Derecho canónico en Chile republicano», en *Anuario de Historia de la Iglesia*, X, Universidad de Navarra, 2001, p. 266; y Carlo Fantappiè, *Introduzione storica al diritto canonico*, Bologna, Il Mulino, 2003, p. 198.

¹³¹ Javier Hervada y Pedro Lombardía, *El derecho del pueblo de Dios...*, pp. 203-206.

¹³² Ferdinand Walter, *Manual de Derecho Eclesiástico de todas las confesiones cristianas*, Madrid, Imprenta de la Sociedad Literaria y Tipográfica, 1845, p. XI.

de la Iglesia, y que por lo mismo corresponden exclusivamente a esta última. En principio, la Iglesia tiene una jurisdicción plena «en la conservación y enseñanza de la doctrina, en la distribución de la gracia por medio del sacrificio, los sacramentos y la práctica solemne del culto, y en la disciplina general y particular establecida y conservada por medio de los fieles»¹³³. Esta jurisdicción plena se ejerce por las distintas autoridades que conforman la jerarquía eclesiástica, y en particular por los obispos y el Papa. A los primeros corresponde la autoridad legislativa en los negocios de su diócesis, la enseñanza dogmática de los fieles, el derecho a conceder dispensas, la jurisdicción contenciosa y disciplinaria en lo espiritual, la vigilancia sobre los institutos eclesiásticos, «la formación, empleo y distribución» del clero, la administración de los bienes de la Iglesia y la recaudación de sus rentas¹³⁴. El vicario y provisor Munguía no deja lugar a dudas respecto a este último punto, adelantando así una de las mayores polémicas de su obispado:

Corresponde por lo mismo al gobierno eclesiástico el derecho de exigir los diezmos y primicias, los réditos de los capitales pios, o estos mismos, determinar las obvenciones que llaman parroquiales, según las circunstancias, los tiempos y las costumbres establecidas; vindicar la renta y propiedad eclesiástica y defenderla de los ataques que se las hagan; distribuirla, por último, en sus respectivos objetos de aplicación¹³⁵.

Munguía atribuye al Pontífice romano la supremacía de la jurisdicción eclesiástica. En falta de concilios ecuménicos, es el Papa la única autoridad universal para la Iglesia, y el garante de «la conservación de la unidad del dogma y de la moral». Sus facultades incluyen la institución y supresión de fiestas generales, la dirección suprema de las misiones, la potestad para convocar concilios ecuménicos, las beatificaciones y canonizaciones, la autorización de órdenes religiosos y el establecimiento de estudios superiores eclesiásticos «que pretenden gozar de autoridad universal científica en la Iglesia». Tiene asimismo el derecho a sentenciar en última instancia, y a intervenir aún en asuntos estrictamente locales, tales

¹³³ Clemente Munguía, *Derecho natural...*, tomo IV, pp. 236 y 237.

¹³⁴ Clemente Munguía, *Derecho natural...*, tomo IV, pp. 255 y 278

¹³⁵ Clemente Munguía, *Derecho natural...*, tomo IV, p. 279.

como la «confirmación, traslación y deposición de obispos, la erección, traslación, unión y división de obispados, las absoluciones y dispensas de orden superior». Citando a Walter, Munguía afirma que varios de estos derechos estaban anteriormente radicados en autoridades intermedias, como los metropolitanos, los concilios provinciales y los patriarcas, pero «fueron atribuyéndose a los Papas a medida que el desarrollo de la constitución eclesiástica pedía mayor concentración en los negocios»¹³⁶. El ultramontanismo de Munguía (y de Walter) no supone sin embargo la entronización de un déspota:

Es pues el Papa la primera autoridad en la Iglesia, que de nadie depende, y a nadie sino a Dios y a su conciencia debe dar cuenta de su administración. Pero su dignidad le impone la ley de usar de su poder como un padre tierno y sólo en beneficio de la cristiandad. Son lícitas, por consiguiente, las quejas humildes contra su administración, y hasta la resistencia interior en caso de una injusticia notoria¹³⁷.

Una cuestión bastante difícil y polémica era la relacionada con el «poder temporal» de los Pontífices. En México, «ultramontano» era en gran medida un insulto político, pues además de referirse genéricamente a un poder extralimitado de los Papas, se asociaba con el breve apostólico *Etsi iam diu* (1824), en el que León XII había condenado las guerras independentistas americanas. En su formulación más extrema, la de Joseph de Maistre, el ultramontanismo postulaba un orden internacional de monarcas temporales, soberanos y absolutos, sometidos únicamente a la infalible autoridad espiritual del sucesor de Pedro¹³⁸. Munguía no aborda este tema en su *Derecho natural*, pero hizo explícita su posición en un *sermón de acción de gracias*, predicado en la Catedral de Morelia el 30 de junio de 1850, con motivo del regreso de S.S. Pío IX a Roma. En dicho sermón, Munguía no presenta al Papa como el único contrapeso de una divina monarquía absoluta, tal como había hecho De Maistre. Para nuestro sacerdote michoacano, la «santa religión» es «amiga de todas las sociedades bajo cualquiera de sus formas legítimas»,

¹³⁶ Clemente Munguía, *Derecho natural...*, tomo IV, p. 251.

¹³⁷ Clemente Munguía, *Derecho natural...*, tomo IV, p. 250.

¹³⁸ Antonio Truyol y Serra, «Presentación», en Joseph de Maistre, *Consideraciones sobre Francia*, Madrid, Editorial Tecnos, 1990, pp. XIV y XV.

sean monárquicas o republicanas¹³⁹. No es una teocracia universal la que Munguía tiene en mente. En lo que sí insiste, es en la necesidad de conciliar los mandamientos de Dios con las leyes humanas, pues al ignorar los primeros sólo se consiguen «oposiciones en las ideas, choques en los intereses y anarquías en la sociedad»¹⁴⁰. El poder temporal que ejercen los Papas en los Estados Pontificios, dice Munguía, es una «institución providencial», en tanto sirve de expresión concreta, modelo y «representación social» de este ideal católico, una institución que se ha mantenido a través de los siglos porque concilia la soberanía del Estado con la plenitud del principio religioso:

¿Cuál es, pues, católicos, la garantía permanente del orden en la sociedad moderna? Una institución visible, constante, donde veamos la esencia física, la reunión actual de los elementos constitutivos de una sociedad, una, universal, verdadera, justa, ordenada, constituida en suma; una institución donde soberanamente, esto es, con la plenitud interior y exterior de la independencia y de la libertad social, viva y reine el principio católico y el elemento de la unidad política. ¿Dónde hallar esta institución? [...] En la doble representación de esa silla que pasa alternativamente del Vaticano a San Pedro: allí está, y no puede estar en otra parte¹⁴¹.

Al cabo de esta exposición de los cimientos jurídicos de la Iglesia, el Estado no conserva ningún derecho importante, y sí un cúmulo de obligaciones frente a la comunidad eclesial. Munguía menciona estos deberes en el *Derecho natural*, y desarrolla ampliamente su contenido en un breve tratado sobre *El culto, considerado en sí mismo y en sus relaciones con el individuo, la sociedad y el gobierno* (1847). El punto de partida, por extraño que parezca, es la libertad de conciencia. La religión, dice Munguía, «no tiene otro poder que el de la verdad, ni otro camino, para dominar la creencia y sostener

¹³⁹ Clemente Munguía, «SERMÓN de acción de gracias. Predicado en la Santa Iglesia Catedral de Morelia, en la solemne función que se hizo el 30 de junio de 1850, con motivo del regreso de N. SS. P. Pío IX a Roma», en *Sermones del Arzobispo de Michoacán, Doctor Don Clemente de Jesús Munguía*, México, Imprenta de Mariano Villanueva, 1864, p. 400.

¹⁴⁰ Clemente Munguía, «SERMÓN de acción de gracias...», p. 406.

¹⁴¹ Clemente Munguía, «SERMÓN de acción de gracias...», p. 409.

los espíritus, que el del convencimiento de su carácter divino y la persuasión íntima de que fuera de ella no puede encontrarse la felicidad»¹⁴². El Estado, por lo tanto, no puede imponer una religión a sus súbditos, y si olvidando este principio los gobiernos temporales intentasen «avasallar la conciencia» o pronunciarse «sobre la validez o nulidad de los actos jurisdiccionales o ministeriales del sacerdocio, su acción sería heterogénea, tiránica y aún ridícula»¹⁴³. Los fieles conservan así una libertad esencial frente al Estado, y éste se encuentra obligado en todo momento a respetar la autonomía y derechos de su comunidad. Este principio se deriva de la propia ley natural: siendo la Iglesia una sociedad visible, «el poder temporal no puede rehusar al espiritual cuanto por Derecho de gentes un Estado político debe conceder a otro Estado». La comunidad y los fieles, a fin de cuentas, actúan en el mundo como una sociedad constituida, integrada por hombres y ciudadanos. Negarles sus derechos civiles y políticos supone un atentado a los principios elementales de la constitución social. Esto es particularmente notorio tratándose de la propiedad:

Para negar la propiedad de los bienes del clero es necesario negar a la Iglesia su carácter social, a una sociedad constituida su soberanía y su independencia, a ésta y aquélla su dominio sobre las cosas que legítimamente le son transmitidas, a los eclesiásticos su naturaleza de hombres, a los propietarios su facultad libre de disponer, a la propiedad sus ideas esenciales y constitutivas; es necesario pasar por todo y sobre todo¹⁴⁴.

Ahora bien, abogar por la independencia eclesiástica no implica necesariamente sostener la indiferencia estatal en materia de religión. Es claro que Munguía no comulgaba con el ideal de «una Iglesia libre en un Estado libre». Al contrario, nos aclara, la Iglesia «se interesa mucho en la eficaz cooperación de la magistratura temporal». Sin ser esencial, ésta es útil y conveniente, pues contribuye sobremanera «a

¹⁴² Clemente Munguía, *Del culto considerado en sí mismo y en sus relaciones con el individuo, la sociedad y el gobierno. O sea, tratado completo de las obligaciones para con Dios*, Morelia, Imprenta de Ignacio Arango, 1847, p. 344.

¹⁴³ Clemente Munguía, *Derecho natural...*, tomo IV, p. 209.

¹⁴⁴ Clemente Munguía, *Derecho natural...*, tomo IV, p. 325.

conservar el orden y mejorar las costumbres»¹⁴⁵. En ausencia de un concordato entre ambas potestades, esta «cooperación» del Estado habría de regirse por un principio político elemental, acorde a la realidad sociológica del país: un pueblo *exclusivamente católico*, como el mexicano, merece por derecho un gobierno católico, respetuoso y protector de la Iglesia. Munguía revela a partir de aquí su interés por conservar la intolerancia religiosa, uno de los pilares que sostenían la relación entre la Iglesia y el Estado en México. En virtud de ella, el Estado se comprometía a proteger el ejercicio del culto católico, mediante «leyes sabias y justas», y a impedir el establecimiento de cualquier otra fe. Esta intolerancia religiosa, recogida por todas las constituciones mexicanas, mantenía vigente, en pleno siglo XIX, una noción medieval del soberano, representado como el defensor de la ortodoxia y el primer responsable ante Dios por la salvación de su pueblo. Munguía no invoca expresa o veladamente esta noción, pues el asumirla en su integridad supondría darle cabida a la reivindicación del patronato e incluso a pretensiones legitimistas. En su lugar sugiere, más astutamente, una serie de razones «modernas» para justificar la permanencia del catolicismo como religión de Estado. Así, para sorpresa de propios y extraños, Munguía funda su defensa de la intolerancia religiosa en los argumentos utilitarios de Juan Bautista Morales, el célebre periodista, abogado y ministro de la Suprema Corte, a quien muchos liberales «puros» reputaban como uno de los héroes de su causa¹⁴⁶.

En el México independiente, la propuesta de introducir la tolerancia de cultos tuvo resonancia en tanto fue asociada al interés por aumentar la inmigración extranjera. El colono europeo, preferentemente anglosajón, era visto por muchos criollos como el antídoto a la escasez de habitantes y a la degeneración social del país: el inmigrante sería un misionero de la modernidad, «embebido de un amor sin descanso por el trabajo», respetuoso de la autoridad y ejemplo de responsabilidad cívica¹⁴⁷. Esta panacea, a decir de algunos liberales,

¹⁴⁵ Clemente Munguía, *Derecho natural...*, tomo IV, p. 203 y 204.

¹⁴⁶ Sobre Juan Bautista Morales, véase el ensayo de Rubén Ruiz Guerra, «Los dilemas de la conciencia: Juan Bautista Morales y su defensa liberal de la Iglesia», en Manuel Ramos (comp.), *Historia de la Iglesia en el siglo XIX...*, pp. 411-422.

¹⁴⁷ Dieter George Berninger, *La inmigración en México (1821-1857)*, México, Sep/Setentas, 1974, pp. 184 y 185.

no podría realizarse si el gobierno no garantizaba previamente la tolerancia religiosa. Ésta era conveniente, pues, no por su adecuación a una libertad humana elemental, sino por la gran *utilidad* que su introducción podía reportar a la economía y la cultura mexicanas. Abierto opositor a estos proyectos, Juan Bautista Morales publicó en 1833 una breve *Disertación contra la tolerancia religiosa*, organizada precisamente a partir del criterio de la utilidad. Para Morales, la obligación moral de aceptar la tolerancia de cultos estaba en función de las circunstancias concretas de cada pueblo. No era lo mismo introducirla en Estados donde históricamente habían coexistido cultos diversos, a proponerla para un país religiosamente «homogéneo», «católico puro», como México¹⁴⁸. En este último caso, la introducción de cultos «falsos» sólo traería discordias y apostasías, arriesgando de este modo la estabilidad social y la unidad religiosa de la nación, dos bienes cuyo valor sobrepasaba ampliamente a las ventajas económicas que pudiera traer consigo la llegada de inmigrantes extranjeros.

Munguía, al igual que Morales, afirma que la intolerancia religiosa es tiránica y antisocial cuando se impone a un pueblo en cuyo seno se profesan cultos distintos. En una situación así, la tolerancia civil no es «solamente un derecho del pueblo y una obligación del gobierno, sino una de las primeras garantías que deben quedar sólidamente consignadas en la constitución política del Estado»¹⁴⁹. La autoridad temporal, atenta al interés de la justicia, estará siempre obligada a favorecer a la única religión verdadera, la católica, mas debe hacerlo sin traspasar los límites de su poder. El avance de la fe no hace menos reprobables «la opresión de los súbditos, el odio del gobierno y el desconcierto de la sociedad»¹⁵⁰. Sin embargo, «cuando no hay más que una religión en el Estado y ésta es la católica, la cuestión cambia absolutamente de aspecto, y por lo mismo la intolerancia civil es uno de los primeros deberes del Gobierno»¹⁵¹. La tolerancia de cultos pone fuera de la inspección del sacerdocio «las doctrinas, las máximas y la conducta», y al hacerlo revierte contra el Estado «las tristes y funestas consecuencias del desenfreno en la discusión». El «mal ejemplo» de los libertinos y la «lectura de los

¹⁴⁸ Juan Bautista Morales, *Disertación contra la tolerancia religiosa*, México, Imprenta de Galván a cargo de Mariano Arévalo, 1833, p. 22.

¹⁴⁹ Clemente Munguía, *Del culto...*, p. 362.

¹⁵⁰ Clemente Munguía, *Del culto...*, pp. 349 y 362.

¹⁵¹ Clemente Munguía, *Del culto...*, p. 368.

libros irreligiosos» terminan siempre, inevitablemente, en la prostitución de la sociedad y el derrocamiento de los gobiernos. Un pueblo católico, entonces, merece un gobierno que rinda honores y protección al sacerdocio, impidiendo la proliferación de «discursos, escritos o actos» que tiendan a poner en riesgo la supremacía y «unidad del culto verdadero»¹⁵². Munguía formula con precisión los términos de este *derecho* de la Iglesia mexicana:

El derecho de la Iglesia, derivado inmediatamente de las conquistas evangélicas, se extiende tanto como el número de los fieles que se han incorporado en su grey; y pues [como] en el caso presente este número corresponde con exactitud a la íntegra extensión del Estado, la Iglesia tiene un derecho incuestionable para regir exclusivamente a todo el Estado en el orden religioso, y por consiguiente, el Gobierno tiene un deber de apoyar con su autoridad, proteger con su influjo y respetar en su justicia el ejercicio pleno, libre y universal de este derecho¹⁵³.

Independencia sin separación, libertades para la Iglesia e intolерancia religiosa: he aquí la aspiración esencial de Munguía. Esta aspiración era legítima, a su modo de ver, en tanto se ajustaba a los principios del derecho natural, al sano criterio de la razón y a las circunstancias históricas del pueblo mexicano. Negarle a la Iglesia sus libertades o su preeminencia social, no era más que una pretensión tiránica y violenta, a la que todo católico debía resistirse. Estas ideas hubieran podido quedarse en una mera expresión académica, novedosa y radical si se quiere, de una corriente intelectual al interior de la Iglesia mexicana. Pero estaban llamadas, al igual que su autor, a jugar un papel crucial en los años cincuenta y sesenta del siglo XIX, un momento en que la Iglesia reclamó con mayor energía que nunca su autonomía frente al Estado.

5. *Y el Verbo se hizo carne (Jn 1, 14)*

Clemente Munguía fue nombrado obispo de Michoacán en el consistorio papal del 3 de octubre de 1850, a propuesta de su cabil-

¹⁵² Clemente Munguía, *Del culto...*, pp. 368, 391, 400, 404 y 414.

¹⁵³ Clemente Munguía, *Del culto...*, p. 395.

do diocesano y del gobierno de la república. Siguiendo un ritual que habían obedecido fielmente todos los prelados mexicanos, Munguía acudió al palacio de gobierno de Morelia el 16 de enero de 1851, a prestar un solemne juramento de obediencia a la Constitución, sin el cual no podría recibir sus bulas ni tomar posesión de su sede. Al escuchar una fórmula que le comprometía a sujetarse a las leyes «que arreglaren el Patronato de la Federación», Munguía respondió con una negativa que sorprendió a todos los asistentes a la ceremonia. Sus palabras de aquella mañana resumen la que sería su actitud invariable al frente de la Iglesia michoacana: no podía jurar, dijo, «porque esta fórmula compromete los derechos y libertades de la Iglesia». El escándalo suscitado por la negativa fue mayúsculo. A los pocos meses, Munguía publicó un manifiesto explicando las razones de su conducta, y el gobierno se vio obligado a aclarar que el derecho de Patronato «se entendía sólo como estaba fijado en la Constitución y las Leyes», es decir, según lo arreglase un futuro concordato con la Santa Sede¹⁵⁴. Una vez eliminadas las dudas de su conciencia, Munguía otorgó el juramento acostumbrado y pudo tomar posesión de su diócesis, siendo consagrado en la catedral de Morelia el 18 de enero de 1852.

El gobierno episcopal de Munguía dio comienzo con un escándalo que no era del todo imprevisible, pues finalmente sus palabras eran coherentes con las ideas que había sostenido como catedrático de jurisprudencia en el seminario. Su labor como obispo, de hecho, se ordenaría a partir de los principios anunciados en los capítulos más polémicos del *Derecho natural*. Esto lo comprendieron bien muchos liberales michoacanos, quienes temieron lo peor al enterarse de los sucesos en el palacio de gobierno. El 16 de abril de 1851, por ejemplo, los miembros del ayuntamiento de Puruándiro dirigieron una larga representación al presidente Mariano Arista, suplicándole que adoptara medidas enérgicas en el «grave negocio del señor Munguía»¹⁵⁵. A su parecer, este siniestro señor no era un sacerdote entregado al «interés espiritual de las almas», sino un político que había buscado sin tregua la victoria de sus «principios anti-republicanos», procurando con sus escritos e influencias «el tras-

¹⁵⁴ José Bravo Ugarte, *Munguía. Obispo y Arzobispo de Michoacán (1810-1868)*..., p. 55.

¹⁵⁵ Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Justicia / Eclesiástico, tomo 112, fs. 351-362.

torno de la cosa pública y la ruina de las instituciones federativas». «Hombre enfermizo, débil y siempre encerrado en las paredes de un colegio», Munguía era sin embargo un grave peligro para la «causa pública». Su falsa mansedumbre cambiaría a la primera ocasión, pues sus «opiniones arraigadas» y sus «compromisos como jefe de partido» no le permitirían «ser obsecuente con los derechos de la Potestad Civil». Por el contrario, «por necesidad tendrá que desarrollar, contra las libertades políticas y contra las reformas que ha menester el país, toda la fuerza del poder mixto que va a recibir y levantará sobre nuestras cabezas las armas espirituales de que podrá disponer». Dejando a un lado las exageraciones, no carecían de un cierto talento profético las autoridades de Puruándiro.

El triunfo de la revolución de Ayutla (1855) llevó al gobierno nacional a una nueva generación de políticos liberales, más radical y combativa que las anteriores, decidida a transformar a México en una república moderna, secular, libre de costumbres e instituciones retrógradas, tales como la propiedad comunal, los fueros especiales, y la omnipresencia social de la Iglesia. Su programa de regeneración social se tradujo en una profunda reforma legislativa, misma que culminó en la Constitución Política de 1857. Encaminada a dismantelar el poder del clero en todas sus manifestaciones, la reforma provocó un alud de escritos y cartas pastorales dirigidas al supremo gobierno. Como observa Laura O'Dogherty, las primeras reacciones de los obispos traslucían «la convicción de que era posible alcanzar un acuerdo con las autoridades»¹⁵⁶. México había sido históricamente un Estado católico, y la renovación nacional podría lograrse —según los prelados más optimistas— sin afectar el marco esencial de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Hubo dos obispos, sin embargo, que no tardaron en adoptar una postura intransigente frente a la reforma liberal: el de Puebla, Pelagio Labastida, quien fue expulsado del país en mayo de 1856, y el «peligroso» pastor de la Iglesia michoacana, don Clemente de Jesús Munguía¹⁵⁷. Entre todos los prelados, Munguía fue por mucho el más prolífico en protestas, y el que expuso con mayor claridad los altos principios

¹⁵⁶ Laura O'Dogherty, «La Iglesia católica frente al liberalismo...»,

¹⁵⁷ Sobre Labastida, Marta Eugenia García Ugarte, «Church and state in conflict: bishop Labastida in Puebla, 1855-1856», en Susan Deans-Smith y Eric van Young, eds., *Mexican Soundings: Essays in Honour of David A. Brading*, en prensa.

e intereses que estaban en juego¹⁵⁸. La legislación reformista, a su juicio, contravenía expresamente los postulados fundamentales del derecho natural, e introducía un cisma entre el gobierno y la «constitución social» del país. La contradicción era palpable:

— La Ley de Administración de Justicia (22 de noviembre de 1855), mejor conocida como «Ley Juárez», atentaba contra el derecho canónico al considerar el fuero eclesiástico como un privilegio que podía ser concedido graciosamente al clero, según el interés de los gobiernos. Al ser la Iglesia una sociedad visible, soberana e independiente, no puede concebirse «sin un poder de dar, ejecutar y aplicar las leyes dentro de los límites de su objeto y según el fin de su institución: luego el derecho de juzgar a sus ministros emana directamente del mismo que la fundó, y no viene de otra parte».

— La «Ley Lerdo» o de Desamortización de Bienes de Corporaciones Civiles y Eclesiásticas, publicada el 25 de junio de 1856, importaba nada menos que «la abolición del derecho de propiedad». En efecto, la ley obligaba a la Iglesia a vender todas sus propiedades inmuebles no directamente relacionadas con el culto divino, e incapacitaba a las corporaciones para adquirir o administrar bienes raíces. Para Munguía, «los bienes que la Iglesia posee son una propiedad suya, independiente de la voluntad de los gobiernos; y el derecho de adquirirlos, conservarlos y administrarlos nace, no de las concesiones del poder temporal, sino de la institución misma, de la razón social de la Iglesia católica». La propiedad corporativa era indispensable para mantener a los ministros del culto; negarle a éstos los medios necesarios para el desempeño de su misión implicaba desconocer un derecho natural, reconocido por todos los «pueblos civilizados».

— La Ley de Obvenciones Parroquiales, o «Ley Iglesias» (11 de abril de 1857), asumía una competencia legítima del Estado en un asunto que concernía solamente a la autoridad eclesiástica: la regulación de las cargas impuestas a los fieles por concepto de bautismos, amonestaciones, matrimonios y entierros. Para colmo, la ley

¹⁵⁸ Las representaciones, decretos y protestas de Munguía contra la reforma liberal se encuentran reunidas en su *Defensa eclesiástica en el obispado de Michoacán*, publicada en México en 1858, por la imprenta de Vicente Segura.

era «innecesaria», toda vez que en su diócesis no se cobraban «derechos ningunos a los pobres de solemnidad, ni en las parroquias, ni en la Secretaría del Gobierno Diocesano».

— La Constitución, por su parte, negaba el «origen divino del poder social», e ignoraba el «notorio» catolicismo de la nación mexicana. Siendo México un país exclusivamente católico, era forzoso que la educación fuese confesional, que hubiese censura para la manifestación y publicación de las ideas, y que se reimplantase la coacción civil para el cumplimiento de los votos religiosos. Asimismo, no era permisible una intervención de los poderes federales en materias de culto y disciplina externa, tal como lo establecía el artículo 123. Por último, la nueva ley fundamental estaba viciada en su origen, pues la convocatoria al congreso constituyente «excluyó al estado eclesiástico del derecho de votar y ser votado, y por lo mismo dejó a la religión y a la Iglesia sin representación legítima en la Cámara constituyente».

Las protestas del obispo Munguía, todas acompañadas de sanciones canónicas a quien obedeciera o jurase la nueva legislación, únicamente lograron radicalizar la postura de los liberales. Y no era para menos. Muchas autoridades pueblerinas de Michoacán y Guanajuato se toparon con una oposición tozuda a la aplicación de las leyes reformistas. Bastan dos ejemplos. Durante la misa mayor de un domingo de 1856, el párroco de Maravatío dio lectura a una carta pastoral de su obispo, en la cual se condenaba la desamortización de bienes eclesiásticos. Ofendido por tal atrevimiento, el subprefecto del lugar mandó arrestar al cura en su misma casa, lo que dio por resultado «que el pueblo se levantase contra las Autoridades, las cuales tuvieron que salir prófugas para evitar que los asesinaran como lo habían intentado»¹⁵⁹. En abril de 1857, un cura de la ciudad de Guanajuato se negó a darle acatamiento a la ley de obvenciones parroquiales, alegando la incompetencia del gobierno estatal en dicha materia. Los términos de su negativa son muy reveladores:

[...] no se ocultará a V.S. que la Santa Iglesia Católica, apostólica, romana, que profesan todos los Mexicanos, es una sociedad soberana e independiente, que tiene por lo mismo un Gobierno perfectamente establecido, tiene sus autoridades legítimas, sus leyes

¹⁵⁹ AGN, Justicia / Eclesiástico, tomo 179, f. 357.

canónicas, en suma, su disciplina general y particular [...] Tales antecedentes confirman que las reformas, en caso de que se crean necesarias, deben venir por acuerdo y por el conducto de la Iglesia, siendo de la autoridad civil sólo el deber de protegerla en cuanto necesite; por estas razones devuelvo a V.S. la ley y circular del 11 y 12 del corriente, que obedeceré y daré cumplimiento siempre que se me comunique por el conducto de mi Diocesano¹⁶⁰.

Manuel Doblado, gobernador del estado de Guanajuato, atribuía la obstinación de los curas a las incendiarias «sugestiones» del obispo Munguía. Este sedicioso prelado predicaba «a voz en cuello la desobediencia a las autoridades y la resistencia a un Gobierno legítimamente constituido», olvidando que «su misión es toda de paz y de caridad». Mientras no se le pusiera un límite, sería prácticamente imposible «reducir a los rebeldes» y darle a las leyes «el acatamiento debido»¹⁶¹. La gravedad de la situación, sin embargo, no se limitaba a las fechorías de unos cuantos curas indisciplinados. Para el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Michoacán, don Manuel Teodosio Álvarez, la actitud asumida por el obispo suponía un ultraje inaceptable a la soberanía de la nación. Lo que sus protestas en realidad estaban disputando, según el magistrado, era una facultad primaria y fundamental, la misma que Munguía ya se había arrogado al escribir su *Derecho natural*. Ésta era la autoridad para definir e interpretar, válidamente, el contenido de las leyes. ¿Podía ser «la delicada conciencia de nuestros pastores» la «base inalterable de la legislación mejicana, de las disposiciones del poder ejecutivo general y particular, y de las sentencias de los tribunales»?¹⁶². En sus *Reflexiones sobre los decretos episcopales* (1857), el magistrado Álvarez niega rotundamente esta posibilidad. Si los obispos tuviesen la facultad de declarar «la licitud o ilicitud de las leyes civiles», estos se convertirían en «legisladores universales», lo cual era un «manifiesto absurdo». «Declarar cuál es el sentido de la Constitución mejicana», añade, corresponde

¹⁶⁰ AGN, Justicia / Eclesiástico, tomo 15, fs. 135 y 137.

¹⁶¹ AGN, Justicia / Eclesiástico, tomo 15, fs. 132 y 139; tomo 181, fs. 475 y 476.

¹⁶² Manuel T. Álvarez, *Reflexiones sobre los decretos episcopales que prohíben el juramento constitucional. Tercera parte, en la que se hacen explicaciones importantes*. México, Tipografía de N. Chávez, 1857, p. 48.

al «Soberano Congreso por interpretación auténtica, y por la usual, es propio del gobierno y de los tribunales superiores». Los furiosos ataques del obispo a la Constitución resultaban ser entonces «una verdadera usurpación de [la] soberanía»¹⁶³. Su brillante alegato concluye con una pregunta dramática:

Y una nación tan fiel, tan franca, tan generosa, ¿merece que sus obispos le anulen su Constitución con un rasgo de pluma, humillen a sus altos funcionarios, les exijan la retractación formal y pública del juramento constitucional que en nada ofende a la religión y a la Iglesia, que es una garantía de la observancia de la ley fundamental, en que fija su suerte actual, su porvenir, su paz y su felicidad?¹⁶⁴

La respuesta era claramente que no. Es más, si el peligro para la patria se encontraba en las ideas revolucionarias de un prelado, era indispensable abortarlas en su origen. Munguía fue desterrado de su diócesis y permaneció confinado en Coyoacán desde 1856 hasta 1860. El propósito de tal medida, sobra decirlo, era impedir que sus instrucciones personales agitasen —aún más— a los curas de Michoacán y Guanajuato. Pero a los liberales les pareció este castigo insuficiente: había que hacer algo con la escuela en la que se enseñaban las peligrosas doctrinas del obispo. El 14 de enero de 1857, el gobierno michoacano retiró el reconocimiento oficial a los estudios de jurisprudencia realizados en las instituciones eclesiásticas, decretando que sólo se reputarían legales los cursos que se hicieren en el primitivo y nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo¹⁶⁵. Dos años más tarde, el 12 de mayo de 1859, las tropas del general Epitacio Huerta ocupaban las majestuosas instalaciones del Seminario Tridentino de Morelia, considerado hasta entonces como uno de los mayores orgullos intelectuales del estado. Su magnífica

¹⁶³ Manuel T. Álvarez, *Reflexiones sobre los decretos episcopales que prohíben el juramento constitucional* (1.^a parte), México, Tip. de N. Chávez y comp., 1857, pp. 4 y 6. Véase también la *Segunda parte, en la que se responde a las objeciones*, México, Tip. de N. Chávez, 1857, pp. 10 y 15.

¹⁶⁴ Manuel T. Álvarez, *Reflexiones sobre los decretos episcopales...*, primera parte, p. 21.

¹⁶⁵ *Recopilación de leyes, decretos, reglamentos y circulares expedidas en el estado de Michoacán. Formada y anotada por Amador Coromina, oficial 4º de la Secretaría de Gobierno. Tomo XIII. De 25 de enero de 1853 a 30 de junio de 1857*, Morelia, Imprenta de los hijos de I. Arango, 1887, p. 60.

biblioteca fue confiscada, sus fondos se aplicaron al colegio civil de San Nicolás, y sus aulas se transformaron en oficinas gubernamentales. Epitacio Huerta justificó la clausura del Seminario como una respuesta merecida a la «insolente audacia» de sus ocupantes:

El colegio Seminario de esta ciudad, uno de los primeros establecimientos del clero en la República, y que tantos intereses tenía creados en su favor fuera y dentro del Estado, después de haber servido en algún tiempo de plantel de ilustración aunque incompleto y vicioso, hacía diez años que se había convertido en un foco permanente de conspiraciones contra la autoridad civil, en el centro de las más audaces maniobras contra la libertad y el progreso, y en la fuente de donde manaban las doctrinas más disolventes y anti-sociales. La celebridad de que gozaban los principales directores de dicho establecimiento le había dado un prestigio inmenso, y muchas veces tuvo la audacia de presentarse frente a frente de la autoridad, desafiándola con insolente audacia¹⁶⁶.

Enemistado con todos los gobiernos liberales, el obispo Munguía pasó a la historia como el cabecilla intelectual de la reacción, su «jefe de partido». Esta acusación no era del todo infundada, pues los mismos conservadores enaltecían al prelado michoacano como uno de los suyos. En una carta fechada el 22 de diciembre de 1851, unos días antes de que don Clemente tomase posesión canónica de su diócesis, el joven Antonio Morán, un miembro notable del partido conservador en Morelia, le comentaba a don Ignacio Aguilar y Marocho su entusiasmo por la consagración del nuevo obispo. Este acontecimiento tan esperado era un suceso muy «grato a los buenos michoacanos, a los buenos católicos, a los buenos amigos del Ilustre Prelado, y a los buenos conservadores»¹⁶⁷. La estima que estos últimos tenían por Munguía se hizo pública cuando el obispo michoacano fue convocado para presidir el Consejo de Estado, un órgano consultivo creado durante la dictadura del general Santa Anna. Poco tiempo después de la muerte del ministro Lucas Ala-

¹⁶⁶ *Memoria en que el C. General Epitacio Huerta dio cuenta al Congreso del Estado del uso que hizo de las facultades con que estuvo investido durante su administración dictatorial, que comenzó en 15 de febrero de 1858 y terminó en 1º de mayo de 1861*, Morelia, Imprenta de Ignacio Arango, 1861, p. 50.

¹⁶⁷ Archivo Condumex, fondo XIX, Carpeta: 2-4, legajo: 162.

mán, acaecida el 2 de junio de 1853, Munguía solicitó una licencia temporal a su cargo público, a fin de atender varios negocios de su diócesis¹⁶⁸. El obispo no regresó al Consejo, pero mantuvo una relación estúpida con el gobierno central, y en particular con el ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos, el conservador Teodosio Lares. Gracias a éste pudo recuperar una hacienda que se encontraba en litigio, asegurar la posesión del antiguo colegio jesuita de San Javier, y dar inicio a nuevos proyectos misioneros en los pueblos indígenas de su jurisdicción¹⁶⁹. Pese a todo, Munguía no cedió en sus pretensiones de mantener a una Iglesia independiente del Estado a cualquier costo.

Uno de los anhelos más caros a todos los gobiernos mexicanos había sido la celebración de un concordato con la Santa Sede, que diera feliz término a la espinosa controversia sobre el patronato. El general Santa Anna, a los pocos meses de iniciar la dictadura, dio instrucciones a su enviado en la corte de Roma para que este acuerdo se celebrase a la brevedad posible. Su gobierno integró asimismo una comisión especial, encargada de discutir cada uno de los asuntos que involucraría el futuro concordato. El delegado apostólico, monseñor Luigi Clementi, apoyaba estos trabajos, pues en su opinión la Iglesia debería relacionarse con el Estado en el marco de una regulación expresa, sin basarse únicamente en «principios abstractos». Su posición, sin embargo, no era compartida por todos los prelados mexicanos. Mientras Clementi sostenía que un concordato era conveniente, necesario y útil, algunos obispos mantuvieron sus reservas, temerosos de que la Iglesia perdiera su libertad e independencia¹⁷⁰. El obispo de Michoacán, en su calidad de Consejero de Estado, fue llamado a participar en las tareas de la comisión. Su juicio al respecto no debe sorprendernos: Munguía hizo todo lo posible por impedir la celebración de un concordato entre el gobierno de Santa Anna y el papa Pío IX. En una carta confidencial, fechada

¹⁶⁸ Carmen Vázquez Mantecón, *Santa Anna y la encrucijada del Estado. La dictadura: 1853-1855*, México, Fondo de Cultura Económica, 1986, pp. 62-65.

¹⁶⁹ AGN, Justicia / Eclesiástico, tomos 19, 169, y 170.

¹⁷⁰ Despacho del delegado apostólico, 1 de agosto de 1853. Archivo de la Congregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, Ciudad del Vaticano (en adelante AA. EE. SS.), Messico, 1851-1861, pos. 165, fasc. 619, fs. 91 y 97.

el 1º de mayo de 1855, Munguía expuso las razones que motivaban su oposición. El concordato nunca se celebró, pues el gobierno de Santa Anna cayó el 9 de agosto de ese mismo año, pero es interesante asomarnos a este documento que hasta la fecha ha permanecido inédito¹⁷¹.

A diferencia de otros escritos suyos, esta carta no invoca principios teóricos, y sí elabora una lectura de la historia mexicana reciente. En opinión de Munguía, México era «por su catolicismo, piedad y religiosidad singular del pueblo, la perla preciosa que la Iglesia tiene en el Nuevo Mundo». Este gran tesoro, por desgracia, se encontraba amenazado. Su situación real presentaba un «cuadro lastimoso»: «incertidumbre radical», «conatos diversos para que Méjico se constituya de algún modo, revoluciones incesantes, triunfos pasajeros, reacciones y caídas: he aquí nuestra historia». En estas circunstancias, la Iglesia había permanecido firme gracias a su independencia de los gobiernos temporales, y a «su dependencia exclusiva de Roma». Munguía cita en su apoyo el tomo V de la *Historia de Méjico* de Lucas Alamán:

En medio de un trastorno tan completo de todos los elementos de la sociedad, lo único que ha permanecido inmutable, es la Iglesia, *esto debido a que ni el Congreso ni el Gobierno* han podido poner mano en su administración, ni en la elección de sus ministros, habiendo resistido los Obispos, con admirable energía, el ejercicio del Patronato. [...] Pudo ser éste útil, cuando los Príncipes *verdaderamente cristianos*, dispensaban a la Iglesia una protección de que tenía necesidad, y ejercían las facultades que el les daba por las fundaciones que habían hecho y bienes con que las habían dotado, pero a fuerza de ensanchar los límites de esa protección, vino a ser una verdadera opresión, y cuando menos, poniendo al Clero bajo la dependencia del Gobierno civil, lo hizo adulator de éste...

En opinión de Munguía, los esfuerzos para restaurar el Patronato respondían a un impulso siniestro, tendiente a «separar a las hijas de la Madre común, esto es, a nuestras Iglesias de la Iglesia de Roma, para devastarlas y perderlas». Impedir esta grave concesión a los «anárquicos Gobiernos» mexicanos era entonces un asunto de «vida y muerte». Para colmo, no había muchas esperanzas de rees-

¹⁷¹ AA. EE. SS., Messico, 1851-1861, pos. 165, fasc. 644, fs. 98-102.

tablecer la coacción civil para el pago de diezmos, eliminada en 1833, y sin la cual había bajado «la renta decimal a una quinta parte de lo que antes producía». La Iglesia perdería mucho celebrando un Concordato, y éste no le reportaría ventaja alguna. No había, por lo tanto, «motivo ninguno que pueda inclinar al Padre común de los fieles a hacer semejante sacrificio». Ni siquiera el apoyo a sus mayores aliados políticos.

Durante la guerra civil (1858-1860), el obispo Munguía permaneció en Coyoacán y la Ciudad de México, controladas por el gobierno conservador. Siendo la protección del clero una de las principales banderas que justificaron el golpe de Estado, el general Félix Zuloaga —cabeza del levantamiento— se apresuró a declarar nula y sin efecto la ley del 25 de junio de 1856, «no sin antes recibir una promesa de la Iglesia de prestarle un millón y medio de pesos»¹⁷². El arzobispo metropolitano, Lázaro de la Garza, llegó a afirmar que el cambio de régimen era un don de la Providencia, un auténtico ejemplo de la misericordia del Cielo hacia los mexicanos¹⁷³. Sus esperanzas no tardaron en ser defraudadas. Los enormes intereses creados por la desamortización, así como las urgentes necesidades financieras del gobierno, pudieron más que los compromisos ideológicos. El 6 de diciembre de 1858, Zuloaga declaró «válidas y subsistentes» todas las ventas convencionales de fincas rústicas y urbanas realizadas con motivo de la ley Lerdo, siempre y cuando las corporaciones eclesiásticas las hubiesen celebrado «con libre y deliberada voluntad, y con sujeción a las reglas y estatutos particulares de cada una de dichas corporaciones»¹⁷⁴. Los términos del decreto fueron aprobados por el arzobispo, pero el delegado apostólico y los obispos Munguía y Vereá protestaron fuertemente contra esta medida del gobierno conservador. En su opinión, este decreto era lesivo de los derechos de la Iglesia por dos razones: en primer lugar, sólo a la Iglesia competía el derecho de administrar sus bienes, derecho que le había sido negado por la ley Lerdo; en segundo, el decreto convalidaba los efectos de una ley que había sido declarada nula e

¹⁷² Jan Bazant, *Los bienes de la Iglesia en México, 1856-1875*, México, El Colegio de México, 1977, p. 147.

¹⁷³ Robert J. Knowlton, *Church Property and the Mexican Reform, 1856-1910*, DeKalb, Northern Illinois University Press, 1976, p. 58.

¹⁷⁴ Archivo Secreto Vaticano (en adelante ASV), Secretaría de Estado (SS), rúbrica 251, año 1859, fasc. 1, f. 133.

injusta por todo el Episcopado. El gobierno debía recordar la máxima asentada en el *Digesto* de Justiniano: «un acto viciado en su origen, no puede convalidarse con el transcurso del tiempo»¹⁷⁵.

Conforme la guerra se iba recrudeciendo, los conservadores se vieron obligados a ocurrir más frecuentemente a los préstamos y bienes eclesiásticos. En octubre de 1859, los obispos rechazaron una propuesta para crear un banco nacional, cuyos fondos saldrían de los «bienes residuales» de la Iglesia. Para no dejar al gobierno a su suerte, algunos prelados propusieron hacerle un nuevo empréstito, mismo que serviría para sostener la campaña del general Miramón en Veracruz. El obispo Clemente Munguía se opuso al otorgamiento de este préstamo millonario, pues para obtener los fondos líquidos sería necesario hipotecar el patrimonio de algunas iglesias. Esta acción constituía un «negocio eclesiástico extraordinario de la mayor gravedad e importancia»; por lo mismo, era indispensable consultar el parecer del Pontífice romano, a quien correspondía tomar la última decisión en estas materias¹⁷⁶. Es curioso que unas semanas antes de esta reunión episcopal, Santos Degollado le asegurase a Manuel Doblado «que la miseria y la más abierta discordia destrozan el seno de la reacción». Según Degollado, y no sin cierta ironía, el obispo Munguía se había vuelto liberal, «quizá poniendo la vista en el arzobispado» de México¹⁷⁷. Sea lo que fuere, los dineros y alhajas de la Iglesia no pudieron impedir la derrota de los ejércitos conservadores. El presidente Benito Juárez entraba a la capital de la república el 11 de enero de 1861, resuelto a disolver la centenaria unión entre la Iglesia y el Estado. La «reacción» no había dicho su última palabra, pero las reglas del juego estaban por cambiar drásticamente.

Con excepción del «obispo santo» de Durango, Jose Antonio Zubiría, el delegado apostólico y todos los prelados mexicanos salieron desterrados del país apenas dio inicio el gobierno juarista. El

¹⁷⁵ Despacho del delegado apostólico, 1º de enero de 1859. ASV, SS, rúbrica 251, año 1859, fasc. 1, fs. 136 y 137.

¹⁷⁶ Despacho del delegado apostólico, 1º de noviembre de 1859. ASV, SS, rúbrica 251, año 1860, fasc. 1, fs. 169 y 170.

¹⁷⁷ Carta de Santos Degollado a Manuel Doblado, 9 de septiembre de 1859, recogida en *La guerra de reforma según el archivo del general D. Manuel Doblado, 1857-1860*, San Antonio, casa editorial Lozano, 1930, pp. 104-105.

arzobispo Lázaro de la Garza falleció en Barcelona en marzo de 1862, y seis de los nueve obispos restantes se reunieron en Roma. La estancia de los prelados mexicanos en la ciudad eterna, aunada a la separación oficial entre la Iglesia y el Estado, hizo posible una profunda reestructuración del territorio eclesiástico nacional, lograda sin que interviniera en modo alguno la autoridad política. A propuesta de los obispos mexicanos, la Santa Sede creó siete nuevas diócesis, y elevó las de Michoacán y Guadalajara al rango de metrópolis eclesiásticas. Los nombramientos de los nuevos obispos se discutieron sin necesidad de tomar en cuenta la opinión del gobierno mexicano, e incluso llegaron a ventilarse propuestas para que las autoridades diocesanas emprendieran una reforma substancial de las órdenes religiosas. La Iglesia mexicana había obtenido finalmente la independencia jurídica y la autonomía de acción por la que tanto se había luchado, y en este sentido, la apuesta que hicieron el Papa y los obispos por el Imperio de Maximiliano (1864-1867) obedeció «más que al deseo de volver al pasado y de recuperar bienes y privilegios, a la voluntad de asegurar los derechos de la Iglesia, junto con su independencia»¹⁷⁸. No se trataba de una Iglesia ultramontana, entregada ciegamente en los brazos del Papa reaccionario: los obispos mexicanos habían comprendido en Roma que su posición era mucho más firme, influyente y autónoma dependiendo exclusivamente del Vaticano, que aliándose al Estado. Este descubrimiento, más que cualquier otra cosa, explica su férrea oposición a las políticas adoptadas por Maximiliano, la última esperanza del partido conservador.

La política oficial del papa Pío IX frente a los estados latinoamericanos no fue tan intransigente como generalmente se cree. A fin de cuentas, durante su pontificado se firmaron numerosos concordatos, muchos de los cuales aceptaban la existencia del Patronato¹⁷⁹. ¿Por qué no habría de celebrarse entonces un acuerdo con el católico emperador Maximiliano, quien incluso le pidió su bendición antes de partir hacia su nuevo Imperio en las Américas? Muchos conservadores mexicanos imaginaron que la llegada del archiduque austriaco constituía una oportunidad providencial—quizá la última— para reorganizar el gobierno del país a su ma-

¹⁷⁸ Laura O'Dogherty, «La Iglesia católica frente al liberalismo...»

¹⁷⁹ Juan María Laboa, *Historia de la Iglesia. IV: época contemporánea*, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2002, p. 193.

nera¹⁸⁰. Su sorpresa fue mayúscula al presenciar a un emperador que se esforzaba en rodearse por miembros del partido liberal, rechazando a sus «bases y apoyos naturales». Lo peor vino cuando Maximiliano ratificó la nacionalización de los bienes eclesiásticos, enviando al mismo tiempo una propuesta de concordato que asemejaba al peor de los mundos posibles: el Emperador quería no solamente ejercer el Real Patronato; deseaba también mantener la tolerancia de cultos y la abolición del fuero eclesiástico, imponiendo finalmente a la Iglesia la obligación de renunciar a cualquier ingreso fruto de obvenciones parroquiales o diezmos, a cambio de ser sostenida por (un exiguo) tesoro público. El Secretario de Estado del Vaticano, monseñor Giacomo Antonelli, rechazó esta ofensiva propuesta, sin cerrar del todo la posibilidad de un acuerdo. Enemistado con el Emperador, el nuncio apostólico se embarcaba rumbo a Guatemala el 1º de junio de 1865, mientras que nuestro arzobispo Munguía —quien había regresado de Roma en septiembre de 1863— partía nuevamente hacia Europa, supuestamente con la finalidad de atenderse una grave enfermedad de los ojos.

Para Maximiliano era indispensable arreglar la cuestión eclesiástica. Su legitimidad era precaria, y no le convenía permanecer enemistado con la Iglesia y los conservadores. El 8 de diciembre de 1865, una comisión imperial presentó en el Vaticano un nuevo proyecto de concordato, más afín a los deseos de la Santa Sede y redactado según el modelo de los concordatos centroamericanos. Unas horas después de recibir la propuesta, el Papa solicitó al arzobispo Munguía —el único prelado mexicano presente entonces en Roma— que expusiese por escrito, «con plena libertad y franqueza, y según lo creyese en Dios y en conciencia», su modo de pensar, «así sobre la oportunidad, conveniencia y necesidad» de celebrar un Concordato con el Imperio, «como sobre el contenido íntegro del referido Proyecto»¹⁸¹. Munguía tuvo apenas veinte días para cumplir esta tarea. El 30 de diciembre, el arzobispo de Michoacán entregaba un larguísimo *Informe* al Secretario de Negocios Eclesiásticos Extra-

¹⁸⁰ Al respecto, véase el ensayo de Erika Pani, «El tiro por la culata: los conservadores y el imperio de Maximiliano», en Renée de la Torre, Marta Eugenia García Ugarte y Juan Manuel Ramírez (comps.), *Los rostros del conservadurismo mexicano...*, pp. 99-121.

¹⁸¹ ASV, SS, rúbrica 251, año 1866, fasc. 11, p. 2. El fascículo consta de un ejemplar empastado del *Informe*.

ordinarios, Mons. Alejandro Franchi. Este *Informe* de 144 páginas, la última de sus obras, refleja tanto la animosidad que sentía Munguía hacia el Imperio, como una aguda percepción de las ventajas que había traído la separación de la Iglesia y el Estado. Al igual que en tiempos de Santa Anna, Munguía obstaculizó la firma de un Concordato con la Santa Sede, y apostó por una Iglesia mexicana libre, independiente del poder político, aunque nostálgica por una nación católica que había dejado de ser.

Munguía comienza su informe asentando el «carácter excepcional» de la cuestión eclesiástica en México. Los tiempos y circunstancias del Imperio eran muy distintos a los de «las Repúblicas Americanas con quienes [había] celebrado Concordatos la Santa Sede». En México, la cuestión se había «agitado y exacerbado» especialmente durante los últimos diez años, «a causa del empeño tenaz de ciertos Gobiernos en combatir a toda costa los principios y los derechos» de la Iglesia mexicana¹⁸². Esta situación no cambió en lo absoluto con la llegada de Maximiliano. Al contrario, los males del «siglo incrédulo», los principios de la Revolución, se hallaban cubiertos de homenajes y respetos «hasta en las mismas Cortes». «En lugar de templos erigidos o restaurados a expensas del Real Tesoro», en México sólo se encontraban templos «saqueados unos, destruidos otros y empobrecidos todos». En lugar de la sanción legislativa de la unidad católica, «la más amplia y franca tolerancia para todos los cultos»: «la medalla por el reverso», lo contrario de lo que había existido en los siglos «de fe y de piedad». En el estado actual de cosas, lo mejor era «negar el derecho de Patronato mientras no vuelvan a ponerse los Gobiernos en estado de merecerle»¹⁸³.

Aún había más: el gran interés de Maximiliano radicaba en consolidar, con el apoyo del Santo Padre, los «hechos consumados en consecuencia de la expropiación eclesiástica»¹⁸⁴. En esta materia Munguía recomendaba asumir una posición inflexible: las leyes de Reforma debían ser abrogadas, y la Iglesia indemnizada. De otro modo, la propuesta imperial implicaba un despojo aún mayor que el de Juárez, pues a una Iglesia sin propiedades se le quería mantener con una raquítica dotación civil:

¹⁸² ASV, SS, rúbrica 251, año 1866, fasc. 11, p. 2., pp. 3-5.

¹⁸³ ASV, SS, rúbrica 251, año 1866, fasc. 11, p. 2., pp. 87-89.

¹⁸⁴ ASV, SS, rúbrica 251, año 1866, fasc. 11, p. 2., p. 36.

Acerca de los intereses puede muy bien transigirse, porque un más o un menos en cosa, tiempo o modo, o induce un obstáculo insuperable. Pero en materia de principios no cabe transacción [...] Ahora bien, ¿cómo se satisface a los principios? Derogando las leyes: ¿cómo se satisface a los intereses? Indemnizando a la Iglesia despojada. Mas aquí no sólo no se derogan las leyes, no sólo no se indemniza a la Iglesia [...] sino que se quiere destruir lo que había quedado a salvo después de la tremenda borrasca y puede conservarse sin temor, es decir, la libertad canónica y los actuales recursos de subsistencia con que cuenta hoy la Iglesia mexicana¹⁸⁵.

La Iglesia, recuerda Munguía al Papa, es una «sociedad perfecta y visible, independiente y soberana», que posee «por derecho propio» la autoridad para reglamentar «las oblaciones que deben dar los fieles». Este derecho le es tan esencial, «que no puede faltarle jamás»¹⁸⁶. La dotación civil del culto y del clero no sólo iba en contra de este principio, también era «matemáticamente imposible». El Imperio se encontraba en bancarrota, a causa de la deuda exterior, la ruina económica de México y los gastos de la expedición extranjera¹⁸⁷. Si los empleados del Estado casi siempre andaban alternando «entre el alimento y el ayuno», ¿qué esperanza podría quedar para la Iglesia? La triste realidad es que el Imperio carecía absolutamente de apoyo nacional: «su Trono está en el aire». Sin ejército propio, deslegitimado por su «carácter antinacional», agobiado por la crisis económica, enfrentado a un «partido tenaz e intransigible», y para colmo amenazado por el resurgir de los Estados Unidos, el Imperio no tardaría en caer¹⁸⁸. En estas condiciones, un concordato firmado con Maximiliano terminaría en manos de un gobierno liberal. En lugar de hacerles tan peligrosa concesión, era mejor apreciar las bondades del régimen que estaba por regresar:

D. Benito Juárez, no tuvo la más leve pretensión de que se aboliese la obligación de conciencia para el diezmo ni mucho menos de intervenir; directa o indirectamente, en la colación de beneficios; hizo notables excepciones en sus leyes expolatorias, como la de reservar tantos capitales de congrua cuantas eran las monjas, y dejó

¹⁸⁵ ASV, SS, rúbrica 251, año 1866, fasc. 11, p. 2, p. 53.

¹⁸⁶ ASV, SS, rúbrica 251, año 1866, fasc. 11, p. 2, p. 60.

¹⁸⁷ ASV, SS, rúbrica 251, año 1866, fasc. 11, p. 2, pp. 72-80

¹⁸⁸ ASV, SS, rúbrica 251, año 1866, fasc. 11, p. 2, pp. 109-111.

tan expedita la acción de la Iglesia, que en su tiempo hizo Vuestra Santidad, las nuevas erecciones de Provincias y Diócesis, que harán época gloriosa en los anales de nuestra Iglesia¹⁸⁹.

El concordato era, pues, «superfluo», «perjudicial», y «verdaderamente ruinoso». No sabemos a ciencia cierta qué tanto influyó este *Informe* en el parecer de Pío IX. Lo que sí es un hecho es que el acuerdo nunca llegó a firmarse. Por unos meses se difundió un rumor sobre la inminente firma del concordato, pero en septiembre de 1866 el cardenal Antonelli negó abiertamente cualquier posibilidad de llegar a un arreglo con el Imperio¹⁹⁰. Sus días estaban contados. El 19 de junio de 1867, el emperador Maximiliano, acompañado por los generales Miramón y Mejía, enfrentaba un pelotón de fusilamiento en el Cerro de las Campanas. Con él se desvanecía la última esperanza de restaurar la alianza entre el Trono y el Altar; el Estado católico entraba así a los anales de la historia y al reino de la nostalgia. Poco más de un año después, el 14 de diciembre de 1868, el arzobispo Clemente de Jesús Munguía pasaba sus últimas horas en el Palazzo Borghese, en Roma, auxiliado espiritualmente por su amigo Pelagio Labastida. Moría así lejos de su patria, y sumido en la incertidumbre acerca de lo que el futuro deparaba a su querida Iglesia.

6. *Para concluir*

La posición que asumió el obispo Munguía frente a la reforma liberal sorprendió e irritó a todos sus adversarios: la suya fue una posición radical, teóricamente informada, e indiferente hacia las pretensiones de un Estado que buscaba afianzar su soberanía en todos los rincones de la vida social. ¿De dónde provenía su novedad, su peligro? En primer lugar, de los objetivos que perseguía. El anhelo de Munguía no radicaba en restaurar un régimen del pasado, sino en lograr un nuevo orden de cosas: un Estado en el que la Iglesia fuera «soberana e independiente», sin perder por ello su papel como rectora espiritual de la nación. En segundo y más importante, la de Munguía fue una obra desafiante por su lenguaje, por la moderni-

¹⁸⁹ ASV, SS, rúbrica 251, año 1866, fasc. 11, p. 2, p. 116.

¹⁹⁰ Laura O'Dogherty, «La Iglesia católica frente al liberalismo...»

dad de sus argumentos. Ciertamente Munguía siguió a los reaccionarios franceses en su lectura teológica de la historia, pero optó por combatir a los llamados «males del siglo» utilizando «sus propias armas», apropiándose categorías intelectuales asociadas con la filosofía política liberal. ¿Fue entonces un reaccionario, como denunciaban sus enemigos? No, al contrario: su obra se enmarca, no tanto en la filosofía de la Restauración, sino en la aún poco estudiada «Ilustración católica». A fin de cuentas, Clemente Munguía fue educado bajo la influencia de Mariano Rivas, uno de los más notables herederos de esta tradición dieciochesca. Y al igual que un Jovellanos o un Francisco Xavier Alegre, Munguía asumió como propios los principios de la escuela del derecho natural racionalista, buscando en todo caso enmendarlos conforme a los dogmas del cristianismo¹⁹¹. El resultado de este esfuerzo de síntesis, de esta adaptación de su fe a las exigencias filosóficas, políticas y literarias de su siglo, fue un pensamiento por demás ecléctico, y no por ello menos radical. Un pensamiento en el que conviven Lucas Alamán y Juan Bautista Morales; Bonald y de Maistre junto a Condillac, Ahrens, Balmes, Vattel, Grocio, y la escuela histórica alemana. Un pensamiento hostil a la Revolución, sin dejar de ser él mismo moderno y aún revolucionario.

Siendo Munguía un sacerdote ilustrado, ¿por qué se opuso a un partido que era también hijo de la Ilustración? ¿Por qué nuestro obispo se convirtió en el símbolo de la Reacción y la intransigencia ultramontana? Es notable que el punto de partida de Munguía y sus adversarios haya sido prácticamente el mismo: todos anhelaban la construcción de una república moderna, cimentada al mismo tiem-

¹⁹¹ A grandes rasgos, la «Ilustración católica» apoyaba una reforma general de la enseñanza en los colegios eclesiásticos, tendiente a la inclusión de métodos y materiales provenientes de las ciencias modernas, sin que por ello se alterase el marco religioso del sistema educativo. Massimo Mazzotti, «Maria Gaetana Agnesi. Mathematics and the Making of the Catholic Enlightenment», en *Isis*, vol. 92, no. 4, diciembre de 2001, pp. 657-683. Sobre el pensamiento jurídico de Jovellanos y Francisco Xavier Alegre, véase respectivamente: Rafael Domingo (ed.), *Juristas universales*, volumen II, Madrid, Marcial Pons, 2004, pp. 543-544, y 730-736; y Mauricio Beuchot, «El iusnaturalismo en el México de la época colonial (ss. XVI-XVIII)», en Martha Patricia Irigoyen (comp.), *Iusnaturalistas y Iuspositivistas Mexicanos (ss. XVI-XX)*, México, UNAM, 1998, pp. 23-28.

po en los principios del catolicismo; todos insistían en la importancia de una reforma educativa, acorde a los progresos del entendimiento; todos, finalmente, participaban de una misma cultura jurídica y constitucional, respetuosa de los derechos del hombre, y en particular de la propiedad. El problema es que tal programa común era lo suficientemente amplio, incoherente e indefinido, como para dar cabida a diversas interpretaciones posibles del mismo, aún contradictorias entre sí. La defensa de la propiedad implicaba, para unos, la desamortización de los bienes comunales y la creación de una gran clase de pequeños propietarios, la misma que empujaría el desarrollo de la nación. Para otros, la propiedad era un derecho natural, indispensable para la realización de los fines propios de los cuerpos sociales y del individuo, un derecho que sólo un Estado tiránico se atrevería a desconocer. Lo mismo sucedía con la representación: ¿en quién se encarnaba el Pueblo? ¿En los propietarios, en los profesionistas, en las clases populares, en las autoridades religiosas, o en las sociedades de hombres libres e iguales? Aún si todos se ostentaban como católicos e ilustrados, lo que unos entendían por fe, progreso e Ilustración, no era necesariamente lo mismo que imaginaban los otros.

Un vicio muy extendido entre los actores políticos de la primera mitad del siglo XIX fue el de presentar sus ideas como la expresión misma de la razón natural, la panacea que llevaría inevitablemente a la «felicidad de la nación». Siendo posible, como acabamos de apuntar, la existencia de varias expresiones de una misma Razón, surgía un problema que no encontró solución en el México de entonces: ¿quién podría determinar, de entre todas las alternativas posibles, cuál era la única correcta? En otras palabras, ¿a quién le correspondía la autoridad para interpretar —válidamente— los grandes términos del proyecto nacional? Aquí es donde surge el auténtico conflicto entre Munguía y sus adversarios. Para el primero, la Iglesia estaba llamada, por su misión de educadora y civilizadora de los pueblos, a definir el significado y los alcances de la constitución social. El suyo no era un poder que se ejerciera de manera directa: era más bien una potestad para marcar los límites entre lo legítimo y lo «inconstitucional», unos límites que toda autoridad estaría obligada a respetar. Para los segundos, como Alvérez, esta tarea residía esencial y exclusivamente en los órganos del Estado, los auténticos representantes del Pueblo soberano. En este sentido, la Iglesia era peligrosa, amenazante, no por su anclaje en un pro-

grama reaccionario, sino en tanto ella le estaba disputando al Estado su propio terreno, la definición de lo que significaba una nación moderna. Entendido así, este conflicto sólo podía ser resuelto mediante la eliminación política de uno de los dos adversarios. Eliminación que, vale la pena resaltar, dio comienzo retóricamente, al momento en que los partidos se representaron como antítesis irreconciliables, Reacción y Progreso, Orden y Libertinaje, Ultramontanismo e Ilustración.

La tesis que acabo de exponer se comprende mejor si comparamos el siglo XIX mexicano con el español. En España, a diferencia de México, sí hubo un movimiento auténticamente reaccionario, legitimista, contra-ilustrado: el carlismo. Enfrentado a éste se encontraba un liberalismo «exaltado», «progresista», representado por la regencia de Espartero. Entre estas «dos Españas» surgió un partido «moderado», cuya ideología se inspiró notablemente en el pensamiento de Jaime Balmes¹⁹². La obra de este sacerdote catalán se asemeja muchísimo a la de Munguía, en la medida en que ambos propugnaban por un catolicismo que buscaba rescatar, mas no destruir, la civilización moderna: siendo la Revolución su enemigo común, Munguía y Balmes la combaten formulando un pensamiento católico abierto al «espíritu del siglo», en el que la filosofía ilustrada y las instituciones representativas no aparecen reñidas con los postulados de la fe. En España, este pensamiento sirvió como una «línea política integradora», capaz de articular, al menos por unas décadas, a una nación dividida entre carlistas y revolucionarios. En México, por el contrario, no hubo una «reacción» propiamente dicha, pues el conservadurismo, aún el monarquista, «desarrolló sus propuestas dentro de un contexto liberal generalizado»¹⁹³. Lejos de ahuyentar el espectro de la guerra civil, la existencia de este «proyecto compartido» —un proyecto que, insistimos, admitía una pluralidad de interpretaciones— dio paso a un conflicto más agudo, no

¹⁹² Carlos Seco Serrano, *Historia del conservadurismo español. Una línea política integradora en el siglo XIX*, Madrid, Temas de Hoy, 2000; y Joseph Fradera, *Jaume Balmes. Els fonaments racionals d'una política catòlica*, Vic, Eumo Editorial, 1996.

¹⁹³ William Fowler y Humberto Morales Moreno, «Introducción: una (re)definición del conservadurismo mexicano del siglo diecinueve», en William Fowler y Humberto Morales (coords.), *El conservadurismo mexicano en el siglo XIX (1810-1890)*, Puebla, BUAP, 1999, pp. 11-36.

entre dos programas políticos irreconciliables, sino entre dos instituciones sociales, la Iglesia y el Estado, que aspiraron a definir, con exclusión de la otra, el sentido último de la constitución y del proyecto nacional.

Por otro lado, la obra de Munguía es también significativa para una adecuada comprensión de la historia de la Iglesia durante el siglo XIX. En sus escritos se vuelven manifiestas las tensiones que agitaron al pensamiento católico posterior a la revolución francesa, y no sólo al mexicano. Munguía anhelaba la edificación de una Iglesia libre en un mundo liberal, sin asumir del todo que ese mundo era efectivamente liberal, esto es, arreglado conforme a una lógica cada vez más secular e individualista. Por un lado, Munguía justificaba la independencia eclesiástica como la única tabla de salvación para una Iglesia amenazada por la Revolución, el «liberalismo ateo» y la indiferencia religiosa. Al mismo tiempo, su defensa de la intolerancia de cultos se basaba en una lectura demasiado optimista de la realidad mexicana. La nuestra era, en su opinión, una nación *exclusivamente* católica. Y si en realidad lo era, ¿cómo se explicaban las revoluciones y la «impiedad» destructora de los templos? Y si la fractura de la identidad católica nacional era tan evidente, ¿cómo podía exigir la Iglesia una preeminencia a todas luces injustificada? Esta inconsistencia de su pensamiento explica la dificultad que enfrentó al momento de optar por un programa político concreto. Los liberales, sobre todo tras la reforma juarista, pudieron haber aceptado la independencia eclesiástica, sin transigir por ello en el mantenimiento de la intolerancia religiosa. Los conservadores, por su parte, comulgaban con esta imagen idílica del México católico, mas nunca abandonaron la pretensión de intervenir en la vida eclesial, y menos a la hora de recurrir a su auxilio económico.

Munguía no resolvió nunca esta inconsistencia; quizá jamás llegó a plantearse un conflicto entre sus dos aspiraciones esenciales. Pero fue esta tensión la que definió los extremos alcanzados por la cultura católica durante la segunda mitad del siglo XIX: o se expurgaba a la nación de sus elementos ajenos, recuperando la prístina identidad católica de México, o se adaptaba la Iglesia a un mundo definido por sus *realidades nuevas*. Efectivamente, lo que en Munguía fue un pensamiento ecléctico, se transformó más tarde en una nostalgia integrista, obsesionada con un México de los tiempos coloniales, exclusivamente católico, donde el trono y el altar marchaban al unísono. Una patria que, en la lectura histórica de los tradicio-

nalistas, les había sido robada por fuerzas oscuras y extranjerizantes, los liberales que, uniéndose al complot masónico universal, habían traicionado su fe y su identidad más íntima. Junto a este discurso, ahora sí, auténticamente reaccionario, surgió también un liberalismo católico más consciente de los nuevos tiempos, y a la espera del magisterio de León XIII, un catolicismo social que también aspiró a una «reconquista espiritual» de la sociedad mexicana, pero lograda desde abajo, sin el Estado, a partir de la educación y la cultura, y sobre todo de una labor más solidaria con el pueblo de carne y hueso.

Pablo Mijangos y González
University of Texas at Austin

DOSSIER

EL PAPEL DE LA HISTORIA EN LA FORMACIÓN DEL JURISTA EUROPEO SEMINARIO INTERNACIONAL

Los días 22 y 23 de junio de 2006 tuvieron lugar, en el salón de grados del campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid, las distintas sesiones del seminario internacional organizado por los institutos Séneca y Nebrija que trató sobre el papel de la historia en la formación del jurista europeo. La coordinación del evento estuvo a cargo de Consuelo Carrasco García, Manuel Martínez Neira y Carolina Rodríguez López.

Como es conocido, el proceso de convergencia europea en materia de enseñanza superior, la construcción del denominado espacio europeo de enseñanza superior (EEES), ha obligado a reflexionar de nuevo sobre la formación de los juristas y así sobre el papel que estos ocupan en nuestras democracias desarrolladas, pues ambas realidades se encuentran ligadas. En efecto, se formará un tipo de jurista u otro dependiendo del espacio que como actor social se le quiera otorgar. Pero además en este itinerario aparece otro asunto capital, la capacitación europea de este actor. No se trata de formar juristas meramente nacionales, como sucedió en el orto de la modernidad, cuando se produjo la consolidación de los Estados nacionales, ahora al socaire de la integración europea el jurista necesita otros recursos que se nutren tanto del denominado derecho comunitario, como del conocimiento de las culturas jurídicas de los otros países miembros de la Unión. Además, estamos en un momento en el cual esta integración europea quiere dotarse de un modelo europeo de universidad de manera que los distintos sistemas nacionales caminen hacia una convergencia real que permita dar al sistema universitario una mayor movilidad. No se oculta a nadie que también en este aspecto la Unión se mueve por imperativos económicos; se trata de hacer una universidad eficiente y competitiva a nivel mundial pues el proceso de la globalización ha entrado en la academia y ésta se configura, cada vez más, como una empresa de servicios dirigida a dotar de formación inicial y continua a capas cada vez más amplias de la población. Para conseguirlo, un primer paso se sitúa en generar una competitividad real entre las distintas universidades europeas y para ello es necesario ofrecer productos equi-

parables, de manera que las reglas del mercado y de la libre concurrencia puedan aplicarse con transparencia y eficiencia al mundo académico. De este proceso emerge la imagen de un jurista europeo que resume en su prototipo todo lo aquí indicado.

Ahora bien, este jurista europeo ¿debe tener una formación teórica o una formación práctica, es la suya una ciencia básica o una ciencia aplicada? La cuestión se inserta dentro del espejismo economicista que ocupa nuestra cultura tardocapitalista, donde el aumento de la productividad y para ello las acciones de investigación-desarrollo-innovación aparecen como un axioma y por tanto como una verdad indiscutible. No se nos oculta que el dilema entre un jurista teórico o práctico elude enfrentarse con verdades axiomáticas y así discutir sobre el modelo social y político que estamos construyendo, tal vez de manera excesivamente acrítica. Y es también evidente que una opción que privilegie la formación práctica en detrimento de la teórica aumenta los riesgos de este desequilibrio y dificulta una reflexión sobre el sentido de nuestro devenir.

Esto, desde el punto de vista jurídico, es especialmente delicado en el momento actual dominado por lo que se ha llamado el fenómeno de la descodificación, es decir, la crisis del proyecto burgués de dotarse de un sistema jurídico simple centrado sobre el individuo propietario y portador de una gran estabilidad y seguridad. Frente a ello nos encontramos con un panorama tremendamente cambiante, donde afloran con fuerza tantos elementos premodernos que disputan a ese individuo propietario su centralidad jurídica. Se traduce esta crisis actual en un replanteamiento de las fuentes del derecho, en una devaluación de la ley que provoca su inflación y la dota de un carácter efímero. En este cambio continuo que dificulta la redacción de una teoría general, que se vuelca en el casuismo ¿qué sentido tiene una formación técnica? ¿No habría que preguntarse por el sentido del cambio? ¿Qué papel tiene la historia jurídica en este nuevo contexto tan diferente del que la vio nacer?

Para reflexionar sobre estos asuntos, convocamos a algunos romanistas e historiadores del derecho —en realidad historiadores del derecho romano, medieval y moderno— a trabajar juntos a la luz de las conclusiones del libro blanco que se ha elaborado en España bajo la dirección del Ministerio de Educación y Ciencia.

Por ello, tras una presentación del seminario a cargo del decano de la facultad de ciencias sociales y jurídicas de la universidad convocante, el romanista Manuel Abellán, propusimos una primera uni-

dad temática —presidida por Carlos Petit— centrada en la construcción del EEES y la formación del jurista. Es decir, queríamos reflexionar sobre cómo el proceso de convergencia europeo está replanteando el currículum académico. Con este propósito programamos dos sesiones, una dedicada a analizar las distintas experiencias europeas y otra a la española. Para ello pudimos contar con dos especialistas. En primer lugar con Manuel Ángel Bermejo Castriño que ha sido miembro de la comisión para el diseño de los estudios de grado promovida por el Ministerio de Educación y Ciencia y redactor del libro blanco para la reforma de los estudios jurídicos. Ha dedicado tiempo y esfuerzo al estudio de lo que se está haciendo en otros países europeos. Forma parte de la Comisión española de proyecto Tuning promovido por la Comisión Europea para diseñar los perfiles de los estudios jurídicos en Europa. El otro ponente fue José María Pérez Collados miembro también de la comisión para el diseño de los estudios de grado promovida por el Ministerio de Educación y Ciencia.

Dedicamos una segunda unidad temática —presidida por César Hornero— a reflexionar sobre el papel de las materias históricas en la formación del jurista europeo. Dos fueron las ponencias, una para el derecho romano y otra para la historia del derecho. La primera corrió a cargo de Dario Mantovani, profesor de derecho romano en la Universidad de Pavía, quien ha reflexionado en distintas ocasiones sobre el interés de una formación romanista de los juristas y cómo debe impartirse esta formación. Para la historia del derecho contamos con Pio Caroni, profesor emérito de historia del derecho de la Universidad de Berna, quien ha dedicado más de treinta años de su vida a reflexionar sobre estas cuestiones.

Una tercera unidad temática —presidida por Antonio Díaz Bautista— se dedicó al análisis del jurista actual y en concreto al problema del creciente casuismo y de la falta de elaboración teórica. Se reflexionó sobre cómo la formación histórica puede ayudar a paliar algunos de estos inconvenientes y sobre todo se trata de indagar los métodos y los temas que deben tratarse desde el derecho romano y desde la historia del derecho para colmar estas necesidades culturales. Contamos para ello con Javier Paricio, profesor de derecho romano de la Universidad Complutense de Madrid; Francisco Cuenca Boy, profesor de la Universidad de Cantabria; Paolo Cappellini y Maurizio Fioravanti, ambos de la Universidad de Florencia. El profesor Maurizio Fioravanti excusó su asistencia pero amablemente

nos envió su texto que fue colgado, junto con otros, en la web de la universidad unos días antes del comienzo del seminario, permitiendo así un conocimiento más profundo de la temática en discusión.

Tras cada uno de los bloques temáticos diseñados tuvimos un tiempo para el debate, que resultó vivo e interesante. Queremos agradecer a los numerosos asistentes su colaboración para la buena marcha del seminario, el interés que mostraron a través de sus preguntas e intervenciones, así como el trato cordial y afable que en todo momento se vivió. En parte esto fue posible por el buen hacer de los presidentes de cada una de las sesiones y, obviamente, por el altísimo nivel de las ponencias.

Esperamos que la fortuna de la que gozó el seminario acompañe también a esta publicación, y que su contenido sea útil para un debate que los organizadores estimamos necesario. El orden de las intervenciones se indica en el programa adjunto, sin embargo hemos dispuesto por orden alfabético los artículos de este dossier.

*EL PAPEL DE LA HISTORIA
EN LA FORMACIÓN DEL JURISTA EUROPEO*

Seminario Internacional
Sede: Salón de Grados - Edificio 8 - Campus de Getafe

PROGRAMA

JUEVES, 22 DE JUNIO DE 2006

10:00 h. *Presentación*

Manuel Abellán Velasco

Decano. Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Universidad Carlos III de Madrid

Adela Mora Cañada

Directora del Instituto Antonio de Nebrija

Francisco Lisi Bereterbide

Director del Instituto Lucio Anneo Séneca

— *La formación del jurista en el contexto del EEES*. Preside: Carlos Petit. Universidad de Huelva

10:15 h. *Distintas experiencias europeas*

Manuel Ángel Bermejo Castrillo

Comisión Tuning

Redactor del libro blanco

Vicedecano. Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Universidad Carlos III de Madrid

10:45 h. *La apuesta española*

José María Pérez Collados

Comisión para el diseño de los estudios de grado

Decano. Facultad de derecho. Universidad de Girona

11:15 h. Pausa café

11:45 h. *La redacción del libro blanco*

Carmen Velasco García

Comisión Tuning.

Redactora del libro blanco

Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)

12:15 h. Debate

—*Las materias históricas y la formación del jurista*. Preside: César Hornero. Universidad Pablo de Olavide

16:00 h. *El derecho romano*

Dario Mantovani. Universidad de Pavía

16:30 h. *La historia del derecho*

Pio Caroni. Universidad de Berna

17:00 h. Debate

VIERNES, 23 DE JUNIO DE 2006

—*La fragilidad del jurista y sus necesidades teóricas*. Preside: Antonio Díaz Bautista. Universidad de Murcia

10:00 h. *Presente y futuro del derecho romano*.

Javier Paricio Serrano. Universidad Complutense de Madrid

10:30 h. *Derecho romano y dogmática*

Francisco Cuenca Boy. Universidad de Cantabria

11:00 h. Pausa café

11.30 h. *Hacia una definición tipológica de la historia del derecho*

Paolo Cappellini. Universidad de Florencia

12:00 h. Debate

13:00 h. Clausura. Magnífico y Excelentísimo Señor Rector Gregorio Peces-Barba. Universidad Carlos III de Madrid

PRESENTACIÓN

Supone para mí, como decano de la facultad de ciencias sociales y jurídicas de la universidad Carlos III de Madrid un doble compromiso, que asumo con gran satisfacción, el pronunciar las palabras de inauguración de este seminario internacional.

Y el compromiso es doble, porque, Decano de una facultad multidisciplinar como es la nuestra, podría haber sido un economista, un experto en ciencia política o en una materia jurídica positiva no directamente concernida por el tema objeto de estudio, análisis y reflexión en esta reunión el que os hablara.

Pero soy profesor de derecho romano y, como tal, no me puede parecer más adecuado y oportuno el que al hilo de las reformas metodológicas en las enseñanzas que nos va a imponer la implantación de un Espacio Europeo de Educación Superior, nos preguntemos, —ya que nos dedicamos a conocer de dónde venimos—, hacia dónde vamos, y cual tiene que ser el papel que la Historia debe desempeñar en la formación de los juristas de nuestro continente.

Y estas son las materias sobre las que vamos a debatir en el seminario.

Un primer bloque en el que nos plantearemos cuál deba ser la formación del jurista en el contexto del denominado espacio europeo de enseñanza superior, en el que los ponentes Manuel Bermejo, José M.^a Pérez Collados y Carmen Velasco nos pondrán al día en «las distintas experiencias europeas», en cuál es o debe ser «la apuesta española» y sobre «la redacción del libro blanco» de la titulación en derecho, temas que serán objeto de un debate moderado por el profesor Carlos Petit, quien ya sabe que la lectura de su trabajo «El romano de Pompeyo. *Hic sunt leones*», supuso para mi un revulsivo que me hizo meditar, en su momento, sobre mis planteamientos metodológicos y pedagógicos.

En la reunión de esta tarde, y bajo la presidencia del profesor Hornero, las dos disciplinas histórico-jurídicas más relevantes en un plan de estudios de la licenciatura en Derecho, el Derecho romano y la Historia del derecho, serán objeto de revisión en cuanto a su actualidad y necesidad de presencia en la formación de los juristas actuales, por dos de los especialistas europeos en estas materias, el profesor Pio Caroni, y el profesor Dario Mantovani, a quien quiero agradecer públicamente la atención que dispensa a las profesoras del área de derecho romano de esta Universidad, en Italia y desde Italia.

El viernes concluiremos reflexionando sobre «la fragilidad del jurista y sus necesidades teóricas» en las materias que nos ocupan, en mesa presidida por el profesor Díaz Bautista, por tantos motivos muy querido en esta Universidad, y con intervenciones de los profesores Cuenca Boy y Paricio Serrano para el Derecho romano, y Paolo Capellini, para la Historia del derecho.

Ruego al profesor Capellini transmita al profesor Paolo Grossi lo que lamentamos no haber podido contar, por motivos de agenda, con su presencia en esta reunión. Su siempre lúcido magisterio estoy seguro nos habría enriquecido y ayudado en nuestras tareas. Le ruego también que le haga llegar el agradecimiento de esta Facultad y de la Universidad Carlos III por el trato que dispensa a nuestros jóvenes investigadores cuando se desplazan a Florencia, al prestigioso «*Centro di studi per la storia del pensiero giuridico moderno*», que él dirige.

Quiero agradecer, asimismo, al profesor Mauricio Fioravanti, que tampoco puede acompañarnos, el envío de una ponencia para su publicación en las «actas» del congreso, en la que, con la claridad y la precisión que le caracterizan, sitúa en su dimensión actual la necesidad de una «formación histórica» en los juristas europeos del futuro, formación que haga frente a las corrientes devaluadoras del «saber» (*sapere*) y ensalzadoras del «saber hacer» (*sapere fare*).

Considero, por lo anteriormente dicho, un acierto de los institutos «Lucio Anneo Séneca» y «Antonio de Nebrija», y de sus directores, profesores Adela Mora y Francisco Lisi, a quienes felicito, la organización de estas jornadas.

Voy a permitirme, para concluir esta intervención, comentar brevemente algunos aspectos relativos a las materias sobre las que vamos a debatir estos días.

España suscribió el 19 de junio de 1999, —en Bolonia, de ahí este nombre que nos trae por la calle de la amargura—, una decla-

ración por la que nos comprometió a establecer, antes del año 2010, un espacio europeo de educación superior (EEES).

La declaración mencionada se adhiere a la firmada con anterioridad, en La Sorbona, el 25 de mayo de 1998, en la que, entre otras cosas, se destacaba la necesidad de crear un área europea de educación superior, dirigida a promocionar la movilidad de los ciudadanos europeos y sus posibilidades de empleo, lo que algunos han entendido debe traducirse en una ampliación y profundización de las enseñanzas de carácter práctico y aplicativo, en detrimento de las disciplinas consideradas siempre como formativas.

Esta circunstancia ha generado en el sistema educativo universitario español la necesidad de realizar una transformación del sistema tradicional de la docencia universitaria, para que, efectuados los oportunos cambios, se facilite este proceso de convergencia europea.

Algunos de los aquí presentes saben, pues lo manifiesto cuando tengo oportunidad de hacerlo, que, personalmente, no solo soy escéptico ante este proceso, sino que desconfío o no veo claro, o lo veo claro y no puedo creerlo, dónde quiere llevar a nuestros jóvenes.

Dicho esto, y dado el cargo que en este momento desempeño, he afirmado también mi voluntad de fomentar todas las iniciativas que se tomen o se puedan adoptar en el ámbito de la Universidad y de la Facultad en relación a la discusión y a la elaboración de nuevas propuestas en el marco de los planes de estudio y de la docencia de todas aquellas materias que puedan tener cabida en nuestra Facultad.

En lo referente a los planes de estudio, conocida es ya la división propuesta entre grado y postgrado, y, como suele suceder, hemos comenzado la casa por las ventanas, trabajando y proponiendo cursos de postgrado antes de haberse realizado el diseño de los grados, y sin saber la presencia y el peso que el Derecho romano y la Historia del derecho tendrán en la nuevas titulaciones.

¿4 ó 3 años para el grado? estas son las alternativas que parecen ofrecerse en cuanto a su duración. Mi opinión y la de todos los profesores de derecho de esta facultad es coincidente en considerar 4 años como mínimo imprescindible para el grado en la licenciatura en Derecho.

En cuanto a la docencia, la idea básica del nuevo sistema es la de considerar al alumno como principal protagonista de su proceso de aprendizaje, proceso que debe realizar de una manera autónoma.

No quiero incidir en cuestiones conocidas ya por todos los presentes sobre los cambios metodológicos en la enseñanza que conlleva este sistema de docencia «centrada en el estudiante», valor que predicán de él sus valedores, y que, al que os habla, le causa cierta perplejidad, ya que parece decirse, con ello, que el sistema actual, el que hemos venido desarrollando hasta ahora, esté centrado en persona distinta a la del alumno. En mi caso, al menos, no ha sido así durante más de 20 años que llevo dedicándome a estas tareas.

Hace ya tiempo tuve ocasión de leer un prólogo de don Ramón Pérez de Ayala a una novela menor, cuyo autor se apellidaba Díaz Caneja, en la que el prologuista hablaba de «la pedagogía del *«cum»* (*con - ducere* = conducir), del *«se»* (*se - ducere* = seducir) y del *«e»* (*e - ducere* = educar), y sin necesidad de acudir a psicopedagogías conductistas o constructivistas, muy en boga entre los educadores desde el último tercio del siglo XX, y de las que todos estamos padeciendo sus resultados, invitaba a que el alumno fuera el protagonista de su formación y de su educación.

Pero sin entrar en más detalles, coincido con mi colega de La Coruña Ramón Rodríguez Montero en que lo que se pretende implantar puede ser atractivo e interesante, en cuanto a sus resultados, siempre que vaya acompañado, al menos, de dos condiciones.

Un número reducido de alumnos por grupo.

Y..., si no un conocimiento previo mínimo de la materia por parte de los alumnos, —sea jurídica, histórica, o la que sea— sí, al menos, un interés y una motivación para intentar enfrentarse a la asignatura de que se trate.

Es decir, contar con unos alumnos que, al ser protagonistas de su aprendizaje, tengan, también, un grado de responsabilidad suficiente para llevar el proceso a un buen término.

Soy consciente, también, de las exigencias que comportan estas condiciones en lo relativo a las plantillas de profesorado que puedan atender a los grupos reducidos a los que me he referido, y al esfuerzo a realizar, también en las enseñanzas medias, para formar alumnos, además de responsables, curiosos e interesados por el autoaprendizaje y el saber.

¿Y qué papel se asigna en este nuevo sistema al profesor?

Como se dice vulgarmente, vamos a tener que cambiar de «chip».

De transmisores de los contenidos de nuestras materias, nos tendremos que convertir en «gestores del proceso de aprendizaje de nuestros alumnos».

Pero no quiero cansaros más en este apartado de mis reflexiones. Sólo deciros que yo, que antes me he manifestado escéptico en cuanto a los fines y objetivos de la Bolonia que nos viene, me he comprometido, también, a experimentar este sistema con mis alumnos de Derecho romano en el curso próximo, en las denominadas «experiencias piloto de adaptación al espacio europeo de educación superior», que está llevando a cabo esta Universidad, y que, para cambiar de chip, estoy asistiendo, como si fuera un principiante en tareas de docencia, a cuantos cursos propedéuticos se están organizando con este fin.

Parafraseando al jurista Gayo, «*nunc transeamus ad historiam*». Pasemos ahora a la Historia y al papel que las disciplinas histórico-jurídicas deben desempeñar en la formación de un jurista europeo del siglo XXI.

No tengo encomendada ponencia en este seminario; por ello voy a ser muy breve.

¿Hasta cuándo van a tener los historiadores del derecho y los romanistas que justificarse y defender la conveniencia del estudio de estas disciplinas para la formación de los juristas?

Cuando hace ya años comencé mi formación en derecho romano, una de mis primeras lecturas fue el fascículo 2.º, año 1956, de la revista *Labeo*, en la que bajo el título «*Studio e insegnamento del diritto romano*», juristas de diferente índole respondieron a la pregunta de en qué sentido y dentro de qué límites era el Derecho romano útil para la formación del jurista moderno.

A finales de los años 80 del siglo pasado, cuando en España se planteó la anterior reforma de los planes de estudio, en una monografía dedicada a «*La enseñanza del derecho en España*», se preguntaba el profesor Miquel, de nuevo, el valor que tenía para el jurista actual, en una sociedad sometida a hondas transformaciones socio-económicas, la enseñanza del Derecho romano.

Y cuestiones similares se plantearon, entre otros, Torrent, Panero, d'Ors, etc., y se siguen planteando, como nosotros en este encuentro, en la actualidad.

Digo esto sólo en nombre de los romanistas, de los que creo que están todos convencidos ya, de que la utilidad de su disciplina para la formación de los juristas es la de hacerles adquirir conciencia de la contingencia, de la historicidad de las categorías jurídicas.

En este sentido siguen estando de actualidad las palabras de Bernardo Albanese al contestar la encuesta, ya mencionada, de la revis-

ta *Labeo* en 1956, y traídas a colación por Miquel, en el trabajo antes citado, para apuntalar la afirmación de que «el estudio del Derecho romano ayuda a comprender que el Derecho es un producto fundamentalmente histórico».

Decía Albanese: *«el derecho es esencialmente historia, en cuanto fenómeno humano en el tiempo, en cuanto fenómeno social. Con mentalidad meramente lógica no se capta sino un aspecto —y, ciertamente, el menos importante— del derecho. De ahí la necesidad de ver la dimensión histórica —yo diría el movimiento— de cualquier cuestión jurídica actual»*.

Concluyo ya.

Parece que para la creación de ese área europea de educación superior, dirigida a proporcionar la movilidad de los ciudadanos y sus posibilidades de empleo, que es uno de los objetivos de la Bolonia «que nos viene», hay que profundizar, hay que hacer hincapié, se dice, en los aspectos prácticos, aplicativos en la formación de los estudiantes.

Estudiantes europeos —alemanes, franceses, italianos, españoles, etc.—, con unos conocimientos comunes, intercambiables, fungibles, como Savigny sostuvo que eran las personalidades de los juristas romanos clásicos en cuanto al método que utilizaban, pero sin los conocimientos de estos juristas, sin sus saberes.

A nosotros, profesores de Derecho romano y de Historia del derecho, nos va a corresponder participar, —y ni podemos ni debemos renunciar a ello—, en la formación, podríamos decir, globalizada, de esos futuros juristas europeos.

Algunos de los aquí presentes saben de mi admiración por Riccardo Orestano, jurista en el más amplio sentido de la palabra, y de mi reconocimiento a lo que su obra, plenamente vigente aún para los que creemos en la contingencia y en la historicidad del derecho, ha supuesto para la ciencia del derecho europea de nuestros días.

Creo que la mejor manera de finalizar mi intervención es acudir a él, y referirme, como mensaje para transmitir a nuestros estudiantes, a los juristas europeos del futuro, a lo que él denominaba la *«inescindibilidad, la indivisibilidad del conocimiento jurídico»*.

«Hay —decía— que conocer para actuar en la práctica; hay que actuar en la práctica, conociendo».

Manuel Abellán Velasco

Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
Universidad Carlos III de Madrid

¿REALIDAD O FICCIÓN? EL PROCESO DE CONVERGENCIA DE LAS ENSEÑANZAS JURÍDICAS DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DE CREACIÓN DE UN ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Sumario: A. Acuerdos y declaraciones básicos. —B. Otros documentos significativos. —C. La adaptación del modelo de Bolonia en los distintos países europeos. —D. Realidad y ficción.

A. *Acuerdos y declaraciones básicos*

1. Declaración de la Sorbona

El proceso de creación de un Espacio Europeo de Educación Superior, coloquialmente conocido, quizás de manera algo imprecisa, como «Proceso de Bolonia», arranca desde una fecha, mayo de 1998, tan cercana en el tiempo, que cuesta cierto trabajo creer que en tan pocos años las vagas declaraciones que le dieron impulso hayan podido generar un fenómeno de tal magnitud que, aunque cargado de incertidumbres, contradicciones y problemas de aplicación práctica, parece abocarnos a una profunda transformación del modelo universitario en el que durante muchas décadas hemos encontrado nuestras referencias.

Para repartir convenientemente el protagonismo en el nacimiento de esta iniciativa, hay que hacer mención al importante antecedente representado por la *Magna Charta Universitatum*, aprobada por los Rectores europeos reunidos en Bolonia en septiembre de 1988, con ocasión de la conmemoración del noveno centenario de la fundación de su universidad¹. En este manifiesto, después de

¹ Una versión castellana de este documento puede consultarse en <http://www.unibo.it/avl/charta/charta.htm>

invocar la supeditación del porvenir de la humanidad al desarrollo cultural, científico y técnico, y subrayar el relevante papel destinado a asumir en el mismo por las universidades, como focos de creación y difusión del conocimiento y como espacios de educación en el respeto a los grandes equilibrios del entorno natural y de la vida, se proclaman cuatro grandes principios:

1. La universidad es una institución autónoma, que, con espíritu crítico, produce y transmite cultura por medio de la investigación y de la enseñanza, y que para poder cumplir su función requiere disponer de plena independencia moral y científica frente a cualquier poder político, económico o ideológico.

2. En ella, la actividad docente es indisociable de la investigadora, al efecto de conseguir que la enseñanza sea igualmente capaz de adecuarse a la evolución de las necesidades y las exigencias de la sociedad y al progreso del conocimiento científico.

3. Tanto los poderes públicos como las propias universidades, en sus respectivos ámbitos de competencia, deben garantizar y promover como valor primordial la libertad de investigación, de enseñanza y de formación.

4. La universidad, depositaria de la tradición del humanismo europeo, debe ignorar toda frontera geográfica o política y afirmar la imperiosa necesidad de la interacción de las culturas.

Principios para cuya realización se proponen como medios la provisión de instrumentos que aseguren la protección de las mencionadas libertades, así como la de todos los derechos correspondientes a los estudiantes, el sometimiento de la selección del profesorado a una regla de indisociabilidad entre las actividades investigadora y docente, y —aspecto muy reseñable— el establecimiento de una red de intercambio recíproco de información y documentación y la multiplicación de proyectos comunes entre las distintas universidades, especialmente europeas.

Sin olvidar, pues, este precedente, el capítulo inicial de esta convulsión a la que, al parecer, estamos asistiendo, hay que situarlo en otra solemnidad celebrada el 25 de mayo de 1998 en la capital francesa con análogo motivo a la anterior, el de festejar los novecientos años transcurridos desde la fundación de la Universidad en París, y con asistencia de los Ministros de Educación de Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido, quienes, como colofón de los actos, elaborarían una

declaración conjunta², con invitación expresa a la adhesión de los demás Estados europeos, en la que, apelando a la necesidad de trasladar el avance de la integración europea al ámbito del conocimiento, se formulan ya el compromiso de colaborar en la materialización de algunos de los grandes principios definidores de este proceso:

— La configuración de una extensa área europea sin fronteras en lo relativo a la educación superior; heredera de la antigua y pérdida tradición de circulación transnacional de estudiantes y académicos, que fue característica del período de nacimiento de las universidades. Un espacio común que se califica de fundamental para el desarrollo global del continente.

— La generalización de un sistema homogéneo de titulaciones, descompuesto en dos ciclos, grado y postgrado, llamado a servir de piedra angular para la homologación de comparaciones y equivalencias a escala europea. Primer ciclo que debería reportar la obtención de una titulación, para la que deberían arbitrarse mecanismos de reconocimiento internacional, mientras que en el ciclo de postgrado cabría la elección entre un master de corta duración y un doctorado más extenso, pero con opciones para poder efectuar el paso de una a otra modalidad, debiendo procurarse en ambas una combinación de la investigación con el trabajo autónomo.

— La introducción de un modelo universal de computación de créditos compatibles, el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS), y la división del curso en semestres, como medios para permitir la convalidación de los créditos conseguidos por los estudiantes que desearan continuar estudios universitarios que previamente no hubiesen completado.

— La necesidad de facilitar a los alumnos la posibilidad de llevar a cabo estudios multidisciplinarios, de perfeccionar su conocimiento de idiomas y de adquirir destrezas en el manejo de las nuevas tecnologías informativas.

— El fomento de la movilidad de los estudiantes, con el objetivo de que cursen al menos un semestre, tanto en el grado como en el postgrado, en universidades situadas fuera de su país. E igualmente,

² Entre las muchas opciones disponibles, he utilizado la versión en castellano que aparece en la página oficial de la Agencia Nacional de Educación de la Calidad (ANECA: http://www.aneca.es/modal_eval/docs/declaracion_sorbona.pdf)

la del personal docente e investigador. Apoyando esta iniciativa han conseguido consolidarse programas internacionales de intercambio como el ERASMUS (implantado en 1987), el SÓCRATES (creado en 1996) o el SÉNECA, éste último dentro del marco nacional.

2. Declaración de Bolonia

Recogiendo el reto planteado en París, sólo un año más tarde, el 19 de junio de 1999, tuvo lugar en Bolonia un nuevo encuentro, esta vez con la participación de los responsables de Educación de veintinueve países europeos, y también rematado con la elaboración de un, hoy célebre, documento conjunto³, que, tal vez, por la mayor representatividad derivada de tan notable incremento del número de firmantes, ha eclipsado casi por completo la importancia del anterior, del que, sin embargo, se manifestaba continuador en su propósito de sentar las bases para la creación en los campos del conocimiento y de la enseñanza de una nueva esfera de convergencia, que se predicaba insustituible de cara al desarrollo social y humano, a la consolidación y el enriquecimiento de la cultura y la ciudadanía europeas y a la toma de conciencia sobre la existencia de unos valores compartidos y la pertenencia a un espacio social y cultural común.

En este sentido, resulta novedoso que, reivindicando el valor que como indicador de la vitalidad de una civilización tiene su capacidad de influencia cultural fuera de sus contornos, se plantea como objetivo prioritario el de conseguir una mejora de la competitividad y de la capacidad de proporcionar empleo del sistema educativo europeo, obviamente tomando como elemento de comparación el dominante modelo universitario norteamericano.

Y para alcanzarlo se asume un compromiso de coordinación de las respectivas políticas nacionales con el fin de lograr, fijando como plazo máximo el año 2010, otra serie de metas parciales, en lo esencial ya enunciadas en París, orientadas, especialmente, a contribuir a la consecución, sin perjuicio del respeto a las diversidades lingüísticas y culturales y a la autonomía universitaria, de ese espacio educativo unitario:

³ El texto original en inglés puede encontrarse, por ejemplo, en http://www.elfa-afde.org/html/legal_sorbonne_declaration.html.

Una versión en castellano en http://www.aneca.es/modal_eval/docs/declaracion_bolonia.pdf.

— La adopción de un sistema de titulaciones fácilmente comprensibles y contrastables, por medio de instrumentos como el suplemento al título, en el que habrá de incluirse información tanto sobre la trayectoria académica personal del graduado y sobre las competencias y capacidades profesionales por él adquiridas, como una descripción de su sistema nacional de educación superior.

— El establecimiento de un esquema organizado en dos ciclos principales, precisándose ahora que para acceder al segundo será indispensable haber completado el primer ciclo, que debe tener una duración mínima de tres años y otorgar un título suficiente para permitir el acceso al mercado de trabajo en el ámbito europeo.

— La puesta en funcionamiento del sistema de créditos ECTS, con la particularidad de que también se contempla su obtención fuera del marco de la enseñanza superior, siempre que cuenten con el reconocimiento de las universidades implicadas.

— El apoyo a los flujos de movilidad, mediante la eliminación de los obstáculos al ejercicio efectivo del derecho a la libre circulación de estudiantes, profesores y personal administrativo.

— La promoción de la cooperación europea encaminada a garantizar la calidad, con miras a un progresivo acercamiento de los criterios y la metodología docentes.

— El ensanchamiento de la dimensión europea de la enseñanza superior, en especial en lo relativo a la elaboración de los planes de estudio, la colaboración interinstitucional, los programas de intercambios y las estrategias integradas de estudios, formación e investigación.

3. Comunicado de Praga

Habiendo acordado los signatarios de la declaración de Bolonia volver a reunirse cada dos años, con la intención de valorar los avances realizados y marcar las pautas que asegurasen su continuidad, el siguiente evento tuvo lugar en Praga el 19 de mayo de 2001, dando igualmente ocasión para la redacción de un comunicado⁴, suscrito por los representantes de treinta países, cuya principal conclusión

⁴ Esta disponible en http://www.bologna_berlin2003.de/pdf/Prague_communicuTheta.pdf

consistió en reafirmar el compromiso de no demorar más allá del año 2010 la plena implantación de la *European Higher Education Area*, así como el deseo expreso de involucrar a toda Europa en su desarrollo, convirtiéndola en vía de canalización de la ampliación de la Unión Europea y de afianzamiento de los valores democráticos y de la pluralidad cultural y lingüística sobre los que ésta se asienta.

Además de ofrecer una optimista valoración sobre la intensidad y amplitud de la asimilación en numerosos países de los principios y recomendaciones formulados en Bolonia, los ministros concurrentes reconocían la necesidad de profundizar en los mismos mediante la adopción de nuevas acciones dirigidas a este fin. Las principales novedades son:

— Su llamada a una creciente toma de conciencia por parte de los poderes e instituciones acerca de que la educación superior debe ser considerada como un bien y una responsabilidad públicos, y de que los estudiantes son miembros de pleno derecho de la comunidad educativa.

— La invitación dirigida a las universidades y demás instituciones de enseñanza superior para que extraigan el máximo partido de las legislaciones nacionales y las herramientas comunitarias, con objeto de favorecer el reconocimiento académico y profesional de los diferentes cursos, grados o distinciones, de tal modo que los ciudadanos puedan hacer efectivas sus cualificaciones, competencias y habilidades en cualquier ubicación dentro del espacio educativo europeo.

— Respecto a la estructuración de los estudios en dos ciclos, se alerta sobre la conveniencia de que la organización de los grados adquiera distintos perfiles y orientaciones para acomodarse a la diversidad individual y académica y a la del mercado laboral.

— Se insiste en la importancia de la generalización del sistema de créditos ECTS, o de aquellos otros compatibles con él, así como la de la adopción del Suplemento al Diploma, por entender ambas medidas susceptibles de proporcionar la flexibilidad, la transferibilidad y la posibilidad de acumulación precisas para potenciar la movilidad de los alumnos, profesores, investigadores y administrativos, y aumentar la capacidad de los centros europeos de enseñanza superior para concursar en su captación en condiciones ventajosas. Todo ello, aprovechando las directrices marcadas por la Comunidad Europea.

— También se pone énfasis en la necesidad de ahondar en la cooperación para fijar standards de evaluación y acreditación de la calidad, mutuamente aceptados y trasladables de uno a otro país. Un objetivo para el que se aconseja, además, el trenzado de lazos de colaboración con las agencias nacionales e internacionales, como la *European Network of Quality Assurance* (ENQA).

— Con el fin de extender el alcance de esa proyección europea en el terreno de la educación superior, se anima a introducir módulos, cursos y diseños curriculares con contenido u orientación «Europeos», y en particular los elaborados conjuntamente por instituciones de diferentes países con el propósito de que sean reconocidos en cada uno de ellos.

— Se lanza, también, un toque de atención sobre el carácter esencial que en esta nueva realidad está destinada a adquirir la denominada educación continuada a lo largo de la vida (*lifelong learning*), por su potencial contribución a la cohesión social, la calidad de vida y la igualdad de oportunidades.

— Se apela a la necesidad de lograr una implicación activa y constructiva de los estudiantes y de las universidades en el desenvolvimiento del proceso.

— Finalmente, se subraya la repercusión que el conjunto de estas iniciativas, y en especial las dirigidas a incrementar y garantizar la calidad, debería tener en un fuerte crecimiento del atractivo y la competitividad internacionales de las universidades europeas.

4. Comunicado de Berlín

Manteniendo la periodicidad bianual de este ciclo de reuniones de los responsables educativos europeos, la siguiente cita, localizada en Berlín, dio lugar a otro comunicado, de 19 de septiembre de 2003⁵, en el que, además de rendirse noticia —suscribiéndolas—, de las conclusiones obtenidas en varios informes, mensajes y propuestas gestados en otros ámbitos comunitarios y por diversas asociaciones de estudiantes y de universidades, fundamentalmente se pasaba revista a los progresos realizados en esos dos años transcu-

⁵ Para acceder al documento puede acudir a <http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/Communique1.pdf>.

rridos en cuanto al cumplimiento de los objetivos marcados en las conferencias precedentes, tratándose también de aportar nuevos principios y prioridades. Entre sus enunciados más destacados podemos citar los siguientes:

— En primer lugar, se vuelve a hacer recaer el acento en la dimensión social del proceso de Bolonia, recordándose que la búsqueda de un aumento de la competitividad no puede operar en detrimento de las políticas de solidificación de la cohesión social, de reducción de las desigualdades sociales y de género y de protección del empleo.

— Al mismo tiempo se afirma que en el terreno de la cooperación y de los intercambios académicos a escala internacional deben prevalecer los valores académicos.

— Se señalan las ventajas de generar un creciente flujo de sinergias entre los sistemas de educación superior y de investigación de los respectivos países, aludiendo a la conveniencia de un planteamiento de políticas de coordinación con un Espacio Europeo de Investigación, centrado en un tercer ciclo, el de doctorado, de desarrollo paralelo y complementario al Espacio Europeo de Educación Superior, y al que se pretende integrar en una misma dinámica de fomento de la calidad, la movilidad y la interdisciplinariedad. Un ensamblaje que se anuncia, además, destinado a cumplir un papel esencial en la preservación de la riqueza cultural y lingüística de Europa y en el mejor aprovechamiento de su potencial de innovación y de progreso económico y social.

— Se insiste acerca del peso decisivo que en la construcción de este Espacio Europeo deben cobrar la transparencia y la compatibilidad de los indicadores y métodos dirigidos a garantizar unos elevados niveles de calidad. Aunque se advierte de que la máxima competencia en este punto corresponde a cada institución educativa concreta, la cual, ajustándose a los criterios específicos de calidad vigentes en el contexto nacional, deberá definir el grado de responsabilidad atribuido a cada uno de sus componentes en aras de su obtención, además de identificar los mecanismos de evaluación y acreditación, internos y externos, destinados a medirla y de proveer los cauces de publicación de los resultados adecuados para facilitar su difusión.

— También se exhorta a los Estados miembros a elaborar un marco común relativo a la estructura de las calificaciones, en el que, con las lógicas diferencias entre el grado y el postgrado, éstas debe-

rán ser descritas en términos de volumen de trabajo, nivel, resultados de aprendizaje, perfiles y competencias.

— Se precisa que, en la línea fijada en la Convención de Lisboa sobre el Reconocimiento, el primer ciclo debe dar acceso al segundo ciclo y éste a los estudios de doctorado.

— Una vez más, se formula, el compromiso de acometer todos los esfuerzos necesarios para remover los obstáculos a la movilidad y propiciarla mediante la implementación de préstamos y becas, así como para completar la implantación del sistema de créditos ECTS y del Suplemento al Diploma, que deberá ser emitido gratuitamente y en un idioma ampliamente hablado en Europa.

— Igualmente, se reitera el llamamiento a la participación en el proceso tanto de las instituciones de enseñanza superior como de los estudiantes, invitando a los países miembros a encontrar resortes capaces de incentivar la implicación del estamento estudiantil en las instancias de gobierno de este ámbito educativo. Asimismo, se señala la obligación de procurar adecuadas condiciones de vida y de estudio a los alumnos, de tal modo que su posición económica y social no actúe como impedimento para completar su formación.

— Haciéndose eco del paulatino desarrollo conseguido en los últimos años por los cursos y programas de estudio de contenido europeo, se anima a las instituciones a multiplicar este tipo de experiencias y a las autoridades educativas a facilitar su homologación, por estimar que pueden convertirse en un instrumento esencial para que, además de aumentar su bagaje lingüístico y cultural, los estudiantes puedan beneficiarse de la plena materialización de la identidad, la ciudadanía y el mercado laboral europeos.

— Para reforzar la capacidad de atracción y el carácter abierto del Espacio Educativo Europeo, se recomienda aumentar la dotación de fondos y ayudas orientados a promover una intensificación de los intercambios académicos.

— Persiguiendo estimular y preparar la deseada recepción de estudiantes procedentes de otras partes del mundo, se recomienda el establecimiento de lazos de cooperación con las autoridades educativas representativas de las mismas, abriéndoles la posibilidad de asistir a seminarios y conferencias dedicados a debatir la planificación e implementación del proceso de Bolonia.

— Finalmente, considerando que la educación continuada está llamada a desempeñar en el futuro un papel primordial en el desempeño académico, se aconseja acentuar su presencia en las universi-

dades, permitiendo que cualquier ciudadano, de acuerdo con sus particulares aspiraciones y capacidades, pueda integrarse como alumno de las mismas.

La incorporación en esta conferencia de Albania, Andorra, Bosnia-Herzegovina, Rusia, Serbia-Montenegro, Macedonia y El Vaticano elevó a cuarenta el número de países participantes en este ambicioso proyecto.

5. Comunicado de Bergen

El último encuentro de esta clase hasta ahora escenificado tuvo lugar en la ciudad noruega de Bergen, los días 19 y 20 de mayo de 2005, concurriendo por vez primera los responsables educativos de Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Moldavia y Ucrania, con lo que el número global de países participantes en el proceso asciende actualmente a cuarenta y cinco. El pronunciamiento conjunto resultante⁶ presenta como puntos más reseñables los siguientes:

— Después de aseverarse que el cometido central corresponde ahora, una vez que las reformas legislativas han sido ya emprendidas, a las propias instituciones dedicadas a la enseñanza superior, a las que se pide que se comprometan con el proceso, optimizando el impacto de los cambios en la estructura de los currículos y promoviendo las necesarias innovaciones en la metodología docente y las técnicas de aprendizaje, se da la bienvenida a la posible colaboración de las organizaciones internacionales y a las contribuciones de las grandes entidades financieras.

— A pesar de expresarse satisfacción por la estimable cota de implantación alcanzada por el esquema del grado organizado en dos ciclos, no dejan de reflejarse los problemas que todavía presenta el tránsito entre ambas fases y, en especial, la necesidad de ampliar el reducido ámbito de empleo al que pueden tener acceso los graduados del primer ciclo.

— De igual modo que, sin perjuicio de los avances logrados en la introducción de mecanismos de aseguramiento de la calidad, que-

⁶ La versión inglesa que utilizo se halla en http://www.aneca.es/modal_eval/docs/050520_Bergen_Communique.pdf

dan aún importantes cuestiones por resolver, sobre todo en lo concerniente a una mayor integración en el proceso de los alumnos y a una intensificación de la cooperación internacional. Y asimismo se repite la remisión a las pautas y orientaciones propuestas por la ENQA, basadas en el modelo de la evaluación por pares a través de agencias nacionales de calidad.

— Por otra parte, se urge a los nueve países que aún no lo han hecho a ratificar la Convención de Lisboa sobre Reconocimiento de Títulos, solicitándose, además, la elaboración de planes nacionales ajustados al dictado de dicho tratado y demás textos derivados, que deben ir dirigidos a suprimir las trabas a la homologación de calificaciones obtenidas en el extranjero y, en particular, de aquellas titulaciones diseñadas para tener validez en dos o más países.

— En la línea de lo manifestado en Berlín, se recalca el relevante papel que dentro de la educación superior debe asumir la investigación para coadyuvar al desarrollo económico y social de nuestras sociedades, no estando justificado que las energías invertidas en la materialización del profundo cambio estructural implícito en la creación del EEES se detraigan de los esfuerzos volcados en la investigación y la innovación; al contrario, lo que debe perseguirse es que los trabajos efectuados en ambos campos empujen en la misma dirección.

— Para posibilitar esta interrelación, es preciso que los módulos de calificación al nivel de doctorado se adecuen a las pautas vigentes para el EEES. Y al tiempo que, eso sí, cuidando de no caer en un exceso de regulación, se plantea como meta lograr un sensible incremento del número de candidatos a la obtención de este grado, se insta a las universidades para que adopten como prioridad el que sus programas de doctorado proporcionen una formación interdisciplinar y permitan la adquisición de capacidades y habilidades transferibles y adaptadas a las necesidades del sector más amplio posible del mercado de trabajo.

— De otro lado, los firmantes se ratifican en su voluntad de crear las condiciones precisas, incluida la provisión de fondos de ayuda y de servicios de asistencia y asesoramiento, para que nadie vea truncado su itinerario universitario por su desventajosa posición social o económica.

— Compromiso que se renueva también respecto al principio de movilidad, a través de la invitación formulada tanto a los estudiantes como a las instituciones para que procuren conseguir un óptimo

aprovechamiento de las oportunidades ofrecidas por los programas de intercambio, completándose esta petición con la demanda de un pleno reconocimiento oficial de los períodos de estudio pasados en el extranjero en virtud de tales programas. Lo que debería venir acompañado de otras medidas suplementarias, tendentes a remover los obstáculos a la libertad de circulación opuestos, por ejemplo, por la exigencia de visados o permisos de trabajo.

— Por último, en la senda de hacer el EEES atractivo para estudiantes provenientes de otros territorios ajenos al espacio europeo, se propone tejer una red de colaboración con otros sistemas continentales o regionales, promoviendo la densificación del intercambio de ideas, experiencias, estudiantes, profesores y cargos académicos.

Probablemente, resulte ilustrativo apuntar que entre las tareas encomendadas al Follow-up Group, encargado de imprimir continuidad a los acuerdos alcanzados en Bergen hasta la celebración, prevista para el año 2007, de la próxima conferencia de ministros, se identifican como áreas dignas de atención preferente:

— el grado de implementación de los standards y directrices de calidad propuestas por el informe de la ENQA.

— la cota de desarrollo de los sistemas nacionales de calificación.

— el fomento y el reconocimiento de las titulaciones conjuntas, y también al nivel del doctorado.

— la creación de oportunidades para unos caminos más flexibles hacia el aprendizaje, incluido el reconocimiento de los estudios previos.

B. *Otros documentos significativos*

Naturalmente, las hondas repercusiones que esta acelerada secuencia normativa pronostica sobre la situación de la enseñanza superior en los países adheridos al proyecto europeo de convergencia ha dado lugar a la aparición de un aluvión de documentos y declaraciones, no siempre rendidas a las bondades del mismo, de las que aquí parece oportuno destacar algunas cuyo contenido se antoja de particular interés.

1. Mensaje de la Convención de Instituciones Europeas de Enseñanza Superior. Salamanca, 29-30 de marzo de 2001

Convocada como preparatoria para la Conferencia de Praga de ese mismo año, en esta multitudinaria convención, que contó con la asistencia de representantes de más de trescientas instituciones europeas de enseñanza superior, y que sirvió de escenario para la constitución de la *European University Association* (EUA), se sentaron algunas de las ideas y propuestas básicas recogidas después en el mencionado Comunicado de Praga. En concreto, se consagran como principios esenciales⁷:

— La autonomía universitaria con responsabilidad, entendiendo como tal la capacidad de fijar sus propias estrategias y prioridades, de distribuir sus recursos, de desarrollar sus currículos y de decidir sobre la admisión de alumnos y profesores. Para lo que se reclama un indispensable margen de libertad frente al exceso de reglamentación y de control administrativo y financiero que imponen las autoridades educativas, reduciendo las posibilidades de asegurar una situación de competencia en verdaderas condiciones de igualdad.

— La construcción del EEES deberá respetar ciertos principios básicos, fuertemente arraigados en la tradición universitaria europea, como el de que la educación constituye un servicio público, encaminado a facilitar la realización personal y profesional de los ciudadanos, lo que implica favorecer un acceso amplio y abierto a la misma a cualquier persona y a lo largo de toda su vida.

— La enseñanza superior debe, obligatoriamente, sustentarse en la investigación, por lo que la creación de un EEES debe completarse con la de un Espacio Europeo de la Investigación.

— El futuro del EEES dependerá de que se consiga articular con eficiencia la diversidad de idiomas, modelos nacionales, tipos de instituciones y estructura curricular, de tal modo que la armonización genere ventajas y no inconvenientes y flexibilidad en lugar de opacidad.

— La calidad como pilar esencial sobre el que han de pivotar tanto la función docente como la investigadora, y las tareas de

⁷ Manejo el texto que aparece en http://www.aneca.es/modal_eval/docs/mensaje_convencion_salamanca.pdf

dirección y de administración, debiendo mostrar también su reflejo en la capacidad de respuesta a las necesidades de los estudiantes y en la prestación de otra clase de servicios, no exclusivamente educativos. Una meta que para hacerse realidad requiere el hallazgo de un difícil equilibrio entre tradición e innovación, entre excelencia académica y oportunidad económica y social y entre coherencia de los planes de estudio y libre configuración del currículo por los estudiantes, debiendo ser objeto de consideración en su valoración la misión y los objetivos asignados a cada institución y a cada programa.

El papel fundamental llamado a cumplir por este deseable incremento de la calidad viene subrayado por su caracterización como un presupuesto indispensable para dotar al EEES de otros rasgos esenciales, como son:

a) Confianza: es decir, la fabricación de un ambiente de credibilidad, sustentado en el aval ofrecido por la existencia de unos mecanismos fiables de reconocimiento mutuo de los criterios de medición de la calidad.

b) Pertinencia: consistente en la adecuación de las enseñanzas a las demandas del mercado laboral. Aspecto que exige una diversificación y flexibilización de los cursos y programas y la provisión a los estudiantes de competencias transversales, como los idiomas, las habilidades de comunicación y de manejo de la información, el trabajo en equipo o la facultad de desenvolverse en el entorno social.

c) Movilidad: basada en la extensión de la libre circulación de estudiantes y profesores en sus dos dimensiones, física y virtual, al amparo de instrumentos como los créditos ECTS o el Suplemento al Diploma, la red NARIC/ERIC, o la supresión de los requisitos de nacionalidad y de otras barreras que complican enormemente la posibilidad de emprender una carrera académica de trayectoria transnacional.

d) Compatibilidad: de las calificaciones a los niveles del pregrado y del postgrado, reinando el acuerdo acerca de que el primero deberá comportar entre 180 y 240 créditos y ofrecer una doble opción para quienes quieran acceder inmediatamente a un empleo y quienes tengan intención de acceder al segundo ciclo. No obstante, se admite la posibilidad de que, en determinadas circunstancias,

una universidad ofrezca un currículo integrado que permita obtener directamente un título de Master.

e) Atractivo: se plantea como objetivo el que las instituciones educativas europeas sepan rodearse de las condiciones precisas para poder captar alumnos procedentes del mundo entero, identificándose como soluciones concretas imprescindibles para lograrlo la configuración de un sistema de titulaciones legible y exportable, la introducción de resortes garantes de la calidad, la oferta de cursos en lenguas foráneas, la dotación de becas y ayudas para estudiantes extranjeros, el desarrollo de potentes campañas informativas y de marketing y la eliminación de las restricciones a la inmigración y a la incorporación al mercado laboral.

2. Informes de la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea. Bruselas 27 de noviembre de 2001 y 1 de agosto de 2002

Compartiendo el título *From Prague to Berlin, the EU Contribution*, la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea emitió, en el intervalo entre ambos eventos, sendos informes, que al tiempo que suponían una evaluación de los acuerdos alcanzados en la capital checa, contenían una serie de propuestas concretas destinadas a apoyar su continuidad y a preparar los debates de la próxima conferencia, convocada para el año 2003 en Berlín.

En el primero de ellos⁸, de 27 de noviembre de 2001, el interés principal reside en el decálogo de medidas inmediatas sugeridas con este propósito:

a) Adopción de un sistema fácilmente legible de grados comparables:

1. La generalización del Suplemento al Diploma, aumentando sustancialmente la comprensión y el reconocimiento de los grados a todos los niveles.

⁸ Véase <http://www.uc3m.es/uc3m/gral/IG/NOR/UNIV/from-prague-berlin.pdf>

b) Establecimiento de un sistema de créditos:

2. La puesta en marcha de un amplio plan piloto, basado en la experiencia del sistema ECTS, enfocado a ensayar un *European Credit Accumulation System for Lifelong Learning*, en virtud del cual los ciudadanos puedan acumular los diferentes créditos que hayan ido obteniendo a lo largo de su vida académica, tanto a través de enseñanzas regladas como no regladas.

c) Promoción de la movilidad:

3. La elaboración de una Carta del Estudiante Sócrates-Erasmus, en la que se especifiquen con claridad los derechos y obligaciones de los estudiantes implicados en estos programas de intercambio.

4. La creación de una red de Universidades Virtuales Europeas, con el fin de ofrecer a los ciudadanos acceso a una extensa gama de cursos de dimensión europea e incentivar la combinación de la movilidad física y la virtual.

d) Promoción de la cooperación europea en el aseguramiento de la calidad:

5. La prestación de una especial atención al desarrollo de una «cultura de la calidad», en colaboración con la Asociación Europea de Universidades. Esta iniciativa debería ayudar a las universidades a introducir mecanismos internos de control de la calidad y a prepararse mejor para superar las evaluaciones externas.

6. El lanzamiento de un plan piloto de Evaluación de la Calidad de la Educación Superior Europea, destinado a medir el posible campo de acción de las formas de evaluación transnacional, cubriendo profesiones reguladas y no reguladas .

e) Extensión de la dimensión europea de la educación superior:

7. La definición y la implementación de masters y cursos de doctorado europeos, ya que son susceptibles de contribuir extraordinariamente a mejorar la calidad y la visibilidad de la Educación Superior Europea.

f) Potenciación del atractivo del EEES:

8. La construcción de una base de datos, al alcance de todos los ciudadanos, donde quede recogida toda la oferta de oportunidades educativas y laborales existentes a escala europea.

9. Una concentración de esfuerzos, dirigida a generar sinergias entre el Espacio Europeo de Educación Superior y el Espacio Europeo de Investigación.

g) Supervisión, informes y seminarios:

10. La Comisión Europea se compromete a contribuir al desarrollo del proceso de Bolonia mediante la asunción de una función de supervisión, la confección de informes y la organización de seminarios.

El segundo texto, que constituye un desarrollo del anterior, se centra fundamentalmente en determinar las vías, las fases, los plazos y los órganos previstos para la materialización de las diez medidas citadas, por lo que no parece necesario que aquí nos detengamos en su detalle. No obstante, si resulta digna de mención la afirmación contenida en su parte introductoria, de que desde la perspectiva de la Unión Europea, el proceso de Bolonia encaja dentro de una agenda más amplia, definida por los Jefes de Estado y de Gobierno en los Consejos Europeos de Lisboa (2000) y Barcelona (2002), y consistente en la conversión de Europa en *«the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world, capable of sustainable economic growth with more and better jobs, and greater social cohesion»*⁹.

3. Informe de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte del Parlamento Europeo de 24 de mayo de 2002

Presentado ante el Parlamento Europeo el 24 de mayo de 2002 por su ponente, Cristina Gutiérrez Cortines, este extenso informe¹⁰, que comienza desplegando una exhaustiva relación de las disposiciones comunitarias aplicables a la materia, introduce después una amplia serie de consideraciones y recomendaciones, entre las que por su novedad y particular interés podemos destacar las siguientes:

⁹ Obtengo este segundo documento en <http://www.uc3m.es/uc3m/gral/IG/NOR/UNIV/from-prague2.pdf>

¹⁰ Su contenido puede conocerse acudiendo a: http://www.aneca.es/modal_eval/docs/resolucion_parlamento_europeo_universidades.pdf

— En cuanto a la apuesta por la calidad se entiende que ésta debe fomentarse a través de exámenes externos transparentes y fácilmente accesibles, recomendándose, además que en el caso de la evaluación de los sistemas universitarios nacionales, se tengan en cuenta como elementos relevantes la disponibilidad de fondos para becas, los subsidios concedidos a los estudiantes escasos de recursos, la existencia de residencias universitarias y la prestación de asistencia sanitaria.

— Para estimular la movilidad, se solicita a los Estados miembros y a las universidades que adopten las soluciones necesarias para remover los trabas jurídicas y administrativas que la dificultan, que establezcan métodos sencillos y flexibles de tramitación y reconocimiento de estudios y títulos, incluso cuando no exista equivalente en su país, y que rebajen la rigidez del estatuto de funcionarios, profesores e investigadores con el fin de permitir que se produzcan nuevas incorporaciones. Por otra parte, se insta a una toma de conciencia sobre la importancia del aprendizaje de lenguas extranjeras, y se aconseja que se organicen cursos para facilitarlos.

— Se señala que es preciso crear redes y servicios públicos comunes a escala europea para favorecer la difusión y el acceso a la información científica, técnica y bibliográfica.

— Se insiste en la conveniencia de diseñar estudios y titulaciones comunes y masters europeos, y se pide a las autoridades competentes que ensanchen la dimensión práctica de la enseñanza.

— Se resalta la necesidad de impulsar la actividad deportiva en la universidad y la organización de competiciones de carácter regional, nacional e internacional.

— Se hace una llamada a las autoridades responsables de las políticas de becas y ayudas para encuentren los medios de incrementar sus cuantías, sobre todo las ofrecidas para la realización de estudios en el extranjero; además se sugiere que, al menos en el tercer ciclo, se de prioridad al criterio del mérito sobre el volumen de la renta familiar.

— Se demanda de la Comisión Europea y los Estados miembros que prevean y capten nuevas fuentes de financiación, pública y privada, y que coordinen sus estrategias para incentivar los estudios de postgrado y doctorado.

— Se recomienda el desarrollo de institutos de investigación vinculados a las universidades y la creación de redes transeuropeas entre estos centros de investigación.

— Además, se insiste en la necesidad de crear una red europea de investigación, apoyada por fondos públicos, que sirva para limitar los perjuicios que para los países comunitarios, y sobre todo para los terceros en vías de desarrollo, se derivan del coste de las patentes que gravan ciertos productos como los agrícolas, los farmacéuticos y los requeridos de altas tecnologías.

— También se alienta la incorporación a los centros de educación superior de programas de educación continuada, y especialmente los destinados a proporcionar competencias profesionales actualizadas a adultos prematuramente excluidos, por factores coyunturales, de determinadas esferas laborales.

— Se apoya la integración en el sistema educativo europeo de las universidades privadas, pero condicionada a que mantengan una gestión transparente y sometida a los mecanismos estandarizados de evaluación de la calidad.

— Se aconseja la promoción de las universidades a distancia y el uso de las nuevas tecnologías para impartir títulos y facilitar el acceso al conocimiento de los sectores más desfavorecidos, las personas con necesidades específicas y las mujeres.

Ahora bien, junto a esta batería de sugerencias, también se hace referencia a un buen número de problemas, que obligan a rebajar los juicios satisfactorios sobre los progresos realizados en el proceso de construcción del EEES. Entre ellos:

— El bajo reconocimiento mutuo de diplomas alcanzado.

— Poco más del 1% de la población estudiantil se haya implicado en el programa Erasmus y similares.

— No se han logrado romper las barreras a la movilidad levantadas por unos modelos universitarios enclaustrados en una excesiva protección de su autonomía y en la tendencia a la endogamia.

— El escaso entusiasmo y espíritu de cooperación con los que han sido recibido los mecanismos de evaluación externa de los centros y universidades.

— Las reticencias encontradas por los intentos de armonización de la arquitectura de las titulaciones. No obstante, el buen resultado logrado con el proyecto piloto TUNING en las cinco disciplinas hasta ahora analizadas hace prever un desenlace igualmente positivo para la segunda oleada, en la que actualmente se haya incluida la titulación en Derecho.

— El papel secundario al que por razones de competencia legislativa se han visto hasta ahora relegadas las universidades

— La falta de coordinación entre las universidades. En este sentido, se propone la creación de una Sede de las Universidades Europeas, que sirva de centro de encuentro, de debate, de intercambio de información y de experiencias y de gestación de decisiones y proyectos comunes y que fomente la convergencia y la competitividad en los ámbitos europeo y mundial

— Las dificultades de coexistencia y de recíproca aceptación como complementarias entre las universidades públicas y privadas.

4. Mensaje de la II Convención de Instituciones Europeas e Enseñanza Superior. Graz 29 a 31 de mayo de 2003

Planteada como continuación de la celebrada en 2001 en Salamanca, en esta reunión se formularon interesantes conclusiones¹¹ en relación con cinco grandes campos de reflexión:

1. Papel de la educación superior y de la investigación en el contexto de un mundo globalizado, dominado por las fuerzas económicas y las reglas del mercado, y su capacidad de contribuir a la obtención de un equilibrio entre éstas y las necesidades de la sociedad. La cuestión más relevante que en este aspecto se plantea es la de si dentro de este escenario cada vez más uniforme tiene cabida la especificidad de un sistema europeo de educación superior.

2. Replanteamiento de los vínculos entre la educación superior y la investigación a partir de la introducción de la estructura en dos ciclos y del impacto que esta va a tener sobre los estudios de doctorado.

3. Consolidación de una cultura de calidad dentro de las universidades europeas. Definición de prioridades para futuras acciones en dos grandes esferas: respecto a la responsabilidad interna de las instituciones y en el ámbito de los procedimientos públicos de evaluación.

4. Desarrollo de los instrumentos de gobierno y de gestión de las instituciones y las universidades, que si bien están llamadas a asu-

¹¹ Versión inglesa disponible en <http://eua.uni-graz.at/intro.html>

mir un mayor protagonismo, también deben demostrar su capacidad para gestionar eficazmente sus propios asuntos.

5. Valoración de los avances conseguidos en la realización de los objetivos fijados en Bolonia y en Praga.

5. Declaración de la *National Unions of Students in Europe*.
Goteborg, 25 de mayo de 2001

Dentro del escaso protagonismo asumido, o más bien concedido, a las organizaciones estudiantiles en todo este proceso, merece ser destacada esta temprana declaración emitida por la asociación europea de sindicatos nacionales, presente ya en la conferencia de Bolonia y principal interlocutora por parte de este estamento con las instituciones comunitarias.

Un manifiesto¹² que comienza subrayando la importancia fundamental que el proyecto de creación del EEES, de responsabilidad compartida por todos los países, está llamada a tener en la implantación de una Europa sin fronteras para sus ciudadanos y en el desarrollo de políticas de cooperación y solidaridad entre los Estados que la integran.

No obstante, los representantes estudiantiles adoptan una posición crítica respecto a lo que califican como un fracaso en la percepción de las consecuencias sociales que el proceso comporta para su colectivo. Cierto es que puede suponer una extraordinaria ampliación de las posibilidades de adquisición de los conocimientos y capacidades necesarios para su futuro desenvolvimiento personal y profesional, pero debe recordarse que la totalidad de los miembros de la comunidad universitaria debe verse envuelta en el mismo y que los estudiantes no son meros consumidores de unos servicios educativos mercantilizados, por lo que constituye una obligación para los gobiernos garantizar que el conjunto de los ciudadanos, sin excepciones, tenga idéntico acceso a la educación superior con independencia de su procedencia social, mediante la provisión de las ayudas económicas que sean precisas para ello.

¹² El texto original en <http://www.uc3m.es/uc3m/gral/IG/NOR/UNIV/Goteborg.pdf>

Por otra parte, se dice, la accesibilidad y la diversidad, que ya tradicionalmente han representado los pilares sobre los que ha sustentado la educación europea, deben seguir siéndolo junto a una promoción de la calidad hacia la que debe converger la unanimidad de los esfuerzos. Y para lograr este objetivo hay que asegurar que todos los programas de enseñanza superior sean compatibles e intercambiables a través de la generalización de un sistema homogéneo de créditos, basado en la carga de trabajo, y de la consolidación de unos criterios comunes de acreditación y de un esquema de grados, articulado en dos niveles, transferibles y mutuamente reconocibles.

Medidas que inexcusablemente deben venir acompañadas de una fuerte potenciación de la movilidad de los estudiantes, profesores, administradores e investigadores, pudiendo convertirse, además, en una vía idónea para la promoción del acercamiento intercultural y de la tolerancia. Aunque frente a ella se levantan graves obstáculos, no solo académicos, sino también sociales, económicos y políticos, que deben ser removidos con soluciones como las de la igualación de los derechos de los estudiantes extranjeros a los de los nacionales, la articulación de adecuados cauces de transmisión de cualquier información relevante, complementada con la elaboración de bases de datos para su consulta, y la propagación del uso del Suplemento al Diploma.

Finalmente, se reivindica que, como copartícipes activos, competentes y constructivos, los estudiantes deben ser considerados como una de las fuerzas motoras del cambio en el campo de la educación, por lo que no deben ser excluidos en la toma de decisiones concernientes a la implementación del proceso de Bolonia.

6. Declaración de la ELFA (*European Law Faculties Association*) de 31 de mayo de 2002

Fundada en 1995, la ELFA es la organización representativa de las Facultades de Derecho de los países europeos, de las que aproximadamente la mitad figuran como miembros. En su seno se organizan conferencias anuales, en las que, con presencia también de políticos y de expertos ajenos a las Facultades, se debaten los asuntos más relevantes acerca de la enseñanza y el aprendizaje del Derecho.

Fruto de los debates sostenidos en dos de estas conferencias, las celebradas en Milán y Riga, en febrero de 2001 y de 2002 respectivamente, el Consejo de Dirección de la asociación elaboró un documento destinado a medir y valorar, haciendo gala de un estimable sentido crítico, las consecuencias de las declaraciones de Bolonia y Praga sobre la educación jurídica en Europa. El mayor interés del documento descansa en el hecho de que con independencia de que los redactores se manifiesten completamente a favor del espíritu y los principios consagrados en la Declaración de Bolonia, introducen una serie de objeciones a la plasmación efectiva de sus dictados, que cobran especial sentido para nosotros por plantearse a partir de las preocupaciones propias de nuestra disciplina. Veamos cuáles son esas observaciones¹³:

1. Se admite que el modelo de organización de los estudios en tres niveles: licenciatura/ master/doctorado (3/5/8 años) ofrece las ventajas de su simplicidad y transparencia, si bien se advierte acerca de la necesidad de que este proceso sea cuidadosamente supervisado y evaluado para evitar una dispersión de las diversas iniciativas.

2. No obstante, se afirma que este sistema no resulta totalmente compatible con las necesidades y las condiciones de la educación y la práctica profesional, lo que parece especialmente grave desde que el recíproco reconocimiento de títulos y el derecho de establecimiento de los abogados han sido regulados por sendas directivas comunitarias. Por eso, se entiende imprescindible llevar una política coordinada de fijación de unas reglas mínimas para el acceso a las profesiones jurídicas, con el fin de anular las distorsiones a la libre competencia introducidas por la existencia de distintos requisitos o por la diferente duración de los estudios exigidos.

3. A pesar de que una de las indicaciones más novedosas contenidas en la declaración de Bolonia reside en la introducción de la posibilidad de la consecución de un grado de Licenciatura después de tres años de estudios, esta solución, ya factible en países como Francia o el Reino Unido, no es aceptada en la mayoría de ellos. Es más, en algunos países se está barajando la opción de crear una modalidad corta

¹³ El texto original en inglés se ofrece en <http://elfa.bham.ac.uk/>. Una versión, incompleta, traducida al castellano está accesible en: http://www.elfa-afde.org/PDF/Sorbonne%20Bologna/Latter_Reding_Spanish.pdf#search=%

(*fase-track*) de licenciatura en derecho, no susceptible de abrir un acceso inmediato a las profesiones puramente jurídicas.

En este sentido, no hay que olvidar que todas las jurisdicciones europeas, con la única excepción de España, requieren una formación teórica y/o práctica adicional, normalmente de un mínimo de dos años, o incluso más. Lo cual anuncia la dificultad de establecer un marco general para todo el EEES.

4. Todavía resta pendiente de decisión si la Licenciatura y el Master deben dar lugar a la obtención de dos grados diferenciados. De hecho, muchas facultades otorgan a estudiantes ya formados en derecho un diploma suplementario, que amplía sus perspectivas laborales y que, aparentemente, podría acabar integrado en el sistema de Bolonia.

5. La declaración de Bolonia guarda un silencio significativo sobre dos aspectos que se antojan fundamentales. El primero de ellos concierne al ingreso en los estudios de Derecho, que en ciertos países es sometido a determinados filtros (*numerus clausus*, exámenes selectivos, entrevistas...), aunque falta una uniformidad que se adivina difícil de conseguir, y que plantea la paradoja de que el derecho de los estudiantes a cursar un período de sus estudios en una o varias facultades o centros extranjeros debe ser garantizado a todos aquellos que fueron admitidos en su país de origen, no pudiendo someterse a restricciones o condicionarse al cumplimiento de los requisitos exigidos en el país donde desean realizar una estancia temporal.

6. La otra laguna importante afecta a la financiación de la educación superior. En la mayoría de los Estados europeos ésta ha venido siendo sostenida por los recursos públicos, pero, sobre todo en los países de la Europa oriental (Polonia, Hungría, República Checa...), es apreciable un progresivo protagonismo de las escuelas jurídicas privadas, cuyo soporte económico reposa, primordialmente, en la percepción de altas tasas de matrícula. Esta tendencia suscita el temor de que los gobiernos caigan en la tentación de descargarse de responsabilidad respecto a la subvención de los estudios de grado, lo que puede provocar el endeudamiento de los estudiantes y comprometer el futuro profesional de los menos pudientes.

Por otra parte, se señala que si el sistema europeo de educación jurídica realmente quiere competir con éxito con el modelo norteamericano, se advierte inexcusable emprender una serie de pasos más ambiciosos que los hasta ahora iniciados.

a) Se ha prestado escasa atención a la necesidad de que en los programas de licenciatura y de doctorado se eviten estériles repeticiones de materias. Para ello se propone:

1. El programa del grado debe dedicarse a un estudio comprensivo del derecho nacional, centrándose en las disciplinas esenciales (constitucional, administrativo, penal, civil y procesal), que deben ser abordadas con un enfoque más metodológico que de contenido y completarse con otras asignaturas optativas. Al finalizar esta fase, que en ningún caso debe prolongarse más de cuatro años, sería posible realizar un examen de licenciatura.

2. El Master debería consistir en cursos especializados de proyección europea sobre derecho constitucional, administrativo, mercantil, propiedad intelectual, medio ambiente, competencia y derecho de los consumidores. Su duración no debería exceder de dos años y reportar, después de superar un examen especial, un título reconocido en todo el espacio europeo.

3. Este esquema no excluye la alternativa inversa, en la que el estudio del derecho nacional se retrasa hasta el Master, al modo de las *Law Schools* norteamericanas, si bien se estima conveniente ensayarlo antes a través de proyectos piloto.

b) El modelo de Bolonia debería ofrecer la oportunidad de consolidar un sistema transfronterizo. De tal manera que el título de grado podría ser obtenido en el país de residencia del estudiante, permitiéndole, tras el pertinente período adicional de práctica, ejercer profesionalmente en el mismo, mientras que el título de Master completado luego en otro país europeo debería granjearle un acceso inmediato, sin exámenes o trámites añadidos, a una formación jurídica profesional en éste país distinto del suyo. Esta acumulación de grados requiere una celebración de convenios entre facultades o centros educativos de los distintos Estados, que ya está dando sus primeros ejemplos y resultados.

c) La ELFA no pretende decidir que modelo de organización de los grados deben adoptar las facultades de Derecho europeas, ya que esto dependerá de cómo cada una prefiere responder a las características de sus estudiantes. Pero, en todo caso, se recomienda un

cierto grado de flexibilidad y de experimentación. Las asociaciones profesionales o las comisiones estatales examinadoras no deberían fijar unas condiciones demasiado restrictivas para el acceso a las profesiones jurídicas, que debería ser posible, como máximo, después de seis años (3+2+1 o 4+1+1 o 3+1+2).

d) El proceso de europeización y flexibilización de la enseñanza jurídica va a necesitar una cuidadosa supervisión, que podría resultar de la evaluación y la posible acreditación de verdaderos modelos europeos de estudio. Tarea que podría ser encomendada a la propia ELFA, en cooperación con relevantes universidades y asociaciones profesionales

Bastante menos ilustrativo resulta, a mi parecer, otro extenso documento emitido el 4 de julio de 2003 por la *European University Association* con el título: *Después de Berlín: el papel de las universidades hasta el 2010 y más allá*, ya que, en realidad, más que nada constituye la formulación de un amplio compromiso de colaboración y de actuación, adquirido por las universidades europeas para hacer posible la efectiva y puntual materialización de las directrices trazadas por los responsables educativos comunitarios, pero sin aportar ideas o propuestas verdaderamente novedosas en relación con estas¹⁴.

C. *La adaptación del modelo de Bolonia en los distintos países europeos*

1. La estructura de las titulaciones

Es ya sobradamente conocido que el modelo de organización de los estudios superiores vinculado al proyecto de creación del EEES se basa en una división en tres niveles:

— Un primer ciclo de tres años, que da opción a un título de grado

22ELFA%22.

¹⁴ Valoración que puede contrastarse en <http://www.uc3m.es/uc3m/>

- Un programa de Master de uno o dos años que conduce a un título de postgrado
- Un programa de doctorado de, al menos, tres años.

No obstante, en lo tocante al ámbito del Derecho, el proceso de implantación de este esquema uniforme todavía dista mucho de haber logrado similares índices de concreción en los distintos países europeos, en los que sigue reinando una sorprendente diversidad de arquitecturas educativas, poco comprensibles y comparables entre sí, dando la impresión de que en su diseño siguen primando más los intereses o las tradiciones nacionales que las políticas de adecuación a las exigencias de ese EEES en construcción.

Por lo pronto, mientras en una buena parte de los mismos se han emprendido ya las oportunas reformas legislativas dirigidas a canalizar esta adaptación, existen otros en los que estos cambios se hallan aún en su fase de debate, e incluso hay algunos (Grecia, Islandia, Inglaterra y Escocia), en los que no se contempla la introducción de modificaciones en sus sistemas vigentes, por considerarlos compatibles con el que ahora les es propuesto.

Estas disonancias se repiten en cuanto a la estructura de los grados, siendo posible identificar una pasmosa gama de soluciones diferentes¹⁵:

1. Países que utilizan la fórmula tipo (3+2 años): Bélgica (zona francófona), Dinamarca, Finlandia, Francia, Hungría, Liechtenstein (también 2+2), Noruega y Suiza.

Dentro de este grupo, Suecia adopta fórmulas distintas para la obtención del título de magíster (3+1) y de licenciado (3+2).

2. Países que utilizan la fórmula 4+1: Bulgaria y Chipre.

3. Países que combinan las fórmulas 3+1 y 3+2: Bélgica (zona flamenca) Italia y Países Bajos.

gral/IG/NOR/UNIV/graz/pdf.

¹⁵ Para elaborar este cuadro he utilizado la información proporcionada por Carmen Ruiz-Rivas Hernando, *La estructura de las titulaciones en Europa*, ponencia presentada en la Universidad Autónoma de Madrid el 17 de noviembre de 2003, que he podido consultar en <http://www.uc3m.es/>

4. Países que combinan las fórmulas 3+2 y 4+1: Alemania, Austria, Croacia, España, Estonia, Irlanda, Islandia, Letonia, Rumania. En Eslovaquia y la República Checa además de éstas también cabe un postgrado de 3 años.

5. Países que combinan las fórmulas 3+1 y 4+1: Reino Unido (Escocia e Inglaterra).

6. Países que utilizan la fórmula 4+2: Rusia, Lituania y, tal vez, España respecto a Derecho.

Otras soluciones: Portugal (en algunas disciplinas 4+2 y en otras 5); Grecia (sistemas de 4+2, 5+2 y 6 + doctorado); Luxemburgo (3 o 4 y master en universidades extranjeras).

Ante este complejo panorama, se antoja que puede resultar de utilidad fijar más detenidamente la atención en las particularidades de algunos de estos países, y en especial en las específicas de los estudios de Derecho¹⁶.

Alemania¹⁷

Regulado ya mediante sendas leyes de 20 de julio de 2001 y de 8 de agosto de 2002, el nuevo esquema general adoptado se articula en tres niveles:

uc3m/gral/IG/NOR/UNIV/paises_estructura_titulaciones_ppt.

¹⁶ En el desarrollo de este análisis, será repetidamente utilizado el informe incluido como Parte primera: «Los estudios de Derecho en Europa y su adaptación al proceso de Bolonia. Propuesta para España», en el *Libro Blanco de Grado en Derecho*, cuyo borrador, actualmente en trámite de aprobación, con carácter previo a su publicación, esta disponible en la página web de la ANECA: http://www.aneca.es/modal_eval/docs/libroblanco_derecho01-borrador.pdf. La coordinación de este apartado del libro correspondió a Manuel Ramón Alarcón Caracuel, correspondiendo su elaboración a Mar Campins, Rafael Arenas y Ferrán Camas.

¹⁷ En este examen de la situación en Alemania me he basado fundamentalmente en Johannes Riedel (Director del Departamento de Educación Jurídica del Ministerio de Justicia de Rhin Norte/Vestfalia), «The Reform of Legal Education in Germany», en *European Journal of Legal Education*, 0

1. Grado, al que, normalmente, se llega con 19 años, y que tiene una duración de tres años (180 ECTS)
2. Master, en el que hay emplear dos años (120 ECTS)
3. Doctorado, tras la conclusión del Master, que requiere entre 3 y 4 años.

Sin embargo, las Facultades de Derecho han mostrado una fuerte resistencia a la asimilación de este modelo, esgrimiendo tres argumentos principales:

A. Supondría una sensible merma de calidad porque tres años no pueden ser suficientes para adquirir el amplio conocimiento de las materias centrales y la formación metodológica demandados en el primer examen estatal. Lo que exigiría prescindir de toda concesión a la especialización y la introducción de cursos y exámenes adicionales.

B. La dificultad de aceptar que un simple título de grado pueda servir para capacitar para el desempeño de cualquier profesión jurídica. En Alemania no hay apenas ámbito de empleo abierto a quienes, habiendo superado el primer examen estatal, no han completado el período de formación práctica (actualmente no más de un 10 % de los estudiantes).

C. Se considera que carece de sentido que se debata sobre una nueva reforma antes de que otras importantes modificaciones impulsadas por el Parlamento hayan sido implementadas por las Universidades.

Sensible a estos alegatos, a pesar de que también se han dejado oír voces advirtiendo del aislamiento en que puede caer el sistema alemán de educación superior respecto al resto de Europa y del obstáculo que ello puede suponer, entre otros aspectos, para el reconocimiento externo de sus títulos, la elaboración de programas conjuntos con universidades foráneas o la captación de estudiantes extranjeros¹⁸, el Ministerio de Educación alemán ha excluido las

(2001), 3-10 y «The Bologna Process and its relevance for Legal Education in Germany», en *European Journal of Legal Education*, 2, 1 (2006), 59-62.

licenciaturas en Derecho y Medicina de la obligación de incorporarse a las pautas de Bolonia, por lo que continúa vigente la estructura tradicional, articulada del siguiente modo:

1. Superación del *Rechtes Staatsexamen* después de cursados cuatro semestres (en realidad comportan, al menos, cuatro años) basados en el estudio de los derechos constitucional, administrativo, penal, civil, y procesal, además de la teoría del derecho y sus fundamentos históricos, filosóficos y sociológicos y de otras materias jurídicas optativas.

2. Realización de una pasantía, *Referendardienst*, de 18 meses, gestionada por los Ministros de Justicia estatales en la que, sin abandonar las clases teóricas, se pasan sucesivas etapas de tres meses de prácticas en un juzgado civil, un juzgado penal, en dependencias administrativas locales y junto a un abogado, y que permite presentarse a un segundo examen estatal, *Zweites Staatsexamen*, que ya capacita para trabajar en la administración pública, actuar como juez o ejercer en el foro.

Se trata, por tanto, de la vieja concepción prusiana, dirigida a moldear el jurista completo, que está capacitado para asumir una amplia gama de funciones, e incluso para iniciar, ya que no se requiere otra formación complementaria, su carrera profesional como juez. Lo que conduce a la exigente consecuencia de que lo que podría considerarse el más alto nivel de cualificación tiene que imponerse como standard general en toda la enseñanza jurídica y como criterio de referencia en la confección de los exámenes.

¹⁸ Línea en la que se manifiesta Filippo Ranieri, «Les facultés de droit en Allemagne et l'espace universitaire européen: libres propos d'un universitaire européen sur la prise de position du président de l'association des facultés allemandes de droit» en *European Journal of Legal Education*, 2, 1 (2005), 63-65. En su opinión, el rechazo casi unánime en Alemania del modelo de un *bachelor of law* ajustado al esquema de Bolonia confirma que la mayoría de las Facultades alemanas quieren eludir todo sistema de comparación y de concurrencia a nivel europeo, prefiriendo refugiarse en planteamientos exclusivamente orientados a una escala nacional, que considera poco viables en un futuro próximo. Su escrito constituye una réplica a P. Huber, «Der Bologna prozess und seine Bedeutung für die

No obstante, últimamente han ido aflorando opiniones que cuestionan la permanencia de esta visión, por entender que resulta demasiado costosa en tiempo y dinero para el estudiante y enormemente difícil de conciliar con un universo jurídico cada vez más complejo y diversificado; y además, no más de un 5 % de los jóvenes juristas acaban involucrándose en la carrera judicial.

Por eso, desde 1996 ha crecido una intensa discusión acerca de la necesidad de acometer una reforma, en la que se han visto envueltas tanto las administraciones de los *Länder* como las Facultades de Derecho y las organizaciones profesionales. Incluso, en 1998 una mayoría de los ministros federales llegó a un acuerdo respecto a dos puntos esenciales: la integración de las enseñanzas teóricas y prácticas en un solo período de estudio, con la consiguiente reducción de los dos existentes a un único examen final, y la introducción de cursos de preparación práctica por separado para jueces, abogados y funcionarios. No obstante, la oposición de ciertos sectores, principalmente de los colegios profesionales, ha forzado a rebajar las peticiones de cambio, trasladándolas hacia objetivos menos ambiciosos, pero seguramente más realizables.

Así, se ha optado por mantener un elevado nivel de formación, general, uniforme y válido para todas las profesiones, pensando que ello evitará tener que introducir vías de especialización posteriores a la finalización de los estudios. Igualmente, en consonancia con el sistema imperante en los demás países europeos, persiste la división en dos fases, teórica y práctica, cada una objeto de un examen. Aunque también se admite una mayor flexibilidad en la posibilidad de aumentar las expectativas laborales mediante la orientación del currículo personal hacia determinadas disciplinas jurídicas o campos profesionales. Y, en particular, se asegura una mayor preparación específica a aquellos, cada vez más numerosos, que desean dedicarse a la actividad privada como abogados, a través, por ejemplo, de la inclusión de materias como la deontología, o del requisito adicional de haber pasado un período de prácticas de, al menos, doce meses con un abogado, así como del aprendizaje de técnicas como las encaminadas a descubrir el mejor interés del cliente, identificar los hechos del caso y concebir las estrategias más adecuadas para conducirlo.

Sobre todas estas medidas existe un amplio consenso, suscrito incluso por los colegios de abogados, ya que con ellas se busca conciliar dos tendencias aparentemente conflictivas: de un lado, el desarrollo moderno de las profesiones jurídicas plantea la demanda de

un mayor grado de especialización en un momento temprano de la formación; y al tiempo, estos rápidos y profundos cambios hacen todavía más necesario proveer a los jóvenes juristas de un bagaje metodológico y de una vasta visión de las disciplinas, técnicas y capacidades jurídicas básicas, para colocarles en situación de afrontar cualquier trabajo dentro de la enorme variedad de las ocupaciones vinculadas al ámbito del derecho.

En la misma línea, se han propuesto también algunas importantes modificaciones en la concepción del examen estatal, en el sentido de centrar éste en las disciplinas nucleares del plan, y completarlo con otra prueba ofrecida por su universidad, relativa a otras materias específicas elegidas por el propio alumno, que podría aportar hasta un 25% de la calificación final. E igualmente, se sugiere que, además de las habilidades típicas del jurista (gestión de conflictos, negociación, retórica) se evalúen otras destrezas relacionadas con campos afines como la sociología o las lenguas extranjeras (terminología técnica), dirigidas a revalorizar la dimensión sistemática y comprensiva de la adquisición del conocimiento.

Con todo, hay que hacer notar que la estructura del Estado, que obliga a los *Länder* a respetar la legislación federal y el principio constitucional de autonomía universitaria, convierte en inviable una regulación detallada de estas cuestiones, por lo que los proyectos de reforma sólo se pueden montar sobre la base de recomendaciones y no sobre leyes impuestas.

Reino Unido¹⁹

El presupuesto de partida en el Reino Unido estriba en la coexistencia de cuatro regímenes de educación superior y tres regulaciones legales prácticamente autónomos entre sí: la de Inglaterra y Gales, la de Escocia y la de Irlanda del Norte. Y también hay una

deutsche Juristenausbildung», en *European Journal of Legal Education*, 1 (2004), 35.

¹⁹ En este punto nos serán de gran utilidad: Julian Lonbay, «University training: the implications of the Bologna declaration for the UK» en *European Journal of Legal Education*, 0 (2001), 11-29 y la ponencia titulada *Legal Education and Bologna: A British Perspective*, presentada por John Bell el 18 de febrero de 2005 en el seno de la Conferencia de la ELFA cele-

diferencia en cuanto a los abogados entre los *advocates* escoceses y los *barristers* de los otros dos sistemas.

Esta diversidad tiene asimismo reflejo en la estructura de las titulaciones, pues mientras en Escocia persisten la presencia de un primer ciclo de cuatro años, *honours*, al que normalmente se accede con 17 años, y un sistema propio de créditos (SCOTCATS), en el resto de los territorios rige el esquema tradicional británico, basado en una división en dos ciclos:

— *Ungraduate*: al que los estudiantes suelen llegar con 18 años y que se descompone en tres niveles, correlativamente correspondientes con los tres años de su duración, dando el primero derecho a un *Certificate*, el segundo a un *Diploma* y el tercero al *Bachelor's Degree* o a un *Honours Degree* (180 ECTS). La obtención de este último abre ya al estudiante graduado las puertas del mercado laboral.

— *Graduate*: que permite obtener el título de Master (120 ECTS) o el de Doctorado.

Un esquema que por su entramado no presenta especiales dificultades para una adaptación del modelo de Bolonia (3/5/8), que esta previsto completar a lo largo del presente año. Así, con el fin de encauzar y supervisar este proceso se han creado una serie de instrumentos, que intentan asegurar el cumplimiento de los principales objetivos definidos en la declaración boloñesa.

En este sentido, ante la escasa atención prestada en el pasado al control de la calidad educativa, que se ha sustentado básicamente en el dudosamente fiable recurso de la remisión a examinadores externos de las pruebas realizadas por los alumnos, recientemente se ha creado la *Quality Assurance Agency* (QAA), encargada de recoger información y valorar las características y los resultados de la red de universidades británicas, con excepción de las escocesas. Tarea para la que se ha confeccionado un *National Frameworks for Higher Education Qualifications*, destinado a asegurar un uso consistente de los títulos y, en particular, a facilitar la comparabilidad internacional de los mismos y de las propias universidades.

Pero la labor de la QAA no se reduce a estos aspectos, sino que también proporciona una serie de indicadores (*benchmarks*), que buscan explicar los principales rasgos que deben adquirir los estu-

dios legales en sus diferentes escalones, aunque, como novedad, no se concentran en los contenidos del conocimiento, sino en su aplicación. Por ejemplo, tratan de responder a cuestiones prácticas como las de si el estudiante es capaz de analizar el derecho, de encontrar sus fuentes, de investigar sobre él o de sintetizarlo y valorarlo críticamente, y también de escribir y expresarse correctamente, utilizar las herramientas informáticas o trabajar en equipo²⁰. Además, para comprobar la adecuación de las universidades a estas pautas, la QAA ha desarrollado un riguroso sistema de inspección, que no todas ellas han aceptado de buen grado.

Igualmente, se han creado una agencia de evaluación de la investigación, *Research Assessment Exercise*, RAE, cuya actuación está teniendo una inmediata incidencia sobre el volumen y la calidad de la producción de los profesores y los departamentos, y un *Institute for Learning and Teaching*, que ofrece su aval a cursos de aprendizaje y reciclaje que los docentes universitarios se ven empujados a completar.

Por añadidura, se están realizando importantes progresos en relación con la movilidad de alumnos y profesores y la recepción de estudiantes extranjeros, así como en la elaboración de planes conjuntos para poder impartir en las escuelas jurídicas británicas enseñanzas sobre los derechos alemán, francés, español o italiano.

Es conveniente hacer notar, finalmente, que aunque el número de estudiantes de derecho ha crecido sensiblemente en los últimos años (se ha pasado de 4000 licenciados en 1992 a 14000 en 2004), todavía subsiste el mecanismo de la previa selección de los alumnos por parte de los centros universitarios, lo que trae como consecuencia una baja tasa de abandono, ya que, en general, se trata de estudiantes talentosos y altamente motivados.

Francia²¹

Aparentemente, la adaptación del sistema francés de educación superior a los dictados emanados de Bolonia ha sido ejemplar por

brada en Graz en esas fechas. El texto está disponible en http://www.elfafde-org/PDF/Conferences/Bell_Graz.doc

²⁰ Una ilustrativa descripción de los criterios manejados por esta agencia puede obtenerse en los apéndices proporcionados por J. Lonbay, *University training*, pp. 18-29 y J. Bell, *Legal Education and Bologna*, pp. 4-5.

su rapidez y su fidelidad al modelo propuesto. No obstante, un mero análisis superficial de los resultados de la misma induce a la sospecha, extraoficialmente confirmada por algún responsable universitario del país vecino, de que lo que realmente se ha hecho ha sido aplicar una capa de maquillaje en algunas cuestiones puntuales y en las denominaciones para, a la postre, conservar la estructura organizativa preexistente.

Así, a partir del Informe Attali de 1998, desarrollado por una serie de decretos y disposiciones normativas complementarias²², se ha introducido el esquema 3/5/8 tipificado como deseable dentro del EEES.

En aplicación de tales medidas, en la actualidad los alumnos franceses ingresan en la Universidad a los 18 o 19 años para realizar un primer ciclo de tres años, distribuidos en semestres y módulos, que permite la obtención, al igual que ocurría antes, de la *Licence* (180 ECTS). En este ciclo queda subsumido el antiguo *Diplôme d'Etudes Universitaires Général* (DEUG) de dos años. Y de hecho las enseñanzas que se imparten en algunas universidades relevantes (París II, París X), reproducen en los dos primeros años el régimen clásico de lo que era el DEUG, al articularlas en torno a las materias centrales del derecho público (constitucional, administrativo, penal, financiero, comunitario) y del derecho privado (civil, mercantil), además de disciplinas complementarias como la teoría del derecho, la historia del derecho, el derecho romano, las relaciones internacionales o la ciencia política y el estudio de un idioma extranjero. En el tercer año se profundiza en los conceptos y la metodología de las materias fundamentales y se abre ya un cierto abanico de especialización. No obstante, hay que reconocer que la orientación de los estudios de licenciatura en las distintas universidades demuestra una notable diversidad, que no siempre resulta encajable dentro de este cuadro.

El título de *Licence* da acceso automático a la *Maîtrise* (60 ECTS), que consiste en una especialidad cursada en dos semestres,

²¹ Tomo como principal referencia el informe titulado *Implementation of the «Sorbonne/Bologna» Process objectives (1998-2003)*, presentado por la Dirección de Relaciones Internacionales y de Cooperación del Ministerio de Juventud, Educación e Investigación. Se halla en http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/France_report_eng.pdf

y que capacita para realizar el examen para acceder al ejercicio de la abogacía o a la magistratura. Sin embargo, el salto al Master (60 ECTS) desde la *Maîtrise* no es automático, estando condicionado a un proceso de selección muy severo. En el Master, que ocupa otros dos semestres, se ofrece una doble opción, la académica y la profesional, que también suponen un trasunto de los extintos *Diplome d'Etudes Approfondis* y *Diplome d'Etudes Supérieures Spécialisés*. Por último, la obtención del título de Master permite incorporarse al Doctorado, con una duración normal de entre tres y cuatro años.

Además de en la estructura de los grados, las autoridades educativas francesas presumen de su pronta y estricta observancia de las pautas boloñesas en otros aspectos como la introducción del Suplemento al Diploma²³, la convalidación de los estudios realizados en el extranjero, el uso de los créditos ECTS, la promoción y financiación de la movilidad, la implementación de cursos y estudios de proyección europea, la implicación de las instituciones y de las organizaciones estudiantiles en el proceso, la creciente atención a la llamada *lifelong learning* y la implantación de órganos de control y acreditación de la calidad como el *Comité National d'Evaluation* (CNE), coordinados con agencias internacionales como la ENQA.

Italia²⁴

La reforma normativa necesaria para encauzar la asimilación de las directrices de Bolonia ha venido impulsada por un Decreto de 3 de noviembre de 1999, cuya aplicación ha sido ya prácticamente completada. Así, gracias a un proceso gradual, cristalizado en el

²² *Décret* n° 2002-482 de 8 de abril de 2002. *Arrête* de 23 de abril de 2002, relativo a los estudios universitarios conducentes al grado de *Licence*. *Arrête* de 25 de abril de 2002, relativo al diploma nacional de *Master*.

²³ Decretos de 16 y 24 de abril de 2002.

²⁴ Como fuente de estas informaciones me he servido del *National Report on the Implementation of the Bologna Process*, presentado en julio de 2003 por la Dirección para la Autonomía Universitaria y la Unidad de Estudiantes para las Relaciones Internacionales, dependiente del Ministerio de Educación, Universidad e Investigación. El texto está en:

curso 2001-2002 para el primer ciclo y en el 2002-2003 para el segundo, los estudios de Derecho han quedado estructurados en tres ciclos, que responden fielmente al esquema ideal (3/5/8) recomendado desde las instancias comunitarias.

— El primer ciclo (180 ECTS), en el que los estudiantes habitualmente se integran a los 19 años, conduce a la obtención del título de *Laurea Triennale in Scienze Giuridiche*, que persigue como objetivo que los alumnos consigan un correcto dominio de los métodos, conceptos y contenidos generales, y que adquieran determinadas competencias profesionales.

Respecto a su contenido, por ejemplo, en la Universidad de Bolonia durante el primer curso se combinan las asignaturas de carácter fundamental (derecho constitucional, economía política, derecho privado, filosofía del derecho e instituciones de derecho romano) con las de contenido complementario (sociología del derecho, historia del derecho romano) y otras instrumentales (idioma extranjero, informática); en el segundo aparecen también materias básicas (entre ellas, el derecho civil, el derecho laboral, el derecho procesal civil, el derecho comparado en sus dos vertientes, público y privado, y la historia del derecho italiano) y otras optativas; lo que se repite en el tercer curso (derecho administrativo, derecho penal, derecho mercantil), en el que, además se pide la realización de una memoria final.

— El segundo ciclo (120 ECTS), que proporciona el título de *Laurea Specialistica in Giurisprudenza*, tiene un diseño encaminado ya a facultar al estudiante para el desempeño de una actividad profesional cualificada en ámbitos determinados. Se divide en dos años, en el primero de los cuales se cursa el *Master de primo livello* (60 ECTS), mientras que en el segundo se suele exigir la presentación de un trabajo original de fin de carrera.

Puede resultar ilustrativo señalar que en Bolonia dentro de este ciclo al estudiante se le ofrece la posibilidad de elegir entre cinco itinerarios previamente configurados: 1. Forense. 2. Empresa. 3. Instituciones y administración pública. 4. Derecho internacional. 5. Metodológico.

El dato más significativo, y sorprendente, reside, sin embargo, en que recientemente (Decreto ministerial de 25 noviembre de 2005)²⁵, se ha creado una *Laurea Magistrale in Giurisprudenza*, que en buena medida comporta un retroceso respecto a los citados avances en la implantación del modelo europeo, ya que está ordenada en cinco años (300 ECTS), sin cesuras ni ciclos, dando derecho a la consecución de un título al final de los mismos, después de superada una prueba final, en la que se requiere la presentación de una tesis de licenciatura. Es de notar que, para facilitar la transición, todos los exámenes que hubiesen sido superados de la Laurea en Ciencias Jurídicas o la Laurea Specialistica son reconocidos, bajo ciertas condiciones, a quienes opten por trasladarse a esta nueva titulación.

— El tercer ciclo corresponde al Doctorado, con un primer año de dedicación lectiva, denominado *Master di secondo livello* (60 ECTS). Su duración mínima será de tres años, exigiéndose a su término la presentación de un trabajo original de investigación.

Por lo demás, también el gobierno italiano ha adoptado otras importantes medidas y soluciones legislativas dirigidas, entre otros aspectos, a incorporar a su sistema educativo instrumentos como los créditos ECTS o el Suplemento al Diploma (en especial la Ley 148 de 11 de julio de 2002), a incentivar la movilidad y la dimensión europea de sus estudios y a colaborar en la creación de una red internacional de cooperación en el aseguramiento de la calidad. Objetivo, este último, canalizado mediante el establecimiento de un Comité Nacional de Evaluación del Sistema Universitario (CNVSU), que es responsable de la definición de unos criterios generales de evaluación, del fomento de la investigación sobre metodologías para su control y valoración, y del desarrollo de un programa anual de evaluación externa de las universidades, que va acompañado de la identificación de pautas de armonización para las evaluaciones internas encomendadas a las propias universidades. En este mismo sentido, se ha puesto en marcha el proyecto «Campus One», auspi-

<http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/Italy.pdf>. Una panorámica general sobre la organización educativa italiana en <http://www.euroeducation.net/>

ciado por la Conferencia de Rectores, que persigue ayudar a la mejora de la calidad de la docencia y, en general, a la instalación de una cultura de la calidad en el terreno de la educación superior.

Otros ejemplos representativos²⁶

No pretendiendo ofrecer, en estas páginas, un cuadro exhaustivo de la situación presente en los distintos países europeos respecto a la instauración de las propuestas de organización de los estudios lanzadas por las altas autoridades educativas participantes en la conferencia de Bolonia y sucesivas, me limitaré a trazar con breves pinceladas algunas de las peculiaridades más sobresalientes observables en las estructuras vigentes en aquellos países que he estimado más representativos, sea por su pronta y fiel adecuación a las mismas, por la originalidad de sus soluciones o, en el polo opuesto, por su escasa predisposición, hasta el momento, para emprender los cambios necesarios.

Austria²⁷

El estatuto legal de las universidades austriacas ha conocido repetidas modificaciones en las últimas décadas. Para empezar, la *University Organisation Act* (OJ 1975/258) puso fin al antiguo modelo, heredado desde la monarquía de los Habsburgo, debilitando la autoritaria posición ocupada por los profesores en favor de un mayor protagonismo de los asistentes y los alumnos. Su vigencia se mantuvo hasta que otra ley, de 1993 (OJ 1993/803), sentó las bases de una progresiva transición hacia una nueva estructura organiza-

prof.italco.htm.

²⁵ Su desarrollo puede consultarse en <http://www.gazzettaufficiale.it/guri/attocompleto?dataGazzetta=2005-12-17&redazio...>

²⁶ En este subapartado seguirá siéndonos de gran ayuda el citado informe (véase nota 16) incluido como primera parte en el *Libro Blanco de Grado en Derecho*.

²⁷ Los datos más recientes sobre la situación en este país los proporciona Willibald Posch, «The austrian view of the Bologna process in legal education», en *European Journal of Legal Education*, 2, 1 (2005), 67-70.

tiva. Finalmente, la reciente *University Act* de 2002 (OJ 2002 I 20), muy controvertida por haber desprovisto a las universidades de su carácter estatal, al cerrarles la posibilidad de contratar funcionarios vitalicios, ha proporcionado los fundamentos normativos para la introducción de los programas de *bachelor* y *master*, los ECTS, el suplemento al diploma y el doctorado de calidad. Completando este esfuerzo, a comienzos de 2004 se ha establecido la *Austrian Agency for Quality Assurance*, con la misión de asesorar a las instituciones de educación superior en la definición de pautas y procedimientos de medición y aseguramiento de la calidad.

El esquema resultante se articula, por tanto, en tres niveles: un primer ciclo de tres o cuatro años (180-240 ECTS), que da derecho al título de *Bakkalareus*, seguido de un *Magíster* de uno o dos años y, por último, el doctorado, usualmente prolongado entre dos y cuatro años.

Sin embargo, frente al decidido apoyo prestado por el Ministerio de Educación al proceso de convergencia, las facultades de Derecho están afrontando los cambios con una fuerte carga de escepticismo e incluso de rechazo, hasta el punto de que ninguna ofrece aún un currículum que sea compatible con el programa de Bolonia. Las principales razones de esta oposición son:

1. Como hemos visto, el mundo universitario ha sido objeto de diversas y cada vez más profundas transformaciones legislativas en los últimos años.

2. Este cúmulo de reformas ha afectado especialmente a los estudios de Derecho. Tras un casi un siglo de permanencia de una ley de 1893, concebida para fabricar juristas que defendiesen la legitimidad del régimen imperial, un estatuto federal de 1978 (OJ 1978/140) vino a consumar la sustitución del tradicional grado de *Doctor iuris*, ahora reservado para los licenciados que aspiran a realizar carrera académica, por el de *Magíster iuris*. No obstante, la nueva organización seguía pecando de una excesiva centralización, dejando muy escaso margen a las escuelas jurídicas para ofrecer cierta especialización y atándolas todavía a demasiadas innecesarias materias colaterales. Esto ha sido corregido por la *University Studi Act* de 1997 (OJ 1997 I 48), que si ha errado es por provocar el efecto contrario, al dejar en manos de las facultades el diseño específico de su respectivo currículum, de tal modo que cada una de las cinco existentes ofrece hoy uno distinto.

3. Las perspectivas profesionales para los *bachelor of law* son muy inciertas. La existencia de numerosos funcionarios con plazas de por vida cierran el camino hacia la administración pública, a lo que se une que los requisitos para ser aceptado como miembro del colegio de abogados son particularmente estrictos, ya que el candidato debe acreditar haber conseguido el grado de *magíster iuris* y tres años de experiencia práctica como empleado en un bufete.

4. El acusado descenso del número de alumnos, debido, entre otras razones, al aumento del precio de las tasas y al creciente índice de desempleo que se da entre los licenciados.

Bélgica²⁸

En todo el Estado se ha puesto ya en marcha el primer ciclo, estando prevista la implementación del Master en el curso 2007-2008. Sin embargo, es preciso distinguir entre las dos grandes zonas en las que se divide el país.

En la comunidad flamenca, donde existen ocho universidades, actualmente la carrera se organiza en un primer ciclo de tres años, que reporta una calificación intermedia (*Kandidaat o Baccalareus*), y un segundo ciclo de dos, tres o cuatro años, que permite obtener el título de licenciado. La plena aplicación de la reforma aprobada por el Parlamento flamenco (Decreto de 4 de abril de 2003), supondrá la generalización del esquema 3/5 (180+120 ECTS) y el reconocimiento exclusivo de dos títulos: *Baccalareus* y Master. No obstante, dentro del primero se abren dos alternativas: la orientación académica, incluida la jurídica, que conduce directamente al Master, y la profesional, que puede llevar a la realización de un curso adicional de un año o —tras completar un curso puente—, también al Master. Una vez finalizado éste, se pueden proseguir estudios vinculados al mismo a lo largo de otro año, o bien acceder al doctorado, para el que está prevista una duración de cuatro años.

Esta visión puede completarse en http://www.bmbwk.gv.at/fremdsprachig/en/eu_int/bologna/implementing.xml y http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/Austria_alt.pdf

²⁸ Una información más detallada en http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/Flemish_Com.pdf y <http://ond.vlaanderen.be/hoger-onderwijs>

En lo referido al área francófona, en la que se ubican nueve universidades, hasta ahora han existido tres ciclos: el primero, de dos años, reporta el diploma de *Candidat*; el segundo, de entre dos y tres años, dependiendo del tipo de estudios, permite conseguir el título de *Licencé*; y el tercero, de un año y un contenido especializado, conduce a la obtención del *Diplome d'Etudes Approfondies*. Cuando termine de implantarse la nueva estructura, regulada por un decreto del Parlamento valón de 23 de marzo de 2004, comportará pasar a un esquema de 3+1 o 3+2, con un primer ciclo común de tres años, que dará el grado de *Bachelier*, al que podrá añadirse otro año, para conseguir la *Licence*, o dos para lograr la *Maîtrisse*. Después cabe dedicar uno o dos años más a adquirir una formación específica o bien iniciar un período doctoral, cuya duración normal es de tres años (180 ECTS).

Países Bajos²⁹

Junto al sistema tradicional, al que los estudiantes aún pueden acogerse, y que aparece articulado en cuatro años, de los que el primer curso tiene carácter propedéutico, en virtud de una ley de septiembre de 2002 ha sido introducido un nuevo plan organizativo, más cercano a las directrices de Bolonia, que responde a un esquema 3/4/8.

Así, un primer ciclo de tres años (180 ECTS) proporciona el título de *Bachelor/Kandidaat in Rechten*, aunque en los estudios profesionales se requiere completar 240 ECTS. Por su parte, el segundo ciclo puede constar de 60 ECTS, en ciertas disciplinas, de 120, en las ingenierías, las ciencias sociales (dando lugar en Derecho al título de *Master/Meester in de Rechten*), las ciencias naturales y la odontología, y de 180 ECTS, en el caso de Medicina. Una vez superado este nivel se puede acceder al doctorado.

Dinamarca³⁰

El sistema danés de enseñanza superior aparece repartido en dos grandes sectores: el de los colegios y academias, que compren-

(pulsar la entrada «changing higher education»), para la zona flamenca, y http://www.cfub.be/gouver/comm-press/htm/cp_du_2002_10_14.htm, para los territorios francófonos.

²⁹ Me apoyo en <http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/Netherlands.pdf>

de más de 150 instituciones especializadas, en su mayoría dependientes del Ministerio de Educación, y el universitario, controlado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación, que está integrado por once universidades, de las que solo cinco realizan una oferta multidisciplinar, estando las otras volcadas hacia un campo concreto del conocimiento. Además, ambos grupos presentan importantes diferencias en cuanto a los mecanismos de admisión y al otorgamiento de grados, lo que complica la descripción de sus peculiaridades. Por ello, nos centraremos principalmente en el ámbito universitario.

El arranque de la cadena de reformas que han venido sucediéndose en la última década hay que situarlo en el acuerdo político alcanzado en 1993 entre el Gobierno y los partidos políticos con representación parlamentaria, en cuya virtud se decidió la introducción e implementación de un grado de *Bachelor*, en conexión con la progresiva adopción de un esquema de 3+2+3 (3/5/8). Posteriormente, la Ley 1115/1997 incorporó al sistema los llamados ciclos cortos y medios no universitarios de educación superior, principalmente operativos en las carreras técnicas, agricultura y comercio. A su vez, la Ley 481/2000, creaba el título de *Professional bachelor* para los programas del ciclo medio universitario, con particular presencia en los sectores de la salud y la educación. Todo ello ha sido completado por la Ley 403/2003 (*Danish University Act*), que además de promover la generalización del uso de los créditos ECTS, ha terminado de fijar la mencionada estructura académica: es decir, un *Bachelor* de tres años, un Master de dos años y un Doctorado de, al menos, tres años. Aunque, concluido éste todavía cabe la posibilidad de realizar un Doctorado Superior, orientado al desempeño académico, en el que pueden emplearse de cinco a ocho años.

Por otra parte, la citada ley de 2003 ha supuesto un replanteamiento de la financiación pública de las universidades, al convertirlas en centros autónomos, gobernados por un consejo de directores, con una mayoría de miembros externos, empujándolas a buscar sus propias fuentes de ingresos. Un cambio que ha generado gran preocupación acerca de su posible incidencia sobre una pérdida de competitividad o una tendencia a la privatización de la educación superior, que, entre otras cosas, iría en detrimento de la actividad investigadora. E, igualmente, ha establecido un programa de garantía de la calidad, basado en la obligación impuesta a las universidades de dotarse de los instrumentos destinados a su

sometimiento a auditorias externas, evaluaciones nacionales e internacionales y valoraciones del cumplimiento de los objetivos predefinidos³¹.

Finlandia³²

El cuadro finés de grados universitarios fue modificado en los comienzos de la década de los noventa con la creación del grado de *Bachelor* para casi todos los campos de estudio, con excepción de las ciencias médicas, la tecnología y la arquitectura. Sin embargo, en general, ha sido considerado como un título intermedio, porque no representa una fase previa obligatoria para la realización del Master y apenas cobra relevancia en el mercado laboral. Sin embargo, en el otoño de 2003 fue aprobada una importante reforma, que ha comenzado a aplicarse en agosto de 2005, por la cual se consolida —menos para las escuelas politécnicas, recientemente receptoras de una regulación específica—, una estructura articulada en tres ciclos:

— El primero, de tres años de duración y presente en todas las disciplinas, salvo en algunas áreas médicas, sirve para obtener una titulación universitaria, el *Bachelor* (en Derecho *Kandidat* o *Bachelor in law*) de nivel mínimo, pues solo es válida para optar a empleos de baja escala en la administración pública, central o territorial, aunque, ahora sí, es imprescindible para pasar al siguiente ciclo.

— Este segundo ciclo, de dos años, otorga el título superior de *Master* o *Magister* (*Master of Law*), que en nuestro ámbito permite actuar como abogado y constituye también un prerrequisito para acceder a la magistratura.

³⁰ Nuestras principales fuentes de información serán <http://eng.uvm.dk/factsheets/dvu.htm?menuid=2520> y http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/Denmark_2.pdf.

³¹ Interesa la ponencia presentada en la Conferencia anual de la ELFA celebrada en Graz en febrero de 2005 por Tom Latrup-Pedersen, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Aarhus, *Redefining Higher Education –a State Monopoly Under Liberalisation?*. Disponible en

— Al tercer ciclo, de postgrado, se accede con el Master. Se prolonga por dos años y da lugar, tras la defensa de una tesis de licenciatura, al título de *Licentiate in Law*. Tras la obtención de éste se puede continuar otros dos años hasta lograr el grado de *Doctor of Law*, que es indispensable para desarrollar una carrera académica.

Las autoridades educativas finlandesas acreditan, además, haber dado otros importantes pasos incidentes en el impulso del resto de las directrices ligadas al proceso de convergencia. Así, por ejemplo, ya desde 1995 viene funcionando el *Finnish Higher Education Evaluation Council* (FINHEEC), hoy miembro de la ENQA, encargado de asistir a las universidades y las escuelas politécnicas en temas de evaluación y acreditación de la calidad.

Suecia³³

El complejo modelo vigente en este país nórdico se basa en la división entre grados generales y grados profesionales. Estos segundos son más de cincuenta (medicina, ingeniería, educación...) y presentan una enorme variedad en su estructura y duración, que puede ir de tres a seis años. En lo concerniente a los generales, en los que se incluyen los estudios jurídicos, tenemos las siguientes modalidades:

— *Högskoleexamen*, que supone al menos dos años de plena dedicación, pues se requiere completar 80 créditos (correspondiendo cada crédito a una semana de trabajo y cuarenta semanas a un curso académico, es decir 120 ECTS).

— *Kandidatexamen*, equivalente a un *Bachelor*, ya que demanda al menos tres años, pues consta de 120 créditos suecos (=180 ECTS).

— *Magisterexamen*, al que se llega después de completar el *Kandidatexamen* y supone otros 40 créditos suecos. Ello hace que aquí el grado adquiera un perfil de 3+1, que no se ajusta a las propuestas de Bolonia.

— *Licentiatexamen*, en el que, normalmente, se emplean dos años, y al que se puede acceder directamente después de superar el

http://www.elfa.org/PDF/Conferences/Workshops_Graz.doc.

³² Obtengo los datos en <http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/Finland.pdf>.

Kandidatexamen o tras concluir el *Magisterexamen*.

— *Doktorexamen*, que suele prolongarse durante cuatro años de plena dedicación una vez pasado el *Magisterexamen*. Este título es condición inexcusable para integrarse en la profesión académica.

No obstante, con el fin de simplificar este entramado está prevista una reforma que traerá consigo una estructura de 3+1+1+3. De otro lado, Suecia exhibe también un avanzado índice de adaptación a las pautas marcadas desde la declaración de Bolonia en aspectos como la adopción del Suplemento al Diploma y de un régimen de créditos compatible con los ECTS, la promoción de la movilidad de estudiantes, directivos y profesores, o la instauración en 2001 de una *National Agency for Higher Education*, asociada a la ENQA, que asimismo coopera con la *Nordic Network of Quality Agencies* en el desarrollo de instrumentos de fomento y supervisión de la calidad.

Irlanda³⁴

Regulado por última vez en 1999, el sistema irlandés presenta grandes similitudes con el británico, estando basado también en la existencia de dos niveles:

— *Undergraduate* (tres o cuatro años), que permite alcanzar el título de *Bachelor*.

— *Graduate*, que puede llevar a obtener un diploma superior (un año), o un Master (de uno a tres años). Una vez acreditado éste último, cabe continuar estudios de doctorado, que pueden tener una duración de entre dos y cinco años.

A la vista de esta estructura, aunque parece evidente que no se ajusta exactamente a la propuesta efectuada desde las instancias comunitarias, no se ha considerado necesaria su adaptación, si bien los *Dublin descriptors* desarrollados dentro de la *Joint Quality Initiative*, en colaboración con otras agencias nacionales, han recogido la voluntad de dotar a estos grados de un contenido equiparable

³³ Me baso en el Memorando presentado el 30 de abril de 2003 por el Ministerio de Educación y Ciencia: <http://www.bologna-berlin2003.de/>

al de los demás países integrados en dicho programa. Por otra parte, las autoridades académicas irlandesas han participado en el proyecto *Tuning* y han trabajado en la fijación de un marco nacional de calificaciones concordante con el vigente en el ámbito europeo. Además, se ha producido la asimilación de los ECTS y se ha creado la *National Qualifications Authority of Ireland* con fines análogos a los de sus homólogos.

Portugal³⁵

En Portugal el plan de adaptación se está llevando a cabo con un evidente retraso. En la actualidad existe una importante diferencia entre las escuelas politécnicas, donde el primer ciclo, de tres años, conduce al título de *Bacharelato*, y las universidades, donde este mismo ciclo, culminado con la *Licenciatura*, se alarga en algunas disciplinas hasta los cuatro años, en otras, como sucede con Derecho, hasta los cinco, e incluso, en el caso de Medicina, hasta los seis años. Sin embargo, se halla en trance de desarrollo una reforma legislativa que pretende unificar, con una duración de cuatro años, todas las licenciaturas, aunque es probable que excepcionalmente en ciertas carreras llegue a contemplarse su acortamiento (fijándose en tres años o tres años y medio) o, tal vez, en el sentido opuesto, que se mantenga un plazo superior. No sufrirán variación, por el contrario, el grado de Master (*Mestrado*), requerido de dos años de estudio y de la elaboración de una tesis, y el Doctorado, para el que no ha sido establecido un límite temporal concreto. La oferta de este último ciclo, en clara tendencia expansiva tras largas décadas de muy escasa presencia, también en el campo jurídico, se desea restringirla a aquellas instituciones —todavía pocas—, con centros y actividades de investigación ya consolidados.

Esta situación de lenta transición afecta asimismo a otros aspectos, como el suplemento al diploma o los ECTS. Quizás el apartado en el que se observa una mejor adecuación a las pautas de convergencia es en el relativo a los mecanismos de control y evaluación de

pdf/Sweden.pdf

³⁴ Véase el *Irish National Report on Implementation of the Bologna*

la calidad, ya que desde 1993 existe una agencia nacional (CNAVES), inspirada en el modelo holandés, que está afiliada a la ENQA y —a juicio de sus responsables—, plenamente preparada para cooperar internacionalmente en este terreno

Grecia³⁶

Grecia constituye, seguramente, el ejemplo más ilustrativo de como tras las apresuradas y concluyentes declaraciones de compatibilidad del sistema nacional con el modelo de Bolonia, puede esconderse una evidente resistencia a abandonar una tradición propia, que al observador ajeno le resulta muy difícil admitir como conciliable con el proceso de convergencia.

De este modo, parece que lo único que, por ahora, preocupa a sus autoridades educativas es la homologación y acreditación de los diplomas extranjeros de tres años. Pero ni el entramado legal, recientemente reformado en 2001, ni los planes de estudio elaborados por las universidades han acometido aún pasos significativos hacia la necesaria adaptación.

Por tanto, la estructura educativa griega en el ámbito de la enseñanza superior, que queda exclusivamente en manos públicas por mandato constitucional, sigue girando sobre la separación entre el sector universitario, que comprende veintidós universidades, de muy diversos tamaños y objetivos y variable espectro disciplinar, y el sector tecnológico, bastante más homogéneo, que engloba quince centros de esta orientación (*Technological Educational Institutions*). Igualmente, desde la década de los ochenta continúa en vigor la antigua organización en dos ciclos:

— El primero conduce, en principio después de cuatro años de estudios, a la obtención del denominado *Ptichyo* o «diploma», que dependiendo de la materia, el contenido de cada currículo y las calificaciones del alumno, puede permitir el desempeño de ciertas actividades profesionales, y, en todo caso, la realización del segundo ciclo, siempre que haya plazas disponibles en el programa elegido por el candidato.

Process, disponible en <http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/Irland1.pdf>.

³⁵ Hay información al respecto en <http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/Portugal.pdf>

— El segundo ciclo tiene una duración de uno o dos años y sirve para lograr un diploma de especialización, que podríamos entender equiparable al Master.

— El Doctorado, correspondiente al tercer ciclo, se consigue después de, al menos, tres años de investigación original, concluidos con la presentación de la consiguiente tesis, siendo habitual, aunque pocas veces se exige como prerrequisito, haber cursado el Master antes de acceder al mismo.

Hay que hacer notar, sin embargo, que este esquema conoce variaciones en determinados campos de estudio, como la Medicina, donde el primer ciclo consta de seis años y es válido para dar el salto directo al doctorado, o las ingenierías, las ciencias agrícolas, la medicina veterinaria y las artes, en las que para ese primer grado son precisos cinco años.

Y también conviene señalar que la pervivencia de este modelo genera un amplio consenso entre los responsables gubernamentales, las fuerzas políticas, las instituciones académicas y los propios estudiantes, topando con un rechazo generalizado la posibilidad de que el primer ciclo pueda completarse, con suficientes garantías en cuanto a su contenido, en menos de cuatro años. Ello puede provocar en el futuro problemas de equivalencia con los grados concedidos en otros estados europeos. Inconveniente al que se unen circunstancias como la de que Grecia es uno de los países que no ha ratificado el Convenio de Lisboa sobre Reconocimiento, que el suplemento al diploma no ha sido, ni ofrece visos de serlo, regulado, y que el sistema acumulativo de créditos hoy operante en el ámbito universitario, basado en el simple computo semanal de horas de docencia, presenta características que lo alejan diametralmente de los ECTS, solo utilizados a efectos de transferencia de créditos dentro de los programas europeos de movilidad (Erasmus y Sócrates). Si a todo ello añadimos que también es uno de los pocos países que carecen de un plan nacional de fomento y asistencia de las iniciativas en pro de la calidad, no queda otro remedio que concluir que en Grecia es todavía extraordinariamente largo el camino por recorrer hacia una verdadera integración en el EEES.

2. Sistema de créditos ECTS

El *European Credits Transfer System* (ECTS) nace al amparo de los programas europeos de movilidad de estudiantes, persiguiendo dar respuesta a la necesidad de encontrar un instrumento susceptible de facilitar el establecimiento de equivalencias y el reconocimiento recíproco de los estudios cursados en otros países.

Para describir su funcionamiento, ha sido definido como la «unidad de valoración de la actividad académica en la que se integran armónicamente tanto las enseñanzas teóricas y prácticas, como otras actividades académicas dirigidas y el volumen de trabajo que el estudiante debe realizar para superar cada una de las asignaturas»³⁷. Es decir, su introducción, que se ha convertido en uno de los elementos fundamentales sobre los que se apoya el proyecto de creación del EEES, comporta una auténtico vuelco en las concepciones educativas y en la metodología docente, al trasladar el criterio de cuantificación de los créditos sobre el volumen de trabajo de los estudiantes en lugar de hacerlo, como hasta ahora, sobre el del profesor. En este sentido, partiendo de la base de que el cómputo global de las tareas que debe desarrollar un alumno a lo largo del curso académico se sitúa en 60 créditos, cada crédito viene a suponer una carga de trabajo de entre 25 y 30 horas.

Resulta oportuno indicar, además, que esta revolucionaria herramienta se vincula a la valoración de las actividades necesarias para la consecución por los alumnos, no tanto de un conocimiento profundo de los contenidos de cada una de las materias, como de determinadas competencias y destrezas que le serán luego indispensables en su desenvolvimiento profesional.

El panorama general europeo en relación con el nivel de incorporación del sistema ECTS puede resumirse en el cuadro siguiente (los datos son del año 2003)³⁸:

³⁶ Para conocer la situación en este país me valgo del extenso informe elaborado en 2003 por el Ministerio de Educación Nacional y Asuntos Religiosos. Está en: <http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/Greece.pdf>.

³⁷ *El Sistema Universitario Español y el Espacio Europeo de Educación Superior*, p. 8, documento redactado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad (ANECA), que aparece reproducido en: http://www.aneca.es/modal_eval/docs/doc_conv_aneca1.pdf

³⁸ Los datos que se ofrecen en este apartado están tomados del docu-

Estados miembros de la Unión Europea

Países que han adoptado el sistema ECTS

Alemania: Plenamente implantado. Viene siendo implementado tanto como sistema de acumulación como de transferencia. Se han fijado 60 créditos por curso y un máximo de 1800 horas por año.

Austria: Aproximadamente un 50% de las instituciones lo han adoptado. Utilizado para transferir créditos. Un crédito ECTS corresponde a unas 25 horas de carga de trabajo estudiantil, estando establecidos 60 créditos por curso académico.

Bélgica (Flandes): Se halla plenamente implantado. Utilizado solamente para transferir créditos, aunque en 2003 estaba prevista una inmediata introducción legal del principio de acumulación. Hay 60 créditos por curso académico y el número total de horas anuales oscila entre 1500 y 1800.

Bélgica (zona francófona): No existiendo un sistema nacional previo, los ECTS están en proceso de generalización. Son utilizados para transferir créditos. Se pide la realización de 60 créditos por curso académico, para un global de unas 1600 horas de trabajo.

Chipre: La Universidad de Chipre, única del país con todos los niveles de titulación acreditados, emplea el sistema nacional, compatible con los ECTS (un crédito nacional equivale a dos ECTS) en la universalidad de sus programas. La extensión al resto de las instituciones de enseñanza superior estaba prevista a partir de la adhesión a la Unión Europea.

Dinamarca: Completamente implantado. Se utiliza no solo para la transferencia de créditos, sino también para describir el contenido de los programas y en algunos casos para la matriculación y el diseño de los expedientes. El curso anual consta de 60 créditos.

Francia: Su implantación ha sido declarada obligatoria para todas las instituciones de enseñanza superior autorizadas para expedir diplomas nacionales, en virtud de un decreto ministerial de 2002.

El plan era que en el año 2005 funcionase ya plenamente como sistema de transferencia y de acumulación.

Italia: El ECTS se emplea como sistema nacional, estando basado en la actividad de los alumnos, con 60 créditos y 1500 horas por curso, aunque se admite un aumento o reducción del 20% de las horas por causas justificadas. En principio, opera como mecanismo de acumulación, si bien la mayoría de las universidades lo utilizan también para los intercambios internacionales.

Países que lo combinan con otros sistemas

Eslovaquia: El sistema ECTS es el más extendido, sobre todo en primer y segundo ciclo, estando legalmente determinada su generalización antes del final de 2004. Otras instituciones están inmersas en su adopción con carácter acumulativo, sin haber conocido antes sistema alguno.

Eslovenia: El modelo ECTS, no obligatorio, solo es mayoritariamente utilizado al nivel del doctorado, hallándose en proceso de introducción en los programas de licenciatura.

República Checa: La mayoría de las universidades tienen su propia modalidad de créditos, normalmente centrada en el número de horas presenciales, no existiendo un modelo nacional unificado, ni siquiera regulación legal alguna que obligue a utilizar un sistema de créditos ni que especifique como se deben asignar. No obstante, todas las universidades utilizan los ECTS para la transferencia de créditos, al igual que otras instituciones participantes en el programa Sócrates.

Estonia: Desde 1995 funciona un sistema nacional (CP) en paralelo con el ECTS (un CP = 1,5 ECTS), que se utiliza con fines de facilitación de la movilidad hacia otros países. De naturaleza acumulativa, dicho crédito nacional está basado en la carga de trabajo de los estudiantes, atribuyéndose 40 horas a la semana, 40 créditos al año y 40 semanas por curso académico

Portugal: Todas las universidades públicas, además de algunos centros politécnicos lo aplican o tienen pensado aplicarlo como ins-

trumento de transferencia. Además, ha comenzado a ponerse en marcha su desarrollo como medio de acumulación. También unas pocas instituciones educativas privadas se sirven del ECTS con fines de movilidad. No obstante, en el sector público coexiste con un sistema nacional de acumulación, operativo a nivel de la licenciatura y del master, que al estar basado en las horas de docencia presencial, resulta incompatible con los ECTS.

Países que utilizan un sistema nacional

Finlandia: Se trata de un sistema de acumulación, establecido en la década de los setenta, en el que cada curso tiene 40 créditos como media, correspondiendo cada crédito a 40 horas; es decir, se estima una carga anual de 1600 horas. Sin embargo, en la agenda ministerial se incluye su pronta sustitución por el ECTS, que ya es de uso corriente como mecanismo de transferencia.

Grecia: En ambos ciclos se viene aplicando un sistema nacional, creado en 1982 y articulado principalmente en función de las horas presenciales, si bien es voluntad de las autoridades gubernativas y académicas una futura asimilación de los ECTS y, de hecho, algunas instituciones ya los han incorporado a sus planes de estudios.

Hungría: Desde 2002 rige por imposición legal un sistema nacional de transferencia y acumulación, que coincide, y es compatible, con los principios del ECTS.

Letonia: El sistema vigente para todos los ciclos tiene como unidad de referencia las 40 horas de trabajo de los alumnos, no pudiendo constituir la docencia presencial más de un 50 % de las mismas. El curso académico contiene 40 créditos, esto es, 1600 horas de actividades. Con todo, en los últimos años un buen número de universidades están implementando los ECTS (1 crédito nacional = 1,5 ECTS), tanto como instrumento de transferencia como de acumulación.

Lituania: La ley de enseñanza superior, aprobada en el año 2000, ha establecido que el curso académico medio a tiempo

completo equivale a 40 créditos, correspondiendo cada crédito a 40 horas de trabajo por estudiante y semana. Aunque este sistema nacional es el utilizado en los ciclos de licenciatura y de master y en los programas del sector no universitario, no son pocas las instituciones que recurren al ECTS como método de transferencia para realizar intercambios internacionales, entendiéndose que cada crédito nacional equivale a un crédito y medio ECTS.

Malta: La Universidad de Malta emplea un tipo de crédito acumulativo —aunque también es reconocido a efectos de transferencia—, que inaugurado en 1975, hoy en día está extendido a todos los estudios de licenciatura y de postgrado, salvo en ciertas carreras como medicina o arquitectura. Dicho crédito supone 50 horas de carga de trabajo, de las que 14 deben ser de contacto directo entre el profesor y el alumno, habiéndose establecido un cómputo global de 30 créditos para el curso académico. Ahora bien, desde octubre de 2003 está siendo paulatinamente sustituido por el ECTS en los cursos de licenciatura.

Países Bajos: Aquí el sistema nacional coincide absolutamente con los principios del ECTS, si bien entre ambos se da una relación de 2:3, con lo que al curso completo se le adjudica un total de 42 créditos. Siendo sencilla la conversión, la plena introducción del nuevo sistema estaba prevista para septiembre de 2004.

Suecia: Obligatorio desde 1977, el crédito sueco, esta cifrado en 40 horas de trabajo, pidiéndose 40 créditos, es decir 1600 horas, por curso académico. Hasta ahora el sistema ECTS se usa solo para la transferencia y la acumulación en los programas de intercambio Erasmus/Sócrates.

Reino Unido: Existe un sistema denominado CATS, que comporta un total de 120 créditos por curso académico, correspondiendo cada crédito a 10 horas de estudio; pero todavía no es aplicado sistemáticamente. En Escocia rige un sistema nacional (SCOTS-CATS), ya más arraigado. El ECTS se maneja en los programas de intercambio como forma de transferencia, pero aún no tiene cabida en términos de acumulación.

Países en los que no existe un sistema específico

Irlanda: La posible creación de algún modelo específico está siendo estudiada por la Autoridad Nacional de Calificaciones (NQAI). Entretanto, el sistema ECTS se utiliza para los participantes en los programas Sócrates/Erasmus.

Polonia: Para cubrir este vacío esta comenzando a adoptarse el ECTS, que se exige como condición para la acreditación de los programas universitarios.

Países de próxima adhesión

Bulgaria: El ECTS ha sido implantado, en el marco del programa Erasmus, en 14 de sus 42 universidades, pero solamente para servir a la transferencia de créditos.

Rumanía: Como medio de transferencia de créditos la adopción del ECTS ha sido ya concluida en la mayoría de las universidades, al tiempo que, por mandato ministerial acaba de iniciarse también su progresiva extensión con carácter acumulativo.

Estados no miembros

Islandia: El crédito islandés, instaurado en 1997, equivale a dos ECTS, por lo que el contenido del curso académico está calculado en 30 créditos. Se usa con funciones de acumulación.

Noruega: El sistema nacional (*vekttal*) se halla en trámite de sustitución por el ECTS, algo más rápidamente en el terreno de la transferencia que en el de la acumulación. El plazo que se había fijado para culminar este cambio terminaba a finales del año 2003.

Suiza: El sistema ECTS esta reconocido oficialmente, tanto a efectos de transferencia como de acumulación, aunque el proceso de implantación se encuentra aún en curso de realizarse y en, algunas cuestiones, en fase de debate.

3. *Acceso a las profesiones jurídicas*

Uno de los aspectos vinculados a la integración de los estudios de Derecho dentro del esquema organizativo propugnado por la Declaración de Bolonia que mayor controversia genera es el relativo a la redefinición de las condiciones exigibles a los candidatos para su incorporación a las profesiones jurídicas, ya que un análisis comparativo de la realidad europea demuestra que en la mayoría de los países, con la excepción de España, además del período de formación universitaria, que puede constar de cuatro a seis años, se requiere superar otra etapa adicional (sea teórica o de capacitación práctica) de dos o tres años de duración.

A la vista de esta tendencia, se refuerzan las fuertes reticencias con las que en general es recibida la posibilidad de que unos simples estudios de grado de amplitud trienal puedan permitir el acceso a ocupaciones que, por la responsabilidad que entrañan, parece imprescindible que queden reservados a quienes han acreditado una elevada cota de preparación y cualificación. Veamos, pues que sucede en los principales países de nuestro entorno³⁹:

Alemania

Como ya hemos analizado, el ejercicio de las profesiones jurídicas precisa de la realización de una pasantía repartida en distintas instituciones de, al menos, un año y medio de duración y la superación de un segundo examen estatal. Esto es, resulta realmente difícil que ese acceso se produzca antes de haber completado seis años de estudios.

Bélgica

Las reformas legislativas emprendidas para facilitar la adaptación a las directrices de Bolonia apenas han modificado el régimen

mento elaborado por la ANECA: *Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS). Unión Europea y países de próxima adhesión*, que puede localizarse en <http://www.uc3m.es/uc3m/gral/IG/NOR/UNIV/aneca-creditos.pdf>.

³⁹ En este punto nos será de ayuda indispensable el apartado segun-

anterior. Esto es, una vez concluido el grado, sigue siendo necesario inscribirse en una lista de estudiantes en prácticas (*Liste des Stagiaires/Lijst van de Stagiaires*) y pasar de tres a cinco años aprendiendo con un abogado.

Dinamarca

Una vez asentado el esquema 3+2, ajustado a las pautas de convergencia, para optar al desempeño profesional se mantiene la exigencia de un período suplementario de prácticas de, al menos tres años, y la posterior superación de una prueba de conjunto, indispensable para recibir la acreditación otorgada por el Ministerio de Justicia.

Francia

Es requisito inexcusable la obtención de la *Maîtrise* (previa al Master), que de modo automático permite ingresar en las escuelas profesionales, donde, después de adquirir una preparación específica durante aproximadamente un año, se puede conseguir un Certificado de Aptitud Profesional, lo que permite realizar un *stage* en escuelas o colegios corporativos, por un mínimo de dos años, a cuya finalización se obtiene el *Certificat de Stage*, que es necesario para ejercer libremente.

Grecia

Tras completar una etapa académica de entre 5 y 6 años, se exige un período de formación complementario de 18 meses y la superación de varios rigurosos exámenes estatales.

Italia

Después de conseguir la *Laura Triennale en Scienze Giuridiche* (180 ECTS) y la *Laurea Specialistica en Diritto Forense* (120 ECTS), es preciso inscribirse como Practicante en un colegio de abogados,

donde deberán transcurrir dos años de pasantía. Finalmente, la realización satisfactoria de un examen de muy alto nivel de exigencia permite la colegiación como *avvocato*.

Países Bajos

La adaptación al proyecto de convergencia se ha efectuado respetando el esquema tradicional de un primer ciclo de tres años y otro posterior de un año. Pero para desarrollar una actividad profesional se pide que, después de terminado el Master, el candidato se inscriba como estudiante en prácticas (*Stagiare*) en los colegios corporativos durante un tiempo de tres años (cuatro para los jueces), dedicado a adquirir la preparación requerida para poder ejercer.

Reino Unido

La situación observable en este país ofrece peculiaridades dignas de reseña, debido a que el abogado (*lawyer*) no es meramente considerado un técnico jurídico, sino que puede desempeñar funciones más amplias, como por ejemplo, las de consejero de negocios, trabajador social o mediador en conflictos. Por eso, se estima que el conocimiento del derecho constituye sólo una de las diversas capacidades que debe atesorar.

Fruto de esta concepción, muchos integrantes de las firmas legales han sido reclutados entre personas que no han estudiado para lograr un título en Derecho, sino que simplemente han conseguido con brillantez un diploma de postgrado.

Por otra parte, teniendo en cuenta que sólo aproximadamente un 40 % de los graduados en Derecho acaban encauzando su actividad hacia las profesiones jurídicas, se piensa que no es necesaria una fuerte conexión entre el contenido de los grados universitarios y la cualificación precisa para acceder a las mismas. De hecho, es visible la existencia de un conflicto acerca de lo que se considera razonable esperar de los estudiantes cuando finalizan su carrera, pues mientras el *Bar Council* y las sociedades legales demandan un dominio inmediato y preciso de todas las materias jurídicas esenciales, y en especial de las conectadas al terreno de las relaciones

mercantiles y los negocios, las facultades ponen el énfasis en la capacidad para investigar y para reflexionar acerca del derecho. Ello conduce a que las corporaciones profesionales intenten influir en el diseño de los grados universitarios, buscando que adquieran un sesgo más claramente enfocado hacia sus intereses, y también que, a menudo, al no ver satisfechas sus pretensiones, manifiesten sus preferencias por la selección de los no graduados en Derecho.

Como resultado de todo ello, son los propios colegios de abogados los que organizan cursos de preparación, que normalmente suelen prolongarse durante un año, y están orientados a la superación de un examen. Después de pasado éste, se inicia un período de formación de aproximadamente dos años, bajo la supervisión de un profesional, al término del cual ya se puede comenzar a ejercer.

D. Realidad y ficción

El rótulo escogido para este trabajo —tal vez, recibido con sorpresa por algunos y con cierta complicidad por quienes se ubican en posiciones de descreimiento—, plantea el análisis del grado de implantación de los principios emanados de las sucesivas declaraciones y documentos que han ido conformando lo que llamamos el proceso de convergencia europea en el ámbito de la educación superior, en términos de oposición entre dos conceptos intrínsecamente antagónicos: realidad o ficción.

En opinión del autor de estas páginas, a lo largo de las mismas ha ido quedando en evidencia como, en la actualidad, el ambicioso programa de creación de un Espacio Europeo de Educación Superior ha devenido en incontestable realidad si atendemos a los enormes avances conseguidos en la materialización de algunos de los fundamentos sobre los que se ha querido sustentar. Pensemos, así, en la rapidez y plenitud con la que, con aisladas excepciones, los distintos países europeos alineados en el compromiso de su promoción y desarrollo han adoptado instrumentos como el Suplemento al Diploma y el crédito ECTS. A lo que hay que sumar cómo se han intensificado las redes de movilidad, sobre todo estudiantil, gracias al impulso proporcionado a programas internacionales de intercambio como el Erasmus/Sócrates. Y también hemos constatado como en casi todos estos países ha sido aceptada la apuesta por la calidad, canalizándola a través de la creación de organismos nacio-

nales encargados de garantizarla, controlarla, evaluarla y acreditarla, en conexión con agencias internacionales destinadas a definir criterios homologables para su medición y comparación.

Sin embargo, también considero que ha ido poniéndose de manifiesto como en otros aspectos primordiales el camino recorrido deja mucho menor margen al optimismo. En especial, en lo relativo a la adopción de un esquema homogéneo en el diseño de la estructura de las titulaciones sigue imperando una enorme diversidad, que se adivina extraordinariamente difícil de reducir ante el obstáculo que viene suponiendo la resistencia, más o menos enmascarada, pero bastante generalizada, a sustituir unas tradiciones nacionales muy fuertemente arraigadas. Con lo cual, uno de los principios básicos inspiradores de todo este envolvente fenómeno, el de la comparabilidad, compatibilidad y transportabilidad de los títulos y los grados de uno a otro rincón de este espacio europeo común, ofrece pocos visos de cristalizar, al menos, en un plazo razonablemente cercano, despojando, así, de gran parte de su virtualidad a ese ideal de la libre circulación, cuya efectiva plasmación tratan de posibilitar los programas de movilidad.

El problema se nos aparece, además, sensiblemente agravado en el campo del Derecho. El decidido posicionamiento demostrado por el mantenimiento de las peculiaridades nacionales en países de tanto peso como el Reino Unido o Alemania, la hábil operación de maquillaje realizada en Francia para conservar la esencia de su sistema, la sorprendente compatibilidad declarada por Grecia entre su modelo y el propuesto por las directrices de Bolonia, con el que cuesta encontrar puntos de contacto, la abierta disidencia manifestada por Italia, al rescatar un plan de estudios organizado en un único ciclo de cinco años, o la absoluta variedad de los requisitos exigidos en cada lugar para acceder a las profesiones jurídicas, con el ejemplo singular de España, que hasta ahora, sigue optando por no colocar ningún otro más allá de la obtención de la licenciatura, no hacen sino abundar en la creciente sospecha que, hasta a los que no partimos desde posiciones apriorísticamente escépticas, nos viene invadiendo acerca de que la amenaza de que, en algunas cuestiones fundamentales, el Espacio Europeo de Educación Superior acabará instalado en el terreno de la pura ficción, se perfila cada vez más cierta.

Manuel Ángel Bermejo Castrillo
Universidad Carlos III de Madrid

UNA «HISTORIA» PARA DESPUÉS DEL CÓDIGO*

Je ne me préoccupe point, répondit mon père,
de courir après le vent pour en faire des provisions,
car, si je le tiens immobile, le vent n'est plus.
A. de Saint-Exupéry, *Citadelle* (1939-1944), LXXIX

Sumario: 1. Introducción.—2. Tres estrategias fracasadas.—3. Una estrategia distinta.

1. *Introducción*

Pienso que sobre los historiadores del derecho, al menos sobre los que trabajan en una facultad de derecho —entre los cuales me incluyo—, gravitan ciertas amenazas. Cuando hablo de amenazas, aludo obviamente a todas esas situaciones en las que pensamos cuando hablamos de «crisis» de nuestra materia. Y que por desgracia caracterizan desde hace tiempo la parte de nuestra actividad que dedicamos a la enseñanza, es decir, a la formación de futuros juristas. Todos conocemos estas situaciones, las tememos y sufrimos, cada uno a su modo. Por eso no es necesario enumerarlas aquí: baste decir que documentan por desgracia la progresiva exclusión

* Estas páginas siguen más o menos fielmente el *iter* al que me he atenido durante la intervención oral del 22 de junio de 2006. Ocasionalmente precisan los conceptos, desarrollan alguna formulación aproximativa, eliminan alguna redundancia y añaden algún argumento. Mi (único) deseo es que todo esto pueda hacer más persuasivo el mensaje que ofrezco. Sobre los temas aquí desarrollados vengo reflexionando en público desde hace tiempo, casi siempre a través de la escritura. Por este motivo, pero también para no abusar de las citas, me remito con frecuencia a trabajos míos, donde quien me lea encontrará fácilmente —si quiere— explicaciones complementarias y sobre todo referencias bibliográficas actualizadas. De todas formas —pese a la apariencia, que me desagrada, pero por la que no me dejo condicionar—, sé muy bien que sólo soy un aprendiz entre aprendices, en paz con todos los maestros; con los vivos y con los desgraciadamente fallecidos.

de toda dimensión temporal en los planes de estudio, lo que provoca inevitablemente la supresión de cátedras, seminarios e institutos, con imaginables consecuencias desagradables incluso para la investigación.

Estando así las cosas, parece comprensible la reacción de los interesados. Es instintivamente *garantista*, es decir, dirigida a salvar lo salvable. E igualmente instintivamente deja para el futuro —pero a decir verdad nunca concretado— toda discusión de fondo sobre el sentido de la orientación histórica en la enseñanza. Táctica quizá comprensible, decía, pero nunca realmente satisfactoria.

Cuando intentamos convencer a nuestros (por otro lado pocos y generalmente fuertes) interlocutores, lo hacemos incluso con estadísticas que elaboramos sirviéndonos de comparaciones históricas. En concreto, de los distintos reglamentos y planes de estudios que se han sucedido en el tiempo, revisamos el número de horas dedicadas a la enseñanza de una vaga «historia del derecho». De ese modo, conseguimos datos que relacionamos y en el previsible resultado de esta operación —tan elemental como problemática— leemos la dimensión (inevitablemente «catastrófica») del declive que tanto nos angustia. De esta manera nos hartamos de números y de cifras, los sacamos de su «contexto», los liberamos de sus vínculos, los sometemos a un ejercicio digno de un *jongleur*, que podrán satisfacer a un contable, pero que en realidad humillan a un historiador. Y demostramos de tal manera la verdad de cuanto decía al comienzo, es decir, que las amenazas —al menos parcialmente¹— las fabricamos nosotros. Pero, ¿por qué?

Porque quizá no hemos entendido bien todavía (o no queremos entender del todo) que incluso la expresión «historia del derecho» es vaga y polisémica, como tantas otras que afloran en nuestros razonamientos y que, sin precisar, propician equívocos y malentendidos. ¿Algunos ejemplos? «Derecho romano», «derecho natural», «derecho común»: quien habla sin precisar el significado concreto

¹ Aunque aquí me dedico a razonar sobre los errores (y a veces sobre los excesos) imputables a los historiadores del derecho, no pienso que de tal modo se pueda explicar completamente el origen y desarrollo de la «crisis» de nuestra materia. Se trata la mía de una incursión *conscientemente parcial*, que no pretende explicar todo y menos aún impedir una evolución desagradable pero por desgracia posible.

que poco a poco se le ha dado a estos términos² con frecuencia se refiere a cosas distintas con el mismo nombre³, se adentra así en un laberinto, del cual salen —si es que salen— sólo los más expertos o afortunados. Concretamente: incluso el significado preciso de «historia del derecho» entendida como materia del plan de estudios de los juristas depende del contexto discursivo. Por ejemplo, decir que en Castilla, Toscana o Sajonia del siglo XVI la historia del derecho, entendida como incursión retrospectiva dirigida a recuperar y valorar (por no decir precisamente «reciclar») las experiencias del pasado, era elemento constitutivo de la educación jurídica, es una afirmación completamente distinta que sostener que lo es todavía hoy, al comienzo del tercer milenio, en España, Italia o Alemania. Aunque ambas afirmaciones correspondiesen a la realidad⁴, aunque en dos épocas tan distintas la historia fuese (o sea) concebida como irrenunciable por ser constitutiva, *ciertamente no lo es por los mismos motivos y del mismo modo*.

No se trata de un gran descubrimiento⁵, pero tampoco de algo

² Sean bienvenidos por ello los intentos de favorecer el rigor conceptual y terminológico enumerando por ejemplo los distintos significados de un mismo término. Resulta meritorio R. Orestano, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna 1987, pp. 9, 455 [trad. *Introducción al estudio del derecho romano*, Madrid 1997], para la expresión «derecho romano». Análogo ejercicio para la locución «derecho común» puede verse ahora en A. Daniel, *Gemeines Recht. Eine systematische Einordnung der Rechtsfigur und ihrer Funktion sowie die Bestimmung der inhaltlichen Probleme aus der Sicht des 18. Jahrhunderts*, Berlin 2003, pp. 37 ss.

³ Son los casos, como se dice cada vez más frecuentemente, de «falsa homologación».

⁴ Aunque toda lectora y todo lector saben perfectamente que las reservas relativas a la situación actual son más que obligadas.

⁵ Ya lo había comprendido con claridad meridiana el gran (aunque olvidado) romanista y laboralista alemán, Philipp Lotmar, en un memorable escrito de juventud. En *Kritische Studien in Sachen der Contravindikation*, München 1878, p. 31, se expresa así: «Des Weiteren zeigen uns die Römer, dass die Bearbeitung und Kenntniss der Geschichte eines Rechts nicht unter allen Umständen, sicherlich nicht unter allen Umständen in gleichem Masse Vorbedingung oder nur Hülfsmittel für die Kenntniss und Pflege eines Rechts ist. Zwischen Geschichte und Dogmatik besteht kein von der Beschaffenheit der Quellen und des Stoffes unabhängiger, stets gleich nöthiger und gleich weit reichender Zusammenhang. Daraus folgt

obvio. Nos incita más bien a razonar sobre el *contexto* de las dos situaciones: sobre el social y el político, ciertamente, pero sobre todo sobre el *textual*, estrechamente ligado al sistema de fuentes. Porque a él reenvía inevitablemente todo discurso sobre las materias que forman el plan de estudios. Desde este punto de vista me parece lícito distinguir dos periodos:

- el *antiguo* conocía la primacía del derecho común y de la ciencia que, a partir del siglo XI, lo había elaborado pacientemente. Culminaba en la *interpretatio* sapiencial, a la que asignaba la tarea de poner en armonía las dispersas y concurrentes fuentes inherentes al sistema⁶;
- el *moderno* celebra por el contrario la primacía de la ley, en su forma codificada, que es aplicada y no interpretada como se dice a veces, quizá simplificando demasiado y empobreciendo así el discurso.

Resulta por ello con clara evidencia un hecho fundamental: la *codificación* del derecho (entendida aquí como procedimiento) y su resultado, el código, aparecen —también en este específico asunto, como en otros tantos— como un punto de flexión. Hay un antes y un después. Son dos vidas, dos regímenes, dos contextos, dos estructuras políticas y sociales⁷, y por eso, incluso necesariamente, dos

aber, dass der Betrieb der Rechtsgeschichte durch das Bedürfnis, das geltende Recht verständlich zu machen, nicht schlechthin begründet werden kann». Me remito a este precioso párrafo, con el respeto y la admiración debida a un célebre miembro de mi facultad bernesa, en P. Caroni, *Die Einsamkeit des Rechtshistorikers. Notizen zu einem problematischen Lehrfach*, Basel-Genf-München 2005, pp. 136-137.

⁶ A pesar de los años son imprescindibles las páginas redactadas por C. Petit y J. Vallejo en *La categoria giuridica nella cultura europea del Medioevo*, en *Storia d'Europa, III, Il Medioevo*, edición de G. Ortalli, Torino 1994, pp. 721-760.

⁷ Se trata sin embargo de un hecho en el que no solemos pensar; así, los defensores del retorno al antiguo sistema de fuentes (de quienes deberé decir alguna cosa) o lo ignoran (pero casi no puedo creerlo) o lo olvidan. Sobre él habla, insistiendo con razón, A. Cavanna, «La codificazione del diritto nella Lombardia austriaca», en A. De Maddalena, E. Rotelli, G. Barbarisi (editores), *Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa*, vol. III, *Istituzioni e società*, Bologna 1982, pp. 611-657, espe-

distintos modos de enseñar y de estudiar el derecho. Y así dos distintas razones de acudir a la historia y dos distintos modos de utilizarla para enseñar y estudiar adecuadamente.

En el *sistema de fuentes del derecho común* todo parece obvio y natural. La orientación histórica es determinante, es decir, literalmente *constitutiva*⁸. El sistema asigna a la historia, es decir, a un planteamiento intencionalmente retrospectivo, la tarea —preliminar, pero igualmente fundante— de establecer qué y cuál parte del derecho pasado está vigente y vivo todavía y por eso se aplica. Que es como decir: sólo el examen histórico permite identificar y circunscribir el derecho que hoy llamaríamos *positivo*. Esta máxima impregna el sistema, lo caracteriza, porque se sirve *vis-à-vis* de todas las fuentes, es decir, no sólo de las romanas (que son tendencialmente sapienciales) sino también de las otras, las máximas de origen consuetudinario⁹.

En el *actual sistema de fuentes* todo —incluso el papel de la historia— es menos evidente y nítido. El derecho positivo no se verifica por una investigación histórica, sino que se sanciona oficialmente por la autoridad política. Está dominado por la ley. Sostenida ésta por la sanción política, se enfrenta *de otra manera* con la historia. Si parece desautorizarla, no lo hace por una decisión previa, sino sólo como consecuencia de una opción constitucional. No es cierto que corte inevitablemente (*estructuralmente*) el hilo que hasta ahora la ligaba con el pasado. A su modo (es decir, menos visiblemente) lo reclama, quizá incluso lo revive. Y abre, de esta manera, un nudo de comunicación, en el cual todos todavía estamos atrapados, todos buscamos todavía una vía de salida. Nace precisamente así —como nos hemos

cialmente pp. 620, 629, 631. Del mismo modo P. Caroni, *Saggi sulla storia della codificazione*, Milano 1998, pp. 24-25, 56 ss., 108-109, 138-139 [libro que recoge entre otros trabajos las *Lecciones catalanas sobre historia de la codificación*, Madrid 1996].

⁸ P. Caroni, *Einsamkeit*, cit., pp. 135 ss.

⁹ He reflexionado sobre las consecuencias concretas de esta última afirmación en «*Sogar wenn Löwen sprechen könnten...*». *Überlegungen zur Einführung*, texto preliminar a una recopilación de intervenciones en un seminario bernés sobre *Gewohnheitsrecht und seine Vergangenheit*, Akten eines im Wintersemesters 1998-1999 durchgeführten Seminars, Bern 2000, pp. 1-11. Cito este texto, pero subrayo al mismo tiempo su carácter provisional y casi episódico.

habituaado a llamarla— la *crisis* de la historia del derecho: de este comportamiento de la ley codificada con el pasado, tanto el remoto como el próximo. De este discreto *backward look* ni prioritario (como hasta ahora), ni excluido se evidencian dos hechos: que la época caracterizada por el dominio indiscutible del *método histórico* ha sido superada; que esto no prejuzga nada, y en absoluto sanciona una clausura drástica y definitiva. A nosotros nos ha tocado, una vez percibida la radicalidad del cambio¹⁰, elaborar, favorecer nuevas soluciones, proponer nuevos vínculos. Sin embargo nos hemos quedado cruzados de brazos, hemos esperado que, a pesar de todo, fuese posible continuar como hasta ahora, predicando las mismas, cómodas certezas, repitiendo más o menos las mismas fórmulas e insistiendo —aquí radicaba la única novedad— sobre la *incidencia cultural* del conocimiento histórico¹¹. Hoy, me parece, ya nadie nos cree. Finalmente se intentan nuevas estrategias. Las que conozco, y a las que aludo, son muy distintas entre sí, pero tienen algo en común. Todas han fracasado¹². Es decir, ninguna ha conseguido bloquear la hemorragia de la materia, combatir eficazmente su marginación. Intentemos ahora, si es posible, comprender por qué.

2. *Tres estrategias fracasadas*

Estas nuevas estrategias tienen una matriz común, por eso las analizo en el mismo capítulo. Las tres nacen en respuesta al mismo interrogante. Que puede enunciarse así: *codificatur ut innoveatur?* Es decir: ¿qué relación crea (o tolera) el código con el pasado jurídico? ¿Lo confirma o reniega de él? La pregunta es tan antigua como elemental. Nunca ha perdido actualidad, cada generación la descubre y la replantea. Si todavía nos enfrentamos a ella con tanto empeño¹³ es porque hemos percibido, poco a poco, su radicalidad.

¹⁰ Radicalidad que no permite realizar comparaciones demasiado formales con situaciones lejanas en el tiempo y que desaconseja elaborar estadísticas y deducir argumentos de peso.

¹¹ Resumo tales justificaciones en *Einsamkeit*, pp. 8 ss.

¹² Aunque no por los mismos motivos, lo que nos obliga a examinarlas separadamente.

¹³ Entre los que todavía niegan drásticamente el impacto innovador de los códigos cito, escogiendo entre muchos estos tres: H. Honsell, «Die

No es casual que debamos enfrentarnos a ella *también* cuando reflexionamos sobre cómo resolver la crisis de la historia jurídica.

a) La estrategia anticuaria

Quien vio en el código la voluntad de romper rotundamente todo vínculo con el pasado, una voluntad documentada incluso por el estatismo que manifiesta la ley, interpretó la transición —que fue larga, laboriosa y finalmente controvertida¹⁴— como la conclusión de un ciclo, el caracterizado por el valor instrumental de la historia. Libre ahora de la obligación de interpretarla desde la óptica del derecho positivo, *rechazado* en este sentido por el legislador, se dedicó (¿finalmente?) a investigaciones *puramente* históricas, es decir, como se decía habitualmente, *anticuarias*, retomando así un término ya usado por Savigny, que infundía un innegable escepticismo ante esta elección, comprendida en realidad como una desviación¹⁵.

Bedeutung des römischen Rechts für die moderne Zivilrechtsdogmatik», en J. Eckert (ed.), *Der praktische Nutzen der Rechtsgeschichte. Hans Hatzenhauer zum 8. September 2001*, Heidelberg 2003, pp. 245-258; R. Zimmermann, «Heutiges Recht, Römisches Recht und heutiges Römisches Recht», en R. Zimmermann (ed.), *Rechtsgeschichte und Privatrechtsdogmatik. Hans Hermann Seiler zum 24. Dezember 1999*, Heidelberg 1999, pp. 1-39; H. Kooiker, *Lex scripta abrogata. De derde renaissance van het Romeinse Recht*, I, *De uitwendige Ontwikkeling*, Nijmegen 1996. Por el contrario, lo admiten sin reservas, por ejemplo, P. Caroni, «Quando si esaurisce il ciclo delle redazioni: l'emersione del codice nel XIX secolo», en A. Iglesia Ferreirós (ed.), *El dret comú i Catalunya*, Actes del XI Simposi Internacional Barcelona, 20-22 maig 2004, Barcelona 2005, pp. 283-301; P. Grossi, «Code civil: Una fonte novissima per la nuova civiltà giuridica», en *Il bicentenario del Codice napoleonico*, Roma 20 dicembre 2004, Atti dei convegni Lincei 221, Roma 2006, p. 19-42.

¹⁴ He intentado reconstruir y comentar este *iter*, más bien largo y tormentoso, que abarca el problema de la enseñanza, como se debería deducir de este escrito, en *Saggi*, cit., pp. 165-199.

¹⁵ P. Caroni, «Il codice rinviato. Resistenze europee all'elaborazione e alla diffusione del modello codicistico», en P. Cappellini-B. Sordi (eds.), *Codici. Una riflessione di fine millennio*, Atti dell'incontro di studio Firenze 26-28 ottobre 2000, Milano 2002, pp. 263-307, en concreto pp. 279-280; Ídem, *Einsamkeit*, cit., pp. 129-130.

Así reaccionaron en Alemania con la entrada en vigor del BGB, es decir, después de 1900, afamados romanistas como Ludwig Mitteis, Leopold Wenger o Paul Koschaker¹⁶. Sus investigaciones, sobre todo las encaminadas a descubrir los restos de la presencia romanista en las provincias orientales del Imperio, continúan siendo memorables en la historiografía jurídica. *Salvaron* la investigación científica, le garantizaron un futuro. Pero tocaban un ámbito especializado, lejano a las aulas académicas. Si parece por ello un pretexto responsabilizar a estos maestros de una crisis abierta en realidad por los códigos —como desgraciadamente se hace, sin matizar adecuadamente¹⁷— al menos se puede contestar que, moviéndose en un plano totalmente extraño a las expectativas de los *prácticos*, condenaron sus investigaciones a la irrelevancia académica¹⁸.

b) La estrategia minimalista

Otros historiadores, quizá la mayoría, vivieron de manera menos traumática la transición. No negaron la realidad de la ruptura, pero tampoco vieron en el código una puerta herméticamente cerrada al pasado. Reivindicaron por ello para la historia, también dentro del nuevo sistema, un valor no solo decorativo o cultural, sino *también* práctico, y a su modo *operativo*: si ya no constitutiva, como sucedía en el sistema del derecho común, al menos auxiliar, o *subordinada*. Y se lanzaron a la investigación de casos concretos, en los que el código parecía dejar espacio a divagaciones históricas. Los tradicionales inventarios de estas situaciones¹⁹ han sido ampliamente superados por una colección de estudios preparada recientemente en Alemania y publicada con un título más que convincente: «La uti-

¹⁶ Sobre ellos, últimamente, sin ocultar la admiración que todavía tiene por sus obras, R. Zimmermann, *Heutiges Recht, Römisches Recht und heutiges Römisches Recht*, cit., pp. 17-29.

¹⁷ Una nota crítica sobre esta orientación, que estimo unilateral, en Saggi, cit., pp. 170 ss. y *Einsamkeit*, cit., pp. 139 ss

¹⁸ Al menos sobre este detalle coincido con E. Bucher, «Rechtsüberlieferung und heutiges Recht», en *Zeitschrift für europäisches Privatrecht* 8 (2000), pp. 394-543, en concreto p. 527.

¹⁹ Reunidos por ejemplo en P. Caroni, *Einsamkeit*, cit., pp. 8 ss

lidad práctica de la historia del derecho»²⁰. Las respuestas allí dadas a nuestras preguntas por conocidos autores pueden ser resumidas así: parece útil, hasta inevitable, acudir a una exploración histórica en *tres casos concretos*: en el ámbito de la interpretación histórica, para aclarar la voluntad hipotética del legislador; en el de la denominada reserva transitoria, de la que disfrutaban instituciones conocidas por el viejo derecho pero extrañas al codificado y por ello (sólo) provisionalmente toleradas; y finalmente, allí donde el derecho codificado renuncia a la unificación y remite a ordenamientos locales, con frecuencia consuetudinarios.

Dan ganas de decir: no es gran cosa. Se trata más bien de casos raros y excepcionales, donde a la historia sólo se le pide que facilite el conocimiento de una norma oculta que vegeta quizá fuera del ámbito legislativo pero que —todavía vigente— es aplicable. El problema es entonces el del saber si tal recurso esporádico a las luces del pasado basta para documentar la utilidad, justifica todavía la colocación de la historia entre las materias irrenunciables del plan de estudios jurídico. Hay quien duda²¹, y es difícil esta vez rechazar su juicio. Parece por eso lícito retener que los numerosos seguidores de esta *estrategia minimalista* se han resignado a obrar en la penumbra y casi justifican —actuando así— la invasión penalizante de quien concibe la historia como una materia tendencialmente obsoleta.

c) La estrategia maximalista

A muchos historiadores les disgusta esta resignación. No se contentan con ella, rechazan una presencia esporádica y casi humi-

²⁰ Se trata de la recopilación de escritos en honor de H. Hattenhauer, editada por el llorado colega J. Eckert y publicada en 2003 con el título *Der praktische Nutzen der Rechtsgeschichte*. La he reseñado detalladamente en un ensayo titulado: *Nutzlos, nützlich, notwendig. Welches Prädikat für das «problematische» Lehrfach?*, que será publicado en el primer fascículo de *Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte* 29 (2007).

²¹ R. Zimmermann, «Gemeines Recht heute: Das Kreuz des Südens», en J. Eckert (ed.), *Der praktische Nutzen der Rechtsgeschichte*, cit., pp. 601-627, en concreto p. 626. Comparte esta valoración G. Lingelbach, «Rechtsgeschichte als Immunschutz vor (allzu) Aktuellem», en la recopilación apenas citada, pp. 319-330, especialmente p. 329.

llante. Reivindican más bien que sea continua, sistemática, *estructural*. Sólo ésta puede aspirar a estar incluida *d'emblée* entre las materias canónicas del plan de estudios jurídico.

¿Quiénes son estos historiadores? Son aquellos a quienes, hace algunos años —suscitando la ira— llamé neopadectistas²². Numerosos y eficientes, rechazan las discusiones teóricas porque las consideran banales²³; pero en contrapartida ocupan una cátedra tras otra. Así, sin acertar demasiado. La premisa de su estrategia, que llamaré *maximalista*, deja al menos atónito: niega radicalmente la autonomía de los códigos, rechaza su carga innovadora, los considera como una etapa más del largo e ininterrumpido curso del viejo sistema de fuentes. Llenos como están de materiales históricos y sobre todo de máximas romanistas, los códigos —según ellos— remiten al concepto de *ius proprium*, es decir, de aquel derecho que el viejo sistema exigía interpretar, corregir y completar *según el derecho común*. Esta certeza permite a los neopandectistas recuperar *en conjunto* la vieja y célebre tradición sapiencial, valorarla en toda su extensión. Lo que significa elevarla a la categoría de una ciencia jurídica feliz de retomar, de ese modo, su papel de primera dama. Y en sustancia, reorganizar la enseñanza de la historia de conformidad con estas opciones, sobre el modelo —pienso— de cuanto Savigny enseñaba a sus estudiantes berlineses. ¿Qué opinar sobre ello?²⁴.

²² P. Caroni, *Einsamkeit*, cit., pp. 43 ss.

²³ Las llaman, eufemísticamente, «combates de trinchera». Las evitan, ya que advierten en ellas un descrédito para la disciplina. Mi respuesta a estas afirmaciones pueden leerse en *Einsamkeit*, cit., p. 170.

²⁴ Consideraciones críticas sobre este programa pueden verse, por ejemplo, en A. Mazzacane, «Il leone fuggito dal circo: pandettistica e diritto comune europeo», *Index. Quaderni camerti di studi romanistici* 29 (2001), pp. 97-111; L. Lacchè, «Europa una et diversa. A proposito di ius commune europaeum e tradizioni costituzionali comuni», en *Teoria del diritto e dello Stato. Rivista europea di cultura e scienza giuridica*, 2003, pp. 40-71; J. Rückert, «Privatrechtsgeschichte und Traditionsbildung», *Rechtshistorisches Journal* 11 (1992), pp. 122-144; W. Wiegand, «Back to the future?», *Rechtshistorisches Journal* 12 (1993), pp. 277-284; Ed. Picker, «Rechtsdogmatik und Rechtsgeschichte», *Archiv für die civilistische Praxis* 201 (2001), pp. 763-859, en concreto pp. 851-859; G. Alpa, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Roma-Bari 2000, pp. 307-312; A. Somma, *Temi e problemi di diritto comparato. II. Tecniche e valori nella ricerca comparatistica*, Torino 2005, pp. 119 ss. No faltan críticas desde el frente roma-

Hay que matizar. Hay que subrayar que muchas contribuciones de inspiración neopandectista merecen toda nuestra admiración por la vivacidad de las descripciones, por la construcción lógica de los argumentos, incluso por su elegancia formal. Ya lo he recordado otras veces²⁵, y hoy, pasados varios años, lo confirmo. En segundo lugar, no debemos detenernos en las exageraciones, contradicciones y deformaciones, en las que todos podemos incurrir²⁶. Dicho esto, debo afirmar —con la misma franqueza— que considero la premisa de todo el razonamiento al menos temeraria e inaceptable. Y esto, en mi opinión, condiciona sin remedio las perspectivas del programa didáctico que se nos reclama, por una serie de perplejidades y dudas que, con toda la buena voluntad, no alcanzo a eliminar. Intento resumirlas²⁷.

Para empezar: reconocer en los códigos sólo los elementos «históricos», que obviamente existen y que nadie rechaza; considerar-

nista: véase por ejemplo A. Guarino, en *Labeo. Rassegna di diritto romano* 44 (1998), pp. 253-255; Ídem, *Trucioli di bottega*, IX, Napoli 2003, pp. 28 ss., además de la intervención de Mario Bretone, que se citará. Interesa finalmente una documentadísima reflexión *ante literam* de R. Orestano, *Introduzione*, cit., pp. 455-511.

²⁵ P. Caroni, *Einsamkeit*, cit., pp. 44-45.

²⁶ A pesar de todo tienen el mérito de hacernos sonreír: así la interminable secuencia de *renaissances* y recepciones del derecho romano (que recuerdan a su modo al obstinado e incorregible ánade goethiano, sobre el cual ha razonado recientemente S.A. Fusco, «Continuità e discontinuità nell'esperienza giuridica romana», *Diritto romano attuale. Storia, metodo, cultura nella scienza giuridica*, 1 [1999], pp. 29-49), como también la simpática (pero quizá prematura) colocación de un brillante autor, como verdaderamente es Reinhard Zimmermann, en el elenco de los *zivilrechtliche Entdecker*. Véase en este sentido S. Mittelsten Scheid, «Reinhard Zimmermann und das römisch-kanonische Recht als Grundlage einer europäischen Zivilrechtsordnung», en Th. Hoeren (ed.), *Zivilrechtliche Entdecker*, München 2001, pp. 411-442 (incluso existieron romanistas que alimentaron dudas, véase C. Cascione, *Index. Quaderni camerti di studi romanistici* 30 [2002], p. 477). Las contradicciones, al menos las heredadas de Savigny, las admite muy honestamente incluso R. Zimmermann, *Heutiges Recht, Römisches Recht und heutiges Römisches Recht*, cit., pp. 10-14.

²⁷ He resumido los puntos fundamentales del diseño neopandectístico y he elencado los motivos de mi disenso, que sobre este punto es total, en *Einsamkeit*, pp. 43 ss., 117 ss., 149 ss.

los como la prueba de la pertenencia del código al área del derecho común. Todo esto me parece siempre y todavía una deformación gratuita e inútil, una visión paralizante «par une hypertrophie de la mémoire»²⁸ que además niega la evidencia, oscurece la incontestable novedad que aparece tras el código para quien no sólo mira, sino que también quiere ver.

En segundo lugar, me resulta muy difícil compartir el culto a la continuidad al que se dedica el neopandectismo. Sobre todo si la continuidad se queda (como sucede en muchos casos) únicamente en *correspondencias de palabras*. Y me molesta la consiguiente concepción de la historia jurídica como *comparación vertical*²⁹. Porque el pasado me resulta más bien tierra extranjera³⁰. Por este motivo — pido excusas— incluso cuando los historiadores del derecho se dan por satisfechos con ser «tireurs de conséquences»³¹, tomo distancia.

Por no entrar, *en tercer lugar*, en el hecho de que la sistemática referencia al pasado y sobre todo su *indiscriminada* valoración para colmar las lagunas del presente pueden incluso desagradar ya que denotan grave insensibilidad histórica³² y desvelan generalmente sin

²⁸ Así se expresa J. Carbonnier, «Le Code civil», en P. Nora (ed.), *Les lieux de mémoire*, II, *La nation*, Paris 1986, pp. 293-315, la cita está en la p. 313, nota 6.

²⁹ La practican con desenvoltura algunos autores en *Der praktische Nutzen der Rechtsgeschichte*, cit., pp. 124, 157, 158, etc.

³⁰ He intentado documentar esta convicción mía (que concretamente aparece en el título de la reciente novela de G. Carofiglio, *Il passato è una terra straniera*, 2004) en *Einsamkeit*, pp. 163 ss.

³¹ E. de Vattel, *Le droit des gens, ou principes de droit naturel appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains*, Paris 1830, I, § 114.

³² Quien considera el pasado una mina de la que se extrae a conveniencia, y sin demasiados escrúpulos, todo cuando se estima útil para el presente (como hace por ejemplo E. Bucher, *Rechtsüberlieferung und heutiges Recht*, cit., pp. 516, 526, 533, por otro lado emblemáticamente orgulloso de este «encuentro» con la tradición), no hace ciertamente obra de historiador. Lo han recordado, entre otros: M. Bretone, «La “coscienza ironica” della romanistica», ahora en *Diritto e tempo nella tradizione europea*, Roma-Bari 2004, pp. 235-251; J. Rückert, «Norm und Tradition. Ein Schlussbericht und einige Fragen», en P. Caroni-G. Dilcher (eds.), *Norm und Tradition. Welche Geschichtlichkeit für die Rechtsgeschichte?*, Köln-Weimar-Wien 1998, pp. 21-32, especialmente 24-25. La crítica a la desenvoltura con la que el pasado que le es útil resulta desmantelado, está resumida en el

piedad el carácter originario de la historiografía jurídica, el de haber nacido «al servicio de la legitimación del derecho oficial»³³.

Todo sería *finalmente* excusable y quizá incluso enmendable, si estas bellas teorías no oscurecieran —como lo hacen— una verdad incontestable. Hela aquí: que frente a todas las continuidades de este mundo, el silencioso transcurrir del tiempo de por sí cambia (también) el derecho, incluyendo el vigente. El tiempo deja poso cuando «transcurre» (y con mayor razón cuando «concluye»). Y lo hace sin llamar previamente a la puerta del legislador, sin pedirle permiso. «Transcurre» y cambia. No explicarlo a nuestros estudiantes, ocultarlo invocando continuidades imaginarias, describiéndoles el pasado como una ininterrumpida secuencia de renacimientos, esto en mi opinión destruye la credibilidad pedagógica del programa. Es imperdonable y condena sin más esta tercera estrategia.

Resumiendo: ninguna de las estrategias evocadas convence, por eso las he denominado fracasadas. Si las dos primeras no justifican una enseñanza orgánica de la materia, la última lo haría únicamente como hemos visto construyendo sobre la arena. Mejor dejarla pasar.

Y entonces, ¿qué hacer? ¿Resignarnos? ¿O por el contrario, ensayar, recorrer (si existen) otros caminos, descubrir nuevas estrategias? Quien esté dispuesto a responder afirmativamente a estas preguntas, debe darse prisa. Porque el tiempo concluye. Cuanto más nos alejamos de la entrada en vigor del nuevo sistema de fuentes que ha conferido al Estado en exclusividad la tarea de concretar el ámbito y las fuentes del derecho positivo, menos se toleran estrategias que —como hemos visto— ofrecen un flanco a las críticas (por otro lado justificadas). Urgen nuevas propuestas, capaces de resistir a la presión de las materias básicas. Pero ¿cuáles?

3. *Una estrategia distinta*

Para la óptica garantista, dirigida a la conservación de las estructuras actuales³⁴, lo que intento proponer resulta ciertamente poco

título de mis primeras anotaciones sobre el neopandectismo, publicadas en 1994: «Il naufragio della storicità», *Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte* 16 (1994), p. 85.

³³ Así M. Sbriccoli en su intervención en P. Grossi (ed.), *L'insegnamento della storia del diritto medievale e moderno. Strumenti, des-*

recomendable. Es mejor decirlo enseguida, para evitar equívocos. Me guía el deseo de incidir sobre la formación de los juristas, de liberarla de cualquier condicionamiento incómodo e injustificado, de hacerla más ágil y más atenta a las grandes fuerzas externas a la construcción dogmática. Con la esperanza de que en un futuro no demasiado lejano se aprecie al fin la contribución que a todo esto puede proporcionar la *docencia*.

Por eso era inevitable que, antes o después, esta elección mía chocase con la situación actual, sobre todo con la tradicional división de tareas entre historiadores: los romanistas por una parte, que se ocupan de la historia del derecho común, y los cultivadores de la historia jurídica nacional por otra, que elaboran la del relativo *ius proprium* (español, alemán, italiano, etc.). Una división que, como todos sabemos, se refleja en un número considerable de cátedras, de personal, de grupos de investigación, etc. Si mis propuestas miran a la enseñanza e ignoran tendencialmente el deseo de conservar *à tout prix* un orden tácitamente transmitido de generación en generación, pero nunca puesto en discusión en serio, las horas de este «dualismo» están contadas. Nunca lo pensamos, pero la evolución legislativa lo desaprueba. El derecho, *al codificarse*, ha terminado implícitamente con la contraposición histórica entre *ius proprium* y *ius commune*. ¿Por qué ignorarlo, como aún se hace? ¿Por qué no escribir finalmente la historia de esta etapa, como se ha propuesto tan frecuentemente como en vano³⁵?

tinatari, prospettive, Atti dell'incontro di studio Firenze 6-7 novembre 1992, Milano 1993, pp. 117-133, la cita en p. 128. Otra prueba de lo discutible de la elección. Los ojos del neopandectista se fijan instintivamente en *aquellas* reglas del pasado que sirven «zur historischen Einordnung und Abstützung des von ihm anzuwendenden heutigen Rechts» (como augura explícitamente E. Bucher, *Rechtsüberlieferung und heutiges Recht*, cit., p. 527). Otros aspectos sobre este combatido argumento en *Einsamkeit*, cit., pp. 142 ss.

³⁴ Y que lo hace, hay que añadir, por motivos que merecen todo nuestro respeto.

³⁵ P. Caroni, *Saggi*, cit., pp. 191-199; Ídem, *Einsamkeit*, cit., pp. 70-71, 142 ss. Recientemente, en sentido análogo, L. Pahlow, «Historische Rechtsforschung und geschichtliche Rechtswissenschaft. Zur Einführung», en L. Pahlow (ed.), *Die zeitliche Dimension des Rechts. Historische Rechtsforschung und geschichtliche Rechtswissenschaft*, Paderborn-München-Wien-Zürich 2005, pp. 9-24, especialmente 10-11. Si después los romanistas, que

De nuevo nuestro itinerario se cruza con la codificación. No es casual. Significa, si acierto en el análisis, que toda nueva propuesta docente tiene que enfrentarse con el concepto de código, apurar la estructura y las opciones de fondo, el impacto social, la carga innovadora. Sólo teniendo en cuenta todo esto —las respuestas que poco a poco sabremos dar a todos estos interrogantes— podremos avanzar propuestas válidas³⁶. Por mi parte me conformo con fijar algunos puntos esenciales³⁷.

a) Todo el derecho, incluido el positivo, es siempre «histórico»

Quién lo afirma sabe que el derecho no puede percibirse en sí mismo, en estado puro y absoluto, sino siempre y necesariamente en su dimensión temporal. El tiempo no es su contexto, es más bien algo connatural. En el tiempo se expresa, al tiempo está sometido, por el tiempo viene caracterizado, al tiempo viene confiado, al tiempo debemos referirnos para comprenderlo, debemos finalmente tener el tiempo en cuenta cuando intentamos concretar su mensaje. A todo esto se alude cuando se afirma que el derecho es por naturaleza «histórico». No en la acepción corriente de este predicado, es decir, porque sea remoto en el tiempo, quizá irremediamente obsoleto y, por ello, abandonado. Ni menos aún porque sea algo único, irrepetible o excepcional, como cuando se afirma que la llegada a la Luna fue un evento histórico. «Histórico», por el contrario, porque la temporalidad le es inherente, porque a través de ella se expresa³⁸.

de todas maneras no renuncian a la tesis de la continuidad del modelo romanista (así por ejemplo Th. Mayer-Maly, «Resultate, Probleme und Aufgaben der rechtsgeschichtlichen Arbeit im deutschen Sprachraum», en *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis* 62 [1994], pp. 47-59, en concreto p. 58), formulan la propuesta de terminar finalmente con este dualismo la cosa parece ligeramente contradictoria (y, comprensiblemente, carece de seguidores).

³⁶ He intentado comprender en qué dirección hay que mirar para entrever *el* concepto de código —del que me sirvo hoy para formular mis propuestas— en *Einsamkeit*, cit., pp. 154 ss. y sobre todo en el ensayo de 2005 ya citado en la nota 13.

³⁷ P. Caroni, *Saggi*, cit., pp. 187 ss., 197-199 e *Einsamkeit*, cit., pp. 158 ss.

Entonces, ¿cómo no concluir que la historicidad del derecho, *in primis* la del derecho positivo, *debe* ser enseñada precisamente a quien se prepara para gestionarlo profesionalmente? Aunque hacerlo no es prerrogativa indiscutible del historiador, a él toca hacerse cargo especialmente de ello, máxime en ausencia de activas colaboraciones (posibles e incluso deseables, pero por desgracia escasas) de los colegas que se ocupan exclusivamente del derecho vigente.

b) Los dos significados de la historicidad del derecho positivo

«Historicidad» es un término ambiguo. Sirve incluso para caracterizar situaciones difícilmente compatibles³⁹. Como voy no obstante a utilizarlo, debo precisarlo. Para mí historicidad es *inherente a temporalidad*. Referida al derecho —que es nuestro caso— tiene un doble valor. En primer lugar la concibo como:

- *historicidad vertical* (es decir, diacrónica), ligada al hecho de que todo el derecho vigente viene confirmado por un pasado, por un *ayer* próximo o remoto. Es siempre un mensaje que llega del más allá, que envuelve y transforma a todos los destinatarios, haciendo de todos «hombres del pasado»⁴⁰. Este derecho positivo conlleva en sí el paso del tiempo, siempre está «actualizándose». Resulta ingenuo e imperdonable suponer que se nos confía como fue promulgado. Lo contrario es cierto (y obvio): el paso del tiempo —ya lo hemos visto— lo modifica. Puede suceder que, cuando nos alcance, sea irreconocible, como suce-

³⁸ P. Caroni, *Einsamkeit*, cit., pp. 79 ss.

³⁹ Quien, por ejemplo, la utiliza para dibujar la continuidad romanística presumiblemente presente en las reglas de los códigos (a lo que tiende por ejemplo el razonamiento de H. Honsell, *Die Bedeutung des römischen Rechts für die moderne Zivilrechtsdogmatik*, cit., pp. 247, 249, donde se repiten textualmente locuciones aparecidas en un ensayo de 1986-1987, véase D. Simon [ed.], *Akten des 26. Deutschen Rechtshistorikertages von 1986 in Frankfurt a.M.*, Frankfurt a.M. 1987, pp. 299-310), disiente necesariamente del significado que estas páginas dan al término «historicidad».

⁴⁰ Así llama G. Husserl (*Recht und Zeit. Fünf rechtsphilosophische Essays*, Frankfurt a.M. 1955, pp. 58 ss.) a los jueces, «administradores» de los correspondientes mensajes. Pero nada impide extender el apelativo a

- de con un mensaje cifrado. Para descifrarlo debo razonar sobre su itinerario, sobre lo que le ha ocurrido durante su vigencia. Es decir: debo explorar el pasado. Al menos el que lo envuelve. A este primer aspecto se añade otro, más centrado en la
- *historicidad horizontal* (es decir, sincrónica), o sea, al contexto social, político, económico, cultural, al cual el derecho se refiere y del cual extrae su valor específico. Podría incluso decir: la historicidad horizontal incita a tomar en serio el *carácter social* del derecho⁴¹, muestra por ello que sería ilusorio querer determinar el significado concreto (es decir, actual) sin referirse a la red de esos valores a los que está constantemente sometido. Si después el mensaje, sobre cuya interpretación se discute, queda encerrado en una codificación *burguesa*, esta enseñanza se convierte en mandato. Para convencerse basta con reflexionar sobre todo lo que el legislador burgués aspiraba a alcanzar con la codificación del derecho. Frente al sofocante espacio de derechos-deberes del viejo derecho privado, intentó crear un espacio sustancialmente libre, donde las voluntades autónomas de los sujetos jurídicos actuaban prestando o no su consentimiento en la búsqueda de logros «compartidos» por todos los contendientes. Para lograrlo bastaba con atenerse a las pocas cosas realmente comunes a todos los destinatarios del mensaje codificador. Bastaba con separarlas preliminarmente de todos los aspectos (innumerables) no comunes que marcaban las diferencias. Solo estructurándose así el código podía, de verdad, dirigirse uniformemente a la «nación». Esto explica cómo la igualdad formal —el único aspecto imputable a todos por igual— se convirtió en la piedra angular de un código obviamente «igualitario». De una ley que, contrariamente a cuanto hacía el viejo derecho privado, ya no contemplaba, sino que se deshacía ahora de todo «el resto», es decir, de todas las situaciones que reflejaban la desigualdad entre los sujetos jurídicos. ¿Cómo? Elegantemente, casi imperceptiblemente, es decir, prescindiendo, haciendo simples abstracciones. Si los códigos burgueses se conforman con poco —como se dice con frecuencia— es precisamente porque son el fruto consciente de

todos los destinatarios de las reglas jurídicas.

⁴¹ Aquí obviamente en el sentido de *ubi societas, ibi ius*, que he espe-

la *abstracción*. Quien pretenda valorarlos, destacar uno de los tantos mensajes que lanzan, hará bien en recordarlo. Es decir, en recuperar y tener en cuenta todo cuanto se ocultó, pudiendo apurar sólo así el valor iuspolítico de la regla que el código proclama. Más explícitamente: *la igualdad formal*, en torno a la cual se desarrolla toda la trama de los códigos, desvela su carga sólo si se vincula a la *desigualdad material*, cuidadosamente escondida entre los conceptos de la economía. Quien critica los códigos burgueses por propiciar la explotación de las contrapartes «desiguales», puede hacerlo sólo porque «ve» este vínculo y lo que discretamente permite⁴². El mensaje aportado por la historicidad horizontal podría resumirse de esta manera: si es verdad que el derecho está indisolublemente ligado a la sociedad en la que opera por vocación natural entonces resulta inevitable saber *cómo: cómo* (en qué condiciones) surge de ella, para desembocar en el código; y *cómo* (en qué condiciones) regresa a ella, para disciplinarla.

c) Recuperar para valorar

Enseñar que incluso el derecho positivo es histórico tiene un significado específico. Lo sitúa ante la realidad, orienta preliminarmente sobre el estado de la norma jurídica cuando llega al destinatario⁴³. Muestra que más allá de la engañosa (por impotente) apariencia, esta norma —considerada en sí misma, simplificada por la abstracción, modificada por el tiempo al que está sometida— es en realidad fragmentaria e incomprensible. Espera por ello que el destinatario reconozca su situación y la trate en consecuencia: que recupere su territorio y la sitúe en su contexto. Para llegar a ello resulta útil la «hermenéutica de la sospecha»⁴⁴, que no se contenta

cificado en *Einsamkeit*, cit., pp. 85 ss.

⁴² Sobre estos grandes temas, sólo enunciados en esta página, véase P. Caroni, *Saggi*, cit., pp. 21-37, 141-154; Ídem, *Einsamkeit*, cit., pp. 20 ss.

⁴³ Puede ser el juez que interpreta con vistas a su aplicación, el abogado que aconseja o patrocina, pero en el fondo también el *bonus pater familias*, a quien la ley interpela directamente.

⁴⁴ Véase la «Advertencia» a las *Lecciones catalanas sobre la historia de la codificación*, Madrid 1996, p. 14. Sobre el punto interesa también la

con las palabras sino que va más allá. Análogamente son útiles los destinatarios hambrientos del «resto», decididos por ello, primero, a perseguirlo y, después, a tenerlo en cuenta.

Pero, ¿cómo conseguirlo? No es difícil. Basta comprender —la tarea histórica lo facilita— que la regla jurídica, también la propuesta por el derecho vigente, *remite* implícitamente a una multitud de factores externos, *depende* de ellos, exigen que sean considerados adecuadamente. Interpretar desde esta óptica es una operación de recuperación y reagrupación. De entrada se refiere a la norma, pero para alejarse enseguida de ella. No teme la digresión, consulta encantada los *entourages*, explora meticulosamente los alrededores y otros parajes. Quien comparte estas certezas no se apresura a razonar sobre la elaboración de las reglas jurídicas, sobre lo que en alemán se denomina *Entstehungsgeschichte*. No rechaza su legitimidad ni la dignidad científica, pero la estima fundamentalmente estéril. En el código verá más bien, como he recordado varias veces, una «ossature sans chair»⁴⁵ que cada generación enriquece según los deseos expresados poco a poco por los grupos sociales dominantes sin excesivos escrúpulos e, incluso, sin demasiadas consideraciones por las aspiraciones del legislador⁴⁶. La historia del derecho, desde este punto de vista, no es ya la que se cierra con la sanción de la ley, *sino la que comienza precisamente entonces*⁴⁷. Es ciertamente más imprevisible y transgresora que la otra. También menos edificante. Y además no consuela a ninguno. Pero (al menos) no miente, quizá por ello tenga sus seguidores. Piden, cortésmente, mayor espacio en la enseñanza. Tienen toda la razón. Pienso que debemos ayudarles. En su ayuda escribo estas líneas.

aportación de M. Ferraris en *L'ermeneutica*, Roma-Bari 1998, p. 22.

⁴⁵ Así, J.-F. Laé, *L'ogre di jugement. Les mots de la jurisprudence*, Paris 2001, p. 215.

⁴⁶ Como bien saben los sociólogos del derecho. Véase, por ejemplo, E. Ehrlich, *Gesetz und lebendes Recht. Vermischte kleinere Schriften*, Berlin 1986, pp. 97; H. Lévy-Bruhl, «La méthode sociologique dans les études d'histoire du droit», en *Méthode sociologique et droit. Rapports présentés au Colloque de Strasbourg 26-28 novembre 1956*, Annales de la Faculté de droit et des sciences politiques et économiques de Strasbourg, 5 (1958), pp. 121-133.

⁴⁷ Es la denominada *Wirkungsgeschichte*, sobre su importancia me he detenido en «La historia de la codificación y la historia del código», en *Ini-*

d) Privilegiar el pasado próximo

Quien me ha seguido hasta aquí, con agrado o sin él, no se sorprenderá si ya concretando, como he hecho, la historicidad del derecho positivo, privilegio implícitamente el pasado próximo (*vis-à-vis* del remoto), el que confluye inmediatamente en el presente. La historia jurídica moderna viene revaluada, la de épocas más lejanas tendencialmente abandonada. Esta descompensación sería intolerable si enseñásemos en una facultad de historia, filosofía o magisterio. Donde *cada* época reivindica la atención que merece y las preferencias —impuestas por la concreta finalidad de la enseñanza— van quizá en otra dirección. Pero en el ámbito de las facultades de derecho pienso que se trata de algo inevitable. No se trata de ceder ante una moda o un *trend* causado por la «desaparición» del latín —como se ha observado maliciosamente—. Se refiere más bien a una evidencia: muestra que el horizonte de los destinatarios de nuestra enseñanza está y permanece en el derecho positivo, es decir, en el vigente. La *historicidad de este derecho* es el mensaje que debemos transmitir.

A quien objetase que sólo el estudio de un derecho remoto en el tiempo y en el espacio permite percibir la diversidad de la historia, ofreciendo el *recul* que sostiene la crítica⁴⁸, respondería que se equivoca completamente. No es necesario razonar sobre cosas ocurridas hace mil, dos mil años atrás, para registrar afinidades y diferencias, y extraer las consecuencias al caso. Quien examina el pasado, atento a señalar el reflejo de la historicidad, no tiene nece-

tium. Revista catalana d'història del dret 5 (2000), pp. 403-431

⁴⁸ Quien defiende la historia, poniendo en evidencia la función crítica, pero lo hace vagamente, es decir, sin precisar *premisas, métodos y objetivos*, camina en el vacío. Y a fin de cuentas le presta un mal servicio. Entre la «conciencia crítica» que evoca M. Talamanca (cito aquí por F. Mercolliano, «Su talune recenti opinioni relative ai fondamenti romanistici del diritto europeo», *Index. Quaderni camerti di studi romanistici* 33 (2005), pp. 83-104, en concreto p. 85), la aludida por C. Schott («Juristenausbildung und Rechtsgeschichte. Gedanken zu Studienreformen», *Neue Zürcher Zeitung* 12, febrero 1992) o, finalmente, la referida por M. Stolleis («Gesucht: Ein Leitbild der Juristenausbildung», *Neue Juristische Wochenschrift* 2001, pp. 200-202) existen diferencias abismales. Sin olvidar el hecho de que, se conciba como se conciba, esta función crítica no parece gozar de demasiadas simpatías entre los colegas dedicados al dere-

sidad de semejantes acrobacias, se las deja encantado a los artistas. Sabe que con la comparación con el pasado reciente basta para comprender cómo el tiempo modifica, desde dentro y silenciosamente, el derecho.

e) Resumiendo: una estrategia inevitable, maximalista, realista

A los caminos recorridos hasta ahora, que —espero no equivocarme— estimo inapropiados (y en este sentido fracasados) contrapongo la alternativa que me parece:

- *inevitable*, ya que reconsidera un aspecto no facultativo, contingente o decorativo, sino más bien *estructural* del derecho. Si la temporalidad es inherente al derecho, ignorarla o negarla resulta catastrófico y, en el contexto docente, imperdonable. Por el mismo motivo la alternativa resulta quizá;
- *maximalista*. Ofrece en efecto un parámetro de lectura, al que debe recurrir no sólo esporádicamente, sino *siempre* quien, ocupándose del derecho, aspire a «interpretarlo» correctamente. Recuerda así metafóricamente, esta bendita historicidad, a las lentes. Lentes sin las cuales el horizonte parece, *siempre*, un cristal esmerilado. Pero no llamo maximalista a esta alternativa mía en el significado hace un momento recordado⁴⁹. No niega la evidencia para salvar la continuidad. Aporta más bien un matiz;
- *realista*, porque después de haber reconocido sin reservas el carácter innovador del código explota con valentía las *chances* ofrecidas por la historia⁵⁰, no huyendo de la actualidad

cho positivo.

⁴⁹ Véase *supra*, el apartado c del epígrafe segundo.

⁵⁰ Esta afirmación se refiere a una opinión citada frecuentemente, según la cual los códigos modernos, rompiendo toda relación operativa con el pasado, lo abandonaron (más o menos conscientemente) a una historiografía autónoma, como en verdad fue la de los anticuarios. Así fue normalmente entendida por muchos autores —incluso disidentes— que cito en *Saggi*, cit., pp. 166-167 y *Einsamkeit*, cit., pp. 60, 139. Nada impide de todas maneras interpretarla de otro modo, por ejemplo como una invitación a *explotar la oportunidad de otra manera, tan operativa (aunque diversamente)* como la suprimida por los códigos. Es lo que sugiero en *Ein-*

(como hacen los anticuarios) ni contentándose con esporádicas suplencias (como los «minimalistas»). Si después analiza programáticamente el pasado, como de hecho lo hace, *no* es para buscar pruebas, raíces, causas, prefiguraciones o signos precursores —cosa que constituyen las aspiraciones de los seguidores de la continuidad, que he denominado neopandectistas—. Sino más bien esperando recoger motivos y estímulos para ilustrar las rupturas, evidenciar contrastes, colmar los silencios y justificar las reticencias; en una palabra: para explicar las derrotas e historiar los acontecimientos que siembran el *iter* seguido por el derecho actual.

Pio Caroni

Universidad de Berna

[Traducción de Manuel Martínez Neira]

DERECHO ROMANO Y DOGMÁTICA

*Todos los juristas son siempre contemporáneos... Las generaciones de juristas no se suceden verdaderamente; coexisten en la memoria colectiva de la comunidad**

He de comenzar con una confesión: el tema, en una primera aproximación, se me figura irremediablemente político. Leyendo el programa de las jornadas, y más aún al leer la Memoria remitida por la organización para que nos sirva de referencia, esta primera impresión se agudiza mucho más todavía. Y convencido como estoy de que los temas políticos los deciden los propios políticos, con el asesoramiento técnico «de encargo» tendente a vestir y legitimar casi cualquier decisión que adopten, pero en definitiva con libertad suma, no tengo más que prevenciones al afrontar la tarea de decir algo sobre derecho romano y dogmática desde una posición de independencia. Independencia porque no querría, aunque en el fondo será inevitable, que mi reflexión se viera demasiado condicionada por factores políticos. Prevenciones porque no se me oculta que, inevitablemente también, los factores políticos no sólo están presentes en el plano estricto de las decisiones políticas, sino que tienen la mala costumbre de irrumpir también allí donde su presencia es más inoportuna y donde menos ayudan a legitimar un discurso, como sucede en el plano de la discusión académica. Así pues, siendo consciente de todo esto, debo admitir que mi exposición, aunque aspire a una cierta independencia, tendrá su fatal lastre político.

Y ese lastre se pone de manifiesto ya desde la primera pregunta que se me viene a la cabeza: ¿derecho romano y dogmática por qué?; o sea, ¿cuál es la situación o la coyuntura que nos hace sentir la necesidad de regresar a tan viejo problema? La respuesta a esta cuestión, por lo menos una parte de ella, está naturalmente servida por el proceso de reforma universitaria a gran escala iniciado con la declaración de Bolonia. La renovación estructural de las ense-

* Ch. Atias, *Contra arbitrariedad, teoría*, Madrid, 1988, pp. 231 y ss.

ñanzas y la redefinición de sus objetivos¹ va a traer consigo una reorganización de métodos y de contenidos cuyas consecuencias, por lo que afecta a las materias iushistóricas, pueden llegar a ser bastante drásticas (seguro que los políticos y sus asesores ya están trabajando en ello). Y como esto nos crea inquietud, tratamos de fijar posiciones y de hacer oír nuestra voz para ir asegurándonos, si ello fuera posible, un lugar digno bajo el sol. De manera que la incertidumbre —o si se prefiere la incógnita— que encerraba aquella pregunta inicial, tan amplia, parece que debe verse a un molde más ajustado, que supongo puede ser éste: ¿cuál es el perfil sustantivo que podemos dar al enunciado derecho romano y dogmática en orden a resaltar el valor de un tema tal y su necesidad para la formación de los estudiantes de derecho europeos *post Boloniam*, contribuyendo así a que nuestra materia no experimente un retroceso académico demasiado importante?².

Presumiblemente, otra parte sustancial de la respuesta debería derivarse del rótulo comprehensivo bajo el que los organizadores de nuestro Seminario han colocado las tres intervenciones del día de hoy: la fragilidad del jurista y sus necesidades teóricas. En la Memoria se recuerdan fenómenos de tanta actualidad como el replantea-

¹ Destaco algunas ideas que me parecen significativas, ya que, según la Memoria que se nos ha distribuido, de ellas emerge la imagen prototípica del jurista europeo a cuya forja deberían contribuir las materias históricas: el designio de construir una universidad eficiente y competitiva a nivel mundial; la tendencia creciente a configurar la academia como una empresa de servicios; el propósito de generar una competitividad real entre las universidades europeas, lo que pasa por ofrecer productos equiparables a fin de que las reglas del mercado y de la libre competencia puedan aplicarse con transparencia y eficiencia al mundo académico. Supongo que la coherencia con estos planteamientos hará que en un futuro próximo nos parezcan normales los procesos de quiebra y liquidación de universidades, las fusiones y absorciones de estas empresas de servicios, ya sean amistosas u hostiles, las regulaciones de empleo motivadas por los más heterogéneos avatares académico-empresariales, etc., etc.

² También en Italia el temor a la marginación académica se encuentra en la raíz de muchas de las propuestas de renovación y relanzamiento del derecho romano: vid., por ejemplo, M. Marrone, «In difesa della sincronia», en *Index. Quaderni Camerti di Studi Romanistici* 18 (1990) pp. 20 y s.; L. Capogrossi Colognesi, «Riflessioni su “i fondamenti del diritto europeo”: una occasione da non sprecare», en *Iura* 51 (2000) pp. 4 y ss.

miento de las fuentes del derecho y la devaluación de la ley; el cambio continuo, caracterizado por el creciente casuismo, y la resultante dificultad de elaborar una teoría general; incluso, el multiculturalismo implícito en la integración en Europa de estados ajenos a nuestra tradición cultural. Se intuye con facilidad que del tema derecho romano y dogmática se espera alguna solución a estos problemas; y también se adivina el estímulo de buscar una solución que pase por el fortalecimiento de una formación teórica que, hundiendo sus raíces en la historia, pueda resistir mejor los embates de aquellas contingencias. Sin embargo, la respuesta —quiero decir: mi respuesta— no puede ignorar el factor primero y principal de la fragilidad del jurista, a saber, su acentuada dependencia respecto del poder político y los poderes económicos, factor vagamente aludido en la Memoria pero determinante por encima de cualquier otro. *Contra arbitrariedad, teoría*, es el título de un libro famoso de hace unos veinte años cuya tesis, la que enuncia el propio título, convendría revisar a la vista de algunas recientes intervenciones del legislador español que desbordan cualquier marco teórico-dogmático de los disponibles y respecto de las cuales la historia jurídica nada dice ni tiene que decir.

Acaso se me pueda reprochar que he decidido embarcarme en una reflexión típicamente deconstructiva y nada más. Algo lejanamente parecido a lo que hace Alessandro Somma en un ensayo que he leído recientemente y que, debo reconocerlo, me ha proporcionado muy poca satisfacción y no me ha deparado apenas beneficio³. Pero si Somma parece haber olvidado que la deconstrucción de un discurso se hace siempre desde otro discurso, que a su vez puede ser sometido al mismo proceso, yo no quiero caer en el error, que él ha cometido, de silenciar las bases del mío. De manera que me apresuro a aclarar que lo poco que he dicho hasta este momento es

³ A. Somma, «Da Roma a Washington», en P.G. Monateri, T. Giaro y A. Somma, *Le radici comuni del diritto europeo*, Roma, 2005, pp. 169-239. Lo que hace Somma en este trabajo es denunciar las connotaciones ideológicas de los numerosos discursos en torno al derecho romano que se han ido sucediendo a lo largo de la historia: «documentare un'innegabile propensione dei cultori del diritto, maladestramente celata dietro le loro professioni di fede: fare cose —le più disparate— con il diritto romano» (p. 170); de Somma rescato solamente una idea a la que luego me referiré (vid. *infra*, nt. 9).

fruto, en primer lugar, de la incomodidad que siempre me causa el tener que ocuparme de debates invariablemente revisionistas, debates que nos vienen impuestos y además desde fuera de nuestra disciplina; y en segundo lugar, de la necesidad de ir tanteando para definir un punto de partida y una base en la que pueda apoyar mi reflexión.

Pero, decía, la cuestión se refiere al valor formativo actual del tema derecho romano y dogmática. Valor formativo, enseñanza, luego pareciera que no debo referirme sino muy de pasada a las discusiones que aquel enunciado suscita en el campo de la investigación. Ahora bien, ¿cómo evitar ocuparme de estos debates? Y no sólo por lo acertado de la idea que defiende la unidad íntima y necesaria de investigación y docencia, sino también por el influjo que algunas de las modas de investigación más en boga podrían acabar ejerciendo sobre los planteamientos formativos por los que nos queremos interrogar: me refiero, como es patente, al llamado neopandectismo y al comparatismo en perspectiva histórica. Sólo con mencionar estos dos nombres, o estas etiquetas, la amenaza de los factores políticos vuelve a la escena con fuerza incontenible. Pero no voy a entrar de inmediato en esta selva —o en este jardín: depende del punto de vista—⁴, sino que prefiero limitarme por el momento a expresar mi convicción de que si las dos mencionadas tendencias carecen aún, que yo sepa, de una conexión explícita con el proceso de Bolonia, sin duda la llegarán a tener (es probable que haya también alguien que este trabajando en estos momentos sobre ello); y en cualquier caso a reconocer que, en su calidad de propuestas más novedosas en lo que respecta a derecho romano y dogmática, es obligado preguntarse por su significado en el marco de aquel proceso.

⁴ He expuesto algunas consideraciones sobre estas dos tendencias de la moderna investigación en F. Cuena Boy, «El derecho romano entre el deseo y la realidad. Una reflexión crítica sobre la contribución de la doctrina romanística a la construcción del nuevo derecho común europeo (y extraeuropeo)», en *Liber amicorum Juan Miquel. Estudios romanísticos con motivo de su emeritazgo*, Barcelona, 2006, pp. 269 y ss. Es muy interesante señalar que ya en los primeros años setenta del pasado siglo se hablaba de «neopandectística»: lo hacía, avanzando una crítica certera, G. Diósdí, «Conversazioni sul metodo», en *Labeo* 19 (1973) pp. 57 y ss.; cfr. también Id., *Contract in Roman Law*, Budapest, 1981, p. 144 y nt. 278.

Porque hablamos, claro, de la posible aportación de la historia a «la formación del jurista europeo». Un jurista con «capacitación europea» y de «perfil versátil», como en la Memoria se dice, y cuya formación, por lo tanto, se desea funcional al nuevo derecho europeo cuya futura existencia se da más o menos por segura, aunque para llegar a él se defiendan, desde posiciones distintas, vías muy diferentes. Ahora bien, si es verdad esto que digo, ¿cómo podríamos plantear el tema de la dogmática en relación con un derecho que evidentemente se desea, pero que no existe todavía?⁵ ¿en relación con un derecho del que aún no podemos saber con certeza si será unitario, uniforme o solamente armonizado, ni incluso si será un derecho codificado o más bien de textura judicial y casuística? En este punto, sin desdeñar la advertencia sobre el carácter sustancialmente conservador de la dogmática jurídica, «que siempre intenta mantener todo desarrollo nuevo en los límites conceptuales de lo que ha sido contemplado con anterioridad»⁶, podemos intentar la huida de tanta incertidumbre volviendo la atención hacia el otro término de nuestro enunciado inicial: el derecho romano.

Tengo ahora ante mí una entidad más real, más precisa, menos evanescente, pero esto no impide que las preguntas sigan agolpándose frenéticamente en mi cabeza. Preguntas indispensables como por ejemplo la siguiente: ¿cuál es el derecho romano del que querríamos hablar?; si del de una época determinada, ¿cuál es la que deberíamos elegir en vista del objetivo que nos hemos propuesto alcanzar? La demanda se debe, obviamente, a que la romanística ha invertido mucho tiempo y esfuerzo, acaso demasiado, en distinguir un derecho romano clásico, cuya misma denominación denota excelencia y ejemplaridad, de un derecho postclásico y justiniano cuyas virtudes no se ponderan de la misma forma. Por otro lado, y puesto que el tema es también la dogmática, ¿se supone que nos debemos limitar al derecho privado? Ello no sólo en razón de la privilegiada importancia reconocida desde siempre a este sector de la

⁵ «[La] dogmática supone un derecho válido, el cual rige y subsiste *ex auctoritate*, pues nadie estudia dogmáticamente un derecho en cuya autoridad no cree»: P. Koschaker, *Europa y el derecho romano*, trad. de J. Santa Cruz Teijeiro, Madrid, 1955, p. 476.

⁶ Apreciación de un civilista sobre el derecho en el momento legislativo que yo transfiero a la dogmática: vid. A.M. López y López, *Enseñanzas del jurista solitario*, Valencia, 2005, p. 141.

experiencia jurídica romana, sino también por la conexión mucho más lábil que existe —si puede afirmarse tal cosa— entre la experiencia constitucional y administrativa romana y los derechos públicos de base estatal que conocemos en la actualidad⁷, por no hablar del derecho público supraestatal a cuyo largo y trabajoso alumbramiento venimos asistiendo «los europeos» un poco desde lejos, con interés sólo algo mayor que el protagonismo que se nos ha otorgado hasta el momento en el proceso. Finalmente, ¿qué contenido formativo podría idearse para la exigencia dogmática que no signifique una resignación excesiva de la paralela exigencia histórica a la que inexcusablemente debe atender también la enseñanza del derecho romano?

Por lo que respecta a la selección de una determinada etapa de la experiencia jurídica romana, me limito a señalar mi creciente escepticismo frente a la costumbre inveterada de privilegiar el derecho del Principado (con el añadido, si se quiere, del siglo final de la República) presentándolo como el derecho romano «clásico» por

⁷ Conviene, no obstante, dejar constancia de la dedicación de un grupo de romanistas españoles, encabezados por el profesor Antonio Fernández de Buján, a la reconstrucción histórico-dogmática del derecho administrativo romano, esfuerzo emprendidos bajo el presupuesto —que lo es— de que «el ordenamiento jurídico contemporáneo... en buena medida es tributario de instituciones, hechos y actividad de orden administrativo que fueron conocidos y regulados en el ámbito estatal, provincial y municipal de la comunidad política romana»; de la existencia, por tanto, de «continuidad histórica e interdependencia» también en el campo del derecho administrativo, por lo que puede presumirse que «la conexión entre el derecho administrativo romano y el vigente existe, aunque no haya sido estudiada debidamente», y que «es superior la influencia ejercida por el derecho romano en el desarrollo y en la evolución del derecho administrativo moderno, y en el derecho público en general, que la que ha sido reconocida por la actual doctrina administrativa»; vid. A. Fernández de Buján, *Derecho público romano* (8.^a edic.), Madrid, 2005, pp. 213-217; Id., «Perspectivas de estudio en temática de derecho administrativo romano, surgidas a tenor del pensamiento y de la obra de Giambattista Impallomeni», en *Index. Quaderni Camerti di Studi Romanistici* 26 (1998) pp. 467-470; mis reservas al respecto en F. Cuena Boy, «A propósito de “derecho administrativo romano”», en *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano «Vittorio Scialoja»* 98-99 (1994-1995 [2000]) pp. 750 y ss.; puede verse también F. Casavola, «Diritto romano e diritto europeo», en *Labeo* 40 (1994) p. 165.

excelencia. No seré yo quien niegue los formidables rendimientos que esta operación ha tenido si se trata de medirlos en términos de estudio y reconstrucción histórica del derecho privado romano. Sin embargo, la adjetivación de clásico que se reserva para el ordenamiento de un momento histórico determinado⁸, y más la imagen prescriptiva que de ella parece desprenderse, me parecen hoy por hoy inconvenientes, no sólo desde el punto de vista del conocimiento puramente histórico de la experiencia jurídica romana en su conjunto, sino acaso también desde el punto de vista, que aquí debe ser el prevalente, de lo que podría ofrecerse para la dogmática jurídica desde el campo del derecho romano, si todo debiera provenir de un derecho «clásico» con la pretensión —no suya, sino de los apóstoles y abogados de la idea— de ver unánimemente reconocido su presunto valor de paradigma indiscutible. Puedo, sí, aceptar la idea general de lo clásico, menos en derecho que en música o en literatura, pero no con ningún valor prescriptivo sino sólo con el sentido de su latente inagotabilidad, de su disponibilidad para la forja de nuevas ideas, y esto siempre en virtud de una decisión libre y contando siempre con el interés que nos mueve en cada momento a intentar de alguna forma su renacimiento⁹. Diría pues, como rema-

⁸ Comparto a este respecto las observaciones de M. Talamanca, «Il diritto nelle epoche postclassiche», en *Collatio iuris Romani, Études dédiées à Hans Ankum à l'occasion de son 65^e anniversaire* II, Amsterdam, 1995, pp. 535 y ss., y M. Bretone, «Il “classico”: come intenderlo?», en Id., *Diritto e tempo nella tradizione europea*, Bari, 1999, pp. 188 y ss., sobre lo inadecuado de calificar como «clásico» el derecho como norma u ordenamiento; a lo sumo, esa calificación se podría aplicar como criterio estilístico a la jurisprudencia y la literatura jurídica producida por ella. Por mi parte, con intención conscientemente provocadora, me atrevo a plantear esta cuestión: cuando se parte del postulado de la historicidad esencial del derecho y de la concepción de éste como experiencia jurídica, ¿no implica de algún modo la calificación de clásico aplicada al derecho de un cierto momento histórico un juicio holístico que envuelve la acreditación también como clásico del conjunto social, político, económico, cultural, etc. correspondiente?

⁹ Cfr. R. Brague, *Europa, la vía romana*, Madrid, 1995, pp. 80 y s.; sobre la relación de la cultura europea con el pasado, observa este autor lo siguiente: «la historización del pasado es el hecho de que se conserva el pasado, ya no porque es bello o pertinente o lo que se quiera —cosa que equivale a decir que es actual—, sino por la mera razón de que es pasado

te de este punto, que el derecho romano a considerar, liberado de toda intención prescriptiva (criptoiusnaturalista en opinión de más de uno) que puede dificultar su aceptación, no puede ser más que aquel que sin aposiciones valorativas de ningún tipo llamamos derecho romano histórico, o sea, el de la experiencia jurídica romana en su conjunto.

En cuanto a la pregunta de si sería conveniente concentrar nuestro interés en el sector del derecho privado romano, por las razones antes señaladas, respondo que ninguna novedad habría en hacerlo así; por lo menos en España, donde —de forma generalizada, aunque con fatal inconsecuencia programática— el núcleo de la docencia que se ha venido practicando hasta ahora consta de un solo curso de instituciones de derecho privado (con neto predominio del «clásico», por cierto)¹⁰. La justificación de este proceder suele hacerse coincidir con el carácter propedéutico de la asignatura, dependiente, por un lado, de una colocación precisa en el primer año de

y, por tanto, “interesante”» (*ibid.*, p. 79); también de importancia me parece esta otra constatación: «la referencia clásica no es ya consabida para el público, incluso culto (...) hasta en el interior de los medios especializados en los estudios llamados “clásicos”, la idea misma de que ciertos textos puedan tener un valor “clásico” ha retrocedido, en beneficio de la objetividad, real o presunta, de una mirada puramente histórica» (*ibid.*, p. 128). El mismo Bretone, «Il “classico”...», p. 193, concluye su reflexión sobre lo clásico con la negación de que la jurisprudencia romana pueda recuperar para nuestro tiempo la fuerza de un paradigma; y Somma, «Da Roma...», p. 199, nos recuerda que, tras la codificación, el estudio de las alteraciones introducidas en los textos clásicos por los compiladores justinianeos se convirtió en el horizonte necesario y suficiente de una fase histórica caracterizada por la inadecuación formal y sustancial de los discursos habituales en torno al derecho romano para aportar soluciones válidas a las demandas económicas y sociales de la época.

¹⁰ No empaña esta afirmación la regular presencia en los programas de la asignatura de unas pocas lecciones iniciales dedicadas a la historia y las fuentes del derecho romano, seguidas de algunas menos con las que se intenta llenar la exigencia legal de exponer la recepción del derecho romano en Europa; la utilidad de unas y otras desde el punto de vista de la dogmática es, mucho me temo, nula. Sobre la limitada eficacia formativa de la enseñanza del derecho romano, concebida de esta forma, vid. ya A. Burdese, «Sull'insegnamento romanistico in Spagna, in Italia e in Germania», en *Studia et Documenta Historiae et Iuris* 55 (1989) pp. 439 y s.

los estudios, y por otro, de su presentación organizada a grandes rasgos según las líneas sistemáticas del derecho civil vigente. A mi modo de ver, en este planteamiento organizativo subyace una concepción que apunta, en buena medida y precisamente, a proporcionar a los estudiantes los primeros rudimentos dogmáticos y los primeros cuadros sistemáticos en función de la posterior enseñanza del derecho privado vigente. Bien es verdad que de un derecho aún nacional o estatal y no de un derecho europeo, pero no creo que hubiera demasiada dificultad en adaptar aquel planteamiento —o en introducir otro muy similar— pensando en la formación de ese «jurista europeo» que constituye nuestro nuevo objetivo. Claro que todo esto presupone una posición ancilar del derecho romano y de su docencia universitaria; claro que éste es el problema central con el que los romanistas tendríamos que enfrentarnos para decidir de una vez (iba a decir de una vez por todas, pero hubiera sido un exceso verbal) si aquella posición representa nuestra fortaleza o, por el contrario, es causa de nuestra debilidad, de nuestra crónica sensación de crisis. Y claro, meridianamente claro en mi opinión, que mantenerse por el camino indicado supone pagar un precio: el precio al que antes aludía de la inconsecuencia con el postulado de la historicidad y de la renuncia didáctica a la fructífera concepción del derecho romano como experiencia jurídica¹¹.

El problema, sin embargo, no es tan sencillo como para que yo me atreva a decir que podría solucionarse con la simple, total y directa trasposición de nociones que constituyen la base irrenunciable de la investigación al plano de la docencia, pues ese trasvase no me parece ni practicable ni tan siquiera deseable: lo primero, porque es necesario contar por lo menos con las limitaciones del elemento discente; y lo segundo, porque nuestra labor no consiste en formar especialistas o investigadores sino en contribuir a la formación cultural y profesional de los futuros juristas. Así que, en definitiva —y con esto trato de responder a la pregunta sobre el valor formativo de la dogmática y su relación con la historia—, siempre

¹¹ Vid. las obervaciones paralelas y mucho más circunstanciadas de C. Petit, «El romano de Pompeyo o *hic sunt leones*», en *Anuario de Historia del Derecho Español* 60 (1990) pp. 581 y ss.; sobre la concepción del derecho como experiencia jurídica, en el sentido propuesto por Orestano, P. Grossi, «Storia di esperienze giuridiche e tradizione romanistica», en *Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico* 17 (1988) pp. 541 y ss.

se deberá buscar una respuesta que no descompense la relación entre estos dos términos; o lo que es lo mismo: se deberá intentar un tratamiento histórico-dogmático «que concilie la exigencia historiográfica de dar del derecho romano privado una imagen en movimiento con la exigencia jurídico-sistemática de dibujar las líneas exactas de las diferentes instituciones»¹². Y aquí, aquí justamente, es donde se deja sentir la necesidad de nuevos materiales didácticos que se sitúen, como dice Capogrossi, a medio camino «entre la investigación historiográfica y la elaboración de un proyecto, de un “deber ser” proyectado en el futuro»¹³.

En todo caso, advierto que mi intento con lo anterior es reflejar lo que veo de forma objetiva, no hacer fáciles reproches que, en primer lugar, me alcanzarían de lleno a mí como al que más, y en segundo lugar, podrían no ser del todo justos a la vista del peso de toda una tradición didáctica y de otros condicionantes de diverso tipo a los que no es fácil que nos podamos sustraer.

Porque las preguntas, los problemas, no ven el modo de terminar. Haciendo mía una distinción cara a los comparatistas cuando se interrogan por las funciones de su saber (ciencia o método: no importa en este momento), me planteo si será mejor para la ocasión que nos ha convocado desarrollar un discurso utópico o bien un discurso realista. Yo propendo inicialmente hacia un discurso realista, por dos razones: porque ésa es mi actitud general ante los problemas de la vida y porque, sobre el tema que nos ocupa, el discurso utópico —sinónimo aquí de teórico o abstracto— hace tiempo que ha alcanzado un volumen abrumador. De tal forma que, salvo expresar una opinión personal, cosa que de algún modo ya estoy haciendo, yo no me veo con fuerzas para añadir ningún elemento nuevo a la discusión, o sea, a la multitud y la variedad de criterios y posiciones, que se cogen a manos llenas en la doctrina, sobre el posible papel del derecho romano en la construcción del derecho europeo y —antes y después de eso— en la formación de aquellos juristas, igualmente «europeos», que habrán de ocuparse profesionalmente

¹² Son palabras de G. Pugliese, «Le “Istituzioni” come storia del diritto privato», en *Index. Quaderni Camerti di Studi Romanistici* 18 (1990) p. 41; ésta es también la opción de A. Burdese, «Diritto romano e formazione culturale del giurista», en *Index. Quaderni Camerti di Studi Romanistici* 18 (1990) p. 17; vid. también Marrone, «In difesa...», pp. 21 y ss., *passim*.

¹³ Capogrossi Colognesi, «Riflessioni...», pp. 24 y s.

de él (no estoy tan seguro de que lleguen a ser también sus constructores).

Una cierta dosis de realismo, no sé si pequeña, pero no insignificante, me debe provenir necesariamente de la lectura de un documento de seis páginas producido por la *Asociación Europea de Facultades de Derecho* (ELFA son sus siglas según la denominación en inglés¹⁴) en el que, bajo el voluntarioso título *For a European Space of Legal Education*, la historia del derecho y el derecho romano no figuran ni siquiera a título ornamental. Según este documento, en efecto, en la nueva estructura cíclica de las enseñanzas que se vincula a la declaración de Bolonia, la «bachelor part» se debería dedicar al estudio de conjunto del derecho nacional de cada Facultad, inculcando *materias esenciales* como derecho constitucional, administrativo, penal, civil y procesal que deberían ser enfocadas más bajo el aspecto metodológico y menos bajo el aspecto de los contenidos. Y la «master's part» debería consistir en derecho comunitario y derechos humanos así como en cursos «genéricos» (o sea, «europeizados» e «internacionalizados») sobre derecho constitucional, administrativo, mercantil, de la propiedad intelectual, ambiental, de la competencia y/o de consumo. Como se puede apreciar, un curriculum casi completo: en el reducido espacio que pueda dejar ese «casi» es donde presumiblemente se deberían instalar nuestras materias, las cuales, de todos modos, no parecen merecer la consideración de *esenciales* para la ELFA. Y es de advertir que la propuesta a la que me estoy refiriendo no procede de los políticos ni tampoco de los burócratas tan denostados: se trata de la toma de posición de una Asociación que dice reunir a más de ciento cincuenta Facultades de Derecho del continente¹⁵ ante la Declaración de Bolonia de los ministros europeos de educación de 1999. Yo pregunto: ¿cómo se recibiría por parte de la ELFA un eventual ofrecimiento del tema formativo derecho romano y dogmática? Prefiero no expresar una respuesta.

Por otra parte, mi propensión realista me obligaría a descender aún a cuestiones mucho más concretas que son importantes también para el diseño de un pronunciamiento razonable sobre dere-

¹⁴ Website: «<http://elfa.bham.ac.uk/>»; el documento al que me refiero es de 31 de mayo de 2002.

¹⁵ Son datos de junio de 2002. Entre esas 150 Facultades figuran 14 italianas y 23 españolas.

cho romano y dogmática, pero que escapan completamente de nuestras manos. Por ejemplo: ¿quedará ubicada nuestra materia sólo en la etapa formativa común, esto es, en el grado, o se va a permitir que aparezca también en alguno de los posgrados que se aprobarán?; si va a ocurrir lo primero, al menos de forma generalizada, ¿en qué curso del grado hallará colocación?; desde el punto de vista didáctico, ¿seguirá siendo concebida con la misma función propedéutica que ha tenido su enseñanza hasta ahora?; ¿cuál será el número de créditos ECTS con que la agraciaron las directrices ministeriales?¹⁶; ¿y cómo se concretará finalmente todo esto en cada Universidad, cuando pase por el original filtro de la autonomía universitaria? Recuerdo que hace unos trece años tuve que asistir, entre atónito y humillado, a la aprobación de un nuevo plan de estudios en la Facultad de Derecho de Cáceres en el que, al tiempo que se dejaba a la historia del derecho y al derecho romano con la legítima estricta, se introducía una nueva asignatura obligatoria con la misma carga docente que estas materias llamada derecho autonómico extremeño. Y si traigo a colación este ejemplo no es tanto para vergüenza de quienes inspiraron e impusieron tal novedad a costa de lo que digo, sino para que no se nos olvide que en el ámbito académico español ocurren estas cosas con lamentable frecuencia. Y que empujados en parte por ellas los romanistas vamos vendiendo nuestra alma pedazo a pedazo, y algunos de los más inquietos de entre nosotros se van dedicando a temas, proyectos y operaciones en los que la presencia y la imagen del derecho romano están cada vez más desdibujados. Hablando sólo, insisto, de los romanistas españoles, me pregunto si no acabaremos llegando por este mismo camino a una especie de conversión, tan masiva como superficial, a los nuevos ideales del derecho, la formación y el jurista «europeos». Hacer de la necesidad virtud, se llama eso.

¹⁶ Contamos ya con algún indicio de por dónde pueden ir las cosas: la Comisión Permanente que ha intervenido en la confección del *Libro blanco* sobre el título de grado en derecho suscribe una propuesta que, sobre la base de un 65% de troncalidad, atribuye 45 créditos al bloque de materias de Derecho Privado, 50 a uno de Derecho Público I, 32 a otro de Derecho Público II y sólo 20 a un bloque de Ciencias Jurídicas Básicas integrado por Historia del Derecho, Derecho Romano y Filosofía o Teoría del Derecho; ninguna de estas tres materias es contemplada en el Practicum de 9 créditos.

Hasta aquí lo que yo llamo discurso realista. No creo necesario enfatizar sus peligrosas consecuencias para nuestra materia tomada en su conjunto y también por lo tanto para el tema formativo derecho romano y dogmática.

Puedo ensayar ahora una suerte de transición hacia lo que me ha parecido oportuno llamar el discurso utópico, denominación que espero se comprenda mejor a la luz de lo expuesto. Para ello me vale suscitar dos nuevas cuestiones: ¿es conveniente seguir manteniendo, desde la perspectiva de la formación necesaria al jurista «europeo», la actual división de la historia jurídica entre historia del derecho y derecho romano?; y aun en el caso de una respuesta negativa a esta pregunta, ¿se podrá salvaguardar la dogmática —cualquier dogmática que se quiera relacionar con el derecho romano— si hay que contar con una futura aproximación de aquellas dos materias bajo el signo de la historicidad, lo cual, como no ha dejado de subrayarse entre nosotros¹⁷, debería traer consigo una rehistorificación o desdogmatización de la enseñanza del derecho romano? Ésta es la primera cuestión. La segunda tiene que ver ya mucho más directamente con la dogmática en sí; se trata de lo siguiente: si yo no estoy equivocado, lo que puede extraerse para una consideración dogmática del derecho privado del laboreo afanoso sobre el derecho romano fue mostrado hace más de cien años, de la forma más acabada, por la Pandectística que precedió al BGB¹⁸; no sé si de lo que ahora se trata es de volver a recorrer un camino semejante, pero si así fuera, ¿debemos entender que la dogmática pandectista ha dejado de valer por el mero cambio de perspectiva, de nacional a europea?, ¿hemos de dar por cierto, por otro lado, que la nueva dogmática del derecho europeo se encuentra en el derecho romano, o al menos que sólo o principalmente desde él puede ser desarrollada y propuesta?¹⁹ Y algo más todavía: en el seno de la romanística internacional de las

¹⁷ Cfr. Petit, «El romano de Pompeyo...», *passim*, especialmente por sus explicaciones sobre la experiencia francesa (de subsunción) y las de Alemania e Italia (de acercamiento).

¹⁸ La cual, por cierto, no trabajó con la hipótesis de un derecho romano «clásico» sino directamente sobre el *Corpus Iuris* justiniano. En el sentido del texto, cfr. T. Giaro, «Diritto romano attuale. Mappe mentali e strumenti concettuali», en Monateri, Giaro y Somma, *Le radici comuni...*, p. 115.

¹⁹ La advertencia que formulaba hace diez años el profesor Arvizu contra la monopolización del *ius commune* como único derecho verdade-

últimas décadas, el debate principal en torno al tema de la dogmática se refería a la legitimidad de emplear los instrumentos conceptuales del derecho moderno en la investigación y la exposición de un derecho del pasado como es el derecho romano. El punto clave era dilucidar los límites de aquella utilización para evitar el riesgo de desfigurar el objeto histórico estudiado, pero yo no puedo por menos de preguntarme —si de lo que se trata es de desarrollar y de proponer como calidad especial de nuestra docencia una nueva dogmática históricamente fundada para un derecho igualmente nuevo— si aquel riesgo ha desaparecido o es que ya no nos debe importar²⁰. Por último, aunque no menos importante, ¿fundamento histórico-jurídico común o unitario para una dogmática que pueda cobijar con la misma naturalidad tradiciones jurídicas heterogéneas, a saber, los derechos continentales de raíz romanista, el *common law*, los derechos del área escandinava, los de influencia bizantina, etc.?

Pero es posible que no se pretenda llegar tan lejos de forma inmediata. Es posible, puesto que ha sido propuesto con gran insistencia²¹, que se divise como un hito intermedio la recreación de una ciencia jurídica común que pueda ir sentando las bases de un nuevo derecho auténticamente europeo: una «nueva doctrina civilística» basada en el derecho comparado y el derecho romano. Por este camino nos acercamos bastante a la preocupación neopandectista,

ramente europeo y contra la pretensión de exclusivismo dogmático de sus cultivadores no es menos válida si se la refiere al derecho romano y los romanistas en general: vid. F. Arvizu Galarraga, «Ilusiones y realidades de la historia del derecho europeo», en *Glossae* 7 (1995) pp. 165 y s.

²⁰ Como muy bien destaca A. Castro Sáenz, «Trayectorias romanísticas en la doctrina reciente», en *Crónica Jurídica Hispalense* 3 (2005) pp. 376 y s., la perspectiva dogmática se obsesiona por encontrar a toda institución romana «un engarce diáfano e inmediato con la realidad del derecho positivo actual» con el efecto de «la creación de un derecho romano muy atado al hoy pero que jamás existió en el ayer»; la inutilidad de esta exasperación dogmática es patente: «la romanística ha perdido en buena medida su interés para el jurista positivo incluso en sus concepciones ultradogmáticas, quizás además porque se percibe claramente en estas últimas su artificialidad...»

²¹ Vid. por ejemplo J. M. Rainer, «Il significato e le prospettive del diritto romano alla fine del XX secolo», en *Index. Quaderni Camerti di Studi Romanistici* 26 (1998) p. 452.

por lo que parece llegado el momento de pronunciarse sobre ella²². Apartemos de entrada toda consideración basada en lo improbable de un plan y un proceso tan bien ordenados que sean capaces de esperar al afianzamiento de esa nueva civilística antes de acometer el objetivo final: a nosotros se nos pide una opinión inaplazable, algo que en el espacio de muy pocos años pueda tener reflejo e influencia en la formación de los juristas en un horizonte europeo. Por otra parte, merece atención la advertencia, formulada desde fuera del planteamiento neopandectista, sobre el probable fracaso de una operación de unificación legislativa que no vaya acompañada de la unificación de las culturas jurídicas, ya que una misma proposición normativa no encontrará aplicación unitaria, y será sólo aparentemente uniforme si las culturas de los prácticos encargados de aplicar ese derecho y de hacerlo valer ante los tribunales no es unitaria²³. A mi modo de ver, se trata de una observación muy sensata de la cual podría deducirse una importancia específica de la dogmática en la formación del jurista «europeo» que constituye el centro de nuestra atención. Cuestión diferente es la relación de esa dogmática con el derecho romano.

Coing nos recuerda que la dogmática no es competencia del legislador sino de la ciencia y se sitúa, por tanto, por encima del derecho positivo²⁴, si bien se construye con los materiales empíricos

²² No me resisto a señalar que en España o desde España no procede hablar siquiera de neopandectismo, pues la producción de la romanística nacional supuestamente interesada por los problemas que nos ocupan consiste demasiadas veces en una especie de redivivo *mos italicus* que a su innecesario carácter y a la carencia de rigor filológico y de sentido histórico suma una completa falta de reflexión metodológica, con el resultado, en definitiva, de una inutilidad esférica (*i.e.*, desde todos los puntos de vista); cfr., sin la concreción nacional que yo hago explícita, A. Mantello, «Di certe smanie “romanistiche” attuali», en *Diritto Romano Attuale* 4 (2000) p. 39.

²³ La advertencia es de L. Capogrossi Colognesi, «I fondamenti storici di un diritto commune europeo», en *Index. Quaderni Camerti di Studi Romanistici* 30 (2002) pp. 173 y s.; vid. una observación semejante en M. Talamanca, «Relazione conclusiva», en F. Milazzo (cur.), *Diritto romano e terzo millennio. Radici e prospettive dell'esperienza giuridica contemporanea* (Relazioni del Convegno Internazionale di Diritto Romano Copanello 3-7 giugno 2000), Napoli, 2004, p. 364; y ya antes en F. Ranieri, «Eine Dogmengeschichte des europäischen Rechts? Einige Thesen zum Beitrag der Rechtsgeschichte zu einer europäischen Zivilrechtswissenschaft», en R.

que éste suministra. Los Códigos parecieron determinar la drástica nacionalización de la ciencia jurídica y la consiguiente naturalización de la dogmática, al quedar ésta anclada en cada estado o país al ordenamiento positivo vigente. Sin embargo, una relativa unidad de la ciencia jurídica en el continente se preservó en el siglo XIX a través de la influencia de dos vectores jurídicos nacionales que adquirieron importancia europea: el francés y el alemán²⁵. Quiérese decir que mucho tiempo después de los Códigos, cuando vuelve a plantearse la necesidad de una ciencia, de un derecho y de una formación jurídica «europeos», no es necesario partir de cero, aunque la sensibilidad histórica hacia los hechos aconseje cautela a la hora de afirmar que esta situación se ha debido principal o inmediatamente al derecho romano y a su tradición posterior: siquiera sea porque los Códigos nunca quisieron ser un «espejo del pasado», por lo que sería antihistórico pretender considerarlos como el penúltimo anillo de la larga cadena formada por aquel derecho y aquella tradición²⁶. El dato a retener, por lo tanto, es la impronta de las cien-

Schulze (Hrsg.), *Europäische Rechts-und Verfassungsgeschichte. Ergebnisse und Perspektiven der Forschung*, Berlin, 1991, pp. 95 y s. Desde otro punto de vista, la reivindicación de la tradición jurídica pretende prevenir el riesgo de que llegue a formarse «un derecho sin historia»: cfr. L Solidoro Maruotti, *La tradizione romanistica nel diritto europeo II. Dalla crisi dello ius commune alle codificazioni moderne*, Torino, 2003, p. 229.

²⁴ H. Coing, «La ciencia del derecho privado en Europa en el siglo XIX», en *Glossae* 7 (1995) p. 176.

²⁵ Coing, «La ciencia...», pp. 179 y ss.; vid. sobre esto mismo T. Giaro, «*Comparemus!* Romanistica come fattore d'unificazione dei diritti europei», en *Rivista Critica del Diritto Privato* 19 (2001) pp. 556 y ss.; Id., «Diritto romano attuale...», pp. 131 y ss. Sobre la influencia de la cultura jurídica alemana en los países del centro y el este de Europa, antes y después del comunismo, vid. ahora G. Hamza, *Die Entwicklung des Privatrechts auf römisch-rechtlicher Grundlage unter besonderer Berücksichtigung der Recht-entwicklung in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Ungarn*, Budapest, 2002, pp. 149-235; para la difusión (mucho más que europea) alcanzada por el *Code civil*, vid. ahora F.J. Andrés Santos y A. Núñez Iglesias, «Estudio preliminar» incluido en la reciente edición bilingüe de aquél: *Código civil francés/Code civil* (coord. R. Domingo), Madrid, 2005, pp. XCI-CIII.

²⁶ P. Caroni, *Lecciones catalanas sobre la historia de la codificación*, Madrid, 1996, p. 59; consideraciones más amplias sobre la relación de la Codificación con su propia historia, *ibid.*, pp. 57 y ss., 66 y s., 78 y s.; cfr.

cias nacionales francesa y alemana en fases decisivas de la historia jurídica de nuestro continente todavía hoy más influyente. Dato, a su vez, que sólo es posible entender dentro del cuadro histórico global de la codificación, sin que sea lícito apartar todo esto y presentarlo como si se tratara de un episodio anómalo en el curso de una tradición rectilínea y plurisecular. En consecuencia, desde una perspectiva docta sobre la formación del nuevo derecho común europeo, creo que el factor de la codificación no debe ser preterido dentro de cualquier esfuerzo que se proponga el desarrollo de una dogmática homogénea²⁷. Mucho me temo, sin embargo, que la inserción del *common law* en este paisaje sea especialmente dificultosa, y ello a pesar de la insistencia contraria de Zimmermann y otros cuya nutrida producción en relación con este punto diríase guiada por la idea de que el hierro no se ablanda con un solo golpe. El motivo de esta dificultad es que la dogmática jurídica se relaciona mucho más con la aproximación conceptual y metodológica a las reglas que rigen los conflictos que con la solución positiva que éstos reciben (más con el lenguaje y sus reglas que con los contenidos a los que sirve de vehículo), por lo que la coincidencia que viene observándose entre el *common law* y los derechos continentales en el plano de los resultados prácticos no puede servir de argumento para obviar las pro-

también B. Diestelkamp, «*Jus Commune — Rechtsgeschichte als Argument in der Unifizierung von Europäisches Recht: Ein deutsches Bericht*», en *Rättshistoria i förändring. Olinska stiftelsen 50 år. Ett internationellt symposium i Stockholm den 19-21, november 1997 = Legal history in Change. The Olin Foundation for Legal History 50 Years. An International Symposium in Stockholm November 19-31, 1997*, Lund, 2002, p. 209: la historicidad puede ser traicionada no sólo forzando el estudio del derecho romano y el *ius commune*, sino también por la pretensión de reducir a las perdurables «traditions of the Roman law» ciertos principios dogmáticos fundamentales del derecho privado moderno originados, en realidad, en las grandes codificaciones nacionales de los siglos XIX y XX.

²⁷ Tampoco en el diseño de la formación histórica del jurista «europeo», en cuyo ámbito, sin embargo, se debe rechazar como excesiva la consecuencia que quiere extraer P. Caroni, «Quale storia per il diritto ingabbiato dal codice?», en *Norm und Tradition. Welche Geschichtlichkeit für die Rechtsgeschichte? / Fra norma e tradizione. Quale storicità per la storia giuridica?* (P. Caroni y G. Dilcher eds.), Köln-Weimar-Wien, 1998, pp. 96, 104 y s., en el sentido de que la codificación haya supuesto la devaluación a nivel práctico de la historia jurídica anterior a ella.

fundas diferencias de orden conceptual y metodológico que los separan; como tampoco se puede ignorar, por lo que atañe a la posibilidad de identificar el derecho romano como una especie de sustrato común, que la raíz de esas diferencias se encuentra justamente en la historia de uno y otro sistema²⁸.

Sigo adelante ahora con mi intento de valoración del neopandectismo. De todos es sabido que la orientación neopandectista se plantea el significado de la historia jurídica para la dogmática jurídica, especialmente desde la perspectiva de la unificación europea en curso de trabajosa realización²⁹. La contribución específica de esta corriente debería consistir en el análisis preparatorio del acervo de la tradición con vistas a una armonización jurídica apropiada. Se trata de una tarea a la que no habría en principio nada que objetar, sobre todo si los destinatarios últimos de estos desvelos, que no son exactamente los romanistas, quisieran de verdad estrechar la mano que se les tiende, lo que hasta ahora no parece haber sido el caso. Pero, al margen de la escasa receptividad de esos destinatarios, pensando sólo en lo que afecta al modo de entender y practicar el estudio del derecho romano, es importante señalar que los partidarios de esta corriente, en el marco definido por su empeño preparatorio y con las prioridades que del mismo se derivan, consideran estéril en sí misma la interpretación puramente histórica de la casuística de las fuentes romanas: de ahí que defiendan reemplazarla por un análisis de otro tipo dirigido a descubrir su plasmación en los ordenamientos jurídicos modernos³⁰. Como compendio de la

²⁸ Por todos, A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa I. Le fonti e il pensiero giuridico*, rist. Milano, 1982, pp. 479-610; cfr. ahora también Talamanca, «Relazione...», pp. 370 y ss., esp. 376 y s.

²⁹ Vid. Ch. Baldus y A. Wacke, «Frankfurt locuta, Europa finita? Zur Reinen Rechtsgeschichtslehre in Band 12, 1993, des Rechtshistorischen Journals (RJ) und zu anderen Zweifeln am Gegenwartswert des Römischen Rechts», en *Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte* [ZNR] 17 (1995) pp. 283-292.

³⁰ Cfr. A. Wacke, «Los presupuestos de la responsabilidad por evicción en Derecho Romano y en Derecho Comparado», en *Seminarios Complutenses de Derecho Romano* 4 (1992) p. 204. Enlaza esta corriente con las conocidas ideas de Koschaker, autor para el cual, la consideración puramente histórica del derecho romano desplaza a éste fuera del círculo de las disciplinas jurídicas y lo convierte en una parte de la ciencia de la Antigüedad: vid. Koschaker, «Europa...», pp. 481 y ss., 493 y s.

propuesta neopandectista bien pueden valer en suma estas palabras de uno de sus defensores: «la actualidad del derecho privado romano debería confirmarse ante todo en el derecho privado moderno»³¹.

No voy a repetir ahora las críticas que se han formulado a este programa, tanto porque son de sobra conocidas³² como porque me parece que inciden sobre aspectos que afectan más a la investigación que a la docencia. Diré sólo a este respecto que, desde una visión coral de la romanística, que es sin más la mía³³, no veo grave inconveniente en que se escuche una voz neopandectista y otra orientada hacia la comparación histórico-jurídica; siempre, eso sí, que no se postulen como únicas ni pretendan el predominio sobre las demás.

³¹ K.W. Nörr, «Das römische Recht zwischen Technik und Substanz: Bemerkungen zu seiner Rolle am Ende des 20. Jahrhunderts», en *Zeitschrift für Europäisches Privatrecht* (1/1994) p. 76; según Nörr, pp. 74 y ss., y «Zur romanistischen Tradition im modernen Europa: Index für Peter Stein», en *Index. Quaderni Camerti di Studi Romanistici* 23 (1995) pp. 60 y ss., la cuestión de hacia dónde volverse para asegurar al derecho romano un papel activo en el desarrollo del derecho vigente, más allá de su excelencia técnica, no puede hallarse en el derecho romano mismo: se requiere una teoría que ponga al derecho privado romano en una relación concreta con el sistema jurídico vigente y le dé la oportunidad de extraer de él substancia y legitimidad, esto es, una legitimidad que se sitúe por encima de la oferta instrumental y tecnológica; en su opinión, habría que «descontextualizar» el derecho romano y someterlo a un proceso de «resubstancialización» mediante su unión a las ideas jurídicas actuales y al sistema jurídico actual, todo ello dentro de las exigencias marcadas por la Constitución.

³² Vid. por ejemplo P. Caroni, «Der Schiffbruch der Geschichlichkeit. Anmerkungen zum Neo-Pandektismus», en *Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte* 16 (1994) pp. 85 y ss.; A. Guarino, «Il secolo breve della giusromanistica contemporanea», en *Seminari Complutenses de Derecho Romano* 9-10 (1997-1998) p. 37; M. Bretonne, «La “coscienza ironica” della romanistica», en Id., *Diritto e tempo...*, pp. 210 y ss.; A. Mazzacane, «“Il leone fuggito dal circo”: pandettistica e diritto comune europeo», en *Index. Quaderni Camerti di Studi Romanistici* 29 (2001) pp. 97 y ss.; Mantello, «Di certe smanie...», pp. 46 y s.; Giaro, «Diritto romano attuale...» cit., pp. 143 y ss., *passim*.

³³ Vid. F. Cuenca Boy, «La investigación en derecho romano. Consideraciones sobre algunos métodos en particular», en *Jornadas Romanísticas* (O Direito Romano na Península Ibérica, 4 e 5 de Dezembro de 2000, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra), Coimbra, 2003, pp. 109 y ss.

Añadiré también que el peligro que esas voces pudieran representar me parece aún menor debido a que —tal y como yo veo las cosas— ninguna de ellas puede ni debe prescindir en sus trabajos e intenciones de los resultados de otras corrientes de investigación.

En cambio, cuando de la investigación se pasa a la docencia, lo que yo tengo que decir acerca del neopandectismo es bastante diferente. En cualquier área que se quiera considerar, la enseñanza del derecho debe seguir líneas mucho más uniformes que la investigación, lo cual no cambia por la circunstancia de que el horizonte que se prevea para ella sea nacional o europeo. Partiendo de este presupuesto, en el plano de la didáctica del derecho romano yo no llego a ver cómo se podría plasmar una orientación dogmática de signo neopandectista sin el sacrificio insoportable de varias cosas que siguen pareciéndome fundamentales: comenzando por la profundidad histórica y la integridad de la enseñanza y siguiendo por la propia autonomía del derecho romano como materia universitaria encuadrada en los estudios de derecho. Creo, en efecto, que lo que puede aguardarnos por aquel camino es la fragmentación de nuestra disciplina, hasta reducirla a una suerte de ligera introducción dogmática a tal o cual sector del derecho privado moderno, quizá ni siquiera a todos. ¿Y en aras de qué este derecho romano sin historia, fragmentado, amputado para reducirlo a lo que de él sigue reputándose actual, dogmatizado y desterrado de sí mismo? En aras de una nueva dimensión jurídica europea; de algo, pues, que a día de hoy aparece más como un problemático desideratum que como una meta alcanzable en un horizonte previsible; y de algo, en realidad, que de avanzar y llegar a cumplimiento no va a tener más que muy indirectamente su raíz en el derecho romano mismo. Pensando en la formación jurídica, yo no excluyo que detrás de la propuesta neopandectista pueda esconderse un movimiento táctico de resistencia frente al empobrecimiento cultural de los futuros juristas y del derecho en su conjunto. Si fuera así, lógicamente considero plausible el objetivo, pero mucho me temo que la operación no está bien orientada y que —en contraste con lo lento, lo lejano e inseguro de los logros que pueda deparar en el futuro³⁴— no compensa su realización en vista de los riesgos inmediatos que acarrea.

³⁴ Cfr. Mazzacane, «“Il leone fuggito dal circo”...», p. 104; Giaro, «Diritto romano attuale...», p. 143.

En cuanto a lo que he denominado comparatismo en perspectiva histórica, esta orientación adolece al menos de los peligros que supone con carácter general la «aproximación funcional» en la identificación y el tratamiento de los temas a estudiar³⁵, un enfoque muy extendido en la comparación jurídica de nuestros días. Desde el punto de vista de la formación jurídica que debe centrar mi reflexión, creo entrever además cierta tensión entre una opción metodológica de este tipo y la importancia que se querría dar a la dogmática. No niego que la comparación histórico-jurídica de los derechos privados modernos sea capaz de contribuir a la larga al desarrollo del nuevo derecho común europeo y de la dogmática correspondiente; es más, incluso estoy cerca de reconocer que ésta es una senda más adecuada que la estrictamente neopandectista³⁶, o por lo menos, más atractiva para juristas que no sean historiadores o romanistas de profesión. Pero de entrada, lo que busca el enfoque funcional es precisamente la relajación de las ataduras que pueden suponer los dogmas jurídicos, el armazón conceptual y la visión sistemática del ordenamiento para un vuelo más libre de la comparación³⁷. La consecución de una dogmática europea pasaría, por lo tanto, por el desmoronamiento y la recomposición en un nivel euro-

³⁵ Vid. al respecto M. Bretonne, «Fra “storia dei dogmi” e storia sociale», en Id., *Diritto e tempo...*, pp. 147 y s.; Giaro, «*Comparemus!...*», pp. 553 y ss.; Id., «Diritto romano attuale...», pp. 99, 125; otras consideraciones críticas sobre el método histórico-comparativo en Mantello, «Di certe smanie...», pp. 48 y ss., a integrar con la respuesta de C.A. Cannata, «Cuiusque rei potissima pars principium», en *Diritto Romano Attuale* 6 (2001) pp. 157 y ss., y la réplica del propio Mantello, «Ancora sulle smanie “romanistiche”», en *Labeo* 48 (2002) pp. 27 y ss.

³⁶ Comparto en este sentido las apreciaciones de F.J. Casinos Mora, «Nueve siglos de romanismo jurídico», en *Rivista di Diritto Romano* «www.ledonline.it/rivistadirittoromano/» 2 (2002) p. 49.

³⁷ Vid. en este sentido H. Kötz, «A Common Private Law for Europe: Perspectives for the Reform of European Legal Education», en *The common law of Europe and the future of legal education / Le droit commun de l'Europe et l'avenir de l'enseignement juridique* (B. de Witte y C. Forder eds.), Deventer, 1992, pp. 40 y s.; Id., «Vom Beitrag der Rechtsgeschichte zu den modernen Aufgaben der Rechtsvergleichung», en *Norm und Tradition / Fra norma e tradizione...*, p. 161; expresa este autor la esperanza de que en la dirección de una europeización de la ciencia jurídica pueda llegarse a una desdogmatización (*ibid.*, pp. 160 y s.).

peo de las dogmáticas estatales o nacionales, un proceso que en su primera parte —la del desmoronamiento— se viene desarrollando desde hace tiempo de forma no planificada y bajo la presión de muy distintas fuerzas.

Por otra parte, por lo que respecta a su posible plasmación docente, estimo que la orientación histórico-comparativa no puede quedar en manos sólo de los romanistas, sino que requiere por lo menos el concurso activo de los historiadores del derecho. No sé si en España estamos mentalmente preparados, unos y otros, para una colaboración de este tipo. En realidad, tampoco sé, en el plano puramente formativo, cómo podría encajar esta orientación con una enseñanza del derecho romano dirigida hacia la dogmática, y menos desde luego hacia una dogmática en construcción. También dudo, por último, que a día de hoy el derecho comparado, así en general, sea visto como una de las materias esenciales de un curriculum jurídico europeo en el sentido, por ejemplo, de la *Asociación Europea de Facultades de Derecho*, y no solamente como otra de las disciplinas a encajar, junto con el romano y la historia, en el breve espacio que puedan dejar libre las consideradas esenciales.

Voy acercándome al final de mi discurso y no puedo zafarme de un pensamiento pertinaz: el derecho romano no está inscrito en nuestros genes y no sé hasta qué punto se podría defender que forma parte de los genes del derecho a secas. Hoy por hoy (hoy más que nunca), el derecho romano está sólo en nuestra voluntad y de ella depende enteramente su destino. Es obvio además que no me refiero sólo a la voluntad de los romanistas sino a la de los juristas en general, y en último término a la voluntad de quienes tienen la capacidad de tomar o de condicionar las decisiones que marcarán el rumbo de la enseñanza universitaria del derecho. La nuestra no pasa de ser una de las voces que intentan influir en esas decisiones, pero hay otras, concurrentes y contrarias, y éste es el verdadero juego del que depende el futuro de nuestra disciplina.

Con todo, antes de terminar este recorrido tan escéptico, todavía me considero en el deber de decir algo levemente optimista sobre derecho romano y dogmática. Lo haré recordando que la historia es el depósito de la experiencia donde se custodian las raíces de los conceptos jurídicos comunes, ese *common core of concepts*³⁸ que no

³⁸ G. van den Bergh, «*Ius commune, a history with a future?*», en *The common law of Europe / Le droit commun de l'Europe...*, p. 601.

ha dejado de facilitar el diálogo y la comprensión recíproca de los juristas europeos por encima de las separaciones nacionales y de las diferencias lingüísticas y culturales. No importa que el punto de vista moderno se aleje progresivamente del romano³⁹; si queremos que la comunicación recíproca mejore en el futuro, sería muy poco práctico prescindir de aquel legado de la historia. Y lo que el derecho romano representa en esta historia es nada menos que el *principium* de la misma, y el principio es la parte principal de cualquier cosa. No porque lo diga un jurista romano (Gayo en D. 1.2.1) sino porque toda experiencia lo confirma. Ahora bien, el derecho romano no nos da la totalidad de la historia que interesa sino sólo su más conocido y reconocido origen. Tampoco esa historia quedaría completa con la etapa de lo que ha dado en llamarse *ius commune*⁴⁰ ni aunque le diéramos la máxima extensión cronológica posible: a ella pertenece igualmente y por derecho propio la empresa de la codificación con sus antecedentes genéricos y específicos, así como todo lo que ha venido tras los Códigos. Yo me pregunto además si no es la codificación en cierto modo un nuevo *principium*⁴¹: un principio que —nuevo y todo— hace ya tiempo que empezó a ser socavado por la cambiante realidad y cuestionado por la teoría.

Por último, tan inútil como pretender que los romanistas y los historiadores del derecho tenemos una especial legitimación para marcarle direcciones y objetivos al proceso de unificación jurídica en Europa, sería negar que hay una vena de derecho histórico que proyectará siempre su influencia sobre aquello que más nuevo

³⁹ Bretone, «La storia del diritto romano e la romanistica come storia», en Id., *Diritto e tempo...*, pp. 222 y ss.; cfr. Giaro, «Diritto romano attuale...», pp. 112 y ss., 143 y ss.; vid. ya mucho antes R. Orestano, «Il diritto romano nella scienza del diritto», en *Jus* 2 (1951) = Id., «*Diritto*». *Incontri e scontri*, Bologna, 1981, pp. 79-88.

⁴⁰ Vid. en todo caso las precisiones de W. Brauner, *Europäisches Privatrecht: historische Wirklichkeit oder zeitbedingter Wunsch an die Geschichte?* (= Centro di studi e ricerche di diritto comparato e straniero: Saggi, conferenze e seminari, 23), Roma, 1997, pp. 6 y ss.; y la réplica de G. Broggin, «Significato della conoscenza storica del diritto per il giurista vivente», en *Norm und Tradition / Fra norma e tradizione...*, pp. 72 y s.

⁴¹ La codificación «als Neuanfang, der durch einmalige politische und soziale Umwälzungen möglich und nötig geworden war»: Caroni, «Der Schiffbruch...», p. 96.

pueda parecer. Habrá o no habrá, por ejemplo, un Código europeo de obligaciones y contratos, pero si llegara a haberlo, la ciencia jurídica acabará apropiándose de él y lo metabolizará con los instrumentos que le son característicos. Y esos instrumentos —la dogmática entre ellos— serán principalmente los existentes y conocidos de antemano y deberán su cuota parte a la historia jurídica en su conjunto. Se quiera o no se quiera ⁴².

Francisco Cuenca Boy
Universidad de Cantabria

⁴² La razón es que, como dice T. Giaro, «L'argumentation dogmatique et l'argumentation scientifique», en *Rechtshistorisches Journal* 13 (1994) p. 300, «las verdades de la dogmática son... *res cottidianae*, siempre cómodas y familiares, porque se llega a ellas a través de la interpretación de un material ya interpretado, así pues, a través de la interpretación de la interpretación»; «la dogmática —a diferencia de la ciencia— no conoce “revoluciones copernicanas”»; cfr. Atias, *Contra arbitrariedad...*, pp. 78, 126, 161, *passim*.

EL PAPEL DE LAS DISCIPLINAS HISTÓRICO-JURÍDICAS EN LA FORMACIÓN DEL JURISTA EUROPEO*

Debemos partir de una consideración previa: la cuestión del papel de las disciplinas histórico-jurídicas no puede considerarse de manera aislada, separada del contexto más amplio de la evolución de la formación jurídica —entendida en su conjunto— y del mismo jurista. Nos enfrentamos con grandes cambios que tienen sus raíces más profundas en la sociedad y que no pueden por ello ser ignorados. Es necesario por tanto partir de consideraciones de carácter general. Intentemos formularlas del modo más sucinto posible.

En una palabra, lo que hoy parece estar en juego es el principio histórico de *unicidad de la ciencia jurídica*. Este principio aparece históricamente ligado a un modelo muy preciso, que se afirma en Alemania a comienzos del siglo XIX y se convierte después en la seña de identidad del jurista europeo. Usualmente se resume en la cuestión del «método jurídico»: se es jurista, pertenecemos al universo cultural de los juristas, porque todos adoptamos un mismo método que permite el diálogo entre los juristas más allá de su singular adscripción académica, y así concreta el principio de unicidad de la ciencia jurídica y, en definitiva, la misma existencia de la figura del jurista. Todo esto resulta todavía demasiado genérico: debemos acla-

* El texto reproduce con fidelidad el contenido de la intervención desarrollada en el Encuentro de estudio dedicado a «Fines y métodos de la historia del derecho y formación del jurista europeo» (Padua, 25-26 noviembre 2005) que fue organizado por la *Società italiana di storia del diritto*. Con el fin de respetar el estilo propio de una intervención oral, se ha evitado introducir notas y referencias bibliográficas. En un único momento se citan un par de frases, que entendemos manifiestan perfectamente el clima cultural general en el que se desarrolla la cuestión del papel de las disciplinas histórico-jurídicas. Las frases están tomadas de Natalino Irti, «La formazione del giurista», *Rivista trimestrale di diritto pubblico* 54-3 (2004), pp. 647 ss.

rar qué ha significado históricamente el «método jurídico» para los juristas europeos. No se trata de una fórmula predeterminada vinculante como una prescripción, ni de un simple estilo o modo de trabajo. El «método jurídico» nace en primer lugar de una idea compartida: el derecho tiene dos caras, una práctica, dirigida hacia el momento de la aplicación, a la lógica del caso; y otra teórica, que lo conduce a estructurarse en instituciones, en principios e, incluso, en algunas fases históricas, a aspirar al sistema. Siguiendo este elemental hilo conductor, no resulta difícil identificar al jurista: se considera como tal a todo práctico del derecho, siempre que no se encierre en lo específico de su actuación, siempre que mantenga abierto el cauce que dirige la disposición a la norma y la norma al principio; y lo es todo teórico del derecho que no se pierda en las brumas de la teoría, que no olvide nunca la naturaleza práctica del derecho, que no eluda el decisivo momento de la aplicación.

Éste es el modelo histórico que podemos llamar el modelo de la tradición. No se funda en la separación entre práctica y teoría, como se afirma a veces errónea y superficialmente. Por el contrario, se funda en la ambición de aunar de manera recíproca y variable una y otra. Y sobre todo está estrechamente ligado al principio de la unicidad de la ciencia jurídica y, así, a la misma existencia de una imagen unitaria del jurista. Desde este punto de vista, y siempre que todos adopten el mismo método, no existen razones para realizar distinciones dentro del universo de los juristas: no existe una diferencia sustancial entre las posibles operaciones de interpretación del derecho, las formuladas por la teoría o las esgrimidas por el juez en una sentencia, las que muestran el poder discrecional propio del administrador o las del experto que a través de la interpretación del derecho busca una justa ponderación y valoración de los intereses en juego. En este sentido, pienso que no se debe olvidar nunca que este principio de la unicidad no es sólo una cuestión académica, de relación entre disciplinas jurídicas; debe considerarse en primer lugar como el reflejo de una realidad social e institucional: una sociedad sin su *Juristenstand*, su corporación de juristas, como incorrectamente estamos acostumbrados a traducir en italiano, es una sociedad más pobre, menos cohesionada, menos segura porque es una sociedad en la que los actores sociales no pueden verificar —ni reducir a unidad— toda una serie de operaciones de absoluta relevancia cotidiana.

Este modelo está hoy en discusión. Y con él, el papel de las disciplinas histórico-jurídicas que están ligadas a este modelo de mane-

ra particularmente estrecha. Intentemos ahora mostrar este aspecto. El modelo de la tradición del que hablamos tiene hoy un enemigo declarado. Debiendo expresar este conflicto de manera sucinta, se puede afirmar que tal enemigo viene dado por el *nuevo dominio cultural del saber técnico-económico*. Se trata de un saber absolutamente nuevo, que no existía en los siglos precedentes y que, por tanto, no estaba presente a finales del siglo XIX, cuando nuestro modelo se vio obligado a enfrentarse con muchas novedades: con la revolución industrial, con el nacimiento de las ciencias sociales, con un cambio general de las relaciones entre Estado y sociedad. De ese enfrentamiento nuestro modelo salió transformado, pero no destruido. Hoy las cosas son distintas, y la amenaza, a un siglo de distancia, es mucho más fuerte. ¿Cómo la podemos caracterizar? Lo diría de esta manera: es la primera vez que se presenta en la historia, desde el punto de vista cultural, una ruptura tan clara entre «saber» y «saber hacer», y que tal ruptura se ha introducido también en la universidad, atribuyendo a ésta responsabilidades educativas que incluyen materias cuyo contenido se agota en el simple «saber hacer» y, así, en una formación meramente profesional. Bien entendido, ésta era una pretensión que algunos sectores de la universidad sostenían desde hacía tiempo, y que en sí misma es aceptable: todos recordaran cómo esta transformación nació en las facultades de ingeniería donde era necesario un cambio en esta dirección.

Pero la cuestión es la siguiente: ¿puede aplicarse a nuestro mundo, al universo de los juristas, un modelo de este género? Pienso que aquí encontramos el centro de nuestros problemas, que coinciden con los específicos de las disciplinas histórico-jurídicas. Tales disciplinas mantienen un papel relevante en las facultades de derecho mientras éstas se ocupan de formar al jurista unitariamente entendido, el de la tradición, aunque renovado y reconsiderado. Más problemático sería su papel si también en las facultades de derecho dominase el nuevo saber técnico-económico. Obviamente, no se propone aquí rechazar de entrada esta nueva tendencia. Sin embargo, una cosa es hacer más flexible la oferta docente, modelándola en referencia a una pluralidad de actitudes y modos de operar del jurista en la sociedad, sobre todo —más allá de las tradicionales profesiones forenses— en el mundo de la empresa y de las organizaciones de intereses; y otra cosa es recorrer el camino de una auténtica pérdida de identidad, poniendo de esa manera los fundamentos para la reducción de un saber científico históricamente fundado —como

es sin duda el jurídico— a un saber meramente técnico. Si prevaleciese esta segunda solución, también a los juristas —como a los ingenieros— se les demandaría exclusivamente la «prestación de servicios técnicos, negociables en la economía de mercado», como se ha dicho recientemente. Y al jurista se le exigiría que asumiese una dimensión hoy dominante en amplios sectores de la sociedad y de la misma universidad: la «impersonal objetividad de la prestación técnica». En el fondo aparece una sociedad que ya no tiene necesidad, para la composición de los intereses presentes en ella, de la sabiduría de los juristas, sino de simples operaciones técnicas, condicionadas por la mera racionalidad del sector en juego, en el que el derecho está presente de manera totalmente instrumental.

Obviamente, no se pretende pintar de negro el futuro de los juristas europeos, como si se tratase de un futuro ya determinado. Más adelante pondremos de relieve el lado positivo de las oportunidades, de los horizontes que se abren, incluso para los mismos historiadores del derecho. Sólo se quiere subrayar cómo en la fase actual, que indudablemente es de intensa transformación, junto con las oportunidades aparecen algunos peligros, y que para aprovechar las primeras es necesario ser conscientes de los segundos. Así, si es justo no demonizar lo que hemos definido como «el nuevo saber técnico-económico», se debe saber que históricamente éste comporta el peligro antes indicado: una estrategia de mediación de intereses que tiende a prescindir de la componente sapiencial, que sólo confía en la racionalidad técnica y que tiende, por ello, a hacer del derecho un mero instrumento de esa mediación y no ya su ordenamiento regulador. Y debemos saber que por ese camino nos acercamos a una especie de disolución de la figura misma del jurista que —más allá de las funciones académicas y de las tradicionales profesiones legales, en los amplios espacios de la sociedad— terminaría por perder, por ese camino, su configuración unitaria, y por fragmentarse en una serie de figuras técnicas —«expertos jurídicos», «expertos legales», «asesores legales»—, cada uno dueño de un saber sectorial, replegado sobre sí mismo y, sobre todo, condenado cada vez más a la especialización. Desde el punto de vista universitario, es evidente que en un futuro de este género existiría espacio, incluso aumentaría, para asignaturas capaces de reformularse en sentido técnico-profesional, y no lo habría para disciplinas como las histórico-jurídicas. Pienso que todos nosotros hemos sido conscientes de ello con ocasión de la última reforma de los planes de

estudio. Lo que sostengo es que ese clima no era, y no es, fruto de la aberración de un momento, sino expresión de una tendencia más amplia que tiene raíces y causas profundas en una fase histórica que tiende a cambiar de manera profunda las relaciones entre ciencia, cultura, técnica y trabajo, como he intentado mostrar. Debemos por lo tanto formular propuestas históricas y culturales adecuadas al presente si queremos elaborar una estrategia de combate adecuada, con vistas a mantener y promover un papel relevante para las disciplinas histórico-jurídicas en las facultades de derecho.

La primera máxima a seguir es la de no aislarse. Pienso que los historiadores del derecho debemos convertirnos en promotores de una auténtica *alianza de juristas*. Hoy no se trata ya sólo de defender una pequeña parcela más o menos apreciada. Lo que históricamente está en juego es, de alguna manera, la misma identidad del jurista. Los historiadores juristas lo sabemos bien y debemos explicárselo al resto de los juristas. Los que en teoría saldrían ganando en una evolución en sentido técnico-profesional deberían comprender también que a esas ventajas del presente corresponde un precio altísimo, a pagar a medio y largo plazo: la corrosión progresiva del papel y de la identidad del jurista, su reducción a una galaxia desordenada y fluctuante de saberes técnicos más o menos especializados. En este sentido, es necesario hacer comprender que la defensa de un papel relevante de las disciplinas histórico-jurídicas no puede entenderse como defensa de una determinada parcela, sino como valoración de un aspecto ciertamente no accesorio de la tradicional identidad del jurista y de su tradicional método, que está formado desde siempre por el conocimiento de la función práctica del derecho pero también de la reconducción de la norma a principio, y por ello de conocimientos culturales y, entre ellos, en primer lugar, los históricos. En síntesis, la historia del derecho como saludable e inevitable antídoto frente a la dispersión del saber jurídico, a su transformación en un saber meramente técnico.

No todo es tan simple. Para que los historiadores del derecho puedan promover la que antes he denominado alianza de juristas, es necesario en primer lugar que ellos lo sean. Necesitamos, en la investigación y en la docencia, una historia del derecho que esté en línea con las enseñanzas del «método jurídico» del que hemos partido. Necesitamos una historia del derecho que no se encierre en una dirección meramente exegética —como le ocurre al jurista positivo que hoy sólo conoce sus fuentes en un ámbito cada vez más

especializado y menos conexo con el universo de los juristas— y, así, una historia del derecho que no tema —respetando lo específico de cada acontecimiento histórico— *la dimensión de los principios*, sobre la cual pueda instaurarse y renovarse el coloquio con los juristas. Pero necesitamos también una historia del derecho igualmente consciente de la otra cara del derecho que es la interpretación, que hace concreta la norma y que se corresponde con su naturaleza práctica. Imagino aquí un futuro en el que el diálogo aparece no sólo sobre los principios, sino también en referencia a los *problemas* que surgen dentro de cada uno de los sectores de la experiencia jurídica, si no en cada caso sí en la dimensión de la interpretación del derecho. Imagino un futuro en el que el historiador del derecho desarrolle una función, en su investigación y en la docencia impartida en las facultades de derecho, que ya no sea sólo la tradicional sino también una nueva en la que trabaje junto al civilista, al administrativista, al constitucionalista sobre objetivos definidos, y en general siempre que resulten particularmente evidentes los componentes históricos de las cuestiones a las que esos juristas se enfrentan. No se trata de inventarse nuevas historias especiales del derecho sino de pensar en enseñanzas en las que colaboran juristas positivos e historiadores del derecho, en módulos distintos pero que confluyen en un único proyecto docente.

Confieso que me había propuesto no hablar de mi específica experiencia docente e investigadora. Pero al final, especialmente cuando se articulan propuestas concretas, es incluso justo hablar de lo que más directamente se conoce. Y así, en mi campo, que es el de la historia de las constituciones, he pensado con frecuencia en lo útil y productivo que sería una enseñanza de Justicia constitucional o de Derecho constitucional especial dedicado a los derechos fundamentales, en la que el historiador del derecho pudiese desarrollar un módulo que imagino lleno de cuestiones actuales que necesitan una comprensión histórica. Pero lo mismo sirve para el nuevo campo del derecho público europeo, en el cual se está formando, con sus luces y sombras, una realidad como la de la Unión Europea, que claramente no corresponde a ninguna forma conocida en los esquemas tradicionales de los últimos dos siglos del derecho público estatal. Obviamente, en este caso, no corresponde al historiador del derecho decir lo que es la Unión Europea, ni puede pretender definir la esencia de los derechos fundamentales, o del Estado constitucional como forma de Estado, o del tan discutido control de

racionalidad del tribunal constitucional. Sin embargo es evidente que en todos estos casos, como en otros muchos, ninguno puede pensar que estamos hoy en una fase de «tranquilo y ordenado desarrollo de la ciencia», como pudo decir un jurista alemán a mitad del siglo XIX, cuando el triunfante positivismo jurídico, de cuño estatista, pensaba haber conducido a puerto la nave del derecho. Hoy, la nave del derecho está de nuevo en alta mar. Esto sirve para todas y cada una de las disciplinas jurídicas. Y muchos nudos aparecen en el peine, precisamente desde el punto de vista histórico. En las disciplinas que cultivo el más evidente es el renovado papel de la jurisdicción, que tiene ciertamente un contenido histórico de notable densidad. Ante todas estas cuestiones el jurista positivo no puede y no debe permanecer solo. Lo que importa es que el diálogo y la colaboración con el historiador del derecho nazcan de la realidad de las cosas, de la efectividad de los problemas, y no de simples conveniencias académicas.

Por último, quisiera señalar también el mayor peligro que en mi opinión corre el historiador del derecho una vez que el coloquio con el jurista positivo sea activado. Se trata de aportar a ese coloquio su conocimiento del pasado en forma de «modelo». En el ejemplo que antes hemos puesto, eso significaría afirmar que el Estado constitucional que tenemos hoy, caracterizado en la actualidad por una importancia grandísima de la jurisdicción, no es otra cosa que una reedición de las formas más notables de Estado de carácter jurisdiccional, presentes en la Europa de antiguo régimen, o de la primera edad moderna, es decir, antes de la época más próxima del derecho público estatal posrevolucionario. De esta manera, el historiador del derecho desempeñaría el papel, verdaderamente singular, de certificador del fin del derecho moderno codificado, basado sobre la forma política de carácter estatal, y del inevitable retorno del derecho precedente. Sobre esta base no se instaure un coloquio correcto y fértil entre jurista positivo e historiador del derecho. Este último no puede convertirse en experto en muertes y resurrecciones y por el contrario debe concurrir con su saber histórico a la relativización de toda tradición recibida, incluida obviamente la más reciente, que en nuestro caso es la del derecho público estatal. La función del historiador del derecho es por tanto esencial no porque sea el custodio de «modelos», sino al contrario porque es el conocedor natural de la idea de la complejidad del pasado, y de un presente que ya no se corresponde a las categorías del derecho público

estatal, en el que conviven de manera articulada restos evidentes de ese derecho —que no son ciertamente meras supervivencias— con formas notables desde el punto de vista histórico. En una palabra, necesitamos al historiador porque ya no estamos en una fase de «tranquilo y ordenado desarrollo de la ciencia», como decíamos arriba.

Una última consideración. Nuestro encuentro está dedicado a la formación del jurista europeo, y yo apenas he hablado de este aspecto. Con este propósito, vuelvo por un momento a mi experiencia específica: la enseñanza de la historia de las constituciones. Por una serie de razones que en su origen poco tenían que ver con los problemas de nuestro encuentro, esta enseñanza fue en su día situada en el primer año de la facultad de derecho de Florencia, donde ha permanecido hasta hoy. En esa ubicación, la historia de las constituciones se convirtió en una especie de introducción histórica al derecho público, entendido en perspectiva europea, con referencia a las tradiciones constitucionales de Europa. Pues bien, lo que puedo testimoniar es el interés de nuestros estudiantes —el número de matriculados— por una dimensión de este tipo. Pienso que es necesaria una reflexión sobre esto. Si de verdad queremos introducir la dimensión europea en la formación del jurista, no nos podemos quedar en potenciar algunas enseñanzas específicas. Es necesario revisar más bien todo el proceso de formación, desde la formación inicial, que es como todos sabemos la más delicada y la más condicionante y que ya no puede dedicarse al estudio inmediato de los fundamentos del derecho nacional. Podía todavía ser así cuando más allá del derecho nacional sólo existían otros derechos nacionales, que en todo caso se comparaban con el propio, y el derecho internacional, que a su vez presuponía la existencia de los derechos nacionales estatales. Entonces, era lógico partir del derecho nacional, y reservar para un momento posterior la comparación y el estudio del derecho internacional. Ahora ya no es así, y se debe por ello también desde el punto de vista docente tomar nota de la transformación que se ha producido, que ya no hace indispensables para la existencia misma del derecho el caparazón nacional y estatal. La realidad de todos los días muestra en efecto que el derecho vive ahora en otra auténtica *segunda dimensión*, junto a la estatal, que es la supranacional, de la que es expresión el derecho europeo. En el plano docente, es necesario que los estudiantes tomen conciencia de esta duplicidad desde los comienzos de sus estudios. Se

trata de una conciencia en primer lugar de orden cultural, que es necesario adquirir como necesaria premisa al estudio de *todo el derecho, nacional y europeo*. En este sentido, una buena formación del jurista europeo no se consigue sólo estudiando el derecho comunitario, sino y sobre todo estudiando de manera distinta, es decir, desde una óptica europea, los mismos derechos nacionales, y para ello es indispensable esa preliminar adquisición cultural que antes se delineaba. Pienso que también en esta dirección puede ser útil, y quizá necesaria, una vez más, la aportación de los historiadores del derecho. Como es evidente, también desde este punto de vista el juego no ha concluido. En nuestro presente, existen peligros, en nuestra opinión graves, que son los que hemos indicado al inicio de la intervención, pero existen también oportunidades relevantes, que nos corresponde afrontar de manera adecuada.

Maurizio Fioravanti

Universidad de Florencia

[Traducción de Manuel Martínez Neira]

EL DERECHO ROMANO DESPUÉS DE EUROPA. LA HISTORIA JURÍDICA PARA LA FORMACIÓN DEL JURISTA Y CIUDADANO EUROPEO*

1. La relación que el título del Congreso establece entre «métodos y fines de la historia jurídica» y «jurista europeo» impone concretar previamente qué debe entenderse por jurista europeo¹.

El calificativo puede sonar incluso superfluo. Todos nosotros, así como nuestros estudiantes, gozamos de la ciudadanía europea, por ello somos *de iure* juristas europeos. Esta broma fácil pretende sólo recordar que esta adjetivación —como quiera que se entienda— está evidentemente vinculada a una precisa situación histórica e institu-

* Texto revisado y provisto de notas, de la ponencia elaborada con motivo del Convegno della Società Italiana di Storia del Diritto «Scopi e metodi della storia del diritto e formazione del giurista europeo» (Università di Padova, 25-26 de noviembre de 2005), que aparecerá en las correspondientes Actas. Texto presentado, asimismo, al Seminario Internacional organizado por los Institutos Antonio de Nebrija y Lucio Anneo Séneca sobre «El papel de la Historia en la formación del jurista europeo» celebrado en la Universidad Carlos III de Madrid los días 22 y 23 de junio de 2006 y que constará, asimismo, en las actas correspondientes. Aprovecho para manifestar mi agradecimiento a la profesora Consuelo Carrasco García por la traducción del texto en castellano, así como por sus apreciaciones respecto del mismo. Mi agradecimiento, también, a todos aquellos colegas que, *publice y privatim*, me han hecho saber sus comentarios y sugerencias propiciando la reflexión acerca del sentido del trabajo que realizamos, y generando en mí la confianza de que todavía es oportuno discutir sobre cuestiones de método.

¹ La expresión es utilizada en Italia incluso en la descripción de los «Objetivos formativos» de la nueva Licenciatura en derecho prevista por el Decreto Ministerial de 25 de noviembre de 2005, es decir, el mismo día en que se celebraba el Encuentro de Padua. Así, el jurista europeo se caracteriza como el licenciado que desarrolla actividades «en el sector del derecho comparado, internacional y comunitario». En este sentido, la definición normativa parece apoyar el enfoque jurídico aquí adoptado.

cional, esto es, a la progresiva construcción de «una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa» (para expresarlo conforme al art. 1 TUE)².

Para afrontar el argumento de modo técnico —evitando recurrir a usos puramente retóricos, del tipo «ciudadano del mundo»— conviene proceder como juristas, delineando el ordenamiento dentro del cual está llamado a operar el «jurista europeo», trasfondo que define en buena parte sus características. Esta premisa, inevitablemente, va a ocupar por sí misma mucho del breve tiempo que nos ha sido concedido. Ahora bien, sin la definición, el debate correría el riesgo de quedar vacío de contenido.

2. La Comunidad europea (en singular) se nos presenta, ante todo, como organización con instituciones propias, es más, disciplinadas éstas por el que el Tribunal de Justicia, desde un dictamen de 1991 (n. 1 de 14 de diciembre de 1991) considera «el texto constitucional de una comunidad de derecho», esto es, el Tratado CEE, sin aguardar a la fallida ratificación del tratado de 2004, «por el que se establece una Constitución para Europa».

Así pues, un jurista que desee considerarse europeo debe conocer las normas fundamentales del ordenamiento comunitario.

En este sentido, se espera del pensamiento jurídico europeo una contribución especialmente constructiva, dado el carácter sin precedentes de la estructura de gobierno comunitaria. Esta estructura impone la revisión de las tradiciones de pensamiento del «ius publi-

² Que no se trata de una simple broma se desprende de la existencia de normas que, aun cuando con algunas restricciones, permiten de modo específico el ejercicio de la profesión forense en Estados distintos del estado miembro en el que se ha obtenido la cualificación como «abogado» (Directiva 48/1989 CEE y 5/1998 CE). Las consecuencias que tal previsión puede tener en la educación jurídica se pueden vislumbrar, por ejemplo, en la declaración *For a European Space of Legal Education* de la *European Law Faculties Association* de 31 de mayo de 2002 (donde —a parte de la ausencia de referencias a la historia jurídica— se aprecia una distinción entre una fase de preparación en el derecho nacional, y una fase de preparación en el derecho comunitario, que parece presuponer una separación entre los dos ordenamientos, como si un jurista que pretende operar dentro de los límites del propio estado pudiera hacerlo prescindiendo del derecho comunitario).

cum Europaeum», y la disponibilidad a superar el orden internacional fundado en la soberanía de los Estados, orden internacional sancionado por el considerado modelo de la paz de Westfalia. Desde este punto de vista, obviamente, la construcción jurídica se debe confrontar con la historia de las instituciones, con la ciencia política y también con la ética, pues el declive de la soberanía se corresponde con la creciente importancia de los derechos humanos, que se inicia en 1969 con la sentencia Stauder, y culmina en la Declaración de derechos fundamentales de la Unión de 2000; incluida ésta como segunda parte del tratado de 2004³.

Más allá del ámbito constitucional (y del de los tratados internacionales), en el ordenamiento comunitario se encuentra, como es sabido, el comúnmente denominado derecho derivado, aquél de los actos aplicativos, de las normas emanadas de las instituciones comunitarias para la consecución de los objetivos de la Unión. Objetivos que son la constitución de un mercado común y la institución de una unión económica y monetaria, con los que se persigue un desarrollo compatible con la conservación del medio ambiente y la elevación de la calidad de vida. A ello se suma el propósito de afirmar la identidad de la Unión en la escena internacional y de desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia en el que se asegure, de una parte, la libre circulación de personas y, de otra, el control de la inmigración, reforzándose, asimismo, el control de la criminalidad.

Es esta una parte del derecho comunitario en la que impera lo que, tanto la opinión pública como la de los expertos, han calificado de exceso de regulación; defecto que las propias instituciones comunitarias se han propuesto subsanar reduciendo el número de disposiciones de 80.000 a 25.000. Se trata de normas emitidas, respetando los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad, en los sectores de competencia normativa exclusiva y concurrente.

Un escrupuloso «jurista europeo» debe asumir, también, como objeto de la propia experiencia esta multiplicidad de normas; si bien no *in toto*, al menos sí en tanto en cuanto está llamado a hacerse

³ Que el anunciado declive de los Estados nacionales sea irreversible (y deseable) comienza ahora a ser justamente puesto en tela de juicio, porque —si se observa desde un punto de vista axiológico— los Estados nacionales (de tradición democrática) son la forma organizativa en la que más eficazmente se garantiza la observancia de los derechos humanos.

cargo de las normas de su propio ordenamiento estatal en sus distintas variantes (nacional, regional y local). De hecho, el Derecho comunitario es derecho directamente aplicable en todos los estados miembros (me refiero a los reglamentos) o, al menos, vincula a los estados miembros en los fines, dejando a éstos la elección de los medios idóneos para alcanzarlos (directivas).

Esta situación determina no sólo un incremento cuantitativo, sino que requiere asumir, también, actitudes interpretativas particulares que denominaría como canon del «*favor unitatis*». El derecho comunitario debe ser interpretado —sostiene el Tribunal de Justicia de la Comunidad europea— en aquel sentido que sea más favorable a la integración europea.

Aun cuando percibida como hipertrófica, esta multiplicidad de normas no colma, sin embargo, la totalidad del espacio jurídico, esto es, no ambiciona presentarse como ordenamiento exclusivo para los ciudadanos europeos.

Para un ciudadano italiano la mayor parte de las normas de derecho privado, penal, administrativo, son, todavía, de origen nacional.

En este ámbito actúa, sin embargo, otro factor de «europeización», no tanto del derecho, cuanto de las relaciones. La progresiva construcción de un mercado único favorece el que se estrechen las relaciones jurídicas de carácter transnacional o —como prefiere decir el legislador comunitario— transfronterizas. El que la regulación de esas relaciones transfronterizas pueda caer bajo la competencia de la Comunidad ha sido sancionado por los artículos 94-97 del Tratado de la CE⁴.

La pluralidad de ordenamientos puede, de hecho, representar un obstáculo a la libre circulación de personas, mercancías, capitales y servicios, ya que genera incertidumbre acerca del derecho aplicable y, en los contratantes, dificultades para sopesar las consecuencias de sus propios actos. La Comunidad tiene entre sus deberes la apro-

⁴ Otra cuestión es si la emanación de un código civil uniforme está entre las competencias normativas de la Comunidad Europea. El art. 235 TCE, que atribuye al Consejo el poder de emanar cualquier norma apta para lograr uno de los fines del Tratado, constituye una exigua base, sobre todo a la luz de la reciente tendencia a restringir su alcance. En sentido contrario se pueden invocar también los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

ximación de las legislaciones allí donde la variedad plantee obstáculos al mercado.

La armonización, sin embargo, no ha tenido lugar, fundamentalmente, a través de la unificación del derecho material, tal y como se piensa. El principal sistema con el que se opera a fin de garantizar una eficiente reglamentación de las relaciones transfronterizas, continúa siendo el derecho internacional privado. Se conservan las legislaciones nacionales y, a lo sumo, se interviene para concretar la ley aplicable y el juez competente⁵; sobre todo se asegura en todos los Estados miembros el reconocimiento y la ejecución de las sentencias pronunciadas en los otros estados.

Esto explica, tras la convención de Roma sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales de 1980 —de la cual está en proceso la transformación en reglamento comunitario— la emanación del Reglamento (CE) 44/2001 («Bruxels I») sobre la «competencia, reconocimiento y ejecución de las decisiones en materia civil y comercial», así como la aprobación del Reglamento (CE) 2201/2003 («Bruxels II») «relativo a la competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y en materia de responsabilidad parental» y, finalmente, la entrada en vigor del Reglamento (CE) 805/2004 que establece «el título ejecutivo europeo para los créditos no impugnados».

Por tanto, en lo que al derecho privado se refiere, el «derecho europeo» continúa siendo una constelación de ordenamientos autónomos, coordinados según el sistema del derecho internacional privado y la cooperación judicial. Por otra parte, no parece que esta estrategia vaya a experimentar cambios en breve, si se atiende al

⁵ No sólo, como se ha dicho, no se ha procedido a uniformar los ordenamientos privados, sino que se echa en falta, incluso, una decidida iniciativa comunitaria para uniformar las propias normas de derecho internacional privado de los diversos Estados. A parte el iter todavía no concluido del reglamento «Roma I» sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, se espera un instrumento comunitario relativo a la ley aplicable a la competencia y a la ejecución de las decisiones en materia de sucesiones; un acto normativo sobre la ley aplicable en materia de separación conyugal, divorcio y anulación del matrimonio («Roma III»); y se está en espera, también, de normas comunitarias sobre la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II»; en este sector existe desde 2003 una propuesta de reglamento del Parlamento europeo y del Consejo).

debate científico subsiguiente a la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo sobre «Un derecho contractual europeo más coherente» (68/2003), en la que, al parecer, se abandona la propuesta de un código civil europeo, ciñéndose a propuestas más modestas de «soft law» y limitándose, precisamente, —respecto de programas que comprenden la totalidad del derecho privado—, a la disciplina de los contratos.

Dicho esto, no faltan reglamentos y directivas que inserten, en los ordenamientos nacionales, reglas de derecho privado, por ejemplo en tema de sociedades comerciales, patentes, multipropiedad, desistimiento en los contratos concluidos fuera de los locales comerciales, cláusulas vejatorias, y garantía en las ventas de bienes de consumo.

Son, sin embargo, intervenciones que, aun cuando significativas, están circunscritas a un ámbito concreto (en nuestro código civil italiano inciden especialmente en el libro V) y, sobre todo, están ligadas a los objetivos económico-financieros propios de la Unión, así como permanecen prácticamente vírgenes ámbitos fundamentales como el del derecho de familia y sucesiones y, apenas tocados, los derechos reales, menos ligados a la lógica del mercado común.

Por razones de todos conocidas, la supervivencia de los ordenamientos nacionales es más tenaz, todavía, en el ámbito penal. En este sector la necesidad de derribar las barreras nacionales para reprimir acciones criminales cada vez más transnacionales se lleva, también, a cabo a través de la cooperación judicial y, en particular, a través del mutuo reconocimiento de las sentencias.

Por no hablar del derecho procesal, fuertemente ligado a los ordenamientos judiciales nacionales y a las diversas tradiciones políticas. Como europeo existe, si acaso, el procedimiento de los juicios del Tribunal de justicia y del Tribunal de primera instancia.

Si este es el ámbito en el que deberá operar, el joven jurista europeo debe, ante todo, estar bien versado en el propio derecho interno (civil, penal, administrativo, procesal), incluso en las normas comunitarias directamente aplicables; debe ser, además, capaz de actuar más allá de las fronteras nacionales sirviéndose de los instrumentos que le aporta el derecho internacional privado y la cooperación judicial y, por si esto fuese poco, desenvolverse con soltura en el ámbito de las instituciones políticas y judiciales europeas, amén de contar con una cultura orientada al respeto de los derechos humanos. No se trata de un juicio de valor, sino —salvo que el

análisis sea erróneo— del retrato de la actual experiencia jurídica europea.

3. En esta situación, ¿qué papel formativo corresponde a la historia del derecho y, en particular, al derecho romano, en las Facultades de derecho?

La respuesta es clara: se trata de un papel muy amplio, capaz de habilitarle para recorrer los múltiples caminos que el jurista (ciudadano) europeo está llamado a transitar.

El derecho romano se pondría, sin embargo, en grave peligro como disciplina académica, si su fin principal fuese individuar, a partir de presupuestos históricos, los elementos comunes de los distintos derechos privados de los Estados miembros, y ello con el propósito de su aproximación. No sólo (por retomar algunos de los aspectos tratados) estaríamos infravalorando la contribución que podemos ofrecer a la comprensión y elaboración del nuevo orden constitucional europeo; no sólo nos resignaríamos a abstenernos de hablar sobre los derechos humanos, sino que, incluso en el ámbito del derecho privado —contrariamente a cuanto se piensa—, nos confinaríamos a espacios muy limitados.

La aproximación interesa, como ya se ha visto, sólo a algunos sectores del derecho privado, principalmente aquellos que «tengan una incidencia directa sobre la instauración o sobre el funcionamiento del mercado común» (art. 94 Tratado CE). En consecuencia, si los estudios histórico jurídicos se orientasen en este sentido, deberíamos concentrarnos fundamentalmente en el derecho contractual (justiniano), con el riesgo de encontrarnos, igualmente, en desventaja, pues la tipicidad de los contratos que caracteriza al derecho romano, determina que éste no se halle en las mejores condiciones para servir de fundamento a la construcción de una parte general⁶. Probablemente, encontrarían un terreno más fértil las iniciativas que introducen el derecho romano en ordenamientos jurídicos que están por construir, en los que se parte casi desde cero y respecto de los que no existe una cultura jurídica consolidada: el ejemplo en el que todos pensaríamos es China.

⁶ Piénsese en el tema actualísimo de la conclusión de los contratos *inter absentes*, que ya preocupaba a los pandectistas quienes se interrogaban acerca de los contratos concluidos vía telégrafo.

Además, el romanista debería lealmente declararse incompetente para intervenir (se entiende que en cuanto romanista) respecto de figuras jurídicas de reciente creación. No es casual el hecho de que los estudios sobre el «derecho europeo» hayan privilegiado la venta de bienes de consumo, ámbito en el que pueden encontrarse precedentes romanos, mientras no existe un interés semejante respecto de la más consistente reforma del derecho de sociedades. Siendo realistas, ¿qué aportaciones pueden provenir de un romanista (o de los historiadores en general) en materia de patente europea, cláusulas vejatorias, firma electrónica, entre otros; materias todas en las que las reglas son cada vez más el producto de la «business community» y las realidades a la que se refieren imposibles de reconducir al mundo antiguo, salvo si se recurre a artificios intelectuales fruto de un conservadurismo que desmiente la, tan aclamada, apertura a la actualidad?

Existe, además, otro punto importante. Incluso respecto de las instituciones dotadas de mayor peso histórico, no está claro que la aproximación se haya producido, o se vaya a producir, privilegiando aquello que las legislaciones nacionales tienen en común. Es inevitable que en la redacción del derecho uniforme prevalezcan —por razones culturales o políticas— modelos extraídos de uno u otro ordenamiento nacional, y ello en menoscabo de los otros y de las propias raíces comunes⁷.

Especialmente, hay que tomar en consideración el hecho de que el parámetro que guía (o ha guiado) las intervenciones comunitarias sobre las legislaciones nacionales, es la eficiencia del mercado, si bien atemperado con otros valores tales como la protección del medio ambiente y los derechos humanos⁸.

⁷ La armonización se persigue, también, a través de la competición entre sistemas jurídicos, por tanto a través de una vía que nada tiene que ver con la investigación histórica y que responde, incluso es su sublimación, al criterio de la máxima eficiencia del mercado interior. Se piensa que una cierta uniformidad se conseguirá espontáneamente, como consecuencia del hecho de que cada estado tenderá a establecer normas que favorezcan el comercio y las inversiones para ofrecer a los operadores económicos las condiciones más apetecibles. Con el tiempo —afirman quienes sostienen esta opinión— todos los Estados adaptarán sus ordenamientos a aquel que haya demostrado mayor capacidad de atracción.

⁸ A este respecto hay que observar que el proyecto de una Declaración de derechos fundamentales ha puesto de manifiesto que la integración eco-

Así, pues, las medidas de aproximación se inspiran en criterios distintos de la común matriz histórica, precisamente porque se trata de un derecho que debe responder a fines específicos y nuevos. En definitiva, el riesgo es que de entre los amplísimos caminos que el jurista europeo está llamado a recorrer, la historia se confine a sí misma en una zona angosta y acabe por extinguirse, perdiendo su papel de legitimación «general» del pensamiento jurídico que hasta ahora ha desempeñado y sobre el que volveremos a tratar en la parte de esta intervención en la que abordo mis propuestas.

Se hace necesario poner de manifiesto una previsible consecuencia que podría llevar consigo, desde el punto de vista científico, el mencionado planteamiento. La atribución al derecho romano de la función de proceder a la identificación, a partir de presupuestos históricos, de los elementos comunes de los distintos derechos privados, aun cuando legítima, comporta el riesgo de hacer estéril la investigación, dado que si aquello que es determinante para las raíces jurídicas comunes es el modo en el que las generaciones anteriores han entendido la herencia histórica, estaremos poco incentivados para intentar nuevas interpretaciones de la experiencia antigua en cuanto tal. Paradójicamente, incluso si viese la luz un texto de una obra clásica, por ejemplo de Juliano o Papiniano, esto no cambiaría el planteamiento de los distintos derechos privados europeos, ya que no se trataría de documentos que estuvieron a disposición de aquellos que en época medieval y moderna participaron en la elaboración de los distintos derechos de Europa.

Podría continuar pero prefiero a pasar a la contraprueba. No se puede obviar el hecho de que haber ligado la historia jurídica a la individuación de los fundamentos comunes de los derechos privados europeos ha llevado en Alemania a la decadencia de las cátedras de derecho romano puro, y no sólo de éstas sino, tal y como denun-

nómica no ha sido suficiente como para conferir a la Unión plena legitimidad, de modo que el proceso constituyente —de momento interrumpido— es visto como un «paso de la Europa de los mercados a la Europa de los derechos» (Rodotà). También las futuras normas del derecho privado deberán tenerlo en cuenta, en la lógica (ya sabida por la experiencia nacional) de la subordinación del derecho privado a las normas constitucionales. Por tanto, aunque la pura lógica del mercado no debiese dictar leyes, la política legislativa está destinada a asumir referentes distintos de la mera recuperación de la tradición civilística.

cia un artículo aparecido en la *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, a la desaparición, igualmente, de los otros dos filones históricos tradicionales representados por el derecho germánico y el derecho canónico según la tripartición de la *Savigny Zeitschrift*⁹. De todos es la responsabilidad de no dilapidar la tradición que nos ha llevado a tener el papel formativo hasta ahora desempeñado. No podemos acogernos a una corriente cuyos perjudiciales efectos se han verificado ya: es esta una cuestión acerca de la cual la comparación nos debe aportar alguna enseñanza.

No me parece tampoco una alternativa válida aquella que, quizá impropriamente, definiría como macro-comparación histórico-jurídica, esto es, buscar en el pasado analogías morfológicas de carácter más general. Por ejemplo, no creo que los expertos de derecho comunitario para orientarse entre la pluralidad de ordenamientos, puedan inspirarse y encontrar ayuda en el dualismo *ius civile-ius honorarium*¹⁰. Lo mismo es válido para las macro-analogías, como aquellas que se establecen con los imperios (quizá multiétnicos) menos clarificadoras toda vez que, pretendiendo abrazar fenómenos amplios, deben abandonar las particularidades de las que es rica la historia. No es este el modo de sacar provecho a la herencia histórica.

4. Este es el momento de hacer propuestas. ¿Qué papel corresponde, pues, a la historia jurídica y, en particular, al derecho romano, en la formación del jurista? Entiendo que se trata de un papel fundamental y cada uno de nosotros está llamado a contribuir a él con sus métodos y sus competencias, concientes todos de que, no tratándose ya de derecho vigente, el derecho romano no puede ser más que objeto de, como diríamos en italiano, «riappropriazione». La aceptación de este postulado debería facilitar el diálogo, ya que

⁹ U. Wesel, *Ein Leben für das römischen Recht* (FAZ, 15.8.2005).

¹⁰ Es una analogía que, podríamos decir, está en consonancia con la construcción fijada por la sentencia del Tribunal constitucional italiano n. 170 de 1984, según la cual «la ley interna en contraste con una norma comunitaria es válida pero no aplicable» en tanto es «colocada en un ordenamiento que no quiere interferir en el distinto y autónomo ordenamiento de la Comunidad europea». Otra anacrónica aproximación se podría hacer entre el art. 235 del Tratado y la cláusula de la *Lex de imperio Vespasiano* que atribuye pleno poder normativo al emperador.

parte de la legitimidad de todos los enfoques¹¹. Quienquiera que estudie el derecho romano, cualquiera que sea la tendencia que practique, se encuentra comprometido en un esfuerzo de transmisión cultural, y debe, en consecuencia, encontrar los motivos para hacer relevante el derecho romano en la formación del jurista y en la cultura jurídica moderna. A la luz de cuanto ha sido hasta ahora expuesto, parece incuestionable otro importante aspecto: el hecho de que se hable de la formación de un jurista excluye todas las tentaciones, admitido que existan, de vincular la historia del derecho a estudios distintos de aquellos que se imparten en la Facultad de derecho. Se trata de un postulado banal, pero parece procedente subrayarlo y darlo por sentado.

Dado que el tiempo disponible es poco, indico, casi a modo de «slogan» algunos puntos de un programa para disertar sobre «derecho romano después de Europa». Por otra parte, estoy convencido de que resultará fácilmente comprensible a cuantos —más de los que cabría pensar— partan de comunes premisas culturales y académicas y estén dispuestos a aprehender las implicaciones de los distintos aspectos que, por ello, se dejan sólo indicados.

5. Como primer paso para intentar describir el papel que la historia jurídica reviste para la formación del jurista, sugiero dirigir la mirada a la Facultad de derecho en su conjunto. Desde hace al menos doscientos años, las Facultades de derecho (en Italia y en Europa) acogen una o más cátedras de «historia» jurídica. Se pueden dar muchas explicaciones a esta inversión de recursos; propongo una, que

¹¹ Cuando se procede, sin embargo, a recíprocas descalificaciones infligidas con tono despectivo, temo que no nos percatamos —quizá a causa de la pérdida de memoria jurídica— de que corremos el riesgo de reproducir, a escala reducida, las épicas batallas que hace cinco siglos enfrentaron a los partidarios de Bártolo y Alciato respectivamente, sazonadas con los coloristas insultos transmitidos, de generación en generación, desde Alberico Gentili hasta Domenico Maffei. Este enfrentamiento, por otra parte, fue reactivado hace ya cincuenta años por Koschaker, bajo las etiquetas de neopandectistas y neohumanistas. En los últimos años se ha revitalizado en términos distintos —y, a menudo, mostrando un increíble desconocimiento de los precedentes— si bien la progresiva Unión Europea parece conferirle un ultimátum que, precisamente a la luz de los precedentes históricos, difícilmente se hará efectivo.

combina dos perspectivas analíticas que gozan de una reciente, pero ya sólida elaboración, o sea, las teorías sobre la «naturaleza social de la memoria» y sobre el saber jurídico como «campo social».

Dicho en pocas palabras, tal inversión de recursos se explica, en mi opinión, porque la historia jurídica es evidentemente considerada (no digo que lo sea) por parte de las Facultades jurídicas, como una disciplina necesaria para configurar la *identidad del jurista*, para hacerlo entrar en la comunidad especial de la cual forma parte, identidad caracterizada, más que por nociones precisas, por un complejo *habitus* que implica desde un modo de razonar, hasta un lenguaje sectorial que lo distingue del resto de la comunidad.

En Roma, el ingreso en este selecto grupo tenía lugar por transmisión familiar y cooptación aristocrática, a través de un aprendizaje que consistía en una comunión de vida y un tránsito hacia la edad adulta. Hoy la educación del jurista tiene lugar en la Universidad y sólo en un segundo momento mediante la práctica profesional, regida, no por casualidad, por la lógica de las relaciones sociales indicadas¹².

Por tanto, la matrícula en la Universidad implica el acceso a un grupo social en sí mismo y, familiarizar a sus miembros con el *pasado colectivo* de ese grupo es el esfuerzo principal para asimilarlos al mismo. En el fondo, tener una cultura es dirigir la mirada al álbum familiar y poder reconocer a los propios antepasados. En ello consiste, precisamente, la naturaleza «social», compartida —no meramente individual— de la memoria.

No por casualidad las materias históricas se disponen al comienzo del currículo, precisamente porque actúan como puerta de acceso a la nueva comunidad, de cuyo pasado son portadoras. Por tanto, considero decisivo que, también en el nuevo orden que de la docencia se haga, la enseñanza del derecho romano permanezca en primer curso, pues sólo así podrá desempeñar la función de *imprinting*¹³.

¹² Bastaría reflexionar sobre esta distinción, para comprender cuán infundada es la pretensión de convertir a la Universidad en más práctica, siendo su rol, por definición, distinto del aprendizaje aplicativo, y cuán ambiguo aparece el carácter de las Escuelas de práctica jurídica, que intentan combinar los dos perfiles.

¹³ Este auspicio expresado en la ponencia del Seminario de Padua se ha visto realizado mediante la contemporánea reforma del 1+4 (de 25 de

No insisto más acerca de esta función, sino para decir que su importancia puede explicar la relación de *odi et amo* respecto de nuestras materias. Añado sólo que esta dinámica de legitimación buscada en el pasado se manifiesta también en otros aspectos. Así, por ejemplo, en la Universidad, los organizadores de cualquier evento intentan que su celebración tenga lugar en un aula histórica. Y, ¿a quién no le ha sucedido, mientras presentaba la Facultad en una conferencia de orientación, escuchar a un colega positivista hacer llamamiento —como argumento entre los más convincentes— precisamente a la tradición de la sede, a las aulas y hasta, quizá, a los orígenes medievales del *Studium*?

Aun dotada de la importancia que esta función «iniciática» le atribuye, la historia aparece hoy, sin embargo, debilitada. El motivo es simple: utilizando palabras de Paul Valéry «la sociedad ha dejado de asemejarse». El actual sistema social se está orientando hacia una autojustificación en la que prima el criterio de la eficiencia y que se basa en el presente (un síntoma de ello lo constituye el análisis económico del derecho).

Existen, también, sin embargo, razones específicas de la historia jurídica. Es necesario partir del hecho notorio de que toda sociedad elige su historia. Por ejemplo, antes de la primera guerra mundial se decía que Italia se había forjado como comunidad nacional desde el «Risorgimento»; después el acento se trasladó a la «Resistenza», ahora retorna al «Risorgimento». Pensemos, por otra parte, en la relevancia que en términos de identidad asume la disputa historiográfica sobre la masacre de los armenios en Turquía o a las *querelles* suscitadas en Francia por la ley de 23 de febrero de 2005 que impuso el conocimiento, a través de los programas escolares, de «el papel positivo de la presencia francesa en ultramar, especialmente, en el Norte de África». Un fenómeno semejante parece percibirse en España en los últimos tiempos respecto de la exaltación, por algunos, de la II República, como modelo de identidad.

Del mismo modo, la más pequeña comunidad de juristas puede cambiar, también, sus preferencias.

noviembre), que de hecho ha reunificado en Italia el plan de estudios para la licenciatura de Derecho (antes dividida en dos licenciaturas, 3 + 2) y ha previsto la enseñanza obligatoria del derecho romano en el primer año.

Se ha asistido así, por poner un ejemplo, a la pérdida de interés por el derecho medieval que, sin embargo, constituye, en el siglo XIX, el momento del nacimiento de la historia del derecho italiano, ya que en el medievo tuvo lugar el encuentro entre el elemento romano y el elemento germánico, que fue la cuestión crucial de nuestro «Risorgimento». En el centro de atención se encuentra hoy la época de las codificaciones, que promete (o prometía) reflejar mejor el sistema jurídico actual. Por otra parte, la historia de las codificaciones, siendo en gran parte historia (a menudo, por desgracia, historia externa) de circulación, imposición e importación de modelos, puede sintonizar, fácilmente, con la metamorfosis en curso, de la historia del derecho italiano en historia del derecho en Europa (superación del horizonte nacional que tiene, a su vez, un evidente enganche con el contingente proceso de cesión de soberanía de los Estados en pro de la Unión).

Para comprender, desde este punto de vista, la crisis que, sin embargo, atenaza al derecho romano como objeto de estudio, es necesario partir de aquel que ha sido su punto fuerte, esto es, del hecho de que, incluso después del fin del *ius commune*, este derecho ha gozado del nexo especial que ligaba la historia de Roma a la historia de Italia¹⁴. Nexo que ha sido alimentado de diferente manera en sentido nacionalista, entre la Unidad de Italia y primera mitad del siglo XX.

No por casualidad, en otras naciones, pienso en Francia o Alemania, la mayor debilidad de este vínculo (o incluso del contraste del romanismo con algunos valores nacionalistas) ha determinado una más rápida preterición. Hoy también entre nosotros este nexo aparece debilitado, ya que la historia nacional cede el paso a la dimensión supranacional y porque el relativismo cultural tiende a colocar la historia romana (y griega) en el mismo plano que otras historias del pasado¹⁵.

¹⁴ F. Serafini, *Elementi di diritto romano*, I, Pavia 1860, 5 «Per noi Italiani esiste uno speciale motivo che dovrebbe invogliarci allo Studio del Diritto di quel Popolo cui noi apparteniamo, ed è che lo possiamo chiamare diritto nostro, diritto nazionale, diritto italiano; sì, esso è diritto italiano tanto nella sua origine, quanto nel suo ulteriore sviluppo e perfezionamento, che nella sua attualità».

¹⁵ Está claro que toda propuesta, como la presente, de asumir (o mantener) el derecho romano como objeto de transmisión cultural, parte de la

Así, mientras la historia del derecho italiano consigue transformarse en historia «europea» del derecho (no historia del «derecho europeo»)¹⁶, el pasado romano encuentra dificultad en mantener su específica atracción. No es casualidad que del rico legado romano se intente destacar y valorar el multiculturalismo del imperio, tal y como propone el afortunado libro de Rémy Brague, según el cual el rasgo cultural esencial de Europa sería, precisamente, la capacidad, heredada de la civilización romana, de asimilar las aportaciones positivas de culturas precedentes y distintas entre sí¹⁷.

Por otra parte, precisamente el hecho de que la historia del derecho moderno se haya concentrado en la codificación, esto es, en un momento que algunos interpretan como de fractura respecto del *ius commune*, ha oscurecido el vínculo entre el derecho romano y el presente. Es éste un argumento sobre el que se ha escrito mucho, por lo que no procede en este momento retomararlo para abordarlo necesariamente con brevedad. Ciertamente los bajorrelieves de Simart, que en el Hospital de Los Inválidos circundan la tumba de Napoleón e ilustran sus hazañas, deberían servir de advertencia a los turistas menos distraídos, especialmente a los juristas¹⁸.

Naturalmente, el remedio para esa relajación del nexo entre historia nacional e historia romana no es intentar reavivar la idea de Roma antigua. Es necesario, sin embargo, aprovechar la fuerza contenida en el hecho, ya resaltado, de que las disciplinas históricas son el depósito de la identidad del grupo social de los juristas —y

idea de que éste (así como otros productos culturales del mundo clásico) posee determinados valores que lo hacen más formativo, en términos de humanidad y de profesionalidad, que el estudio de otras experiencias del pasado.

¹⁶ Vid. A. Padoa Schioppa, *Verso una storia del diritto europeo*, en *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna, 2003, 567-596.

¹⁷ Vid. en el apéndice a este trabajo, la Selección bibliográfica.

¹⁸ Como es sabido, el bajorrelieve dedicado al código napoleónico reproduce al emperador sentado en el trono, quien, con la mano derecha señala al «*droit romain*» portado por un anciano, mientras la mano izquierda la extiende sobre el nuevo código; se trata de un gesto que subraya, sin duda, la modernidad de la nueva legislación, pero que al mismo tiempo reconoce la continuidad con el derecho romano y la intangible actualidad de éste. Asimismo resalta, por contraste, la suerte reservada al «*droit coutumier*», que es destruido, y a los libros de la doctrina, esparcidos por el suelo sin ningún orden.

como tales mantienen un sólido arraigo en las Facultades jurídicas —para intentar llenarlas de nuevas funciones.

Para hacerlo debemos reconocer que nuestros principales interlocutores son los estudiantes, a los cuales debemos transmitir un *habitus*. Muchos malentendidos nacen del hecho de no aceptar esta condición, como si se tratase de una dignidad inferior, sin percibir, sin embargo, su profundo valor y sin elaborar, en consecuencia, estrategias congruentes.

Oportunamente la palabra formación aparece en el título del seminario. La nuestra es una función formativa.

6. ¿Cómo desarrollarla? El punto de partida es ineludible. En cuanto que profesores de derecho romano, nosotros no podemos ocuparnos más que de derecho romano. No nos está permitido reaccionar ante la crisis modificando nuestro objeto de estudio¹⁹. Es posible que se trate de un objeto difícil de proponer como relevante, ahora bien, quien esté en la firme convicción de que éste ha quedado obsoleto, no tendrá otra opción más que la de abandonarlo.

Consideremos, pues, el objeto de nuestro estudio. Para establecer qué sea el derecho romano, el factor decisivo es la documentación, son los textos, a través de los cuales accedemos a esta experiencia del pasado.

Desde este punto de vista, el derecho romano, para quien quiera comprenderlo históricamente, está esencialmente representado por los textos recogidos en el *Corpus Iuris* y, principalmente, por los escritos de los juristas recogidos en el Digesto. Esto nada tiene que ver con el hecho de hacer semblanzas biográficas o practicar otro tipo de enfoques externos (y ni siquiera con la búsqueda exasperada de presuntas controversias entre juristas que hoy parece tomar el papel del interpolacionismo)²⁰.

¹⁹ El riesgo que corre quien practica este tipo de operaciones es el del cuervo blanco en la *fabula* de Ovidio *Metam.* 2, 531 ss., que era despreciado por los demás cuervos, porque era distinto de ellos, siendo tratado del mismo modo por el resto de los pájaros que lo percibían como distinto.

²⁰ Quien trata con excesiva desenvoltura (y sin respeto) los textos de los juristas antiguos debería recordar la advertencia de Quint. 10.1.26: *Modesto tamen et circumspetto iudicio de tantis viris pronuntiandum est, ne, quod plerisque accidit, damnent quae non intellegunt*.

La importancia de los textos contenidos en el Digesto depende del hecho de que el derecho romano es un derecho jurisprudencial, es decir, que el deber de individuar el *ius* fue reservado prevalentemente a los jurisconsultos. Esto es lo que atribuye a sus obras un valor inestimable en sentido técnico, en tanto que en ellas se compenetrán los distintos niveles de la experiencia jurídica, me atrevería a decir que de todos los niveles, desde el normativo hasta el aplicativo, pasando por la elaboración intelectual²¹.

Los juristas no se limitaron a formular reglas y principios, sino que caracterizaron al *ius* en relación con los hechos sociales que ellos mismos habían reducido a supuesto de hecho. En consecuencia, nosotros actualmente, a través de las obras de los *prudentes*, accedemos directamente a la experiencia romana, sin tener que realizar operaciones de distorsión, tales como aquellas que implicaron hasta el Medioevo y todavía implicarían, los intentos de hacer extensibles las soluciones de los juristas a hechos sociales distintos de aquellos que motivaron aquellas soluciones.

Este modo de actuar decae en el curso del siglo III d.C., de modo que quien quiera conocer el «derecho vigente» en la época tardo romana debe reconstruir a posteriori un sistema a partir de materiales heterogéneos que ignoramos cómo habrían sido interpretados por los contemporáneos. Esta es la razón por la cual el estudio del derecho tardo imperial, aun legítimo desde un punto de vista historiográfico, tiene un valor objetivamente distinto en lo que a la formación del jurista se refiere.

7. Si esta es la naturaleza del derecho jurisprudencial, tal y como se refleja en los documentos, a esto debe atenerse nuestra docencia, según el criterio retórico del kairón, de la adecuación o proporción, por tanto, no se trata sólo de exponer a los estudiantes los resultados, las instituciones y las reglas, sino de hacerles partícipes, en la medida de lo posible, de la elaboración que ha conducido a tales resultados.

Ha de quedar claro que no tengo en mente un enfoque casuístico aleatorio o *quasi* aleatorio, sino un equilibrado programa institucional que, al aportar determinadas nociones básicas, implique al

²¹ Reenvío a D. Mantovani, «La letteratura giurisprudenziale», en E. Gabba, *Storia e letteratura antica*, Bologna, 2001, pp. 107-116.

discente en la reflexión que ha llevado, por ejemplo, a enuclear el régimen del error en el contrato de compraventa, la conservación de la posesión sobre los animales salvajes, la configuración jurídica del *peculium castrese*, entre otros.

En mi opinión, el fin del derecho romano no es otro que el de demostrar de modo persuasivo, a los ojos del estudiante, que el derecho es un hecho intelectual; convirtiéndolo en testigo de los hechos y del trabajo de los juristas antiguos, acerca de lo cual él debe meditar.

Yo propongo, e intento poner en práctica, una docencia de Instituciones en la cual, partiendo de la configuración de los poderes y de los *status* en la época arcaica, con la aportación de los negocios y de las *actiones*, se muestre desde dentro, cómo han sido elaboradas las principales instituciones que forman el derecho clásico. Me centro en el derecho clásico precisamente porque en este momento está documentada la elaboración global del ordenamiento, en el sentido antes descrito de reducción de los hechos a supuesto de hecho y de determinación de la relativa disciplina jurídica.

Con el tiempo me he ido convenciendo de que la historicidad del derecho —por lo menos del derecho romano— consiste precisamente en esto, en la posibilidad de recorrer el razonamiento que ha llevado a determinadas soluciones.

Esta consideración exige una matización. En Alemania, y en parte entre nosotros, se practica —y frecuentemente a alto nivel científico— una investigación que revisa instituciones y modelos partiendo de la base romanística hasta nuestros días, por tanto, también en este caso, con el intento de mostrar una elaboración.

La diferencia fundamental respecto del estudio basado en el Digesto que yo propongo, es que Rogerio y Piacentino y Domat y Windscheid no son personajes de un único escenario histórico, como Juliano o Papiniano. Con este tipo de estudio se corre, pues, el riesgo de elaborar a posteriori un diálogo que no ha tenido lugar nunca, y de componer una historia sólo a nivel de los doctos, sin la verificación de la efectiva difusión e influencia de sus ideas, en la práctica y en las jurisdicciones que, como bien saben los historiadores del derecho moderno, es dimensión constitutiva de la historia.

Retornemos, pues, a la enseñanza «genética» llevada a cabo a partir de los textos romanos. Esto implica, evidentemente, una renuncia a buena parte del planteamiento o base dogmática, esto es,

a las categorías pandectísticas. No se trata, obviamente, de una renuncia al tecnicismo del derecho; es, más bien, la búsqueda del tecnicismo romano, respecto del cual prevalece en la enseñanza actual, la descripción normativa basada en las Instituciones. Me limito a recordar que el propio Savigny, mientras ofrecía una inigualable exposición de la parte general del «derecho romano (todavía) actual», afirmaba que el *System* mismo era sólo un medio, un instrumento, siendo el fin, precisamente, la lectura y la comprensión de los juristas romanos²². Al mismo tiempo y coherentemente, para Savigny, reducir la enseñanza del derecho romano exclusivamente a las Instituciones significaba transmitir un conocimiento superficial y por ello, pronto desaparecido²³.

²² *System des heutigen Römischen Rechts*, I, Berlin 1840, p. XXV: «Indem wir uns nun mit Ernst und Unbefangenheit in ihr (scil.: de los juristas romanos), von dem unsrigen so verschiedenes, Verfahren hinein denken, können auch wir uns dasselbe aneignen, und so für uns selbst in die rechte Bahn einlenken»; *ibid.*, p. XXVII: «Das vorliegende Werk ist ganz besonders dazu bestimmt, die hier dargelegten Zwecke ernstlicher Beschäftigung mit dem Römischen Recht zu befördern: vorzüglich also die Schwierigkeiten zu vermindern, die den Juristen von praktischem Beruf von einem eigenen, selbstständigen Quellenstudium abzuhalten pflegen». El éxito de la parte general ha obtenido el efecto contrario, tal y como reprocha M. Villey, *Philosophie du droit. I, Définitions et fins du droit*, Paris 1975: «En affectant d'expliciter les principes romains, l'idéalisme a substitué au langage romain, à la science juridique romaine, une autre science, un autre langage présentés comme seuls rationnels, une fois pour toutes imposés par la raison pure. D'où vient que nos romanistes, élevés au sein de cette philosophie, s'y laissent prendre. Ils vous exposent les *solutions* du droit romain en les *transposant* dans ce nouveau système de pensée, dans les catégories modernes de propriété, de contrat, de droit, de loi, de justice etc.; c'est-à-dire qu'ils manquent l'ABC de la science juridique romaine, ce qui serait le plus précieux pour nous».

²³ F.K. Savigny, *Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*, Heidelberg 1814, en Thibaut und Savigny, *Ihre programmatischen Schriften*, Mit einer Einführung von H. Hattenhauer, München 1973, (= traducción italiana de F. De Marini, en Savigny, *Antologia di scritti giuridici*, Bologna 1980, p. 65 s.): «Un'opinione completamente opposta e molto diffusa sostiene che il diritto romano dovrebbe e potrebbe essere preso molto più alla leggera ... A questi scopi, si ritiene, sarebbe superfluo il dettaglio difficile e ci si potrebbe accontentare di quel che vien chiamato lo «spirito» del diritto romano. Ora questo spirito consiste in ciò che

Habiendo perseverado durante dos siglos en la progresiva reducción de la enseñanza a las Instituciones, vemos ahora realizarse la profetizada marginación del derecho romano del centro de la formación esencial del jurista. Es tiempo de aceptar el diagnóstico implacable de Savigny, con más motivo ahora que también el derecho privado vigente se contempla en los programas de la facultad de derecho en un formato institucional semejante, lo que genera una duplicidad de las enseñanzas en modo alguno justificable. Pero, soy consciente de ello, este es un punto acerca del cual, ni siquiera el nombre de Savigny y la demostración de esa verificación o realización de su vaticinio, puede modificar *habitus* profundamente afianzados²⁴; baste decir que el paralelismo de los cursos de Instituciones (de derecho romano y privado) se ha convertido, para muchos, en la errada convicción de que es precisamente esa analogía la razón que justifica la permanencia del derecho romano en el currículo de los estudios jurídicos.

La propuesta de enseñar el derecho romano manteniendo, sin embargo, en la medida de lo posible, sus características específicas —en particular siguiendo desde dentro la elaboración que ha conducido a la configuración de las instituciones y los razonamientos que motivan las decisiones de los casos— corresponde,

altrove vien chiamato Istituzioni, e che per un primo orientamento può fornire un ottimo servizio: i concetti e le norme più generali senza verifica critica, senza studio delle applicazioni e soprattutto senza ricerca delle fonti... Ma questo studio è assolutamente inutile, e se non si vuol fare altro, allora è del tutto perduto anche il poco tempo che ciò richiede: l'unica utilità che può avere è la conservazione del nome e della forma esterna della nostra scienza, e con ciò forse può esserne facilitata la rinascita in un tempo futuro e migliore. Ma questa è un'opinione disperata, in particolare, quando suppone che un futuro legislatore ... possa accontentarsi di una conoscenza così lieve e superficiale, la cui definizione più felice è la parola francese *teinture*».

²⁴ Se centra, también, en las instituciones la reciente propuesta de O. Diliberto, *Sulla formazione di un giurista (a proposito di un saggio recente)*, en *Rivista di diritto civile* 51 (2005) 109-115, para quien «non è detto che i risultati della ricerca nel campo del diritto romano debbano necessariamente costituire parte del bagaglio culturale e strettamente tecnico del giurista positivo», si bien «sono ben vive le *istituzioni di diritto romano*» (la cursiva corresponde al texto original).

por otra parte, a una orientación que se viene afirmando en pedagogía, esto es, el constructivismo, corriente que recomienda entre otras directrices la de: poner el énfasis en la construcción del conocimiento y no en su reproducción; evitar excesivas simplificaciones representando la complejidad del mundo real; proponer ambientes extraídos de la práctica, basados en casos, antes que en secuencias de nociones y propiciar prácticas reflexivas²⁵.

Estos postulados parecen el fiel retrato de aquello que se puede hacer con el derecho romano enseñado a los estudiantes del primer año, con un congruente número de créditos y con un manual que sea el fruto de esta experiencia.

Obviamente, se hace necesario renunciar a una exposición exhaustiva de la totalidad del ordenamiento jurídico romano que, por otra parte, como todos sabemos, es el reflejo de la época en la cual el derecho romano era derecho vigente²⁶.

Al hacer esta propuesta tengo presente la advertencia que los estudiantes de Bourges dirigieron a Alciato, desilusionados por el hecho del regreso a la docencia conforme al mos italicus: *Legimus*

²⁵ Obviamente, la propuesta de adoptar la experiencia (jurisprudencial) romana como base para la formación implica, una vez más, un juicio positivo acerca de sus contenidos. No se trata de predicar, incurriendo en anacronía, la validez universal de *ratio scripta*, pero no se puede olvidar el juicio de quien observó «que les jurisconsultes anciens ont fait preuve, en rendant leurs opinions, d'un tel génie et d'une telle profondeur, que pour donner à leurs consultations la forme de démonstrations très certaines et presque mathématiques, il faut plutôt du travail pour les mettre en ordre que de l'ingéniosité pour les compléter» (trad. de G.W.Leibniz, *Doctrina conditionum*, Texte intégral, présenté, traduit et annoté par P. Boucher, s.l., 1998, p. 34). No se trata de una alabanza meramente formal; P. Boucher, en su prefacio, señala perspicazmente, que el método de Leibniz al delinear la teoría de las condiciones no persigue buscar una construcción inédita de «derecho natural», sino —en el sentido indicado en el breve pasaje citado— sistematizar los elementos de este derecho natural ya contenidos en el *Corpus Iuris*.

²⁶ Por otra parte, para liberarse del ansia de abarcar la totalidad del ordenamiento romano, basta considerar que, precisamente porque la dogmática pandectística se centró en el derecho justiniano y más concretamente sobre aquella parte que podía considerarse entonces como «actual», la exposición de los tratados pandectistas fue, también, selectiva y parcial respecto de la experiencia romana.

*apud Platonem, eos qui poetas interpretantur proximos calori poetarum accedere; cur tu, qui vetres jurisconsultos nobis exponis, quam simillimus illis esse non affectas? Quid absurdius quam eum qui optima quaeque in manibus habeas, non ea imitandum proponere?*²⁷.

8. Este modo de enseñar resulta ser, también, el más recomendable porque es el que mejor se corresponde con el modo en que se realiza la investigación, ya que no puede existir separación entre aquello que se estudia y aquello que se enseña. Es obvio que se debe calibrar el modo de exposición y el grado de complejidad, pero es evidente que un docente puede exponer a sus estudiantes sólo aquellos conocimientos que mantiene vivos gracias a la investigación. Lo que, trasladando el discurso al ámbito de «la selección», implica que los romanistas deben poseer la formación filológica indispensable para acceder con seguridad a los textos romanos así como a los griegos. La filología es el antídoto para los discursos apriorísticos.

Esta práctica —además de en experiencias destinadas a especialistas, como es el caso de la que desde el año 2003 se lleva a cabo en el CEDANT (Centro di Studi e Ricerche sui Diritti Antichi dell'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia)— debería fomentarse, también, en el doctorado. A este fin se puede, eventualmente, aprovechar la posibilidad de colaborar (sin perder de vista los distintos perfiles disciplinares) en el seno de los cursos de doctorado, con doctorados humanísticos, para aportar aquellas enseñanzas de las que se carece en la formación de los doctorandos romanistas licenciados en Derecho, y que son instrumentos necesarios para quien quiera dedicarse a la investigación.

El impulso de los doctorados parece ser el verdadero remedio a los problemas de selección. El problema, de hecho, no es, o al menos no exclusivamente, que en los concursos se consoliden candidatos no cualificados, sino que no existan candidatos mejores. El remedio consistiría, precisamente, en que, contrastando las prácticas localistas de las Universidades (y completando las carencias en la enseñanza secundaria y en los cursos de licenciatura), se reduzca el número y se eleve el contenido formativo de los doctorados, haciendo una importante criba a través de la cual pasen los futuros estudiosos.

²⁷ Alciato, lett. 168 (ed. G.L. Barni, *Le lettere di Andrea Alciato giuriconsulto*, Firenze 1953, 251).

9. Ahora bien, el doctorado es para pocos. La incidencia sobre los juristas en formación se lleva a cabo, sin embargo, en un segundo nivel, aquel de la licenciatura, a la cual conviene trasladar este discurso. No pretendo, obviamente, que a través de la educación controversial aquí propuesta, esto es, a través de una enseñanza del derecho romano que hace revivir técnicamente la elaboración de los contenidos, se oriente de modo decisivo la cultura jurídica. Sería suficiente con que el curso de derecho romano permaneciese como un modelo latente, algo semejante a la «innutrition» de la que habla Montaigne (*Essais* II, XVII), en la consciencia del valor intrínseco de esta experiencia²⁸.

Junto a este valor, que es en mi opinión el más destacable y fundamental, existe otra razón que aconseja la presencia del derecho romano en la formación del jurista y, al mismo tiempo, sugiere una adecuación de su docencia: el *Corpus Iuris* es un elemento constitutivo del patrimonio lingüístico, expresivo y argumentativo de la cultura europea.

Se trata de un hecho reconocido que se hace visible en un cuadro de Guercino, recientemente expuesto al público italiano. Es el retrato de un jurista de principios del siglo XVII, quizá un práctico del derecho canónico identificado como Francesco Righetti di Cento. El jurista se hizo retratar al lado de su biblioteca, donde junto a la jurisprudencia rotal y a la *Practica criminalis* de Giulio Claro, resalta, en posición de honor, el *Codex Iustinianus* junto a las *Decretales*²⁹. Es el ejemplo visual de la presencia constante del *Corpus Iuris* en el canon textual de Occidente.

Se abren, así, muchas vías para poner de manifiesto la relevancia de este patrimonio cultural. Es, incluso, una responsabilidad de los cultivadores del derecho romano el esforzarse en hacerlo, pues esta relevancia no puede emerger sino a través de especialistas que desarrollen la indispensable mediación cultural.

²⁸ Por derecho clásico —subrayando la definición de «clásico» de August Boeckh— entendemos aquel derecho que cuanto más lo frecuentas, más te gusta; no siendo clásico aquel que, si bien también en un primer momento te interesa, tras una más atenta consideración, se envilece.

²⁹ Vid. la ficha de la obra redactada por D. Mahon, en *Il Ritratto interiore da Lotto a Pirandello*, a cargo de V. Sgarbi, Milano 2005, p. 193 nr. 15, también para la identificación del sujeto como Francesco Righetti (1595-1673); *ibid.*, p. 48-9 reproducción fotográfica.

Me limito a algunos ejemplos que, ciertamente, no agotan todas las posibilidades pero que corresponden a sectores que me parecen especialmente prometedores o que reflejan experiencias personales.

Pensemos en los derechos humanos, ya que son una parte determinante del *acquis* comunitario. ¿Qué contribución puede aportar al respecto el romanista? Ciertamente se puede buscar precedentes de los derechos humanos en la experiencia antigua, pero cualquiera nos podría imputar el intento de edulcorar la historia. No me parece, de hecho, que se recuerde con gusto (al menos por parte de los romanistas, se entiende) que el denostado *Code Noir* elaborado por Colbert para Luis XIV para regular la esclavitud en las Antillas, Guayana y Luisiana sea una fiel transcripción del derecho romano de la esclavitud³⁰.

Entiendo que un modo más acorde con las fuentes (según el criterio del kairón), para hacer sentir la relevancia del derecho romano en la elaboración de los derechos fundamentales, es el de reconducir los textos clásicos del iusnaturalismo y del constitucionalismo —desde la Segunda Escolástica española a Grocio, desde los ingleses a los racionalistas de la escuela de Pufendorf— dentro de la tradición de la cual tales textos son el resultado, cuando son esgrimidos, sin embargo, como cesuras. Para hacerlo serían necesarios, no obstante, comentarios adecuados. Que yo sepa, ni siquiera hay una versión reciente en italiano de los *De iure belli ac pacis libri tres* de Grocio³¹.

³⁰ Vid. el texto en *Codes noirs de l'esclavage aux abolitions*, intr. Chr. Taubira, en A. Castaldo, Paris 2006, 37 ss.

³¹ La importancia de la divulgación de las obras de Grocio es ampliamente reconocida por los editores extranjeros, si bien lo es menos por los italianos. A parte de la edición a cargo de Richard Tuck (Indianapolis, 2005), es digna de tener en consideración como modelo la accesible traducción francesa *Le droit de la guerre et de la paix*, de P. Pradier-Fodere, editada por D. Alland y S. Goyard-Fabre, Paris 1999. La obra está dentro del proyecto de divulgación *Thesaurus de Philosophie du Droit* promovido por el Institut Michel Villey, al que se debe también la publicación de la *Doctrina conditionum* de Leibniz (vid. *supra*, nt. 25). En italiano se dispone sólo de una selección (*I fondamenti del diritto. Antologia*, a cargo de Paola Negro, Napoli 1997) y de la reedición anastática de la traducción de 1777 *Il diritto della guerra e della pace di Ugone Grozio. Colle note dello stesso Autore, e di Giovanni Barbeyrac. Tradotto nell'idioma italiano dall'Avvocato*

La Sociedad italiana de historia del derecho podría promover un programa de traducciones y, sobre todo, de adecuados comentarios —desde la Segunda Escolástica (además de Francisco de Vitoria)³² con Domingo de Soto y Francisco Suárez, hasta Grocio y Pufendorf, a Leibniz y Barbeyrac— confiados a la supervisión de un romanista y de un historiador del derecho moderno. De este modo se lograría mostrar que la urdimbre de estos tratados, además de *La Política* de Aristóteles, del estoicismo y del tomismo, se nutre del derecho privado romano, que ha sido vehículo de conceptos y de disposiciones de naturaleza política (en particular, los modos de adquisición de la propiedad a título originario y la teoría de los pactos). Por otra parte, el historiador del derecho moderno podría poner de manifiesto las conexiones con las necesidades políticas coetáneas y las premisas culturales de estas actualizaciones.

Dispondremos, de este modo, de textos con los que proceder a la enseñanza para mostrar al constitucionalismo moderno la importancia de la herencia histórica. Sin olvidar que, *homo est homini lupus*, es un verso de Plauto y que, por otra parte, Cicerón y Livio transmitieron, también, a las revoluciones americana y francesa («que porta los ropajes de la antigüedad») la memoria indeleble de formas de gobierno no absolutas y no monárquicas³³.

napoletano D. Antonio Porpora, Napoli, Appresso Giuseppe De Dominicis, 1777, 3 Tomi. (reedición anastática con Introducción de Francesca Russo y Prólogo di Salvo Mastellone, Firenze, CET, 2002, 4 vol.).

³² Del que existe la bella traducción del *De iure belli*, a cargo de Carlo Galli, Roma Bari, 2005 así como *Relectio de indis. La questione degli indios*, Bari, 1996.

³³ Por otra parte, la función del derecho romano como suministrador de categorías puesta ya a disposición de los clásicos del constitucionalismo, ha sido redescubierta por los actuales filósofos de la política. Véase, por ejemplo G. Agamben, *Stato di eccezione*, Torino 2003, que halla el arquetipo del *Patriot Act* americano de 2001 en el *iustitium* y en el *senatus consultum ultimum*, y adopta, en función de categoría filosófica, también la noción de *auctoritas*. Otro ejemplo de cómo el pensamiento griego y romano alimenta las teorías políticas actuales es el libro del filósofo de Cambridge Raymond Geuss sobre la (oscilante) distinción entre público y privado que está a la base de la doctrina liberal de los límites de la intervención estatal (R. Geuss, *Beni pubblici, beni privati. Origine e significato di una distinzione*, trad. it., Roma 2005).

La herencia del iusnaturalismo es fecunda —y como tal debe ser cultivada— también en el campo del derecho internacional y del derecho privado (interno y transnacional), como las mismas manifestaciones de la más avanzada *jurisprudence* estadounidense están prestas a reconocer, probablemente con la mayor agudeza que su distancia les permite³⁴.

³⁴ «*Ius gentium* is still both an inspiration for domestic law and a guiding ideal for a uniform body of transnational law. A quick survey of modern scholarship reveals that experts believe that *ius gentium* affords a useful framework for thinking about such topics as data protection, anti-trust, and copyright. And even in strictly domestic cases something like *ius gentium* serves as a basis for solving otherwise intractable problems»: así J. Waldron, *Foreign Law and the Modern Ius Gentium*, en *Harvard Law Review* 119 (2005) 135. Para el derecho internacional (público), basta mencionar a J. Rawls, *The Law of Peoples. With: The Idea of Public Reason Revisited*, Cambridge, Mass., 1999. Para el derecho privado «interno» vale la pena indicar aquí —reservándome la posibilidad de retornar sobre este tema con un comentario más amplio— que la sentencia *Riggs v. Palmer* [en *New York Reports* 115 (1889) 506], hecha célebre por haber sido insertada en la base de la reflexión de R. M. Dworkin, *Taking Rights Seriously*, Cambridge MA., 1977, individúa y aplica «máximas» pertenecientes al «universal law». En palabras del juez Earl: «No one shall be permitted to profit by his own fraud, or to take advantage of his own wrong, or to found any claim upon his own iniquity, or to acquire property by his own crime. These maxims are dictated by public policy, have their foundation in universal law administered in all civilized countries, and have nowhere been superseded by statutes». Como cualquiera puede comprobar se trata de máximas correspondientes a principios del iusnaturalismo romano (así en Paul. 11 *ad ed.* D. 4.3.12: *ne ex dolo suo lucrentur*). La sentencia *Riggs v. Palmer* afronta la cuestión de si ha de considerarse válido el legado supuesto a favor de un sujeto que ha dado muerte al testador para impedirle cambiar las disposiciones que le favorecían. En las motivaciones para negar la validez del legado (en ausencia de una previsión legislativa en tal sentido) el Tribunal de Apelación de New York invocaba, conscientemente, a la tradición civilística: «Under the civil law, evolved from the general principles of natural law and justice by many generations of jurisconsults, philosophers, and statesmen, one cannot take property by inheritance or will from an ancestor or benefactor whom he has murdered». El caso se ha convertido, como consecuencia del libro de Dworkin, en el emblema de los «hard cases» y su solución es a menudo considerada el banco de prueba de la concepción positivista del derecho (en el sentido de que, en el

En definitiva, el conocimiento del derecho romano es una clave para acceder a un archivo de ideas y de formas a las que no debemos en modo alguno renunciar. En el fondo, tener consciencia de la historicidad significa ser conscientes de que aquello que se transmite al futuro no proviene de nosotros mismos y de que, además, se posee sólo de un modo frágil y provisional. Ningún derecho puede reflexionar sobre sí mismo si no dispone de cualquier otra experiencia jurídica que le sirva de parangón, de contraste; para nosotros esa experiencia es el derecho romano.

10. Continuando en esta dirección, existe otro campo en la formación del jurista moderno en el cual el historiador dispone de instrumentos insustituibles. En la Facultad de Pavía, desde hace dos años, imparto un curso de «Lenguaje del derecho» junto con el catedrático de filosofía del derecho (A.G. Conte) y el de derecho civil (A. Belvedere).

La enseñanza del lenguaje jurídico (actual) es, desde distintos puntos de vista, un instrumento cualificado dentro de la oferta for-

supuesto de que se comparta la sentencia del Tribunal de Apelación de New York, se debe reconocer que las decisiones judiciales no se basan exclusivamente en la ley, ya que la ley no sancionaba la invalidez del legado dispuesto a favor del asesino del testador). Podría ser útil introducir en el debate el análisis del modo en el que este caso habría sido resuelto en el derecho romano. Merece la pena traer a colación —en un caso semejante, si bien referido a otra materia— la lapidaria decisión de Pomp. 15 *ad Sabinum* D. 24.3.10.1: *Si vir uxorem suam occiderit, dotis actionem heredibus uxoris dandam esse Proculus ait, et recte: non enim aequum est virum ob facinus suum dotem sperare lucrificare. idemque et e contrario statuendum est* (cfr. Paul. *l.s. port. quae liberis damnatorum conc.* D.48.20.7.4). La *sententia* de Proculo y Pomponio (que anticipa la sentencia del juez Earl) muestra —en su brevedad— la plena integración de las consideraciones axiológicas en el razonamiento jurídico, sin que por ello viniese a menos la naturaleza técnico jurídica y racional. Para concluir sobre la posible función isagógica de la historia en los debates teóricos actuales: si una moderna teoría del derecho tiene la pretensión de aplicarse a una amplia o hasta universal gama de fenómenos jurídicos, entonces, los modos a través de los cuales, en otras experiencias históricas los mismos fenómenos han sido examinados, pueden ser relevantes para confirmar o rechazar la pretensión de una validez general de la teoría.

mativa. Confiere a los estudiantes un mayor dominio del repertorio técnico con el que habrán de expresarse. Allana el camino, en la Europa del multilinguismo, a los problemas de traducción³⁵. Aporta, además, mayor consistencia a la floreciente teoría de la escritura institucional³⁶.

Por otra parte, es una vía para contribuir con el propio bagaje de juristas a la historia de la propia lengua. Así, tal y como ha mostrado Piero Fiorelli, el lenguaje jurídico constituye un importante pilar de la lengua italiana desde el dictamen casinense del año 960 «*Sao ko kelle terre, per kelle fini que ki kontene ...*». Sobre todo, esta materia abre una vía para determinar, de forma adecuada, el peso de la tradición en la cultura jurídica actual, siendo el lenguaje del derecho, innegablemente, un producto de la historia y un elemento de su persistencia.

Otro campo prometedor es la teoría de la argumentación, dada la accesibilidad que los romanistas tienen a la retórica antigua (y, en efecto, se conocen ya experimentos, en particular de L. Lantella, R. Martini y U. Vincenti). En este ámbito la regla debería ser, también, el kairón, la adecuación. Esto es, el derecho no se reduce a mero discurso persuasivo, así como no es sólo mero enunciado normativo. El derecho es, también, conflicto de intereses, que implica el problema de la justicia. Planteada esta premisa —que desaconseja aportar a los discentes un simple repertorio de esquemas y topoi, como a menudo sucede en las escuelas de práctica jurídica, en la comúnmente denominada teoría de la argumentación— el enfoque exacto de las relaciones entre derecho y retórica se puede encontrar, una vez más, en el ámbito de los textos. Se abre aquí un prometedor campo de estudio que, paradójicamente, no obstante las largas e inacabadas disputas sobre la relación entre cultura griega y derecho romano, espera ahora ser cultivado. Disponemos de un rico y casi inexplorado patrimonio de declamaciones, en particular de Séneca padre y Quintiliano, o adscritas a Quintiliano. La *declamatio maior* XIII, por ejemplo, trata de la cuestión de si las abejas, libres de ir y venir a la colmena, pueden ser objeto de *dominium*.

³⁵ Es de todos conocida la anécdota acerca de cómo el traductor comunitario transforma el término inglés «transactions», que significa negocio, en «transazione».

³⁶ Acerca de lo cual, desde el punto de vista jurídico, *vid. I linguaggi delle istituzioni*, a cargo de Aldo Mazzacane, Napoli 2001.

Las fuentes jurídicas dejan constancia de que se trataba de un tema de *ius controversum*, y la *declamatio* muestra cómo esto fue debatido *ab utraque parte* en un proceso, con argumentos que respetan fielmente las *rationes* jurídicas y, al mismo tiempo, las enriquecen con ulteriores argumentos para hacerlas más persuasivas³⁷.

Para las declamaciones mayores de Quintiliano está en curso un proyecto internacional de edición y traducción bajo supervisión italiana. Es una pena que los romanistas hayan sido excluidos. Esta última consideración abre un nuevo capítulo con el que me dirijo hacia la conclusión.

En la búsqueda de nuevos horizontes no debemos dejar a otras disciplinas aquello que hasta hace muy pocas generaciones hemos cultivado con éxito; pienso especialmente en el derecho público romano³⁸, en el cual sobresalen estudiosos que no son juristas, como U. Laffi que prosigue la senda trazada por Plinio Fraccaro y Emilio Gabba. A este respecto es también floreciente la historiografía francesa y alemana. Afortunadamente, el derecho criminal es estudiado, todavía, gracias al impulso de Bernardo Santalucia. Es, sin embargo, alarmante que en las nuevas empresas de ediciones de textos —pienso en los *Roman Statutes* y también en la revisión de las *Leges publicae populi Romani* de Rotondi— no participen, sino de forma minoritaria, historiadores del derecho. Entretanto, las fuentes se han ido incrementando tal y como atestigua el reciente balance de documentos epigráficos elaborado por Jean-Louis Ferrary³⁹ y, convendría subrayarlo, para alimentar una investigación que, sin embargo, vuelve a gravitar, a menudo, sobre los mismos problemas, dejando vírgenes espacios

³⁷ Las opiniones en sentido contrario de Próculo y Celso son referidas por Coll. 12.7.10 Ulpianus 18 *ad edictum* = D. 41.2.3.16 Paulus 54 *ad edictum*; D. 41.1.5.5 Gaius 2 *rerum cottidianarum sive aureorum*; D. 10.2.8.1 Ulpianus 19 *ad edictum*; Varro *De re rustica*, 3.7.1. Una aportación mía acerca de este tema está en curso de publicación en las *Actas* «Cedant» 2005.

³⁸ Constituye un testimonio claro de la vitalidad de estos estudios la colección *Tradizione romanistica e Costituzione*, dirigida por L. Labruna, a cura di M. P. Baccari y C. Cascione, I-II, Napoli 2006.

³⁹ J.-L. Ferrary, *L'épigraphie juridique romaine: historiographie, bilan et perspectives*, en *Le monde romain à travers l'épigraphie: méthodes et pratiques*, a cargo de J. Desmulliez, Chr. Hoët-Van Cauwenberghe, Lille 2005, 35 y ss.

enteros⁴⁰. En particular, pienso en un proyecto de edición y comentario de las constituciones imperiales contenidas en material epigráfico y papirológico⁴¹.

⁴⁰ Un discurso a parte merece, sin embargo, la perspectiva del estudio del derecho romano «in context», esto es, el examen de las fuentes que parte de la idea de que el derecho es el reflejo de la realidad social (la comúnmente denominada «teoría del espejo», cuyo contrapunto está constituido, obviamente, por las teorías que predicán la autonomía del derecho). Esta perspectiva no supone, desde luego, una novedad, ya que —sin querer remontarnos al comentario de Godofredo al Teodosiano— ya la historiografía positivista ha aprovechado la capacidad informativa de las fuentes jurídicas y, más específicamente, el derecho romano ha servido de punto de partida a varios precursores y padres de la sociología (desde Montesquieu —del cual ahora la *Collectio juris*, Oxford 2005, revela el extraordinario trabajo analítico del *Corpus Iuris*— a Maine; desde Ihering a Weber y, sobre todo, a Eugen Erlich, el romanista austriaco padre de la sociología del derecho; acerca de esta genealogía está en proceso de elaboración un trabajo de Janne Polonen). Este enfoque experimenta actualmente un gran auge especialmente en los países (como Estados Unidos y el Reino Unido) menos ligados a la tradición jurídica civilística, por tanto, menos fieles a un estudio del derecho romano enfocado a los intereses del saber jurídico. La práctica de esta legítima perspectiva de estudio debe estar acompañada de las oportunas cautelas, a causa de la dudosa representatividad sociológica de las fuentes jurídicas romanas (las cuales eran redactadas con el objetivo de transmitir la *scientia iuris*) y, correlativamente, no puede prescindir de la comprensión de los contenidos técnico-jurídicos de las fuentes (lo que no parece respetado por ejemplo por E. Meyer, *Legitimacy and Law in the Roman World: Tabulae in Roman Belief and Practice*, Cambridge, 2004). No se puede tampoco ocultar —y es en cierto sentido una cuestión más grave, precisamente porque se refiere a la tendencia de estudio mayoritaria— que, a menudo, también quien practica el estudio del derecho romano con intereses específicamente jurídicos adopta, casi como si se tratase de un presupuesto elemental, la tesis de que el derecho es el espejo de la sociedad (romana) y que por tanto, el derecho romano ha de ser estudiado en el marco de las relaciones políticas, ideológicas y socioeconómicas. La visión sociológica, por tanto, es adoptada también por quien practica el enfoque jurídico, pero en general sin una verdadera profundización teórica en la naturaleza de la relación derecho-sociedad (vid. B.Z. Tamanaha, *A General Jurisprudence of Law and Society*, Oxford 2001, 1 ss.).

⁴¹ Tras la celebración del Seminario he tenido noticia de que en Alemania se promoverá una iniciativa con este objetivo.

Se abre aquí el último filón que me permito señalar. El destino de la cultura en la sociedad de la información está ligado a la accesibilidad. Si un historiador puede acceder *on line* o vía *cd* a ciertos libros en vez de a otros, sus estudios e intereses estarán orientados en consecuencia. Estados Unidos e Inglaterra, además de influir en los modelos jurídicos actuales, acabarán por imponerse, también, retrospectivamente, en el pasado. Hace aproximadamente un año ha sido publicado un archivo *on line* titulado *The Making of Modern Law*, que presenta en texto completo cerca del 22.000 obras estadounidenses y británicas de relevancia jurídica, datadas entre 1800 y 1926. En Italia, donde con BIA e Fiuris habíamos iniciado la correcta senda, debemos retomarla y proceder en esta dirección. El patrimonio histórico de la nación, de la cual la historia jurídica e institucional constituye una parte importante, se tutela también así.

11. La enseñanza del derecho romano, en la doble perspectiva aquí delineada de elaboración jurídica y de llave de acceso a la tradición cultural, es uno de los componentes de la que hoy es considerada «educación liberal», entendida como educación superior; que se propone cultivar a la persona en su integridad para los fines de la ciudadanía y de la vida en general.

Precisamente, la trayectoria hacia una común ciudadanía europea plantea graves problemas, ya que se desenvuelve actualmente en dos sentidos opuestos. Por una parte, existe una tendencia a acentuar los perfiles tradicionales de Europa; razón por la cual existen numerosos libros que tratan de sus raíces. Por otra, se debe hacer frente al multiculturalismo, que se impone tanto por la ampliación de la Unión a Estados que no comparten un pasado común, como por la inmigración proveniente de otros continentes.

En este panorama, objetivamente cambiado, la Facultad de derecho tiene una particular responsabilidad en formar a los ciudadanos y, precisamente en este trance, la historia jurídica está investida de un importante papel. No sólo porque los comentaristas más atentos han reconocido el papel del derecho romano en la génesis de la morfología cultural de Europa⁴², sino, también,

⁴² Me refiero, en concreto, a Philippe Nemo (*vid.* Selección bibliográfica). La afirmación de la pertinencia, como presupuesto histórico, del

porque es la propia naturaleza de la enseñanza romanística la que puede situarlo a la altura de los deberes que ha de cumplir.

La verificación de las argumentaciones, según el proyecto didáctico aquí expuesto, ofrece la posibilidad de comprender los puntos de vista de cada uno en una sociedad pluralista. Además, posibilita el acceso, desde un punto de vista técnico, a la comprensión directa de un patrimonio de experiencias jurídicas, políticas y hasta literarias.

Puede parecer que deposito demasiadas expectativas en nuestra disciplina. Me amparo ahora, para concluir, en un pensamiento de Schelling en las *Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums*⁴³, en las que delinea los deberes del docente universitario: «Cuanto mayor sea el valor que un especialista atribuya a su disciplina, considerándola centro de todo el saber hasta convertirla en una realidad omnicomprensiva, en mayor medida logrará aproximarla a ese ideal. Por el contrario, cuanto menos universal considere este saber, sea consciente o inconscientemente, más próximo estará de vivirlo sólo como un medio... consecuencia ésta que debería repugnar a quien tenga estima de sí mismo. Esta mentalidad limitada viene acompañada, frecuentemente, de la ausencia de un interés real respecto de la ciencia que no sea el de procurarse un medio para alcanzar objetivos reales, externos».

Selección bibliográfica:

Me limito a indicar, acerca de algunos de los puntos más sobresalientes, las lecturas de fecha más reciente que me han resultado especialmente útiles.

Sobre el debate que siguió a la comunicación de la Comisión Europea sobre «Una mayor coherencia en el derecho contractual europeo» (68/2003):

derecho romano para la identidad europea es, sin embargo, un punto muy delicado, sea porque implica distinguir entre derecho romano y otras experiencias jurídicas sucesivas, sea porque la penetración del derecho romano fue generalmente diferenciada en distintas áreas; sobretodo los contornos de la Unión Europea no coinciden con las áreas en las que fue aplicado el derecho romano.

⁴³ Me he servido en esta ocasión de la edición italiana F. W. J. Schelling, *Lezioni sul metodo dello studio accademico*, a cargo de F. Palchetti, Firenze 1989, pp. 21 ss.

- M. Meli, M.R. Maugeri, *L'armonizzazione del diritto privato europeo. Il piano d'azione 2003*, Milano 2004 (especialmente el estudio de Chr. Joerges).
- S. Rodotà, *Il codice civile e il processo costituente europeo*, en *Rivista Critica Del Diritto Privato*, 23 (2005) 21-33.

Acerca de la estructura social de la memoria y la relación entre memoria (social) e identidad (en la dirección trazada por Maurice Halbwachs):

- P. Jedlowski, *Memoria, esperienza e modernità*, Milano 1989.
- E. Zerubavel, *Mappe del tempo. Memoria collettiva e costruzione sociale del passato*, Bologna 2005.
- F. Cassinari, *Tempo e identità. La dinamica di legittimazione nella storia e nel mito*, Milano 2005.

Sobre el derecho como campo social:

- P. Bourdeau, *The Force of Law: Towards a Sociology of the Juridical Field*, en *The Hastings Law Journal*, 38 (1987), 814-854.

Acerca del empleo del derecho romano como instrumento de modernización en oposición al Antiguo Régimen:

- M. Ascheri, *A Turning Point in the Civil-Law Tradition: from jus commune to Code Napoléon*, en *Tulane Law Review*, 1996, 1041 ss.

Para una crítica de la concepción postmoderna (especialmente estadounidense) del derecho como lenguaje y, en consecuencia, de la pretendida irreductibilidad del derecho a discurso racional, siendo sólo el fruto de interpretación variable determinada por el contexto:

- M. Barcellona, *Diritto e nihilismo: a proposito del pensiero giuridico postmoderno*, en *Rivista Critica Del Diritto Privato*, 23 (2005) 207-267.

Sobre la «génesis morfológica» de la cultura europea:

- R. Brague, *Il futuro dell'Occidente. Nel modello romano la salvezza dell'Europa*, Milano 1998.
- Ph. Nemo, *Che cos'è l'Occidente?* Soveria Mannelli, 2005. Es fuente perenne de inspiración Paul Valéry, *Variété* III, IV, V, Paris 2002.

Sobre la fortuna de la antigüedad en las doctrinas y praxis políticas:

- J. Haskins (cur.), *Renaissance Civic Humanism. Reappraisal and Reflections*, Cambridge 2000.

Sobre la cultura clásica en el educación actual:

- E. Romano, *L'antichità dopo la modernità. Costruzione e declino di un paradigma*, in *Storica* 3 (1997) 7-47.
- M. Nussbaum, *Coltivare l'umanità. I classici, il multiculturalismo, l'educazione contemporanea*, Roma, Carocci, 1999.
- Fr. Waquet, *Latino. L'impero di un segno (XVI-XX secolo)*, Milano 2004.
- *Die Kraft der Vergangenheit. La forza del passato. Mito e realtà della cultura classica*, a cargo de G. Ugolini, Hildesheim Zuerich New York, 2005 (especialmente los ensayos de A. Fritsch e T. Poiss).
- M. Bretone, *Diritto e tempo nella tradizione europea*, Roma-Bari 2004.

Dario Mantovani
Universidad de Pavía
[Traducción de Consuelo Carrasco García]

PRESENTE Y FUTURO DEL DERECHO ROMANO*

a Carlo Augusto Cannata

1. Cuando los años veinte del siglo XIX se encuentran aún en sus inicios, Goya, que sobrepasa de largo los setenta años de edad, acaba de hacer una finta a la muerte con ayuda de su amigo el doctor Arrieta, a quien ha pintado curándole. El pintor vive apartado a las afueras de Madrid, detrás del puente de Segovia, al otro lado del Manzanares (en el actual barrio de la Puerta del Ángel), en una casa con huerta adquirida muy poco antes, en febrero de 1819, y en cuyas paredes había pintado, al entrar a vivir en ella, una serie de paisajes de campo¹. Superada la enfermedad, superpone sobre esos paisajes unas misteriosas escenas de fuerza alucinante, conocidas luego por el color predominante y su temática, bajo la denominación global de *Pinturas negras*², que iban a quedar como uno de los conjuntos pictóricos más asombrosos y más influyentes de la historia del arte.

* Texto de la ponencia presentada en la Universidad Carlos III de Madrid, el 23 de junio de 2006, dentro del seminario internacional «El papel de la historia en la formación del jurista europeo», organizado por el Instituto de Estudios clásicos sobre la sociedad y la política «Lucio Anneo Séneca». Al entregar el texto para la publicación he preferido no modificar su factura originaria, por lo que se mantiene el carácter de escrito concebido para la exposición oral.

Lo dedico, con admiración y afecto que se remontan lejos en el tiempo, a Carlo Augusto Cannata.

¹ Sobre este particular, que me había suscitado antiguamente muchas dudas, disipadas cuando hablé con los especialistas sobre la técnica empleada, vid., por todos, C. Garrido, *Algunas consideraciones sobre la técnica de las Pinturas Negras de Goya*, en *Boletín del Museo del Prado* 13 (1984) pp. 6 ss.

² La denominación sólo se generalizaría en el siglo XX. El abuso del negro es habitual en el pintor en esos años: baste recordar sus dos obras para los Escolapios realizadas en 1919 (*Última comunión de san José de Calasanz* y *Oración en el Huerto*), que son también verdaderas «pinturas negras». Que esos años coincidiesen con un prolongado episodio depresi-

Esas catorce escenas —pues las *Pinturas negras* son en total catorce³—, nacidas con furia y a velocidad de vértigo, las pinta Goya no por encargo de nadie, ni tampoco para ser mostradas o exhibidas, sino para él mismo, para vivir con ellas, aunque sería por poco tiempo, pues el inicio de la nueva era absolutista de Fernando VII y razones de índole personal le inducirían a donar aquella casa a su nieto Mariano (septiembre de 1823) y, tras unos meses de semiclandestinidad en Madrid, a exiliarse a Francia (mayo/junio de 1824), donde fallecería, en Burdeos, en las primeras horas del 16 de abril de 1828⁴.

Aunque no se trate de la más conocida de las *Pinturas negras*, quizá la más importante de todas ellas sea una enigmática y modernísima pintura de tamaño medio: tras ser trasladada a lienzo mide, aproximadamente, un metro treinta de alto por ochenta centímetros de ancho. De todo el conjunto es una de las menos oscuras y, con toda probabilidad, la que Goya pintó como final de la serie⁵. Por supuesto que se trata de una obra famosa, aunque quizá no tanto, al menos para el gran público, como puedan serlo muchos de los retratos que ejecutó (pongamos por caso el de Jovellanos, el de Bayeu, el de la condesa de Chinchón o el del grupo familiar de Carlos IV), o como las majas o los fusilamientos, pero, pese a su simplicidad formal, es una obra maestra absoluta. Los títulos por los

vo del pintor es sostenido por el psiquiatra F. Alonso - Fernández, *El enigma Goya. La personalidad de Goya y su pintura tenebrosa*, 2.^a ed. (México-Madrid, 2005) *passim*; este libro, de indudable interés, suscita sin embargo muchas dudas, y algunas de sus afirmaciones deben tomarse con suma cautela.

³ Parece que hubo al menos una más, pero en esa discusión no es posible entrar aquí.

⁴ Según Théophile Gautier, en Burdeos, por aquellos años, «casi todos los letrados estaban en frances y en español», debido al gran número de liberales españoles exiliados que vivían en esa ciudad. La cita de Gautier procede de su libro *Voyage en Espagne: Tra los montes*, y la tomo de la siempre espléndida biografía de A. Vallentin, *Goya*, trad. esp. de M. de Hernani (1957, nueva edición Barcelona, 1994) p. 357. Pese a que la biografía de Antonina Vallentin no haya perdido su carácter apasionante, es preciso advertir sin embargo que, a la luz de investigaciones más recientes, contiene interpretaciones muy discutibles, e, incluso, en ocasiones, insostenibles.

⁵ Vid., por todos, P. E. Muller, *Goya's «Black Paintings»*. *Truth and Reason in Light and Liberty* (Nueva York, 1984), The Hispanic Society, p. 137. Con ella se cerraba el ciclo de la sala superior.

que se la conoce son muy variados⁶, de los que creo preferible el de *Perro semihundido*⁷, también porque resulta adecuado a las dos lecturas básicas de su contenido: o un Perro en lucha contra la corriente que le está venciendo, o, quizá mejor, un perro sumergido y aprehendido en la arena⁸. Si no todos, supongo que muchos recordaréis de memoria la escena: Una cabecita de perro en semiperfil levemente alzada, con mirada entre impotente y suplicante dirigida hacia fuera y hacia dentro, emerge de la zona inferior del cuadro de uniforme color ocre que cubre el cuerpo del can hasta el cuello, mientras que la zona superior —más o menos las cuatro quintas partes del total— viene a quedar ocupada como por manchas de pintura a modo de resplandores de oro viejo de diversas tonalidades. La desnudez de la escena es absoluta⁹, acentuada por la economía de colores. La soledad y la angustia se palpan casi de modo físico. El perro se encuentra al borde del desfallecimiento, entre el terror y la resignación, como perdido en un desierto de arena y polvo, mientras mira a algo desconocido que no aparece en escena *pero que está*: de eso al conmovido espectador no parecen caberle dudas.

No estamos aquí —aunque este comienzo pudiera llevar a suponer lo contrario— para hablar de arte, materia en la que yo, y sospecho que cuantos nos encontramos en esta sala, somos, en el mejor de los casos, poco más que unos diletantes. Si he traído a colación

⁶ Una síntesis sobre los distintos títulos dados a esta obra, en publicación además fácilmente accesible, puede verse en J. J. Luna y M. Moreno de las Heras, *Goya. 250 aniversario* (Madrid, Museo del Prado, 1992) pp. 432 s.

⁷ La bibliografía existente sobre esta pintura es abundante, pero, dada la naturaleza de este escrito, no tendría excesivo sentido referirla aquí, ni siquiera la más relevante. Basta, pues, con dejar indicado que una referencia completa y actualizada de la literatura sobre el cuadro puede encontrarse en el sobre n.º 767 de la documentación del Museo Nacional del Prado (Madrid).

⁸ Recientemente, A. M. Romero Coloma, *Hacia una interpretación de las Pinturas Negras de Goya (homenaje al artista en el 250 aniversario de su nacimiento)*, en *Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar* 69 (1997) p. 219, vuelve a preferir el título indeterminado de «Perro» o «Un perro». En el mismo sentido se manifiesta ahora J. J. Junquera, *Las Pinturas Negras de Goya* (Madrid, 2003) p. 70

⁹ Las radiografías modernas realizadas sobre la obra descartan incluso distintas interpretaciones antiguas que sostenían la existencia originaria en la pintura de otros elementos, como el cuerpo del perro debajo de la

esa pintura, que puede ser interpretada de modos muy diversos¹⁰, es porque me vino a la cabeza (y soy consciente de que no es la primera vez que lo hace) al ser invitado a participar en esta reunión, y más aún cuando conocí el significativo título genérico que se había dado a la sesión de esta mañana: *La fragilidad del jurista y sus necesidades teóricas*, al igual que me había venido cinco años atrás al recibir en la Universidad Complutense otro encargo similar a éste relativo a la situación de las llamadas disciplinas jurídicas básicas, y cuyo texto hube de publicar como pequeño libro (que al menos algunos de los presentes conoceréis)¹¹ cuando falló el proyecto global en el que estaba enmarcado. No pude evitar entonces, como no he podido evitar ahora, ver encarnado al derecho romano y a la romanística actual en ese conmovedor perro goyesco, casi —sólo casi— aniquilado.

2. En varios de sus escritos más recientes, el último de los cuales —o, al menos, el último que yo conozco— es *La idea de Europa*, George Steiner ha insistido en una idea tomada de Alfred Horth Whitehead, que éste formulaba de modo ligeramente distinto, y que puede sintetizarse del siguiente modo: toda la filosofía occidental no es más que una nota a pie de página al milagro de la filosofía

mancha ocre inferior; o un cazador o la cabeza de un caballo bajo la mancha dorada más oscura que cubre el lado derecho: vid. C. Garrido, *Algunas consideraciones*, cit. en nt. 1, pp. 30 s.

¹⁰ Rafael Canogar, que la ha llegado a considerar esta obra como «el primer cuadro simbolista», después de tantas interpretaciones sobre la enigmática pintura, llega a decir: «¿Qué significa la cabeza de ese perro asomado en ese acantilado, o enterrado en la arena? No se sabe, pero ¡qué más da!, quizá no todo arte deba ser explicable. El historiador del arte Gombrich dice que Goya creaba simplemente imágenes, como si fuesen poemas»: vid. R. Canogar, *Perro semihundido*, en AA.VV. *Mirar un cuadro en el Museo del Prado* (Barcelona-Madrid, 1991) p. 232. Como curiosidad se puede mencionar que un tasador de nombre José Peláez, profesor de Bellas Artes, al estimar en 1855 el valor de las *pinturas negras* de cara a la venta de la Quinta del Sordo, refería que «están pintad[a]s en las paredes [de] la sala principal del piso bajo, y encima del piso principal, en número de catorce, y representan varios asuntos que sólo su autor podría calificarlos».

¹¹ J. Paricio, *El derecho romano en la encrucijada* (Madrid, 2001); el texto se reproduce también en ID., *De la justicia y el derecho* (Madrid, 2002) pp. 23 ss.

griega¹². La idea, en su literalidad sólo a primera vista provocadora, podríamos trasladarla¹³ nosotros con igual legitimidad al ámbito del derecho: toda la ciencia jurídica occidental no es más que una nota a pie de página al milagro de la jurisprudencia romana¹⁴. Y del mismo modo que, como dice Steiner, el ideal socrático del examen de la vida, de la búsqueda de certidumbres trascendentes, o las investigaciones aristotélicas de las problemáticas relaciones entre palabra y mundo, marcaron el camino que mucho tiempo después anduvieron Tomás de Aquino, Descartes, Kant o Heidegger, podemos decir que los juristas romanos, que fueron capaces de crear la ciencia del derecho y su método, marcan la senda que luego transitarían los más grandes juristas europeos, no sólo los iusprivatistas.

Insistir en la importancia histórica del derecho romano, o en la utilidad de su conocimiento como base de la educación de juristas merecedores de ese nombre, apenas si debería consentirse en una sede como ésta. Somos todos, o casi todos, unos convencidos. Nadie de los que aquí nos encontramos ignora que del derecho romano y de su estudio a partir de finales del siglo XI y principios del XII en la Universidad de Bolonia parte la ciencia jurídica moderna, extendida primero por toda Europa y, luego, más allá de nuestro continente. Ninguno de nosotros ignora tampoco que las codificaciones civiles modernas, por decirlo al modo de Cannata¹⁵, derogaron los textos romanos vigentes, pero para sustituirlos por nuevas leyes —los códigos civiles— que tomaban de aquellos textos el sistema, y no sólo en sus líneas generales, sino también en los detalles; y aunque sea verdad que era mucho lo que había sido modificado y lo que había sido añadido, eso no significa gran cosa, porque modificar y añadir es lo propio en la historia del derecho. Gráficamente señala Cannata, que entre las XII Tablas, de mediados del siglo V a.C.

¹² Vid. G. Steiner, *La idea de Europa*, con un prólogo de M. Vargas Llosa (Madrid, 2005) pp. 56 s.

¹³ Ya el propio Steiner la traslada al ámbito religioso con el judaísmo y a las, en su opinión, sus dos principales notas a pie de página: el cristianismo y el socialismo utópico, pero no la traslada al jurídico.

¹⁴ La jurisprudencia es «el corazón y el cerebro del derecho romano». Tomo la expresión de M. Bretone, *La storia del diritto romano e la romanistica come storia*, ahora en *Diritto e tempo nella tradizione europea*, nueva edición puesta al día (Roma-Bari, 2004) p. 265

¹⁵ Vid. C. A. Cannata, *Istituzioni di diritto romano* 1 (Torino, 2001) p. 11.

—la primera verdadera codificación de la historia jurídica europea—, y comienzos del siglo II d.C., cuando desarrollan su actividad Celso y Juliano, el derecho, en la misma Roma, cambió mucho más de cuanto lo hizo desde el siglo II hasta hoy. Ninguno de nosotros pone en tela de juicio la utilidad que el conocimiento del derecho romano y la metodología jurisprudencial tienen para la formación de los juristas: entiéndase bien, no simples conocedores o aplicadores de las normas vigentes, sino juristas dignos de ese nombre, y, por tanto, capaces de interpretarlas y aplicarlas con arreglo al sistema de fuentes del ordenamiento jurídico (entre las cuales se cuentan, y muy principalmente, los principios generales), de enjuiciarlas críticamente y de proponer innovaciones en las mismas. Ninguno de nosotros desconoce que estudiar y transmitir el derecho romano como fenómeno técnico, pero *storizzato* (esto lo expresaba particularmente bien Pugliese), tiene un valor actual, porque no se trata de estudiar y transmitir una experiencia antigua y muerta, sino de estudiar y transmitir la génesis misma de nuestra ciencia jurídica en los contextos sociales y culturales en que nació; y es que el derecho romano es historia, sí, pero historia viva, cargada de vigencia, porque en él están la raíz y el fundamento de lo que ha caracterizado y caracteriza nuestra visión de lo que llamamos *derecho*. Todo esto son cosas muy sabidas, pero no sólo para nosotros romanistas, pues también lo son para cualquiera que tenga una formación jurídica con alguna entidad y para cualquiera que conozca la esencia de nuestra cultura. Entonces, si eso es así, ¿cómo se explica la crisis más reciente que padece nuestra disciplina en toda Europa, que en los últimos quince o veinte años se nos presenta casi con caracteres de tragedia, con tintes de desmoronamiento que tanto pueden llevarnos a recordar al perro semihundido de Goya?

3. Ante todo, y aunque puedan tener algún fundamento, parece conveniente aparcas habituales respuestas en cierto modo evasivas, del tipo a que «se viven tiempos nuevos», o que «la galopante globalización haría menos necesario el conocimiento del derecho romano». Hace ahora cinco años ya traté (en el escrito antes aludido) acerca de la realidad de una crisis que todos contemplábamos con ribetes inquietantes, y, por eso mismo, desde hacía algún tiempo, era motivo frecuente de conversación entre los especialistas europeos. Al tener que escribir sobre el particular procuré poner el acento en algo que me parecía relevante para entender las cosas y que formulado con brevedad podría sintetizarse así: aunque esta

nueva crisis del derecho romano tenga un alcance amplio y aqueje (al menos por lo que a nosotros más nos interesa) a todas las naciones europeas occidentales, las causas de la misma no son coincidentes, o, acaso mejor, no son completamente coincidentes, en los distintos países. Quiero decir, que no responde a las mismas razones en Francia, en Alemania, en Holanda, en Austria, en Italia, o en España. Naturalmente no voy a repetir ahora lo que ya dije entonces, bastándome con indicar que, junto a determinadas circunstancias históricas que más o menos pueden considerarse comunes a los distintos países de nuestro entorno y que no son las más favorables para el desarrollo de materias como la nuestra, en la crisis concreta actual del derecho romano es preciso tener muy en cuenta razones exógenas a la disciplina en algunos países (como sucede en Francia o, más recientemente, en Alemania o en Holanda), mientras que en otros adquieren gran significación las endógenas, como ha empezado a suceder incluso en Italia, pero desde mucho antes, y con una evidencia incomparablemente mayor, en España, que es donde me voy a centrar.

En este sentido, ciñéndonos a nuestro país, sería indecoroso que alguien se atreviera a hablar de la existencia de una política cica-tera en el pasado inmediato hacia el derecho romano, cuando basta pensar que en los últimos veinte años el número de profesores numerarios de la disciplina no sé con exactitud si se ha multiplicado por tres, o por cuatro, o por cinco (o incluso por más), fenómeno éste que no debe tener parangón en ningún país de nuestro entorno. Compárese, por ejemplo, con la suerte corrida en el mismo período de tiempo por el derecho romano en Alemania o en Holanda, que viene a ser casi exactamente la opuesta. Sin embargo, pese a esa diferencia nada menor, en todos los países el fenómeno de la «decadencia» se ha producido: en unos, por el motivo principal del arrinconamiento externo padecido por la disciplina, en otros por, entre otras cosas, haberse desperdiciado de manera lastimosa unas circunstancias históricas irrepetibles, que, de haberse aprovechado, nos podían haber colocado en una situación envidiable en el panorama jurídico y con un peso del que carecemos.

Como aquí estamos en una reunión de romanistas e historiadores del derecho, eludiré una referencia a la situación universitaria española más en general, para centrarnos en nuestro ámbito. Y voy a hacerlo valiéndome de unos párrafos que han visto la luz pocos meses atrás procedentes de un escrito de José Manuel Pérez-Pren- des, uno de nuestros máximos historiadores del derecho y que, ade-

más, como muchos de vosotros conocéis, posee una extraordinaria formación romanística. Proviene de un artículo que lleva por título el muy significativo de *Nil inultum remanebit* («Nada quedará sin castigo»), y está escrito precisamente en recuerdo de Ursicino Álvarez Suárez, una figura fundacional del moderno romanismo español. Pero al aludir a Ursicino Álvarez me vais a permitir que haga un pequeñísimo paréntesis, que, a mi entender, no resulta irrelevante.

En más de una ocasión he manifestado en privado, aunque no tengo ningún inconveniente en hacer pública la reflexión, que no ha sido de trascendencia menor para la suerte del derecho romano en España el que después de nuestra Guerra Civil hayamos carecido en nuestro ámbito de una figura verdaderamente central y aglutinante, equivalente, para que se me entienda, a lo que Joaquín Garrigues fue para el derecho mercantil, o a lo que Manuel Alonso Olea fue para el derecho laboral, o a lo que Eduardo García de Enterría ha sido y es para el derecho administrativo. Obsérvese que no digo que hayan faltado figuras de entidad, sino sólo que ha faltado esa figura grande que abraza a todos (o a casi todos, porque la totalidad roza lo imposible) y a la cual casi todos se sienten vinculados. Quien más próximo estuvo a ese papel fue Ursicino Álvarez, pero determinadas circunstancias que algunos conoceréis y a las que, en todo caso, no es preciso aludir aquí, impidieron que cumpliera hasta el fondo ese papel central que quizá hubiera provocado que nuestra historia posterior hubiera sido distinta.

Dicho esto, pasemos ya a los referidos párrafos de Pérez-Prendes, cuya persona y obra no precisan de ninguna presentación, y menos aún en un ámbito como éste. Como la cita es larga, mientras no advierta lo contrario es Pérez-Prendes quien habla a través de mi voz¹⁶.

«Una última reflexión se impone. Esa ineludible necesidad de razones y técnicas, habitual en don Ursicino y su tiempo se ha perdido hoy en muchos libros jurídicos, y yo lo percibo mejor en los histórico-jurídicos, ya sean manuales o monografías. (...) Surge así una supuesta historia del derecho que no es tal. (...)»

¹⁶ J. M. Pérez-Prendes, *Nil inultum remanebit* (en recuerdo de un maestro), en *Seminarios Complutenses de derecho romano* 18 (2005) pp. 208 ss.

«Más grave resulta aún la existencia de redes (no propiamente escuelas científicas) de *vulgarización jurídica*. Si escribó Wieacker, que ‘vulgarismo es una categoría histórico-jurídica’, hoy quizá debería verse en él, más exactamente, uno de tantos heterogéneos basureros que ha ido analizando Gustavo Bueno. A él pertenecen quienes no saben realmente derecho, pero de él viven y dicen enseñarlo. Son los que, como no pueden realizar la que Ihering llamaba áspera tarea de conceptuar, se refugian en la enumeración de datos que no saben interpretar ni por supuesto ordenar. Son gentes abundantes y peligrosas. Conscientes de que su endeblez científica no soportaría, si fuese descubierta por el público en general, el status social y profesoral que disfrutan (en seguida enumeraré las principales vías por las que lo obtuvieron) saben agruparse entre sí, practican el autoelogio recíproco, y con un tejido de astutas trampas se hacen respetables para la sociedad común. Paradójicamente les protege el discreto desprecio de quienes les conocen mejor».

«Varios han sido los factores propiciadores de esa pérdida de aquella calidad que en mi generación enseñaban maestros como Ursicino Álvarez». Y tras aludir a la reforma de 1970 y a la de 1983 (la LRU, «texto que, por ignorar la textura del cuerpo social al que se dirigía, potenció los mismos males que pretendía evitar»), alude muy concretamente a un curioso fenómeno desenvuelto con fuerza en los últimos años: la aparición de un nuevo género de sujeto: «Se trata de la figura de un agente, dedicado, con lógico éxito (de público, de crítica hablará el tiempo) a la promoción abusiva de un sedicente profesorado de acarreo, integrado por meros solicitadores que ni están ligados con el gestor por vínculos reales de escuela científica, ni exhiben otra sabiduría o título que el discutible de adhesión a la persona que asume introducirlas en cualquier intersicio geográfico de la red estatal del profesorado numerario».

«Otros catedráticos, preocupados más bien por formar unos pocos discípulos con la lentitud, calidad y corto número que esa tarea requiere, resultan así desplazados por un abigarrado cúmulo de gentes, insignificantes pero numerosas, cuya imposible valoración positiva no se logra ni aún disimuladas bajo el corriente término de “macroescuela” (...)».

«Tan diversos, nuevos y constantes flagelos generan un porcentaje ya preocupante de pérdida de la conciencia de la raíz esencial del oficio que nos distingue y justifica socialmente nuestra existencia. Se trata de lo que don Ursicino enseñaba, de la tarea de conceptuar y de seguir el hilo histórico de aparición, transformación y

muerte de esos conceptos. Profesores que no pueden cumplir ese básico cimiento de exigencias, no sólo desacreditarán la asignatura que dicen enseñar. El daño irá más allá, engendrarán una pseudo-ciencia que no se disimulará con la obtención por ellos de tramos de investigación, y sólo se encubrirá, gracias a trucos de mercadotecnia, con efímeros reconocimientos sociales durante el tiempo que dure la apariencia de una labor científica inexistente».

«Gravísimo es el efecto de esa enseñanza difundida en los estudiantes de hoy (profesionales de mañana) que no pueden ser conscientes del fraude que sufren, al educárseles en un vulgarismo jurídico análogo al que ahogó el derecho romano. Está así regresando la «franca decadencia» que, con simpático énfasis, describía don Ursicino en sus apasionadas y apasionantes clases de un jurista de alta clase. No es un fenómeno anecdótico ni breve; la historia enseña cómo se requieren siglos para salir de esas fosas, y el primer paso será que una historia jurídica seria, pese a ser imprescindible para formar juristas de calidad, se verá rechazada por quienes fueron obligados a estudiar una caricatura de ella. No se puede exigir que todos entiendan que una mixtificación tan enmascarada ha sustituido una pieza conceptual indispensable».

«Sin embargo, las gentes de mi generación tenemos que asumir que no somos inocentes de esos daños. Cuando evoco la enseñanza de don Ursicino, entiendo que él y los otros maestros de su tiempo nos confiaron un legado que no hemos sabido ni defender, ni adecuar, ni transmitir, al menos con la intensidad y coherencia que se requería. Aprovechados oportunistas los ha habido en cualquier momento de la historia universitaria. Si triunfan y predominan es que lo hemos permitido y aún lo seguimos tolerando quienes estábamos obligados a cerrarles el paso. Así quizá condena a nosotros más que a nadie la sentencia que sirve de título a esta evocación de un maestro» [*Nil inultum remanebit*].

Hasta aquí la cita.

A la luz de unos hechos que Pérez-Prendes describe con tanta fuerza expresiva como plena adherencia a la realidad de las cosas, y teniendo en cuenta que nuestra disciplina sólo puede justificar su pervivencia universitaria por su utilidad, que está en relación directa con la calidad y seriedad científica y docente de quienes la profesan —nosotros no somos civilistas, ni mercantilistas, ni administrativistas, ni laboralistas, ni procesalistas, que no precisan de

justificación—, incluso no sería absurdo plantearse de manera descarnada por qué razón deberíamos sobrevivir a nuestras propias acciones suicidas.

En una de las más inolvidables comunicaciones a las que he tenido oportunidad de asistir en nuestro ámbito, presentada por Mario Bretone en un congreso celebrado en Florencia en el otoño de 1991 y que llevaba por título «La historia del derecho romano y la romanística como historia», el romanista de Bari —en un discurso que no era coincidente con este mío de ahora— concluía diciendo, respecto al porvenir de nuestra disciplina, que: «Por desgracia, nosotros no podemos repetir ya la confiada frase de Ihering: “ninguna cosa verdaderamente grande perece en este mundo”»¹⁷. Dicho de un modo más directo: podemos perecer. La situación de nuestra disciplina en la actualidad, por distintas razones externas y en diferentes perspectivas, es ya de por sí objetivamente precaria: de eso es consciente cualquiera que tenga un ápice de conciencia; pero la ha agravado sobremanera la enloquecida carrera emprendida desde dentro hacia el más absoluto sinsentido. En todo caso, estoy seguro de que las posturas menos válidas de cuantas podemos adoptar son la de lamentarse o la de permanecer expectantes para ver lo que pasa, mientras que una posición mucho más gallarda conduciría a pensar —como ha conducido a algunos, y al decir esto tengo muy presente a Alemania y a Reinhard Zimmermann— sobre qué es lo que debe hacerse, y (con las menguadas fuerzas de que se disponga, pues esas fuerzas serán en todo caso limitadas) actuar en consecuencia.

4. No me resulta posible entrar aquí —y, además, supongo que de hacerlo colisionaría con la exposición posterior de Paco Cuenca— a tratar de las orientaciones más recientes de nuestra disciplina en el ámbito de la investigación (y la didáctica), orientaciones que en algunos casos se han visto forzadas por las circunstancias; para ello remito al escrito ya referido del año 2001 donde trato el asunto con concisión.

En todo caso, sí quisiera advertir ahora frente a un riesgo al que

¹⁷ M. Bretone, *La storia del diritto romano*, cit. en nt. 11, p. 279. La cita de Ihering procede de R. v. Ihering, *Geist des römischen Rechts* I, 6.^a ed. (Leipzig, 1907) p. 13 (trad. esp. *El espíritu del derecho romano*, de Príncipe y Satorres, nueva edición [Granada, 1998] p. 10).

ya aludía en aquel escrito. Yo no tengo nada contra la línea *lato sensu* «cultural», de «grande cultura», de «conoscenza storica del diritto romano» o como calificar se quiera, que tan amplio predicamento tiene sobre todo en Italia; ni mucho menos contra los estudios comparativistas, que tanto auge han experimentado recientemente —y en las actuales circunstancias aún agregaría que por fortuna, e incluso, si se me permite, que por milagro— al amparo sobre todo del nuevo marco político europeo; ni contra la orientación neopandectista, que en cierto sentido podría contemplarse como una variante de la anterior; ni contra otras posiciones metodológicas. Tengo dicho también que estoy persuadido de que vamos hacia una diversidad cada vez mayor, y que eso no tiene por qué ser perjudicial para la disciplina, siempre y cuando se trabaje con seriedad y rigor, y seamos capaces de poner de manifiesto en nuestras publicaciones y en nuestras clases el interés que el estudio y el conocimiento del derecho romano tiene, desde distintas perspectivas, tanto como elemento insustituible del saber jurídico, como para la comprensión y ayuda a la solución de problemas modernos. Y eso no se hace teorizando, sino actuando. Pero a lo que iba. En lo que quería incidir —y lo hago sin ningún complejo— es en que, con independencia de la actividad y de la preferencia de cada cual en el ámbito de la investigación, es imprescindible para el propio mantenimiento de la disciplina que el estudio histórico del derecho romano en cuanto tal permanezca, y no sólo en la docencia, sino también en la investigación, que tan íntimamente va unida a aquélla. Dicho de otra manera: no debemos avergonzarnos del objeto de nuestro estudio, y, por supuesto, no podemos cambiarlo. Desde que las fuentes justinianeas dejaron de tener vigencia positiva y de tratarse de manera integral y sincrónica (y es bien sabido que el último exponente de relieve fue Alemania, justo hasta finales del siglo XIX), en todos los lugares donde nuestra ciencia se ha cultivado y se cultiva con un mínimo de rigor, el derecho romano ha sido tratado históricamente, lo cual supone, en sentido amplio, conocer su origen, su evolución, y su supervivencia ulterior, sin perder de vista las circunstancias internas y externas que propiciaron e influyeron en su desarrollo. Por consiguiente, para su estudio es necesaria la metodología histórica, como igualmente lo es la metodología jurídica, pues sería imposible estudiar los textos jurisprudenciales romanos o los textos (en sentido amplio) legislativos, desconociendo la dogmática jurídica, aunque de esto último no falten lamentables ejemplos recientes.

Cumplir bien nuestra función como investigadores y como docentes no es tarea fácil, y contemplada desde fuera casi parecería misión de titanes, cosa que desde luego no somos. Resulta indispensable el conocimiento profundo de las fuentes romanas —y señalo de pasada, pero con toda la fuerza posible porque muy a menudo se olvida, que nuestro trabajo tiene que partir de las fuentes y debe estar fundado en ellas, pues éstas no son adornos de las publicaciones, como tantas veces parece—; se exige un conocimiento profundo de la jurisprudencia romana, externo e interno; se exige un conocimiento filológico y de crítica textual; es imprescindible conocer la técnica jurídica; se exige un conocimiento de la historia antigua (y no un conocimiento cualquiera, sino en profundidad), al igual que un conocimiento de la literatura antigua y de la tradición de la misma; y todo ello dejando al margen la epigrafía, la papirología, y otras materias. No todos somos iguales, y cada uno de nosotros sabe mejor que nadie —o debería saber— sus propias limitaciones, pero contando con ellas se nos exige una labor rigurosa; al igual que se nos reclama —y esto también se olvida, por desgracia, con excesiva frecuencia— un rigor máximo en la selección de las personas que vengan detrás y que han de tomar nuestro relevo: una actuación responsable nos debería llevar en este ámbito a ser cuidadosos hasta el extremo. En alguna ocasión he llegado a decir que, en las actuales circunstancias, realizar bien ambas tareas es cuestión de estricta supervivencia. Y señalo esto persuadido, como estoy, de que, aunque sea porcentualmente pequeño, en España existe hoy un grupo (desperdigado) de romanistas jóvenes más que digno, y romanistas que no son clónicos, sino muy distintos entre sí, y desarrollan su actividad investigadora en las diversas orientaciones de nuestros estudios hoy predominantes en Europa.

5. No soy de natural pesimista, pero no puedo ocultar, y supongo que se me nota, la sensación de desaliento que me produce (y sé bien que no sólo a mí) una situación tan perversa como la que nos envuelve. Como en la película *La boda*, del cineasta polaco Andrzej Wajda, creo —y así me parece haberlo dicho también en otras ocasiones— que hubo un momento en que pareció que las cosas podían discurrir por una senda transitable, pero por falta de cuidado y por culpa supongo que de todos —aunque de unos más que de otros, ciertamente—, aquello se desperdició, y dejamos que la sombra negra del «todo vale» oscureciera el presente de entonces y el de ahora, y viciara, de modo difícilmente remediable, el futuro de la disciplina.

No pretendo dar a nadie lecciones de ética ni de justicia, entre otros motivos porque la experiencia es terca al mostrar cómo muy a menudo los comportamientos más torpes suelen proceder de quienes se dedican a impartir lecciones de ese género. En todo caso, en unos momentos como los actuales, es evidente que el sentido de responsabilidad debería tornarse en un deber prioritario para todos. Pero si, dicho eso, me cuesta ser optimista es porque, conociendo la realidad de las cosas, no termino de ver cómo pueda realizarse en la práctica una renovación del tipo que sería necesaria, la cual exigiría, ante todo, un examen de conciencia colectivo, una decidida apuesta por un cambio profundo, y una gran generosidad. Digo que no termino de verla, e incluso al formularlo de este modo no hago sino manifestarlo a través de un eufemismo, pero con el máximo deseo de equivocarme.

Entonces, se me dirá, ¿es que no hay esperanza?

Por lo que respecta al largo plazo, aunque uno tenga su propia percepción, no tiene excesivo sentido pronunciarse, al margen de que eso nos introduciría sin remedio en un ámbito tan discutible y desprestigiado como es el de la profecía. Lo que sí debe preocuparnos, en cambio, es el futuro próximo y a medio plazo, y precisamente porque, como decía Pérez-Prendes, la historia enseña que para salir de determinadas fosas puede llegar a requerirse un tiempo demasiado largo. Dicho de otro modo: lo que me preocupa es que pudiera ser aplicable a nosotros la respuesta que Kafka le da a su amigo Gustav Janouch cuando éste, angustiado, le pregunta «si es que no hay esperanza», a lo que Kafka le responde que «sí la hay, y en abundancia, pero no para nosotros»¹⁸. La lucha y, en conse-

¹⁸ Parto de una versión referida por George Steiner e incluida en I. Albaret y O. Mongin, *Herencias y presencia del espíritu europeo. Entrevista con George Steiner*, trad. española publicada en *Revista de Occidente* 278-279 (julio-agosto, 2004) p. 11. Debo advertir, no obstante, que tras una relectura con calma del libro de G. Janouch, *Conversaciones con Kafka*, trad. de R. Sala (Ed. Destino, Barcelona, 1997), no he encontrado una correspondencia exacta (aunque sí varias en cierto modo aproximadas) de la cita que hace Steiner, lo cual me induce a pensar, salvo despiste por mi parte, en una no coincidencia de las distintas traducciones (posible no sólo en las de Kafka, sino también en la de la entrevista con Steiner); menos probable es que responda sin más a una cita de memoria, pues, aunque se trate de una entrevista, la referencia aparece entrecomillada y el texto fue revisado por Steiner. Por tanto, no me atrevo a precisar en qué contexto se produjo la manifestación de Kafka.

cuencia, la esperanza tenemos que mantenerlas: hay que mantener el tipo y los espacios. Pero para que esto no sea sólo retórica, serían necesarias, si no me equivoco, al menos tres condiciones:

Una pertenece al ámbito interno y es categórica: la ya referida de que seamos capaces de encontrar claridad y fortaleza para hacer lo que hay que hacer, estando a la altura que las circunstancias exigen. Complementaria de ella, aunque correspondiente al ámbito externo, sería que la legislación universitaria que de nuevo entra en fase de renovación imposibilite, o al menos dificulte grandemente, que actuaciones como las que hemos tenido ocasión de soportar con horror y vergüenza durante los últimos lustros sigan produciéndose. La tercera —y quizá más importante de todas— es también externa, aunque no sólo externa, y radica en que la asignatura mantenga una posición digna en los planes de estudio de la licenciatura jurídica, pues, como ya he manifestado en alguna otra ocasión, es inútil ocultar que si la marginación del derecho romano se generalizase en la enseñanza universitaria, la disciplina estaría (al menos durante un espacio de tiempo imposible de predecir) en la misma antesala del fin, pues sería ingenuo pensar que pudieran sentirse atraídos a la investigación y la docencia del derecho romano personas de un cierto nivel e inquietud intelectual para ocuparse de una disciplina residual. Que, además, la asignatura se mantenga a modo de pórtico en el primer curso de la licenciatura jurídica, es casi una exigencia de la naturaleza de las cosas y algo que me parece innecesario glosar, y menos aún en una sede como ésta.

6. Concluyo. Sabemos que a los romanos antiguos gustaba que lo que había nacido de un modo concluyera del mismo modo: incluso estamos habituados a explicárselo a nuestros alumnos a propósito, por ejemplo, del nacimiento y extinción de las obligaciones, partiendo del famoso pasaje del comentario de Pomponio a Quinto Mucio recogido en D. 46.3.80; por eso, vamos a concluir de la misma manera que comenzamos retornando por un instante al perro semihundido, que a estas alturas se nos ha hecho casi familiar.

En la pintura moderna nadie ha tenido una fijación mayor con el perro goyesco que Antonio Saura, y quizá no sea casualidad que se trate del pintor aragonés más importante desde Goya. Con su lenguaje pictórico tan personal, lo ha reproducido hasta la saciedad en obras de todo tipo: óleos, dibujos, obra gráfica. Sin embargo, Saura no era sólo pintor, sino también un verdadero intelectual, con una obra escrita muy importante, centrada sobre todo, aunque no sólo,

en cuestiones artísticas. A mi juicio, las páginas más hermosas que se han escrito sobre el perro semihundido salieron de su pluma, y, las mejores entre ellas, las redactó en un momento de su vida equivalente al que se encontraba Goya cuando lo pintó¹⁹. Las páginas de Saura, eruditas y de gran elegancia formal, no son en absoluto optimistas, pero en algún momento no dejan de reconocer que la imagen del perro pudiera ser esperanzadora, pues, aunque esté casi hundido, de ello no se sigue necesariamente que el animal sea incapaz de salir de su situación. Ojalá que, en nuestro caso, y siempre que la suerte y los condicionantes externos no sean del todo esquivos, seamos capaces de sortear la situación actual. Ojalá que, en contra de lo que históricamente sucede en tantas ocasiones, las circunstancias y los intereses no conviertan en imposible lo que es necesario.

Javier Paricio

Universidad Complutense de Madrid

¹⁹ Aunque hace referencia a esa pintura en otros textos, el fundamental es A. Saura, *El perro de Goya*, realizado con ocasión de la exposición de Saura en el Pabellón aragonés de la Exposición Universal de Sevilla de 1992, y que se encuentra reproducido en A. Saura, *Fijeza. Ensayos* (Barcelona, 1999) pp. 271 ss.; versión francesa: A. Saura, *Le chien de Goya* (Paris, 1996). Antonio Saura falleció, tras una prolongada enfermedad, en su casa de Cuenca el 22 de julio de 1998, cuando contaba sesenta y ocho años de edad.

DIARIO DE UNA REDACTORA DEL LIBRO BLANCO DE DERECHO (UNA APROXIMACIÓN A LA HISTORIA RECIENTE DE LOS ESTUDIOS JURÍDICOS EN ESPAÑA)

Ante la amable invitación por parte de la Universidad Carlos III, a través de sus Institutos Lucio Anneo Séneca y Antonio de Nebrija, para participar en el Seminario Internacional «El papel de la historia en la formación del jurista europeo» con una ponencia sobre el Libro Blanco de los estudios de Derecho en mi calidad de redactora, estuve pensando cuál sería el formato más adecuado. Mi objetivo era y es expresar el desarrollo de los trabajos del mismo y la impresión personal que yo iba recibiendo en la secuencia de encuentros con los restantes miembros de la comisión y algunos de los participantes de los grupos de trabajo, así como con los representantes de la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación (ANECA).

He considerado que las crónicas «frías» ya estaban recogidas en las numerosas actas redactadas y ahora también en el texto del Libro Blanco recientemente aprobado que puede consultarse en la web de la Agencia, así que decidí dar a mi comunicación el formato de «diario» porque creo que es el único que me permite mezclar la realidad objetiva con la subjetiva, que no tiene ni debe por qué ser menos importante.

— Junio de 2003

Era una mañana de los primeros días de Junio, luminosa y tranquila, en mi campus sevillano, casi diría una mañana feliz porque acabábamos de cerrar los horarios y el calendario de exámenes del curso siguiente, que no es tarea sencilla cuando se gestionaban tres titulaciones y dos Estudios conjuntos; en el momento en que redacto estas páginas casi se duplica aquella estructura, era una mañana tranquila decía, cuando me llamó el Decano de la Facultad de Derecho de Vigo, Javier de Vicente, para solicitar que nuestra Universi-

dad Pablo de Olavide concurreniera junto con la de Vigo y algunas pocas más en la I Convocatoria de ayudas de la ANECA para el diseño de Planes de estudio y Títulos de Grado de Derecho. Desde el Decanato de Vigo se coordinaba el proceso por haber sido elegidos como anfitriones para el encuentro anual en la siguiente Conferencia de Decanos.

El motivo principal para solicitar nuestra presencia en esa primera convocatoria se basaba en la experiencia piloto de implantación de la metodología docente adecuada al Espacio Europeo de Enseñanza Superior, propiciada por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que estábamos liderando desde hacía un año en el ámbito de nuestra Autonomía. En ese sentido quiero destacar que fuimos pioneros en Andalucía y también en el resto de las Universidades públicas españolas. Todo aquel impulso respondía al Acuerdo de Bolonia que, con el horizonte del año 2010, deberá constituirse como el sistema común universitario de todos los países de la Unión europea. Un sistema común que, como es bien sabido, está pensado para favorecer la movilidad estudiantil y profesional garantizando los contenidos mínimos de los estudios jurídicos.

Naturalmente aceptamos encantados formar parte de esa primera Convocatoria.

Con carácter urgente sale para Vigo nuestro dossier de datos propios recopilados de forma apresurada dado el escasísimo tiempo con que contábamos para ello. Algunos de los datos requeridos eran relativamente sencillos de aportar, como el número de alumnos y de grupos de cada una de las Facultades participantes. Otros resultaban extraordinariamente difíciles si se carecía de estudios previos como eran los relativos a la tasa de inserción profesional en el último quinquenio, y aún algunos más casi imposibles de obtener, en tiempo y forma, como la enumeración de perfiles profesionales y la valoración de competencias en relación con los citados perfiles.

Siempre contra el tiempo, o quizá mejor contra los plazos, que parecían ser nuestros enemigos, pudimos poner en común los datos de las nueve Facultades de Derecho implicadas hasta ese momento en el proceso y, con el refrendo de nuestros respectivos Consejos de Gobierno y la solicitud firmada por nuestros Rectores llegamos, muy justitos, al 1 de Julio de 2003 que era la fecha tope de presentación de las solicitudes.

— Julio de 2003

Con una carta muy educada, el coordinador del Programa de Convergencia Europea, en aquel momento Gaspar Roselló, nos contestó dos semanas más tarde no exactamente rechazando la solicitud pero transmitiéndonos la necesidad de analizar el proyecto conjuntamente con la Comisión de Evaluación de la ANECA, lo cual era una suerte de rechazo. De cualquier modo era evidente que, por razones que desconozco, aún no había llegado el momento de diseñar los estudios del Grado de Derecho para el futuro cada vez más cercano de la Convergencia Europea. Era una carta cortés en la que se nos sugería consultar aspectos concretos del sistema de evaluación con los técnicos de la Agencia. Y desde luego se nos animaba a seguir concurriendo en las siguientes convocatorias pero sin comprometerse acerca de la cronología idónea para que nuestro proyecto fuera aceptado.

Mientras tanto, se estaban adhiriendo muchas otras Universidades públicas y algunas privadas que no lo habían hecho antes por falta de información y oportunidad.

— Octubre de 2003

De nuevo volvemos a presentar la solicitud en el mes de Octubre del mismo año. Ya estaban presentes en la convocatoria veintidós Universidades, los formularios se habían mejorado en cuanto a la recopilación de datos y, seguramente, todos teníamos mayor convencimiento de la importancia de la empresa que teníamos por delante, aunque eso no restara un ápice al escepticismo reinante en torno al proceso de Convergencia y a esa pregunta que muchos se hacían; si tenemos un Plan de estudios aceptable ¿por qué tenemos que cambiarlo? Y a esa otra pregunta que, los menos, también se formulaban: ¿qué puede pasar si no nos implicamos en el proceso de Bolonia?

— Enero de 2004

Recién incorporados a la vida corriente después del paréntesis navideño nos comunica el Coordinador, Decano de Vigo, en una brevísima nota que nuestro proyecto ha sido aprobado y que en el mínimo espacio de tiempo posible pondría en marcha la planificación de los trabajos.

— Febrero de 2004

Y, ciertamente muy poco después de la aprobación del proyecto soy convocada a la Universidad de Vigo para un primer encuentro, casi una «cita a ciegas», y una primera distribución de tareas. Allí empezó la carrera contrarreloj.

La composición de las personas que asistimos a aquella primera sesión del «Libro Blanco» respondía a razones muy variopintas:

- a) Por un lado estaban los componentes de la Comisión permanente surgida a partir de la última Conferencia de Decanos que, tradicionalmente, son los anfitriones de las dos últimas convocatorias: en esta ocasión eran las dos Universidades públicas de Barcelona (Central y Autónoma) que celebraron la reunión anual en Abril de 2003, la Universidad Hispalense en el 2002 y, aunque la Pablo de Olavide también fue anfitriona en aquella ocasión, nuestra convocatoria fue debida a otras razones.
- b) También estaban presentes las Universidades de Granada y Alcalá de Henares que, intuyo, fueron invitadas por amistad personal y afinidad académica con el Decano de la Facultad que convocaba, todos ellos profesores de Derecho Penal.
- c) La Facultad de Derecho de Orense era natural que estuviera porque comparte campus universitario con la de Vigo, que era la anfitriona de la inminente Conferencia.
- d) La Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, fue invitada a participar porque estábamos inmersos en la mencionada experiencia piloto acerca del sistema metodológico de créditos europeos también llamados ECTS.

Recuerdo que aquella tarde, en el salón de grados donde a través de los cristales, a ras de suelo, se veían caballos salvajes que disfrutaban de un hermoso campo, expusimos el Director General de Convergencia europea de mi Universidad, Jesús Ramos, y yo misma una ponencia acerca de la nueva metodología docente y nuestra experiencia piloto ante un foro compuesto por los miembros de esa inicial comisión, todos los Decanos de las Facultades de Derecho gallegas, varios representantes de la Agencia Gallega para la Calidad, y profesores que quisieron compartir nuestra experiencia.

De aquella primera reunión de trabajo surgieron importantes responsabilidades y la verdad es que con mucha más voluntariedad

que medios se formaron los cuatro grupos de trabajo requeridos por el Proyecto de Diseño del Título de Grado.

El primer grupo tenía como contenido el análisis de la situación de los estudios correspondientes en Europa y le fue encargado a la Universidad Hispalense. La designación estaba motivada por la pertenencia de su entonces Decano a la ELFA, Asociación Europea de Facultades de Derecho, como Vicepresidente. Su cometido consistía en analizar los cambios que se habían producido en los estudios de Derecho de los diferentes países de la Unión Europea como consecuencia de su adaptación a la Convergencia.

El grupo segundo se le encomendó la Universidad Carlos III de Madrid, y aunque no estaba presente en aquel primer encuentro, se le adjudicó la coordinación del estudio sobre los perfiles profesionales del Grado y del Postgrado porque ya había realizado algún estudio de esta naturaleza en años anteriores.

Para el tercero de los grupos, también en ausencia de sus representantes, se propuso a la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona estudiar la inserción profesional de los Licenciados en Derecho en el último quinquenio y su encargo, como en el caso anterior, estaba relacionado con la realización de ciertos estudios en ese sentido, al menos en su entorno universitario.

El grupo cuarto debía ser coordinado por la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, y tenía el encargo de analizar la adaptación de la estructura General del Título, de sus contenidos y metodología al modelo de Convergencia. De nuevo, nos fue hecha la encomienda debido a nuestra experiencia piloto que en aquellos momentos estaba comenzando.

Debo reconocer que el desconocimiento acerca de las formas de proceder era común; ni los coordinadores ni los asistentes a la primera reunión de trabajo teníamos remota idea de la metodología a seguir en un proyecto de semejante envergadura. En ese primer encuentro se nos sugirió que formáramos un equipo de un máximo de cinco Universidades para que nos ayudasen a realizar el trabajo.

¿Y cómo elegirlas? El sistema era libre, aunque en nuestro caso decidimos que las primeras cinco que nos llamasen para participar, una vez difundida la creación de los grupos de trabajo por parte de la Universidad coordinadora, serían las que formarían parte del grupo. Los plazos eran tan cortos que en cuatro meses, según se desprende del acta de esa primera reunión, teníamos que entregar en la ANECA el Libro Blanco del Título de Grado en Derecho.

El calendario previsto, aunque pueda parecer increíble, era el siguiente:

— 20 de Abril: entrega de las respectivas memorias por los coordinadores de grupo, es decir dos meses después del encargo inicial.

— 23 de Abril: reunión de la comisión de coordinación para analizar las cuatro memorias en su conjunto y enviar a las Facultades de Derecho para recabar su opinión sobre el documento final. En este punto concreto estoy viendo las notas que tomé en aquel encuentro y destaca una sobre todas las demás palabras: vértigo.

— Alguna fecha a determinar antes del 15 de Junio para convocar la Conferencia de Decanos de Vigo en la que se aprobase la Estructura del Título de Grado en Derecho por el Pleno de la misma.

Supongo que cualquiera entiende que estábamos encargados de una misión casi imposible, aunque la voluntad y el interés de participar en los destinos y los contenidos de nuestros futuros estudios de Derecho nos hicieron ponernos manos a la obra.

A la pregunta, recurrente en muchas de las reuniones posteriores, de una posible prórroga la respuesta fue que los plazos estaban bastante cerrados por parte de la ANECA.

¿Qué hice cuando me encontré en el Decanato de la Pablo de Olavide a la mañana siguiente tras la acogedora estancia en el campus (allí le llaman el «montus», porque está entre montañas) vigués? En primer lugar arrepentirme de haber asumido tamaña responsabilidad y a continuación ponerme a trabajar en el proyecto. Aunque... los responsables de los cuatro grupos teníamos la misma sensación según supe más tarde.

Todos los coordinadores comenzamos a trabajar de modo artesanal y simultáneo, y es por ello que no tuvimos la posibilidad de atender las sugerencias de la Agencia de Calidad plasmadas en su proyecto de diseño porque en sus recomendaciones se marcaban unas secuencias de realización:

- a) En primer lugar conocer los estudios correspondientes en Europa para decantarnos por la elección de un modelo europeo aplicable a nuestra realidad nacional.
- b) A continuación se deberían valorar los datos de inserción laboral de los titulados de las Universidades españolas durante el último quinquenio previamente obtenidos mediante estudios o encuestas para reflexionar acerca de las salidas profesionales.

- c) Y, una vez conocidos estos datos, debía procederse a enumerar los principales perfiles profesionales de los titulados en los estudios de Derecho, así como llevar a cabo un estudio sobre las competencias profesionales genéricas y específicas en relación con dichos perfiles, una vez obtenida la información recabada mediante encuestas, informes ó cualquier otro medio de los Colegios profesionales, bufetes, empresas, Instituciones públicas y asociaciones.
- d) Con todos los datos anteriores el grupo cuarto debía presentar una propuesta de estructura general del Título de Derecho.

Puesto que no era posible esperar las conclusiones suministradas por los grupos de trabajo anteriores que tenían las mismas dificultades que el mío, convoqué al equipo decanal, a dos profesores de Estadística siempre dispuestos a colaborar en todo, a la Directora de la Unidad Técnica de Calidad y al Director General para la Convergencia Europea de mi Universidad. De aquel encuentro surgió la idea de preparar un cuestionario que sirviera para recabar la opinión del mayor número posible de profesores de Derecho acerca de cuales deberían ser los contenidos del futuro Título de Grado.

La Universidad Pablo de Olavide puso un servidor informático exclusivamente a la disposición de este proyecto, donde se almacenaban tanto los formularios del cuestionario como la base de datos con todas las respuestas aportadas por los docentes; dicho servidor contenía un sistema de seguridad que impedía el acceso al cuestionario a todo aquel que no dispusiera de una clave personal enviada previamente por nuestra Unidad Técnica de Calidad.

— Mayo de 2004

En el tiempo transcurrido desde la anterior página de mi diario se había producido un cambio de equipo decanal en la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de la Universidad de Vigo. El primer encuentro con el nuevo equipo coordinador, encabezado por el recién elegido decano Fernando Lorenzo, tuvo lugar en la sede de la ANECA en la calle Orense de Madrid. Aquella fue la sesión que contó con el más elevado número de asistentes de todas las mantenidas posteriormente como Comisión redactora de la, ya no tan breve, historia del Libro Blanco de Derecho; asistieron ¡cuatro estudiantes! lo que es un récord, y doce profesores. En los encuentros

que vinieron después los estudiantes fueron desertando y también algunos docentes, bien era cierto que se aproximaba la época de exámenes y sobre todo de vacaciones, quedando como punto de referencia el grupo que en realidad constituyó el núcleo duro de la Comisión permanente.

Aquel día nos recibieron representantes de primer nivel de la Aneca como era el coordinador del programa de Convergencia europea, Gaspar Roselló, y la asesora del citado programa, Carmen Ruiz Rivas, a los que consultamos en primer lugar; cuestión obsesiva: la posibilidad de ampliar los plazos de entrega de los trabajos encargados a cada grupo porque no alcanzábamos a poner en marcha todas las fases del proyecto. La respuesta evidenció la necesidad de respetar la fecha del 15 de junio prevista para la entrega del informe final.

En esa primera reunión madrileña cada uno de los coordinadores de grupo presentó avances o preocupaciones o las dos cosas a la vez, según estilos y caracteres.

La Universidad Hispalense, aún no tenía datos y sí una buena dosis de escepticismo compartido por muchos de los presentes respecto al proceso europeo.

En la Universidad Carlos III, más adelantada, habían preparado y difundido una encuesta ajustada al proyecto ANECA entre Colegios profesionales, empresas y oficinas de orientación laboral acerca de los perfiles profesionales y las competencias. El territorio elegido había sido Madrid y otras ciudades cuyas Universidades formaban parte de su grupo de trabajo. Aún no disponían de suficientes datos.

La Universidad Pompeu Fabra, recién elegida su Decana, sólo contaba con el informe por el que se le hizo el encargo que en realidad estaba limitado al ámbito exclusivo de su entorno universitario, algo obsoleto según se explicó en aquel primer encuentro, y por ello se solicita ayuda a todos los que dispusiéramos de algún estudio, por modesto que fuere, al respecto.

En mi caso, Universidad Pablo de Olavide, presenté el modelo de cuestionario que se iba a difundir entre el profesorado. El documento fue objeto de análisis y de un debate que sin duda alguna enriqueció su contenido. Los alumnos presentes pidieron ser también encuestados pero debo reconocer que la imposibilidad material y temporal para construir un cuestionario adecuado a ellos y provisto de una forma de difusión que fuese segura, nos hizo desistir.

Cierto es que de haber sabido que la fuerza de las cosas nos iba a procurar ciertas prórrogas posiblemente habríamos planteado el trabajo de otra manera, pero...

Pocos días después, se puso en marcha el sistema informático con el consiguiente envío masivo de cuestionarios a todos los docentes que en ese momento formaban parte de nuestra base de datos. Pensábamos que el servidor preparado ex profeso para esta aplicación concreta se iba a colapsar de tantísimas respuestas... pero no fue así. En los primeros días teníamos la sensación de no haber informado suficientemente y nos dedicamos a enviar recordatorios semanales aunque los propios informáticos nos advertían de que el exceso podía ser contraproducente. Un mes más tarde entendí que llevaban razón.

— Junio de 2004

A última hora de la tarde se desconectó la aplicación y se dio por finalizado el proceso de recogida de respuestas al cuestionario, sin haber dejado de insistir sobre la importancia de la participación en el mismo y desde luego advirtiendo con tiempo sobre la fecha de finalización.

La programación estaba prevista en dos fases: una primera en que se enviaba el cuestionario a una muestra de catorce Universidades públicas elegidas por su participación en los grupos de trabajo, su distribución geográfica y su dimensión física. Era importante conocer la opinión de un sector de nuestro mapa universitario en donde estuviesen representadas Universidades grandes y pequeñas, antiguas y recientes, del centro del país y de los cuatro puntos cardinales. Tras esta fase inicial pondríamos en marcha una segunda, en la cual el cuestionario sería enviado a todas la Universidades públicas y privadas de España para llevar a cabo la valoración final del sentir del profesorado acerca de ese futuro Título de Grado. Posteriormente intentaríamos casar esos datos con los datos europeos, los datos de inserción y con las respuestas de los profesionales.

Debo adelantar que a ese segundo paso nunca conseguimos llegar y, a duras penas pudimos alcanzar el primero. Casi todo era un inconveniente; que si la protección de datos impedía a los Decanos (no a todos afortunadamente) facilitarnos los listados de correos electrónicos de los profesores —¡y eso que son direcciones públicas! —, que quizá en los últimos tiempos se había hecho un uso abusivo de

las encuestas por la vía electrónica y la gente ya está cansada y no les hace demasiado caso.

Lo cierto es que sólo pudimos tener durante un mes el cuestionario en la red, porque de otro modo no hubiéramos llegado a tiempo para elaborar el análisis de los resultados que debían plasmarse en el documento final. Aunque me consuela saber por un sociólogo amigo que más tiempo no equivale a más respuesta. Todavía me pregunto por la causa de la escasa participación ya que todas las razones que he mencionado son comprensibles, pero lo cierto es que la respuesta ante una cuestión que entiendo de envergadura fue desoladora porque, de 732 cuestionarios enviados, contestaron 120 profesores.

En el apartado de las sugerencias recibimos alguna muy interesante que estimamos merecía la pena incluirlas en el documento final. Y allí están.

— Julio de 2004

En los primeros días del mes en la sede de ANECA en Madrid, se presentan los primeros borradores de los trabajos empezando por el informe acerca de la situación europea en cuyos países, según el citado documento, prevalece el esquema de tres años de grado más dos de postgrado en lugar de 4+1 al que tiende España. Claro está que en esos países el Grado supone un cierto reconocimiento en el mercado laboral, pero sin acceso a las profesiones regladas para las se exigen dos o tres años de formación después del Grado, así como los exámenes previstos para el ejercicio profesional.

El segundo grupo de trabajo, coordinado por la Carlos III, presenta su informe provisional tras exponer sus dificultades temporales y de coyuntura, por ejemplo la falta de respuesta: ¡cuánto sabemos de eso!, de muchos colectivos y la necesidad de correcciones técnicas.

El tercero de los grupos, el que coordinaba la Pompeu Fabra no aporta aún conclusión alguna porque están empezando a elaborar su memoria. Sin embargo se adelanta que según los primeros datos que se están manejando existe una tasa de «mortalidad» muy significativa en los estudiantes de primer curso de su Universidad porque, según una pequeña muestra de encuestados, las asignaturas propedéuticas a los comienzos de sus estudios no satisficieron sus expectativas. Los estudios sobre abandono en España no son abun-

dantes pero existen algunos (los de la Universidad Pablo de Olavide y la Carlos III, entre otros) que aportan muchas otras razones diferentes para dejar la Licenciatura que no tienen mucho que ver con tales disciplinas pero... en ese momento, los profesores presentes «propedéuticos» y/o históricos nos echamos a temblar.

Como coordinadora del grupo cuarto, expuse los resultados parciales de la encuesta realizada; quiero recordar una vez más que no disponía de programadores ni analistas dedicados a mi causa, sino que más bien andaba de prestado, y también una vez más agradezco el trabajo altruista de mis compañeros informáticos y estadísticos y el apoyo moral de muchos otros. Los resultados aparecen en el Anexo correspondiente del Libro Blanco del Título.

A partir de la puesta en común de las aportaciones de los cuatro grupos se comienza, o mejor dicho se continúa el debate acerca del proyecto. Lo primero que nos planteamos era si nuestra misión consistía en presentar un proyecto de directrices aunque desde la ANECA habían sugerido lo contrario. La decisión unánime fue presentar una propuesta más genérica que incluyera número de créditos: 240 siendo la medida del mismo 25 horas, una propuesta de troncalidad —que tras alguna discusión se centró en un 65 por ciento—, un 20 por ciento de otras disciplinas jurídicas no troncales y un 15 por ciento de lo que cada Universidad estimara adecuado, aunque en ese punto quisimos enviar una señal de alarma en cuanto a la trayectoria degenerativa de la libre configuración, que en sus orígenes consistía en cursar materias de otras Titulaciones y al momento presente se había convertido muchas veces en actividades de relleno y en no pocas ocasiones estaban derivando en cuestiones estrafalarias.

También se insistió en la importancia del Practicum y se acordó abordar en la sesión siguiente un reparto de créditos por grandes bloques: D.º privado, D.º público y Ciencias jurídicas básicas.

En la siguiente sesión, que tuvo lugar hacia el día 20, conocimos a la persona que nos había sido designada para hacer el seguimiento y asesoramiento del Proyecto, Manuel Viader, profesor de Metodología de las Ciencias, que comenzó su intervención recordando que el plazo de entrega había finalizado la semana anterior, ¡como si nos hubiéramos olvidado! En su breve encuentro con la Comisión él mismo comprueba que quedan trabajos por finalizar y nos propone el 30 de julio, es decir nueve días más tarde, para la entrega del documento final una vez reunida la Conferencia de

Decanos que tendría lugar el día 28 del mismo mes y cuya principal misión consistía en ratificar el Informe realizado por la Comisión permanente.

Nuestro recién conocido asesor parece comprender las dificultades de los grupos de trabajo y se dispone a escuchar nuestras conclusiones, algunas parciales, y nuestras preocupaciones de futuro que, simplificando mucho, se condensaron en lugar preferente en la aprobación de nuestro trabajo como base para el futuro Título de Grado en Derecho que era nuestra principal misión en la convocatoria en la que estábamos participando, pero también le transmitimos otras preocupaciones como la necesidad de precios públicos también para el Postgrado o las consecuencias universitarias de la Ley de acceso a la Abogacía que, al día de hoy, aún sigue con su curso parlamentario.

En su opinión, hemos presentado un trabajo muy irregular porque en ciertas materias como la inserción laboral los datos están muy verdes y en otros, como la estructura del Título, los datos están demasiado definidos porque habíamos propuesto porcentajes por Áreas de conocimiento. Estaba haciendo referencia a las encuestas del profesorado. En ese punto concreto nos sugiere que propongamos grandes bloques de materias (decisión que ya habíamos tomado en la sesión anterior) indicando las competencias que deben desarrollarse en cada bloque, aunque algunas coincidan, sin entrar en Áreas concretas de conocimiento.

En el seno de la Comisión habíamos pensado en los bloques aunque la verdad es que no habíamos entrado todavía en el concepto de competencias que incluyen conocimientos, habilidades y aptitudes pero entendimos que había que considerarlo.

Cuando se despidió el representante de ANECA haciendo un recordatorio del calendario —que se estaba convirtiendo en una pesadilla— nos dispusimos a abordar una de las grandes cuestiones que afectaban a la estructura del Título: los famosos bloques de materias, ¡y la mente de una romanista volando a Bluhme y su teoría de las masas! La historia casi siempre se repite.

Era evidente que la reducción de contenidos del Grado nos iba afectar a todos aunque por parte de las Áreas pequeñas, propedéuticas o no, la preocupación nos había sido manifestada desde muchos puntos de la geografía nacional.

Con los datos obtenidos por los grupos de trabajo, la Comisión, tras deliberaciones en su seno, que no creo que venga al caso

detallar en este momento, presentó una distribución en cinco grupos:

- Derecho privado, compuesto por Civil, Mercantil, Laboral e Internacional Privado.
- Derecho público I, llamado básico y compuesto por Administrativo, Procesal e Internacional Público.
- Derecho público II, llamado sectorial, con Penal, Financiero y Tributario, Derecho de la Seguridad Social y Derecho Eclesiástico del Estado.
- Ciencias Jurídicas Básicas con Derecho Romano, Historia del Derecho y Filosofía del Derecho.
- Practicum, repartido a partes iguales entre los bloques de Público y Privado.

Una vez superado ese escollo tenemos que entrar en el ámbito de las competencias. En ese momento presentamos un listado de competencias, que en una buena parte habíamos elaborado en las Universidades andaluzas a cuenta de la experiencia piloto que lideraba la Olavide, y se añaden otras que afectaban a las ciencias jurídicas básicas.

La distribución de créditos por materias tuvo momentos «delicados» en el debate de las materias esenciales y... de las que no lo son. Creo que la presencia de algún historiador del Derecho y alguna romanista en la Comisión redactora fue crucial aunque también debo manifestar la solidaridad, espero que por convencimiento, de la mayoría de los miembros de la misma.

Pero nuestro principal problema seguían siendo las competencias específicas. La sorpresa mayor vendría unos meses después cuando nos requirieron competencias específicas por asignaturas. Pero todo eso lo contaré más adelante.

El día 28 tuvo lugar en Vigo la Conferencia de Decanos de Facultades de Derecho de España. Era un día soleado de esos que le quitan la razón a los gallegos que siempre se quejan de la lluvia, y los caballos salvajes seguían acercándose al borde de los cristales del Paraninfo.

Por el orden del proyecto hemos ido presentando las conclusiones de cada uno de los grupos.

La estructura del Grado con cuatro cursos más Postgrado era cuestión asumida por las anteriores Conferencias de Decanos y no

era objeto de discusión a estas alturas, si bien hubo alguna opinión defensora del Grado de tres cursos, pero muy leve.

La cuestión de las competencias era más novedosa para todos pero, la verdad es que se había presentado un estudio muy completo y las posibles carencias se resolvieron aportando alguna addenda a las que habíamos discutido en el seno de la comisión.

Los datos de inserción profesional estaban por terminarse, allí mismo nos entregaron el documento final, y, como era de esperar, la cuestión que más polémica provocó fue la distribución de materias. O por materias.

Aquí debo decir que me resultaron muy sorprendentes algunas intervenciones, no las normales que cuestionan resultados porque no arriman el ascua a su sardina. No, ésas son esperables. Las que me llamaron la atención fue debido a que me provocaron cierta sensación de impotencia. La primera fue la del anterior Decano de Vigo con el que habíamos comenzado el proyecto y con el que habíamos experimentado las primeras «angustias» temporales, cuando expone que todo el planteamiento era precipitado y que había que tratarlo con mucho más detenimiento, ¡Dios mío!, llegando a insinuar que durante el tiempo que fue Coordinador nos había transmitido la posibilidad de prórroga; ni en sus escritos, que se conservan, ni en las respuestas de la ANECA se vislumbraba, ni de cerca, esa posibilidad.

La segunda intervención que me impactó fue la del Decano de Alcalá de Henares que, estando presente en la Comisión inicial y siendo miembro de la misma argumentó que las conclusiones de la Comisión estaban demasiado verdes. Lo cierto es que jamás apareció en las sesiones de trabajo, casi todas celebradas en Madrid, alguna vez envió a un Vicedecano y nunca participó en decisión alguna. Es posible que de haber sido más activa su colaboración hubiéramos presentado conclusiones más maduras.

Pero como decía, la cuestión más polémica era la de la estructura por bloques que estábamos presentando. La deliberación fue larga y en casi todas las intervenciones (existen actas) había algún interés de Área y resumen: que si Derecho Público crecía más que Privado, que se valorase qué bloque, si Público o Privado genera más honorarios para los abogados; que por qué no estaba Economía en la troncalidad (ahora que ya están publicados los proyectos de Grado de Empresa y Economía miren como han quedado las disciplinas jurídicas), etc...

Desde la Comisión redactora entendimos que no había una enmienda a la totalidad, sino que se aprobaban ciertos aspectos como el porcentaje de troncalidad o la estructura de Grado y Postgrado, y se dilataba la distribución por bloques de materias porque había provocado muchas opiniones discrepantes. Según el tenor de las intervenciones, la encuesta era un dato interesante pero el único que se ofrecía y además escaso. Es por ello que propusimos retirar esta última parte y proponer al Plenario que asumiera el documento como «versión provisional» y que, en caso de exigencia de ANECA, se presentara bajo tal condición.

Mientras tanto se discutiría en las Facultades de Derecho españolas pudiendo presentar enmiendas hasta el día 2 de octubre. A mí no me preocupaba porque a raíz de las encuestas ya lo había tratado con las Áreas de conocimiento de la Universidad Pablo de Olavide pero, del resto de las Facultades de Derecho restantes ¿cuántas enmiendas creen que llegaron?... Cuatro si no recuerdo mal y en el sentido de apoyar la propuesta que hicimos. Simultáneamente se creó una Comisión delegada de la Conferencia, en la que estaban representadas todas las Áreas de conocimiento jurídicas, para que elaboraran un documento de directrices.

— Noviembre de 2004

En el Rectorado de la Universidad Politécnica de Barcelona. Cerca de Pedralbes, en un precioso edificio rodeado de jardines y en una sala de juntas con paredes forradas de madera nos encontramos con lo más parecido a un tribunal que recuerdo desde mi examen de Preuniversitario. En otras tesituras eran cinco los miembros.

El nuevo coordinador del Programa ANECA y dos de los asesores del mismo, uno de ellos nos había sido presentado unos meses antes como tutor, ocupaban el frente de una gran mesa alrededor de la cuál nos sentábamos los cinco miembros presentes ese día, quizá el menos concurrido de la historia de la Comisión. Nos explican brevemente la razón de ser de los catorce puntos del Proyecto, que eran secuenciales lo sabíamos de sobra, y el objetivo de estos proyectos era que sirvieran para la reforma de los Planes de estudio pensando de abajo a arriba y no al revés como venía siendo tradicional. Una herramienta para ofrecer a los políticos que serían los que tomaran las decisiones finales.

Desde la Comisión redactora se intenta transmitir a nuestros asesores las dificultades que los grupos de trabajo han sufrido en la captación de datos y en la baja respuesta universitaria y profesional.

Al parecer nos comprenden, pero nos recuerdan, una vez más, que nuestra metodología no ha sido la correcta.

La cuestión más ardua de aquella jornada fue, sin duda, la de las competencias específicas de los estudios de Derecho. Desde el punto de vista de nuestros interlocutores resulta incomprensible nuestra dificultad de asignar competencias específicas a cada una de las disciplinas jurídicas porque, indican, sin ese planteamiento no es posible definir un Plan de estudios. Los cinco redactores presentes seguíamos perplejos porque, dejando a un lado las dos competencias específicas de las disciplinas históricas, las demás son predicables de todas las demás, dejando a salvo, naturalmente, el conocimiento de cada materia concreta. En ese punto les pedimos que nos pusieran algún ejemplo de sus propias asignaturas y debo decir que su respuesta no fue suficientemente esclarecedora, por decirlo de una forma suave, para nosotros.

La sesión finalizó con algunas indicaciones para la admisión de nuestro Informe, con un cierto reconocimiento de imprecisión y solapamiento en la formulación de los «famosos» catorce puntos del Proyecto y... cómo no, con el recuerdo del plazo final de entrega: Enero de 2005.

—Diciembre de 2004

Con ambiente navideño por las calles de Barcelona volvemos a encontrarnos en el mismo lugar de la vez anterior, Rectorado de la Politécnica, ya sólo los miembros de la Comisión para corregir y mejorar el texto final del Libro Blanco. Suprimir, reagrupar, revisar índices, resaltar aspectos velados en el texto, aclarar conceptos, destacar competencias, ordenar y... cerrar la redacción en Sevilla en Enero de 2005.

Epílogo

Conferencias de Decanos de Las Palmas y Elche

La Conferencia de Las Palmas sirvió entre otras cosas para que se debatiera la propuesta de la Comisión delegada, que era bastante parecida a la famosa distribución en bloques, aunque, eso sí, afinando más por Áreas. En la reciente Conferencia de Elche del último Febrero se aprobó la propuesta final de directrices. Espero que las decisiones políticas tengan en cuenta todos estos trabajos.

Para concluir este diario, que es más bien la reflexión cronológica de una romanista que por avatares del destino se vio inmersa en una experiencia magnífica, en lo personal y en lo institucional, de acercamiento a la formación de los juristas de ayer y de los tiempos que están llegando, o quizá que ya están aquí, debo decir que he aprendido mucho, aunque eso intento hacerlo casi todos los días, y que lo he pasado muy bien. Hubo luces y sombras. Un grupo de trabajo compacto y solidario que se dedicó con intensidad a sacar adelante el proyecto. Buenas maneras. Intercambio de ideas, de preocupaciones y también, alguna vez, de risas. No es poco.

Carmen Velasco
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla

BIBLIOGRAFÍA

En 2005, con la puntualidad acostumbrada, vio la luz el número correspondiente de la revista de historia de las universidades italianas (*Annali di Storia delle Università italiane*), el nueve en esa ocasión. Abre el número el trabajo de Andrea Silvestri y Adriano di Maio a propósito de la cultura técnica y su relación con el ámbito universitario en la época contemporánea.

El apartado *Studi* se compone de forma monográfica de un conjunto de trabajos que, bajo la dirección del profesor Roberto Greci, esta vez están consagrados a la Universidad de Parma. Conocemos así, los orígenes “tormentosos” —en palabras del propio Greci— de esa Universidad; la experiencia de los colegios profesionales y de la Universidad en Parma en la etapa de los Farnesio y de los Borbones (S. di Notto Marrella); la enseñanza físico-matemática en la Escuela de San Rocco entre 1600 y 1768 y el uso de materiales didácticos (U. Baldini); el mundo universitario de Parma en el período del *Resorgimento* (A. Mora); las revistas estudiantiles en esa universidad (G. Conti); la suerte del Ateneo de Parma bajo la unidad, entendido este caso como ejemplo de una universidad periférica italiana en el período liberal, entre 1860 y 1890 (R. Bonvini); la enseñanza de la veterinaria en Parma (E. Cabassi); los museos científicos y el jardín botánico de esa ciudad (V. Parisi); el archivo histórico de la Universidad de Parma (F. Collorafi) y, por último, los problemas financieros, la estructura urbanística y el espacio urbano de la Universidad de Parma desde la unidad hasta la década de los sesenta del siglo XX (M. Adorni).

La sección de *fuentes* se nutre con cuatro trabajos. El de M. L. Guimani sobre los premios en la Academia de Bellas Artes de Bolonia en forma de medallas, ceremonias y uniformes; el de D. A. Lines sobre el calendario del siglo XVII para la Universidad de la Sapienza; el de G. Rita sobre la ideología y didáctica en la Sapienza romana en el siglo XVII; y el de S. Serangelli y R. Zambuto sobre las relaciones entre los jesuitas y la Universidad de Macerata.

En el epígrafe destinado al conocimiento de archivos, bibliotecas y museos universitarios se recogen en este número los estudios de A. C. Quintarele sobre el centro de estudios y el archivo de la comunicación también de la Universidad de Parma; el de R. di Pietra, sobre el archivo del seminario arzobispal de Siena; el de M. G. di Renzo Villata sobre la biblioteca del Instituto de Historia del Derecho medieval y moderno de la Universidad de Milán y, para finalizar, el de F. Zucca sobre la constitución del archivo histórico de la Universidad de Pavía.

Completan este número una buena cantidad de reseñas así como el detallado noticiero en el que se da cuenta de los congresos, seminarios, reuniones científicas, actividades y proyectos además de las más reciente tesis leídas sobre esta materia en el ámbito italiano y la mención a las revistas europeas de corte similar.

Carolina Rodríguez López

Elena Brambilla, *Genealogie del sapere. Università, professioni giuridiche e nobiltà togata in Italia (XIII-XVII secolo). Con un saggio sull'arte della memoria*, Edizioni Unicopli, Milano 2005, 384 pp. [= Early Modern. Studi di storia europea protomoderna, núm. 19]

La colección *Early Modern* dirigida por Reinhold C. Mueller y Giorgio Politi propone la consideración del tiempo que transcurre entre la mitad del siglo XIV y la mitad del siglo XVII como un periodo cronológico con características propias, relativizando así una rígida ruptura entre el medioevo y la edad moderna.

El volumen que nos ocupa recoge distintos ensayos de Elena Brambilla, profesora de historia moderna en la Università degli studi di Milano, casi todos ellos inéditos, dedicados a la historia de la universidad considerada ésta desde el vértice, más que desde la base, lo que —en palabras de la autora— constituye una rareza en el usual panorama historiográfico. Los elementos singulares para este análisis son los colegios o corporaciones de doctores en derecho (legistas y canonistas), aunque también los de teólogos, y sus relaciones con las oligarquías ciudadanas. De manera que estos colegios no son analizados sólo en el contexto de la universidad, comparándose con las corporaciones de estudiantes, sino en la trama urbana y política, analizando el papel de estos doctores como consejeros, magistrados, abogados...

Estos doctores eran laicos y eclesiásticos, formados en el derecho civil y canónico, *in utroque iure*. Pero esa formación y la realidad del *ius commune* encierran para la autora un claro conflicto: la tensión que existió entre el Imperio y la Iglesia, entre eclesiásticos y laicos, entre güelfos y gibelinos. Es algo conocido desde luego, que en otros contextos desembocará en el enfrentamiento entre regalistas y ultramontanos. Pero aquí es tomado por Brambilla como clave de lectura, es decir, interpreta la universidad como palestra política entre los sostenedores de una y otra esfera. Desde esta perspectiva analiza algunos colegios italianos: Bolonia, Pavía, Padua, Florencia...

Esta clave hermenéutica es utilizada de nuevo para estudiar la relación que desde el Renacimiento hasta la Contrarreforma existió entre las universidades municipales y los colegios religiosos, sobre todo de los jesuitas; y el papel desempeñado por los doctores eclesiásticos *in utroque iure* hasta su crisis en el contexto de las reformas ilustradas.

El volumen incluye también un texto ya editado dedicado al arte de la memoria. La memoria fue un importante instrumento profesional para entrar en el mundo de las autoridades y *opiniones communes*, que debían citarse en la cátedra y en el foro, en las lecciones e informes, en los púlpitos y disputas. Sin embargo, la aparición de la imprenta modificó las maneras de transmisión del saber dentro y fuera de la universidad: las nuevas técnicas cambiaron también la manera

de recordar y, así, la forma de pensar y, en definitiva, de enseñar y de aprender.

Manuel Martínez Neira

P. Buchbinder, *Historia de las universidades argentinas*, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2005, 255 pp.

No es ésta la primera ocasión en que Pablo Buchbinder nos ofrece su trabajo sobre la historia de la universidad argentina. Ya en 1997 publicó su estudio a propósito de la historia de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, ha participado en investigaciones plasmadas en numerosos artículos y *papers* y se ha ocupado de la relación entre los intelectuales y la política en su libro *Caudillos de la pluma y hombres de acción* (2004).

En este libro de síntesis que ahora reseñamos, el autor nos permite seguir de su mano un repaso y un resumen global de la historia de las universidades argentinas, desde su nacimiento (las dos más tempranas de Córdoba y Buenos Aires) hasta las nuevas experiencias incorporadas hoy a la universidad con el fin de insertarla en la actual cultura universitaria, apuntalada por los principios de la calidad, la excelencia, la evaluación, eficacia y rendición de cuentas a la sociedad, todos ellos globalizados, ya a estas alturas.

Podríamos entender pues, que nos encontramos ante un manual, resumen o compilación de lo sabido hasta el momento, gracias a la historiografía, sobre conjunto de las universidades argentinas. Y esto en parte, es cierto, debido al vasto conocimiento por parte del autor de esa misma historiografía (como así demuestra el excelente y utilísimo ensayo bibliográfico final, una de las mejores aportaciones del libro). Pero a la vez, Buchbinder —y ésta es la siguiente mejor aportación—, no reparte sus reflexiones por universidades, a modo de seguimiento de situaciones diferenciadas, sino que se esfuerza en plantear las problemáticas de conjunto que han venido acompañando por igual a todas ellas, en función de la situación política concreta del país, del momento en que éstas habían aparecido y se habían desarrollado y de la función que se les había otorgado. En resumen, el hilo conductor de su largo recorrido por la historia de las universidades argentinas es entender su rol cambiante en el seno de la sociedad y de la cultura y, por ende, entender la definición de la cultura universitaria argentina.

El libro se divide en diez grandes capítulos. Así, tenemos noticia, en primer lugar, de los orígenes de la universidad argentina, lo que lleva a seguir a la Universidad de Córdoba, desde su nacimiento durante el período colonial hasta el proceso de secularización del sistema educativo. Para abordar esta aproximación al entorno cordobés, el autor incorpora el aná-

lisis de varios vértices que permiten un conocimiento plural. Atiende, por lo tanto, al tipo de enseñanza impartida, al perfil de estudiantes, maestros y autoridades; a los conflictos por el poder en la universidad en el momento del control franciscano y la llegada de las ideas en el siglo XVIII en relación con las ciencias naturales, la teología y el pensamiento político; a los vínculos entre la universidad y la sociedad del momento (en relación, fundamentalmente, con las necesidades de formación según avanzaba la burocratización de la colonia y la consideración de la Universidad como instrumento para el ascenso social) y a su final proceso de nacionalización en el siglo XIX. En este último referente se observa la evolución de la universidad durante los primeros pasos de la independencia, momento en que se mantienen algunas pautas del período colonial y las primeras reformas —sobre todo de los planes de estudios al objeto de formar al nuevo personal político de la nación— hasta la transferencia de la universidad a la jurisdicción nacional a partir 1854. Abierta esta nueva etapa, perdido el fuero universitario, la universidad emprendió una marcada tendencia hacia la profesionalización (con llegada incluida de expertos alemanes para mejorar la instrucción universitaria) y reprodujo, una vez más, tensiones entre católicos y liberales, en su distinta visión de la Universidad.

El segundo capítulo se ocupa de analizar lo que el autor denomina la *crisis* del modelo escolástico, asunto observable mediante el proceso de nacimiento de la universidad de Buenos Aires. Para ello, aborda el tipo de estudios superiores impartidos en ese centro en el período colonial, sus avatares a tenor de los diversos cambios políticos, fundamentalmente tras el período Caseros, y durante el rectorado de Juan María Gutiérrez y la característica impronta asumida por la facultad de Medicina de esa Universidad. Se trata, en esta ocasión, de una universidad unida estrechamente a la suerte de la propia ciudad de Buenos Aires de manera que gran parte de su actividad se focalizó en la formación progresiva de las elites que controlarían la urbe en las décadas de los 30, 40 y 50. La referencia antes apuntada a propósito de la facultad de medicina debe entenderse en el sentido de la peculiar evolución de la misma, al margen de la universidad desde 1852, con vuelta al control universitario desde 1874, y rodeada en buena medida de círculos profesionales y asociaciones gremiales que muy pronto adquirieron notable presencia y fuerza. Durante el rectorado de Gutiérrez, la universidad emprendió rumbos que le hicieron impulsar los estudios de ingeniería (llegaron en este caso especialistas italianos), de nuevo, en un visible subrayado del perfil profesionalista. La suerte de la Universidad de Buenos Aires en el siglo XIX la hizo pasar así mismo de una organización basada en un reglamento relacionado con la constitución provincial (lo que le hacía aparecer como una federación de facultades) hasta su nacionalización en 1885.

Un tercer bloque se centra en el estudio del conjunto universitario argentino como espacio de formación de las elites y, a la vez, como eje del

nacimiento de los profesionales liberales. La atención a estos dos puntales en el seguimiento de la universidad argentina desde la Ley de Avellaneda a la reforma y la configuración del sistema universitario argentino del siglo XIX hacen que nos topemos con varias temáticas ya clásicas a la hora de abordar la historia universitaria de ese siglo: el surgimiento de la “cuestión universitaria”, los vínculos entre política y universidad, los orígenes del movimiento estudiantil y el cuestionamiento del fomento de la ciencia y de la profesionalización en la misma. Todas ellas trufadas, lo sabemos también, por la presentación de conceptos estrella como el de *autonomía universitaria*, la preocupación por la función social de la universidad, los cambios en el perfil de la universidad al incorporarse a su veta profesionalista también la eminentemente investigadora, el auge de la actividad cultural y de ocio surgido en la universidad como espacio de sociabilidad y el cuestionamiento constante del gobierno universitario.

Como contrapunto, el capítulo cuarto observa el nacimiento de una institución universitaria, con pretensión de modernidad y escasamente ligada a las prácticas anteriores. Así, el autor se ocupa de las gestiones (especialmente las de J. V. González), el cruce de proyectos y la final construcción de la Universidad Nacional de La Plata. Su nacimiento se había ido gestando al hilo de las discusiones y problemas planteados en la de Buenos Aires en los primeros años del siglo XX y para remediar muchos de ellos se centraba en: la promoción de relaciones entre la enseñanza secundaria y la universitaria, el fomento de la extensión universitaria, una atención pareja tanto a las profesiones para las que la universidad formaba como a la dimensión científica de la misma, una constante preocupación por la selección del profesorado y el necesario intercambio internacional de profesores y alumnos.

Con esta estructura universitaria en marcha, los primeros pasos del siglo XX conducen en el panorama argentino a los acontecimientos de Córdoba, la puesta en marcha de reforma a partir de 1918, la implicación de las elites políticas cordobesas en la misma y la extensión de esta reforma al resto de las universidades del país. Con los elementos integrados en esa vía reformista, la universidad incorpora la idea del cogobierno (con la participación del profesorado en tareas de gobierno y gestión), se subraya, de nuevo, la necesidad de promoción de la investigación científica y de la extensión universitaria.

El seguimiento detallado de los principios incorporados por este movimiento reformista es analizado en el capítulo sexto. Además de la participación de los docentes en el gobierno de la Universidad se añadía ahora, también, aquella otra de los estudiantes, fuerte, cada vez más organizada y muy vinculada con las corporaciones profesionales, debido al auge de las agrupaciones estudiantiles. En cuanto al profesorado, se inició en este momento un interesante proceso de definición de su *cursus honorum*, de su propia carrera académica. En el ámbito global de la vida universitaria

cobró una fuerza cada vez mayor el impulso a la investigación, así como la necesaria extensión universitaria, ya apuntada antes. Todos estos puntos, debido a las rupturas institucionales producidas en el marco político argentino, fueron cuestionados en un movimiento pendular que llevaba alternativamente de la reforma a la contrarreforma, con ubicaciones distintas en cada momento de los actores principales, profesores y alumnos.

El autor se ocupa de lo que considera la crisis de ese modelo reformista en el capítulo séptimo, en el que aborda la vida universitaria durante el peronismo. En este momento, con la confesionalización de la universidad, la separación de profesores no afectos al nuevo panorama político, la formación de una nueva elite académica promovida a modo de recambio de figuras anteriores, y el fin de la autonomía, la universidad andaba con un nuevo paso. El régimen de Perón promovió además las universidades obreras, pretendido espacio de integración de alumnos procedentes de ámbitos sociales populares, y cuestionado poco después por su hincapié en la fragmentación y diferenciación social. Este mismo criterio político igualitarista llevó a la anulación de las tasas universitarias lo que abrió la puerta a la masificación de las universidades nacionales. Es el momento, también, de la creación de universidades privadas.

A partir del capítulo octavo el autor nos invita a indagar en lo que define como proceso de renovación universitaria, definido cronológicamente, entre 1955-1966 y que supone la *desperonización* de la Universidad, es decir, la reafirmación de ésta como espacio laico, la renovación y modernización del sistema universitario y la aparición de diversos proyectos modernizadores. Esta nueva etapa pasaba también por el cese de los profesores vinculados al anterior sistema político, la inserción de otros mediante nuevos concursos y la recuperación de la idea de la autonomía universitaria. Pero también por el incremento en la aparición de universidades privadas, de la incorporación de la idea de dedicación exclusiva por parte del profesorado, el aliento a instituciones eminentemente investigadoras como el Conicet (de 1958), y el compromiso de instituciones privadas en el fomento de la educación superior argentina. Toda esta especie de historia feliz es enseguida desmitificada por Buchdinder quien detecta y expone los límites de estos proyectos modernizadores y subraya la continuidad de las luchas políticas frente a la cientificidad.

El noveno capítulo, el penúltimo, observa el creciente proceso de politización de la universidad a partir de la década de los sesenta del siglo xx, lo que viene a coincidir con la masificación de la misma y la irrupción en lo político de las dictaduras militares. Aparejado a todo ello, se sucede el crecimiento del movimiento estudiantil, en el que cala de un modo cada vez más constante y visible el discurso peronista que casi se convierte en el que mejor definirá la nueva cultura académica, las nuevas aspiraciones y necesidades y la vinculación entre los conocimientos adquiridos en la uni-

versidad y el sostenimiento de la nación. Tras el golpe militar, a partir de 1974, la universidad sufrirá una feroz represión, recordada por todos por la desaparición de un buen número de estudiantes.

El capítulo décimo y último se ocupa de las particularidades de la universidad argentina a finales del siglo XX. En su caso, el sistema universitario a lo largo de los ochenta debió involucrarse en un amplio proceso de reconstrucción de los puntales caídos hasta el momento abriéndose la puerta, en los noventa, a una redefinición de los mismos, o lo que Buchbinder define como la construcción de “una nueva agenda universitaria”. En ella, se combinarán elementos que se habían ido cocinando en los avatares anteriores con otros nuevos como la evaluación universitaria (responsable de pulsar los éxitos y límites de la calidad universitaria), la incentivación, de nuevo, de la investigación en la universidad, y la exigencia de calidad por parte de los organismos que financian, desde ahora, la universidad.

Así, en este seguimiento de plano largo, de fino trazo y de amplia visión, el autor nos propone un interesante ejercicio de replanteamiento constante de los perfiles de la cultura universitaria argentina, de observación de nuevos actores y sus comportamientos, de viejas y nuevas preocupaciones y sus intentos de resolución, de nuevos financiadores y sus exigencias... Algo, que a priori, uno no espera leer en una obra con formato de libro de bolsillo, título de manual y ajustadas dimensiones y que se las arregla a cada paso para no dejar de largo la reflexión, la maduración de conceptos y la preocupación por el futuro de la institución universitaria argentina.

Carolina Rodríguez López

Franco Cipriani, *Scritti in onore dei* patres, Milano 2006, 502 pp. [= Biblioteca per la storia del pensiero giuridico moderno, núm. 68]

En 1991, en el volumen 38 de esta prestigiosa Biblioteca fundada por Paolo Grossi y dirigida ahora por Bernardo Sordi, Franco Cipriani publicó su *Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel regno d'Italia (1866-1936)*. En este nuevo volumen, nos ofrece una selección de los 56 artículos que ha escrito entre 1989 y 2005 dedicados a los padres del derecho procesal civil italiano. En concreto, son 22 los ensayos aquí editados y ordenados cronológicamente, tres de ellos inéditos. Algunos ya conocidos por los lectores hispanos pues diez han sido traducidos al castellano (*Batallas por la justicia civil*, Lima 2003), y uno fue redactado para *Juristas universales*, obra editada por Rafael Domingo en el cincuenta aniversario de la facultad de derecho de la Universidad de Navarra.

La publicación resulta de enorme interés no sólo para el estudio del origen y desarrollo del derecho procesal civil italiano, pues el magisterio de muchos

de estos juristas aquí reseñados ha influido en distintos países. En España lo sabemos bien gracias a los trabajos de Manuel Ángel Bermejo Castrillo.

Manuel Martínez Neira

Antonio Fernández Luzón, *La Universidad de Barcelona en el siglo XVI*, Barcelona: Universitat de Barcelona, 2005, 342 pp.

En los últimos años, ha ido completándose de manera significativa el mapa histórico de las Universidades hispanas en época moderna, de las que empezamos a tener trabajos generales, solventes y actualizados —también metodológicamente—. Aún quedaban algunas importantes por cartografiar. Es el caso de la Universidad de Barcelona para la que apenas disponíamos de algunos estudios generales antiguos y descriptivos, y de algunos otros parciales y específicos. De todos ellos y del destacado avance que han experimentado los estudios de historia de las universidades y de historia cultural se ha beneficiado este trabajo, fruto de la tesis doctoral del autor; bajo la dirección de Ricardo García Cárcel —cuyo magisterio se trasluce en la obra, especialmente en su vocación de mirar más allá de las aulas y claustros barceloneses—.

Su solvencia está avalada también por más de quince años dedicados al estudio de estos temas de enseñanza universitaria en la Cataluña del XVI: el régimen económico, el profesorado y las cátedras, los estudios clásicos, los de medicina, los de Leyes y Cánones en esta Universidad de Barcelona han sido objeto de publicaciones anteriores del autor.

El libro está organizado en cuatro grandes partes, divididas a su vez en un total de trece capítulos y un epílogo:

— La gestación de la Universidad (1401-1559): Desde los antecedentes medievales: el Estudio de Medicina y Artes creado por Martín el Humano desde 1401; el privilegio de Alfonso V de 1450 a la ciudad para establecer todas las facultades. Después, el funcionamiento del Estudio de Artes (a partir del cual surgió la futura Universidad) y el proceso hacia la fundación de la Universidad completa en 1559, por iniciativa municipal. Y la evolución de los primeros saberes y doctrinas, destacando sobre todo la incidencia del humanismo de Nebrija y del erasmismo.

— El análisis de los aspectos institucionales y hacendísticos, con una introducción sobre la evolución de las universidades al comienzo de la edad moderna, buscando esa necesaria contextualización.

— Descripción de la actividad docente, científica e intelectual en los distintos saberes (gramática, retórica y lenguas; filosofía, matemáticas, metafísica; leyes y cánones; medicina; teología) y de los sistemas de control sobre planes de estudios y selección de profesores.

— Estudio sociológico del personal universitario: Los profesores: proyección política de los catedráticos, sistema de nombramientos y limpieza de sangre. Los estudiantes —más sujetos pacientes que protagonistas de la vida universitaria barcelonesa—, requisitos y coste de las graduaciones. Poco poblada, en todo caso: entre 1561 y 1598 se graduaron aproximadamente 1700 bachilleres y doctores (1458 de ellos en filosofía y artes), en torno a un tercio de los matriculados. Elevadísimo coste de los grados que alejó a los estudiantes de fuera y provocó una fuga de alumnos a otras universidades, lo que explica el exiguo número de graduados en derecho, teología y medicina...

Tras unos orígenes largos y complicados, en 1559 comenzó a funcionar la Universidad unificada, por iniciativa municipal y no del poder real. Se trata, pues, de una universidad típicamente municipal: es la ciudad la que la sostiene económicamente y sus representantes políticos quienes —en último término— la gobiernan e intentan influir en su marcha. La oligarquización del gobierno municipal tuvo su correspondencia en unos claustros que compartían la pertenencia a unos mismos grupos sociales, que la configuran en sus inicios como una institución elitista, cuyos altos costes la cerraban.

Pero, en todo caso, se trata de una realidad en crisis, provocada en buena medida —pese a lo anterior— por el pulso entre el corporativismo gremial de la universidad y el afán intervencionista del municipio, que «propició el descontrol administrativo, las corruptelas en la provisión de cátedras, enfrentamientos entre los profesores y las autoridades municipales, así como una enquistada conflictividad estudiantil difícil de frenar» (p. 300). Trasladándose también los enfrentamientos entre los distintos grupos de poder del consistorio, las redes de parentesco, etc. que incrementaron las disfunciones existentes. Aunque los estatutos trataban de garantizar un cierto equilibrio entre ambos poderes, lo cierto es que «el ayuntamiento impuso su autoridad y asumió una posición hegemónica en el gobierno de la universidad».

Estamos ante el trabajo de un buen especialista, en el que se nos presenta una perspectiva general de este estudio aún demasiado desconocido. En ese sentido, la obra se nos ofrece, también por su eficaz estructura, como una puerta de entrada excelente para adentrarnos en sus principales realidades. Ahí reside su mayor virtud: nos muestra una panorámica desde una perspectiva global que no pierde de vista la historia socio-económica y cultural de la Barcelona del Quinientos y en la que se subrayan determinados perfiles universitarios rigurosamente seleccionados y ordenados.

El trazo de dichos perfiles es firme, claro, y, con frecuencia, nos deja con la inquietud de apreciar matices más detallados, de pasar del esbozo que se adivina a un dibujo de trama más precisa y siluetas más delineadas.

Así, en cuestiones como la vida estudiantil y, por ejemplo, los alborotos señalados; como las constantes reformas de sus ordenanzas y constituciones y, especialmente, la cuestión de las visitas; como los medios materiales de que disponía la universidad (por ejemplo, su biblioteca —ya que se nos habla, por ejemplo, del anfiteatro anatómico—), como su imagen y su papel en el ceremonial urbano, etc.

Pero eso no es un demérito sino, al contrario, consecuencia de una vista general tan certeramente levantada que invita a traspasar el perfil de su horizonte y su plano y deambular por sus edificios, entrar en sus aulas... El autor ya advierte que no pretende llenar todo el vacío que el tema suscita, sino responder a algunas preguntas clásicas sobre la Universidad de Barcelona y situarla en su contexto histórico. Como decíamos, en efecto, no hay otro modo de plantear una necesaria y esperada visión de conjunto, en la que la selección ha sido certera y resultado del excelente conocimiento que de la institución barcelonesa tiene Fernández Luzón. Desde luego, esperamos de él nuevos trabajos que profundicen en algunos de esos temas, que respondan a algunas de las cuestiones que deja planteadas.

La línea que recorta la silueta la institución es nítida: la del gobierno municipal que la financia y va poco a poco haciéndose con los principales resortes de su organización y gobierno, por razones de utilidad pública, necesidad socio-profesional, prestigio y proyección de su función. El fondo también resulta apropiado: en primer término, las universidades catalanas (especialmente, su carácter más innovador frente a la más tradicional Universidad de Lleida); en un segundo lugar, las de la Corona de Aragón (Valencia de manera destacada: por su carácter municipal y su capitalidad); y en un último plano el resto de las Universidades peninsulares, especialmente Salamanca y Alcalá. La luz que la ilumina y proyecta sus sombras es la de la transición entre las ideas renacentistas y del humanismo académico y las contrarreformistas.

A pesar de sus peculiaridades, la imagen nos resulta conocida. Como no podía ser de otro modo, se asemeja tanto a la de otros centros coetáneos como a algunos de los rasgos de las de nuestros días: los problemas económicos, la necesidad de atraer alumnos, las reformas de los planes de estudios y su coincidencia con otras universidades, las disputas de escuelas, las posibilidades profesionales, la influencia en todo ello de las distintas administraciones.

La pluma con la que se traza este dibujo toma la tinta de fuentes documentales inéditas de gran interés, pese a las numerosas pérdidas que esta documentación ha sufrido. En buena medida del Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona —muy ricas y de valor—, del Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona, del Archivo de la Corona de Aragón, etc.

Se trata, en definitiva, de una contribución rigurosa y útil y de un libro esperado, en la medida en que era necesario disponer de esa historia global que el autor se propone y que va más allá del siglo XVI que anuncia el título, pues, con frecuencia, las referencias, observaciones y alguna com-

paración se extienden al siglo XVII y, en ocasiones, hasta su cierre —con el traslado a la Universidad de Cervera— en 1717.

Enrique Villalba

Antonio Merchán, *Documentos históricos de la Universidad de Sevilla (II). Los estatutos de autonomía del siglo XX*, Sevilla, 2005, 257 pp.

En el marco de la celebración del quinto centenario de la Universidad de Sevilla aparece este libro de Antonio Merchán dedicado a los cinco estatutos hispalenses que se sucedieron a lo largo del siglo XX. El volumen reproduce el Estatuto de 1921, los Estatutos «provisionales» de 1971, los Estatutos de 1985, los Estatutos de 1988 y el Estatuto de 2003. Menos del último —todavía vigente—, el autor hace una presentación de cada uno de ellos destacando los perfiles técnico-jurídicos y, en concreto, tomando el pulso al grado de autonomía que permitían.

Desde un punto de vista histórico, estos textos pertenecen a tres periodos distintos. El primero refleja la cuestión de la autonomía que se vivió en España al despertar el siglo XX y que hoy conocemos bien, al menos para el caso valenciano, gracias a Daniel Comas (*Autonomía y reformas en la Universidad de Valencia*). Fueron los ministros García Alix y Silió quienes impulsaron una nueva concepción de la universidad como realidad autónoma rompiendo así con la pesada herencia centralista-liberal de la ley Moyano de 1857. Los estatutos que se aprobaron al amparo del decreto de 1919 fueron el icono de esa efímera reforma.

El segundo se sitúa en el problema universitario de los años sesenta del franquismo que hizo de la autonomía su bandera. Un primer hito lo encontramos en el decreto-ley de 1968 sobre medidas urgentes de reestructuración universitaria, gracias al cual se crearon nuevos centros que se caracterizaron precisamente por gozar de la referida autonomía. Después, la ley general de educación de 1970 declaró autónomas a todas las universidades y así estableció el mecanismo oportuno para la redacción de sus correspondientes estatutos provisionales. Pero se trataba de una autonomía demasiado frágil.

En fin, la ley de reforma universitaria de 1983 trajo una verdadera autonomía universitaria en consonancia con los postulados constitucionales. La redacción de los estatutos sevillanos fue especialmente problemática, y Merchán nos introduce magistralmente en los nudos del proceso.

Poder tener en un volumen cuidadosamente editado estos distintos estatutos, precedidos de breves introducciones que los sitúa en su contexto y nos ofrecen las claves de lectura, es, sin duda, uno de esos frutos permanentes que nos ofrecen las celebraciones.

Manuel Martínez Neira

Stefano Merlini (ed.), *Piero Calamandrei rettore dell'Università di Firenze. La democrazia, la cultura, il diritto*, Milano 2005, 189 pp. [= Università di Firenze, Pubblicazioni della facoltà di giurisprudenza, núm. 93]

El volumen recoge las intervenciones de un congreso organizado por la facultad de derecho florentina, en el contexto de las celebraciones de los ochenta años transcurridos desde su fundación. Está dedicado al que fue rector de la universidad de 1944 a 1947 y primer titular de la cátedra de derecho procesal civil.

Las ponencias ahora publicadas subrayan distintos aspectos de la compleja personalidad del maestro. Después de unas palabras de presentación, del decano y de la asesora de cultura de la región, el libro comienza con un ensayo de Bernardo Sordi donde se reconstruye la obra de Calamandrei rector. En los difíciles años de su rectorado se propuso restituir a la universidad su dignidad. Tarea ésta que le situó, como señala Stefano Merlini en el segundo trabajo, entre los protagonistas de la reconstrucción de la democracia en Italia.

Por su parte, Nicolò Trocker se centra en el pensamiento procesalista de Calamandrei y en la actualidad de éste. Rector, político, procesalista... y literato. Faceta esta última que según Giuseppe Nicoletti, autor del último artículo, no fue marginal en la obra del profesor florentino.

En fin, la publicación se cierra con un extenso apéndice en el que se nos ofrece una selección de sus escritos y discursos políticos que nos facilitan un acercamiento distinto a este gran jurista.

Manuel Martínez Neira

Permanencia y cambio. Universidades hispánicas 1551-2001. VIII Congreso Internacional de Historia de las Universidades (México 2001), México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2005-2006, 2 vols., 538 + 554 pp.

Con motivo de los 450 años de la fundación de la Real Universidad de México, se celebró en dicha ciudad en 2001 el VIII Congreso de universidades hispánicas. Este encuentro internacional es uno más de los que se vienen celebrando desde 1987, año en el que Mariano Peset convocó el primero, sobre la historia de las universidades hispánicas. El objetivo de dichos encuentros es el de reunir a aquellos estudiosos, con independencia de su procedencia académica, involucrados en el estudio de la universidad española y americana. La exposición de trabajos, hallazgos, dudas, los cambios de impresión entre los participantes es lo que enriquece y da fundamento al debate, pero siempre desde una perspectiva amplia que dé cabida a la diferencia y a la complejidad, evitando de esta forma la obtu-

sa simplificación sistemática. De ahí el título de este octavo encuentro internacional de *Permanencia y cambio* que pretende descubrir y hacer notar tanto las similitudes como las diferencias, las continuidades y discontinuidades en la institución universitaria en el entorno hispano-americano.

Acaba de publicarse el segundo tomo —el pasado año vio la luz el primero— del volumen que recoge todas las aportaciones de los participantes en el congreso. *Permanencia y cambio* recoge cincuenta trabajos resultado de las colaboraciones que bien como ponencia o como comunicación se presentaron en la reunión Mexicana. El volumen, como la celebración del congreso, está dedicado a Mariano Peset, Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional Autónoma de México, 2001. Encabeza la publicación una presentación escrita por Enrique González González y Leticia Pérez Puente que, aparte de las esclarecedoras líneas iniciales que la presentan globalmente, divide o agrupa los textos publicados en ocho apartados distintos y en ese orden será en el que quedarán aquí comentados. Sin embargo, hay otras connotaciones en los textos presentados que nos indican que México, y en especial su Universidad Nacional, es el protagonista del congreso. Obviamente la procedencia de los organizadores y el lugar de celebración marcan irremediablemente el contenido de los trabajos presentados, en este sentido esta publicación es un recorrido por la historia de dicha universidad. Un recorrido que se junta y se separa constantemente y que se va complementando y enriqueciendo con cada participación. Pero esto no significa monopolización, acompañan a estos textos otros tantos sobre otras universidades hispánicas, no sólo del antiguo régimen, que dotan a la publicación de un merecido puesto dentro de la mejor historiografía universitaria.

En el primer apartado, *Los orígenes*, se han reunido los textos que tratan sobre la fundación y carácter de diversas universidades hispánicas: Salamanca, México, Guatemala, Cagliari y Sassari, Catania y Mesina y la de Guadalajara. La lectura de las ponencias permite al lector descubrir el impulso real y/o papal que cada una de ellas recibió en su alumbramiento y cómo fue evolucionando durante la edad moderna.

Comencemos con la aportación del homenajeado Mariano Peset que se ocupa de los orígenes de la de Salamanca. Acude el autor a la documentación real y papal del periodo como Partidas, constituciones papales, etc., para analizar la evolución que sufrió dicha universidad desde sus orígenes medievales hacia la etapa moderna. Los documentos delatan para Peset, además de los cambios de organización dentro de la institución, tensiones políticas de la institución de índole diversa: con el papado, con los cargos eclesiásticos universitarios, con la ciudad, etc. La lectura final es que la antigua corporación universitaria que tenía como núcleo duro a los escolares y bachilleres, va dando paso a una organización claustral; se produce el tránsito de una universidad de doctores y escolares a otra de cate-

dráticos, de la asamblea general que dominaban los escolares a la elección del rector por cooptación, de vigilancia papal a control real.

En el mismo bloque temático tenemos la colaboración de uno de los presentadores, Enrique González González que participa en la discusión historiográfica en torno a si el epíteto de “real y pontificia” resulta adecuado para las universidades coloniales, nos presenta un análisis sobre la de México. Afirma el autor que la confluencia de varias autoridades temporales y eclesiásticas para el nacimiento de una universidad, típica del medioevo, se fue desnivelando a favor de la corona al compás del crecimiento de los absolutismos y surgió el modelo del patronato. En el caso de México, el título de *real* no ofrece dudas porque, aunque en 1595 contó con una bula pontificia, careció de pase real y no se reconoció hasta mediados del XVII ¿De dónde, pues, el título de pontificia? se pregunta González. Esta nueva situación modificó la sujeción férrea a la corona de la institución, el título de *pontificia* era más que nada simbólico.

Leticia Pérez Puente, basándose en un informe del obispo Enríquez de Rivera del siglo XVII, nos habla de la fundación de la universidad de San Carlos de Guatemala. Según la autora, dicha universidad hubo de esperar, para su creación, no sólo a disponer de suficientes rentas reales para su mantenimiento, sino también al fortalecimiento de la Iglesia secular indiana a finales del siglo XVII, porque hasta entonces eran las órdenes regulares las que ostentaban y rivalizaban en la concesión de grados conventuales. Pérez Puente divide el informe en tres apartados: el primero de ellos está destinado a defender la creación de una universidad en Guatemala por los beneficios que otorgará a la corona y a la ciudad, el segundo está dedicado a rebatir los argumentos del clero regular opuestos a su fundación, el tercer y último apartado trata del carácter orgánico y económico que debe tener dicha universidad.

En “Dos universidades para un reino...”, Gian Paolo Brizzi nos explica el proceso de creación de las universidades sardas de Cagliari y Sassari. Para este autor, el proceso de formación de estas dos universidades se desarrolló a lo largo de tres coordenadas: la relación entre la Corona española y el reino de Cerdeña, el peso de la Compañía de Jesús y la rivalidad endémica de ambas ciudades. Tras ochenta y tres años de tentativas, en 1603 los estamentos sardos consiguieron la aprobación de Felipe III para la creación de una universidad en la ciudad de Cagliari. Poco después y estratégicamente Sassari acude a Roma, que en esos años era lo mismo que hablar de la Compañía de Jesús, solicitando su apoyo y en 1632 obtiene el privilegio del monarca de fundar un estudio general. Dos universidades para un reino y para una demanda de instrucción que, en palabras de Brizzi, no justificaba la duplicidad, pero que sirvieron como instrumento de promoción intelectual de los sardos y como soporte para la hispanización de Cerdeña, en detrimento de la italianización.

También la aportación a este congreso de Andrea Romano es referente a dos universidades en un mismo reino, Catania y Mesina. El siglo que

dista entre la fundación del *Siculatorum Gymnasium* de Catania y la del *Mes-sanenense Studium Generale*, explica las significativas diferencias estructurales de ambas instituciones. Y no sólo por el cambiante clima político y cultural ocurrido de un siglo a otro, sino también por el desarrollo de la contrarreforma. La estructura organizativa de la de Catania fue el resultado de un sistema de estudios trazado por la administración central con el fin de controlar la institución y de proveerse de una clase burocrática fiel y controlable. La de Mesina, por el contrario, respondía a la política de penetración y control de la enseñanza por la *Societas Iesu*. Entre los siglos XV y XVI se desarrollaron en Sicilia, con resultados diferentes, dos realidades universitarias hispánicas distintas.

El último texto del primer apartado en el que se han agrupado las aportaciones al congreso que comentamos es de Carmen Castañeda y referente a la universidad americana de Guadalajara. Como en otras ciudades hispanoamericanas, en Guadalajara fue el municipio el que impulsó la creación de la universidad y ello por doble motivo, aparte de conferir a la ciudad un nivel cultural más alto y un prestigio social, reforzaba la defensa de los intereses regionales frente a la capital del virreinato. En este sentido, dice Castañeda que uno de los instrumentos utilizados fue el padrinazgo. Como persona importante y poderosa de la ciudad, la figura del padrino de licenciatura y doctorado se convirtió en un agente importante en el funcionamiento de la sociedad colonial. El padrinazgo fortalecía la jerarquía establecida por un lado y, por el otro, posibilitaba el acceso de los menos afortunados en riqueza a las elites de esa sociedad.

La falta de medios y la oposición de la universidad de México retrasaron su fundación del reinado de Carlos III al de Carlos IV.

En el segundo apartado de la publicación quedan agrupados aquellos trabajos, referentes a la corporación universitaria; rectores y claustros de gobierno de uno y otro lado del Atlántico son los protagonistas de dichos trabajos y Armando Pavón Romero, Gudrun Lohmeyer de Lenkersdorf, Dorothy Tanck de Estrada, Iván Escamilla González, Margarita Torremocha Hernández, María del Pilar Martínez López-Cano y María de Lourdes Alvarado son sus autores.

Armando Pavón Romero nos muestra, a través de cuadros referentes a la composición del claustro pleno de la universidad de México a lo largo del siglo XVI, quiénes tuvieron el control de la institución. Afirma el autor que ésta fue, en sus inicios, una universidad de doctores formados en universidades peninsulares, pero que con el tiempo se fueron sustituyendo por los de la propia universidad Mexicana, en su mayoría clérigos y de procedencia criolla.

En 1553 el virrey Velasco, encargado de organizar la universidad de México, nombró al doctor Antonio Rodríguez de Quesada como primer rector. El escaso tiempo del que gozó dicho cargo este oidor de la real audiencia novohispana y los conflictos políticos que rodean este hecho,

según muestran los documentos, ha impulsado a Gudrun Lohmeyer de Lenkersdorf a profundizar sobre ello. La enemistad, incluso personal, entre Quesada y Juan Negrete, cabeza de la Iglesia en México, fue para esta autora la causa principal de su destitución y sustitución por Negrete, a ello y a la figura de Quesada dedica su estudio Lohmeyer de Lenkersdorf.

Sobre otro rector de la universidad de México muy posterior a Quesada, Antonio López Portillo, escribe Dorothy Tanck de Estrada. Una inteligencia privilegiada llevó a Portillo grandes reconocimientos y al cargo de rector, pero la acusación de llevar “la bandera del jesuismo” en tiempos que no eran propicios para ello, con Carlos III, le proporcionó la destitución y el destierro. Tal “calumnia”, en palabras del propio Portillo, no privó a este rector desterrado del reconocimiento intelectual de su época, ni de la vindicación de su figura por el movimiento nacionalista intelectual, surgido durante el siglo XVIII como resultado de las críticas de Martí sobre la intelectualidad Mexicana.

Iván Escamilla González nos habla sobre otro rector de la universidad de México, José de Uribe, al que este autor tilda de ilustrado católico convencido porque supo conciliar la fe con la razón agradeciendo a la ciencia su colaboración con la religión, en contra del fanatismo tradicional y del escepticismo ilustrado más avanzado. Pero la lucidez de este rector fue, según el autor de la ponencia, mayor, al percibir que la universidad Mexicana de aquellos años de renovación no era ni la única, ni la más propicia institución que debía poner en práctica los planes de la modernidad contenidos en el ideario ilustrado.

Margarita Torremocha Hernández en lugar de detenerse en la persona lo hace en el cargo con una detallada y documentada presentación sobre “El rector de Valladolid en la Edad Moderna...”. A través de las actas del Libro de claustros de dicha universidad, Torremocha llega a la conclusión de que el poder del rector quedaba mermado por el propio claustro, en materia administrativa y económica y por el Consejo, ante el que era responsable de cualquier incidente. Limitaciones que explican, según la autora, lo poco codiciado del cargo, comparado con otros rectorados, salvo para obtener cátedras, servir de trampolín a otros cargos o por intereses colegiales. El único terreno en el que el rector vallisoletano tenía verdadero poder y lo hacía valer era en el jurisdiccional, emitiendo sanciones tanto seculares, como eclesiásticas.

Volvemos a la universidad de México con la aportación de María del Pilar Martínez López-Cano. Analizando los asientos de los libros de cuentas de la corporación, durante la primera mitad del siglo XVII, deduce la autora que si bien hubo cierta bonanza económica en los primeros años del mencionado siglo, se truncó en crisis a mediados del mismo. Se trata de una lectura inicialmente económica, que nos habla de gastos e ingresos, pero que da paso a otra segunda, más profunda y expresiva, sobre la situación de la universidad Mexicana durante dicho período.

María de Lourdes Alvarado ahonda en la postura del claustro de la universidad de México ante la reforma de 1833. De poco sirvieron, dice la autora, las tímidas y extemporáneas propuestas de éste, que pretendía que los cambios se hicieran desde dentro, para frenar a la administración reformista que tildaba a la universidad Mexicana de “inútil, irreformable y perniciosa”. A partir de la supresión del monopolio de los grados académicos, los colegiales de San Juan de Letrán, San Ildefonso y San Gregorio podían obtenerlos en filosofía, teología y jurisprudencia sin la acreditación de la universidad. La ideología reformista no se detuvo hasta consolidar un nuevo sistema nacional de educación superior ignorante de las propuestas claustrales.

En el tercer apartado de la publicación quedan reunidos siete trabajos que, desde diversas ópticas, abordan los destinos profesionales de los universitarios. Adriana Álvarez encabeza con su trabajo dicho grupo. Se trata de una aproximación estadística sobre la demografía universitaria de principios del siglo XVIII en la universidad novohispana. A partir de los libros de grado, los de pago de derecho, los de matrícula y de las *Constituciones*, la autora llega a una primera aproximación que indica: el elitismo académico, que apenas llegaba al 2% el número de bachilleres que continuaba los estudios; la utilidad, no obstante, de dicho grado en el mercado laboral del antiguo régimen; y el incumplimiento de las *Constituciones* para la obtención de grados.

Continuamos con la universidad Mexicana, aunque el periodo es anterior, siglos XVI y XVII, con el trabajo de Jaime González Rodríguez. Nos hace notar la repercusión que tuvo en la universidad novohispana, como en las europeas, el desarrollo administrativo del estado moderno con la demanda de oficiales “letrados”, hecho que enlaza el autor con la pugna de los poderes civil y eclesiástico por controlar la corporación y en especial con el periodo (1569-1602) en que los oidores controlaron la rectoría y con la política llevada a cabo por el eclesiástico Montúfar.

El trabajo de Rodolfo Aguirre Salvador pretende sopesar la influencia que tuvieron los graduados clérigos en la distribución de los altos cargos eclesiásticos, durante el arzobispado de Rubio y Salinas (1749-1765), frente a la amenaza que suponía su concesión a los peninsulares. Para Aguirre, la liga existente entre el claustro y el alto clero de México no era circunstancial. La aspiración de los clérigos graduados era obtener, como mérito por sus estudios, los beneficios y prebendas eclesiásticas y la universidad se preocupaba y apoyaba estas colocaciones. La llegada al arzobispado de Rubio y Salinas no cambió *de facto* esta situación, debido a la política conciliadora del obispo, los cargos siguieron distribuyéndose entre los criollos. Sin embargo, y aunque no llegó a la confrontación, con el tiempo la postura del Rubio Salinas fue cambiando y sus informes sobre el clero de la novohispana fueron cada vez peores y su inclinación por el nombramiento de peninsulares para los altos cargos prepararon el advenimiento de las reformas de Carlos III sobre “política de empleos”.

Óscar Mazín vuelca su trabajo sobre la catedral de Valladolid de Michoacán del reino de la Nueva España, analizando el origen geográfico, los estudios, el patrimonio, etc., de los trescientos capitulares que transitaron por esa sede durante algo más de dos siglos (1540-1786) y llega a tres conclusiones importantes. a) Que la correlación que hubo entre la composición del cabildo y el tránsito de sus miembros por la monarquía española dotó a la diócesis de Michoacán de una identidad no provinciana y acorde con las realidades del imperio. b) En cuanto a los estudios, aprecia el autor que predominaron los canonistas en las etapas en que las estructuras administrativas y de gobierno de la iglesia catedral no están consolidadas, y los teólogos cuando se llega a la consolidación, es el momento que él llama de “arraigo capitular”. c) Por último, mantiene Mazín que las reformas borbónicas supusieron la ruptura de la americanización del cabildo, en su composición había un número elevado de capitulares criollos, y la separación a partir de entonces en alto y bajo clero.

El trabajo de María Pilar Gutiérrez Lorenzo versa sobre la proyección americana de los estudiantes castellanos durante los siglos XVI y XVII. Más concretamente, la autora realiza una biografía colectiva de estudiantes alcalaínos y seguntinos, que alcanzaron los más altos cargos dentro de la administración de la Nueva Galicia tanto en el ámbito civil como en el eclesiástico. A partir de ahí, irá tejiendo las interrelaciones, redes clientelares, y patrones comunes de ascenso social y profesional de estos estudiantes de la universidad de Alcalá de Henares y Sigüenza. Afirma Gutiérrez que estas universidades fueron la cantera de donde salieron aquellos que, no pudiendo acomodarse en las prelaturas peninsulares, eligieron la mitra de Guadalajara como destino final de su carrera eclesiástica o la audiencia como puesto de la alta administración en Nueva Galicia.

La aportación de María Pilar Hernando Serra rompe la proyección Mexicana de los trabajos anteriores y se detiene en la Segunda República española (1931-1939). La autora parte de una frase de Unamuno extraída del discurso de inauguración de las primeras cortes de 1931, “En esta cámara, señores, hay demasiados catedráticos...”, para hacernos notar un hecho indiscutible: el interés que desde el principio de la Segunda República mostró el mundo intelectual, y por ende el universitario, por la política. Realiza y nos muestra con cuadros un recuento analítico de todos los catedráticos que participaron en las legislaturas republicanas, de sus adscripciones ideológicas, procedencias académicas, trayectorias políticas y los desgraciados finales que sufrieron la mayoría de ellos, que abunda en esa realidad ya mencionada. Nunca en la historia de España como en la Segunda República estuvo tan ilusionada y comprometida la intelectualidad española con la política.

Cierra este apartado el trabajo de María Fernanda Mancebo. Se trata de una reflexión sobre el receso intelectual que sufrió la universidad española al terminar la guerra civil y comenzar el franquismo. Recurre la auto-

ra a los *Anales de la Universidad de Valencia*, revista que comenzó su andadura en 1920 y que, aunque no fue interrumpida durante la guerra, sufrió al terminar ésta una dura transformación. *Anales* (1939-1947) no sólo delata el nivel científico al que había quedado reducida la institución, sino también las directrices políticas e ideológicas a las que quedaba sometida. El talante triunfalista, patriótico y religioso de los discursos y la personalidad de sus disertantes muestran las huellas profundas de las nuevas ideas dominantes que imperaron, en palabras de Mancebo, en una de las épocas más tristes y trágicas de nuestra universidad.

El cuarto apartado de la publicación está dedicado a las universidades y el clero regular, en él quedan reunidos tres trabajos. El primero de ellos está escrito por Javier Palao Gil y es referente a las relaciones entre la Compañía de Jesús y las universidades de la Corona de Aragón en la edad moderna. Palao establece una cronología general para explicar la evolución de estas relaciones, que abarca del siglo XVI al XVIII. Así, a mediados del XVI, periodo de implantación y desarrollo, las relaciones entre los *Estudis* y la Compañía eran cordiales, pero comenzaron a tensarse cuando los colegios empezaron a admitir seglares en sus aulas. Cuando en 1599 alcanza la *Ratio Studiorum* su redacción definitiva, los jesuitas ya habían establecido colegios por toda España con los respectivos privilegios papales que les facultaba para el otorgamiento de grados, el conflicto estaba servido. Durante el XVII y hasta que se produce la expulsión, la confrontación es abierta; los litigios son constantes y también los pactos que pretenden resolverlos pacíficamente, pero la Compañía gozaba ya del monopolio de la enseñanza de la gramática y del apoyo real. No obstante, y a pesar de este panorama favorable, el primer revés les llegará a los jesuitas en las primeras décadas del XVIII: el empuje de otras órdenes religiosas, el resurgir de escuelas municipales y el ideario ilustrado fueron los siguientes.

Manuel Casado Arboniés se centra en los carmelitas descalzos del colegio-convento de San Cirilo de la Universidad de Alcalá de Henares y su paso a la Nueva España en el siglo XVI. Afirma Casado que la vocación y dedicación universitaria de los carmelitos-descalzos se aprecia desde que se fundó la orden, sin abandonar, no obstante, la faceta contemplativa característica de la misma. De la importancia que tuvo en el contexto de colegios regulares alcalaínos en la edad moderna y del *Curso complutense*, principal elemento de difusión del colegio-convento, nos informa el autor con numerosos datos. Posteriormente recalca Casado en la participación que dicha orden tuvo en la evangelización de la Nueva España.

“Una relación afortunada, o de cómo la existencia de la universidad propició el establecimiento y desarrollo de la orden de la Merced en México”. Con este sugerente título, María del Carmen León Cázares nos adelanta la vinculación que hubo entre la universidad Mexicana y la orden mercedaria, debida al tardío establecimiento de dicha orden en dicha ciudad. Al no ser una orden mendicante y no dedicarse a la evangelización los

mercedarios, tardaron en obtener permiso definitivo para establecerse en México. Sólo lo obtuvieron para que ocho frailes acudieran a graduarse a la universidad. Cuando por fin la obtuvieron definitivamente a finales del XVI, la Merced siguió manteniendo esa relación con la institución que, en palabras de la autora, fue provechoso y afortunada para ambas.

Con el trabajo de Cristina Ratto Cerrichio comienza el quinto apartado de la publicación, y primero del tomo segundo, dedicado a espacio e imágenes universitarias. La escasa información existente sobre la ubicación de las “casas reales”, nombre por el que se conoce la primera sede de la universidad de México, ha dado lugar a numerosas especulaciones y eruditas disquisiciones historiográficas, en especial durante los siglos XIX y XX. Testimonios y crónicas de distintas épocas, no siempre coincidentes, han sido lo que ha alimentado la polémica sobre la sede física de la institución en 1553. A ellos añade la autora documentos gráficos, planos de la ciudad en calidad de fuente, tan valiosa para Ratto como cualquier otra.

La colección de retratos del Salón de actos de la universidad Mexicana del siglo XVII ha llamado la atención de Clara Inés Ramírez y Priscila Vargas que, como la autora anterior, han acudido a cronistas universitarios, verbigracia Sigüenza y Góngora, para intentar descubrir y analizar quién, cuándo, cómo y el porqué de dicha colección. En otras palabras, ¿cuáles eran los criterios de aquella universidad para considerar memorable a uno de sus miembros y ser retratado? Parece ser que una destacada carrera académica, aunque imprescindible, no era suficiente. Se tenía que haber ostentado un alto cargo eclesiástico o civil y si además el personaje era criollo, mejor. Así las cosas, obispos y oidores son los retratados en esta colección en donde prima más el triunfo social que la trayectoria universitaria.

Desde sus orígenes, los estudios generales europeos aspiraron y se esforzaron por conseguir una simbología y emblemática académica propia que expresan su autonomía y personalidad jurídica frente a los poderes políticos y eclesiásticos que ya tenían este tipo de signos de identidad. Manuel V. Febrer Romaguera nos informa de las insignias y vestimentas —dejando para un trabajo posterior las ceremonias— de la universidad de Valencia en el siglo XVI.

El trabajo de Alicia Mayer se centra en la figura del ministro puritano y profesor universitario de Harvard, Cotton Mather. El afán de defender y ensalzar dicha universidad, como máximo exponente de la virtud protestante, llevó a Mather en su *History of Harvard Colledge* a despreciar y criticar duramente la universidad de México, paradigma en esa época de las bondades de la monarquía española y del catolicismo. A juicio de Mayer, este historiador de Nueva Inglaterra ignoraba bastante lo concerniente a la institución Mexicana y su discurso está impregnado de una utópica apología del protestantismo frente al maligno papismo. Aún así, considera la autora que la obra de Mather debe ser conocida por el investigador interesado en la educación de la América colonial.

Charles Fantazzi se pregunta en su trabajo sobre la influencia e importancia que tuvo Erasmo en el humanismo español. Analizando las posturas que algunos teólogos de las universidades de Alcalá y Salamanca como Cisneros, Nebrija, Maldonado, López de Zuñiga, etc., adoptaron frente a la obra de Erasmo, el autor llega a la conclusión de que el espíritu libertador de su método y de sus comentarios era incompatible con el humanismo de marca española y con la cultura ideológica de Alcalá y Salamanca. Pero, a pesar de ello, afirma Fantazzi, es innegable la impronta indeleble que Erasmo dejó en la historia religiosa de España.

Las revistas, como instrumentos del debate intelectual, de difusión científica, de novedades bibliográficas y noticias eran especies raras en la cultura universitaria de la Restauración, más aún las dedicadas a las disciplinas humanísticas. Esta idea de Unamuno, compartida con muchos decimonónicos, ha sido el marco elegido por Salvador Albiñana para hablarnos de la importancia que tuvo la *Revista Crítica de Historia y Literatura Españolas, Portuguesas e Hispano-Americanas*, fundada por Rafael de Altamira, a la vez que explica su efímera vida (1895-1902). Para Albiñana, se trató de un ensayo, un intento de poner en práctica un programa de renovación de los estudios históricos en donde había sitio para todas las manifestaciones culturales hispánicas. Acompaña al texto el índice íntegro de los números de la revista.

Entramos en el sexto apartado de la publicación sobre colegios e institutos. La primera aportación de este grupo se la debemos a Georgina Flores Padilla que nos habla de la familia Valdés, como ejemplo de las prácticas cotidianas de la sociedad novohispana, sujeta como todas al mundo de las alianzas y del clientelismo político. Parece ser que una serie de familias Mexicanas, entre ellos los Valdés ayudaron económicamente en la fundación del Colegio de San Pedro y San Pablo, al que se fusionó más adelante el de San Ildefonso. Como prerrogativa obtuvieron a cambio la administración de dos becas que los Valdés dejaron de utilizar en 1612 al convertirse el monarca en único patrono del colegio. Sin embargo, como recompensa por su apoyo al virrey en determinadas intrigas y conflicto políticos, los Valdés recuperaron la prerrogativa, nombrando a sus dos becarios durante unas décadas.

El Colegio de San Nicolás en Michoacán, en especial la institucionalización de sus cátedras durante el siglo XVIII, es el tema escogido por Ricardo León Alanís. La falta de cátedras propias, su dependencia docente de los jesuitas y las pocas oportunidades de que los colegiales nicolítas accedieran a estudios en una facultad mayor tipificaron, en palabras de León, el Colegio de San Nicolás como un “colegio menor de residencia” durante el siglo XVI y aún durante el XVII. A principios del XVIII, y consecuencia del legado económico que hizo el licenciado Beurco que dejó su hacienda al colegio, se crearon las dos primeras cátedras. Pero el económico no fue, según el autor, el único obstáculo que tuvo que superar el colegio para la

institucionalización y consolidación de sus cátedras y convertirse así en “colegio de ejercicio”; el político fue otro más.

Rosario Torres Domínguez reflexiona sobre los motivos por los que en 1822, recién conseguida la independencia en México, se plantearon en el congreso el cierre del colegio San Pablo de Puebla. Dicho colegio era uno de los tres que formaban el Seminario Tridentino de Puebla junto con San Pedro y San Juan. La posición privilegiada con respecto a los otros dos colegios que fue adquiriendo el de San Pablo no sólo era contraria al proyecto de su fundador, el obispo Palafox, sino que alimentó durante el antiguo régimen la envidia de los otros dos. El cambio político favoreció el enfrentamiento, el clero de Puebla no era homogéneo desde el punto de vista ideológico, y la independencia política de España había dejado acéfala a la iglesia Mexicana. En 1834 se cerraba el colegio.

La comunicación de Rafael Guevara Fefer versa sobre la presencia del positivismo en la política universitaria de la República Mexicana de los primeros tiempos. La secularización de la educación, el nacimiento de institutos científicos y literarios y el surgimiento de las escuelas nacionales de estudios superiores formaban el programa político. El autor se detiene en el curso de historia natural, impartido por el instituto de Toluca en 1884, para reivindicar el papel científico de México en el conocimiento de la naturaleza, acorde con los más recientes paradigmas de la ciencia europea.

El manual de Sóstenes Rocha titulado *Enquiridión para los Sargentos y Cabos del ejército Mexicano* (1887-1889), sirve a Miguel Soto para reflexionar sobre la política militar de adiestramiento llevada a cabo durante la república restaurada. Considera Soto que el manual de Rocha, presentado por éste como una “Historia militar de México”, además de albergar incongruencias, contradicciones y errores históricos importantes, nació con vocación de infundir a los jóvenes Mexicano los ideales patrióticos y nacionalistas tan beneficioso para la integración nacional. El texto de Rocha no era el único de todos los que aparecieron por aquellos años con el propósito de promover una conciencia que sirviera como elemento de cohesión nacional. El efecto fue, al parecer de Soto, semejante al que se aspiraba: el de una integración de las diversas regiones en un proyecto común, el de la justicia social.

Al apartado séptimo se le ha dado el nombre de *La disciplina del derecho*. En él quedan agrupados seis trabajos relativos al estudio del derecho en las universidades hispánicas del antiguo régimen.

Aurelia Vargas Valencia hace notar la similitud de los estudios jurídicos en la universidad de México y en general en toda la América latina con los estudios europeos. Los mapas curriculares, sus procedimientos e incluso sus prácticas son una continuación de las que se daban en el antiguo continente. La enseñanza y discusión del *Corpus iuris civilis* siguió siendo la base de la enseñanza del derecho también en la Nueva España. Defiende Vargas las virtudes que el trabajo interdisciplinario tiene en el análisis

de las fuentes jurídica y, en este sentido, se lamenta la autora de la falta de estudios filológicos Mexicanos.

En el primer tercio del siglo XVII se fundaron en Alcalá de Henares dos academias de jurisprudencia: la de Santa María de Regla y la de San José. Ramón Aznar i García analiza el funcionamiento de esta última a través de las actas de la misma y aporta como apéndice sus constituciones. Dicha academia, como sus homólogas, pretendía mejorar la calidad de la enseñanza universitaria, entonces en crisis, y preparar a los estudiantes para su futura vida profesional. Por otra parte, el monopolio que los colegios mayores ejercían sobre los altos puestos de la administración dejaba a los manteístas que pretendían promocionarse sin beca colegial y sin recursos, por tanto, para competir. Mejorar el bagaje jurídico de éstos era el objetivo de dichas academias y con ello su capacidad competitiva.

El trabajo de Laura Isabel Martí Fernández nos acerca a la Academia de Legislación y Jurisprudencia de Valencia en el siglo XIX. Las academias de legislación y jurisprudencia nacieron para llenar un hueco que la universidad no cubría, enfocada para cubrir los puestos de la administración con una enseñanza teórica, enseñar a los jóvenes abogados a actuar en estrados y aprender derecho enfocado a la práctica. Consecuentemente pertenecer a la academia otorgaba a sus miembros un prestigio intelectual y social muy valioso en política, se trataba de un círculo vicioso que se alimentaba a sí mismo y que tipificó de alguna forma a los políticos decimonónicos. Martí adjunta al trabajo unos cuadros que recogen la trayectoria de los cincuenta académicos más destacados de la academia valenciana.

Precisamente Carlos Tormo Camallonga centra su trabajo en la figura de uno de estos hombres del siglo XIX de los que hablábamos: Felipe Benicio Navarro, primer catedrático de economía política en la universidad de Valencia. Dicha cátedra se introdujo en la universidad a raíz del plan de estudios de 1807, aunque en periodo absolutista, su creación respondía a la influencia que las reformas universitarias francesas lograron en Europa y a los ideales liberales del momento. El trabajo de Tormo consiste en un estudio paralelo en donde nos habla de los avatares políticos y académicos de Benicio y de las vicisitudes de dicha cátedra.

De otra nueva cátedra, Historia general del derecho español, y de otros personajes decimonónicos, entre los que destaca Pérez Pujol, nos habla Yolanda Blasco en su aportación. La codificación supuso que las asignaturas jurídico-positivas tenían que limitarse a explicar el derecho vigente contenido en los códigos, excluyendo por ello esa parte histórica que solía acompañarlas. Pero también durante el XIX se produjo un resurgimiento de los estudios históricos como base de los nacionalismos. En estos dos fenómenos encuentra Blasco la razón de ser de la historia del derecho español (1883).

El trabajo de Andrés Lira sobre las diferentes visiones y trayectorias de dos ilustres juristas Mexicanos, Rodolfo y Alfonso Reyes y su relación con la escue-

la Nacional de Jurisprudencia, cierra este apartado. La posición de esta escuela, aislada en los años de formación de Rodolfo e integrada en la Universidad Nacional, en los de Alfonso, será uno de los condicionantes de las distintas posturas de los Reyes. Lira a través del análisis de sus tesis doctorales va desggranando las actitudes de cada uno frente al derecho: la política, encaminada a la práctica, de Rodolfo y la humanista, más profunda, de Alfonso.

Con el trabajo de Javier Garciadiego se inicia el octavo y último apartado sobre *Problemática y reforma universitaria en el siglo xx*. El autor nos cuenta con detalle el vaivén al que se vio sometida la Universidad Nacional de México desde sus inicios en 1910. Los cambios políticos que se dieron tras la revolución no sólo afectaron al claustro de la universidad, cuyos miembros eran dados de baja o alta según fuera el color del gobierno, sino también a los recursos económicos. Finalmente la ley de 1945 será la que devolverá a la universidad su carácter nacional al considerarla una corporación pública y un organismo descentralizado del Estado.

Sobre esta misma universidad nos habla Celia Ramírez López. La ley universitaria de 1933 ha sido para muchos la causante mayoritaria de la crisis por la que atravesó la UNAM desde el año de su promulgación hasta 1945 en que salió su sustituta. Ramírez nos cuenta los problemas a los que tuvieron que enfrentarse los diferentes rectores y hace notar que los cambios en el rectorado más que la causa de la crisis eran el efecto de la relación que la universidad mantenía con el Estado.

Con el texto de Daniel Comas volvemos a España. Conocer las inquietudes, ideales, acciones etc., del estudiantado es parte vital del conocimiento de la institución universitaria dice el autor y, en consecuencia, nos presenta un trabajo con cuadros inclusive sobre los estudiantes de las primeras décadas del siglo pasado. Si en lo tocante al asociacionismo los jóvenes de esos años no demostraron constancia al crear y disolver sus agrupaciones, en lo relativo a los conflictos fueron bastante fieles; huelga se hacia por cualquier motivo: por cuestiones pedagógicas, políticas, religiosas y incluso por adelantar vacaciones y por ello es difícil su clasificación.

Marc Baldó Lacomba nos habla de los intentos de reforma universitaria durante el ministerio de Ruiz Giménez (1951-1956). Se trata de un texto fluido y sumamente interesante sobre la política educativa que pretendió llevar a cabo este ministro de Franco. Su ideología falangista-católica se fue atemperando, aunque no disolviendo, en la segunda década del franquismo, por lo que desde su ministerio inició un aperturismo en la política universitaria, como la incorporación de catedráticos que habían sido depurados, la descentralización del doctorado, fomentar la dedicación exclusiva, etc. Pero el catolicismo más reaccionario, que controlaba la educación, no estaba dispuesto a permitir esos cambios y el ministro tuvo que dimitir y su reforma quedó aparcada.

Volviendo de nuevo a México, Rosario Vega García reflexiona sobre las causas que motivaron el fracaso de la planificación sobre la reforma de

estudios superiores durante el sexenio (1989-1994) de Carlos Salinas de Gortari. Para que una reforma política funcione deben darse tres condicionantes: ser coherente con la política en cuestión y saber bien cuál es la situación real y los objetivos que se buscan, contar con el consenso de los actores implicados y tener recursos económicos para llevarla a cabo. Factores que, según la autora, no se dieron en dicha reforma.

Aunque en otro sentido, también el siguiente texto abunda en la idea de que cualquier reforma que aspire al éxito debe hacerse atendiendo a la realidad de lo que se quiere reformar y, por ende, escuchar a los actores. Juan Manuel Piña Osorio nos habla de las diferentes visiones que pueden darse por parte de los implicados, en este caso profesores, coordinadores y estudiantes de tres licenciaturas de la UNAM, al definir la calidad de la educación. No se trata de un trabajo explicativo sino interpretativo que intenta entender la variedad de las respuestas.

Raúl Domínguez Martínez se lamenta de escaso nivel tecnológico y científico de la universidad Mexicana y de que el existente esté centralizado en la universidad nacional. Para él hay una inevitable relación entre ciencia y economía al considerar que los avances vinieron de la mano del capitalismo, de tal forma que estos quedaron supeditados al escaso número de naciones que reunían las condiciones necesarias para dar viabilidad a regímenes capitalistas, entre las que no se encontraba México. Pero esta no es la única causa del retraso científico-tecnológico Mexicano, la falta de fomento y consecuentemente de recursos por parte del Estado es otra más, según Domínguez.

Cierra este último apartado un trabajo compartido de Adela Mora Cañada y Carolina Rodríguez López sobre el nacimiento de una nueva universidad española, la Universidad Carlos III de Madrid. Las autoras conscientes de que están contando una historia reciente, retroceden y nos cuentan de la concepción política de la que surgió, utilizando como fuentes toda la documentación relativa a la composición y creación de la Comisión Gestora que funcionó hasta se regulación en los estatutos, de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria, del claustro constituyente, de las actas de las reuniones, etc. También han acudido a fuentes orales como son los testimonios de todos aquellos que tuvieron parte en su nacimiento. La calidad de la enseñanza y de la investigación y el constituirse como una universidad con señas de identidad propia y diferente estuvo en el ánimo de todos ellos.

Concluye la publicación con las conferencias de clausura a cargo de Ambrosio Velasco y de Fernando Serrano Migallón. La ponencia del primero lleva por título "Fray Alonso de la Veracruz y las humanidades en la Universidad de México". Resalta el autor la figura de Fray Alonso no sólo como humanista renacentista que comprometió su saber y su vocación misionera en la defensa de los derechos de los indios, sino también como impulsor de los estudios humanísticos en la universidad de México. En este

sentido, considera Velasco que este fraile, defensor del pluralismo, de la cultura, de la tolerancia, etc., es un claro ejemplo a seguir en nuestra época.

El trabajo de Fernando Serrano Migallón versa sobre el carácter histórico de la universidad de México. Se trata de un recorrido por la historia de la institución desde que Felipe II fundó, en 1551, la Real Universidad de México hasta hoy; de cómo a través de los siglos esa universidad colonial del principio se ha ido transformando, a pesar de la crisis que sufrió durante el XIX, y perfilando una identidad propia; de cómo la UNAM fue a la vez continuidad y renacimiento de la antigua universidad Mexicana y de cómo fue adquiriendo la autonomía de la que goza ahora. De todo ello nos habla Serrano en este último texto.

Como se ha podido comprobar el congreso fue rico y fructífero, y la publicación no es sólo valiosa por el análisis e interpretación de las fuentes y de las instituciones que comentan los autores en sus textos, sino también por la lectura de fondo que presenta. Al profundizar en la institución universitaria contemplamos las mismas constantes históricas de siempre: la tensión entre el poder real y el eclesiástico y dentro de éste último, entre el clero regular y el secular; la rivalidad, en este caso, entre la península y los territorios que no formaban parte de la metrópoli, entre los peninsulares y los criollos; la incompatibilidad de lo económico con lo deseable, de la práctica con la teoría; del conflicto entre intereses particulares y generales. En suma, que en cualquier análisis científico no sólo hay que buscar las causas aparentes y previsibles, sino también las remotas y ocultas, porque la historia es con frecuencia contradictoria y paradójica y no se puede simplificar. Con ello volvemos al inicio de esta reseña cuando se comentaba el título del congreso y de la publicación, *Permanencia y Cambio*, ambas cosas a la vez.

María José María e Izquierdo

Mariano Peset, *Las viejas facultades de leyes y cánones del Estudi general de València*, Universitat de València, Valencia, 2006, 136 pp.

El 26 de noviembre de 2004 la *facultat de dret* valenciana celebró —recuperando así una tradición— un día de fiesta y homenaje a aquellas personas que han destacado en su labor como investigadores y estudiantes. Con esa ocasión, Mariano Peset impartió una lección que ahora ve la luz en forma de libro, cuidadosamente publicado e ilustrado, precedida de una emotiva presentación del *degà* Calos L. Alfonso.

El argumento no es nuevo en la extensa producción científica del profesor Peset, más bien se trata de un tema recurrente, al que ha acudido en numerosas ocasiones, deteniéndose en cada ocasión en un aspecto de esta realidad poliédrica que constituye el objeto del libro.

La lección se dedica al tiempo histórico que reconocemos con el concepto historiográfico de antiguo régimen: parte de los orígenes de estas

facultades y concluye con los albores de las reformas liberales. En el interior de esta parábola se analizan las relaciones de poder, el patrimonio y las rentas, los contenidos de la enseñanza, los doctores y escolares... Fiel a su estilo, nos ofrece una amplia descripción de las explicaciones de clase de Mateu Rejaule, a través de los apuntes de sus lecciones impartidas a inicios del siglo XVII que se conservan en la biblioteca universitaria de Sevilla.

Las páginas que ahora podemos leer son en gran medida fruto de investigaciones personales, pero también de una atenta lectura y valoración del trabajo de otros especialistas que van apareciendo a lo largo del escrito y que pueden localizarse gracias al índice onomástico que —tras la bibliografía y unas ilustraciones— cierra el volumen.

Manuel Martínez Neira

La universidad en el cambio de siglo, cursos de verano 1999, Universidad de Valladolid, Valladolid, 2006 [archivo de ordenador]

La Universidad de Valladolid organizó en 1999 ocho cursos de verano bajo el título genérico de *la universidad en el cambio de siglo*. Mario Bedera Bravo, entonces vicerrector, fue su promotor y Manuel Saravia Madrigal, el director del Centro Buendía, sede del evento.

Gracias al cederrón reseñado podemos ahora acercarnos a los argumentos allí defendidos: financiación de la universidad pública, dirigido por Saturnino de la Plaza; la universidad como servicio público, dirigido por Félix García Lausín; universidad y medios de comunicación, dirigido por Miguel Ángel Aguilar; viejas universidades europeas en el cambio de siglo, dirigido por Adela Mora; programas europeos, dirigido por María José Sáez Brezmes; la enseñanza de las humanidades en el cambio de siglo, dirigido por Manuel Cruz; la idea de Europa y la herencia de la ilustración en la universidad, dirigido por Agustín García Simón; desarrollo profesional del profesor universitario, dirigido por Vicenç Benedito. El acto de clausura corrió a cargo de Barbara Probst Solomon.

En el número 2 de estos Cuadernos se dio cuenta del curso dirigido por Adela Mora. Se publican ahora las ponencias de Mariano Peset (Una visión histórica), Eric Esperet (La Universidad de Poitiers), José María de Luxán (Un reto: ¿cambios en la didáctica?), Jürgen Miethke (La Universidad de Heidelberg en el cambio al nuevo siglo), José Fernández Delgado (El proceso de internacionalización de las universidades históricas), Fernando Seabra Santos (La Universidad de Coimbra), Clive Griffin (La Universidad de Oxford), Julio Valdeón Baroque (La Universidad de Valladolid).

Manuel Martínez Neira

VARIA

ACTIVIDAD DEL INSTITUTO

Congresos, cursos y seminarios

Seminario Permanente

A largo de 2006 han participado los siguientes ponentes: Sebastián Martín Martín (Universidad de Huelva). *El derecho político en el exilio. El pensamiento sociológico de Francisco Ayala (1930-1948). En conmemoración de su centenario*; Aurora Miguel Alonso (Universidad Complutense de Madrid), José M.^a Puyol Montero (Universidad Complutense de Madrid) y Manuel Martínez Neira (Universidad Carlos III de Madrid) *El doctorado en derecho en los siglos XIX y XX*; César Hornero Méndez (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla), *El incidente Carande: otro suceso universitario en 1956* y Laura Beck Varela (Max Planck Institut), *Las Instituciones de Vinnius con notas de Heineccius en la Universidad española. Un estudio de literatura jurídica castigata (siglos XVIII-XIX)*.

Seminario internacional: el papel de la historia en la formación del jurista europeo

Durante los días 22 y 23 de junio tuvo lugar este Seminario Internacional, organizado conjuntamente por los Institutos Lucio Anneo Séneca de estudios Clásicos y el Instituto Antonio de Nebrija de Estudios sobre la Universidad, cuyas actas se publican en este volumen.

Becas y contratos de investigación

Durante los dos primeros meses de 2006 ha continuado la dotación de la beca de investigación postdoctoral de la ha venido disfrutando la doctora Carolina Rodríguez López. Desde marzo de 2006 y hasta diciembre del mismo año, la Dra. Rodríguez López se ha incorporado como Investigadora-Doctora contratada a cargo del proyecto de investigación del Instituto: «Proyección científica de la Universidad de Madrid, 1939-1951».

Proyectos de investigación

Proyectos nacionales

Durante este curso algunos miembros del Instituto han seguido colaborando en el proyecto de investigación *Doctrinas y ciencia en las universidades españolas en relación con América y Europa (siglos XVI a XX)*. Financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia (referencia SEJ2005-07366) bajo la dirección de Mariano Peset.

Proyectos propios del Instituto

Manuales para la enseñanza y ciencia jurídica. Duración: 2004-2006. Directora: Adela Mora. Participantes: Ramon Aznar i Garcia, Manuel Ángel Bermejo Castrillo, María José de María e Izquierdo, Manuel Martínez Neira.

El doctorado en derecho en España durante el siglo XX. Duración 2005-2006. Director: Manuel Martínez Neira. Participantes: José María Puyol Montero.

De artes a letras. Orígenes y desarrollos de la facultad de filosofía y letras en España. Siglos XVIII-XX. Duración 2005-2006. Directora: Carolina Rodríguez López. Participantes: Manuel Martínez Neira, Mirella Romero Recio.

Publicaciones

A lo largo de 2006, desde el Instituto Antonio de Nebrija hemos preparado la edición del número 9 de los *Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija*.

Asuntos varios

Durante el año 2006 han continuado los trámites para la conversión del Instituto Antonio de Nebrija en Instituto Universitario de Investigación a la luz de la Ley Orgánica de Universidades (6/2001 de 21 de diciembre).

NOTICIAS

Curso de verano: «La recuperación de la memoria histórica de la educación durante el franquismo: la depuración del profesorado».

Entre los días 3 y 7 de julio de 2006, tuvo lugar en la sede de la UNED en Ávila este curso de verano que bajo la dirección del profesor de esa Universidad Olegario Negrín Fajardo propuso un análisis de los efectos de la depuración franquista en todos los niveles de la enseñanza: la primaria, la enseñanza media, la universitaria y aquella otra impartida en las escuelas especiales. Participaron, por orden de intervención, los profesores: Francisco Morente (Universidad Autónoma de Barcelona), Ángela Cenarro (Universidad de Zaragoza), Ángel Porto (Universidad de Santiago de Compostela), Ángel Monterrubio (Universidad de Castilla la Mancha), Joaquín Díaz y Evelia Vega (del Archivo Central del Ministerio de Educación y Ciencia), María Concepción Álvarez (Universidad de Oviedo), Olegario Negrín (UNED), Jaume Claret (Universidad Pompeu Fabra), Carolina Rodríguez (Universidad Carlos III de Madrid), José Gabriel Storch (Universidad Complutense de Madrid) y Antonio Gascón.

Congreso Internacional: *Le università napoleoniche. Uno spartiacque nella storia italiana ed europea dell'istruzione superiore.*

Entre los días 13 y 15 de septiembre 2006 tuvo lugar en Padua y Bolonia este congreso internacional al que acudieron los siguientes ponentes: Carla Frova, Jacques Verger, Hilde De Ridder-Symoens, Gian Paolo Romagnani, Elena Brambilla, Mauro Moretti, Antonello Mattone, Piero del Negro, Andrea Zannini, Luigi Pepe, Andrea Romano. *La libertà d'insegnamento*, Ugo Baldini, Gigliola di Renzo Villata, Gian Paolo Brizzi, Maria Rosa Di Simona y Andrea Cammelli, Andrea Silvestre.

RESÚMENES

Estudios

C. Hornero Méndez, *El incidente Carande (los otros sucesos de 1956)*

Resumen: El autor recorre la polémica que acompañó al famoso historiador durante 1956, año en el que en Madrid se produjeron otros conocidos acontecimientos. Muestra de esta manera dos protestas universitarias distintas que aluden a maneras diferentes de relación e interpretación de la universidad durante el franquismo.

Abstract: The author goes through the controversy generated by the famous historian during the year 1956, at the time of significant events happening in Madrid. In this way, the author shows two different kinds of protests going on in universities, representing the different ways that they reacted to Franco's regime.

Palabras clave: Universidad de Sevilla, franquismo, sucesos de 1956
Key words: Seville University, Franco's Regime, Events during 1956

M. J. María e Izquierdo, *El doctorado y la génesis del derecho del trabajo en la universidad española*

Resumen: El doctorado ha sido, en ocasiones, el lugar donde han comenzado su andadura algunas disciplinas académicas. Este es el caso del derecho laboral que dio sus primeros pasos —a principios del pasado siglo— en un curso de doctorado «Política social y legislación comparada del trabajo» de la facultad de derecho de la Universidad Central. Esta cátedra surgió para dar respuesta académica a la realidad jurídico-social de la época. La cuestión social como entonces se le llamaba al problema obrero no sólo absorbía la atención de políticos, juristas, profesores, etc., sino que, además, comenzaba a producir abundante legislación. Es entonces cuando aparece la cátedra de la que hablamos. A su creación, dotación, celebración de la oposición, a sus protagonistas y al contexto doctrinal en el que se desarrolló se refiere este artículo.

Abstract: Some times the doctorate studies have been seminal to certain academic disciplines. This is the case for Labor Law, which began as the doctorate course «Social Policy and Comparative Labor Law» in the Law School of the Central University, at the beginning of the last century. This Chair spawned the academic response to the social and judicial reality of the time. The «social question», as the labor problem was then called, not only absorbed the attention of politicians, magistrates, professors, etc., but began to produce significant amounts of legislation. This article is about the creation, funding, and competition for the Chair position, as well as about its protagonists and the doctrinal context in which it was created.

Palabras clave: derecho del trabajo, Universidad de Madrid, doctorado

Key words: Labor law, Madrid University, doctorate studies

P. Mijangos y González, *«Las vías de lo legítimo»: derecho natural y estado católico en la obra de Clemente de Jesús Munguía*

Resumen: Este ensayo busca reinterpretar la respuesta eclesiástica a la reforma liberal mexicana a partir de una nueva lectura de la obra del obispo de Michoacán, Clemente de Jesús Munguía (1810-1868), quien fuera uno de los más agudos y polémicos defensores de la Iglesia mexicana en este período y a quien puede considerarse como uno de los constructores de la ilustración católica mexicana.

Abstract: This essay offers a new interpretation to the ecclesiastical response to the Mexican liberal reform, based on a new reading of Bishop, Clemente de Jesús Munguía's works. A fine exponent of the Mexican Catholic Enlightenment, Munguía (1810-1868) was one of the most insightful and controversial defenders of the Church during that troubled period.

Palabras clave: Clemente de Jesús Munguía (1810-1868), derecho natural, enseñanza del derecho, México

Key words: Clemente de Jesús Munguía (1810-1868), natural law, the teaching of law, Mexico

Dossier:

M. Abellán Velasco, *Presentación*

Resumen: En estas páginas el decano de la facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas ofrece, además de la presentación del contenido del seminario, una serie de consideraciones sobre los esfuerzos que los cultivadores del derecho romano están haciendo para incorporarse al Espacio Europeo de Educación Superior.

Abstract: The Dean of the Social and Legal Sciences Faculty presents the Seminar and a number of considerations on the efforts that the scholars of Roman Law are undertaking to achieve incorporation into the European Space for Higher Education.

Palabras clave: Derecho Romano, Espacio Europeo de Educación Superior

Key words: Roman law, European Space for Higher Education

M. Á. Bermejo Castrillo, *¿Realidad o ficción? El proceso de convergencia de las enseñanzas jurídicas dentro del marco del proyecto de creación de un espacio europeo de educación superior*

Resumen: Conocedor de primera mano de los trabajos que se están realizando para la formulación de los contenidos de las enseñanzas jurídicas en los nuevos títulos resultantes de la incorporación del sistema universitario español en el Espacio Europeo de Educación Superior, el autor aporta sus propias consideraciones al respecto, su valoración sobre la marcha del proceso y un marco comparativo sobre la situación en el resto de países europeos incorporados en el mismo.

Abstract: The author knows first hand the efforts being made to formulate the teaching of Law within new degrees resulting from Spanish universities joining the European Space for Higher Education. He brings in his own opinions, his assessment of how the process is advancing and a framework to compare the situation in other European countries within the Space.

Palabras clave: Espacio Europeo de Educación Superior, Derecho, Jurista.

Key words: European Space for Higher Education, Law, Jurist

P. Caroni, *Una «historia» para después del código*

Resumen: El autor analiza la ruptura que supuso la codificación en el desarrollo de la historia jurídica europea y sintetiza las tres opciones metodológicas que los historiadores pueden asumir en este nuevo contexto.

Abstract: The author analyzes the rupture that the Code introduced to the development of the European juridical history and synthesizes the three methods that historians may use to develop it.

Palabras clave: Historia del derecho, codificación.

Key words: Law History, codification

F. Cuenca Boy, *Derecho romano y dogmática*

Resumen: El autor indaga sobre el valor formativo del derecho romano y la dogmática en el Espacio Europeo de Educación Superior y considera que la historia es el depósito de la experiencia donde se custodian las raíces de los estudios jurídicos comunes. Propone así cómo articular esta enseñanza.

Abstract: The author inquires into the educational value of Roman Law and «Dogmatica» within the European Space for Higher Education, and he is of the opinion that history is the repository of experience where the roots of the common legal studies are kept. He proposes ways on how to develop this teaching.

Palabras clave: Espacio Europeo de Educación Superior, derecho romano.

Key words: European Space for Higher Education, Roman law

M. Fioravanti, *El papel de las disciplinas histórico jurídicas en la formación del jurista europeo.*

Resumen: El autor reflexiona sobre el nuevo contexto del dominio cultural del saber técnico y económico, se produce así una ruptura entre «saber» y «saber hacer» que condiciona la idea misma de juris-

ta y, en definitiva, el método jurídico. Ante esta situación no sólo se enumera los riesgos sino que se presentan también las oportunidades.

Abstract: The author reflects upon the new context of the cultural domain of technical and economic knowledge. The rupture between the «knowing» and the «knowing how» conditions the fundamental concept of jurist and, at the end, of the juridical method. The author enumerates the risks and opportunities that this situation brings.

Palabras clave: Espacio Europeo de Educación Superior, método jurídico.

Key words: European Space for Higher Education, juridical method

D. Mantovani, *El derecho romano después de Europa. La historia jurídica para la formación del jurista y ciudadano europeo*

Resumen: Partiendo de la consideración de qué es el jurista europeo, el autor cuestiona la formación que éste debe recibir en el nuevo contexto de la Europa unida y cuál es el significado que el derecho romano (¿qué derecho romano?) puede añadir en esta nueva fase, dentro de las facultades de derecho y en sus distintos momentos formativos.

Abstract: Based on the concept of what an European jurist is, the author debates on the training that that jurist should receive in the context of a united Europe, and what is the meaning that the Roman law (which Roman law?) may add to this phase within the law schools and in their different educational phases.

Palabras clave: Espacio Europeo de Educación Superior, derecho romano.

Key words: European Space for Higher Education, Roman law

J. Paricio, *Presente y futuro del derecho romano*

Resumen: Un ensayo sobre la situación actual y de futuro del derecho romano en el ámbito de la investigación y la enseñanza, y su papel en la formación de los futuros juristas.

Abstract: An essay on the present situation and the future of Roman law in the area of research and education, and its role in the training of future jurists.

Palabras clave: Derecho romano. Tradición jurídica occidental. Crisis actual del derecho romano. El derecho romano en la investigación y la docencia.

Key words: Roman law. Occidental legal tradition. Current crisis of the Roman law. Roman law within the research and educational fields.

C. Velasco, *Diario de una redactora del libro blanco de derecho (una aproximación a la historia reciente de los estudios jurídicos en España)*

Resumen: La autora reproduce cronológicamente sus experiencias como miembro de la comisión de redacción del libro blanco de derecho en España. De manera que su escrito contribuye a esclarecer esta etapa reciente de la historia de los estudios jurídicos en España.

Abstract: The author reproduces chronologically her experiences as a member of the commission in charge of drawing up the Spanish White Book on Law. Her essay helps illustrate this recent period of the history of legal studies in Spain.

Palabras clave: Libro blanco, estudios jurídicos, derecho.

Key words: White book, legal studies, law.

PUBLICACIONES RECIBIDAS

- P. Ballesteros Torres, «Esbozo bibliográfico sobre historia de la Universidad de Alcalá de Henares: 1993-2004», *Anales complutenses*, vol. XVII (2005) pp. 227-278.
- L. Giacardi (ed.), *Francesco Faà di Bruno. Ricerca scientifica. Insegnamento e divulgazione*, Turín, Universidad de Turín, 2004, 671 pp
- L. Giacardi (ed.). *L'opera matematica di Francesco Faà di Bruno*, Turín, Dipartimento di Matematica, Università degli Studi di Torino, 2005, CD-Rom.
- Historia y sociedad*, 11 (septiembre 2005) 230 pp.
- G. Terenna y F Vannozzi (eds.), *La collezione degli strumenti di fisiologia*, Siena, Centro servizi di Ateneo tutela e valorizzazione antico patrimonio scientifico senese, 2006, 126 pp.
- B. Zanobio, *Carte del Medicinska Nobelkomitén concernenti il conferimento del premio a Camillo Golgi e Santiago Ramón y Cajal (1901-1906)*, Milán, Università degli studi di Milano, 2001, 329 pp.

Los *Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija* tienen por objeto los estudios sobre la historia de la universidad y de la ciencia, sobre todo en el contexto de la civilización occidental.

Quieren ser un vehículo que facilite el conocimiento de investigaciones en marcha, bibliografía, reuniones científicas y otras noticias.

PRESENTACIÓN DE ORIGINALES

Los trabajos presentados deberán ser inéditos. Los autores enviarán su colaboración por correo electrónico a la redacción. Cada número se cierra en la primera semana completa de septiembre. Junto al trabajo debe aparecer un resumen en castellano e inglés de una extensión máxima de cien palabras así como las palabras clave que estime oportunas el autor o la autora.

En la redacción no se usará negrita ni subrayado. Tampoco se utilizarán textos en mayúsculas para títulos o epígrafes.

Las citas deberán ir a pie de página. La bibliografía se citará con el siguiente orden: autor (nombre de pila y apellidos), título de la obra en cursivas, ciudad y año. Para separar estos datos se utilizará la coma. En el caso de artículos, éstos irán entre comillas. Los títulos de revistas no irán abreviados y se pondrán en cursiva, el número de la revista en arábigos y el año entre paréntesis. Cuando se cite la misma referencia varias veces, se hará completa la primera vez y abreviada en las restantes, sin utilizar locuciones latinas.

El nombre del autor y la institución a la que pertenece aparecerá al final de la colaboración.

La redacción acusará recibo de los originales, que serán sometidos a la valoración de dos lectores anónimos miembros del consejo asesor. Su publicación podrá ir condicionada a la introducción de modificaciones de acuerdo con los criterios de los evaluadores y la redacción.

Asimismo se informará de las publicaciones recibidas que podrán ser recensionadas.

INSTITUTO ANTONIO DE NEBRIJA

PUBLICACIONES

CUADERNOS

1 (1998) – 2 (1999) – 3 (2000) – 4 (2001) – 5 (2002) – 6 (2003)
– 7 (2004) – 8 (2005) – 9 (2006)

BIBLIOTECA

1. *Estado de la Universidad de Alcalá (1805)*
Estudio preliminar de José Luis Peset
Edición de Diego Navarro
2. *La investigación en la universidad*
Edición de Carmen Merino
3. *Orientalismo y nacionalismo español*
Aurora Rivièrè
4. *El estudio del derecho. Libros de texto y planes de estudio en la universidad contemporánea*
Manuel Martínez Neira
5. *Autonomía y reformas en la Universidad de Valencia*
Daniel Comas Caraballo
6. *La Universidad de Madrid en el primer franquismo: ruptura y continuidad*
Carolina Rodríguez López
7. *Cánones y Leyes en la universidad de Alcalá durante el reinado de Carlos III*
Ramon Aznar i Garcia

8. *Consecuencias educativas de la expulsión de los jesuitas de América*
Enrique Villalba Pérez
 9. *Archivos universitarios e historia de las universidades*
Edición de José Ramón Cruz Mundet
 10. *La enseñanza del derecho en el siglo XX. Homenaje a Mariano Peset*
Edición de Adela Mora Cañada
 11. *La Universidad española 1889-1939. Repertorio de legislación*
Manuel Martínez Neira, José M.^a Puyol Montero y Carolina Rodríguez López
 12. *Hacia un modelo universitario: la Universidad Carlos III de Madrid*
Edición de Adela Mora Cañada y Carolina Rodríguez López
 13. *Manuales y textos de enseñanza en la universidad liberal*
Edición de Manuel Ángel Bermejo Castrillo
 14. *Maestros, escuelas y libros. El universo cultural de las catedrales en la Castilla medieval*
Susana Guijarro González
- Filosofía para la Universidad, Filosofía contra la Universidad
(de Kant a Nietzsche)
Edición de Faustino Oncina Coves
En preparación